GACETA DE LOS TRIBUNALES

— FUNDADA EN 1881 —

20. 1955

PUBLICACION DEL ORGANISMO JUDICIAL

— DE LA —

REPUBLICA DE GUATEMALA

GACETA DE LOS TRIBUNALES

Publicación del Organismo Judicial de la República de Guatemala

FUNDADA EN 1881

DIRECTOR: Br. FRANCISCO ECHEVERRIA ARDON

AÑO LXXVI	Guatemala, Julio a Diciembre de 1955	NUMEROS DEL 7 AL 12
--------------	--------------------------------------	------------------------

SUMARIO

SECCION JUDICIAL

RESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

	Pág.
CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por Victor Lainfiesta Dorión contra Lorenzo de la Parra Batres. DOCTRINA: Si el recurso de casación se funda en error de hecho y en error de derecho en la apreciación de las pruebas, debe individualizarse cada uno de estos errores y señalarse además el documento o acto auténtico que demuestre de modo evidente la equivocación del juzgador en el error de hecho, pues sin aquellos necesarios presupuestos, un estudio generalizado de la prueba convertiría el recurso de casación en una tercera instancia	9
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Recurso interpuesto por el Gerente de "Tabacalera Nacional, S. A.", contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DOCTRINA: No es impuesto personal la contribución portuaria establecida para importadores y exportadores, en el Decreto 931 del Congreso, porque se liquida sobre el monto de la importación o exportación; en consecuencia, no puede afectar a mercaderías que en virtud de un Tratado Comercial, se les eximió de todo impuesto o contribución no vigentes el día en que se firmó.....	12
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Recurso interpuesto por Erica y Matilde Fickert Forst, contra dos resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Expropiación de bienes. DOCTRINA: Para obtener resolución favorable, en expediente de exclusión expropiatoria, seguido conforme lo preceptuado por el Decreto 630 del Congreso, no basta acreditar haber nacido en Guatemala, sino también es necesario probar plenamente que no le son aplicables al interesado ninguna de las otras causas que para ese efecto establece el Capítulo II, Título I, de la Ley de Liquidación de Asuntos de Guerra y que se encuentre dentro de las circunstancias contenidas en el artículo 17 de dicha ley.....	16

- CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por José Chay Chay contra Diego Itzep López. DOCTRINA: No procede el examen de fondo del recurso de casación, cuando invocado como caso de procedencia el error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, se omite identificar apropiadamente la naturaleza de los errores acusados..... 22
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Recurso interpuesto por Franz Meindl Schimpff, como representante de la “Curacao Trading Company, S. A.”, contra resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DOCTRINA: Los requisitos establecidos por la ley de lo Contencioso-Administrativo de que para que proceda este recurso es indispensable agotar la vía Administrativa, son de orden procesivo que no afectan el fondo de la resolución Administrativa impugnada, por lo que, la violación de los Artículos que los relacionan, no puede considerarse comprendida en el caso de procedencia para el recurso de casación a que se refiere el inciso 1o. del Artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que trata exclusivamente de la violación de leyes decisorias o de fondo..... 24
- CIVIL.—Juicios Ordinarios acumulados, sostenidos entre Arturo Samayoa Roldán y Mauricio Figueroa García. DOCTRINA: Cuando se atribuye error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, doctrinariamente es necesario indicar con precisión en qué consisten aquellos errores, a juicio del recurrente, para colocar al Tribunal en la posibilidad de hacer el estudio comparativo entre fallo impugnado y leyes citadas como violadas, porque la naturaleza del recurso de casación, no permite interpretar la intención del interesado..... 29
- CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por Ernesto Girón y Girón contra Arcadio Girón y Girón. (Propiedad y posesión). DOCTRINA: para que el Tribunal de Casación pueda hacer el análisis que la naturaleza de este recurso impone, es necesario que, además de identificar sin lugar a dudas, la resolución impugnada y citar las leyes que estima infringidas, el recurrente diga concretamente en qué inciso o incisos del artículo respectivo está el caso de procedencia que le sirve de apoyo, especificando si las disposiciones citadas son Gubernativas o Legislativas, pues no puede suplirse lo que las partes omiten..... 37
- CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por Domingo Estrada contra la mortual de Antonino Estrada. DOCTRINA: Para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento substancial del procedimiento, es preciso haber medido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió, no siendo valedera la excusa de que se tuvo imposibilidad de hacerlo para el representante de una mortual que ha intervenido hasta en segunda instancia, si tal intervención se efectuó antes de señalarse día para la vista y aquél promovió otras gestiones relativas al juicio..... 39
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Lic. Edmundo Quiñónez Solórzano como apoderado de “Amado, Recinos y Cia. S.C.P.I. Central Añejadora Guatemalteca”, contra resoluciones del Ministerio de Economía y Trabajo. DOCTRINA: No puede prosperar el recurso de casación cuando se cita erróneamente el caso de procedencia, pues tal defecto impide efectuar el estudio comparativo que dicho recurso implica..... 43
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Enrique Krische Schwalbe, solicita la ciudadanía guatemalteca. DOCTRINA: Haberse resuelto sin lugar el recurso de reposición, interpuesto contra providencias de lo Contencioso Administrativo, no es negarse a conocer de la cuestión propuesta y, en consecuencia, no puede prosperar el recurso de casación que en este caso se introduzca apoyándolo en los incisos 2o. del artículo 506 y 1o. del 507, ambos del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo número 2009..... 45
- CIVIL.—Juicio Ordinario doble, seguido por Juana Pérez Hernández Mayor y Juana Pérez Hernández Segunda, contra Juan Hernández Ajualip, Pablo y Santos Sandoval y Tranquillino Calo Cay. DOCTRINA: Siendo la donación un contrato traslativo de dominio, comprobado éste sin que se objete su validez, los donatarios tienen derecho de reivindicar de tercera persona la cosa donada..... 49
- CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por Juan Rojas Chávez contra el Ingeniero Antonio F. Meneses. DOCTRINA: Cuando se denuncia error de derecho en la apreciación de la prueba, debe indicarse en qué consiste ese error, así como identificarse las pruebas que lo contienen, porque la naturaleza restringida del recurso de casación, no permite hacer un análisis generalizado de las pruebas aportadas al juicio..... 55

- CIVIL.—Juicio seguido por Elena Valladares viuda de Cofiño contra Jorge Benjamin Soto y Herculilla de Leon Cofino de Soto. DOCTRINA: Toda vez que la ley determina que la primera instancia comienza desde que se presenta la demanda y termina con la resolución del Juez que conozca del asunto, es correcta la declaración de abandono de la primera instancia aunque no se haya contestado la demanda, siempre que estén cumplidos los otros extremos necesarios para estimarlo consumado, ya que el sentido claro, natural y obvio de los términos empleados por la ley en este caso, excluye cualquier otro sentido o extensión que quisiera otorgársele a tal principio.... 51
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Recurso interpuesto por Rafael Rodríguez Cerna, como apoderado de Humberto Casado Siguí, contra resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DOCTRINA: La facultad concedida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para revocar una resolución administrativa, implica no solamente el hecho de dejar sin efecto la resolución recurrida, sino el de dictar lo que considera ajustada a derecho..... 61
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Jorge Lamport Rodil, en representación de "Maple Leaf Milling Co. Ltd.", contra el registro de la marca "Reina del Oeste". DOCTRINA: Los signos o denominaciones que se confundan o den lugar a confusión con marcas debidamente inscritas o por inscribirse en el Registro respectivo, no podrán registrarse como nuevas marcas, de conformidad con lo establecido por el artículo 7o., inciso 7o. del Decreto Gubernativo número 882..... 65
- CIVIL.—Licenciado Eugenio Valentín López González apoderado de Francisca Enriquez Rizo viuda de Leal, contra María Celia Ramírez Rodríguez de Parrilla y mortual de Julián Ramírez. DOCTRINA: Se quebranta substancialmente el procedimiento cuando se ha seguido el juicio en que figura como parte una sucesión, notificándose al representante de la misma sin que llene los requisitos legales para reconocerle tal carácter..... 68
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Relativo a la ampliación de la línea de Transporte "Tiquisate-Semillero", pedida por "TRANSPORTES SIGUACAN". DOCTRINA: Cuando los opositores a la concesión de una licencia de transportes no prueben la inconveniencia de tal otorgamiento y el solicitante, después de establecer los extremos legales necesarios, obtiene dictamen favorable de la sección respectiva, la licencia debe serle extendida..... 73
- CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por Antonio Paredes Mendoza como interventor de la mortual de Francisco Arrué, contra el Estado de Guatemala. DOCTRINA: Únicamente a las empresas destinadas a prestar servicios públicos de transporte, es aplicable la doctrina del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva civil, proveniente de caso fortuito, contenida en la Ley de Accidentes..... 78
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Gerente de Empresa Fosforera, Sociedad Anónima, contra dos resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre exoneración acordada por el Ministerio de Economía y Trabajo. DOCTRINA: No existe violación de ley cuando el Tribunal sentenciador declara indebida la franquicia de impuestos que se ha obtenido con posterioridad a la liquidación y pago de las pólizas respectivas, basado en que una circular ministerial no puede contrariar el sentido claro de preceptos legales, pues las excepciones a que se refiere el artículo 295 del Código de Aduanas al autorizar un procedimiento distinto, deben entenderse con carácter específico para cada caso y no en concepto de regla general, ya que de aceptarse así, cualquier circular vendría a constituir una modificación permanente al contenido legal..... 81
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Ministerio de Hacienda contra resolución del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en juicio de la "Empresa Fosforera, Sociedad Anónima". DOCTRINA: Las cantidades percibidas por los Gerentes, Administradores, Apoderados o Empleados de las Empresas obligadas al pago del impuesto sobre utilidades, en la parte que excedan a las determinadas por el artículo 72 del Decreto Gubernativo número 2191, no son gastos deducibles y por consiguiente, deben pagarse sobre ellas los impuestos respectivos, aunque se les dé un nombre distinto al de sueldos, salarios o emolumentos..... 85
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Procurador General de la Nación, sobre expropiación de bienes alemanes de Claudio y Juan Bornholt. DOCTRINA: Cuando el Tribunal sentenciador da por probados los extremos señalados por el artículo 17 del Decreto 630 del Congreso y con esa base declara que no son expropiables los bienes de aquél a quien se trataba de aplicarse dicha expropiación, no viola las disposiciones relativas a ella, contenidas en el Decreto citado..... 88

- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Ministerio de Hacienda y Crédito Público y “Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima”. DOCTRINA: Formando las personas jurídicas una entidad distinta de sus componentes, individualmente considerados, las concesiones otorgadas a aquéllos no pueden ser aplicadas a éstas..... 91
- CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por el Interventor de la mortual de don Marino Humberto Ventura Prera, contra el Estado de Guatemala. DOCTRINA: La doctrina del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva civil, proveniente de caso fortuito, contenido en la Ley de Accidentes, solamente es aplicable a las empresas individuales o colectivas destinadas a prestar servicios públicos de transporte..... 98
- CIVIL.—Juicio Ordinario de divorcio seguido por Patrocinia Desideria Cáceres Hernández de Monzón contra German Monzón Juárez. DOCTRINA: Para que prospere el recurso de casación, es indispensable citar con la debida propiedad el caso o los casos de procedencia en que se funde, a fin de que el Tribunal pueda efectuar el análisis comparativo entre dichos casos y las leyes que se estimen violadas..... 101
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra una resolución de ese Tribunal en juicio de “Castillo Hermanos”. DOCTRINA: Instituyendo la Ley el recurso de casación para dos situaciones medularmente distintas e inconfundibles, traducidas en error de juicio en la resolución de los aspectos controvertidos, o sea de fondo, y error en las reglas del procedimiento o sea por quebrantamiento de forma, al hacerse el plantamiento respectivo es imprescindible, en cualquiera de las dos situaciones, colocarse dentro de los casos de procedencia, específicamente determinados por la ley, pues de lo contrario no es posible efectuar el examen comparativo que el recurso implica..... 103
- CIVIL.—Alejandro Popol Méndez como apoderado de Berta Ascención Milián Salvatierra de Popol, contra Matilde Escobar Lémus de Iriarte. DOCTRINA: Cuando en una sentencia congruente con la demanda, se declara que el hecho motivo de la litis no está dentro del estado que el actor invoca y por eso se absuelve al demandado, no se violan los preceptos de dicho estatuto si efectivamente el caso en cuestión es diferente del que se sometió a juicio..... 111
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Recurso interpuesto por José Rodrigo Hernández Guzmán contra resolución proferida por el Ministerio de Gobernación. DOCTRINA: Cuando existe incongruencia manifiesta entre el contenido de la sentencia impugnada y las leyes citadas como violadas, no puede prosperar el recurso de casación, fundado en violación e interpretación errónea de la ley..... 117
- CIVIL.—Juicio Ordinario seguido por Delfina Castillo López contra Adilia Aguirre Catalán de Salazar. DOCTRINA: El término para el abandono de una instancia tiene que ser continuo; por consiguiente, no procede la declaración que lo da por consumado, cuando al mismo tiempo se reconoce que la parte obligada a gestionar no estuvo en la posibilidad de hacerlo, durante todo el período señalado en la ley..... 123
- CIVIL.—Victoria Echeverría González apoderada de Abraham García Echeverría, contra Rafael Aguirre García. DOCTRINA: Existe imposibilidad de orden técnico para conocer del fondo del recurso de casación, cuando acusándose errores en la apreciación de las pruebas, se omite identificar la naturaleza propia del error cometido..... 125
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra resolución del Tribunal de lo Contencioso en recurso de “Industria Licorera Guatemalteca, Sociedad Anónima”. DOCTRINA: La calidad de técnico en cualquier ciencia o arte, no excluye que a quien tenga tal condición se le estime como empleado de una empresa si sus conocimientos se han puesto al servicio de la misma mediante contrato para tiempo determinado. De consiguiente le son aplicables las limitaciones establecidas en el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2341, en cuanto a los sueldos deducibles para el pago del impuesto sobre utilidades..... 128
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra una resolución del Tribunal de lo Contencioso en juicio de “Industria Licorera Guatemalteca, Sociedad Anónima”. DOCTRINA: Es aplicable a los técnicos que prestan servicios de su especialización en una empresa, el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, en cuanto se refiere a no estimar como deducibles para el pago del impuesto sobre utilidades, las cantidades que excedan del límite fijado en tal precepto como sueldo para los empleados..... 133

- CIVIL.—Juicio Ordinario doble seguido por Josefina Burgos Buezo contra Vitalina Francisco y Lisandra Pazos, José Rubén Pazos Cueva y Francisca Duarte viuda de Pazos. DOCTRINA: Los autos firmes en que se ha declarado el abandono de la primera instancia, como ponen fin al juicio y extinguen la acción deducida, producen el efecto de la cosa juzgada, cuando concurren los otros requisitos requeridos por la ley..... 137
- CIVIL.—Juicio Ordinario doble de divorcio, seguido entre Julián Salvador Argueta Ordóñez y Mélida Lima Lorenzana de Argueta. DOCTRINA: Si el Tribunal de Apelación no funda su fallo en la confesión de la parte demandada, no puede prosperar el recurso de casación que se interpone invocando como motivo de él, error de derecho en la apreciación de aquella prueba..... 145
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—“Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, Sociedad Anónima”, contra una resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DOCTRINA: Sólo es deducible la amortización por depreciaciones desde el día en que se inicien las actividades de la empresa..... 151
- CIVIL.—Esclarisa Valdés Leal viuda de Rosito contra Elvira Escamilla Grimaldi de de León. DOCTRINA: Dada la naturaleza particular y limitada del recurso de casación, al acusarse error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, es preciso, además de señalar apropiadamente el error o errores cometidos a juicio del recurrente, individualizar en forma inequívoca las pruebas que los contengan..... 154
- CRIMINAL.—Contra Alcira Bolaños Avila de Avila por el delito de lesiones. DOCTRINA: Es ineficaz el recurso de casación que se interpone por error de derecho en la apreciación de la prueba cuando en la sentencia impugnada, se omite el análisis de una o varias de las pruebas aportadas al juicio, porque éste constituye error de hecho..... 156
- CRIMINAL.—Contra Ernesto Rodas Santa Cruz, por el delito de Hurto. DOCTRINA: Los informes del Oficial Archivero de la Penitenciaría Central, referentes a entradas y salidas de los reos de ese centro penal, son insuficientes para demostrar que las personas a que se refieren han cometido uno o más delitos. En consecuencia, comete error de derecho en la apreciación de la prueba el Tribunal que, basándose en uno de esos informes, da por establecida la comisión de varios delitos por parte del procesado para calificarlo de multireincidente..... 160
- CRIMINAL.—Contra Fausto Marín y Elías Morales Pinzón, por el delito de hurto de semovientes. DOCTRINA: No procede el recurso de casación, que atribuye al Tribunal sentenciador, error de derecho en la apreciación de la prueba de presunciones humanas, cuando del fallo recurrido aparece que dicha prueba fué estimada con el valor jurídico que le reconoce la ley..... 163
- CRIMINAL.—Contra Leticia Franco de Martínez, por el delito de injurias. DOCTRINA Constituyen injurias graves, las expresiones que a más de afrentarse atribuyen a la persona agraviada un vacío o falta de moralidad, cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente su fama y crédito..... 168
- CRIMINAL.—Contra Abilio Fernández Quiroa y Carlos Quiroa Diesseldorff, por el delito de falsificación de billetes de banco. DOCTRINA: Si la confesión del reo no es la que sirve de base para su condena, el Tribunal sentenciador no comete error de derecho al no considerarla como atenuante..... 170
- CRIMINAL.—Contra Porfirio Cruz Dionisio y compañeros, por hurto de semovientes. DOCTRINA: Es ineficaz el recurso que se interpone sin señalar el artículo e inciso del Código de Procedimientos Penales, que contenga el caso de procedencia respectiva..... 174
- CRIMINAL.—Proceso seguido a Rodolfo García Palacios, por el delito contra la seguridad de la familia. DOCTRINA: No puede prosperar el recurso de casación por error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, si el recurrente no identifica cada uno de estos errores, no señala en el caso del error de hecho, el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador..... 176

RAMO PENAL.—Resoluciones dictadas por los Tribunales de Justicia de la República, durante el semestre de Julio a Diciembre de 1955.....	240
Nómina de los Funcionarios del Organismo Judicial.....	241
Tribunales de Trabajo y Previsión Social.....	243
Servicio Médico Forense.....	244
Jurisdicción de los Tribunales.....	245
Directorio Judicial.....	247
Abogados y Notarios inscritos durante el semestre.....	248

Sección Judicial

RESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIVIL

ORDINARIO seguido por Victor Lainfiesta Dori6n contra Lorenzo de la Parra Batres.

DOCTRINA: Si el recurso de casaci6n se funda en error de hecho y en error de derecho en la apreciaci6n de las pruebas, debe individualizarse cada uno de estos errores y sealarse adem6s el documento o acto aut6ntico que demuestre de modo evidente la equivocaci6n del juzgador en el error de hecho, pues sin aquellos necesarios presupuestos, un estudio generalizado de la prueba convertiria el recurso de casaci6n en una tercera instancia.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, seis de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casaci6n y con sus antecedentes, se examina la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en el juicio ordinario seguido en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Departamental por Victor Lainfiesta Dori6n contra Lorenzo de la Parra Batres.

RESULTA:

El veinte de junio de mil novecientos cincuenta y uno se present6 al Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Departamento, el Abogado Alfonso Ord6ñez Fetzer, en su car6cter de apoderado de Victor Lainfiesta Dori6n, manifestando: haberse enterado que Lorenzo de la Parra inici6 el quince de julio de mil novecientos cincuenta unas diligencias de titulaci6n supletoria en el mencionado Despacho, de un sitio ubicado en esta ciudad, en el Cant6n La Paz, cuyas colindancias son: al Noreste, la cuarenta y nueve Calle; al Sures- te, la primera Avenida; al Noreste, Segunda Avenida, y al Sureste, Cincuenta Calle, todas

del referido Cant6n, teniendo una 6rea de dos mil novecientos ocho metros cuadrados; que la 6ltima diligencia practicada en el expediente mencionado consiste en la ratificaci6n del plano por el experto valuador, Francisco Ard6n Ram6rez; que, como el referido terreno, que no tiene t6tulo inscrito, es de la propiedad del presentado y tiene la posesi6n jur6dica del mismo, viene a iniciar juicio ordinario de propiedad y posesi6n; que Lorenzo de la Parra no ha estado en posesi6n del inmueble, siendo el propio presentado quien se lo di6 para que lo cuidara y viviera en 6l, existiendo simple acto de tolerancia de su parte, pero que nunca ha renunciado a su posesi6n, que ha sido continua, leg6tima, pac6fica y p6blica a trav6s del demandado. No individualiz6 las pruebas, refiriendo simplemente que probaria su acci6n con documentos p6blicos, privados, debidamente autenticados, testigos, confesi6n judicial, inspecci6n ocular, expertos, presunciones, las diligencias de titulaci6n y todas las que la ley le permita. Pidi6 que se pusiese raz6n en el expediente de titulaci6n supletoria de la existencia del juicio ordinario, para que se suspendiera y cancelara dicho expediente, y que en sentencia se declarase que a su poderdante le corresponde la posesi6n y propiedad del inmueble, condenando al demandado en las costas, por los daos y perjuicios ocasionados.

RESULTA:

Que corrida la audiencia de ley al demandado, 6ste interpuso la excepci6n de la falta de personalidad en el opositor, exponiendo que tiene m6s de treinta aros de residir en el inmueble, que fu6 antes de su seor padre, y no siendo Lainfiesta Dori6n su pariente, "no ve la raz6n que tenga para tal oposici6n". La excepci6n fu6 tramitada, habi6ndose declarado sin lugar. En rebeldia del demandado se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo el veintidos de mayo de mil novecientos cincuenta y tres; de manera que

el escrito de éste contestando la demanda y presentado el veintitrés, se tuvo por extemporáneo. En dicho escrito interponía además las excepciones de "capacidad legal", falta de derecho, dolo, falta de acción y prescripción positiva y ofrecía como documentos: certificación de la Matrícula Fiscal a su nombre, certificación del catastro municipal; certificación de las diligencias de titulación supletoria; certificación de la Oficina de Bienes Nacionales, y certificación de la Empresa Eléctrica de Guatemala. Acompañó la certificación de la Dirección General de Rentas de que la Matrícula número mil doscientos sesenta y siete "D" de este Municipio, aparece a su nombre, figurando en ella como único inmueble el sitio y casa en la Segunda Avenida del Cantón La Paz, de tres mil ciento sesenta y cuatro punto cuarenta y ocho metros (3164.48). Posteriormente insistió en interponer las excepciones perentorias de prescripción positiva y negativa, falta de personería en el actor y falta de acción y de derecho, admitiéndose las de falta de personería y prescripción positiva y negativa.

RESULTA:

Que abierto el juicio a prueba, se rindieron las siguientes por parte del actor: a) declaraciones testimoniales de José Ignacio Ramírez, Porfirio Ramírez García e Isaac Zavala, quienes manifiestan que les consta que el demandante es propietario del inmueble objeto de la litis; que dicho señor siempre ha ejercitado su derecho real de propiedad y posesión; que esta persona siempre ha pagado con regularidad el impuesto municipal por el referido inmueble; que de la Parra nunca ha tenido la posesión jurídica del terreno; que Lainfiesta Dorión le dió el sitio a de la Parra para que lo cuidara y viviera en él; que de parte de Lainfiesta Dorión ha habido tolerancia para que de la Parra habite el sitio, pero que nunca ha efectuado acto alguno que implicara renuncia de sus derechos. Esto, contestando afirmativamente las preguntas formuladas por el actor. Al ser repreguntados, dijeron: José Ignacio Ramírez, que Lainfiesta Dorión tiene escritura del terreno, pero que ignora qué Notario la autorizó; que le consta todo lo dicho porque vivió en "la Aurora" durante los años mil novecientos veinticuatro a cuarenta y uno; que Lainfiesta Dorión no le enseñó los documentos; que no entiende qué es derecho real o dominio de un inmueble; que Lainfiesta no ha vivido en el terreno; que la entrega del terreno a de la Parra fué en mil novecientos treinta y cuatro; que

no sabe quién le vendió el terreno a Lainfiesta. Porfirio Ramírez García, que no sabe si Lainfiesta tiene escritura del terreno y que le consta que es propietario porque de él recibía órdenes para laborar en dicho inmueble; que fué empleado de dicho señor de mil novecientos veintisiete a veintinueve; que no ha visto viviendo a Lainfiesta en el terreno; que sí sabe que en el mismo vive de la Parra, pero no como propietario y que no recuerda cuándo se lo dió Lainfiesta. Isaac Zavala: que no sabe si Lainfiesta tiene escritura del inmueble y que le consta que es propietario porque del mismo recibía órdenes para trabajar en dicho inmueble; que no es empleado de Lainfiesta; que no lo ha visto viviendo en el terreno; que sí ha visto viviendo a de la Parra, "pero que ignora lo de propietario"; que no recuerda la fecha en que Lainfiesta le dió el sitio; que ignora quién le vendió el inmueble a Lainfiesta; b) Varios recibos que acreditan el pago de impuestos municipales sobre el inmueble registrado en el Catastro con el número o catorce mil setecientos nueve, y c) certificación de la Municipalidad de esta Capital, en donde aparece que el inmueble registrado con el número anterior está inscrito a nombre de Víctor Lainfiesta Dorión y se encuentra entre Primera y Segunda Avenidas y Cincuenta y Una Calles del Cantón La Paz. Presentó otros documentos que por extemporáneos no fueron tenidos como prueba. Por parte del demandado se rindieron las siguientes: a) Certificación de la Dirección General de Rentas, de la Matrícula mil doscientos sesenta y siete "D" a que ya se hizo referencia; b) recibo de pago de canon de agua a nombre del demandado; c) ratificación del escrito de demanda por parte del actor, haciendo constar dicha persona en el acto de la ratificación que cuando su apoderado habla en primera persona se refiere el actor o poderdante; d) carta dirigida al demandado por la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., en donde hace constar que el demandado solicitó y contrató con la empresa la instalación eléctrica interior, según orden veintinueve mil novecientos sesenta y cuatro; e) certificación expedida por el propio Tribunal, de las declaraciones prestadas por Lisandro Hidalgo Calderón y Julia Cuéllar viuda de Hernández, en el expediente de titulación supletoria, acerca de la posesión que tiene sobre el inmueble.

RESULTA:

Que el catorce de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro dictó el juez su sentencia,

absolviendo a Lorenzo de la Parra Batres de la demanda por falta de prueba y disponiendo que continuara la tramitación del expediente de titulación supletoria. Consideró que la prueba testimonial es insuficiente para probar la propiedad del actor y que en cuanto a los recibos por pagos de impuestos, se refieren a un inmueble situado entre cincuenta y cincuenta y una calles y primera y segunda avenidas, y el que es objeto del litigio está situado entre cuarenta y nueve y cincuenta calles. Habiéndose interpuesto recurso de apelación, la Sala dictó la sentencia que se examina, en la cual se confirma la de primera Instancia en cuanto absuelve de la demanda de propiedad y que no hay condena en costas, y la revoca en lo demás, resolviendo: que a Víctor Lainfiesta Dorión le corresponde la posesión sobre el inmueble referido, mandando suspender definitivamente las diligencias de titulación supletoria. La Sala estimó: que si bien no podía prosperar la demanda de propiedad, la posesión del inmueble a favor del actor estaba plenamente acreditada con las declaraciones testimoniales de José Ignacio Ramírez, Porfirio Ramírez García e Isaac Zavala, que "si bien en algunas preguntas fueron aparentemente atrapados por así decirse, ello se contrae a hechos sin ninguna significación jurídica unos, y que dentro de la buena prueba testimonial pueden ser ignorados otros", quedando en pie sus declaraciones en lo substancial. Tomó en cuenta además una inspección ocular ordenada para mejor fallar en segunda instancia y que practicó el juez de autos, acompañado del Ingeniero Roberto Stein Liebes como experto, habiéndose identificado el inmueble entre Primera y Segunda Avenidas y Cuarenta y Nueve y Cincuenta Calles del Cantón La Paz.

Contra esta sentencia interpuso el demandado, con auxilio del Abogado Horacio Rodríguez González, el presente recurso de casación, argumentando: que las pruebas aportadas por el actor se refieren a unos recibos y certificación de solvencia que corresponden a un terreno completamente diferente del que motivó la litis, y que, en cuanto a los testigos, incurrieron en graves faltas, considerando que no puede carecer de "significación jurídica", como estima la Sala, el hecho de que el testigo José Ignacio Ramírez no entendiese qué era derecho real o de dominio sobre un inmueble; que dicho testigo dijese que el actor tenía escritura de compra-venta del inmueble, cuando en autos consta que no la tiene; que dijese que le consta que el actor es propietario porque trabajó en la Aurora

de mil novecientos veinticuatro a cuarenta y uno; que el testigo Porfirio Ramírez García dijese que había sido empleado del actor, lo que supone vínculo que lo inhabilita para ser testigo. Que en cuanto a la inspección ocular, dicha diligencia confirma lo apreciado por el Juez acerca de que la prueba del actor se refiere a un sitio diferente, y que, además, el juez comisionado se excedió en dicha prueba al tomar declaraciones, como la de Francisco Quisquinay. Por último, expresa que la prueba del demandado sí está rendida dentro del juicio, incluso la certificación de las declaraciones testimoniales en el título supletorio, porque hay resolución en que se tuvieron como tales pruebas. Concluye el recurrente expresando que interpone el recurso "por haberse incurrido en error de derecho y en error de hecho en la apreciación de las pruebas"; pide que se revoque la sentencia y que se pronuncie la absolutoria que en derecho procede y se funda en los Artículos 505, 506 inciso 3o., 511, 512, 513, 514, 518 del Dto. Leg. 2009. Cita como infringidos los Artículos 263, 269, 277, 282, 433, 260, 388, 389, 390, 396 inciso 4o., 401, 402, 404, 427, 428, 430, 431, 259, 370, 386 del Dto. Leg. 2009.

CONSIDERANDO:

Habiéndose interpuesto el presente recurso por error de derecho y error de hecho en la apreciación de las pruebas, el recurrente, si bien efectúa un análisis de las pruebas en que se basó la Sala sentenciadora para pronunciar su fallo condenatorio, no precisa en qué consiste cada uno de estos errores, limitándose a la exposición mencionada arriba, lo que es contrario a la técnica del recurso, ya que por la distinta naturaleza de dichos errores, y como esta Corte lo ha declarado reiteradamente, es necesario que el recurrente los individualice, además de que, en el error de hecho, debe señalar sin lugar a dudas el documento o acto auténtico que demuestre de modo evidente la equivocación del juzgador. De esa cuenta, habiéndose atribuido indistintamente ambos errores a las pruebas estimadas por el Tribunal sentenciador, no puede efectuarse el examen de fondo para determinar si dicho Tribunal incurrió en violación de los Artículos de la estimativa de la prueba que cita como infringidos, pues dada la naturaleza limitada del recurso, sin aquellos necesarios presupuestos, un estudio generalizado de la prueba lo convertiría en una tercera instancia. Artículo 506 inciso 3o. del Decreto Legislativo 2009.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los Artículos 222, 224, 232, 233, 234, del Decreto Gubernativo 1862; 521, 524 del Decreto Legislativo 2009, DESESTIMA el presente recurso de casación y condena el recurrente al pago de las costas del mismo y a una multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia compensará con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel, y como corresponde, devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Herrarte González).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Carlos Arias Ariza. — Ante mí, Juan Fernández C.—

Contencioso-Administrativo

RECURSO interpuesto por el Gerente de "Tabacalera Nacional, S. A." contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DOCTRINA: No es impuesto personal la contribución portuaria establecida para importadores y exportadores, en el Decreto 931 del Congreso, porque se liquida sobre el monto de la importación o exportación, en consecuencia, no puede afectar a mercaderías que en virtud de un Tratado Comercial, se les eximió de todo impuesto o contribución no vigentes el día en que se firmó.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, nueve de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación interpuesto por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, se examina la sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintitrés de marzo del corriente año, en el recurso de igual naturaleza que ante dicho Tribunal interpuso el Gerente de "Tabacalera Nacional, S.A." contra las resoluciones números quinientos cincuenta y cuatro (554), dictada por la Dirección General de Aduanas, el veintiocho de mayo del año próximo pasado y cero, cero, novecientos cuarenta y nueve (00949), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de fecha veintiuno de Junio del mismo año. Del estudio de los antecedentes,

RESULTA:

Con fecha veintiuno de agosto del año recién pasado, el Gerente de "Tabacalera Nacional S.A.", señor Carlos Molina Llardén, compareció ante el Director de Aduanas, exponiendo: que al liquidarse la póliza de Importación número diez mil ciento treinta y uno-cincuenta y cuatro (10131-54) concerniente a ciento setenta bultos de tabaco en rama procedentes de Estados Unidos de América, figura al término veinte el cargo derivado del Decreto 931, o sea el Impuesto Portuario, cuyo importe asciende a un mil seiscientos cincuenta y siete quetzales, cincuenta centavos; que tal cargo resulta improcedente a tenor de las voces expresas y terminantes del Tratado Comercial concluido entre Guatemala y los Estados Unidos de América, el veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y seis y ratificado por ambas partes a nueve y dieciséis de mayo del mismo año, respectivamente; que en el orden jurídico, el Tratado estabilizó desde el punto de vista fiscal a determinados artículos que figuran en la lista anexa al mismo y entre los cuales se menciona el tabaco en rama, y en el orden moral, si el Tratado es inconveniente para los intereses del país, lo que corresponde es acogerse al procedimiento fijado para su denuncia; mas, mientras se encuentre vigente, sus previsiones deben respetarse; que en conclusión rogaba resolver que la póliza en cuestión no debe ser objeto del cargo que el Decreto 931 produce y que dicho renglón debe omitirse en la liquidación a que se ha referido.

RESULTA:

La Dirección General de Aduanas, con previo informe del Tercer Vista y de la Administración de la Aduana Central, en el sentido de que el Decreto 931 del Congreso no exime al tabaco de pagar ese impuesto, resolvió el veintiocho de mayo del año pasado; que en vista de que la contribución portuaria establecida por el citado Decreto, no afecta a las mercancías producidas o manufacturadas en los Estados Unidos de Norte América, sino a los importadores como personas jurídicas o naturales que importan artículos en general, que no le era posible entrar a considerar favorablemente la petición de la firma comercial "Tabacalera Nacional, S.A.". Inconforme el Gerente de la indicada Sociedad con esta resolución, interpuso recurso de revocatoria, del cual conoció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, habiendo dicta-

minado el Departamento de Estudios Hacendarios y Consejos Tributarios, en la siguiente forma: que el Artículo 10. del Decreto 931 del Congreso, establece una contribución portuaria a cargo de importadores y exportadores y no se trata de un gravamen que afecte el aforo de los artículos que se importen ni es un impuesto sobre artículos que se exporten; que el artículo primero del Tratado de Comercio con los Estados Unidos de Norte América, refiriéndose a los artículos cultivados, producidos o manufacturados en dicho país, enumerados y descritos en la Lista número uno anexa a ese convenio, dice que tales artículos se eximirán a su importación en la República de Guatemala, de derechos aduanales ordinarios que excedan a los establecidos en aquella lista y también están exentos de cualesquiera otros derechos, de impuestos, contribuciones, cargas o exacciones superiores a los que pesen el día de la firma del convenio sobre o respecto la importación, lo que indica claramente que la exención se refiere a los aumentos de impuestos e impuestos nuevos sobre los artículos con motivo de su importación, y que el Decreto 931 no afecta a las mercaderías o artículos producidos o manufacturados en los Estados Unidos sino a los importadores como personas naturales o jurídicas que imparten artículos en general, quienes por la naturaleza de la contribución trasladan dicho gravamen a los consumidores en los precios de sus artículos. El Ministerio Público dictaminó en el sentido siguiente: que el propósito del Convenio Comercial celebrado con Estados Unidos, manifestado a través de sus diversas cláusulas, fué fijar los impuestos existentes, evitar su variación hacia mayor límite; pero no impedir la creación de nuevos o distintos impuestos, lo cual habría comprometido uno de los atributos esenciales del Estado, por lo que opinaba que el citado convenio no sustrae a los artículos a que se refiere de la aplicación del Decreto 931. Con los anteriores informes el mencionado Ministerio resolvió el veintiuno de junio del mismo año así: "Con base en los dictámenes que anteceden, emitidos por el Departamento de Estudios Hacendarios y Consejo Tributario y el Ministerio Público, este Despacho resuelve: declarar sin lugar el recurso interpuesto, y como consecuencia, confirmar la resolución recurrida. Vuelvan las diligencias a la Dirección General de Aduanas, para su conocimiento y que lo haga saber a la parte interesada. Repóngase el papel." En resolución de siete de julio siguiente, el mismo Ministerio rectificó la resolución anterior, en el sentido de que el número que co-

rresponde a la póliza que ampara los ciento setenta bultos de tabaco en rama a que se refiere la parte interesada, es el diez mil ciento treinta y uno-cincuenta y cuatro y no cuatro mil setenta y tres, cincuenta y cuatro, como erróneamente se consignó.

RESULTA:

Que con fecha veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro se presentó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el expresado Gerente de "Tabacalera Nacional, S.A.", interponiendo el correspondiente recurso contra las resoluciones número quinientos cincuenta y cuatro, dictada por la Dirección General de Aduanas, el veintiocho de mayo del citado año y la número cero, cero, novecientos cuarenta y nueve, proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de veintiuno de junio siguiente, con el fin de que revocara tales providencias y resolviera que en las liquidaciones de las pólizas correspondientes a artículos que se encuentran amparados por el Tratado Comercial vigente entre Guatemala y los Estados Unidos, no procede el recargo del impuesto portuario y por lo tanto debe reintegrarse a la citada Sociedad, la cantidad de un mil seiscientos cincuenta y siete quetzales, cincuenta centavos que indebidamente pagó por tal concepto en la liquidación de la repetida póliza número diez mil ciento treinta y uno. Acompañó a su recurso su nombramiento de Gerente; un recibo del Banco de Guatemala, en que consta el ingreso de la suma de veintinueve mil doscientos ochenta y dos quetzales, setenta y seis centavos pagada por la Tabacalera Nacional; una copia de la póliza ya indicada; y una certificación extendida por el Secretario de la Dirección General de Aduanas, del expediente seguido ante esa dependencia administrativa, por el Gerente de Tabacalera Nacional, en que constan las resoluciones que motivó el recurso Contencioso Administrativo de que se trata. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contestó la audiencia que se le confirió, insistiendo en sus puntos de vista contenidos en la resolución contra la cual se reclama, agregando: que "una ley, como el Decreto 931 del Congreso, contiene disposiciones de observancia general y obligatoria para todos los habitantes del país, sean éstos nacionales o extranjeros, personas naturales o jurídicas; el Estado en uso de su soberanía tiene amplia facultad para establecer los impuestos y contribuciones de orden interno que estime convenientes, sin que tal facultad en ningún caso pueda estar limitada por las disposicio-

nes de Tratado alguno, ya que en caso contrario su soberanía vendría a ser un mito”, concluyendo por pedir que se tuviera por contestada negativamente la demanda y por interpuestas las excepciones perentorias de falta de acción y de derecho en el recurrente; que se abriera a prueba el recurso y que en su oportunidad se dictara el fallo confirmando las resoluciones administrativas impugnadas. El Tribunal tuvo por contestada negativamente la demanda y por interpuestas las excepciones perentorias mencionadas, y a solicitud del recurrente señaló día para la vista y el veintitrés de marzo del corriente año, dictó sentencia en la cual revoca las resoluciones administrativas que motivaron el recurso y por falta de prueba declaró sin lugar las excepciones interpuestas. Para ello estimó: “Que los convenios internacionales debidamente suscritos tienen el valor de leyes entre las partes y, en su consecuencia toda persona natural o jurídica de cualesquiera de los Estados contratantes que se encuentre protegida por uno de esos convenios, tiene perfecto derecho para invocarlos; que el convenio celebrado entre Guatemala y los Estados Unidos de América, el veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y seis y ratificado por ambas partes a nueve y dieciséis de mayo del mismo año, está vigente y en la lista a que se refiere su artículo primero en la partida de Tarifa G. Guatemalteca 322-6_0-2 dice “Tabaco en rama”, no denominado K.B.30 por lo que este artículo está expresamente comprendido en el convenio de que se trata; que el Decreto número 931 del Congreso de la República de Guatemala, donde se establece en su artículo primero una contribución portuaria a cargo de los importadores y exportadores, fué publicado el veintiséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, es decir, dieciséis años, seis meses, de estar vigente el convenio, por lo que no puede afectar a mercancías a que se refiere el Convenio de que se trata, ya que el sujeto pasivo es el importador, y cuyo objeto son las mercancías importadas, como que recae sobre el total que arroja la liquidación de las respectivas pólizas; máxime que el convenio abarca también aquellos impuestos que directamente conciernen a la importación como claramente se expresa; y que las excepciones de falta de derecho y cosa juzgada interpuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no fueron probadas, como expresamente lo manda la ley”.

RESULTA:

Contra la sentencia referida el Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de casación por infracción o violación de ley y aplicación indebida de la misma, apoyándose en el inciso 1o. del Artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, contenido en el Decreto Legislativo 2009; citó como violados el Decreto 931 del Congreso en sus artículos 1o. y 2o.; el artículo VI fracción 2, inciso 4o. del Decreto Legislativo 2165; y como aplicado indebidamente el Tratado Comercial concluido entre Guatemala y los Estados Unidos de Norte América, el día veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y seis, el que al ser ratificado por el Gobierno de Guatemala pasó a ser ley de la República. El recurrente expresa: “Estimo infringidos los Artículos 1o. y 2o. del Decreto 931 del Congreso, porque el primero estableció una contribución portuaria a cargo de importadores y exportadores, no sobre la importación, y el segundo fijó que la liquidación de los fondos provenientes de tal contribución se liquidarán y cobrarán en las Aduanas del País, por el procedimiento que para el efecto fije el Ministerio de Hacienda y Crédito Público... que dichos dos artículos fueron violados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues interpretándolos erróneamente indica que dicha contribución portuaria recae sobre la importación y que por ende lesiona el Tratado de Comercio suscrito entre Guatemala y los Estados Unidos de Norte América...; que nada más apartado de la realidad que lo consignado en ese párrafo, pues tales disposiciones legales no tienden a gravar a las mercaderías incluidas en la lista I Anexa al Convenio Comercial referido, sino que crea un impuesto que gravita sobre los importadores y exportadores indistintamente, y la forma de cobrarlo es mediante la intervención de las Aduanas del País que son precisamente los órganos administrativos para establecer tales importaciones o exportaciones, pero no grava a las mercaderías importadas o exportadas, sino al sujeto importador o exportador; es un impuesto o tributo personal y no real; si no se verifican las actividades objeto de imposición no se causa el tributo... que dicho Tratado no impide al Estado Soberano de Guatemala decretar distintos impuestos de los contemplados por dicho Convenio; ese Tratado se refiere a los impuestos existentes a la fecha de su celebración, pero no a los impuestos internos posteriores”. Habiendo tenido verificativo la vista, procede resolver este recurso.

—I—

CONSIDERANDO:

El recurrente, como principal argumento en su recurso de casación expresa: que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hizo aplicación indebida del Tratado Comercial concluido entre Guatemala y los Estados Unidos de Norte América, del veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y seis, aprobado por Decreto Legislativo número 2165, señalando concretamente como violados la fracción número 2, inciso 4o. del artículo VI de dicho Tratado, por lo que a estos preceptos exclusivamente habrá de concretarse el estudio de este aspecto del recurso; y a ese efecto, cabe tener presente, que el Tribunal sentenciador estimó en su fallo que, según el artículo 1o. del Convenio Comercial aludido, los artículos producidos o manufacturados en los Estados Unidos de América, enumerados en la lista I Anexa a ese Convenio, de la cual forma parte, se eximirán, en su importación en la República de Guatemala, de derechos aduaneros ordinarios que excedan a los establecidos en dicha Lista, y que esos artículos estarán también exentos de cualquiera otros derechos, impuestos, contribuciones, cargas o exacciones superiores a los que pesen el día de la firma de ese Convenio, sobre o respecto a la importación, a cuya imposición posterior requieren las leyes vigentes en la República de Guatemala, el día de la firma de ese Convenio; y que en la lista anexa al mismo figura el "Tabaco en rama", por lo que este artículo está expresamente comprendido en el Convenio de que se trata; y como efectivamente es cierto que en la citada lista figura el tabaco en rama, no puede admitirse que sea éste uno de los casos de inaplicación por excepción de las estipulaciones contenidas en el inciso 1o. del Artículo VI del Convenio mencionado, a que hace referencia el inciso 4o. de la fracción 2a. del citado artículo, señalado como infringido, pues aquél se refiere a que la República de Guatemala no impondrá prohibición alguna, ni cuotas de importación o aduaneras etcétera, sobre la importación o venta de ninguno de los artículos producidos o manufacturados en Estados Unidos, que se enumeran y describen en la Lista I, de consiguiente, no existe la infracción de los incisos señalados por el recurrente, por este motivo.

—II—

CONSIDERANDO:

Como una derivación de lo analizado en el párrafo anterior, indica el recurrente también, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo incurrió en infracción de los artículos 1o. y 2o. del Decreto 931 del Congreso, los cuales interpretó erróneamente porque la contribución portuaria que establece el primero de dichos incisos, es a cargo de importadores y exportadores y no sobre la importación pues no tiende a gravar a las mercaderías incluidas en la Lista I anexa al Tratado Comercial mencionado; por lo que es un impuesto o tributo personal y no real, y a este respecto, es conveniente indicar: es evidente que un Tratado Comercial, no puede impedir a los Estados contratantes la facultad de decretar impuestos, como lo indica el recurrente; pero sí que esos impuestos alteren los establecidos en el Tratado, como ocurriría si el impuesto portuario se aplicara a los artículos contenidos en la Lista Anexa al Convenio Comercial de que se trata, pues claramente fueron eximidos a su importación de derechos aduaneros ordinarios que excedieran a los establecidos y de cualesquiera otros derechos, impuestos, contribuciones, cargas o exacciones superiores a los que pesaban el día de la firma del Convenio o cuya imposición posterior requieran las leyes vigentes en la República, por lo que debe admitirse que los Artículos por él protegidos, están exentos de todo impuesto posterior a la firma del citado Tratado, tanto más, que no es cierto que el impuesto portuario cuya imposición estableció el Artículo 1o. del Decreto 931 del Congreso, y que se liquida y cobra en las aduanas, sea impuesto personal, porque precisamente se liquida sobre el monto de la importación y exportación y a mayor abundamiento su artículo 4o. expresa que no afectará las mercancías que se encuentren en las aduanas del país, las que estén a bordo, ni las que hayan sido pagadas con cartas de crédito, con anterioridad a su vigencia, lo que claramente está indicando que son las mercaderías las afectadas, y como en la Lista de esos artículos, está el tabaco en rama, es incuestionable que no puede aplicársele la contribución portuaria, de que se hizo referencia, por cuyas razones el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no infringió las leyes citadas por el recurrente.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo considerado y lo dispuesto en los Artículos 223, 224, 227, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 505, 512, 518, 521 y 524 Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el recurso de casación de que se hizo mérito. Notifíquese y en la forma correspondientes devuélvanse los antecedentes. (Ponente Magistrado Aguilar Fuentes.

Federico Carbonell R.— G. Aguilar Fuentes.— J. M. Moscoso E.— Alberto Herrarte.— J. A. Ruano Mejía.— Ante mí, Juan Fernández C.—

Contencioso-Administrativo

Recurso interpuesto por Erica y Matilde Fickert Forst, contra dos resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Expropiación de bienes.

DÓCTRINA: *Para obtener resolución favorable, en expediente de exclusión expropiatoria, seguido conforme lo preceptuado por el Decreto 630 del Congreso, no basta acreditar haber nacido en Guatemala, sino también es necesario probar plenamente que no le son aplicables al interesado ninguna de las otras causas que para ese efecto establece el Capítulo II, Título I, de la Ley de Liquidación de Asuntos de Guerra y que se encuentre dentro de las circunstancias contenidas en el artículo 17 de dicha ley.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, nueve de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintidós de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos, en el recurso que ante aquel Tribunal interpuso Erica Fickert Forst, por sí y como apoderada de su hermana Matilde de sus apellidos, contra las resoluciones números cero mil quinientos sesenta y cinco, (01565) y cero cero doscientos veintitrés, (00223) del Ministerio de Hacienda, proferidas el doce de Diciembre de mil novecientos cincuenta y uno y veinticuatro de Marzo de mil novecientos cincuenta y dos, en el expediente de oposición hecha por las recu-

rrentes a la expropiación que se les siguió ante aquel Ministerio. Del estudio de los antecedentes.

RESULTA:

El dieciocho de Octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro se presentó ante la Jefatura Política de este departamento, el Agente Auxiliar del Ministerio Público, manifestando: que en cumplimiento de las leyes de emergencia, y con fundamento en los artículos 2o. y 7o. del Decreto Gubernativo 3138, comparecía pidiendo que se emplazara a Enma Scholle de Fickert Forst, Erica y Matilde Fickert y Scholle, para que en término de tres días comparecieran ante el Escribano de Cámara a otorgar escritura traslativa de dominio de la finca "Trece Aguas", ubicada en jurisdicción de Senahú, departamento de Alta Verapaz, e inscrita en el Registro de Inmuebles con el número cuatrocientos cinco, (405) en el folio ciento cuarenta y cuatro, (144) del libro veintisiete, (27) de la Primera Serie de Alta Verapaz, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio; que dentro del mismo término debían presentar los títulos respectivos, so pena de multa y que las notificaciones se les hicieran por medio de edictos publicados en el Diario Oficial. Ese mismo día fué resuelto lo pedido, otorgando todos los puntos solicitados.

Corren agregadas las certificaciones del Registro de Inmuebles relativas a la finca "Trece Aguas", certificación de la matrícula fiscal número novecientos ochenta y cuatro, de Enma de Fickert Forst e hijos, informe del Jefe de la Matrícula y los diarios oficiales en que se hicieron las publicaciones mandadas. Con ese motivo compareció Nottebohm Hermanos de esta plaza, manifestando que: en concepto de apoderados de doña Enma Scholle Eggemann viuda de Fickert Forst, ausente del país, presentaban el título de propiedad de la finca "TRECE AGUAS", consistente en la escritura autorizada por el Notario don Carlos Salazar hijo, en esta ciudad, el siete de Julio de mil novecientos treinta y nueve.

Con fecha catorce de Diciembre del mismo año volvió a gestionar el Agente Auxiliar del Ministerio Público el traspaso de la finca en referencia, pidiendo que se hiciera de oficio, en rebeldía de las emplazadas, por haber transcurrido con exceso el término señalado, sin que las prevenidas cumplieran aquel mandato.

Otorgado lo pedido, se mandó pasar el expediente a la Escribanía del Gobierno, donde fué recibido el veinte del mismo mes de Diciembre antes mencionado.

RESULTA:

El doce de Diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, el Ministerio Público, dictó providencia mandando que Enma Scholle Eggemann viuda de Fickert Forst, Erica y Matilde Fickert Forst Scholle, dentro del término de tres días comparecieran ante el Escribano del Gobierno a otorgar escritura de traspaso de dominio, a favor de la Nación, de la finca número ocho, (8) inscrita en el folio nueve, (9) del Libro doce, (12) de la Primera Serie de Alta Verapaz, bajo apercibimiento de otorgarla de oficio, en su rebeldía, y se mandaron hacer las publicaciones respectivas.

Vencido el término señalado sin cumplirse aquel mandato se dictó providencia ordenando otorgar de oficio el traspaso de mérito, en rebeldía de las emplazadas, y enviar los antecedentes a la Escribanía del Gobierno.

RESULTA:

El ocho de Junio de mil novecientos cincuenta y uno, el Representante Específico de la Nación en Asuntos Alemanes, se dirigió al Ministro de Hacienda y Crédito Público expresándole haberse iniciado diligencias de expropiación de la finca "TRECE AGUAS Y ANEXOS", contra Enma Scholle de Fickert Forst y sus hijas Matilde y Erica, no habiéndose opuesto la primera de las nombradas, por cuya razón procedía señalarle el término de tres días para que acudiera a la Escribanía del Gobierno a otorgar el traspaso correspondiente, sobre las diez fincas cuyos números, folios y libros detalla, incluyendo muebles, derechos, acciones y depósitos si los tuviere, agregando que no cabe para dicha señora Scholle de Fickert Forst oposición alguna por no haberlo hecho dentro del término legal. Resuelto como fué pedido y no habiéndose cumplido con hacer tal traspaso se emitió nueva resolución mandando hacerlo de oficio, facultando al Procurador General de la Nación para ese efecto y señalando la Escribanía del Gobierno para que por ella se autorizara el instrumento respectivo, debiendo aceptar el traspaso en mención, el Subsecretario de dicho Ministerio.

RESULTA:

El treinta de Agosto de mil novecientos cuarenta y cinco se presentó Nottebohm Hermanos manifestando: que la finca "Trece Aguas" pertenecía a Matilde y Erica Fickert Forst y sólo el usufructo a Enma Scholle de Fickert Forst; que siendo guatemaltecas de origen, Matilde y Erica, la expropiación tenía que ser nula y protestaban por ella; que cumpliendo con lo mandado por la Procuraduría General de la Nación, presentaban el poder conferido y la certificación de las partidas de nacimiento de las últimas nombradas, para establecer que habían nacido en Senahú, departamento de Alta Verapaz, sin que hubieran figurado en las listas proclamadas.

El encargado de Asuntos Alemanes, por mandato del Ministerio Público, informó que, el diecisiete de Octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se había iniciado expediente de expropiación de la finca "Trece Aguas", inmueble que aparecía incluido, así como doña Enma viuda de Fickert Forst, en las listas proclamadas y en el Decreto Gubernativo 3135, no habiéndose otorgado la escritura traslativa de dominio de aquella finca hasta esa fecha, (quince de Octubre de mil novecientos cuarenta y cinco).

A gestión hecha por Nottebohm Hermanos, el nueve de Octubre de mil novecientos cuarenta y seis, relativa a la ilegalidad de la expropiación de la finca "Trece Aguas", el Ministerio Público les mandó hacer saber que ya se había otorgado la escritura traslativa de dominio y que debían acreditar su personería.

RESULTA:

El primero de Febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, la señorita Erica Fickert Forst, dirigiéndose al Ministerio Público expone: que el expediente de exclusión, de la expropiación de la finca "Trece Aguas", se encontraba en suspenso por virtud del Decreto 367, pero habiéndose acudido a esta Corte, en amparo contra aquella suspensión, fué declarado procedente su recurso y se ordenó la continuación del trámite correspondiente; que por el estado del expediente el Ministerio Público debía emitir su dictamen indicando que no les eran aplicables las leyes de emergencia, pues estaba demostrado que ellas eran guatemaltecas, no estaban en las listas proclamadas y no habían concurrido a votar a los vapores "Cordillera" y "Patricia", lo que probaba con la certificación extendida por el

Ministerio de Relaciones Exteriores, que acompañaba a su memorial; certificación en la que efectivamente constan los últimos extremos referidos.

El Ministerio Público mandó constatar los extremos necesarios, a consecuencia de lo cual se obtuvo informe sobre que no se había otorgado el traspaso de la finca "Trece Aguas", que el recurso de amparo interpuesto había sido declarado como se dejó indicado y que los inmuebles que componen "Trece Aguas" estaban inscritos a favor de las solicitantes y su señora madre Enma Scholle viuda de Fickert Forst. Con estos elementos de juicio y el expediente que los motivó, el Ministerio Público emitió dictamen manifestando: que sólo la señorita Erica Fickert Forst Scholle había obtenido amparo para que prosiguiera el trámite de su exclusión, pero no doña Enma Scholle viuda de Fickert Forst ni su hija Matilde Fickert Forst Scholle; que aún la citada señorita Erica Fickert Forst no se había opuesto o pedido la exclusión de sus bienes de la expropiación, por su calidad de guatemalteca, como lo decía a última hora, por lo que no era posible dársela.

El Ministerio de Hacienda mandó oír al Ministerio de Relaciones Exteriores de donde se pasó al Departamento Jurídico para que emitiera opinión, con cuyo motivo la Oficina de Emergencia informó que "Tanto el nombre de la señora viuda de Fickert Forst, como el de la finca "Trece Aguas", han figurado y figuran actualmente en la Lista Proclamada de Nacionales Bloqueados"; que en estas listas no aparecen Matilde y Erica Fickert Forst y que Matilde usó el pasaporte alemán número ciento sesenta y cuatro que le extendió la Legación de Alemania acreditada en Guatemala, el veintitrés de Noviembre de mil novecientos treinta y cinco, con validez hasta el veintitrés de Noviembre de mil novecientos cuarenta. La señorita Erica Fickert Forst presentó certificación del Registro de Inmuebles para que se agregara al expediente y con fecha diez de Agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, en memorial presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dice que, conforme testimonio de poder que acompaña, debidamente requisitado, gestiona por sí y por su hermana Matilde, reinterando su anterior solicitud de oposición al trámite expropriatorio de la finca "TRECE AGUAS" y, advirtiendo que lo actuado se encuentra en la oficina de Emergencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, pide que se reconozca su personería y se abra a prueba para completar la prueba exigida por la ley.

El treinta de Enero de mil novecientos cincuenta el Ministerio de Hacienda dictó resolución diciendo: "ADMITESE el solicitado recurso de exclusión. Artos. 19 y 42 Decreto 630 del C. de la R." y el diecisiete de Marzo del mismo año abrió a prueba el expediente por el término de quince días, durante el cual ninguna se propuso por el interesado, según lo expresa la razón puesta al folio sesenta y ocho vuelto.

Pasado la vista, que fué señalada para el veintinueve de Agosto de mil novecientos cincuenta, se pidió informe sobre la fecha de salida del país y pasaporte usado por Erica Fickert Forst, lugar de destino y fecha de reingreso, debiendo decirse qué clase de pasaporte presentó. Este informe fué evacuado indicando que la señorita mencionada había salido en el vapor "Caribia", el doce de Marzo de mil novecientos treinta y ocho, para Alemania, con fines de estudio, y vuelto al país el veintinueve de Agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, no diciendo el reporte del Delegado de Migración en Puerto Barrios qué clase de pasaporte usó para su viaje, pero sí consta que su reingreso lo hizo con permiso especial otorgado por nuestra Embajada en Londres, debidamente autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mandándose hacer saber al Ministerio Público lo referente al reingreso para que se estableciera si había suscrito acta en relación con su retorno, habiendo informado el Ministerio Público que no existía esa acta.

El siete de Septiembre de mil novecientos cincuenta se presentó pasaporte guatemalteco de Matilde Fickert Forst, para probar que en su mayoría de edad es el que usa y documento en que consta el matrimonio de la misma, donde aparece que conservó su nacionalidad guatemalteca.

En auto para mejor fallar se mandaron traer a la vista el pasaporte número seis mil ciento setenta y uno, (6171) extendido a Matilde Fickert Forst por el Consulado de Guatemala en Hamburgo, partida de nacimiento de la misma y certificación de su partida de matrimonio.

A solicitud del Ministerio de Hacienda el de Relaciones Exteriores informó que a Erika Fickert Forst se le extendió visa número mil ochenta y siete, (1087) para salir con destino a Alemania, el siete de Marzo de mil novecientos treinta y ocho, en pasaporte que le extendió la policía de Dresden, Alemania, y que en los registros de extranjeros residentes no aparece Erika ni su hermana Matilde; que para infor-

mar acerca de la legalidad o no de la copia fotostática del pasaporte extendido a Matilde Fickert Forst en Hamburgo, por nuestro Cónsul allá, era necesario tener a la vista ese documento, razón por la cual se remitió la copia referida con lo cual el Departamento Jurídico de Relaciones Exteriores emitió dictamen diciendo que no podía estimarse como prueba, por no haberse vertido al español la auténtica hecha al reverso de tal copia.

El Representante Específico de la Nación en Asuntos Alemanes pidió informe al Ministerio de Hacienda si Enma Scholle o sus hijas Erica y Matilde había reiterado solicitud de exclusión o introducido algún recurso en los expedientes de expropiación números cuarenta y siete y trescientos ochenta y ocho, pendientes en la Sección a su cargo, solicitud que se resolvió mandando dar el informe pedido. Posteriormente se dió audiencia al Ministerio Público para que emitiera opinión, la que fué dada diciendo que Matilde y Erica Fickert Forst no habían probado plenamente que las causales de expropiación, detalladas por el Capítulo II de la Ley de Liquidación de Asuntos de Guerra, no les fueran aplicables, sino que estaba probado que habían usado pasaporte alemán, por lo que había que conceptuarlas como de esa nacionalidad; que el hecho de haber nacido en Guatemala no impedía que se les aplicara la causal expropiatoria contenida en el inciso c) del artículo 7o. del Decreto 630 del Congreso y por consiguiente, la finca "Trece Aguas" y demás bienes a que se refería el expediente, estaban sujetos a lo dispuesto por los artículos 3o. y 7o. incisos a) y c) del Decreto citado; que en cuanto a la señora Enma Scholle viuda de Fickert Forst, quien no se había opuesto o reiterado su exclusión, estaba ya dictada la resolución definitiva desde el tres de Septiembre de mil novecientos cincuenta, por lo que opinaba que debía declararse sin lugar la exclusión promovida.

Con los antecedentes que se han detallado, el Ministerio de Hacienda, con fecha doce de Diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, emitió el fallo que en su parte conducente dice: "...RESUELVE: a) Que ERIKA y MATILDE FICKERT FORST, por su calidad de alemanas están sujetas a las Leyes de Liquidación de Asuntos de Guerra: b) Señalarles el improrrogable término de tres días a partir de la última notificación para que comparezcan por sí o por medio de representante legal, ante la Escribanía de Cámara y Gobierno, a otorgar escritura traslativa de dominio, a favor de la Nación, de la parte que les corresponde a cada una sobre las fincas Nos. 405, folio 144 del libro 27—Primera Serie de Alta Verapaz;

73, folio 167 del libro 8—Primera Serie de Alta Verapaz; 125, folio 230 del libro 24—Primera Serie de Alta Verapaz; 440, folio 274 del libro 2—; 126, folio 232 del libro 24—Primera Serie; 38 folio 79 del libro 23—Primera Serie; 65, folio 147 del libro 9—Primera Serie; 7, folio 8 del libro 12—Primera Serie; 8, folio 9 del libro 12—Primera Serie; 126, folio 295 del libro 8—Primera Serie, de Alta Verapaz, con inclusión de los demás bienes inmuebles, muebles derechos, acciones, depósitos y efectivos de toda clase que sean de su pertenencia, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en su rebeldía; y c) Que se hagan las publicaciones de ley..".

Para hacer este pronunciamiento el Ministerio aludido se fundó en que, aunque oportunamente solicitaron su exclusión, demostraron ser guatemaltecos de origen, no estar en las Listas Proclamadas y no haber concurrido a votar en los vapores "Cordillera" y "Patricia", Erica y Matilde Fickert Forst usaron pasaporte alemán y en las Listas Proclamadas está la finca "Trece Aguas", por lo que, conforme los artículos 3o. y 7o. inciso c) del Decreto 630 del Congreso, ellas tienen el carácter de alemanas y la finca debe ser expropiada, agregándose a esto que no establecieron estar fuera de las causas de expropiación señaladas por el Capítulo II del Decreto citado; que en cuanto a la señora Enma Scholle Eggemann viuda de Fickert Forst, por no estar su donación de acuerdo con lo estatuido por el artículo 22 del Decreto 630 en referencia, los derechos donados siguen siendo de su propiedad, que ya se habían mandado traspasar a la Nación desde el quince de Noviembre de mil novecientos cincuenta y uno. Esta resolución que lleva el número cero mil quinientos sesenta y cinco, (01565) no fué repuesta no obstante haberlo pedido, pues en resolución número cero cero doscientos veintitres, (00223) fecha veinticuatro de Marzo de mil novecientos cincuenta y dos, así se resolvió, mandando al mismo tiempo que se acumulara este expediente al que se había seguido contra Enma Scholle Eggemann viuda de Fickert Forst y se otorgara de oficio la escritura traslativa de dominio, a favor de la Nación, de los bienes expropiados, por medio del Procurador General, debiendo aceptar el Subsecretario de Hacienda, ante el Escribano del Gobierno.

RESULTA:

Contra las resoluciones antes referidas se introdujo recurso Contencioso Administrativo, apoyándose en los mismos hechos alegados para pedir su exclusión de la expropiación y pidiendo en definitiva que se revocaran las re-

soluciones números cero mil quinientos sesenta y cinco, (01565) y cero cero doscientos veintitrés, (00223) del Ministerio de Hacienda, emitidas con fechas doce de Diciembre de mil novecientos cincuenta y uno y veinticuatro de Marzo de mil novecientos cincuenta y dos. Acompañaron copia de las resoluciones impugnadas y el poder otorgado por Matilde a favor de su hermana Erica Fickert Forst, con el pase de ley.

Enviados los antecedentes y otorgada la audiencia respectiva, el Ministerio de Hacienda dijo: que sus resoluciones estaban ajustadas al Decreto 630 del Congreso y por ello pedía se tuviera por evacuada su audiencia, que se abriera a prueba el recurso y se tuviera como tal el expediente formado para la expropiación impugnada, así como las que presentaría en su oportunidad, si era necesario; el Ministerio Público, por su parte, ratificó los conceptos ya expuestos con anterioridad y terminó pidiendo que se confirmaran las resoluciones recurridas.

Abierto a prueba el recurso se rindieron por la interesada las contenidas en el expediente de exclusión de la expropiación y, vencido el término, se señaló día para la vista, habiéndose dictado sentencia, el veintidós de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos, confirmando las resoluciones impugnadas, fundándose en que, si bien se probó que son guatemaltecas de origen las recurrentes, también lo es que, usaron pasaporte alemán y mantuvieron esa nacionalidad hasta fecha posterior al siete de Octubre de mil novecientos treinta y ocho.

RESULTA:

Contra la sentencia referida, la señorita Erica Fickert Forst, introdujo recurso de casación, diciendo: "Como no estoy de acuerdo con el fallo aludido, vengo de conformidad con los artículos 505 y 506 incisos 1o.) y 3o.) del Dto. Leg. 2009 a interponer por mí, y como apoderada de mi hermana Matilde Ficker, Forst personería que me fué reconocida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo—recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal antes referido, el 22 de Octubre del corriente año..."

Citó como violados los artículos 6o. inciso 2o., 12 inciso 4o., 21, 23, 24, 28, 34, 49, 50, 92 y 102, de las disposiciones transitorias, todos de la Constitución entonces en vigor.

Denuncia como aplicados indebidamente los artículos 3o., 7o. incisos a) y b), 10, 17, del Decreto 630 del Congreso; y 3o. del Decreto 689, también del Congreso.

Al exponer los motivos por los que estima violados los artículos Constitucionales citados, dice que por haber nacido en el territorio nacional le corresponde, tanto a ella como a su poderdante, la nacionalidad guatemalteca, y ni por uso de pasaporte extranjero puede quitársele porque eso es para los naturalizados; que al proceder como se hizo se vulneraron las garantías constitucionales, tergiversándose, restringiéndose y disminuyéndose tales garantías, pues se les trata como enemigos, que son los únicos a quienes se puede aplicar la intervención.

Refiriéndose a los preceptos del Decreto 630 del Congreso, que asegura fueron indebidamente aplicados, dice que como guatemaltecas naturales, no están incluidas en el artículo tercero de dicho Decreto y, de conformidad con la Constitución, no puede tenerseles por guatemaltecas y alemanas a la vez, porque una sola nacionalidad es la aceptada en nuestra legislación, excepción hecha de los Centroamericanos, Iberoamericanos y Españoles; que en cuanto a lo de los pasaportes expedidos tampoco hay razón porque no está probado que hayan usado esos documentos, sino únicamente que les fueron extendidos con mucha anterioridad al siete de Octubre de mil novecientos treinta y ocho.

Hecho el depósito de la cantidad fijada para el efecto, se señaló día para la vista, por lo que es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El inciso tercero del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo número 2009, que cita en su apoyo la recurrente, dice que el recurso de casación procede cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos, que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador.

En el recurso interpuesto se dice: "En el presente caso al no estimar en la forma establecida por la ley la certificación de la partida de nacimiento de Erica Ficker Forst, ni la certificación de la partida de matrimonio de Matilde Ficker-Forst, ha incurrido en error de derecho..." Párrafo que, señala los documentos en que se considera que se ha cometido un error de derecho, pero sin puntualizar en él, ni en ninguna otra parte del recurso los artículos de la prueba que se pudieran haber infringido, con lo que se faltó a lo dispuesto por el artículo 512 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y se puso a es,

ta Corte en la imposibilidad de conocer en este caso, de conformidad con el propio artículo citado.

CONSIDERANDO:

Recurre también la señorita Fickert Forst, porque asegura haberse hecho aplicación indebida de los artículos 3o., 7o. incisos a) y b), 17 del Decreto 630 del Congreso y 3o. del Decreto 689, del mismo Cuerpo Legislativo que se acaba de citar; leyes que establecen la expropiación de los bienes, derechos y acciones que posean en Guatemala *el enemigo y sus colaboradores, cualesquiera que sea su nacionalidad*, considerándose como propiedad enemiga todos los bienes, derechos, acciones, depósitos y efectivos de toda clase, pertenecientes a personas individuales o jurídicas cuya nacionalidad sea de uno de los países con los que Guatemala estuvo en guerra o tenga ésta y otra nacionalidad, *incluso la de Guatemala*, o la hayan tenido el siete de Octubre de mil novecientos treinta y ocho; y, que hayan usado pasaporte alemán o la calidad de alemanes en algún instrumento público o auténtico; que no obstante lo anterior, esas mismas personas deben ser excluidas de la expropiación si prueban no estar en otro de los casos para expropiar, señalados en el Capítulo respectivo y además establecen tener a su favor las cuatro circunstancias determinadas por el artículo 17 del referido Decreto 630.

Ahora bien, como según lo indicado en el Considerando que antecede, el Tribunal no debe entrar al análisis de la prueba, sólo puede hacerse la comparación de los preceptos antes citados con los hechos que el Tribunal sentenciador tuvo por probados y como éste dice, con los informes de la Oficina de Emergencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento de Migración del mismo Ministerio, está probado que las señoritas Erika y Matilde Fickert Forst usaron pasaporte alemán, extendidos en Dresden y Legación Alemana en esta ciudad, respectivamente, por lo cual se conceptúan alemanas, con doble nacionalidad simultánea, en vez de aplicarse indebidamente, los preceptos referidos fueron correctamente estimados, sin que obste para llegar a esta conclusión el que las recurrentes sean guatemaltecas de origen, pues la expropiación es aplicable aún a los guatemaltecos que hayan colaborado con el enemigo o simplemente hayan usado pasaporte extendido por éste, porque en tal caso la ley reputa que se ha optado por esa nacionalidad, (artículo 3o. del Decreto 689 del Congreso); y, si a eso se agrega que, el Tribunal sentenciador no declaró probado que las recurrentes hayan es-

tado dentro de las circunstancias detalladas por el artículo 17 del Decreto 630 del Congreso y que no les era aplicable ninguna otra causal de expropiación, los artículos citados al principio de este Considerando no fueron violados.

CONSIDERANDO:

También se introdujo este recurso por violación de los artículos 6o. inciso 2o., 12 inciso 4o., 21, 23, 24, 28, 34, 49, 50, 92 y 102 de la Constitución entonces en vigor, leyes que se refieren a la nacionalidad y su pérdida, garantías individuales y su protección, casos de expropiación y concesiones otorgadas por el Estado.

Alega la recurrente que, siendo ella y su hermana guatemaltecas de origen, no puede declararse que tienen la nacionalidad alemana simultáneamente con aquélla, porque la Constitución mencionada no permitía dos nacionalidades, que no fueran iberoamericana, centroamericana o española; que no pueden perder su nacionalidad sino en la forma que aquel cuerpo de leyes indicaba y que procediendo como se hizo, las autoridades no les otorgan la garantía de los derechos que la Constitución les daba en sus personas, bienes y honra.

El artículo 102 de la Constitución última no tiene relación con el caso bajo estudio y en consecuencia no pudo haberse violado al resolver éste.

El artículo 6o. inciso 2o. de la Constitución referida tenía como guatemaltecos naturales a los hijos de padres extranjeros que nacieran en el territorio de la República y tuvieran su domicilio en el país, pero el artículo 12 del mismo cuerpo de leyes citado, en su inciso 1o. dice que la nacionalidad guatemalteca se pierde por naturalización en país extranjero, y como de acuerdo con lo mandado por el artículo 3o. del Decreto 689 del Congreso, el Tribunal sentenciador reputó que, aunque se pretendiera seguir teniendo la calidad de nacional guatemalteco, se había optado por la nacionalidad alemana al usar pasaporte extendido por autoridades de aquella nación, si fueron correctamente aplicados los dos artículos últimamente mencionados, y, en consecuencia, no se infringieron los demás preceptos constitucionales que la recurrente cita como violados.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, y en lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224, 227, 228 del Decreto Gubernativo 1862; 47, 48 del Decreto 630 del

Congreso; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el presente recurso, condena a la recurrente a la pérdida del depósito hecho, debiendo ingresar éste a los Fondos de Justicia, y manda que se reponga el papel empleado en la causa por el sellado de ley, pagándose la multa. Notifíquese y como corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. J. M. Moscoso E. Alberto Herrarte. J. A. Ruano Mejía. — Carlos Arias Ariza. — Ante mí: Juan Fernández C. —

CIVIL

ORDINARIO seguido por José Chay Chay contra Diego Itzep López.

DOCTRINA: No procede el examen de fondo del recurso de casación, cuando invocado como caso de procedencia el error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, se omite identificar apropiadamente la naturaleza de los errores acusados.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, quince de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, con fecha nueve de Febrero del año en curso, en el juicio ordinario seguido por José Chay Chay contra Diego Itzep López.

RESULTA:

El diecisiete de Marzo del año próximo pasado, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Quezaltenango, compareció José Chay Chay, exponiendo: que por compra que había hecho a Nicolasa y José Chay Huix, era dueño de un terreno de dos cuerdas de extensión (ochocientos setenta y tres metros cuadrados), ubicado en "Pajún Siguán", municipio de Zunil, de aquel departamento; que dicho inmueble que carecía de título inscrito y comprendía los linderos que allí mismo describen, lo tiene en posesión, sin ningún derecho, Diego Itzep, razón por la cual le demanda en la vía ordinaria la posesión del mencionado terreno, costas del juicio, y daños y perjuicios que se le irroguen.

Diego Itzep contestó negando la demanda; dice que él es dueño de un terreno situado en el paraje "Pajucub Siguán", municipio de Zunil, de aquel departamento, de ocho áreas y setenta y tres centiáreas de extensión y que hubo por compra que hizo a Candelaria García; que es lo único que tiene, y que como el actor le demandaba la posesión de un terreno situado en "Pajún Siguán" de Zunil, manifiesta que esa propiedad no la posee él porque la que es suya está en lugar distinto.

RESULTA:

Abierto el juicio a prueba, se rindieron las siguientes: por parte del actor: 1) testimonio de escritura pública que acompañó a su demanda, la cual contiene el contrato de compraventa a que en la misma se refiere; 2) inspección ocular practicada por el Juez de Paz de Zunil en el terreno objeto del litigio; 3) declaraciones de los testigos Pedro Cruz López, Julia Rosales Rojas y Juan María Rosales, quienes fueron repreguntados. Por parte del demandado: 1) testimonio de la escritura pública que contiene una declaración a favor de sí mismo, por parte de Diego Itzep, sobre que ha tenido por más de veinte años la posesión quieta, pública y pacífica, de un terreno de dos cuerdas, situado en el lugar "Pajucub Siguán", del municipio de Zunil y cuyos linderos se especifican; 2) declaraciones de los testigos Martín García Quej y Bartolo Chay Ixpertaj, quienes fueron repreguntados por la contraparte.

RESULTA:

Estando corriendo el término de prueba, el actor José Chay Chay interpuso un incidente de nulidad de la escritura otorgada por el demandado a favor de sí mismo, cuyo testimonio presentó como prueba y que antes se relacionó, pidiendo que tal nulidad se declarara al dictar sentencia. Ese incidente se tramitó en forma y fué abierto a prueba, habiendo aportado algunas el actor que por su ninguna importancia se omite detallar.

RESULTA:

Con tales antecedentes, el Juzgado dictó sentencia, declarando: "A) que condena al demandado a reintegrarle a José Chay Chay la posesión del inmueble que le pertenece, dentro de tercero día; B) que por no estar probada la existencia de daños y perjuicios, absuelve al demandado del pago de los mismos; C) improcedente el incidente de nulidad de la

escritura pública a que se hizo referencia, autorizada en esta ciudad por el Notario Ernesto Polanco el veintisiete de Noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho; D) que no hay especial condena en costas”.

Al conocer en alzada, la Sala jurisdiccional confirmó en todo la sentencia de primer grado. Sus principales consideraciones son: que con el testimonio de escritura pública que el ocho de Julio de mil novecientos cincuenta y dos otorgaron Nicolasa y José Chay Huix a favor del actor, queda plenamente comprobado el derecho con que éste acciona, por versar dicha escritura sobre derechos hereditarios de posesión precisamente del terreno cuestionado, que los vendedores adquirieron como herederos legítimos de Ventura Chay Chay Poz, Candelaria García Chay y Francisco Chay Poz; que asimismo con la inspección ocular practicada por el Juez de Paz de Zunil y declaraciones de los testigos Pedro Cruz López, Julia Rosales Rojas y Juan María Rosales, quedó establecido plenamente que el terreno cuya posesión se demanda, es el mismo que actualmente está poseyendo el demandado Diego Itzep; que aunque el demandado presentó como prueba el testimonio de la escritura autorizada por el Notario Ernesto Polanco, el veintisiete de Noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho, ésta carece de valor por ser una simple exposición del otorgante a favor de sí mismo; que la información propuesta por el demandado, no es digna de tomarse en cuenta por estar en abierta oposición con lo establecido en el acta de inspección ocular antes referida.

Contra este pronunciamiento y con el auxilio del Abogado Salomé Jacinto Fuentes, Diego Itzep López interpuso recurso de casación por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley y por error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba; se funda en los artículos 505, 506 incisos 1o. y 3o., 511, 512, 513 y 518 del Decreto Legislativo 2009 y 2o. del Dto. 388 del Congreso en sus incisos 1o. y 2o.; y denuncia como violados los artículos 479, 480, 483, 484, 485, 487, 489 y 493 en sus incisos 1o. y 7o. del Código Civil; 259, 282, 292 inciso 2o., 370, 374, 434, 436 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil; y 227 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Agrega el interponente que “sus razones” son: “I. El autor no presentó al juicio título justificativo de propiedad, y sin embargo se le reconoce al confirmarse la sentencia de primer grado, como propietario del inmueble, y desprendida de esta equivocación se le manda entregar la posesión del inmueble, que

no aparece justificada en autos. II.—El actor presentó al juicio testimonio de escritura pública de adquisición de un inmueble, que si bien en ello, se menciona posesión, la propiedad demandada y los hechos relacionados en la misma, demuestran que los vendedores no tenían tal derecho; ni se demostró en autos que lo hubieran disfrutado con anterioridad, y de haber existido los propios autos demuestran que esa posesión ha sido desamparada, y no podía ya, producir ninguna acción. III.—Se incurrió además en interpretación errónea de la prueba y equivocación del Juzgador, pues que la escritura con la cual se pretendía justificar el derecho, menciona un inmueble, con unos linderos y extensión diferentes a los constatados en la inspección ocular, discrepancias éstas que desnaturalizan desde luego la acción intentada, y que el Tribunal suplió atribuyéndolas al inmueble sin justificación alguna. IV.—La demanda, tanto como la inspección ocular y testigos, comprueban, que es el manifestante quien está en posesión del inmueble en cuestión y este hecho, de conformidad con la ley me “refuta” dueño del mismo, y en consecuencia tales actuaciones no fueron apreciadas en su valor probatorio. El referente sin la existencia del referido, y, V.—El actor no probó la existencia de la posesión anterior, que en la escritura se manifiesta que le fué cedida, no hubo pues, causa justa motivo de la cesión, y ésta sin “constarse” la existencia de la posesión, no es suficiente para demostrarla en juicio, ni menos su “continuidad”, para que esa posesión “produjera” efecto.”

CONSIDERANDO:

Citados como fundamentación del recurso los incisos 1o. y 3o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que se refieren, respectivamente, a cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, y cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, por razón lógica procede examinarlos en orden inverso, o sea en primer término el caso relativo al error en la apreciación de las pruebas.

Según criterio sostenido por esta Corte en repetidas ocasiones, cuando se trata de este motivo de procedencia, es preciso identificar apropiadamente la naturaleza del error cometido, pues siendo diferente el error de derecho del de hecho, tanto en su acepción jurídica como en la técnica aplicable para su estudio, no puede dejarse al Tribunal de ca-

sación la interpretación de ese aspecto básico para llegar a las conclusiones que amerite el planteamiento; y, como en el caso de examen, el recurrente omitió señalar aquella necesaria diferenciación al aludir a las pruebas que a su juicio no se estimaron como correspondía, se hace imposible el estudio de fondo del recurso por este motivo.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, que es el otro caso de procedencia invocado, cabe observar que, sobre lo confuso de la argumentación del recurrente al exponer sus puntos de vista en varios párrafos que literalmente se transcribieron antes, se refiere en los mismos, por una parte, a situaciones o hechos que en realidad no contempla en sus consideraciones el Tribunal sentenciador, y, por otra, a impugnar elementos probatorios en que dicho Tribunal hace descansar su fallo, los cuales no podrían ser objeto de nuevo análisis dentro de este caso de procedencia ya que debe estarse a los hechos que en la sentencia se han declarado probados; y si a ello se agrega que la cita de las leyes que denuncia como infringidas la hace de corrido y sin relacionarlas con los distintos puntos de su exposición, es mayor la dificultad para confrontar las mismas con los vicios atribuidos al fallo. De consiguiente, dados los defectos del planteamiento enumerados, tampoco en este caso es posible el examen del recurso interpuesto.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, DESESTIMA el presente recurso, condenando al recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales que, en caso de insolvencia, conmutará con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel en la forma que corresponde y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C. —

Contencioso-Administrativo

RECURSO interpuesto por Franz Meindl Schimpff como representante de la "Curacao Trading Company S. A." contra resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DOCTRINA: Los requisitos establecidos por la ley de lo Contencioso-administrativo acerca de que para que proceda este recurso es indispensable agotar la vía administrativa, son de orden procesivo que no afectan el fondo de la resolución administrativa impugnada, por lo que, la violación de los Artículos que los relacionan, no puede considerarse comprendida en el caso de procedencia para el recurso de casación a que se refiere el inciso 1o. del Artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que trata exclusivamente de la violación de leyes decisorias o de fondo.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, dieciocho de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación y con sus respectivos antecedentes, se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el siete de febrero del corriente año, en el recurso de esa naturaleza interpuesto por Franz Meindl Schimpff, como representante de la "Curacao Trading Company S. A.", contra la resolución dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, número cero mil dos (01002) de fecha siete de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.

ANTECEDENTES:

El veintiséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, se presentó por la "Curacao Trading Company, S. A.", un memorial al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que exponía: que en póliza de importación número dos mil setecientos catorce de la Aduana del Puerto de San José, declararon trescientos veinte bultos de diferentes mercaderías, entre las cuales consignaron separadamente por lotes en distinto renglón, según las diferentes clasificaciones, el peso bruto que sirve de base para aplicar el aforo, citando la correspondiente partida arancelaria, en la forma que detalla; que al practicarse registro y liquidación, las diferentes clases de mercaderías aforadas y partidas

arancelarias aplicadas, resultaron de conformidad con lo declarado, como puede comprarse con el cuadruplicado de la póliza que se acompaña; que, sin embargo de lo anterior, en la liquidación se aplica una multa de doscientos noventa y tres quetzales con cinco centavos, conforme el Artículo 258 del Código de Aduanas, porque según parte del vista, los valores de diferentes clasificaciones arancelarias están englobadas; que la compañía presentada no está conforme con tal aplicación, por estimarse que, habiéndose declarado el peso que sirve de base para el aforo y la partida arancelaria correspondiente a toda clase de mercadería, se han cumplido con las estipulaciones de dicho artículo, puesto que para exigir la declaración del valor separadamente, sería preciso que el aforo que se aplicara fuera ad-valorem; que el valor que corresponde a los aparatos radioreceptores y repuestos, está declarado englobado, lo mismo que el de los altoparlantes y micrófonos, teniendo todos el mismo aforo de veinticinco centavos por kilo bruto; que por lo expuesto, pide que, previo dictamen del Consejo Técnico el Ministerio se sirva resolver que no tiene aplicación la multa y se ordene a la Aduana de San José su devolución; haciendo constar por último que, aunque la póliza fué cancelada según comprobante cincuenta y seis mil setecientos noventa y nueve, las mercaderías permanecen en la Aduana, mientras se resuelva el reclamo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mandó pedir informe a la Administración de Rentas y Aduana del Puerto de San José, habiendo informado la Vistoria de Importación, lo siguiente: que la Vistoria aplicó la multa porque el Artículo 258 ya citado claramente establece que las declaraciones de naturaleza, valor, peso, etc., se expresarán en detalle y distinto renglón, según las diferentes clases de artículos que se declaren en las pólizas; que en el caso de referencia, las facturas declararon separadamente los valores y en las pólizas fueron englobados; que el Artículo mencionado no dice que sólo cuando se trate de mercadería con aforo ad-valorem se deben detallar los valores; que estando en vigor el Decreto 1354, es indispensable que la mercadería de diferente naturaleza arancelaria sea declarada con sus respectivos valores; que el Artículo 258 exceptúa el caso de que la mercadería tenga la misma clasificación, pero que a juicio del informante, la mercadería no sólo tiene distinta clasificación, por corresponderle diferentes partidas no obstante ser el mismo aforo, sino que, el aforo por radio-receptores es de

cincuenta centavos por kilo bruto, rebajado a veinticinco centavos por Convención Comercial con Holanda, sin que en tal rebaja vayan incluidos los repuestos.

Oído el Consejo Técnico del Departamento de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dictaminó en la siguiente forma: que no procede la aplicación de la multa porque los interesados declararon un lote de doscientas veinticinco cajas y cincuenta y cinco cartones, conteniendo aparatos receptores bajo una sola partida cuatrocientos noventa y uno guión cuatro guión seis guión tres (491-4-6-3) de veinticinco centavos kilo bruto, consignando el peso básico para determinar el aforo cinco mil quinientos ochenta y ocho "K.B.", y se aforaron "5,389 K.B."; un lote de cinco cartones conteniendo repuestos para tocadiscos y radio-receptores, bajo una sola partida "491-4-66 de Q.0.25 K.B.", consignando el peso básico de "11.480" y se aforaron "12 K.B."; que para estos aparatos receptores y repuestos se declaró un valor englobado de once mil novecientos setenta y un quetzales ochenta y cinco centavos. Y un lote de cinco paquetes conteniendo globos de caucho para propaganda, bajo una partida "496-2-0-102 de Q.1.50 K.B.", consignando el peso básico de "75,900" y al practicar el registro resultó de "76 K.B.", declarándose el valor englobado de quinientos ochenta y cinco quetzales ochenta y cinco centavos, incluyendo el correspondiente a los artefactos para escaparate y tejidos impresos para propaganda contenidos en dos cajas excluidas de la liquidación. Que el caso presente debe considerarse comprendido en la salvedad que hace el Artículo 258 del Código de Aduanas, que al referirse exclusivamente a la forma y contenido de las declaraciones, permite la declaración por lotes de bultos, cuando varios de ellos contengan mercancías de la misma clasificación, deduciéndose a la vez que no es justo ni legal sancionar la declaración formula-da, únicamente por haber declarado englobado el valor principal de los aparatos receptores con el de los repuestos y el valor de los globos de caucho con el de los artefactos de escaparate y tejidos impresos para propaganda; que si bien es cierto, como lo indica el Vista, que el Artículo ya citado no dice expresamente que sólo cuando se trate de mercadería con aforo ad-valorem se deben detallar los valores, no lo es menos que el Artículo 255 exige entre los datos de las declaraciones el peso bruto en kilogramos, y según el caso, la cantidad o medida de cada unidad o unidades que, conforme el Arancel, sirva de base para determinar el aforo, de lo cual se deduce que si la

ley exige tales datos en las declaraciones, resulta indebido sancionar la falta de declaración en detalle del valor, puesto que no es éste el que sirvió de base para determinar y aplicar el aforo; que conforme el Artículo 356 del Código de Aduanas, los reclamos deberán presentarse antes de que las mercancías salgan de la custodia aduanera, debiendo hacerse constar que la póliza dos mil setecientos catorce fué aprobada y cancelada el veinticuatro de noviembre, el reclamo presentado el veintiséis del mismo mes y la mercadería retirada al seis de diciembre; es decir, que el reclamo se presentó en tiempo, aunque la mercadería se retiró antes de resolverse el expediente.

Con base en el dictamen anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dictó la resolución número dos mil setecientos uno del veintiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, en la cual, al aprobar el dictamen, dispone que el expediente pase al Tribunal y Contraloría de Cuentas para que formule el correspondiente reparo de egreso. La Presidencia del Tribunal y Contraloría de Cuentas pasó el expediente a la Sección de Estadística y Archivo para ser agregado a las cuentas respectivas, para los efectos de la glosa. El Contralor J. Domingo Monzón, a quien pasó el expediente, abrió dictamen, exponiendo: que el texto del Artículo 258 del Código de Aduanas era muy claro y que solamente autorizaba que se omitiera en detalle el valor de las mercaderías cuando éstas fueran de la misma clasificación, y que deberían entenderse como tales todos aquellos artículos que, aunque diferentes unos de otros, se clasifican bajo una misma partida arancelaria y por lo tanto con el mismo aforo; pero que nunca podrían considerarse como de la misma clasificación, todos aquellos que, teniendo un mismo aforo, se clasifican en diferentes partidas arancelarias; y que por lo dicho estimaba procedente la multa impuesta. La Presidencia del Tribunal y Contraloría de Cuentas, en providencia del veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, aprobó este último dictamen y dispuso que los antecedentes volvieran nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este Ministerio, en resolución número mil dos del siete de julio del mismo año, dispuso: que aunque la multa impuesta fué aplicada improcedentemente por estar dentro de las excepciones contempladas en el numeral primero, capítulo VII de la circular Ministerial número dos, porque fueron mercaderías aforadas a base de peso y no sobre el valor principal, no era posible entrar a considerar la solicitud del reclamante por haber ingresado la sanción en forma definitiva, de confor-

midad con el Artículo 356 del Código del Ramo, debiéndose tener por modificada en este sentido la providencia dos mil setecientos uno del veintiuno de diciembre anterior. Contra esta resolución interpuso la Compañía reclamante recurso de revisión, el cual fué declarado improcedente, por no existir en lo administrativo tal recurso, sino solamente los de revocatoria y reposición.

El diecinueve de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro se presentó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo el señor Franz Meindl Schimpff, en su carácter de apoderado de la "Curacao Trading Company, S.A.", interponiendo el recurso respectivo contra la resolución número mil dos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya mencionada. Hizo relación de los hechos ya enumerados pidiendo que en definitiva se revocara la resolución del Ministerio de Hacienda y se ordenara la devolución de la multa de doscientos noventa y tres quetzales cinco centavos que considera indebidamente impuesta, y acompañó original la póliza de aduana dos mil setecientos catorce. Pedidos los antecedentes, el Tribunal dió audiencia por nueve días al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en resolución que quedó notificada el seis de septiembre. El mismo seis se amplió esta resolución en el sentido que se oyese al Ministerio Público por igual término de nueve días, quedando esta última providencia notificada el ocho del mismo mes. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, señor Raúl Reina Rosal, se presentó el diecisiete de septiembre, haciendo uso de la audiencia concedida y manifestando: que el demandante no agotó la vía gubernativa en la forma que determina la ley, por lo que el recurso contencioso-administrativo es notoriamente improcedente y debió haberse rechazado de plano; que el demandante no interpuso contra la resolución Ministerial que estimaba lesiva a sus intereses el recurso de reposición que correspondía, y que no habiendo llenado esos trámites previos, carece de derecho para interponer la vía contencioso-administrativa, porque la resolución recurrida no es de las que causan estado, al tenor de lo establecido en los Artículos 11, inciso 1o. y 12 párrafo 1o. del Decreto Gubernativo 1881; que aún cuando se admitiera el recurso, al momento de conocer del fondo del mismo debe tenerse presente que, conforme los "Artículos 356, 357 y 358 fracción III", (no dice de que ley), la "Curacao Trading Company", carece de todo derecho para su demanda porque no sólo hizo su solicitud de exoneración de multa cuando ya había retirado la mercadería de las oficinas aduanales, sino que se dirigió directamente al Mi-

nisterio, cuando el orden correcto era hacer su pedimento ante la Dirección General de Aduanas, para que de allí se elevara el asunto al Ministerio con el dictamen del caso. Por último, pidió: que se tuviese por contestada negativamente la demanda, por interpuestas las excepciones de falta de acción y de derecho en el recurrente, que se señalara día para la vista por tratarse de un punto de derecho y que al dictarse el fallo se declarara la improcedencia del recurso, confirmando la resolución ministerial.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia contra la cual se recurre, y en ella expresa: que el Ministerio de Hacienda sostiene que el demandante no interpuso en su oportunidad el recurso de reposición contra la resolución número mil dos del propio Ministerio y que por lo tanto resulta improcedente el recurso contencioso-administrativo; pero que al respecto, habiendo citado el recurrente el Artículo 7o. del Decreto Gubernativo 1881, interponía precisamente aquel recurso, y si en el texto aparece escrito recurso de "revisión", esto debe atribuirse a un error mecanográfico, mayormente que la vía gubernativa había quedado legalmente agotada con la resolución ministerial número dos mil setecientos uno, constituyendo un evidente vicio administrativo la resolución posterior; que con la resolución número dos mil setecientos uno el Ministerio inquestionablemente puso término al oportuno reclamo formulado por la "Curacao Trading Company S. A.", y tal decisión fué consentida por dicha entidad, necesariamente causó estado y se agotó la vía gubernativa y sólo pudo la Administración acogerse a los preceptos del Artículo 10, en relación con el 18 fracción 2a. del Decreto Gubernativo 1881; que pretender restar imperio y eficacia a una resolución ya consentida, basándose solamente en que la sanción aplicada y declarada improcedente ya había ingresado definitivamente al Fisco, no puede admitirse legítimamente, toda vez que el reclamo fué hecho dentro de lo que preceptúa el Artículo 356 del Código de Aduanas; que la improcedencia de la multa impuesta fué reconocida tanto por el Consejo Técnico de Aduanas como por el propio Ministerio y que la resolución mil dos constituyó un lamentable error administrativo, pretendiendo con ella impedir la ejecución de un pronunciamiento del propio Ministerio, dejando firme ese pronunciamiento, ya que la resolución no indica en qué consiste la modificación hecha. Agrega que el expediente fué turnado al Tribunal y Contraloría de Cuentas, no precisamente en consulta de una providencia dictada por el Ministerio,

sino para el debido cumplimiento de esa providencia, a efecto de que se formulara el correspondiente "reparo de egreso", resultando fuera de lugar la actitud de la Contraloría, dictaminando en el sentido de que la multa era procedente y que el dictamen del Consejo Técnico no estaba de acuerdo con los preceptos legales. Por último, que el Tribunal sentenciador había mandado a oír por nueve días en el recurso contencioso-administrativo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con fecha tres de septiembre del año próximo pasado y que tal resolución fué notificada el seis del propio mes, y habiendo el Ministerio evacuado la audiencia el diecisiete de septiembre, ya había transcurrido con exceso el término concedido, por lo que la interposición de las excepciones perentorias de falta de acción y falta de derecho en el recurrente, debe estimarse extemporánea. Con base en esas consideraciones, el Tribunal revocó la resolución recurrida, quedando firme la número dos mil setecientos uno, y declaró sin lugar las excepciones perentorias de falta de acción y falta de derecho por extemporáneas. Interpuestos recursos de aclaración y ampliación contra este fallo, por considerar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se había cometido error al efectuar el cómputo de los nueve días concedidos al Ministerio para que contestara la demanda, estos recursos fueron declarados sin lugar el catorce de febrero del corriente año.

Contra la sentencia mencionada interpuso el Ministro de Hacienda y Crédito Público, señor Jorge Echeverría Lizarralde, con auxilio de Abogado Arturo Aroch, el presente recurso de casación, que fundamentó en los incisos 1o. y 5o. del Artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil contenido en el Dto. Leg. 2009, artículo reformado por el 2o. del Dto. 388 del Congreso, fundamentándolo además en los Artículos 1o. y 2o. del Dto. 60 de la Junta de Gobierno. En consecuencia —manifiesta— impugnó el fallo por contener violación expresa de la ley y por que el Tribunal omitió hacer declaración sobre la procedencia o improcedencia de las excepciones perentorias de falta de acción y falta de derecho en el recurrente (en lo contencioso). Citó como leyes violadas, los Artículos: XXIX inciso 5o. de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, contenida en el Decreto Gubernativo 1862; 232 inciso 3o. del mismo Decreto 1862, y 11 incisos 1o. y 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, contenida en el Dto. Gub. 1881. Que el Artículo XXIX inciso 5o. de los Preceptos Fundamentales fué

violado porque el Tribunal sentenciador estima que la contestación de la demanda y la interposición de excepciones se efectuó fuera de los nueve días y que tal pronunciamiento no es correcto porque entre el seis y diecisiete de septiembre del cincuenta y cuatro mediaron cuatro días inhábiles que debieron ser descontados, estando el día doce que fué domingo y los días catorce, quince y dieciséis que fueron festivos por conmemorarse el aniversario de la independencia patria, comprobando ese extremo con una certificación que se adjunta del propio Secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; que estando en tiempo la interposición de excepciones, debieron haberse analizado y resuelto en el fallo, y que al no hacerlo así se infringió el Artículo 232 inciso 3o. del Decreto Gub. 1862. Continúa exponiendo el recurrente que las excepciones perentorias interpuestas las fundamentó el Ministerio en que la resolución Ministerial recurrida no había causado estado porque aún cabía el recurso de reposición y en que la petición sobre exoneración de multa no se había ajustado a los Artos. 356, 357 y 358 fracción III del Código de Aduanas contenido en el Dto. Gub. 1765, porque retiró la mercadería de las oficinas aduanales antes de solicitar la exoneración de la multa, y que en tal virtud, el Tribunal de lo Contencioso, al admitir la demanda, violó los artículos 11 inciso 1o. y 12 del Dto. Gub. 1881, puesto que en el fallo se admitió la procedencia de la acción. Pide que en definitiva se case la sentencia, que se declare la procedencia de las excepciones y se deseche la acción del señor Meindl Schimpff.

CONSIDERACIONES:

—I—

Citó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como casos de procedencia de este recurso, los contenidos en los incisos 1o. y 5o. del Artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, impugnando el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo: a) por contener violación expresa de la ley, y b) porque omitió hacer declaración sobre la procedencia o improcedencia de las excepciones perentorias de falta de acción y falta de derecho que interpuso. Por el orden lógico que llevan estos casos de procedencia, corresponde referirse en primer término al segundo de los citados. No es cierto, como lo afirma el Ministro de

Hacienda y Crédito Público, que el Tribunal sentenciador haya omitido hacer declaración sobre la procedencia o improcedencia de las excepciones perentorias que interpuso. Como ya se dijo al hacer la relación de los autos, dicho Tribunal declaró expresamente sin lugar las excepciones perentorias de falta de acción y falta de derecho, por considerarlas extemporáneas. Este pronunciamiento es suficiente para que se llene el requisito formal expresado en el Artículo 232 inciso 3o. del Decreto Gubernativo 1862, ya que ello no prejuzga sobre las razones de fondo que haya tenido el Tribunal para desechar excepciones, y, por consiguiente, no pudo ser violado este Artículo.

—II—

El pronunciamiento hecho por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en favor del demandante lleva un implícito rechazo de las excepciones interpuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aún en el caso de que no se hubiese hecho declaración expresa sobre la improcedencia de tales excepciones por extemporáneas, ya que es un principio de derecho que la estimación de la acción comprende la desestimación de las excepciones, mayormente cuando, como en el caso *sub-litis*, por la calidad de las excepciones interpuestas: falta de acción y falta de derecho en el demandante, no se especifica ningún hecho impeditivo, modificativo o extintivo que sólo pudo hacer valer el demandado, sino la ausencia de elementos fundamentales de la acción que la harían ineficaz y la falta de fundamentos jurídicos sobre la cual pueda apoyarse; elementos éstos que, invocados o no por la parte demandada, deben ser tomados en consideración por el juzgador, al pronunciarse sobre el fondo de la demanda interpuesta, tal como puede verse en la sentencia recurrida. De lo expuesto se deduce que, aún en el supuesto de error en cuanto a la estimación de la extemporaneidad de las excepciones, por no ser determinante dicha estimación de la admisibilidad de la acción en la sentencia, no procede analizar si fué violado el artículo XXIX inciso 5o. de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, Decreto Gubernativo 1862.

—III—

CIVIL

Expresa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el Tribunal sentenciador violó los Artículos 11 inciso 1o. y 12 del Decreto Gubernativo 1881, al declarar con lugar la demanda, no obstante que el recurso contencioso-administrativo fué interpuesto sin que se agotase la vía administrativa, pues el Interesado no hizo valer contra la resolución ministerial número mil dos el recurso de reposición, sino otro muy distinto, por lo que al interponer su demanda aquella resolución no había causado estado. Fundamentándose el recurso en este aspecto en el inciso 1o. del Artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, o sea por violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, esta Corte no puede entrar al análisis de la cuestión planteada, toda vez que las leyes que se citan como violadas establecen requisitos de orden procesivo, cuya violación originaría un error *in procedendo*, que no puede ser examinado en concordancia con el caso citado, en el cual sólo cabe examinar las cuestiones de fondo que deciden el pleito, o sea si se ha cometido error *in judicando*, por más que el requisito mencionado fuera indispensable para darle curso a la demanda contencioso-administrativa. En consecuencia, debiéndose estimar la ausencia del requisito enunciado como de carácter formal, que en nada afecta la parte sustantiva de la resolución administrativa impugnada, no procede examinar si los Artículos citados fueron violados por el Tribunal sentenciador.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y en lo dispuesto por los Artículos 222, 224, 232, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; y Decreto 60 de la Junta de Gobierno, declara: IMPROCEDENTE el presente recurso de casación. Notifíquese, y como corresponde, devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Herrarte González).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí, Juan Fernández.

ORDINARIOS acumulados, sostenidos entre Arturo Samayoa Roldán y Mauricio Figueroa García.

DOCTRINA: Cuando se atribuye error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, doctrinariamente es necesario indicar con precisión en qué consisten aquellos errores, a juicio del recurrente, para colocar al Tribunal en la posibilidad de hacer el estudio comparativo entre fallo impugnado y leyes citadas como violadas, porque la naturaleza del recurso de casación, no permite interpretar la intención del interesado.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, veintuno de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

En virtud de recurso extraordinario de casación, se examina la sentencia pronunciada por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, en los juicios ordinarios acumulados, sostenidos entre Arturo Samayoa Roldán y Mauricio Figueroa García, ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de este departamento. De los antecedentes que se tienen a la vista,

RESULTA:

El cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, compareció ante el indicado juzgado, don Arturo Samayoa Roldán, expresando: que era propietario de la finca inscrita en el Registro General con el número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, folio doscientos veinticuatro, del libro trescientos sesenta y cuatro de Guatemala, que se desmembró de la finca número treinta y seis mil seiscientos cuatro, folio quince, del libro trescientos once de Guatemala, también de su propiedad; que Mauricio Figueroa García adquirió un lote de la primera finca indicada, la cual se identifica como fracción cuarta de la "Quinta Samayoa"; que el lote adquirido por Figueroa García es el número DIECISEIS de dicha fracción cuarta, teniendo doscientos cincuenta metros cuadrados de superficie, dentro de los siguientes linderos: Norte, Lote número quince, veinticinco metros; Sur, lote número dieciséis, la misma dimensión; Oriente, lote número catorce, diez metros; y Poniente, Primera Avenida de la lotificación, la misma dimensión; que al otorgarse la escritura de compraventa, el nueve

de septiembre de ese año, ante el Notario Horacio Arroyave Paniagua, entre su apoderada Zoila Samayoa Roldán de Alvarez y Figueroa García, se hizo constar equivocadamente, que el lote que se vendía estaba inscrito en el Registro con el número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, folio doscientos veinticuatro, del libro trescientos sesenta y cuatro de Guatemala, que corresponde a la totalidad de dicha fracción cuarta, que tiene una extensión superficial de cuatro mil trescientos sesenta y seis metros cuadrados, trece centésimos de metro, por lo que incontestablemente se cometió un error, puesto que lo correcto es desmembrar de dicha fracción el lote número dieciséis indicado; que en otra operación similar que hizo con el mismo Figueroa García, sobre otra fracción de su finca "La Quinta" se incurrió en el mismo error y al advertirse, el propio Notario Arroyave Paniagua, hizo la escritura de rectificación, pero en el presente caso Figueroa García se ha negado a hacer la correspondiente rectificación, pretendiendo obtener cierta cantidad a cambio; que en resguardo de sus legítimos derechos y de los intereses de las personas que han adquirido, por el sistema de abonos, los restantes lotes de dicha fracción cuarta, demandaba la nulidad de la escritura autorizada por el Notario Arroyave Paniagua, así como la inscripción que se hizo en el Registro, con base en tal instrumento, por contener un error substancial en la identificación del inmueble vendido; y por último, que hacía constar, que según el poder que extendió a su hermana Zoila Elvira Samayoa Roldán de Alvarez, cuyo testimonio presentaría oportunamente, la apoderada está facultada para otorgar las escrituras de compraventa de las fracciones de su finca "La Quinta", pero debiendo requerir en cada caso carta de la oficina, suscrita por el empleado correspondiente, en la que se consignen los datos identificativos del inmueble vendido, y en el presente caso, esa carta no fué extendida, por consiguiente, el contrato también es nulo porque ha faltado ese requisito esencial en el ejercicio del mandato aludido; que con base en lo anterior demandaba: la nulidad de la escritura autorizada por el Notario Arroyave Paniagua y la segunda inscripción de dominio de la citada finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, y que en caso de oposición infundada se condenara al demandado en las costas judiciales. La anterior demanda fué negada por el señor Figueroa García, quien le opuso las excepciones de falta de derecho y falta de acción como perentorias, las que fueron admitidas por el Juez

RESULTA:

El veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, se presentó ante el mismo juzgado, don Mauricio Figueroa García, manifestando: que por escritura de nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, autorizada por el Notario Horacio Arroyave Paniagua, en esta ciudad, compró al señor Arturo Samayoa Roldán, la finca urbana número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, folio doscientos veinticuatro, libro trescientos sesenta y cuatro, de Guatemala, por la suma pagada de quinientos quetzales; que al redactar el Notario el instrumento no consignó con exactitud los linderos del inmueble comprado y mencionó otros que no concuerdan con los de la cosa vendida y esta circunstancia ha dado motivo para que el vendedor pretenda que fué otro el inmueble vendido; que tampoco le ha dado posesión de la finca objeto del contrato y retiene lo ajeno, con menoscabo de sus derechos de comprador y propietario; que por lo manifestado demandaba de don Arturo Samayoa Roldán, la propiedad y la reivindicación de la susodicha finca, así como la fijación de sus respectivos linderos, pidiendo que en sentencia se declarara: que la citada finca es de su exclusiva propiedad; que debe reivindicar dicho inmueble y dársele la correspondiente posesión por el vendedor dentro de tercero día; que los linderos y dimensiones de la citada finca son: por el Norte setenta metros, veinte centímetros, con la finca matriz, habiendo calle por medio; por el sur, ciento cuatro metros y cuarenta y cinco centímetros, con la misma finca matriz y calle de por medio; por el Oriente, en línea quebrada, sesenta metros, sesenta centímetros, con calle de la Verbena; y por el Poniente cincuenta metros, con otra finca del demandado; y que las costas de este juicio son a cargo del mismo demandado. Acompañó el testimonio de la escritura autorizada por el Notario Arroyave Paniagua y una certificación de las inscripciones de dominio de la citada finca. Por auto de catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, se decretó la acumulación de este juicio, al iniciado por Samayoa Roldán contra este demandante, relacionado en el párrafo anterior, y posteriormente el Licenciado Julio Camey Herrera, en concepto de apoderado de don Arturo Samayoa Roldán, compareció a contestar la anterior demanda, en los siguientes términos: que según la escritura autorizada por el Notario Arroyave Paniagua, la señora Zoila Samayoa Roldán de Alvarez, en representación del señor Sa-

mayoa Roldán, traspasó a favor de Figueroa García, el dominio del lote número dieciséis de la fracción cuarta de la lotificación "La Quinta"; que la fracción vendida fué identificada en dicho instrumento con los siguientes linderos: Norte, lote número quince; Sur, lote número diecisiete; Oriente, lote número catorce; y Poniente, primera avenida de la lotificación; que por un error se hizo constar que a la fracción objeto del contrato le corresponde en el Registro el número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, folio doscientos veinticuatro, del libro trescientos sesenta y cuatro de Guatemala, cuando en realidad es el de toda la fracción cuarta de la lotificación, de donde tiene que desmembrarse el lote número dieciséis, así como otros lotes que terceras personas están adquiriendo y algunos que ya fueron desmembrados de la misma finca; que valiéndose del error apuntado Figueroa García pretende que es de su propiedad la totalidad de la citada finca y ha presentado demanda ordinaria en contra de Samayoa Roldán en el sentido ya indicado; que de acuerdo con el plano general de la lotificación, los comprobantes del Registro y el texto mismo de la escritura de compraventa relacionada, lo único que se ha vendido a Figueroa García es el lote mencionado, con doscientos cincuenta metros cuadrados de superficie, por lo que contestaba la demanda en sentido negativo, interponiéndole las excepciones perentorias de falta de acción y falta de derecho; que al mismo tiempo contrademandaba a Figueroa García para que en la sentencia se interprete el contrato de compraventa celebrado entre éste y Samayoa Roldán a fin de que en definitiva se declare: "a) que la compra hecha por Figueroa García a que se refiere la escritura pública autorizada por el Notario Horacio Arroyave Paniagua el 9 de septiembre de 1949, se contrae al lote número dieciséis de la fracción cuarta de la lotificación "La Quinta" y deberá desmembrarse con una extensión de doscientos cincuenta metros cuadrados, de la finca inscrita en el Registro General de la República con el número 45,150, folio 224, del libro 364 de Guatemala; b) que en consecuencia debe otorgársele en nueva escritura el título de propiedad correspondiente, identificándose el lote comprado con las siguientes colindancias y dimensiones: Norte, veinticinco metros, con lote número quince; Sur, la misma dimensión, con el lote diecisiete; Oriente, diez metros con el lote catorce; y Poniente, la misma dimensión, con la primera avenida de la lotificación "La Quinta"; y c) que en caso de oposición infundada, las costas son a cargo del de-

mandado". A esta contrademanda se opuso Figueroa García, interponiéndole las excepciones de contrato perfecto, falta de acción y falta de derecho, expresando: que era cierto que compró a Amadeo Castro Muñoz los derechos que dicho señor tenía adquiridos en el lote número dieciséis de la colonia "La Quinta", pero este contrato es distinto al celebrado con Samayoa Roldán por el que le reconviene; distinto en las personas contratantes y en la cosa vendida; que por el segundo contrato celebrado con Samayoa Roldán adquirió la totalidad del inmueble marcado en el Registro de la Propiedad, con el número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, ya citada, y como Samayoa ya había vendido el lote número dieciséis a Castro Muñoz, quien a su vez lo vendió al exponente, al venderle posteriormente Samayoa Roldán la mencionada finca de mayor extensión, forzosamente tuvo que quedar comprendido aquel lote dentro de ésta; que el contrato pasado ante el Notario Arroyave Paniagua, no necesita de interpretación porque es claro y obvio, hay en él comprador y vendedor conocidos, cosa vendida determinada en la forma que manda la ley, y precio.

RESULTA:

Que abiertos a prueba ambos juicios, se rindieron por parte de Samayoa Roldán, las siguientes: a) Inspección ocular, en la parcela número Cuatro de la Lotificación "La Quinta", consignándose en el acta, que está comprendida dentro de cuatro calles, y que el lote número dieciséis, tiene distintos linderos, según los planos que se tuvieron a la vista; b) Inspección ocular en los libros del Registro General, donde se tuvo a la vista el plano del lote número dieciséis, de la parcela número cuatro, sin los datos identificatorios de Registro de la finca de donde se desmembró y la segunda inscripción de dominio de la finca número cuarenta y cinco mil, ciento cincuenta folio doscientos veinticuatro, del libro doscientos sesenta y cuatro de Guatemala, a nombre de Figueroa García; c) dictamen de los expertos Ingenieros Eric Prado Vélez y José López Toledo, sobre que la finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, citada, no puede estar comprendida dentro de los límites que marca la escritura ante el Notario Arroyave Paniagua, pues según los linderos expresados en ese instrumento, comprende una parte de aquélla, pudiendo localizarse como la fracción o lote número dieciséis, según el plano general de la lotificación; d) Posiciones absueltas por don Mau-

ricio Figueroa García, conteniendo la confesión de los siguientes hechos: que sí reconoce como suya la firma puesta en el escrito en que propone algunos puntos para que dictaminen los expertos; que es cierto que compró el lote número veintisiete de la fracción tercera de "La Quinta" de Samayoa; que es cierto que cuando se advirtió el error en que se incurrió al citar el número de la totalidad de la finca de donde se desmembró ese lote, compareció ante el Notario autorizante de la escritura para hacer la correspondiente rectificación; que no es cierto que haya comprado el referido lote número dieciséis ante el Notario Arroyave Paniagua; que no es cierto que se haya negado a hacer la rectificación del error cometido en la escritura ante el Notario Arroyave Paniagua, de que se trata, y que haya pedido tres mil quetzales, para hacerlo; que no es cierto que pretenda haber adquirido la finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta o sea la parcela número cuatro de "La Quinta" en vez del lote número dieciséis, que es una parte de aquella; que es cierto que encargó al Ingeniero Manuel F. Zúñiga que levantara el plano de los lotes que adquirió en "La Quinta" o sean el número veintisiete de la fracción tercera y el número dieciséis de la parcela número cuatro; que no es cierto que al presentar al Registro las escrituras de esos dos lotes, haya adjuntado los planos correspondientes; y que sí firmó la escritura ante el Notario Arroyave Paniagua. Anteriormente y dentro del término de prueba del primer juicio, propuso las siguientes: a) Testimonios de las escrituras de desmembración de las fincas números, cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, y cuarenta y cuatro mil ochocientos once, y del poder otorgado por Samayoa Roldán a la señora Zoila Samayoa Roldán de Alvarez; b) Certificación del Registro de la Propiedad Inmueble relativa a las inscripciones vigentes en la finca sobre que versa el juicio; testimonio de la escritura cuya nulidad se demandó; y el plano general de la lotificación "La Quinta", autorizado por el Ingeniero Martín Prado Vélez. El señor Figueroa García, presentó por su parte las siguientes pruebas: a) Posiciones articuladas a don Arturo Samayoa Roldán, de las cuales aparece la confesión de los siguientes hechos: que es cierto que celebró con Emilia H. de Castro, un contrato sobre compra del lote número dieciséis, de la parcela número cuatro de "La Quinta" pero no autorizó a dicha señora para ceder los derechos en el referido lote, porque en el contrato dice que esa autorización debía ser por escrito y no ha dado esa autorización; que es

cierto que recibió de la citada señora el valor del lote; que no recibió aviso de Amadeo Castro Muñoz de la cesión que hizo a Figueroa García de los derechos que tenía sobre dicho lote; que es cierto que los linderos de la finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta no son los mismos que en el plano corresponden al lote dieciséis, porque éste no tiene calle de por medio sino sólo en uno de sus rumbos y su extensión es de doscientos cincuenta metros; que se dedica a la compra y venta de inmuebles y a lotificar los terrenos que compra; que el lote dieciséis es parte de la finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y no forma parte de "La Quinta" de Samayoa; que no es cierto que esté en posesión de la finca que le vendió a Figueroa García ante el Notario Arroyave Paniagua, porque en dicha escritura se dice claramente que se le vende el lote número dieciséis de la fracción cuarta, del cual se le dió posesión; b) testimonio de la escritura autorizada por el Notario Arroyave Paniagua, cuya nulidad se demandó; y c) Nuevas posiciones articuladas a Samayoa Roldán, con las que se establecen los siguientes hechos: que Alfonso Montúfar, Guillermo Castro e "Y. Rivas", son empleados del absolvente autorizados a firmar las libranzas pagadas por Emilia H. de Castro, por el valor del lote número dieciséis de la fracción cuarta.

RESULTA:

Con esos antecedentes, el Juez Séptimo de Primera Instancia de este departamento, dictó su sentencia el diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, en la cual resolvió; "a) Con lugar la demanda ordinaria presentada por Arturo Samayoa Roldán contra Mauricio Figueroa García y en consecuencia, se declara la nulidad de la escritura pública número cuatrocientos ochenta y cinco (485), autorizada en esta ciudad por el Notario don Horacio Arroyave Paniagua, el día nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve; b) se declara nula la segunda inscripción de dominio de la finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta (45,150), folio doscientos veinticuatro, del libro trescientos sesenta y cuatro de Guatemala, como consecuencia del punto anterior; c) se declaran sin lugar las excepciones de falta de derecho y falta de acción en el actor, interpuestas por Figueroa García; d) sin lugar la demanda instaurada por Mauricio Figueroa García contra Arturo Samayoa Roldán, por falta de prueba y de consecuencia absuelve de la presente acción al demandado; e) con lugar la demanda recon-

vencional presentada por el apoderado de Arturo Samayoa Roldán contra Mauricio Figueroa García y en consecuencia declara: 1o.) que la compra hecha por el señor Figueroa García a que se refiere la escritura pública autorizada por el Notario Horacio Arroyave Paniagua, el nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, se contrae al lote número dieciséis (16) de la fracción (4a.) de la lotificación "La Quinta" y deberá desmembrarse con una extensión de doscientos cincuenta metros cuadrados, de la finca inscrita en el Registro General de la República, con el número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, folio doscientos veinticuatro (224), del libro trescientos sesenta y cuatro de Guatemala; 2o.) Que en consecuencia debe otorgarse en nueva escritura el título de propiedad correspondiente, identificándose el lote comprado con las siguientes colindancias y dimensiones: Norte, veinticinco metros, con el lote número quince; Sur, la misma dimensión, con el lote número diecisiete; Oriente, diez metros, con el lote catorce; y Poniente, la misma dimensión, con la primera avenida de la lotificación "La Quinta"; f) con lugar las excepciones de falta de derecho y falta de acción en el demandante interpuestas por Arturo Samayoa Roldán; g) sin lugar las excepciones de contrato perfecto, falta de acción y falta de derecho, interpuestas por Figueroa García a la demanda reconvenional de Samayoa Roldán; h) al estar firme este fallo, librese despacho al Registro General de la Propiedad Inmueble, para el efecto de la cancelación de la segunda inscripción de dominio de la finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta (45.150), folios doscientos veinticuatro, del libro trescientos sesenta y cuatro de Guatemala; i) así mismo, al estar firme el fallo, librese despacho al Registro indicado anteriormente para el efecto de levantar la anotación que con motivo de este juicio pesa sobre la finca referida en el punto anterior; j) Se condena en las costas de los juicios acumulados aludidos a Mauricio Figueroa García". En apelación conoció del anterior falló la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, la que dictó su sentencia en la fecha indicada al principio, haciendo los siguientes pronunciamientos: "Confirma el fallo recurrido en todas las declaraciones contenidas en los párrafos b), c), d), e), f), g), h), i), de su parte resolutive, y lo REVOCA en lo declarado en el párrafo a) de la misma parte resolutive, y resolviendo en ley sobre el mismo, declara: absuelto de la demanda de nulidad de escritura pública intentada contra él por el señor Arturo Samayoa Roldán, al señor Mauricio Figueroa García, por falta de prueba",

Interpuestos los recursos de aclaración y ampliación de esta sentencia, fue declarado sin lugar el primero y procedente el segundo, en el sentido de que se confirmaba el punto j) de la sentencia de primera instancia, que condena en las costas de los juicios acumulados a Mauricio Figueroa García.

RESULTA:

Contra este último fallo, don Mauricio Figueroa García auxiliado por el Abogado Fabián Salvador Ymeri, interpuso recurso extraordinario de casación, fundándolo en los incisos 1o., 3o. y 4o. del Artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, citando como leyes violadas los artículos: 42 de la Constitución de la República; 423, 11 y 418 inciso 3o. del Código Penal; 282, 303, 374, 384, 340, 364, 362, 259, 232, 156, 157 incisos 1o. y 2o., 158 incisos 1o., 2o., y 3o., 159, 435 y 439 del Decreto Legislativo 2009; 388, 396, 393, 1076 y 2431 del Código Civil. El recurrente expresa que interpone su recurso, por los siguientes motivos legales: "por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley; por error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas que rindió en los juicios acumulados, resultante de documentos y actos auténticos que demuestran evidentemente la equivocación del Tribunal sentenciador, por contener el fallo resoluciones contradictorias, ya que la aclaración fue denegada", agregando "que aunque el artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, no exige, como sí lo previenen las casaciones en el orden criminal, que se indique en esta clase de recursos civiles, en qué consiste el error de hecho o de derecho a juicio del recurrente, yo me permito alegar tales circunstancias, sin perjuicio de cumplir con señalar los documentos o actuaciones donde consta la equivocación del Tribunal juzgador". En efecto, a continuación menciona como actuaciones donde constan los hechos que no tomó en cuenta la Sala y que dieron origen al error o errores del Tribunal de la sentencia" así: "a) Acta de absolución de posiciones de Arturo Samayoa Roldán, la cual —dice— contiene contradicciones palmarias que demuestran la mala fe de este litigante y contratante y son suficientes para no creer sus afirmaciones; que además confesó Samayoa que los linderos señalados a la finca vendida por él al que habla, no son los indicados en la escritura de venta ante el Notario Arroyave, cuya prueba el Tribunal la pasa por alto cometiendo craso error al hacerlo así; que con la misma diligencia, se prueba que Samayoa es experto e idóneo en transacciones de compra y venta de bienes inmuebles y en

lotificaciones, de manera que no puede alegar ignorancia en su oficio o profesión, sin embargo la Sala no apreció este punto importante de la prueba para darme justicia, deduciéndose de ello grave error del Tribunal; que la pregunta novena prueba que la finca Samayoa la dividió su dueño en varias fincas, entre ellas la número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, con lo que se establece que dicha finca podía como pudo vendérmela, ya que está inscrita en el Registro de Inmuebles. Yerra el Tribunal al no tomar en cuenta esta prueba". b) Acta de inspección ocular (en los libros del Registro General). "En un plano no auténtico se identificó el lote No. 16, sin inscripción de número, folio, ni libro, que es como se identifican legalmente los inmuebles. Pero se establece que la finca No. 45150 está vendida por Samayoa Roldán a mi favor; consta en esa acta que los límites de la finca que me vendió Samayoa son los que afirmo en mi demanda, con lo que está probado plenamente este punto de mi referida demanda, pero el Tribunal no toma en cuenta estas pruebas; todas a mi favor, con lo que comete error de hecho y a la vez de derecho por no hacer aplicación de los preceptos de la prueba; que en esa acta también confiesa Samayoa que está en posesión de una parte de la finca y que ha desmembrado varios lotes, con lo que se establece que no estoy en posesión y que se me debe dar y que lo vendido a mi es una pequeña parte, es decir el resto que queda; que en la misma acta aparece —por confesión mía— que tanto del lote No. 16 que adquirí del señor Amadeo Castro Muñoz, como de otro que con anterioridad había comprado al mismo Samayoa, mandé levantar planos, esto es cierto y no puede perjudicar. Pero la Sala toma tal confesión —que está fuera del juicio— como confesión que me perjudica en el sentido de que lo comprado por mí a Samayoa es el susodicho lote No. 16 y no la finca 45150; esta manera de apreciar el caso constituye una herejía jurídica, o, para suavizar las estimaciones, un craso error. Que acudí cierta vez a rectificar los términos de una escritura, entre Samayoa y el que habla, sólo demuestra mi buena fe y mi honradez". c) "La cesión que hizo la señora Emilia H. de Castro, a favor de Amadeo Castro Muñoz y la que este último le hizo al recurrente, constan que le fueron notificadas en cartas auténticas a Samayoa Roldán y sin embargo éste niega estas circunstancias en las posiciones que absolvió. Estos hechos son evidentes y no tiene excusa la Sala, al no tomarlos en cuenta, o equivocarlos o confundirlos, con el fin demostrado de no perjudicar los intereses de Samayoa, el millonario industrial y comerciante

afortunado". d) Acta de nuevas posiciones abueñas por Samayoa Roldán, en la cual reconoció que sus empleados firmaron las libranzas aceptadas por doña Emilia H. de Castro, como valor del lote número dieciséis, y confiesa su venta a dicha señora y que recibió su valor, por lo que dice el recurrente, no podía hacerle a él una doble venta; que esta prueba es plena contra Samayoa Roldán y la Sala no la vió. e) que con el testimonio de la escritura de compraventa de la finca cuarenta y cinco mil ciento cincuenta autorizada por el Notario Horacio Arroyave Paniagua, cuya interpretación demandó reconventionalmente Samayoa y que él demandó que se declararan sus límites verdaderos, dice el recurrente, prueba plenamente que tiene por límites los que especificó en su demanda, según la certificación del Registro General y con la inspección ocular practicada en el mismo Registro, por lo que al menospreciar esa certificación, la Sala tornó a incidir en error, no obstante ser una prueba completa. f) Por último agrega que tampoco al dictamen de los expertos le dió la Sala sentenciadora su valor legal, por lo que incurrió en error de hecho, al no aceptar que la conocida parcela número dieciséis forma parte integrante de la finca que le vendió el señor Samayoa Roldán; que también demuestra el dictamen que los linderos de la finca vendida, no son los consignados en la escritura de venta sino otros que también probó con las confesiones del vendedor, con las inspecciones oculares y con los documentos que ya detalló anteriormente. Después expresa: "Consiste, a mi juicio, el error de derecho, para los efectos de este recurso, en que a mi prueba no se le dió el valor que le asigna la ley. En efecto, estableciendo el art. 282 del Dto. Leg. No. 2009, que los documentos auténticos prueban plenamente, el Tribunal pasó sobre esa prescripción y proscribió mi prueba, con la que demuestro la verdad de mi acción, es decir, la certificación auténtica del Registro General de fecha 9 de noviembre de 1949". Que en el mismo caso se encuentran las cartas autenticadas de Emilia H. de Castro comunicándole a Samayoa la cesión que hizo de sus derechos a favor de Amadeo Castro Muñoz y la de éste a Samayoa Roldán, haciéndole saber la cesión a favor del recurrente, las cuales prueban plenamente que existe error de derecho al menospreciar el valor que tienen las pruebas que acredita el acta de absolución de posiciones de fecha treinta de octubre de mil novecientos cincuenta y uno y quince de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, porque no estima la Sala sentenciadora el valor de las confesiones, que prueban a favor de sus

acciones y excepciones; que existe error de derecho al no aplicar debidamente el valor que justifica el acta probatoria de inspección ocular de fecha veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno, que acredita hechos observados personalmente por el Juez; que la escritura de compraventa otorgada ante el Notario Horacio Arroyave Paniagua, por la que Arturo Samayoa Roldán le vendió la finca número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta, demuestra que los linderos de la finca vendida no son los que trae el instrumento; que son otros, lo demuestra la certificación auténtica del Registro General, por lo que cometió error de derecho la Sala sentenciadora al no hacer aplicación del valor probatorio que la ley asigna a los documentos auténticos; que hay también error de derecho, en condenarse al recurrente en las costas de los juicios, sin que en el Por Tanto del fallo, se le haya declarado litigante temerario. Estando concluido el trámite de este recurso, se entra a resolverlo así:

—I—

CONSIDERANDO:

Entre los casos de procedencia que fundamentan el presente recurso, se cita el comprendido en el inciso 3o. del Artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que se refiere a los errores de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas; de manera que debe examinarse en primer término este aspecto, por razón de lógica jurídica. Ahora bien, aunque es cierto, que en forma concreta la ley que trata el recurso de casación en materia civil, no señala expresamente como requisito para ser admitido, que se haga la indicación de cuál es el error atribuido, en qué consiste éste, a juicio del recurrente, y qué pruebas lo contienen, sí es indispensable hacerlo, para colocar al Tribunal en la posibilidad de verificar el estudio comparativo de rigor, toda vez que la naturaleza restringida del recurso, no permite hacer un estudio generalizado de las pruebas aportadas y menos interpretar la intención del recurrente, porque ésto significaría convertirlo en una tercera instancia que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, como reiteradamente se ha indicado en anteriores fallos. Al emprender el estudio de las complejas tesis sostenidas por el recurrente, con cada una de las pruebas que menciona en relación a las cuales atribuye a la Sala

error de hecho en su apreciación, se advierte que no indica en qué consiste tal error, sino se concreta a determinar los hechos que en su concepto resultan probados y más bien trata de situar su examen en la valoración de las pruebas, lo que no constituye el citado error, máxime que en el fallo impugnado consta que se analizaron todas y cada una de las pruebas señaladas por el interponente, sin que de ellas aparezca en forma ostensible la equivocación del Tribunal sentenciador. En cuanto al error de derecho, que se hace consistir en que no se dió el valor que la ley asigna a las pruebas del recurrente, también se incurrió en las mismas omisiones que en el caso anterior, de no indicar cuál es —a juicio del recurrente— la equivocación de la Sala, en la apreciación de las pruebas enumeradas, puesto que a la certificación del Registro General y al testimonio de la escritura autorizada por el Notario Horacio Arroyave Paniagua, sí les reconoció el valor de documentos auténtico y público que les asigna la ley, asimismo a las posiciones absueltas por Samayoa Roldán, a la inspección ocular verificada en los libros del Registro General, al dictamen de los expertos nombrados y cartas autenticadas, también les dió el valor probatorio que les reconoce la ley, estimándolas en conjunto, por no ser legal, hacerlo en forma aislada, para determinar los hechos que dió por probados, por lo que, repitiendo, se hacía necesario concretar el error atribuido a esos medios de prueba. Las omisiones señaladas incurridas en la interposición del recurso, determinan su ineficacia en los dos aspectos estudiados, porque impiden hacer el estudio analítico necesario y en consecuencia, no se puede establecer si la Sala incurrió en alguna infracción de los artículos 259, 282, 303, 340, 362, 364, 374 y 384 del Decreto Legislativo 2009, que son los que regulan la estimativa de la prueba.

—II—

CONSIDERANDO:

Al denunciarse como error de derecho en la apreciación de la prueba la condena del recurrente en las costas de los juicios debatidos, también se incidió en falta de técnica en la interposición del recurso, porque la resolución de tal capítulo, no es materia de apreciación de prueba, sino entraña un punto de derecho, regulado en la ley que sólo podría dar oportunidad a examinarse por

otro motivo distinto al invocado; por lo que tampoco se puede hacer el estudio analítico de los artículos 156, 157 incisos 1o. y 2o., 158 incisos 1o., 2o. y 3o. y 159 del Decreto Legislativo 2009, citados con este motivo.

—III—

CONSIDERANDO:

Para determinar si hubo violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, deben servir de base los hechos que la Sala declaró probados en su fallo, y, al hacer el análisis comparativo entre éstos y las leyes citadas como infringidas, se viene en conocimiento, en lo que se refiere al artículo 42 de la Constitución vigente cuando se interpuso el recurso, que no existe en ninguno de los hechos admitidos, nada que indique limitación en la persona ni en los derechos del recurrente en su defensa en estos juicios, ni puede constituir limitación el que no se haya fallado de acuerdo con sus pretensiones, en lo concerniente a los artículos 11, 423 y 418 inciso 3o. del Código Penal, no contiene el fallo impugnado, ninguna resolución que pueda relacionarse con las prescripciones de esas leyes porque la primera define lo que es delito y los dos últimos se refieren a una modalidad del delito de estafa y a la pena imponible, respectivamente, por lo que son inaplicables al caso. De acuerdo con las pruebas analizadas, el fallo contiene la declaración expresa de hasta dónde alcanzan los derechos de propiedad del recurrente y niega la reivindicación de lo que estima no le pertenece, de consiguiente no pudo incurrirse en violación de los artículos 388 y 396 del Código Civil, que definen el derecho de propiedad y el de reivindicación de la cosa del propietario, y menos del 393 del mismo cuerpo de leyes, que establece la obligación de los propietarios de fijar los límites con los predios contiguos; tampoco contiene aquel fallo ninguna declaración que contrarie los fines de la institución del Registro de la Propiedad, determinados en el artículo 1076 del mismo Código; y en lo que respecta a la interpretación de la escritura autorizada por el Notario Arroyave Paniagua, debe tenerse presente que para decidir en la forma que lo hizo el Tribunal de segundo grado, tomó en consideración no sólo el sentido de tal instrumento sino las otras pruebas aportadas y de acuerdo con esa estimativa, resolvió atendiendo precisamente las prescripciones del artículo 2431

del repetido Código; por consiguiente, no pudieron ser infringidas estas leyes en el fallo recurrido.

—IV—

CONSIDERANDO:

En lo que hace al último caso de procedencia de los invocados, que se refiere a "Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido denegada", debe indicarse, que el recurrente no señala cuáles son las resoluciones contradictorias que contiene el fallo impugnado, ni citó ninguna ley como infringida en relación con este motivo, por lo que faltan los elementos de enlace necesarios para el estudio de esta fase del recurso.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo considerado y con los artículos 224, 227, 233, 234 Decreto Gubernativo 1862; 27, 505, 506, 512, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el presente recurso de casación, condenando al interponente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia conmutará con diez días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel suplido y en la forma correspondiente devuélvase los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguillar Fuentes.

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — Alberto Herrarte. — Carlos Arias Ariza. — Man. de León Cardona. — Ante mí, Juan Fernández C. —

—O—

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, seis de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por ser manifiestamente improcedentes los recursos de aclaración y ampliación en la forma interpuesta, toda vez que el presentado Mauricio Figueroa García, no expresa razón o motivo que justifique su admisibilidad, se rechazan de plano sin más trámite. Artículos 455, 456 Decreto Legislativo 2009 y 91 inciso 4o. del Decreto Gubernativo 1862.

Carbonell R. — Aguilar Fuentes. — Herrarte. — Arias Ariza. — Alvarez Lobos. — Juan Fernández C. —

CIVIL

ORDINARIO seguido por Ernesto Girón y Girón contra Arcadio Girón y Girón. (Propiedad y posesión).

DOCTRINA: Para que el Tribunal de Casación pueda hacer el análisis que la naturaleza de este recurso impone, es necesario que, además de identificar sin lugar a dudas, la resolución impugnada y citar las leyes que estima infringidas, el recurrente diga concretamente en qué inciso o incisos del artículo respectivo está el caso de procedencia que le sirve de apoyo, especificando si las disposiciones citadas son Gubernativas o Legislativas, pues no puede supirse lo que las partes omiten.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, ocho de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el doce de Agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, en el juicio ordinario de propiedad y posesión que Arcadio Girón y Girón siguió contra Ernesto de sus apellidos, de cuyos antecedentes,

RESULTA:

Que el dos de Septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, Arcadio Girón y Girón se presentó al Juzgado de Primera Instancia departamental de El Quiché, demandando de Ernesto Girón y Girón, la propiedad y posesión de la casa y sitio ubicados en San Pedro Jocopilas, de aquella jurisdicción, inmueble que se compone de mil ochocientos ochenta y seis metros cuadrados, que lindan: al Oriente, con la plaza pública; al Poniente, con Ignacio Barrios; al Norte, con Margarito Natreno, calles de por medio en estos tres rumbos; y, al Sur con Ignacio Barrios, línea de por medio; propiedad que asegura tener declarada en matrícula fiscal número cinco mil ciento treinta y tres, (5133) pero sin título registrable y que su demandado está ocupando sin tener título ni derecho que lo justifique. Ofreció los medios de prueba que estimó convenientes y terminó pidiendo que corridos los trámites legales se declarara que como dueño le correspondía la posesión de la finca demandada, debiendo entregársele dentro de tercero día y que su demandado debía pagarle las costas, daños y perjuicios ocasionados.

Acompañó testimonio de la escritura autorizada por el Notario Abel Virgilio Montúfar, en la ciudad de El Quiché, el veintiocho de Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, por la cual consta que Juan Bautista Girón Blanco, por el precio de doscientos quetzales, le vendió el inmueble detallado, y certificación extendida por la Sección de Matrícula Fiscal de la Dirección General de Rentas.

RESULTA:

Ernesto Girón y Girón al contestar negativamente, reconvino el pago de todos los gastos que había hecho en la casa objeto de la demanda e interpuso excepción de prescripción positiva, gestión que fué tramitada como se pidió.

RESULTA:

Que contestada negativamente la reconvencción e interpuestas las excepciones de falta de derecho para reconvenir y cosa juzgada, se abrió a prueba el juicio doble que resultó, y durante esa dilación se presentaron las siguientes: por parte de Arcadio Girón y Girón, declaraciones de los señores Gregorio, Esperanza y Antolina Méndez Gil y Jacinta Ruiz López, quienes fueron repreguntados por la parte contraria, para demostrar que el demandado había cultivado por el término de seis años el sitio objeto del litigio, con maíz, frijol, haba y ayote; que la casa ocupada por Ernesto Girón y Girón es del demandante porque éste la compró a su padre Juan Bautista Girón Blanco, y consiste en el inmueble descrito en la demanda; certificación de las sentencias de primera y segunda instancias, dictadas en el juicio de oposición a las diligencias de titulación supletoria seguidas por Arcadio Girón y Girón, por la cual se prueba que éste fué absuelto en el juicio respectivo; testimonios de las escrituras autorizadas por el Notario Abel Virgilio Montúfar para demostrar cuándo y por qué obtuvo el inmueble disputado el vendedor del demandante y la forma y fecha en que éste lo obtuvo para sí; certificaciones del Registro Civil y del Encargado del ramo de licores en San Pedro Jocopilas, para demostrar que Natividad de León es casada con el demandado y por tener una cantina en la casa motivo del juicio hubo que hacer arreglos en ella; certificación acompañada a la demanda y ratificación de la contestación dada por el demandado al reconvenir.

Por parte de Ernesto Girón y Girón se presentaron: declaraciones de Epilonio Girón Me-

za, Ignacio Barrios Recinos, Virgilio Alecio Barrios, Mateo Pérez, Miguel Calel y Juan Mejía Acabal, para demostrar que el propo- nente había comprado, en contrato verbal con su padre Juan Girón Blanco, la casa objeto del litigio, en la suma de trescientos quetza- les y que le había hecho muchas mejoras, ha- biendo estado primeramente como ocupante de la casa por razón familiar, pero después en posesión, y que no había tenido molestias a excepción de una demanda de desahucio que le entabló su padre, Juan Girón Blanco, y es- te juicio, asegurando en un principio los que sobre esto declararon que era cierto lo de los juicios y después que nada sabían de ello; inspección ocular para establecer las condi- ciones en que tenía la casa en cuestión; ex- pertaje para valuar los trabajos, en setecientos veintitrés quetzales y ochenta centavos; certificación de las confesiones prestadas por los que le trabajaron en la propiedad sujeta a juicio; certificación de documentos relativos a los gastos hechos en la casa de mérito y certificaciones de las diligencias que la Mu- nicipalidad del lugar practicó con motivo de la titulación iniciada por Arcadio Girón y Gi- rón, en las que se dice que quien ha tenido la casa referida, es Ernesto y no Arcadio Gi- rón y Girón.

Con tales antecedentes, el Tribunal de Pri- mer Grado dictó sentencia, declarando absuel- to a Ernesto Girón y Girón, en cuanto a la acción de propiedad entablada, así como en lo que se refiere al pago de daños, perjuicios y costas del juicio; que el derecho de posesión del mismo inmueble, corresponde al deman- dante Arcadio Girón y Girón y debe dársele dentro de tercero día; que es procedente la excepción de falta de derecho para reconven- nir interpuesta por el demandante y por con- siguiente se le absuelve de la reconvención y sin lugar las excepciones de prescripción po- sitiva y cosa juzgada interpuestas.

RESULTA:

Que al conocer la Sala Segunda de la Cor- te de Apelaciones, por recurso que se inter- puso contra el fallo de primer grado, lo con- firmó en todas sus partes, fundándose para ello en que el medio de probar la propiedad de un inmueble, es la inscripción en el Regis- tro y no teniéndola el documento presentado, debe absolverse sobre ese punto, pero en lo que se refiere a la posesión el título presenta- do se estima suficiente, "...y estando pro- bada la identidad del inmueble que motiva la litis, robustecida por las demás pruebas pre- sentadas, consistentes en la inscripción ocu-

lar practicada, declaraciones de los testigos que se detallan, y certificaciones acompaña- das, la declaración que se hace en el fallo, es legal y debe sostenerse". Que por faltar el justo título para la adquisición del inmue- ble cuestionado, por parte de Ernesto Girón y Girón, su excepción de prescripción, no pue- de aceptarse y no teniendo la posesión los requisitos necesarios, la absolución del recon- venido es procedente e innecesario entrar a considerar la excepción de cosa juzgada, por ser inoperante.

RESULTA:

El siete de Septiembre del año próximo pa- sado, con auxilio del Abogado Francisco Mar- doqueo Rodas, Ernesto Girón y Girón se pre- sentó ante esta Corte manifestando: después de hacer una relación sucinta del juicio, que interpone recurso de casación contra la sen- tencia dictada por la Sala Segunda de la Cor- te de Apelaciones, con fecha doce de Agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, "...en virtud de que en esta sentencia se incurrió en aplicación indebida e interpretación erró- nea de la ley, y porque en la apreciación de las pruebas hubo error de derecho y de he- cho, pues para nada tuvo en cuenta el juzga- dor de que yo estoy en posesión quieta, pú- blica y pacífica de la propiedad". "Además, hay incongruencia en el citado fallo pues a mí se me absuelve de la demanda de propiedad lo que quiere decir que soy el propietario de la casa y al señor Arcadio Girón y Girón se le da, la posesión, lo cual no puede ser ya que el propietario conforme a lo dispuesto por el artículo 389 del Código Civil tiene derecho también a la posesión".

Al citar las leyes respectivas dice: "Se han infringido y violado los artículos 387, 388, 389, 397, 480, 483, 396, inciso 4o. y 6o. del Ar- tículo 493 del Código Civil 370, 372, 373 y 386, Decreto 2009, 227, 232, Decreto 1862". Y pi- diendo que se case y anule la sentencia, pa- ra que se le absuelva de la demanda entabla- da, después de punto y aparte, escribe: "Artos. 505, 506, 513, 511. Decreto 2009."

En su alegato el recurrente arguye que la sentencia es contradictoria porque deja a su demandante la posesión, no obstante que a él lo absuelve de la demanda de propiedad, lo que quiere decir que aquél no es el pro- pietario y como el que tiene la posesión le corresponde reivindicarla, no puede ser que uno tenga ésta y otro la propiedad; que por haber probado tener la posesión y sin embar- go mandar la sentencia que se le entregue a su demandante se han violado los artículos

que citó como infringidos; que los artículos 483, 1402, 1403 del Código Civil y 1096 (no dice de qué cuerpo legal) expresan que no produce efectos jurídicos la posesión de la propiedad que no puede adquirirse y como no se le dió ésta al demandante, no puede tampoco tener la posesión; como debe hacerse la traslación de inmuebles y que en ningún Tribunal ni oficina se admitirán escrituras ni documentos sujetos a inscripción que no hubieren sido razonados por el Registrador.

Agotados los trámites correspondientes es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El recurrente dice que interpone su recurso por aplicación indebida e interpretación errónea de la ley y porque en la apreciación de las pruebas hubo error de derecho y de hecho, pero no señala con exactitud y propiedad, como lo exige la técnica de este recurso, el inciso o incisos del artículo respectivo que contenga el caso de procedencia, pues si bien cita algunos artículos del Decreto 2009, no dice a qué órgano legislativo corresponde éste, ni señala los incisos referidos. Aparte de lo dicho, tampoco determina cuáles son las pruebas en que se ha cometido error de derecho y cuáles las en que se ha incurrido en error de hecho, por cuyas razones esta Corte no puede entrar al análisis comparativo que en caso de haberse cumplido con la ley debería hacerse. Artículo 512 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo número 2009.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224, 233 del Decreto Gubernativo número 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo número 2009, DESESTIMA el presente recurso, condena en las costas del mismo al recurrente y le impone la multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia conmutará con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel y como corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C. —

CIVIL

ORDINARIO seguido por Domingo Estrada contra la mortual de Antonino Estrada.

DOCTRINA: Para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento substancial del procedimiento, es preciso haber pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió, no siendo valedera la excusa de que se tuvo imposibilidad de hacerlo para el representante de una mortual que ha intervenido hasta en segunda instancia, si tal intervención se efectuó antes de señalarse día para la vista y aquel promovió otras gestiones relativas al juicio.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, ocho de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia proferida por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, con fecha veintiuno de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, en el juicio ordinario seguido por Domingo Estrada contra la mortual de Antonino Estrada, representada por el interventor J. Gerardo Muñiz Bethancourth.

RESULTA:

El veintidós de Julio de mil novecientos cincuenta y dos, ante el Juzgado de Primera Instancia departamental de Baja Verapaz, compareció Domingo Estrada, exponiendo: que como lo demostraba con la certificación del Registro de Inmuebles adjunta, era legítimo propietario de la finca rústica número ciento veintiuno, folio ciento veintiocho, libro veintidós de Alta Verapaz, consistente en un terreno de una caballería, situado en Tactic y dentro de las colindancias que constan en el documento acompañado; que hacía más de treinta años que su hermano Antonino Estrada se había posesionado de ese inmueble, explotándolo en toda forma como propio; que por tal motivo le demandaba la propiedad, posesión, reivindicación y entrega de dicha finca, así como el pago de las rentas que hubiera dejado de percibir y los daños y perjuicios que le ha causado.

Al notificarse al demandado, éste pidió la ratificación del escrito inicial por parte del actor, contestó negativamente la demanda e interpuso la excepción perentoria de prescripción negativa de la acción. A su vez el actor pidió que el demandado ratificara la

contestación de la demanda, y como no compareció a hacerlo se tuvo por ratificada.

A continuación al actor citó a confesión judicial al demandado, y al contestar al interrogatorio presentado, expuso: que no era cierto que él estuviera posesionado del terreno de su hermano denominado "Canchul", situado en Pasmolón, del municipio de Tactic, Alta Verapaz, pues el interrogado vivía en lo que era suyo; que nunca le ha reconocido derechos a su hermano en dicho terreno y que tiene cuarenta años de poseerlo; que a su hermano Domingo le ha permitido sembrar milpa en el terreno por cariño; que él se considera dueño del terreno porque lo compró y que allí siembra y tiene sus animalitos; y que su hermano Domingo es dueño del terreno donde también siembra; que la posesión con su referido hermano la han disfrutado simultáneamente, y que a éste no le ha dado ni un centavo por repastaje y arrendamiento porque el terreno lo compró el declarante.

RESULTA:

Abierto el juicio a prueba, se rindieron las siguientes: por parte del demandante: a) certificación del Registro acompañada a la demanda; b) testimonio de la escritura de compra-venta del terreno pretendido, otorgada por José María Arriola a su favor; c) declaraciones de David Sandoval Pacay, José Guillermo Castro Chavarría y Alfonso Valey, quienes en concreto expusieron: que conocen el terreno denominado "Canchul", identificándolo con sus colindancias y aproximadamente de una caballería, y que la mayor parte del mismo está poseído por Antonino Estrada y la otra parte por el actor, que es en donde siembra todos los años y repasta ganado, teniendo su casa de habitación por el lado oriente del mismo; que dicha casa fue desbaratada por su hermano Antonino un mes antes y que en ella había vivido el actor hasta como tres años anteriores a la fecha en que declaran; que en el mismo terreno está la casa de habitación de Antonino; d) inspección ocular practicada por el Juez menor de Tactic en el terreno, habiéndose constatado que el inmueble que figura en la escritura de dominio a favor de Domingo Estrada, está poseído en su mayor parte por Antonino Estrada, apreciándose los restos de la casa en que tenía su vivienda el primero. Por parte del demandado: a) confesión del actor sin resultado positivo para el articulante; y b) examen de los testigos José Flores, Eleodoro García, Santiago Mendoza, Abel Sandoval Dubón y Ramón Sanabria Gularte, quienes en

resumen declaran constarles nada más que desde hace como cuarenta años, Antonio Estrada posee como dueño el terreno disputado, sin dar razón de lo relativo a sus títulos de dominio ni de la forma de adquisición.

RESULTA:

Al dictar su sentencia, el Juez de Primera Instancia declara: "Primero: que Domingo Estrada es propietario de la finca rústica número ciento veintiuno, folio ciento veintiocho de Alta Verapaz; Segundo: que en consecuencia, don Antonino Estrada, debe entregarle al citado don Domingo del mismo apellido la mencionada finca dentro de tercero día; Tercero: que consecutivamente debe ponerse a nombre del propietario don Domingo Estrada la matrícula de la misma finca en los Catastros de la Dirección General de Rentas; Cuarto: que don Antonino Estrada debe pagar dentro del mismo término al propietario, los usufructos de la finca de mérito, calculados a juicio de expertos; Quinto: que se absuelve a don Antonino Estrada de la demanda en cuanto al pago de daños y perjuicios, por no haberse probado éstos; que es improcedente y por lo tanto se declara sin lugar la excepción negativa interpuesta por don Antonino Estrada; y Séptimo: que no hay especial condenación en costas".

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia y encontrándose el juicio en la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, compareció J. Gerardo Muñiz Bethancourth, apersonándose como interventor de la mortual del veintiuno de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres.

La Sala confirmó en todas sus partes la sentencia relacionada. Dicho Tribunal considera: "que tal como lo estima el Juez de Primera Instancia en la sentencia de estudio, el testimonio de escritura pública, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del demandante, constituye una plena prueba de su propiedad sobre el predio en disputa; que tal derecho de dominio necesariamente lleva implícitos los demás derechos derivados del mismo y expresamente reconocidos por nuestra legislación, tales como el de posesión, reivindicación, etc.; que la eficacia probatoria del mismo no fué enervada por el demandado, pues aunque éste quiso probar que el efectivo comprador del terreno había sido él y que el demandante no había servido más que de intermediario para efectuar ante el Notario el respectivo contrato de compraventa, tal extremo no llegó a evidenciarse en los autos, ya que, como

muy bien lo hace notar el Juez sentenciador, las operaciones que el actor confesó haber celebrado en nombre del demandado con los señores María Cantoral de Cardoza y Venancio Cardoza, no prueban nada concretamente en favor de la tesis sostenida por el demandado; que, en cambio, el demandante, por su parte, probó con la inspección ocular practicada en el terreno y los testimonios de los señores David Sandoval Pacay, José Guillermo Castro Chavarría y Alfonso Valey, los extremos de que su contraparte está poseyendo parcialmente el terreno que aquél tiene inscrito a su favor y que el mismo actor ha ejercido actos posesorios en parte del mismo inmueble....” “que como consecuencia de ello, también se ajusta a la ley lo declarado por el mismo Juez sobre la improcedencia de la excepción negativa interpuesta por la parte reo, ya que de las actuaciones no llegó a establecerse el fundamento de la misma....”.

Contra este pronunciamiento y con el auxilio del Abogado Angel Cuevas, J. Gerardo Muñiz Bethancourth, interventor de la mortal de Antonino Estrada, introdujo recurso de casación por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, por quebrantamiento substancial del procedimiento y por error de derecho en la apreciación de la prueba; cita como violados los artículos 92, 93 inciso 3o., 252, 261, 362, 364, 365 y 366 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil; 488, 1061, 1062, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1052, 1057, 1060, 1061, 1062 del Código Civil, Decreto 1932; 1404 Código Civil de 1877; y de interpretación indebida e interpretación errónea los artículos 368, 387, 388, 391, 398, 479, 482, 487, 488, 1076, 1093, 1114, 1123 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932. Como casos de procedencia señala los contenidos en los incisos 1o., 2o. y 3o. del Artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, relacionando también el inciso 3o. del artículo 507 del mismo cuerpo de leyes; y señala por último, al final de su escrito, los artículos 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518 y 519 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil.

Según se desprende de la exposición del recurrente, fué quebrantado substancialmente el procedimiento “porque no obstante haber fallecido el demandado el día 21 de Marzo del año pasado, 1953, se le hizo la notificación en que se le daba audiencia por seis días para HACER USO DEL RECURSO DE APELACION que había interpuesto contra la sentencia de primer grado en el juicio de mérito, el día diecisiete de Abril del mismo año, es decir, VEINTISIETE DIAS DESPUES

DE MUERTO; y cuando la susodicha mortal aún no había sido proveída de representante legal.... Y si no se pidió subsanar ese error en segunda instancia, fué porque hubo imposibilidad jurídica de pedirla, toda vez que yo entré al ejercicio de mi cargo con fecha posterior, acatando lo mandado en el auto de 23 de Septiembre de 1953, que me autoriza para gestionar a nombre de la mortal y cuya copia debidamente certificada me permito acompañar....”. Que también hubo error de derecho en la apreciación de la prueba rendida, “con especialidad en la CONFESION del demandante, en cuyo pliego que dó establecido en una forma que no deja lugar a duda que: como ya se dijo anteriormente, don Domingo Estrada compró la finca rústica (terreno denominado “PASMO-LON”), inscrito con el número 121, folio 128 del libro 21 de Alta Verapaz, como intermedio diario de su hermano don Antonino del mismo apellido, con dinero de éste y para éste; pero por circunstancias de enfermedad no pudo don Antonino presentarse a la Oficina del Notario, por lo que don Antonino encargó a su hermano don Domingo ACEPTARA en su nombre; y don Domingo aceptó la venta con la “pequeña diferencia” que lo hizo para sí... circunstancia ésta demostrada en el juicio con abundante prueba testimonial, además de la CONFESION del demandante y robustecida por el hecho real de que durante cerca de TREINTA AÑOS estuvo don Antonino Estrada en posesión quieta, pública, pacífica, continua y de buena fe de la finca que honradamente creyó siempre de su exclusiva propiedad... Todo esto aparece clara y categóricamente CONFESADO por don Domingo Estrada en el pliego de posiciones (CONFESION JUDICIAL) obrante en el juicio y constituye una prueba plena en su contra; pero no fué rectamente apreciada por la Sala sentenciadora, de donde se concluye que hubo error de derecho en la apreciación de tal probanza, que es reputada como la reina de las pruebas por los más eminentes tratadistas de derecho”. Que asimismo hubo violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, al declararse por la Sala sin lugar la excepción de prescripción negativa interpuesta, porque el demandante hizo uso de la acción treinta años después de haberse adquirido la propiedad y la prescripción se consuma por el transcurso de diez años, y que el artículo 488 del Código Civil (Dto. Leg. 1932) claramente dice: “Para que cese la posesión registrada de un inmueble que hubiese sido inscrito es necesario que se cancele la inscripción en el Registro de la

Propiedad. Mientras ésta subsista, la persona que se apodere de la cosa a que se refiere el título registrado, no adquiere la posesión de ella, ni pone fin a la posesión existente, SALVO QUE SE HAYA CONSUMADO LA PRESCRIPCIÓN, que es precisamente lo que sucede en el caso sub_litis.

—I—

CONSIDERANDO:

En relación con el primer caso de procedencia invocado, o sea el quebrantamiento substancial del procedimiento, el recurrente indica que se cometió en el trámite de segunda instancia, al notificarse al demandado la providencia de fecha veinticuatro de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres, señalándole término para que hiciera uso del recurso de apelación, el diecisiete de Abril siguiente, cuando aquel había ya fallecido y sin que la mortual estuviera aún representada.

De acuerdo con las diligencias, lo aseverado por el recurrente es correcto, pues aparece del asiento de la notificación mencionada que la misma se le hizo, mediante cédula entregada al señor Gregorio Nery Sandoval Caceros, en la fecha indicada, cuando el demandado había muerto el veintiuno de Marzo del propio año. Sin embargo, siendo que el artículo 510 del Decreto Legislativo 2009, expresamente condiciona la procedencia del recurso por este motivo a que se haya pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió, salvo que al cometerse en la segunda instancia hubiera imposibilidad de hacerlo, se ve que el interponente, en su carácter de interventor de la mortual, no cumplió oportunamente con solicitar la subsanación del vicio que impugna; y aunque alega como excusa haber tenido "imposibilidad jurídica" para pedirla, ello no es exacto, porque habiéndose presentado al Tribunal antes del señalamiento de día para la vista, promoviendo otras gestiones relativas al juicio, pudo haber advertido la falta que denuncia y consecuentemente pedir lo que estimara del caso. De consiguiente, dada la omisión en que el recurrente incurrió, es ineficaz el planteamiento por el motivo aludido.

—II—

CONSIDERANDO:

En cuanto al error de derecho de la apreciación de la prueba, concretamente el recurrente lo refiere a la confesión prestada

por el actor, arguyendo que no obstante con tener hechos admitidos por el confesante — esenciales en su beneficio para los efectos de la acción, según se traduce de su exposición de motivos— "no fué rectamente apreciada por la Sala sentenciadora".

Cabe observar al respecto que, dicho Tribunal, al efectuar la estimación valorativa de la confesión de mérito, expresamente dice: "como muy bien lo hace notar el Juez sentenciador, las operaciones que el actor confesó haber celebrado en nombre del demandado con los señores María Cantoral de Cardoza y Venancio Cardoza, no prueban nada, concretamente en favor de la tesis sostenida por el demandado"; lo cual significa que el rechazo de tal probanza se apoya en la consideración de que el actor no aceptó hechos determinantes de la acción en su contra, o sea que el inmueble disputado lo había adquirido por y para su hermano Antonino Estrada. Ahora bien, como tal apreciación de la Sala está ajustada a la realidad, pues ciertamente la confesión prestada por el actor sólo incluye actuaciones suyas que no llegan a demostrar con la evidencia necesaria aquel extremo medular que se discute, no se deduce el error de derecho que se le atribuye; sin estar de más agregar que el recurrente, al expresar las razones del sometimiento en cuanto a este punto, adjudica a la diligencia de confesión afirmaciones de parte del confesante que efectivamente no existen. De consiguiente no se violaron los artículos 252, 361, 362, 364, 365, 366, 92 y 93 inciso 3o. del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, citados con este motivo.

—III—

CONSIDERANDO:

Respecto al motivo de procedencia por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, que según el recurrente se advierte en el fallo al haberse declarado sin lugar la excepción de *prescripción negativa* que el demandado interpuso en su oportunidad, es preciso indicar que, la Sala declaró la improcedencia de la excepción de mérito porque "de las actuaciones no llegó a establecerse el fundamento de la misma", y como dicha conclusión es correcta ya que los hechos establecidos en manera alguna podía generar tal excepción, que jurídicamente es una de las formas de liberarse del cumplimiento de una obligación, no existe la infracción de los artículos 368, 387, 388, 391,

398, 479, 482, 487, 488, 1061, 1062, 1076, 1093, 1114 y 1123 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el presente recurso, condenando al recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales que, en caso de insolvencia, deberá conmutar con quince días de prisión simple. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R.— G. Aguilar Fuentes.— J. M. Moscoso E.— Alberto Herrarte.— J. A. Ruano Mejía.— Ante mí: Juan Fernández C.—

Contencioso-Administrativo

Lic. Edmundo Quiñónez Solórzano como apoderado de "Amado, Recinos y Cía. S.C.P.I. Central Añejadora Guatemalteca", contra resoluciones del Ministerio de Economía y Trabajo.

No puede prosperar el recurso de casación cuando se cita erróneamente el caso de procedencia, pues tal defecto impide efectuar el estudio comparativo que dicho recurso implica.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, once de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus antecedentes se examina el auto proferido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veinticinco de Noviembre del año próximo pasado, en el recurso de tal naturaleza interpuesto por el Licenciado Edmundo Quiñónez Solórzano, apoderado de "Amado, Recinos y Cía., S.C.P.I., Central Añejadora Guatemalteca", contra resoluciones del Ministerio de Economía y Trabajo de que más adelante se hará relación.

RESULTA:

Con fecha tres de Julio de mil novecientos cincuenta y tres, la Compañía antes aludida se presentó al Ministerio de Economía y Trabajo; exponiendo: que tenía establecida en Santa Lucía Cotzumalguapa una planta moderna para la fabricación de alcoholes finos y bodegas de añejamiento con el equipo necesario; que la empresa no es una fábrica de licores, pero es la única que podría estar en capacidad para producir el adelanto en esa industria, lo que de tener éxito significaba una fuente de riqueza para Guatemala y un gran beneficio para "la salud del pueblo consumidor de bebidas alcohólicas", pues dados los medios con que cuenta podría llegarse a la elaboración en Guatemala de un verdadero whisky; que con el objeto de hacer dicho ensayo tenía que importar la "madre", habiendo pedido la cantidad de cinco mil litros de whisky debidamente embarrilado, un barril de jerez y un cuñete de caramelo; y que en tal virtud pedía al Ministerio ampliar el Acuerdo de fecha diez y ocho de Octubre de mil novecientos cincuenta, "en el sentido de que se concede a la Central la exoneración de los derechos, tasas y sobrecargos de importación sobre tal cantidad de whisky, que deberá ser empleada como materia prima para la elaboración de un whisky nacional". La anterior solicitud fué ampliada al pedir que también se exonera de impuestos, cuatro tanques de hierro, de cien mil galones, que eran necesarios para almacenar las materias primas.

Oído el Departamento de Política Económica del propio Ministerio, manifestó su acuerdo con la exoneración en cuanto a los tanques de hierro, no así en lo relativo a los cinco mil litros de whisky. Previamente a resolver, el Ministerio de Economía y Trabajo dispuso se oyera la opinión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y este Despacho, aprobando el dictamen del Consejo Técnico del Ramo que se manifestó en desacuerdo con que se concediera la exoneración solicitada, devolvió las diligencias al de Economía y Trabajo.

A petición de la empresa interesada, que alegó que el Ministerio de Hacienda no había oído a sus demás cuerpos técnicos para devolver las diligencias, nuevamente el Ministerio de Economía y Trabajo envió a aquel Despacho lo actuado. Después de recabarse opiniones de la Dirección General de Aduanas, del Consejo Técnico de Aduanas, de la Dirección General de Rentas y del Departamento de

Estudios Hacendarios y Consejo Tributario, contrarias las tres primeras a la solicitud de exoneración y favorable a la misma la cuarta y última, el Ministerio de Hacienda aprobó ésta y mandó devolver el expediente al Ministerio de origen.

RESULTA:

Con fecha treinta y uno de Marzo del año recién pasado, el Ministerio de Economía y Trabajo resolvió en la siguiente forma: 'Hágase saber a los interesados, que la Ley de Fomento Industrial fué creada con los fines de incrementar la industria Nacional en el país en diferentes ramos, con exclusión de la fabricación de licores, por cuya razón este Despacho deniega la solicitud de mérito'. Pedida reconsideración, o que en su caso se tuviera por interpuesto recurso de reposición, fué denegada la reconsideración y, previa audiencia al Ministerio Público, denegado también aquel recurso, por providencia de fecha ocho de Septiembre del año pasado y su ampliación de fecha veintitrés del mismo mes.

Introducido recurso de lo contencioso administrativo contra las resoluciones de mérito, con vista de los antecedentes, el Tribunal respectivo dictó el auto de fecha diez y seis de Noviembre del año pasado, por el cual rechaza el recurso por no hallarse arreglado a derecho. El Tribunal considera "que las resoluciones administrativas contra las cuales procede el recurso de lo contencioso administrativo son aquellas que reúnen los requisitos que determina el artículo 11 de la ley de la materia; que en el presente caso, el otorgamiento de concesiones es facultad discrecional de la Administración en determinadas condiciones, de manera que el hecho de denegar una concesión solicitada, no puede vulnerar un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor de una persona natural o jurídica por ley ni realmente de ninguna clase". Promovido recurso de reposición contra el auto relacionado, por resolución de veinticinco de Noviembre siguiente el Tribunal lo declaró sin lugar, haciendo algunas otras consideraciones jurídicas en apoyo de la misma.

El Licenciado Edmundo Quiñónes Solórzano, en su calidad antes indicada, interpuso recurso de casación contra el auto últimamente citado, por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley y por quebrantamiento substancial del procedimiento. Señala como infringidos los artículos "11 inc. 2o. e inc. 3o.; y 12 párrafo 2o. de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 1o.; 2o. inc.

3o. y sub incisos a) y b); 3o.; 4o.; 5o.; 6o. y su inciso a); 12 inc. IV); 13; 15 en todo su cuerpo e incisos; 16 en sus dos párrafos; 18; 19 y 22 de la Ley de Fomento Industrial Dto. 459 del Congreso". Cita los casos de procedencia de la manera siguiente: "interpongo el recurso de casación de conformidad con el inc. 1o. del art. 2o. del Dto. 388 del Congreso...." "Interpongo también el recurso por quebrantamiento substancial del procedimiento, al tenor del inc. 2o. del art. 2o. del Dto. 388 del Congreso y del inc. 4o. del art. 507 del C. de E. C. y M." Al final de su escrito cita los artículos 505, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 518 y 519 del Dto. Leg. 2009. En refuerzo de sus puntos de vista, el recurrente hace una exposición relativa a los vicios que impugna al auto recurrido en conformidad con los preceptos que a su juicio se han infringido.

CONSIDERANDO:

Como fundamentación del recurso el interponente cita, tal como se ha dejado transcrito, los incisos 1o. y 2o. del artículo 2o. del Decreto 388 del Congreso de la República. Ahora bien, cabe explicar que la cita en esas condiciones es notoriamente inapropiada y errónea, pues del sentido textual del Decreto mencionado se ve que el artículo 2o. del mismo —que por cierto no contiene inciso alguno— se contrae a introducir una reforma al primer párrafo del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que es el que precisamente comprende los casos de procedencia del recurso de casación, sin que éste quede modificado en otro concepto y menos substituido por aquel precepto. Quiere decir, entonces, que el haberse planteado el presente recurso faltando uno de los requisitos esenciales para poder efectuar el estudio comparativo que el mismo implica como es el respectivo caso de procedencia, y ya que, por otra parte, este Tribunal no está facultado para enmendar o suplir los defectos en que incurran los interesados, su ineficacia es manifiesta. Y aunque con respecto al quebrantamiento de forma se señala además el inciso 4o. del artículo 507 del Decreto Legislativo 2009, su sola cita aislada, sin el caso de procedencia con el cual debe relacionarse, resulta baldía para los efectos del sometimiento.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que prescriben los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo.

tivo 1862; 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, DESESTIMA el presente recurso, condenando al recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales que, en caso de insolvencia, deberá conmutar con quince días de prisión simple. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes.— (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R.— G. Aguilar Fuentes.— J. M. Moscoso E.— Alberto Herrarte.— J. A. Ruano Mejía.— Ante mí: Juan Fernández C.—

Contencioso-Administrativo

Enrique Krische Schwalbe solicita la ciudadanía guatemalteca.

DOCTRINA: *Haberse resuelto sin lugar el recurso de reposición, interpuesto contra providencias de lo Contencioso Administrativo, no es negarse a conocer de la cuestión propuesta y, en consecuencia, no puede prosperar el recurso de casación que en este caso se introduzca apoyándolo en los incisos 2o. del artículo 506 y 1o. del 507, ambos del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo número 2009.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diez y siete de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina el auto de fecha veintinueve de Julio de mil novecientos cincuenta y tres, dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el recurso de reposición que interpuso Enrique Krische Schwalbe, contra la providencia que aquel mismo Tribunal emitió el dieciseis del citado mes y año, resolviendo el recurso contencioso administrativo que dicho señor Krische Schwalbe introdujo para impugnar las resoluciones números seis mil diecinueve, (6019) y seis mil doscientos seis, (6206) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del estudio de los antecedentes.

RESULTA:

En memorial fechado el veintinueve de Julio de mil novecientos treinta y nueve, cuya firma reconoció el dos de Agosto de aquel mismo año,

ante el Notario don Luis Felipe Rosales. ENRIQUE GUNTARIO THEO MAXIMO KRISCHE SCHWALBE, se presentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo: "soy ciudadano alemán por ser hijo legítimo de Theodoro Krische, hoy difunto, y Mariana Elena Schwalbe, ambos de nacionalidad alemana. Mi pasaporte alemán lo deposité en la Jefatura Política de San Marcos en Noviembre de 1938, según consta del comprobante extendido por el señor Jefe Político..." "...presento mi partida de nacimiento en la que consta que nací en Ciudad Guatemala el 13 de Enero de 1915, cuando regía aún el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de 1887, el que caducó el 15 de Marzo de 1916, celebrado entre Guatemala y Alemania. Según los preceptos de dicho tratado, correspondíame la nacionalidad de mis padres, o sea la alemana..." "Deseo acogerme al privilegio que brinda a los alemanes nacidos bajo el imperio del Tratado de 1887 el Decreto Ejecutivo No. 2153... y solicito por el presente la nacionalidad de origen guatemalteca, para cuyo fin renuncio de antemano a la nacionalidad alemana que tengo y a cualquiera otra que pudiera corresponderme".

RESULTA:

Tramitada la anterior solicitud se dictó el acuerdo fecha veintitrés de Agosto de mil novecientos treinta y nueve reconociendo al solicitante la calidad de guatemalteco natural y se mandaron hacer las transcripciones necesarias para las anotaciones correspondientes.

Con motivo de la emisión del Decreto Gubernativo número 2391, nuevamente se presentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el señor Enrique Guntario Theo Máximo Krische Schwalbe, renunciando a la nacionalidad alemana y a cualquiera otra que pudiera corresponderle; gestión que se resolvió en el sentido de tener "por renunciada expresamente la nacionalidad alemana que correspondía al presentado de conformidad con el Tratado suscrito entre Guatemala y Alemania el 20 de Septiembre de 1887" y mandar que se comunicara a la Legación respectiva, como se hizo.

RESULTA:

Emítido el Decreto 281 del Congreso, — por el cual se deroga el párrafo tercero del artículo primero del Decreto Gubernativo número 2153, se declaran insubsistentes todas las actuaciones, acuerdos y disposiciones ema-

nadas en cumplimiento de tal precepto, y se da efecto retroactivo a esta derogatoria desde el siete de Octubre de mil novecientos treinta y ocho—, volvió Krische Schwalbe a gestionar sobre su nacionalidad, presentando una exposición detallada del desarrollo de su vida ciudadana, desde sus primeros años hasta aquel entonces y terminó diciendo: “En vista de lo expuesto, ruego al señor Ministro, ... se sirva resolver, que por tratarse de un caso especialísimo, se me siga reconociendo como guatemalteco natural...”.

Oído el Departamento Jurídico de Relaciones Exteriores, resolvió este Ministerio que, de conformidad con la potestad que le da la cláusula tercera del Tratado “Montúfar, Von Bergen” calificaba la nacionalidad de Krische Schwalbe como alemana y mandó que éste se inscribiera con tal nacionalidad en el Registro de extranjeros domiciliados; esta resolución lleva fecha veintisiete de Noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, contra la cual se interpuso el recurso de reconsideración que, el doce de Marzo de mil novecientos cuarenta y siete, también fué resuelto sin lugar, fundándose para ello en que “...el interesado admite en sus exposiciones que cumplió con el requisito de prestar servicio militar en Alemania conforme el Tratado Montúfar-Von Bergen y que figuró inscrito como alemán en la Legación respectiva hasta el año de 1939, esto es, hasta la edad de 24 años...”.

RESULTA:

Con fecha tres de Junio de mil novecientos cuarenta y siete, Enrique Krische Schwalbe se presentó nuevamente al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo se examinara su situación, se anulara la resolución de fecha veintisiete de Noviembre de mil novecientos cuarenta y seis y se estableciera la ciudadanía que le corresponde. Oído nuevamente el Departamento Jurídico se mandó hacer saber este dictamen por el cual se indica que es improcedente la nulidad. Con ese resultado Krische Schwalbe recurrió de amparo a la Corte Suprema de Justicia, Tribunal que declaró sin lugar el recurso, por improcedente.

El cinco de Agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, Enrique Krische Schwalbe acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiéndole que se declarara que al privársele de la nacionalidad guatemalteca quedaba en categoría de los sin nacionalidad, gestión que se quedó con la providencia de pedir dictamen al Departamento Jurídico.

RESULTA:

El dos de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos después de repetir los argumentos tantas veces esgrimidos, el señor Krische Schwalbe volvió a pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores, que, “...haciendo aplicación de la Constitución vigente...” el Ministerio resolviera que le correspondía la nacionalidad guatemalteca y que se mandara cancelar su inscripción en el Registro de Extranjeros Domiciliados; petición que fué resuelta sin lugar en providencia número seis mil diecinueve, dictada el veintitrés de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos, contra la cual se interpuso recurso de reposición que también fué declarado sin lugar en resolución número seis mil doscientos seis, de fecha treinta y uno del mismo mes y año citados.

RESULTA

El diecinueve de Enero de mil novecientos cincuenta y tres, Enrique Krische Schwalbe se presentó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo interponiendo recurso de esa naturaleza contra las providencias números seis mil diecinueve, (6,019) y seis mil doscientos seis, (6206), de fechas veintitrés y treinta y uno de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos, dictadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, exponiendo: que el dos de Octubre del mismo año se presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando que se resolviera, de conformidad con los preceptos contenidos en la Constitución, vigente desde el once de Marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, que le corresponde la nacionalidad guatemalteca y se mandara cancelar su inscripción como extranjero domiciliado, pues de conformidad con el artículo 2o. transitorio del referido cuerpo de leyes, debe seguir disfrutando de la nacionalidad que ya le había sido reconocida; que como le había sido denegada aquella petición, así como su reposición, en resoluciones números seis mil diecinueve, (6019) y seis mil doscientos seis, (6206), de fechas veintitrés y treinta y uno de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos, acudía ante el Tribunal mencionado y pedía que en definitiva se resolviera con lugar el recurso contencioso administrativo, revocando las resoluciones administrativas que lo motivaban. Ofreció la prueba que creyó pertinente al fin propuesto y glosó algunas disposiciones constitucionales como fundamento del recurso.

Pedidos los antecedentes e integrado el Tribunal, con fecha dieciséis de Julio de mil novecientos cincuenta y tres, se resolvió no dar trámite al recurso interpuesto, por no estar arreglado a derecho. Para emitir tal resolución el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se fundó en que las providencias recurridas son repetición de la proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha veintisiete de Noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, basada en el dictamen doscientos treinta y tres, del Departamento Jurídico de aquel Ministerio; que dicha resolución quedó firme y causó estado al no interponerse en tiempo el recurso de reposición; que habiéndose introducido el recurso contencioso administrativo hasta el diecinueve de Enero de mil novecientos cincuenta y tres, el término legal había transcurrido y por consiguiente era extemporáneo.

Al ser notificado de la providencia antes descrita, el señor Krische Schwalbe introdujo el recurso de reposición que, el veintinueve de Julio de aquel año, fué declarado sin lugar, fundándose en que el recurrente no expresó los motivos en que lo apoyaba.

RESULTA:

Contra esta última resolución mencionada Enrique Krische Schwalbe introdujo recurso extraordinario de casación, por quebrantamiento substancial del procedimiento, con base en el inciso 2o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, (Decreto Legislativo número 2009), ya que conforme el artículo 507 inciso primero del mismo cuerpo de leyes citado, el Tribunal a quo se negó a conocer teniendo obligación de hacerlo, anomalía que trató de subsanar con el recurso de reposición, para cumplir con lo mandado por el artículo 510 del propio Decreto que se acaba de mencionar.

Cita como infringidos los artículos 23, 24 párrafo primero, 30, 40, 42, 50 en todos sus párrafos, 52 párrafo primero, 170 párrafo primero, 175 y 2o. transitorio de la Constitución emitida el once de Marzo de mil novecientos cuarenta y cinco; 9o., 28 y 52 del Decreto Gubernativo número 1881; y, VI, XVI y XXVIII de los Preceptos Fundamentales, Decreto Gubernativo 1862 y termina diciendo "...pido: a)... b) Que, al resolver, se case el auto recurrido, anulando lo actuado y se declare que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está obligado a conocer de mi demanda y resolver en sentencia sobre los puntos controvertidos".

Posteriormente se presentó agregando certificación de la resolución dictada por esta Corte en el recurso de amparo por él interpuesto, recordando que según lo allí dicho, lo resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo podía ser impugnado por medio del recurso de casación. Señalando día para la vista se presentó el Representante Específico de la Nación en Asuntos Alemanes, alegando que debía declararse sin lugar el recurso, porque para los asuntos de lo contencioso administrativo sólo se daba éste contra las sentencias y la resolución recurrida es un auto; que el Estado puede revocar las naturalizaciones; que el señor Krische Schwalbe nació bajo el imperio del Tratado Montúfar, Von Bergen y no encontrándose arreglado a derecho el recurso, por no ser materia de él las cuestiones que nazcan o pertenezcan al orden público o de gobierno, debía ser resuelto como pedía.

Por su parte el recurrente alega que las cuestiones nulas ipso jure, según la Constitución, no podían soslayarse por el transcurso del tiempo y que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debía conocer del asunto.

Integrado el Tribunal y pasada la vista señalada es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

Se introdujo el presente recurso por quebrantamiento substancial del procedimiento, contra la resolución dictada el veintinueve de Julio de mil novecientos cincuenta y tres, por la cual se declara sin lugar el recurso de reposición que contra la resolución de dieciséis del mismo mes, interpuso Enrique Krische Schwalbe, haciendo consistir el quebrantamiento de procedimiento en que el Tribunal se negó a conocer teniendo obligación de hacerlo.

Al resolver el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el recurso de reposición de mérito, dice: "Declara que no ha lugar a la reposición solicitada", con lo que no está negándose a conocer del recurso interpuesto sino diciendo que, según las razones expuestas en el considerando en que apoya su resolución, la reposición no procede.

Ahora bien, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no haya estrando a conocer del recurso interpuesto contra las resoluciones números seis mil diecinueve, (6019) y seis mil doscientos seis, (6206) del Ministerio de Relaciones Exteriores, como asegura el recurrente en sus alegaciones, puede ser

cierto, pero como el presente recurso sólo fue interpuesto contra el auto dictado el veintinueve de Julio de mil novecientos cincuenta y tres y no contra otra resolución, esta Corte no puede entrar a analizar más que el auto citado en relación con el caso de procedencia en que el recurrente se funda, y como de conformidad con lo relacionado, ningún quebrantamiento de procedimiento se ha cometido con la providencia dictada el veintinueve de Julio referido, tampoco las leyes citadas han sido infringidas.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224, 227, 228, 233 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el recurso interpuesto, condena al recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia podrá conmutar con diez días de prisión simple. Repóngase el papel español empleado por el sellado de ley y como corresponde devuélvanse los antecedentes. Notifíquese. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Alberto Argueta S. — Ante mí: Juan Fernández C.

— 0 —

VOTO RAZONADO del Magistrado Alberto Herrarte en la casación de Enrique Krische Schwalbe.

Señores Magistrados:

Cumplo con hacer constar las razones que tuve para votar en contra de la sentencia dictada por esta Corte en el recurso de casación interpuesto por Enrique Krische Schwalbe contra el auto dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Krische Schwalbe contra la providencia que el mismo Tribunal emitió el 16 de Julio de 1953, en la cual declara no dar trámite al recurso contencioso-administrativo presentado contra las resoluciones 6019 y 6206 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se funda la sentencia de la Corte en que, habiéndose introducido el recurso de casación por quebrantamiento de forma, por estimarse que el Tribunal se negó a conocer, teniendo obligación de hacerlo, el recurso sólo fue interpuesto contra el auto que declaró sin

lugar el de reposición, en el cual el Tribunal no se negó a conocer de tal recurso. En otras palabras, el Tribunal estima que el recurso de casación debió de interponerse contra el auto del 16 de Julio de 1953, en el que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se negó a conocer de la demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El recurso de reposición, autorizado por el artículo 42 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, tiene teóricamente las características de un verdadero recurso, por cuanto que el interesado tiende a conseguir la *reforma* de una resolución judicial que estima injusta, al contrario de los simples "remedios" que tienden a eliminar errores como los recursos de aclaración y ampliación, impropriamente llamados recursos. Por otra parte el recurso de reposición ya dicho procede contra resoluciones de decisión y no de ordenación, ya que para este efecto el mismo artículo 42 instituye el recurso de revocatoria.

Las características anteriores colocan al recurso de reposición en una equivalencia al recurso de apelación que conceden las leyes civiles contra las resoluciones de decisión citadas en primera instancia. La única diferencia es, que: tanto en el recurso de apelación el Tribunal *a-quo* es diferente al Tribunal *ad-quem*, en el de reposición hay unificación de ambos Tribunales. Es evidente que tal circunstancia hace al recurso imperfecto, pero ello se debe a que, las características especiales de la materia contencioso-administrativa, el Tribunal conoce en única instancia, y no habría otra forma de reparar un agravio judicial, sino concediéndole al mismo Tribunal facultades de revisión, que dentro de la jurisdicción ordinaria se conceden a los Tribunales de segundo grado. Admitida la equivalencia de ambos recursos, creo conveniente hacer un somero examen de las características de la resolución recurrida. No obstante que teóricamente hay discusión respecto a ellas, existe un positivo acuerdo, en considerarla como sujeta a una condición suspensiva en tanto que el recurso no se interpone dentro del término legal; pero si el recurso se interpone, cumplida aquella condición, la resolución recurrida carece en cierto modo de eficacia porque será *substituida* por aquella que resuelva el recurso, bien revocando la primera o bien confirmando. Este es un principio reconocido por nuestra legislación y que se hace patente al expresar, por ejemplo, en el caso del recurso de casación, que éste solo se admite contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, en el entendido,

desde luego, que éstas pueden confirmar o revocar las que se han dictado en primera instancia. Vistas así las cosas, la conclusión obligada es que en el caso *sub-judice* el recurso de casación solamente pudo haberse interpuesto contra el auto que declaró sin lugar el recurso de reposición y que subsistía, aun que confirmándolo, el auto primitivo en que se rechazaba la demanda contencioso-administrativa. Por otra parte, el interesado estaba obligado a introducir dicho recurso si es que quería posteriormente hacer uso del recurso de casación, ya que únicamente la resolución recaída en el recurso de reposición tenía el carácter de definitiva, por no tener dentro de los medios ordinarios otro recurso que interponer. Y resulta fuera de lógica suponer que, teniendo el interesado obligadamente que interponer un recurso ordinario la casación tenga que presentarla contra la primera resolución, cuando quizás, por interponer el ordinario, ya se le ha vencido el término para recurrir en casación. Por estas razones, estimo que el recurso estuvo bien interpuesto y se debió conocer del fondo.

Guatemala, 17 de Agosto de 1955.

Alberto Herrarte.

CIVIL

ORDINARIO doble seguido por Juana Pérez Hernández Mayor y Juana Pérez Hernández Segunda, contra Juan Hernández Ajualip, Pablo y Santos Sandoval y Tranquilino Calo Cay.

DOCTRINA: Siendo la donación un contrato traslativo de dominio, comprobado éste sin que se objete su validez, los donatarios tienen derecho de reivindicar de tercera persona la cosa donada.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diecisiete de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación y con sus antecedentes respectivos, se examina la sentencia dictada por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de veintiséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en el juicio ordinario doble seguido por Juana Pérez Hernández Mayor y Juana Pérez Hernández Segunda contra Juan Hernández Ajualip,

Pablo y Santos Sandoval y Tranquilino Calo Cay, en el Juzgado de Primera Instancia de Baja Verapaz.

RESULTA:

El cuatro de Junio de mil novecientos cincuenta y tres, se presentaron al Juzgado de Primera Instancia de Baja Verapaz, Juana Pérez Hernández Mayor y Juana Pérez Hernández Segunda, manifestando: que son propietarias de las fincas rústicas inscritas con los números dos mil trescientos treinta y dos y dos mil trescientos treinta y tres, a los folios ciento treinta y tres y ciento treinta y cuatro, del libro diecisiete de Baja Verapaz, consistentes en lotes de terreno situados en el lugar "Pahoj", según medidas y colindancias que constan en el título que acompaña; que estos lotes están siendo ocupados indebidamente por Juan Hernández, Pablo Sandoval, Santos Sandoval y Tranquilino Calo Cay, quienes pretenden tener derecho sobre los predios; que por ese motivo les demandan la propiedad, posesión y entrega dentro de tercero día de las fincas de mérito, pidiendo que en sentencia se declare: a) que son propietarias legítimas de las fincas mencionadas; b) que los demandados deben hacerles entrega de las mismas dentro de tercero día; c) que deben devolver los frutos o pagarlos dentro de tercero día. Dijeron que probarían su acción con el documento acompañado, testigos, inspección ocular, confesión judicial, presunciones "y demás que sean de derecho y complementarias", y no expusieron fundamentos de derecho, concretándose a la cita de leyes. El documento presentado por las demandantes y que por no aparecer en los autos fué presentado a esta Corte, se refiere al testimonio de la escritura pública pasada ante el Notario Isidro Lemus Dimas, a trece de julio de mil novecientos cincuenta y dos, en la cual Magdalena Hernández Ajualip hace donación a favor de sus hijas, las demandantes, de los siguientes inmuebles: a) a favor de Juana Pérez Hernández Mayor, de un lote situado en el cantón "Pahoj", del Municipio de Cubulco, en el Departamento de Baja Verapaz, compuesto de dos hectáreas, cuarenta y cuatro áreas y cincuenta y cuatro centiáreas, o sean tres manzanas y media, con las colindancias que se especifican, fracción que debe desmembrarse de la finca inscrita con el número dos mil trescientos nueve, al folio ciento diez, del libro diecisiete de aquel departamento, y b) a favor de Juana Pérez Hernández Segunda, otro lote compuesto de dos hectáreas, cuarenta y cuatro áreas y cincuenta y cuatro cen-

tiáreas, o sean tres manzanas y media, con las colindancias que expresa, que constituye el resto de la finca dos mil trescientos nueve ya mencionada. El valor de cada donación se estimó en veinticinco quetzales. Las referidas fracciones fueron inscritas en el Registro General de la República a favor de Juana Pérez Hernández Mayor y Juana Pérez Hernández Segunda, con los números dos mil trescientos treinta y dos y dos mil trescientos treinta y tres, a los folios ciento treinta y tres y ciento treinta y cuatro, respectivamente, del Libro diecisiete de Baja Verapaz. Compareció aceptando la donación como gestor de negocios de sus hijas, Tomás Santiago Pérez.

RESULTA:

Que corrida la audiencia de ley a los demandados, éstos se presentaron al Tribunal contestando negativamente la demanda y unificando la personería en Juan Hernández Ajualip, quien a su vez reconvino a las demandadas, manifestando: que Juan Hernández fué padre del presentado y de Magdalena Hernández Ajualip; que el referido Juan Hernández falleció el veinticinco de octubre de mil novecientos treinta sin hacer disposición testamentaria, y que este acontecimiento fué ocasión para que Magdalena se apoderase de los bienes del de cujus en su totalidad, iniciando un juicio intestado en que se valió de declaraciones falsas para probar que solamente ella era la hija superviviente del causante con plenos derechos a sucederle; que logró su objetivo en auto del treinta y uno de mayo de mil novecientos cincuenta, sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho, pero dicho auto se amplió el veintinueve de abril de mil novecientos cincuenta y dos, en el sentido de que también el presentado, Juan Hernández Ajualip, tenía derecho como hijo a suceder al causante; que en cuanto Magdalena tuvo conocimiento del auto de ampliación, trató de anular los derechos del presentado, interponiendo toda clase de recursos frívolos e impertinentes en el intestado, y como no lo consiguió, efectuó la donación a que se hace mérito en la demanda, acto que considera fraudulento; que la reconvencción comprende la petición de que en sentencia se declare: 1o. la nulidad de la escritura de fecha trece de julio de mil novecientos cincuenta y dos, autorizada por el Notario Isidro Lemus Dimas, en la cual se lotifica y dona la finca que fué de su padre; 2o., la nulidad de las inscripciones de dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble de las fincas rústicas dos mil trescien-

tos treinta y dos y dos mil trescientos treinta y tres, a los folios ciento treinta y tres y ciento treinta y cuatro, del libro diecisiete de Baja Verapaz; así como del asiento de cancelación de la finca número dos mil trescientos nueve, folio ciento diez, del libro diecisiete, que debe quedar vigente; 3o., el otorgamiento por parte de Magdalena Hernández Ajualip de escritura traslativa de dominio de la mitad de la finca rústica dos mil trescientos nueve, folio ciento diez, del libro diecisiete ya referido, y 4o., que las costas de la reconvencción son a cargo de la parte reconvenida. Al hacer la exposición de puntos de derecho manifestó que no podían ser objeto de donación los bienes que no estuviesen poseídos por la donante, siendo nula la que se hace sobre derechos ajenos; que el instrumento público que contiene la donación también es nulo porque faltan las formalidades esenciales a que se refiere el Artículo 31 del Código de Notariado, ya que la donación fué aceptada por el padre de las donatarias, Tomás Santiago Pérez, como gestor de negocios, y de las partidas de nacimiento de éstas se deduce que ninguna de las dos es legalmente la persona a que la escritura se refiere, porque Juana Pérez Hernández Mayor es "Juana Hernández", y Juana Pérez Hernández Segunda es simplemente "Juana Pérez Hernández"; que la reconvencción la entabla contra las dos Pérez Hernández, Magdalena Hernández Ajualip y Tomás Santiago Pérez, por intervención dolosa en el contrato; que, por otra parte, constituyendo formalidad esencial en los instrumentos públicos la razón del Notario de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca a nombre de otro, en la escritura relacionada se omitió este requisito, que da origen a nulidad conforme el artículo 32 del Código de Notariado. Propuso como pruebas: "documentos", partidas del Registro Civil, confesión judicial de la parte reconvenida, información testimonial, presunciones, expertajes, "y en general, con todos los medios probatorios catalogados como tales y admitidos por el Arto. 269 del Dto. 2009".

RESULTA:

Que corrida la audiencia de la reconvencción a las primeras demandantes, interpusieron excepción de falta de personalidad en cuanto a Pablo y Santos Sandoval y Tranquilino Calo Cay, "porque no tienen nada que ver con el predio en litis", contestando negativamente la reconvencción en cuanto a Juan Hernández Ajualip. Los demandados acla-

raron que solamente este último reconvenía, por lo que la excepción de falta de personalidad fué declarada sin lugar.

RESULTA:

Que abierto el juicio a prueba, se rindieron las siguientes: por la parte demandante: a) el documento acompañado a la demanda; b) inspección judicial en el inmueble en litigio, que se practicó por medio del Juez de Paz de Cubulco, haciéndose constar: que dicho inmueble no lo poseen los demandados, sino las propias actoras, quienes tienen siembras de maíz, no obstante habersele dado posesión a Hernández Ajualip el diecinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, siendo el mismo terreno, habiéndose acompañado para el efecto de la inspección, el documento público presentado por las actoras y el intestado de Juan Hernández; c) declaraciones de Gaspar Tobar Osorio, Juan Vásquez Rosales, Justo Jerónimo Vásquez y Pedro Morente Raymundo, tomadas por el Juez de Paz de Cubulco. Gaspar Tobar Osorio dijo que personalmente no conoce los lotes de las demandantes, pero que conforme la escritura están contiguos; que estos lotes estuvieron en posesión de Magdalena y Juan Hernández Ajualip, después del fallecimiento de Juan Hernández y que actualmente están en posesión de los mismos las Pérez Hernández; que Juan Hernández Ajualip tenía derecho a la mitad del terreno, pero que vendió su parte hace algunos años, ignorando a quién. Juan Vásquez Rosales, que los inmuebles están contiguos; que los demandados se han posesionado de ellos, asegurando que les pertenecen; que estos lotes estuvieron en posesión de Magdalena y Juan Hernández Ajualip y actualmente están en poder de las Pérez Hernández, y que Juan Hernández Ajualip tiene derecho a esa herencia como heredero de Juan Hernández. Justo Jerónimo Vásquez se produjo en igual forma que el anterior, excepto que los lotes estén en posesión de los demandados, siendo las propias actoras quienes los detentan, y que Juan Hernández Ajualip tenía derecho a esa herencia, pero que hacía años vendió tal derecho, ignorando a qué persona. Pedro Morente Raymundo se expresó en parecidos términos a Juan Vásquez Rosales, indicando que los demandados están en posesión del inmueble y que Juan Hernández Ajualip vendió su derecho, ignorando a qué persona. Por parte del demandado Juan Hernández Ajualip, se rindió la siguiente prueba: a) certificación expedida por el propio Juzgado, del auto dictado el treinta y uno de mayo de mil novecientos cin-

cuenta en el juicio intestado de Juan Hernández, en el cual se declara que Magdalena Hernández Ajualip, como hija del causante, es heredera de los bienes, derechos y acciones que éste dejó a su fallecimiento, y del auto de ampliación dictado el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, en el que se expresa que Juan Hernández Ajualip, en concepto de hijo, también es heredero *ab-intestado* del referido Juan Hernández, habiéndose dictado en igual sentido otro auto el veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta y dos, expresándose que queda ampliado el auto de fecha treinta y uno de mayo del cincuenta. En la misma certificación aparece un memorial presentado por Juan Hernández Ajualip, pidiendo que le sean entregados en forma proindivisa los bienes relictos, a lo cual se accedió, librándose despacho al Juez de Paz de Cubulco y efectuándose la diligencia el diecinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, en la cual consta que se le puso en posesión proindivisa de un terreno en "Pahoj", compuesto de siete manzanas y media. b) a su solicitud también se tuvo a la vista el propio juicio intestado de Juan Hernández. Para mejor fallar, se practicó nuevo reconocimiento en el inmueble por medio del mismo Juez de Paz de Cubulco, haciéndose constar en la diligencia que Juan Hernández Ajualip, en unión de los demás demandados, tiene sembradas tres manzanas en la parte Sur del inmueble, y que en la parte Norte tiene sembrada manzana y media las demandantes, siendo estas siembras de maíz.

RESULTA:

Que el cinco de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictó el Juez su sentencia, estimando: que las actoras acreditaron su propiedad sobre las dos fracciones del inmueble demandado, con el testimonio de la escritura pública otorgada ante el Notario Lemus Dimas, y que con la inspección ocular practicada por el Juez menor de Cubulco se demostró que los demandados están poseyendo dicho inmueble de manera ilegítima; que las actoras también demandaron la restitución de frutos, pero que en el curso del juicio no se estableció el monto de los mismos. En virtud de lo expuesto hizo declaración de que las actoras son propietarias de las fincas ya mencionadas que identifica con los números del Registro, de las cuales debe ponerse en posesión por los demandados dentro de tercero día, y que la restitución de frutos debe sustanciarse en la forma legal correspondiente. Nada resolvió con relación a la reconvenición.

Habiéndose apelado de este fallo, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones dictó la que se examina, el veintiséis de noviembre del año próximo pasado. La Sala consideró: que habiéndose probado plenamente la propiedad que sobre las fincas rústicas identificadas en la demanda tienen Juana Pérez Hernández Mayor y Juana Pérez Hernández Segunda, con el testimonio de la escritura pública otorgada ante el Notario Lemus Dimas y que se encuentra debidamente registrado, les asiste derecho de reivindicarlas de los demandados, que las poseen en forma ilegítima, como se comprueba con la inspección ocular; que, por otra parte, en cuanto a la restitución de frutos, no quedaron establecidos en ninguna forma, y en lo que respecta a la nulidad interpuesta por los demandados, de las donaciones a que se refiere la reconvencción y de las inscripciones que con este motivo se hicieron en el Registro, no procede hacer ninguna declaración por no estar probado. En la parte decisoria, se expresa que se confirma la sentencia llegada en grado.

Contra este fallo interpuso Juan Hernández Ajualip recurso extraordinario de casación, que fundamenta así: conforme los Artículos 505, 506 incisos 1o., 2o. y 3o. del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y 2o. del Decreto 388 del Congreso, porque la sentencia contiene: a) violación de ley, b) aplicación indebida, c) interpretación errónea de la misma, y d) error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas rendidas. Cita como violados los artículos 319, 585, 282, 289, 291, 293, 269 incisos 1o., y 4o. y 374 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil; 252, incisos 3o., 4o., 5o. y 6o. de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial; 679, 708, del Título IX libro II del Código Civil de 1877, apéndice del Código Civil vigente en lo que se refiere a las donaciones; 131 del Decreto Gubernativo 272; 1113, 1119, 1120 y 1124 inciso 3o. del Código Civil, Decreto Legislativo 1932; 500, 818, 819, 922, 923, 985, 986 y 993 del mismo Código, Decreto citado. Con aplicación indebida e interpretación errónea, los Artículos 387, 388, 396 y 397 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932, citados en la sentencia, y los Artículos 259, 263, 269, 277, 281, 282, 370, 372 y 374 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Manifiesta el recurrente al hacer la historia del juicio, que presentó como pruebas, la certificación de la ampliación del auto de herederos dictado en el juicio sucesorio de su padre Juan Hernández y copia certificada del acta de posesión que se le dió en virtud de mandato judicial; que demostró con la propia escritura de las do-

natarias que la finca de donde se formaron las dos fracciones era la de su padre; que con la inspección ocular estableció que los terrenos donados son los mismos que le fueron entregados por mandato judicial, que en el juicio intestado constan todas las maniobras llevadas a cabo por su hermana Magdalena Hernández Ajualip, para despojarlo de parte de la herencia que le corresponde en el terreno, que es equivalente a la mitad; que como estas pruebas no fueron apreciadas, ni analizadas debidamente, como lo exigen los incisos 3o., 5o. y 6o. del artículo 232 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, hubo error de derecho y de hecho en la apreciación de todas estas pruebas, "máxime que el error de hecho consiste o resulta de documentos y actos auténticos que demuestran de modo evidente la equivocación del juzgador, conforme el inciso 3o. del arto. 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil". Al referirse al fondo de la cuestión, expresa que si bien es cierto que los jurisconsultos franceses Colin y Capitant, citados en la sentencia en apoyo de la tesis sustentada, expresan que "la propiedad es el poder de gozar una cosa y de aprovechar toda la utilidad de que ésta es susceptible", ambos tratadistas se refieren a la propiedad legítimamente adquirida, no a la que llega por medio de maniobras ilícitas, de contratos nulos; que los mismos autores manifiestan que la calidad de heredero es imprescriptible, que la declaratoria debe hacerse sin perjuicio de tercero, que la inscripción de derechos sucesorios en el Registro debe hacerse con tal reserva, aunque ella no dé validez a actos o contratos viciados de nulidad; que también manifiestan que las acciones rescisorias o resolutorias sólo perjudican a quien en virtud de contrato haya inscrito su derecho, cuando las acciones sean consecutivas a causas que aparezcan en el Registro, cuando el contrato haya sido otorgado en fraude de acreedores, cuando el derecho del adquirente haya sido a título gratuito, y cuando al hacerse la inscripción se cometan omisiones o inexactitudes, y que estas doctrinas están corroboradas en nuestra legislación en los artos. IX P. F. de la L. C. de O. J.; 585 del Dto. 2009, 1113, 1119, 1120 y 1124 incisos 1o., 2o. y 3o. C. Civil Dto. Leg. 1932. Agrega que como consecuencia de lo anterior, las donaciones son nulas *juris et de jure* como lo ha sostenido en la reconvencción, porque la donante no tenía la posesión de la parte del recurrente, efectuándose con violación de los Artículos 697 y 708 del Código Civil, definiendo el primero la donación como transferencia de bienes propios del donante y no de

bienes ajenos y refiriéndose el segundo a que no pueden ser objeto de donación sino los bienes poseídos por el donante y que es nula la que se hace sobre bienes o derechos ajenos, corroborado por analogía con lo dispuesto por el Artículo 1498 del Código Civil al establecer que no hay venta de lo ajeno; doctrina también ratificada por el artículo 247 del Decreto Gubernativo 272, al indicar que si se grava o vende lo ajeno el comprador no adquiere el dominio sino la mera tenencia que hubiese correspondido al vendedor, siendo indispensable que haya buena fe, por lo que considera violadas estas leyes en la sentencia: artículos 1498 y 1055 C. C., el primero de 1877 y el segundo del Decreto Leg. 1932, y 247 del Decreto Gubernativo 272. Indica, por último, que nadie puede transferir a otro más derecho que el que él mismo tiene; que el acto llevado a cabo por su hermana es delictivo y que conforme el Artículo 2248 del Código Civil, en su inciso 2o., nadie debe enriquecerse con detrimento de otro. Ofrece presentar documentos de todas las inscripciones de dominio de la finca "Pahoj" y pide que se caese la sentencia recurrida.

— I —

CONSIDERANDO:

Repetidas veces ha declarado esta Corte que cuando se impugna el fallo contra el cual se recurre, por error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas, para poder efectuar el análisis comparativo que el caso amerita, es preciso que el recurrente indique en qué consiste cada uno de estos errores, y que en el caso del error de hecho, señale con la debida precisión el documento o acto auténtico que demuestre de modo evidente la equivocación del juzgador como lo requiere la ley, pues de no llenarse estos requisitos, se carecería de uno de los presupuestos necesarios para efectuar tal análisis, sin que el Tribunal de Casación pueda suplirlos, dada la naturaleza limitada del recurso, para no convertir a éste en una tercera instancia. En el caso que se examina, el recurrente se limitó, al hacer la historia del juicio, a enumerar las pruebas que había rendido y de lo que de ellas se desprendía, agregando como comentario que esas pruebas no fueron apreciadas ni analizadas debidamente, por lo que hubo "error de derecho y de hecho" en la apreciación de las mismas, "máxime que el error de hecho consiste o resulta de documentos y actos auténticos que demuestran de modo evidente la equivocación del juzgador". Es decir,

el recurrente no cumplió con especificar en qué forma cometió cada uno de los errores mencionados el Tribunal sentenciador, ni mucho menos señaló el documento o acto auténtico que, en el caso del error de hecho, demostrase de modo evidente la equivocación de dicho Tribunal. En consecuencia, no pudiéndose efectuar nuevo examen valorativo de la prueba, no cabe estimar si fueron violados los artículos 319, 585, 282, 289, 291, 269 incisos 1o. y 4o., 374, 259, 263, 277, 281, 370 y 372 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil.

— II —

CONSIDERANDO:

El fallo condenatorio dictado contra el recurrente por el Tribunal a quo, se basa en que las actoras probaron con el testimonio de la escritura pública ante el Notario Lemus Dimas ser dueñas del inmueble cuestionado, por habérselos donado en parcelas iguales su madre Magdalena Hernández Ajualip. En tales condiciones, y pese a la falta de análisis de la prueba rendida por el demandado Hernández Ajualip y de los hechos que con ella podrían haberse establecido, este Tribunal de Casación debe atenerse exclusivamente a los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador, ya que, como se dijo en el anterior considerando, no puede efectuarse nuevo análisis de la prueba. Siendo la donación un contrato por medio del cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte de sus bienes, como lo establece el artículo 697 del Código Civil de 1877, no pudo ser violado dicho artículo, porque el contrato en referencia debe surtir todos sus efectos legales, ya que no ha sido redarguido de nulidad, habiéndose pedido únicamente en la reconvencción la nulidad de la escritura y la nulidad de las inscripciones de dominio a favor de las donatarias. Alega el recurrente que las donaciones a favor de las actoras son nulas *juris et de jure*, porque la donante no estaba en posesión del inmueble, y cita en apoyo de su tesis el Artículo 708 del mismo Código Civil de 1877 que también considera violado, el cual indica que "no pueden ser objeto de donación sino los bienes poseídos por el donante" y que "es nula la que se haga de bienes o derechos futuros"; pero, como se ve de la transcripción de este artículo, no establece ninguna nulidad *ipso-jure*, y aunque el demandado ha insistido en que el inmueble no estaba poseído en su totalidad por la donante, no requirió, como ya se dijo, la nulidad de las donacio-

nes, por lo que tampoco este artículo pudo ser violado. En la misma condición se halla el artículo 131 del Decreto Gubernativo 272 (700 C) que prescribe que la donación entre vivos se perfecciona con la aceptación y que una vez aceptada es irrevocable, pues aunque el demandado en su reconvención hace referencia a las irregularidades en la aceptación por cuestiones de identidad de las donatarias, no se declaró probado ningún hecho al respecto.

— III —

CONSIDERANDO:

Siendo la donación un contrato traslativo de dominio, la donante transmitió a las donatarias el dominio de sus respectivas parcelas, y, en ese concepto, dada la declaración judicial respecto a la falta de prueba de los hechos alegados por el demandado, el Tribunal sentenciador no pudo hacer aplicación errónea de los Artículos 387, 388, 396 y 397 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932, al resolver en favor de las actoras, porque los referidos artículos prescriben precisamente cuáles son los derechos que se derivan del dominio o propiedad que se tenga sobre una cosa, entre los que está el de gozar de lo suyo con exclusión de cualquier otra persona y el de reivindicación.

— IV —

CONSIDERANDO:

Cita el recurrente también como violados por el Tribunal sentenciador, los artículos 500, 818, 819, 922, 923, 985, 986 y 993 del Código Civil, Decreto antes citado, artículos que por su orden se refieren: a que la posesión de la herencia se adquiere desde el momento de la muerte del causante, aunque el heredero lo ignore; a que por herencia o por disposición de la ley, suceden una o varias personas a otra en todos los bienes y obligaciones que ésta tenía al tiempo de su muerte; a que la sucesión puede ser testamentaria o intestada; a que el heredero, una vez aceptada la herencia, es propietario de ella desde la muerte del causante; a que la renuncia de la herencia debe ser expresa; a que la ley llama a la sucesión en primer lugar a la línea recta descendiente; a que los descendientes excluyen a los otros parientes, ya que los hijos heredan por iguales partes. No expuso el recurrente por qué motivo considera violadas estas leyes, aunque de la exposición general que hace al interponer el recurso, se advierte que objeta la demanda de las actoras, por

considerarse con derecho al inmueble en litigio, como coheredero de su hermana Magdalena, la donante, en la herencia del padre de ambos, Juan Hernández, razón por la cual afirma que la donante no pudo transferir más derechos de los que le correspondían. Sin embargo, el Tribunal sentenciador no declaró probados ninguno de los hechos relativos a la herencia y específicamente, que el inmueble donado formara el todo o parte de los bienes relictos; y aún en esta circunstancia, no habiéndose pedido la nulidad de la donación sino sólo la del instrumento, como ya se hizo constar, el Tribunal sentenciador tuvo que estimar aquel contrato con toda validez, estando las dos fracciones en que se dividió el inmueble debidamente inscritas a favor de las actoras, por cuya razón estimó como ilegítima la posesión de los demandados. Por los motivos expuestos no pudieron ser violados los artículos a los cuales se hizo referencia.

— V —

CONSIDERANDO:

Asimismo, el recurrente cita como violados los siguientes artículos del Código Civil, Decreto Legislativo 1932: el 1113, que prescribe que si un inmueble pertenece en común a varias personas, se hará una sola inscripción; 1119, que la inscripción será nula cuando por omisión de alguna de las circunstancias que debe contener, o por estar extendida con inexactitud hubiere inducido a error a un tercero y éste o alguno de los contratantes aparezcan perjudicados en el Registro; el 1120, que la inscripción no convalida los actos o contratos nulos, y el 1124 inciso 3o., que las acciones rescisorias o resolutorias no perjudican a tercero que haya inscrito su derecho, salvo cuando este derecho haya sido adquirido a título gratuito. Ninguno de los Artículos en referencia tiene relación con el caso sub-júdice, por cuanto que no es materia del pleito una o más inscripciones respecto de un inmueble que pertenezca en común a varias personas, ni acción alguna rescisoria o resolutoria; tampoco lo es que alguna inscripción se hubiese efectuado con inexactitud o con omisión de alguna de las circunstancias que debe contener, y, asimismo, que una inscripción esté convalidando un acto o contrato nulo. Fueron citados también como violados los Artículos 252 incisos 3o., 4o., 5o. y 6o. de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial; 679 del Código Civil de 1877, que corresponde al Título IX, Libro Segundo, apéndice en vigor por referirse a las donaciones; 1498 y 1055

del Código Civil, el primero de 1877 y el segundo del Decreto Legislativo 1932 y 247 del Decreto Gubernativo 272. En lo que se relaciona con el primer artículo citado, debe hacerse constar que la ley Constitutiva del Organismo Judicial, Decreto Gubernativo 1862, no tiene más que 251 artículos; en cuanto al segundo, la parte vigente del Código Civil de 1877, en el Título IX referente a las donaciones comienza con el artículo 697 que ya fué objeto de consideración, correspondiendo el actual artículo 679 a las servidumbres voluntarias, y en lo que se relaciona con los artículos 1498 y 1055 del Código Civil y 247 del Decreto Gubernativo 272, estos tratan de la venta de lo ajeno y de la buena fe para la prescripción positiva, que no tienen aplicación en el presente asunto.

—VI—

CONSIDERANDO:

El recurrente menciona también como caso de procedencia, aparte de los ya señalados por violación de ley y por error en la apreciación de la prueba, el contenido en el inciso 2o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, por quebrantamiento substancial del procedimiento. Pero con relación a este motivo no da ninguna razón en su recurso, ni señala alguno de los casos en los cuales el artículo 507 del Código citado estima como infringido substancialmente el procedimiento, sin que a su vez señale leyes violadas a este respecto, razón por la cual debe desestimarse también el recurso por este motivo.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 224, 232, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 512, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el presente recurso de casación, condena al recurrente al pago de las costas del mismo y a una multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia compensará con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel, y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes. (Ponencia del magistrado Herrarte González.

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí, Juan Fernández C. —

CIVIL

ORDINARIO seguido por Juan Rojas Chávez contra el Ingeniero Antonio F. Meneses.

DOCTRINA: Cuando se denuncia error de derecho en la apreciación de la prueba, debe indicarse en qué consiste ese error, así como identificarse las pruebas que lo contienen, porque la naturaleza restringida del recurso de casación, no permite hacer un análisis generalizado de las pruebas aportadas al juicio.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diecisiete de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina con los antecedentes, la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, el veinticuatro de Febrero del corriente año, en el juicio ordinario seguido por don Juan Rojas Chávez, contra el Ingeniero Antonio F. Meneses, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de este departamento.

RESULTA:

El dos de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, se presentó al mencionado Juzgado, don Juan Rojas Chávez, expresando: que comparecía a entablar demanda ordinaria contra el Ingeniero Antonio F. Meneses, como consecuencia de los siguientes hechos: que ante el mismo Tribunal se había presentado el Ingeniero Meneses, entablando procedimiento ejecutivo en contra del demandante, fundado en un pagaré por la suma de quinientos quetzales, suscrito por el exponente, el cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta, con vencimiento al día cuatro de febrero de mil novecientos cincuenta y uno; que nada debía al citado Ingeniero, ni era exacto que hubiera recibido de él esa suma, cuyos extremos así como el origen del pagaré, lo establecería en el curso del término probatorio del juicio, que tenía por objeto establecer la nulidad e invalidez de tal documento de crédito, concluyendo por pedir que al dictar sentencia se declarara, que el pagaré indicado es nulo y nada debe al referido profesional; y como consecuencia de la anterior declaración, la nulidad del título ejecutivo presentado en el procedimiento que mencionó. Esta demanda fué contestada en forma negativa por el Ingeniero Meneses.

RESULTA:

Durante el término de prueba, a solicitud del actor, se examinaron como testigos a los señores: Jorge Efraín Alvarez Borges, Guillermo Flohr y Julio César Cobar Alfaro, quienes reconocieron el contenido y su respectiva firma, en las cartas que dirigieron al Licenciado Carlos Girón Zirión, Abogado Director del demandante, refiriéndose a manobras en la intervención del Ingeniero Meneses, en la lotificación Aviatega, únicamente. La parte demandada no presentó ninguna prueba.

RESULTA:

El quince de marzo del año pasado, el Juez Tercero de Primera Instancia, dictó sentencia en este juicio, absolviendo al Ingeniero Meneses de la demanda del señor Rojas Chávez, y como éste no se conformara con ese fallo interpuso recurso de apelación, por lo que los autos pasaron a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, y dentro del trámite de la segunda instancia, el actor articuló posiciones al Ingeniero Meneses, quien no concurrió en la audiencia señalada para esa diligencia, por lo que fué declarado confeso en algunas de las preguntas formuladas, entre ellas, las relativas a que el Ingeniero Meneses no conocía a Rojas Chávez antes del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta; que por esa razón no tuvieron negocios de ninguna clase; que pocos días antes del cinco del mes citado, diciéndose comisionado por varios empleados de la Compañía "Aviatega" se presentó a los hangares de la misma Compañía, para hablar con el Ingeniero Javier de Jesús Galindo Jimeno y con el articulante, con el objeto de pedirles que renunciaran el poder que les habían conferido los empleados de la mencionada Compañía; que pretendía que por sus servicios se le diera uno de los lotes de la Lotificación de los empleados de esa Compañía; que también pretendía que el Ing. Galindo y el articulante devolvieran en su favor los lotes que tenían; que pidió al Doctor Guillermo Morán que le entregara un dinero que sabía que ese facultativo debía al articulante; que como el Doctor Morán no le entregó ese dinero, exigió al interrogante que le firmara un pagaré para cubrirle una supuesta suma que se le debía; que más tarde ante el fracaso de sus gestiones ante la Secretaría de la Presidencia de la República, indicó que devolvería ese pagaré; y que jamás le entregó

al preguntante suma alguna de dinero. A solicitud de parte se señaló día para la vista y transcurrido éste, para mejor fallar se previno al Ingeniero Meneses que dentro del término legal presentara copia certificada del pagaré cuya nulidad se discute en este juicio. Cada una de las partes presentó la certificación del citado documento, que consiste en un pagaré en el cual consta que el señor Rojas Chávez, el cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta, recibió en efectivo y en calidad de mutuo del Ingeniero Antonio Meneses la cantidad de quinientos quetzales, con el plazo de dos meses para su devolución, reconociendo el interés legal, que en ese momento hizo efectivo. La firma que cubre ese pagaré fué autenticada por el Notario J. René Cárcamo.

RESULTA:

Al resolver el recurso de apelación, la mencionada Sala confirmó la sentencia de primer grado, con los siguientes razonamientos: "Las declaraciones de los testigos Alvarez Borges, Flohr y Cobar Alfaro, no se refieren al hecho principal, pues nada dicen acerca del pagaré ni en pro ni en contra y de ahí que nada prueben. La confesión ficta por sí sola tampoco puede probar plenamente los extremos de la demanda, porque aunque se hace constar que Meneses no le entregó dinero a Rojas y que aquél le exigió a éste que firmara un documento para cubrirle una suma de dinero que no le debía el Tribunal estima que el documento debidamente autenticado forma prueba en contra de la confesión ficta y destruye ésta, tanto más cuanto que no se alega ningún vicio en el documento ni se explica en forma lógica su existencia y de ahí que sea procedente sostener el fallo de Primera Instancia".

Contra este último fallo Juan Rojas Chávez, con el auxilio del Abogado Carlos Girón Zirión, interpuso recurso de casación, en los siguientes términos: "Contra esa sentencia de la Sala 3a. de Apelaciones, vengo a introducir recurso extraordinario de casación, recurso que fundo en que, en el fallo recurrido, se incurrió en violación, aplicación indebida e interpelación errónea de la ley; y error de derecho en la apreciación de la prueba rendida. Fundo el recurso en los Artos. 505 y 506, incisos primero y tercero, del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Estimo como violados los Artos. 340, 361, 362 y 364 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil e

indebidamente aplicado el artículo 367 del propio Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil". Habiéndose verificado la vista, procede resolver:

—I—

CONSIDERANDO:

Entre los motivos en que se funda el presente recurso de casación está el de error de derecho en la apreciación de la prueba, contenido en el inciso 3o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, por lo que debe examinarse en primer término, y al hacerlo, se advierte que el interponente omitió en qué consiste ese error, así como identificar las pruebas que lo contienen, a lo cual estaba obligado, ya que la naturaleza res-tringida de este recurso, no permite interpretar la intención del recurrente ni hacer un análisis generalizado de las pruebas aportadas al juicio, como tendría que hacerse de admitirse la forma en que fué planteado, pues aunque en su alegato el interesado hace una exposición de motivos, fué presentado después del día de la vista, oportunidad en que ya no era dable explicar los fundamentos del recurso; por consiguiente, las circunstancias apuntadas, impiden entrar al examen de los artículos 340, 361, 362, 364 y 367 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que se refieren a la estimativa de la confesión como prueba.

—II—

CONSIDERANDO:

En cuanto al otro caso de procedencia que es el contenido en el inciso 1o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, el recurrente no citó como violada ninguna ley, por lo que falta uno de los elementos indispensables para el análisis comparativo y en esas condiciones se está en la imposibilidad de estudiar este aspecto del recurso.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo considerado y lo prescrito en los artículos 222, 224, 227, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 506, 512, 518, 521 y 524

del Decreto Legislativo 2009, declara: sin lugar el recurso de casación de que se hizo referencia, condenando al interponente en las costas del mismo y a una multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia conmutará con ocho días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel suplido y en la forma correspondiente devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguilar Fuentes.

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí, Juan Fernández C. —

CIVIL

Seguido por Elena Valladares viuda de Cofiño contra Jorge Benjamín Soto y Hercilia de León Cofiño de Soto.

DOCTRINA:

DOCTRINA: Toda vez que la ley determina que la primera instancia comienza desde que se presenta la demanda y termina con la resolución del Juez que conozca del asunto, es correcta la declaración de abandono de la primera instancia aunque no se haya contestado la demanda, siempre que estén cumplidos los otros extremos necesarios para estimarlo consumado, ya que el sentido claro, natural y obvio de los términos empleados por la ley en este caso, excluye cualquier otro sentido o extensión que quisiera otorgársele a tal principio.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, treinta y uno de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina el auto dictado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, con fecha dieciocho de Diciembre del año próximo pasado, por el cual confirma el proferido por el Juez Segundo de Primera Instancia de este departamento, de veintitrés de Agosto del mismo año, declarando el abandono propuesto por la parte demandada, en el juicio ordinario seguido por Elena Valladares viuda de Cofiño contra Jorge Benjamín Soto y Hercilia de León Cofiño de Soto.

RESULTA:

Elena Valladares viuda de Cofiño se presentó al Juzgado Segundo de Primera Instancia de este departamento, con fecha veinticuatro de Agosto de mil novecientos cincuenta y tres, expresando: que por escritura autorizada por el Notario Héctor Cruz Franco, el veintiséis de Agosto de mil novecientos cuarenta y dos, los esposos Jorge B. Soto y Hercilia de León de Soto, reconocieron adeudar a su esposo José Cofiño Ubico la suma de nueve mil quinientos dólares americanos equivalente a igual suma en quetzales, para pagarse el día veintiséis de Agosto de mil novecientos cuarenta y tres, con intereses legales del seis por ciento anual, haciéndose constar que si el adeudo no fuera cubierto en la fecha indicada, los intereses se irían capitalizando cada seis meses hasta el efectivo pago del capital; que el doce de Julio de mil novecientos cuarenta y cinco falleció su esposo, titular del crédito referido, y habiendo sido ella instituida única y universal heredera de aquél, la obligación mencionada quedaba a su favor; que durante los años anteriores sus gestiones de cobro habían sido infructuosas, y como por razones de orden personal había dado largas al cumplimiento del adeudo, al grado de que el documento de obligación perdió su fuerza ejecutiva, para evitar que se consumara la prescripción se veía obligada a demandar en la vía ordinaria; que por consiguiente demandaba a las personas obligadas pidiendo que en sentencia se declarara: que las mismas son en deberle la suma de diez y siete mil ciento cincuenta y ocho quetzales, por capital, intereses capitalizados e intereses que se sigan causando hasta el efectivo pago de la obligación, debiendo los deudores efectuar el pago dentro de tercero día; y que las costas eran a cargo de los demandados; pedía además que se previniera a Hercilia de León de Soto, no ausentarse de la República sin dejar apoderado instruido y expensado. Acompañó a su demanda una copia legalizada de la escritura de obligación base de la acción entablada.

Tramitada la demanda en forma legal, aparte de las declaraciones obligadas del procedimiento, se decretó el arraigo de la señora de León de Soto, tal como se solicitara.

RESULTA:

Habiéndose notificado en forma a las partes el veinticinco de Agosto del propio año, el dos de Octubre siguiente compareció al Tri-

bunal, Carlos Francisco Soto de León, como apoderado general de Hercilia de León Cofiño de Soto, pidiendo se reconociera su personería y que por estar debidamente instruido y expensado, se levantara el arraigo acordado para su poderdante. El Tribunal accedió a lo pedido por resolución de fecha tres del mismo mes, apareciendo notificada la actora, de dicha providencia, el diez y ocho de Enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, a las once horas, por cédula entregada al Licenciado Ricardo Quiñónez.

RESULTA:

El veinte de Julio del mismo año próximo pasado, se presentó al Juzgado Héctor de León Cofiño, en concepto de nuevo apoderado general de Hercilia de León Cofiño de Soto, solicitando, por una parte, que se le reconociera su personería y, por otra, interponiendo incidente de abandono de la primera instancia, en vista de haber transcurrido el término para estimarlo consumado, teniendo en cuenta que la última diligencia practicada en el juicio tenía fecha diez y ocho de Enero de ese año, sin haber hecho la actora ninguna gestión durante dicho término. Reconociendo al presentado su personería, el Tribunal dió audiencia por dos días a la otra parte. Al evacuarla, la señora Valladares de Cofiño dice contestar negativamente el incidente en virtud de no haber transcurrido el término legal porque únicamente deben contarse los días hábiles, pues aunque el artículo 150 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil establecía que tal término era continuo incluyendo los días domingos y festivos, esa disposición quedó derogada y sustituida, en su parte final del primer párrafo, por el precepto fundamental que forma el artículo XXIX, en el inciso 4.º de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, que dice que en los términos legales y judiciales no se comprenden los días feriados ni los domingos; y que como tal disposición es un precepto fundamental de una ley constitutiva, emitida con posterioridad a la antes mencionada, debe ser ésta la que prevalece en los cómputos de la naturaleza del que se trata.

RESULTA:

Al resolver el incidente, el Juez declaró con lugar el abandono promovido por la parte demandada y por consiguiente extinguida la ac-

ción deducida. Interpuesta apelación por la actora, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, mediante el auto que se examina, confirmó el apelado. Dicho Tribunal considera "que la resolución recurrida se ajusta a derecho, por cuanto que, la última diligencia practicada en el juicio antes de acusarse el abandono lleva fecha dieciocho de Enero del año en curso, y éste fué acusado el día veinte de Julio siguiente, fecha a la que, como puede observarse, habían transcurrido los seis meses que la ley señala para que se consume, ya que en dicho término se incluyen los días festivos y los domingos. Y como la parte actora no acreditó durante la dilación probatoria del incidente, legítimo impedimento para promover, debe confirmarse la decisión de primer grado".

Contra tal pronunciamiento y con el auxilio del Abogado Oscar Paiz, Elena Valladares viuda de Cofiño introdujo recurso de casación, por violación e interpretación errónea de la ley. Cita como violados los artículos 135, 145, 147, 148 y 150 del Decreto Legislativo 2009 y XXIX inciso 5o. de los Preceptos Fundamentales del Decreto Gubernativo 1862; y como fundamento del recurso los artículos 2o. del Decreto 388 del Congreso y 506 inciso 1o., 511, 512, 513 y 518 del Decreto Legislativo 2009. Argumenta la recurrente que "de conformidad con el Arto. 147 en concordancia con el Arto. 150 del Deto. Leg. 2009, para el abandono de la primera instancia se requiere: a) que transcurran seis meses sin continuar la instancia; y b) que este término se compute desde la fecha de la última diligencia practicada en el JUICIO. Por consiguiente, si aún no ha principiado el juicio, porque no está contestada la demanda ni se ha tenido por contestada, lógicamente no hay última diligencia practicada en juicio y por ende no puede correr el término del abandono cuando no existe punto de partida para su cómputo". Después de citar la opinión de autores para demostrar que sólo existe juicio cuando se ha contestado la demanda, agrega: "La forma en que resolvió la Sala, confirmando el incidente de abandono acusa evidente falta de estudio, pues sensiblemente para los fueros de la justicia confunde la instancia con el juicio, asentando, tácitamente, que éste principia con la interposición de la demanda. Para personas de experiencia en el largo discursar de su carrera judicial, tal error es inexcusable, pues nadie con mediana cultura jurídica puede ignorar: QUE EL JUICIO es una de las etapas o fases cuya sucesión y des-

arrollo constituyen el proceso. Es corriente el caso que una persona a quien se le demanda, en virtud de una excepción de falta de personería propuesta, y antes de la contestación de la demanda se le excluya de la acción, en cuyo caso hubo instancia pero no hubo juicio...".

Habiéndose efectuado la vista el día señalado, ocasión en que cada una de las partes presentó las alegaciones que creyó del caso, procede resolver.

CONSIDERANDO:

Citado debidamente el caso de procedencia que se refiere a violación e interpretación errónea de la ley, vicios que la recurrente atribuye al auto en estudio como razón del sometimiento, se impone el examen de los preceptos cuya infracción se acusa, tomando en cuenta la tesis sostenida por la interesada en relación con los hechos aceptados por el Tribunal de segundo grado como prueba determinante de la resolución de mérito.

Base de la argumentación de la recurrente —expuesta en su escrito inicial y repetida en su alegato presentado con ocasión de la vista— es que únicamente puede haber abandono cuando existe juicio, y que el juicio sólo surge al contestarse la demanda y no antes; y que, por ende, toda declaración de abandono que soslaye tales enunciados es contraria a claras disposiciones de la ley, como sucede en el presente caso.

El primero de los artículos que se cita como violado e interpretado erróneamente, 135 del Decreto Legislativo 2009, expresa: "La primera instancia comienza desde que se presenta la demanda y termina con la resolución del Juez que conozca del asunto; la segunda instancia, desde que se reciban los autos en el Tribunal Superior, hasta que se dicte el fallo final", siendo evidente entonces que para la primera instancia no se exige otro extremo más que haber comparecido en demanda ante el Juez correspondiente. Ahora bien, en correlación con el precepto transcrito cabe fijar la atención en el capítulo relativo al abandono, del Decreto antes mencionado, que de manera taxativa aplica los efectos de tal institución a "una instancia o recurso", entendiéndose por instancia, según concepto jurídico de la Real Academia Española, "cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene establecidos para ventilar y sentenciar en

jurisdicción expedita”; de donde se infiere lógicamente y a *contrario sensu*, que el precepto así concebido excluye desde luego cualquier otro sentido o extensión que quisiera otorgársele, pues ello estaría en pugna con las reglas de hermenéutica estatuidas por el Decreto Gubernativo 1862, que determina que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, y que siendo claro no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. De consiguiente, lejos de advertirse los vicios impugnados, el artículo de referencia ha sido correctamente aplicado.

En cuanto a la segunda premisa asentada como argumento del recurso, esto es, que el juicio surge hasta que ha sido contestada la demanda, la recurrente intenta relacionarla con la violación e interpretación errónea del artículo 147 del mismo Decreto, que dice que “el tiempo para el abandono de una instancia o recurso, corre desde la fecha de la última diligencia practicada en el juicio, sea o no de notificación”, porque, según estima, al no haber juicio tampoco existe punto de partida para computar el tiempo corrido para el abandono. Sobre lo que ya se expresó respecto a los alcances del artículo antes examinado al referirse a instancia, cabe advertir, por una parte, que el vocablo “juicio” que el legislador usó en el artículo que se estudia, no tiene en realidad en este caso la acepción doctrinariamente específica que la recurrente pretende encontrarle, pues si así fuera vendría a significar un contrasentido con los claros conceptos de aquel artículo a que se hizo mención; y por la otra, es notorio que en el contexto legal con frecuencia se aplica esa palabra sin la limitada condición que quiere atribuírsele, ya que indistintamente se le emplea como sinónimo de proceso, litigio, controversia, etc., circunstancia que no es exclusiva de nuestra legislación sino común a otras, tal se desprende de los comentarios de la obra de Cornellutti “Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano” (página 32). En consecuencia, tampoco este artículo ha sido violado o interpretado erróneamente.

Como derivación de las razones que anteceden, no se descubre en el auto recurrido infracción de los otros preceptos que se denuncian, porque en lo que hace a los artículos 145, 148 y 150 del mismo Decreto Legislativo 2009, que respectivamente se refieren: a que la gestión de alguna de las partes y toda diligencia que se practique en el juicio interrumpa el abandono; a que el Juez no puede de-

clarar abandonado un recurso o instancia sino a solicitud de parte y vencido el término legal y al transcurso del tiempo que es necesario para que se consume el abandono —seis meses para la primera instancia y tres meses para la segunda, incluyendo domingos y días festivos—, son todas apreciaciones que el Tribunal a-quo precisamente califica en concepto de hechos probados que sirven de fundamento a su resolución, concordantes con las normas antes estimadas y que no pueden ser motivo de examen u objeción por parte de este Tribunal dentro del caso de procedencia que se ha invocado; y en cuanto al artículo XXIX de los Preceptos Fundamentales del Decreto Gubernativo 1862, también incluido entre los violados a juicio de la interponente, el cual consigna que “en los términos legales y judiciales no se comprenden los días feriados que se declaren oficialmente, ni los domingos”, preciso es tener presente que el Decreto Legislativo 2009 —ley especial que regula todo lo concerniente al abandono— jurídicamente prevalece en este caso sobre las disposiciones generales del Decreto primeramente mencionado, por cuya razón al hacerse el cómputo del tiempo transcurrido para el abandono en el auto de mérito, no fué violado por la Sala. Artículos III, IV, XII y XIV de los Preceptos Fundamentales del Decreto Gubernativo 1862.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el presente recurso, condenando a la recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales que, en caso de insolvencia, conmutará con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel en la forma que corresponde y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C. —

Contencioso-Administrativo

Recurso interpuesto por Rafael Rodríguez Cerna, como apoderado de Humberto Casado Sigüí, contra resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DOCTRINA: *La facultad concedida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para revocar una resolución administrativa, implica no solamente el hecho de dejar sin efecto la resolución recurrida, sino el de dictar lo que considera ajustada a derecho.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, cinco de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación y con sus antecedentes, se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, el veinticuatro de mayo del corriente año, en el recurso de esa naturaleza interpuesto por Rafael Rodríguez Cerna, como apoderado de Humberto Casado Sigüí, contra la resolución número ochocientos sesenta y ocho proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el dos de abril del año en curso.

HECHOS:

El treinta de octubre de mil novecientos cincuenta y uno se presentó al Ministerio de Agricultura, el señor Rafael Rodríguez Cerna, como apoderado de Humberto Casado Sigüí, exponiendo: que Casado Sigüí fué Jefe de Transportes de dicho Ministerio, que en tal carácter pagó de su peculio personal varias facturas a cargo del Ministerio y que no se le han pagado por no haber salido los acuerdos de erogación; que hacía algunos meses de orden del Ministerio había sido comisionado Haroldo Zea para que hiciera un informe, el cual se encontraba en el Despacho y que además el Contador Antonio Marroquín había levantado una acta en la que hizo constar el adeudo; que por lo anterior pedía que se dictara el acuerdo de erogación. El Ministerio hizo saber al interesado que las facturas estaban sujetas a revisión por parte del Tribunal y Contraloría de Cuentas, por no haber sido posible comprobar el destino que se les dió a muchos repuestos y accesorios. Obra en el expediente el informe rendido por Haroldo Zea L., Ayudante Segundo de la Oficina de Contabilidad del Ministerio, y quien verifica-

ra la efectividad en la entrega de repuestos y accesorios a que se refieren las facturas habiéndola comprobado en la mayoría de las mismas. También aparecen agregadas las facturas respectivas, fechadas en su mayor parte en el año de mil novecientos cuarenta y nueve.

El Ministerio de Agricultura, con fecha veinte de noviembre del mismo año, pasó el expediente a la Presidencia del Tribunal y Contraloría de Cuentas para que dictaminara, haciendo constar su extrañeza de que las facturas se presentaran tan tardíamente y que no se hubiese tenido conocimiento de la compra de los artículos a que las mismas se refieren. Dicha institución nombró al Contralor Antonio Marroquín M., para que investigara e informara, y por enfermedad de éste, al señor José Herrera Martínez. El Contralor Herrera Martínez expuso: que de las investigaciones que hizo pudo comprobar: que la cuenta en los Almacenes de Equipos Mecánicos por cincuenta y cuatro quetzales, aún se adeuda, lo mismo que la de los talleres "Cantón" por setenta y cinco quetzales; que Casado incurre en varias contradicciones: 1) en cuanto a las fechas de toma de posesión de su puesto y entrega, y 2) en cuanto a manifestar que para cubrir las facturas tuvo que hacer un préstamo a Gregoria Cuca, siendo que la escritura de mutuo fué celebrada con anterioridad a la fecha de recibo del puesto; que le parece extraño que Casado haya retenido las facturas por espacio de dos años y no las haya cobrado o redimido a su debido tiempo, y que es preciso que se aclare cómo obtuvo los fondos. A folio 143 obra una nómina de las facturas entregadas por Casado Sigüí, según acta levantada el doce de junio de mil novecientos cincuenta y uno, con intervención del Contralor del Tribunal de Cuentas, Antonio Marroquín M., y del Jefe del Departamento de Contabilidad del Ministerio de Agricultura, José Castro Conde, facturas que suman un total de setecientos sesenta y dos quetzales con cincuenta y tres centavos.

Con el dictamen de Herrera Martínez, que la Presidencia del Tribunal y Contraloría de Cuentas estimó correcto, el expediente volvió al Ministerio de Agricultura, que se limitó a hacer saber tal dictamen. El interesado objetó el dictamen y presentó testimonio de la escritura pública a favor de Gregoria Cuca viuda de Rivas, otorgada ante el Notario Juan Ibarra a veinticuatro de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, en donde se hace constar que Dolores Melgar Marroquín viuda de

García y Casado Siguí, se declararon deudores solidarios de la expresada señora por la cantidad de quinientos cincuenta y cinco quetzales. Oído el Ministerio Público, opinó que, mientras el reclamo de Casado Siguí no esté bien justificado, no puede ser atendido. Emitió opinión el asesor jurídico del Ministerio, quien sí estuvo conforme en que se dictara el acuerdo de erogación, "por ser justo y procedente", ya que se había podido comprobar la existencia o el destino de los repuestos y accesorios o de los servicios que amparan algunas facturas, debiéndose referir el acuerdo a las cuentas cuya legitimidad se ha comprobado. El Ministerio dictó resolución número cinco mil ciento cuarenta y siete, con fecha tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, declarando sin lugar la solicitud de Casado Siguí, por estimar que dicho señor estaba obligado a presentar para su cancelación y tan pronto como le fueron entregadas por los interesados, las facturas por compras de accesorios e implementos y reparaciones de vehículos; que lejos de cumplir con tal obligación, retuvo sin causa justificada y por mucho tiempo los referidos documentos, y que, por otra parte, no estaba autorizado para hacer los pagos de su peculio, substituyéndose a los acreedores.

Contra esta resolución interpuso el interesado recurso de reposición, el cual fué declarado sin lugar por extemporáneo el dieciocho de abril de mil novecientos cincuenta y tres; pero habiéndose promovido la nulidad de las diligencias por falta de notificaciones de la resolución principal, ésta nulidad fué acordada el veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, y tramitado nuevamente el recurso de reposición, el Ministerio Público opinó que se concediese, por considerar prematura la resolución del Ministerio, sin dar oportunidad a Casado de justificar los extremos de su gestión. El Ministerio, con fecha trece de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, y en resolución número cuatro mil doscientos setenta y dos, declaró procedente la reposición y mandó que, previos los trámites de rigor, se emitiera acuerdo de erogación por la cantidad de ochocientos once quetzales noventa y tres centavos, a favor de las siguientes personas: de Casado Siguí, por seiscientos ochenta y dos quetzales noventa y tres centavos; de Equipos Mecánicos de Guatemala, por cincuenta y cuatro quetzales, y de "Talleres Cantón" por setenta y cinco quetzales. El Ministerio consideró: que la Asesoría Jurídica del mismo había dictaminado en sentido favorable; que el Tribunal y Con-

traloría de Cuentas y el Ministerio Público estuvieron de acuerdo en que se hiciese el reintegro, siempre que Casado justificara la forma en que había obtenido el dinero para la cancelación, lo que al Ministerio le parecía innecesario, y que era de estricta justicia devolver al peticionario las sumas reclamadas, por estar demostrado que no han sido canceladas por el Estado.

Formulado el Acuerdo de erogación, pasó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los efectos de ley, pero no habiendo autorizado este Ministerio el acuerdo, el apoderado de Casado Siguí reiteró tal solicitud o que en su caso el Ministerio expusiera las razones para no autorizar dicho acuerdo. El Ministerio de Hacienda dictó la resolución número cincuenta y cinco, de fecha trece de enero del corriente año, por la cual se expresa que se haga saber al presentado que el Gobierno de la República está considerando los adeudos que tienen pendientes las oficinas del Estado, por lo que oportunamente se resolverá sobre el particular. De esta resolución interpuso el peticionario recurso de reposición. Corridas las audiencias del caso, el Ministerio Público opinó por que se denegase el recurso, puesto que la resolución ministerial no definía el asunto, indicando simplemente que se encontraban en estudio los adeudos del Estado; el Consejo de Estado expresó que no le correspondía emitir dictamen, y el Departamento de Estudios Hacendarios y Consejo Tributario, que, además de lo dicho por el Ministerio Público respecto a la providencia del Ministerio de Hacienda, encuentra que lo resuelto por el Ministerio de Agricultura se hizo en forma imperfecta y sobre bases que no se ajustan a la realidad, analizando los dictámenes en que se basó aquella resolución, y, por último, que en cumplimiento de lo dispuesto por los incisos II y III del Artículo 47 del Decreto del Congreso 515, se necesita que el Tribunal y Contraloría de Cuentas visen el Acuerdo de Erogación, antes de que sea firmado por el Ministro de Hacienda y por el Presidente de la República; que el Tribunal y Contraloría de Cuentas sólo podrá visar el acuerdo si hay una liquidación concreta sobre las cuentas que el Ministerio de Agricultura reconoce, si con los documentos presentados quedan legalmente comprobados los gastos y si tales pagos no dejan lugar a reparos posteriores. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dictó la resolución número ochocientos sesenta y ocho, declarando sin lugar el recurso de reposición interpuesto, con base en los dos dictámenes anteriores.

Rafael Rodríguez Cerna, en su carácter de apoderado de Humberto Casado Siguí, interpuso con fecha veinte de abril del corriente año, recurso contencioso administrativo contra las dos resoluciones mencionadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y después de relatar los antecedentes del caso, pidió que previas las audiencias respectivas y no teniendo pruebas que rendir, por ser las resoluciones del Ministerio de Hacienda contrarias a la ley, se dictase sentencia en la que se declarase que el titular de dicho Ministerio debe suscribir el Acuerdo de Erogación a que el recurso se refiere. El Tribunal ordenó que se oyese por el término de nueve días al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio Público, habiendo evacuado solamente el primero la audiencia concedida, exponiendo, entre otras cosas, que el adeudo que se cobra al Estado no correspondía al ejercicio fiscal en vigor, sino a uno muy anterior, para cuya cancelación no existe partida específica en el presupuesto, y que por eso se indicó al interesado que el Gobierno se encontraba estudiando las diferentes obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, a fin de hacerlas figurar en la Deuda Pública, previa comprobación de su legitimidad, para asignar en los futuros presupuestos una partida específica para la cancelación de dicha Deuda Pública. Teniéndose por contestada negativamente la demanda y señalando día para la vista, se dictó la sentencia que se examina.

El Tribunal consideró: que la resolución del Ministerio de Agricultura del trece de octubre del año próximo pasado, fué aceptada por la parte interesada, quedando en consecuencia, firme, por lo que no cabe discutir la legitimidad o ilegitimidad de los créditos cobrados por Casado Siguí, sino solamente hacerlos efectivos; que en cumplimiento de dicha resolución, el Ministerio de Agricultura emitió y firmó el Acuerdo de Erogación de fecha veintiocho del mismo mes y que todo cuanto procedía era completar la suscripción del mismo acuerdo y llenar las demás formalidades para proceder a su pago, sin que sea óbice para retardar el cumplimiento de esas formalidades, el que la partida a cargo de la cual fué emitido el acuerdo se hallare agotada; que por lo expuesto, por causar gravamen la resolución recurrida y negar eficacia a lo resuelto por el Ministerio de Agricultura dentro de sus atribuciones regladas, procede revocarla, lo que así declara, con el siguiente agregado: "y manda: se proceda a llenar los requisitos que aún faltaren al acuerdo gubernativo de veintiocho de octubre de mil novecientos cua-

renta y cuatro, emitido por el órgano del Ministerio de Agricultura, quedando a salvo el derecho de la parte interesada de pedir su revalidación en su oportunidad, si se hallare agotada la correspondiente partida del presupuesto".

Contra esta sentencia interpuso el Ministro de Hacienda y Crédito Público, señor Jorge Echeverría Lizarralde, recurso extraordinario de casación, que lo fundamentó en los incisos 1o. y 5o. del Artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, reformado por el Artículo 2o. del Decreto 388 del Congreso y en los Artículos 1o. y 2o. del Decreto 60 de la Junta de Gobierno, impugnando el fallo por violación e interpretación errónea de la ley y por otorgar más de lo pedido Cita como violado el Artículo 41 del Decreto Gubernativo 1881, y, además, como violados y erróneamente interpretados, los Artículos 11 y 12 del mismo Decreto; que estos Artículos fueron violados y mal interpretados, por que el Artículo 11 determina claramente cuáles son los requisitos de las resoluciones administrativas contra las que puede interponerse recurso contencioso-administrativo y en su inciso 1o. requiere que hayan causado estado; que por su parte el artículo 12 indica que se entenderá que causan estado las resoluciones de la Administración que decidan el asunto, directa o indirectamente; que el Tribunal sentenciador en forma antojadiza estimó que la resolución impugnada había causado estado por haber decidido el asunto, pero que nada estaba más alejado de la realidad, porque la resolución ministerial simplemente estaba difiriendo para mejor oportunidad el pago del adeudo; que el Ministerio de Hacienda tiene obligación de hacer los estudios necesarios antes de cancelar adeudos por ejercicios anteriores, para evitar perjuicios a los acreedores y al propio Estado, y que con tal fin, se emitió el Decreto Presidencial 119, a efecto de que para conocer con exactitud el pasivo nacional, todas las acreedurias legítimas de ejercicios anteriores deberían ser inscritas para su estudio y mejor comprobación y hacer los cálculos para que en futuros presupuestos se fueran amortizando; que el Artículo 41 fué violado, porque, conforme este Artículo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solamente pudo revocar, confirmar o modificar la resolución administrativa, y no obstante eso, hizo el agregado en la sentencia, ordenando al Ministerio que llenase los requisitos que aún faltaban al acuerdo. Pide que en su oportunidad se case la sentencia y se dicte la que procede en derecho, que no puede ser otra que

confirmar la resolución del Ministerio número ochocientos sesenta y ocho. Se funda, además en los Artículos 511, 512, 513 y 518 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo 2009. Señalado día para la vista, es el caso de resolver.

CONSIDERACIONES:

—I—

La ley de lo Contencioso Administrativo, contenida en el Decreto Gubernativo 1881, establece las normas de procedimiento a que se ha de sujetar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a la admisión y tramitación de esa clase de recursos. Tal ha sido el criterio sustentado reiteradamente por esta Corte, y específicamente en cuanto a los artículos 11 y 12 del mencionado Decreto, se dijo en la sentencia dictada por este Tribunal el dieciocho de julio del corriente año, en el recurso contencioso-administrativo seguido por la "Curacao Trading Company, S. A.", contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dichos preceptos establecen requisitos de orden procesivo cuya violación no puede ser citada para los efectos del recurso de casación como caso de error de fondo. El recurrente, basándose en el inciso 1o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, expresa que el Tribunal sentenciador violó e interpretó indebidamente los artículos mencionados —inquestionablemente al darle trámite a la demanda contencioso-administrativa— porque el Tribunal en forma antojadiza estimó que la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se impugnó en dicho recurso, había causado estado por haber decidido el asunto, y que nada estaba más alejado de la realidad, puesto que la resolución ministerial simplemente estaba difiriendo para mejor oportunidad el pago del adeudo. De lo dicho se deduce que el recurrente pretende, basándose en el caso del error de fondo, que en el presente recurso de casación se analicen cuestiones de orden procesivo que establecen condiciones de admisión del recurso, pero que no se refieren al fondo de la cuestión debatida, por cuya razón no puede determinarse si los artículos citados fueron violados por el Tribunal sentenciador.

—II—

Basándose en el inciso 5o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, el recurrente manifiesta que el Tribunal sentenciador violó el artículo 41 del Decreto Gubernativo 1881, otor-

gando más de lo pedido, porque este último artículo prescribe que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo "revocará, confirmará o modificará la resolución administrativa" contra la cual se recurre, y que el Tribunal, excediéndose en esas facultades, hizo un agregado en la sentencia, ordenándose al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que procediese a llenar los requisitos que aún faltaban en el acuerdo de erogación a favor del reclamante. Lo aseverado por el recurrente carece de exactitud, por cuanto que la palabra revocar en el Derecho Procesal implica no solamente el hecho de dejar sin efecto una resolución dictada con anterioridad por otro o el mismo Tribunal o autoridad, sino el de dictar aquélla que se considera más ajustada a derecho; es decir, que es tanto un acto negativo como un acto positivo, por la ineludible obligación de los Tribunales de pronunciarse sobre los puntos controvertidos, asumiendo el conocimiento íntegro de la cuestión. (Véase Enciclopedia Jurídica Española, Tomo XXVII, pág. 618). Ello es tanto más evidente cuanto que la ley autoriza al Tribunal no solamente a revocar o confirmar, sino a modificar la resolución recorrida, concepto este último que por su amplitud comprende todos aquellos aspectos en que el Tribunal sentenciador no está de acuerdo sobre la cuestión de fondo y que por tanto ajusta a su particular criterio. El agregado a que se refiere el recurrente en la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es la que da a ésta su carácter positivo, a efecto de no hacer inoperante la revocatoria acordada, razón por la cual esta Corte estima que no pudo ser violado el artículo 41 del Decreto Gubernativo 1881 ya citado.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo considerado y en lo prescrito por los artículos 1o. y 2o. del Decreto 60 de la Junta de Gobierno; 222, 224, 232, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 521, 523, 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: IMPROCEDENTE el presente recurso de casación. Notifíquese, y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Herrarte González).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruamo Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Jorge Lamport Rodil, en representación de "Maple Leaf Milling Co. Ltd." contra el registro de la marca "Reina del Oeste".

DOCTRINA: Los signos o denominaciones que se confundan o den lugar a confusión con marcos debidamente inscritos o por inscribirse en el Registro respectivo, no podrán registrarse como nuevas marcas, de conformidad con lo establecido por el artículo 70. inciso 7o. del Decreto Gubernativo número 882.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, ocho de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintiséis de Noviembre del año próximo pasado, en el recurso de esa naturaleza que Jorge Lamport Rodil interpuso contra las resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Trabajo, que declaran sin lugar la oposición hecha al registro de una marca comercial, solicitada por Miguel Angel Tejada Morales, su reposición, y revocatoria de la que emitió Marcas y Patentes.

Del estudio de los autos,

RESULTA:

Con fecha veinticuatro de Octubre de mil novecientos cincuenta y tres, Miguel Angel Tejada Morales se presentó a la Oficina de Marcas y Patentes, solicitando se registrara a su nombre la marca "REINA DEL OESTE", para amparar productos de harina, agregando que acompañaba el clisé y la descripción por duplicado y ofreciendo probar el pago del impuesto fiscal respectivo.

RESULTA:

El dos de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, se presentó Jorge Lamport Rodil, con la personería que acreditó, manifestando que "MAPLE LEAF MILLING CO. LTD.", de Toronto, Ontario, Canadá, tiene registrada a su favor la marca "CREMA DEL OESTE", bajo el número ocho mil ciento veinte, (8120), en el folio doscientos trece (213), del Tomo treinta (XXX), respectivo; que como en el

Diario Oficial, del martes diecisiete de Noviembre de aquel año, se publicaba una solicitud de registro para la marca "REINA DEL OESTE" que daría lugar a confusión con la que tenían registrada sus poderdantes, se opoñía al registro de la marca "REINA DEL OESTE". Acompañó los documentos justificativos de su personería y pidió que se certificara en el expediente la inscripción de la marca "CREMA DEL OESTE".

Tal gestión se mandó agregar a sus antecedentes para lo que oportunamente hubiera lugar y se ordenó certificar lo pedido.

Presentadas las publicaciones hechas, la Oficina de Marcas y Patentes se manifestó en favor de la denegatoria, elevando lo actuado al Ministerio de Economía, de donde se mandó oír al Ministerio Público, en cuyas dependencias, después de tener a la vista las marcas en disputa y hacer un análisis de ellas, se concluyó por decir que: aunque eran semejantes esto no era bastante para confundir y por ello opinaban por que se declarara sin lugar la oposición y se registrara la del señor Tejada Morales. Este criterio, últimamente expuesto, está corroborado por el Asesor Jurídico del Ministerio de Economía.

RESULTA:

Con los antecedentes referidos, el Ministerio de Economía, dictó la resolución número cero, cero, mil ochocientos veintisiete, (001827), de fecha cinco de Abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, en la que, "... al resolver, declara infundada la oposición y procedente el registro de la marca "REINA DEL OESTE".

En cumplimiento de lo mandado por el Ministerio, la Oficina de Marcas y Patentes, en resolución de nueve de Abril de aquel mismo año, mandó notificar a las partes que se inscribiría la marca "REINA DEL OESTE", dentro del término legal. De esta providencia se pidió revocatoria, fundándose en haber introducido recurso de reposición contra lo resuelto por el Ministerio de Economía.

Interpuesto recurso de reposición, contra la resolución número cero, cero, mil ochocientos veintisiete, (001827), fué debidamente tramitado y al final denegado, en resolución número cero, cero, tres mil ciento cuarenta, (003140), de fecha cuatro de Junio del año próximo pasado, resolviendo en igual forma la revocatoria pedida a Marcas y Patentes.

RESULTA:

Contra las resoluciones números mil ochocientos veintisiete y tres mil ciento cuarenta, (1827 y 3140) del Ministerio de Economía y Trabajo, Jorge Lamport Rodil introdujo recurso contencioso administrativo, el treinta de Agosto del año próximo pasado, presentando la documentación que justifica la representación ejercida y ofreciendo probar la confusión producida en el comercio por las marcas en disputa.

Corrido el término de las audiencias concedidas al Ministerio Público y de Economía y Trabajo, sin que éstos hicieran uso del mismo, se abrió a prueba el recurso, durante cuyo lapso se rindió la información de los señores Ricardo Camacho Bory y Jorge Madriz Aguilar, sobre que las dos marcas objeto de esta litis han producido confusión en el comercio, después de lo cual se señaló día para la vista, en resolución de dieciséis de Octubre de dicho año. En ese estado del procedimiento se presentó Miguel Angel Tejeda Morales pidiendo se le tuviera como tercero coadyuvante de la Administración Pública, en el recurso de mérito, lo que así se resolvió.

RESULTA:

Con los antecedentes referidos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veintiséis de Noviembre del año próximo pasado; dictó sentencia diciendo: "DECLARA: sin lugar el recurso de que se ha hecho mérito y, en consecuencia, confirma las resoluciones recurridas".

Para hacer tal pronunciamiento, el Tribunal sentenciador considera que los distintivos dados por el interesado para el registro de la marca "REINA DEL OESTE" no consisten únicamente en esta frase, sino además en una serie de detalles que hacen inconfundibles las leyendas de una y otra, así como sus dibujos; "Que aún cuando ambas marcas amparan productos similares, no existe motivo alguno deducido de las constancias de autos, para presumir de modo evidente que la marca "Reina del Oeste" fué confeccionada imitando la marca ya registrada, "Crema del Oeste"... "y las razones de los testigos declarados adolecen de vaguedad y pudiera resultar interesada la de Camacho Bory, porque la harina que ha tratado de vender es marca "Crema del Oeste".

Contra la sentencia detallada y auxiliado por el Abogado Carlos Rodil, Jorge Lamport

Rodil introdujo recurso extraordinario de casación, diciendo: "No estoy conforme con esa sentencia, pues como lo expuse y demostré con argumentos lógicos, la denominación de la marca que pretende registrar el señor Miguel Angel Trejo, o sea "REINA DEL OESTE", puede dar lugar a confusión entre el público y de hecho ya la ha dado, con la que para el mismo producto tienen registrada desde hace muchos años nuestros poderdantes, o sea "CREMA DEL OESTE". En tal virtud, interpongo contra la sentencia de mérito el RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION y cito como violado el inciso 7o. del artículo 7o. del Decreto Gubernativo No. 882, aprobado por el Decreto Legislativo No. 2079, o sea la "Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales".

"Me fundo en los artículos: 505, 506 inciso 1o., 511, 512 y 513 del Decreto Legislativo No. 2009; y Decreto No. 60 emitido por la Junta de Gobierno el 26 de agosto del año en curso".

Al formular su alegato dice que: como lo demostró con argumentos lógicos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo "la denominación de una marca es tan importante y desde cierto punto de vista aún más, que el emblema; y que las denominaciones "Reina del Oeste" y "Crema del Oeste" pueden dar lugar a confusión empleadas para el mismo artículo", por lo que, apoyado en el juriconsulto argentino Pedro C. Breuer Moreno y en la jurisprudencia internacional, ruega tener en cuenta las diferentes clases de confusiones que pueden ocurrir, pues la de su caso existe por semejanza fonética y similitud de ideas; que muchas veces, no teniendo el consumidor ambas marcas a la vista, para hacer comparaciones, sino distanciadas en el tiempo generalmente, y siendo el público distraído de ordinario, debe tenerse presente la jurisprudencia suiza, citada por el autor Breuer Moreno, de que no sólo se trata de salvaguardar los intereses del público, sino sobre todo del interés del fabricante, quien sin ninguna culpa es la verdadera víctima de la confusión.

Corridos los trámites del caso es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

el presente recurso fué interpuesto porque se asegura que la sentencia impugnada violó el inciso 7o. del artículo 7o. del Decreto Gubernativo 882, (aprobado por el Decreto Legis-

lativo 2079), al confirmarse en ella lo resuelto por el Ministerio de Economía, bajo la consideración de que son inconfundibles los dibujos y leyendas de ambas marcas. El recurrente cita en su apoyo el artículo 506, inciso 1o. del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil.

El artículo 7o. inciso 7o. del Decreto Gubernativo 882, establece que no podrán registrarse como marca los distintivos QUE DEN LUGAR A CONFUSION con otras marcas registradas o por registrarse. Es decir: la ley no sólo prohíbe el registro de marcas que obligadamente se confundan, sino también el de las que PUEDAN CONFUNDIRSE, para garantizar así, con mayor amplitud, la seguridad que el Estado debe a sus asociados, tanto en cuanto al consumidor del producto marcado, como en cuanto al productor que lo marca. De manera que, mandarse registrar una marca que puede confundirse con otra ya registrada, porque hecho sólo un análisis cuantitativo y no además cualitativo, como debe ser, se ve que no se confunden obligadamente, es vulnerar el contenido y el objeto del inciso y artículo 7o. referidos. Por tales razones, se impone la anulación del fallo recurrido y la emisión del que en ley corresponde.

CONSIDERANDO:

El artículo primero del Decreto Gubernativo número 882, define las marcas diciendo que: son los signos o denominaciones usados por los industriales, comerciantes y agricultores, con el fin de identificar los artículos, que producen o expenden y establecer su procedencia u origen; lo que es igual a decir: donde se encuentre UNA DENOMINACION o UN SIGNO, o ambos a la vez, que identifiquen un producto o expendio y establezcan su origen o procedencia, hay una marca. De manera que éstas llegan al conocimiento de los hombres por medio del sentido de la vista, si es un signo y, tanto por tal sentido como por el del oído, si se trata de una denominación. En el caso bajo estudio existen las dos formas combinadas, según se ve en el folio veintitrés de la primera pieza del proceso y en las descripciones de folios tres y once de la misma, por las que se constata la inconfundibilidad de los signos. Ahora, respecto de la marca constituida por la DENOMINACION debe hacerse un análisis más detenido para saber si son confundibles o no.

Las frases "CREMA DEL OESTE" y "REINA DEL OESTE", tienen de común la sinalefa "del" y el sustantivo "oeste", que están rigiendo al sujeto "CREMA", en la primera y "REINA", en la segunda. En cuanto a las expresiones "del" y "oeste" nada hay que decir para el caso, porque son iguales, pero respecto a "CREMA" y "REINA", por referirse a una misma substancia, o sea a la "HARINA", debe determinarse su significado en aquellas locuciones, para saber si al oírlas se puede o no confundir su sentido. No cabe la menor duda de que con tales vocablos no se quiso decir "harina crema" ni "harina reina", simplemente, sino que se trata de hacer entender que ambas harinas son la reina de las harinas o la crema de las harinas, que en último término resulta igual, porque cualquiera de las dos da a entender que la harina "del oeste" es la mejor, de donde viene la posibilidad de confundir el criterio de los consumidores y perjudicar a los interesados en ambos productos, que es lo que la ley no quiere y por ello prohíbe el registro de una marca que esté en tales condiciones, por lo que la oposición hecha al registro de la marca, constituida por la denominación "Reina del Oeste", que pretende Miguel Angel Tejeda Morales, está ajustada a la ley. Artículos citados, 7o. inciso 7o., 12, 23 del Decreto Gubernativo 882; I, IV, XII, XIII y XXII de los Preceptos Fundamentales Decreto Gubernativo número 1862.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224, 227, 228, 233 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 518 y 524 del Decreto Legislativo 2009, REVOCA la sentencia recurrida y, resolviendo sobre lo principal, declara: procedente la oposición hecha para que se registre la marca pretendida por Miguel Angel Tejeda Morales, con la denominación "REINA DEL OESTE", y, como consecuencia sin lugar tal registro. Notifíquese, repóngase el papel empleado por el sellado de Ley y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes.— (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R.— G. Aguilar Fuentes.— J. M. Moscoso E.— Alberto Herrarte.— J. A. Ruano Mejía.— Ante mí: Juan Fernández C.—

CIVIL

Licenciado Eugenio Valentín López González apoderado de Francisca Enríquez Rizo viuda de Leal contra María Celia Ramírez Rodríguez de Parrilla y mortal de Julián Ramírez.

DOCTRINA: *Se quebranta substancialmente el procedimiento cuando se ha seguido el juicio en que figura como parte una sucesión, notificándose al representante de la misma sin que llene los requisitos legales para reconocerle tal carácter.*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: GUATEMALA, doce de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia de fecha diez y seis de Marzo del año próximo pasado, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en juicio ordinario seguido por Francisca Enríquez Rizo viuda de Leal contra María Celia Ramírez Rodríguez (o María Celia Leal Enríquez de Parrilla), y el Licenciado Edmundo Zea Ruano en concepto de representante de la mortal de Julián Ramírez. De los antecedentes.

RESULTA:

El cinco de Abril de mil novecientos cincuenta y uno, ante el juzgado Primero de Primera Instancia de este departamento, compareció Francisca Enríquez Rizzo viuda de Leal exponiendo: que María Celia Rodríguez, hija natural de Nieves Rodríguez y Julián Ramírez y de quien la presentada es madrina de bautizo, nació el veinte de Marzo de mil novecientos diez y siete, en San Felipe Retalhuleu, según partida número ciento nueve, folio ciento noventa y nueve, libro quince de nacimientos, del Registro Civil de aquel municipio; que como lo demuestra con varios documentos que acompaña, la partida de mérito ha sido alterada con enmiendas y falsedades para hacer aparecer a María Celia como hija de matrimonio de la exponente y de su esposo Herculano Leal, ya fallecido; que con su referido esposo, por caridad y cuando estaba muy quequeña, recogieron a María Celia en concepto de "pepe", velando por su salud y educación hasta obtener un título académico, pues su verdadera madre murió el veinte y cuatro de Abril de mil novecientos diez y siete; que en el testamento otorgado por su

esposo el seis de Noviembre de mil novecientos veinte y seis, ante el Notario Ramiro Fonseca, expresa "...que es casado con Francisca Enríquez de Leal en primeras y únicas nupcias, con quien ha procreado una hija que se llama María Celia Leal, y que a la fecha tiene ocho años de edad; que fuera del matrimonio no tiene ningún hijo...", "Que de su libre y espontánea voluntad, instituye como sus únicas y universales herederas de todos sus bienes, derechos y acciones a su esposa, a su hija legítima y a los otros hijos que puedan sobrevenir dentro de su matrimonio" "Expone el testador que su esposa como tutriz natural de su hija, se encargará del manejo de los bienes de su hija"; que su esposo, involuntariamente, no reconoció en su testamento su derecho a gananciales o sea el derecho a la mitad de todos los bienes; que de éstos se hizo partición por escritura que autorizó el Notario José María Barrios Rivera el seis de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho, adjudicándose a María Celia varios raíces que se enumeran, y que por un error no se consignaron en esa partición sus gananciales, habiéndole otorgado María Celia amplio finiquito y^a carta de pago; que María Celia contrajo matrimonio con Rodolfo Parrilla y ha observado contra la presentada una conducta intolerable, de manifiesta ingratitud y ambición; que no hay prueba legal de que María Celia sea hija de la exponente y su esposo, pues si el nacimiento de toda persona y su estado civil se comprueba con su partida de nacimiento, la que corresponde a aquélla carece de toda validez por las raspaduras, enmiendas y alteraciones que contiene, con tinta de otro color y con distinta letra, faltando prueba legal de que haya nacido o exista como María Celia Ramírez Rodríguez y menos con los apellidos Leal Enríquez; que como el delito no puede generar derechos, es nula la calidad de hija que su esposo Herculano Leal atribuyó en su testamento a María Celia pues además ella y su esposo eran impotentes para procrear y que, por consecuencia, existiendo absoluta nulidad con respecto a su calidad o institución adolecen de error substancial por tratarse de una hija y heredera falsa; que la misma María Celia y su padre Julián Ramírez, según las copias fotostáticas de las cartas que se presentan, han reconocido la verdad de lo antes expuesto; que don Herculano Leal no tenía derecho de atribuirle la maternidad de María Celia y de entero acuerdo con él dispusieron no adoptarla, evitando con ello otorgarle su apellido, porque sólo el prohijamiento faculta para usar los apellidos

de los adoptantes. En consecuencia de todo, demanda a María Celia Ramírez Rodríguez y a su padre Julián Ramírez, para que se declare: nula y falsa la partida de nacimiento de la primera que al principio se identificó; que el verdadero nombre que corresponde a la demandada es el de María Celia Ramírez Rodríguez, como hija natural de Julián Ramírez y Nieves Rodríguez; que María Celia es hija falsa del matrimonio de su esposo y la actora; nulidad del testamento del señor Leal en las partes referentes a la calidad de hija, de María Celia y nulidad de su institución como heredera; nulidad de la partición de los bienes así como del finiquito; que de los bienes inscritos a favor del señor Leal a su fallecimiento, le correspondía la mitad como gananciales, siendo heredera testamentaria de la mitad de la otra mitad y heredera legal de la mitad restante; que se certifique lo conducente para los efectos de la falsedad que aparece cometida en la partida de nacimiento de la demandada; que se anote la demanda y que se intervengan los bienes indebidamente adjudicados a María Celia Leal Enríquez, hija y heredera falsa. Acompañó varios documentos.

RESULTA:

María Celia Leal de Parrilla contestó la demanda en sentido negativo, interpuso las excepciones perentorias de falta de derecho en la actora y prescripción para alegar nulidad del testamento, y a su vez contrademandó la nulidad de la partición de bienes autorizada por el Notario Barrios Rivera el seis de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho, "no porque haya sido —dice— hecha juntamente con un heredero falso como lo pretende la actora, sino porque medió dolo de su parte y error de la mía, haciéndoseme creer que los bienes que se me adjudicaban representaban al mitad de la herencia, cuando ni siquiera llegan a la cuarta parte de los mismos como puede verse en los inventarios practicados por el mismo Notario y consejero de mi madre Licenciado Barrios Rivera", así como la rendición de cuentas por parte de la actora durante el tiempo que ha manejado los bienes hereditarios y la nulidad del finiquito y carta de pago que otorgó (la demandada) ante el mismo Notario Barrios Rivera.

La actora contestó por su parte negativamente la reconvencción, acompañando nuevos documentos para demostrar las alteraciones que sostenía que se había hecho en la partida de nacimiento de la demandada, así como co-

pia de los inventarios de los bienes que dejó el causante, interponiendo la excepción de falta de derecho y acción.

Habiendo sido reconocido el Licenciado Héctor Villagrán como apoderado de María Celia Leal Enríquez de Parrilla, se presentó indicando que uno de los demandados, Julián Ramírez, había fallecido, por lo que pedía que las notificaciones que al mismo correspondían se hicieran al Licenciado Edmundo Zea Ruano, nombrado depositario interventor de la mortal, de acuerdo con la certificación que acompañaba. Se resolvió de conformidad con lo pedido.

En rebeldía del Licenciado Edmundo Zea Ruano, se abrió el juicio a prueba por el término de treinta días. Por parte de la actora fueron presentadas las pruebas siguientes: a) preguntas y reconocimiento de documentos al Licenciado Edmundo Zea Ruano, representante de la mortal de Julián Ramírez, con resultado negativo para la solicitante; b) testimonios de Francisco Humberto de León Noriega, José Desiderio Batres Mendoza, Eduviges Morales y Francisca Martínez Solórzano, quienes al contestar afirmativamente el interrogatorio presentado indicaron que María Celia era hija de Julián Ramírez y Nieves Rodríguez, habiendo sido recogida desde pequeña por los esposos Leal Enríquez, quienes nunca la presentaron como hija de ellos; c) documentos que acompañó a su demanda y al contestar la reconvencción; d) varios documentos para establecer la forma en que ha estado administrando los bienes de la herencia; e) inspección ocular practicada en el Registro Civil de San Felipe Retalhuleu, para establecer que en la partida de nacimiento número ciento nueve, folio ciento noventa y nueve, libro quince, se observan alteraciones muy visibles, como que en donde dice "María Celia Leal" el apellido está con otra letra y borrado, y los nombres "Francisca de Leal" y "Herculano Leal" aparecen con distinta tinta de la con que se escribió la partida, sin haber sido salvadas tales enmiendas; f) informe del Juez de Primera Instancia de Retalhuleu respecto a que en su Tribunal se siguió una averiguación acerca de las alteraciones de la partida de nacimiento de mérito, originadas en denuncia del Registrador Civil de San Felipe. Por parte de la demandada María Celia Leal de Parrilla se rindieron: a) certificación del Juzgado de Primera Instancia de Retalhuleu, que contiene las posiciones absueltas por Julián Ramírez, negando los conceptos de una carta dirigida a la señora viuda de Leal;

b) certificación del Jefe de Servicio de Medicina de Hombres del Hospital General de Occidente, acreditando que Julián Ramírez estuvo enfermo en ese centro; c) certificación de la partida de defunción de Herculano Leal; d) acta notarial que se refiere también al desconocimiento, por parte de Julián Ramírez, de los términos de la carta antes mencionada; e) testimonio del testamento del señor Herculano Leal; y f) declaración de José Alberto Minera.

RESULTA:

Con tales antecedentes el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, declarando: "a) que absuelve a la señora María Celia de Parrilla y a la mortual del señor Julián Ramírez representada por el interventor de la misma, Licenciado Edmundo Zea Ruano, de las peticiones contenidas en los números 1o., 2o., 3o., y 8o. de la presente demanda; b) con lugar la excepción de PRESCRIPCIÓN interpuesta por la citada señora de Parrilla, y como consecuencia, absuelve también a la misma y a la mortual antes dicha, del señor Julián Ramírez, de los puntos demandados por la señora viuda de Leal bajo los números 4o., 5o., 6o. y 7o. de la parte petitoria de la demandada; c) que absuelve a la señora Francisca Enriquez Rizzo viuda de Leal de la contrademanda entablada por la señora de Parrilla; y d) que no hay especial condenación en costas".

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones, al conocer en alzada, profirió el fallo, motivo de este recurso cuyo punto resolutivo dice: "CONFIRMA la sentencia apelada en cuanto absuelve a las partes de la demanda y contrademanda, con la adición de que se declara con lugar la excepción de falta de derecho interpuesto por la demandada María Celia Leal de Parrilla. La REVOCA en lo que se refiere a declarar con lugar la excepción de prescripción interpuesta por la misma demandada y resolviendo: DECLARA: sin lugar dicha excepción". En apoyo de su fallo, el Tribunal considera como razones principales: que no puede prosperar la nulidad de la partida de nacimiento de la demandada, porque dicha prueba no suministra los elementos necesarios e indispensables para hacer tal declaración, ya que, a juicio del Tribunal, cualquier duda sobre la autenticidad del acta de nacimiento queda desvanecida con la sola lectura del testimonio del testamento otorgado por Herculano Leal, instrumento público que produce plena prueba, y en la cual el

otorgante reconoce como hija legítima a aquélla, estando ésto corroborado por la propia actora según las escrituras públicas del seis de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho y once de Junio de mil novecientos cincuenta, autorizadas por el Notario José María Rivera, documentos públicos en que Francisca Enriquez Rizzo viuda de Leal comparece como madre de María Celia Leal; que en cuanto a declarar que María Celia Leal es hija falsa del matrimonio Leal Enriquez, y que su verdadero nombre es María Celia Ramírez, hija de Julián Ramírez y Nieves Rodríguez, si por una parte ello entraña una verdadera filiación que sólo podría demandar la propia hija, dichas peticiones que llevan implícito negar la paternidad del causante que aparece en el Registro Civil e impugnar el reconocimiento que consta en el testamento, no puede efectuarlas la actora señora viuda de Leal, pues la ley sólo concede el derecho de negar la paternidad al padre, vedando el derecho de impugnar el reconocimiento del hijo a quien lo hizo y a sus herederos, caso en el que se encuentra la demandante; que la excepción de prescripción interpuesta por la demandada y declarada con lugar por el Juez no es procedente, porque dicho funcionario computó el término a contar de la fecha en que se otorgó el testamento, lo cual no es correcto, ya que el testamento no surte sus efectos en tanto no ocurra la muerte del testador y el instrumento sea declarado legítimo, constando en autos que el fallecimiento del causante acaeció el veintitrés de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis; que como consecuencia de las consideraciones expresadas, siendo los otros puntos petitorios una derivación de los analizados como improcedentes, no existe fundamento legal para resolverlos en conformidad con lo pretendido en la demanda.

Contra tal pronunciamiento, el Licenciado Eugenio Valentín López González, apoderado de Francisca Enriquez Rizzo Viuda de Leal, interpuso el presente recurso de casación por quebrantamiento del procedimiento y por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley. Dice que introduce el recurso de acuerdo con los casos comprendidos en los incisos 1o., 2o., 3o., y 6o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, modificado por el Decreto del Congreso 388, relacionando el quebrantamiento del procedimiento con el inciso 2o. del artículo 507 del Decreto Legislativo 2009; y cita como infringidos los artículos 223, 225, 229, 230, 231, 464, 824 y 1087 del Código Civil de 1877, o sea el Decreto Guber-

nativo 175; 149, 162, 171, 172, 312, 314, 315, 154, 175, 897 y 1030 del Código Civil vigente, o sea el Decreto Legislativo 1923; 291, 277, 282, 92, 290 y 71 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y 61 inciso 8o. del Reglamento de Tribunales. Señala al final de su escrito los artículos 505, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518 y 519 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil.

Argumenta el recurrente que el demandado Julián Ramírez, fallecido durante la tramitación del juicio, estaba representado por el interventor de la mortual licenciado Edmundo Zea Ruano; que sin haberse reconocido la personería de su sucesor en el juicio, Licenciado Rafael Gordillo Macías, la Sala ordenó por providencia de fecha dos de Marzo del año próximo pasado, que se hicieran al nuevo interventor de la mortual las notificaciones a partir del primero de Abril de mil novecientos cincuenta y tres, dejándose así de dar intervención al único representante cuya personería estaba reconocida en el juicio; pero que algo más grave es la circunstancia de haberse admitido como documento auténtico una certificación que carece del sello del Tribunal que la expidió, como es la extendida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en que consta el nombramiento del nuevo interventor Licenciado Gordillo Macías; que por consiguiente, la mayor parte de lo tramitado en segunda instancia aparece viciado porque la mortual no estaba legítimamente representada. Que la Sala incurrió, por otra parte, en error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, al aceptar que Herculano Leal reconoció en su testamento como hija legítima a la demandada María Celia Leal, tanto porque es falso que dicho instrumento contenga tal reconocimiento, como porque es absurdo pretender que un hijo legítimo pueda reconocerse, además de que el testamento no fué llevado al Registro Civil. Que existe incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del juicio, pues siendo que en la demanda se pide declarar la falsedad de la partida de nacimiento de María Celia y no obstante que existen pruebas fehacientes de que dicha partida fué alterada, la Sala lejos de analizar el valor probatorio de las mismas y examinar la partida en sí, concluye con que el señor Leal reconoce en su testamento como hija legítima a la demandada, por lo que resulta una incongruencia confundir el reconocimiento de un hijo con la alteración de su partida de nacimiento; que también es una incongruencia que la Sala declare probada la excepción de falta de derecho con

los propios documentos cuya nulidad y falsedad se han demandado, porque lo pedido fué que se declarara que a María Celia no le corresponden los apellidos Leal Enríquez en vista de estar borrados y alterados los primitivos que figuraban en su partida de nacimiento, y la Sala al resolver el punto estima que se trata de un juicio de filiación y de un desconocimiento por parte de la actora, de la legitimidad de María Celia; que el mismo Tribunal afirma que, como heredera de Herculano Leal, la demandante no podía impugnar la legitimidad de María Celia; pero que eso es incongruente cuando olvida y desconoce que semejante paternidad la afecta en lo personal al atribuirle a ella una maternidad falsa e inexistente; que pedir que se declare que María Celia ha usurpado la condición de hija del matrimonio Leal Enríquez, no es una acción que tienda a impugnar la paternidad, pues para ello era imprescindible que su partida de nacimiento fuese legítima y no presentara signos inequívocos de falsificación en partes esenciales como son los nombres de sus padres.

CONSIDERANDO:

Propuesto como primer caso de procedencia del recurso el quebrantamiento substancial del procedimiento, es preciso analizar las razones y fundamento legales invocados por el recurrente a fin de deducir las conclusiones pertinentes. Dos son los aspectos que se señalan como determinantes del vicio impugnado: en primer lugar, que sin haberse reconocido la personería del Licenciado Rafael Gordillo Macías, nuevo interventor de la mortual de Julián Ramírez que substituía al Licenciado Edmundo Zea Ruano, la Sala ordenó que se le hiciesen las notificaciones respectivas a partir del primero de Abril de mil novecientos cincuenta y tres, dejándose así de dar intervención al único representante legítimo; y en segundo, que la certificación extendida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en que consta el nombramiento del nuevo interventor mencionado, fué admitida por la Sala sin el sello del Tribunal que la expidió, siendo que en tales condiciones no es un documento auténtico.

En relación al primer punto, según aparece de las diligencias, el juicio fué elevado a la Sala jurisdiccional en virtud de apelación de la sentencia, el siete de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, figurando como interventor de la mortual de Julián Ramírez el Licenciado Zea Ruano. Durante el trans-

curso de varias incidencias en el trámite de la segunda instancia, tales como nulidad de algunas actuaciones, enmienda del procedimiento, articulación de posiciones, tramitación de una solicitud de excusa del Magistrado Miguel Álvarez Lobos y de recusación del Magistrado Daniel Barrera de Evián y recursos de reposición contra dos resoluciones de la Sala, se hicieron al interventor nombrado las notificaciones que en su carácter aludido le correspondían, hasta el día veintiocho de Noviembre de mil novecientos cincuenta y tres. No obstante lo anterior, en providencia de dos de Marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, la Sala resolvió lo siguiente: "Hágansele las notificaciones pendientes al nuevo depositario interventor de la mortual del señor Julián Ramírez, Licenciado Rafael Antonio Gordillo Macías, a partir del primero de Abril del año próximo pasado"; tal resolución se apoyó en la certificación del Juzgado Tercero de Primera Instancia, que contiene el auto de fecha veintiocho de Julio de mil novecientos cincuenta y tres, nombrando depositario interventor al Licenciado Gordillo Macías en lugar del Licenciado Zea Ruano, y, en cumplimiento de la misma, el cinco de Marzo (sin indicarse de qué año) se notificó al primero "el contenido de los escritos y resoluciones anteriores a partir del once de Abril de mil novecientos cincuenta y tres, hasta la última de fecha veinte y nueve de Octubre del mismo año".

Dada la situación que se creó con lo antes expresado, se deduce: a) que según el mandato de la Sala, se notificaron al interventor, Licenciado Gordillo Macías, providencias datadas en fecha anterior a su nombramiento como tal; b) que durante ese período anterior a su nombramiento y aún después, hasta el veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, se notificó asimismo al otro interventor, Licenciado Zea Ruano; c) que como consecuencia de lo anterior, figuran notificados de iguales resoluciones dos interventores de la misma mortual, pues no existe enmienda del procedimiento o declaratoria alguna que anule o deje sin efecto las notificaciones hechas al Licenciado Zea Ruano.

En cuanto al segundo aspecto objetado, ciertamente como lo afirma el recurrente, la certificación extendida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia a que hace referencia, que el Tribunal de segundo grado aceptó como constancia del nombramiento del nuevo interventor, Licenciado Gordillo Macías, aparece desprovista del sello correspondiente al Tribunal que la expidió.

Ahora bien, el inciso 2o. del artículo 507 del Decreto Legislativo 2009, determina que se incurre en quebrantamiento substancial del procedimiento "por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes, o de **personalidad en quien los haya representado**". Examinando en primer lugar la representación que le fué otorgada al Licenciado Gordillo Macías, surge de inmediato la evidencia de que se ordenó por la Sala notificarle en su calidad de interventor de la mortual, con base en un documento (certificación del Juzgado Tercero de Primera Instancia) que carece de los requisitos necesarios para estimarse auténtico al no estar sellado por aquel Tribunal, lo que hace que su presencia en el juicio sea manifiestamente ilegal, tal como se desprende de los artículos 71 del Decreto Gubernativo 1862, 61 inciso 8o. del Decreto Gubernativo 1568, en relación con los artículos 277, 282 y 290 del Decreto Legislativo 2009, citados como infringidos por el recurrente. En segundo término, aún en el supuesto de que la representación del Licenciado Gordillo Macías fuera legítima, según como aparecen las actuaciones no se sabría a quién de los dos interventores corresponde esa representación para el efecto de las notificaciones que fueron hechas a ambos, pues en estricto apego a las normas procesivas las notificaciones recibidas por el Licenciado Zea Ruano, sólo podían dejar de tener valor en el juicio mediante declaración del Tribunal en ese sentido. En tal virtud, la irregularidad advertida en el procedimiento es manifiesta para considerarlo substancialmente viciado, justificándose la necesidad de que en una nueva tramitación se ciba a los principios legales respectivos.

En consecuencia, luego que fueron citados con propiedad los artículos infringidos con el motivo examinado y el caso de procedencia que lo comprende, y además se pidió en su oportunidad, sin que prosperara, la subsanación de la falta acusada, mediante recurso de revocatoria que no fué tramitado, procede resolver con lugar en cuanto a este punto, siendo así innecesario el análisis de los otros aspectos que contempla el recurso interpuesto.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que prescriben los artículos 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 519 y 524 del Decreto Legislativo 2009, al resolver CASA la sentencia recurrida y ANULA todo lo actuado desde el auto de

fecha dos de Marzo del año próximo pasado, inclusive, dictado en la pieza de segunda Instancia y en el cual se le da intervención al Licenciado Rafael Antonio Gordillo Macías, debiendo volver las actuaciones a donde corresponde para que se substancien y resuelvan con arreglo a la ley; las costas y reposición de los autos corren a cargo del Tribunal que dió motivo al recurso. Notifíquese y con certificación de lo resuelto remítanse los antecedentes a donde corresponde como está ordenado. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — Alberto Herrarte. — A. Ruano Mejía. — Alberto Argueta S. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Relativo a la ampliación de la línea de Transporte "Tiquisate-Semillero" pedida por "TRANSPORTES SIGUACÁN".

DOCTRINA: *Cuando los opositores a la concesión de una licencia de transportes no prueben la inconveniencia de tal otorgamiento y el solicitante, después de establecer los extremos legales necesarios, obtiene dictamen favorable de la sección respectiva, la licencia debe serle extendida.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veinte de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus antecedentes se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el dieciocho de Febrero del presente año, en el recurso de esa naturaleza que contra lo resuelto por el Ministerio de Economía y Trabajo, interpuso "Transportes, Sigüacán", por medio de su representante legal, en el expediente seguido para obtener la ampliación de la línea "Tiquisate-Semillero". Del estudio de los autos,

RESULTA:

El veintiuno de Agosto de mil novecientos cincuenta y tres, Javier Altúzar de León, como representante de "Javier Altúzar y Compañía, S. C.", se presentó al Departamento Administrativo de Economía, manifestando

que: los "Transportes Sigüacán", propiedad de su representada, servían la línea "Tiquisate-Alotenango" y viceversa, pasando por los puntos intermedios, de conformidad con la licencia número cero, novecientos setenta y siete, (0977) y ocupando para ello tres vehículos; que de acuerdo con las disposiciones legales respectivas pedía se le permitiera ampliar sus servicios hasta los lugares denominados "El Semillero" y "Finca San Felipe", así como aumentar un vehículo más para completar cuatro, los cuales trabajarían así: dos camionetas para el tramo "Tiquisate-Semillero" y viceversa, tocando los puntos intermedios; una camioneta de ida y vuelta para Concepción, Santiago número dos y finca San Felipe, también tocando los puntos intermedios; y, una camioneta para "Tiquisate-Esquipulas número dos y Alotenango número dos" y sus puntos intermedios. A folio tres corre agregado un esquema de los servicios que la empresa solicitante pretende obtener. Se acompañan cuatro tarjetas de operaciones relativas a los cuatro vehículos que se dice serán empleados, los cuales están en buenas condiciones de funcionamiento, según el informe del experto oficial respectivo, constancia de la Dirección General de Comercio, Industria y Controles, sobre que la empresa "Transportes Sigüacán" ha llenado los requisitos necesarios para establecer línea con ruta fija, entre las fincas que se detallan, y documentos que justifican la representación que ejercita el presentado.

Tal solicitud fué pasada a la Oficina de Transportes para que se le diera el trámite de ley.

Aparecen agregadas las gestiones hechas por muchos vecinos de las fincas que serían favorecidas con el servicio cuya licencia se solicita, unas dirigidas al Departamento Administrativo de Economía y otras al Presidente de la República, Secretario General de la Presidencia y Presidente del Congreso.

Con fecha once de Septiembre de aquel mismo año, Arturo López Maldonado, como apoderado de la empresa de transportes "El Esfuerzo", se presentó oponiéndose a lo solicitado por la empresa "Sigüacán", arguyendo para ello que ya antes se había presentado ésta haciendo igual solicitud, pero había sido declarada sin lugar por el Ministerio de Economía, en resolución número dos mil trescientos ochenta y tres, que revocó la de la Dirección General de Comercio, Industria y Controles, que concedía a "Sigüacán" el servicio

de la línea que tiene "El Esfuerzo", providencia contra la cual recurrió aquella empresa a lo Contencioso Administrativo, pero después desistió de tal recurso. Acompañó a su oposición certificación de lo resuelto en el desistimiento indicado, certificación de la Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, Tiquisate, para demostrar que "El Semillero" corresponde al caserío El Porvenir, de aquella jurisdicción y queda en las playas del Océano Pacífico, certificación de las utilidades obtenidas por la empresa opositora, el poder con que acciona y un croquis de los lugares por donde tiene su servicio la empresa "El Esfuerzo". Esta oposición se agregó al expediente, pero se mandó hacer saber que no era legalmente aceptable por no llenar los requisitos legales.

Con fecha dieciocho de Septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, Oscar Oliva Moncada redarguyó lo dicho por la oposición, presentando un número del periódico "Mundo Libre" en donde se habla del estado desastroso de la empresa opositora y una certificación de la Oficina Permanente del Censo, que demuestra la densidad de la población en los lugares cuyos servicios de transporte se desea atender.

La oposición hecha por Raquel Cuevas de Contreras tampoco fué considerada arreglada a la ley.

Presentados los periódicos donde se hicieron las publicaciones correspondientes, la Oficina de Transportes, emitió dictamen a favor de lo solicitado, después de hacer un estudio de las actuaciones que tuvo en su poder. Vuelto a esta dependencia el expediente para que tomando en cuenta las oposiciones hechas se dictaminara nuevamente, la Oficina de Transportes volvió a manifestarse en sentido favorable a la solicitud hecha por Transportes "Siguacán", con lo que el Departamento Administrativo de Economía, en diecinueve de Marzo del año próximo pasado, dictó la providencia número ochenta y nueve, (89) autorizando a "Javier Altúzar y Compañía, Sociedad Colectiva", para que ampliara sus servicios con dos camionetas entre Tiquisate y El Semillero, una camioneta entre Tiquisate y Panzós número dos y otra camioneta entre Tiquisate y Esquipulas número uno y Alotenango número uno. Contra esta resolución, Arturo López Maldonado y Raquel Cuevas de Contreras, interpusieron recurso de revocatoria, el que, después de llenarse las exigencias del Ministerio Público, fué resuelto confirmando lo dispuesto por el Departamento Administrativo de Economía, con la modificación de

que el servicio Tiquisate-El Semillero debía hacerse con una sola camioneta, en vez de dos como proveía la resolución confirmada.

RESULTA:

El veintisiete de Agosto del año próximo pasado, el representante de la Empresa "El Esfuerzo", acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, exponiendo: que la empresa de Transportes "SIGUACAN" se había presentado al Departamento Administrativo de Economía, solicitando la ampliación o prolongación de sus servicios, establecidos en la zona de Tiquisate, acompañando los atestados a que se refiere el artículo doce del Reglamento de Transportes, pero no los documentos que mandan los incisos a) y b) del artículo trece del citado Reglamento; que hecha su oposición, por tratarse de una nueva línea y no de prolongación, así como por no presentar los documentos que justificaran que los socios extranjeros de la empresa "SIGUACAN" residían lícitamente en el país y tenían autorización para dedicarse a aquel negocio, "fué desestimada en principio por el Departamento Administrativo de Economía"; que no obstante lo establecido por la ley de la materia, el referido Departamento dió curso a solicitudes extemporáneas, "viciando en esta forma las actuaciones y anulando previamente su resolución a proferir", emitida el diecinueve de Marzo del año próximo pasado, contra la que interpuso recurso de revocatoria, el que también tramitado "contraviniendo la ley del procedimiento..." fué decidido por el Ministerio de Economía en resolución número trescientos cincuenta y siete, (000357) de fecha veintidós de Junio de aquel año, contra la cual presentaba recurso Contencioso Administrativo, para que se revocara y resolviera denegando lo solicitado por la empresa de transportes "SIGUACAN".

Con fecha diecisiete de Septiembre del año próximo pasado, el apoderado de la empresa de transportes "SIGUACAN", se presentó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo introduciendo recurso de esa naturaleza contra la misma resolución número trescientos cincuenta y siete, del Ministerio de Economía y Trabajo, porque al confirmar la del Departamento Administrativo del propio Ministerio, autorizó solamente un carro, pues se adujo que se sustraía una camioneta de las autorizadas con anterioridad, sin tomar en cuenta que por el "mal de Panamá" la mayoría de las fincas de la línea anteriormente autoriza-

da fueron canceladas y pasadas a una nueva ruta, que es por donde se pide la autorización del otro servicio de transportes, para que queden dos camionetas en la vieja y dos en la nueva ruta; que ofrecía probar los extremos de la demanda con el expediente administrativo formado para el efecto, documentos públicos y privados, confesión judicial, testigos y demás medios probatorios. En definitiva pedía se acumulara su recurso al interpuesto por el señor Arturo López Maldonado, se abriera a prueba oportunamente, y, corridos los trámites correspondientes, se dictara el fallo respectivo, revocando la resolución que motivaba su recurso, para dejar firme y en todos sus alcances jurídicos la número ochenta y nueve, dictada por el Departamento Administrativo de Economía, el diecinueve de Marzo del año próximo pasado.

Abierto a prueba este último recurso, se rindieron las siguientes: una carta del Departamento de Relaciones Sociales de la Compañía Agrícola de Guatemala, por la cual se hace constar que dicha Compañía tiene un ramal nuevo, con diecisiete fincas de banano y que de las viejas fincas abandonadas, la generalidad de sus trabajadores han sido trasladados a las fincas nuevas; licencia de porteador extendida a la empresa "SIGUACAN"; certificación extendida por la Dirección General de Estadística sobre la densidad de la población de Tiquisate; informe del Jefe de la Oficina de Transportes sobre la necesidad del servicio solicitado y dictamen del Ministerio Público. Emitido el informe correspondiente a la Secretaría sobre las pruebas rendidas se fijó día para la vista, en cuyo estado se pidió la acumulación de ambos recursos lo que así se resolvió con fecha veintidós de Diciembre del año próximo pasado, habiéndose señalado nuevo día para la vista, sin que en el término de prueba del primer recurso referido se haya presentado prueba alguna.

Pedida la enmienda del procedimiento, por la nulidad de lo actuado, desde que se solicitó la acumulación, se declaró sin lugar y, después de mandar agregar a sus antecedentes los alegatos y documentos acompañados, se dictó sentencia el dieciocho de Febrero del corriente año, en la que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice: "CONFIRMA la resolución recurrida en cuanto permite a la empresa "Siguacán" prolongar sus servicios de Tiquisate a San Felipe... asimismo en cuanto la autoriza para aumentar su equipo con un vehículo más para el servicio de la línea o líneas que ya tiene autorizadas, úni-

camente, y la REVOCA en cuanto a todo lo demás, para que si el caso llegare, la Oficina correspondiente proceda en la forma que ordena el artículo 29 del Reglamento de Transportes".

Para hacer el anterior pronunciamiento el Tribunal sentenciador considera: que según consta en los antecedentes, la sociedad colectiva "Javier Altúzar y Co., S. C.", con tres vehículos de la empresa "Siguacán", sirve la ruta comprendida entre Tiquisate y Alotenango y viceversa, pasando, entre otros lugares, por Yarda Amarilla y Horqueta; que en su solicitud de veinte de Agosto de mil novecientos cincuenta y tres, Javier Altúzar de León involucra tres peticiones, consistentes en que se le permita ampliar el servicio para cubrir la línea Tiquisate-Semillero, conservando la línea autorizada hasta Yarda Amarilla y Horqueta, de donde desviaría a la finca Santa Rosa para seguir por los demás puntos que se describen hasta llegar al Semillero; que se le permita prolongar su línea Tiquisate-Almolonga hasta San Felipe, pasando por los lugares que detalla; y que, también se le permita aumentar con un vehículo más el equipo de tres que ya tiene. Que no habiéndose presentado por separado las peticiones detalladas, como debía hacerse, sólo se probaron los extremos relativos a la nueva línea solicitada, contra la cual se opusieron la señora de Contreras y la Empresa "El Esfuerzo" quienes se hallan autorizadas para servir las líneas "Río Bravo-Tiquisate" y "Tiquisate-Ticanlú", respectivamente, con los mismos puntos intermedios, pues "El Semillero" es tan sólo un paraje de la aldea El Porvenir, contiguo a Ticanlú, con lo cual se duplicaría el servicio "...sin que exista prueba fehaciente que acredite la necesidad de tal duplicidad". Y, en lo relativo a la prolongación de la línea ya existente y el establecimiento de un vehículo más, es sólo del interés del solicitante.

Pedida aclaración de la sentencia referida, por haberse considerado que no estaba fehacientemente probada la necesidad del servicio solicitado, fué declarada sin lugar, por no haber qué aclarar.

RESULTA:

Contra esta sentencia y con el auxilio del Abogado Ricardo Luna Ruiz, Oscar Oliva Moncada, como representante del gerente de "Transportes Siguacán y Co., S. C.", interpuso recurso de casación, diciendo: "El presente recurso extraordinario de casación, lo fun-

damento en los casos de procedencia estatuidos por los incisos 1o., 2o. y 3o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil contenido en el Decreto Legislativo 2009, reformado por el artículo 2o. del Decreto 388 del Congreso de la República, citando como violados los artículos 277 y 282 del mismo Decreto Legislativo 2009".

Alega que al estimar el Tribunal sentenciador, en su primero y segundo considerandos, que de las tres peticiones hechas por él, únicamente rindió pruebas sobre la nueva línea solicitada y de accederse a lo pedido se duplicaría el servicio de transportes, sin que exista prueba fehaciente que acredite la necesidad de tal duplicidad, incurrió en error de derecho, pues rindió como prueba todo el expediente administrativo, en el que se encuentra la resolución de fecha diecinueve de Marzo del año próximo pasado, en la cual se considera notoria la necesidad de autorizar, no sólo a la empresa solicitante sino también a un mayor número de empresarios de transporte, para garantizar la eficiencia en los servicios de aquella zona.

Asimismo dice que se cometió error de derecho al no dar mérito probatorio al dictamen del Ministerio Público, que obra a folio doscientos del expediente, certificación extendida por la Dirección de Estadística, con la que se prueba que la población de Tiquisate consta de catorce mil doscientos veinticuatro habitantes, y el informe de la Oficina de Transportes, que se encuentra entre los folios ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y ocho del expediente, por el cual se hace constar la necesidad del servicio de mérito.

Corrida la vista señalada para el efecto es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El recurrente cita como caso de procedencia el contenido en el inciso 2o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo 2009, que se refiere a cuando se hubiese quebrantado substancialmente el procedimiento, pero no sólo no lo refiere a uno de los casos específicos que para esta clase de recursos contiene el artículo 507 del Código que se acaba de citar, sino que tampoco dice en qué consiste tal quebrantamiento, por lo que esta Corte se ve impo-

sibilitada de hacer el estudio respectivo, sobre este particular. Artículos 510 y 511 del Decreto Legislativo 2009.

CONSIDERANDO:

También se apoya este recurso en el inciso 3o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, porque se asegura que, en la sentencia impugnada, se cometió error de derecho en la apreciación de los pasajes del expediente administrativo, que fueron presentados como prueba, y especialmente en cuanto a la resolución de diecinueve de Marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictamen del Ministerio Público, certificación de la Dirección General de Estadística e informe de la Oficina de Transportes, al considerar el Tribunal sentenciador que únicamente se rindió prueba sobre la nueva línea solicitada y que al accederse a ella se duplicaría el servicio de transportes sin que existiera prueba fehaciente de la necesidad de tal duplicidad.

El Tribunal sentenciador efectivamente hace tal consideración, pero también es cierto que, el hecho de no estimar como prueba los razonamientos en que el Departamento Administrativo de Economía fundamenta su resolución, que son los impugnados en este caso, tampoco es error en la apreciación probatoria, porque en ninguna ley se tienen como medios de prueba las resoluciones que se impugnan. Igual razón existe para no tener por equivocada la apreciación del Tribunal sentenciador, al no considerar entre la prueba, lo dicho por el Ministerio Público, pues éste, como auxiliar de la Administración, tiene la misión de asesorarla, o lo que es igual, de aconsejarla, e ilustrarla con sus dictámenes, pero el asesorado puede convenir con el consejo o apartarse de él, para pedir otro o resolver bajo su propia responsabilidad. Por cuya razón lo alegado por el recurrente, en cuanto a este punto se refiere, no puede dar eficacia a este recurso.

En cuanto al error de derecho imputado por la apreciación de la certificación extendida por la Dirección de Estadística y el informe del Jefe de la Oficina de Transportes, que obran en el expediente tenido como prueba, es necesario aceptar que dicho informe se ajusta a lo dispuesto por el artículo 14, fracción última, del Acuerdo Gubernativo de veinte de Noviembre de mil novecientos cuarenta

y cinco que, en función con los otros extremos allí mismo detallados, debió haber servido para evitar que se dijera que no "...existe prueba fehaciente que acredite la necesidad de tal duplicidad" y sin embargo, al revocar parte de la resolución recurrida se dijera "...que si el caso llegare, la oficina correspondiente proceda en la forma que ordena el artículo 29 del Reglamento de Transportes", pues con ese proceder se violó el artículo 282 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, al no otorgar la fe que producen tales documentos y negar la plena prueba que de los mismos se desprende, pues en el dictamen indicado se asegura que: constituido el Jefe dictaminador en los lugares objeto del transporte solicitado, pudo constatar que la empresa "El Esfuerzo", opositora en este caso, se encuentra mal organizada y tratando de reorganizarse para ver si logra superar las deficiencias que sufre; que siendo obligación de sus dependencias ver, por encima de todo interés particular, la comodidad y satisfacción del público que utiliza los servicios en cuestión y teniendo una gran densidad de población aquella zona, reitera su opinión en el sentido de que: por conveniencia económica de la región y haberse llenado los requisitos legales, se acceda a lo solicitado. En vista de lo anterior es procedente casar la sentencia recurrida y resolver sobre lo principal, sin necesidad de considerar el otro caso de precedencia citado.

CONSIDERANDO:

La empresa "Siguacán" solicita prolongar la línea que ahora sirve entre Tiquisate y Almolonga, hasta la finca San Felipe, dejar ésta y las otras rutas que servía con dos camionetas, en vez de las tres que para ello empleaba, y se le permita establecer otra línea con dos camionetas que saliendo de Tiquisate y pasando por Yorda Amarilla y Horqueta, comunes a las líneas anteriores, se aparte de allí para Santa Rosa, Tecpán, Totonicapán, Verapaz, Cobán, Pacaya, Ipala, Ixtepeque, Moyuta, Tolimán, Zunil, Tacaná, Xelajú, Jumay, Ticanlú, Semillero y viceversa.

Las empresas "El Esfuerzo" y "Michatoya", representadas por Arturo López Maldonado y Raquel Cuevas de Contreras, respectivamente, se opusieron alegando: la primera, que no se trataba de una prolongación sino de una línea nueva entre Tiquisate y Ticanlú que son puntos comprendidos en la ruta que ella tiene autorizada, y la segunda, que ha-

biendo tenido pérdidas en los últimos tres meses no es necesario autorizar otra empresa ni mayor número de vehículos en la misma ruta. Dichos opositores se concretaron en definitiva a negar su consentimiento para que se otorgara la licencia pedida, pero no probaron extremos que demuestren la inconveniencia de tal otorgamiento, pues el hecho de que "El Esfuerzo" tenga parte de la misma línea, sin resultados satisfactorios por estar mal organizada, según lo comprobó el Jefe de la Oficina de Transportes, en su inspección ocular practicada, y encontrarse en iguales o semejantes condiciones la empresa "Michatoya", no justifica la conveniencia pública de negar la licencia pedida.

Ahora bien, no siendo legalmente aceptables las oposiciones hechas, debe hacerse el análisis correspondiente para establecer si se llenaron las exigencias legales necesarias para la expedición de la licencia solicitada.

La empresa de transportes "Siguacán", juntamente con su solicitud, presentó los documentos requeridos por los artículos doce y trece del Acuerdo Gubernativo fecha veinte de Noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco —reformado el citado artículo doce, por el Acuerdo Gubernativo emitido el veinticuatro de Mayo de mil novecientos cuarenta y seis—; documentos con los cuales se probaron todos y cada uno de los extremos requeridos para el caso y como las oposiciones no son legalmente aceptables como se dijo, no hubo oposición para la prolongación Almolonga-San Felipe y el dictamen del Jefe de la Oficina de Transportes es favorable al peticionario, procede acceder a lo solicitado de conformidad con lo dispuesto por la fracción última del artículo 14 del Acuerdo primeramente citado. Artículos 2o., 3o., 4o. y 5o. del Decreto 253 del Congreso; 269, 277, 282, 370 y 374 del Decreto Legislativo 2009.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224, 227, 228 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 518 y 524 del Decreto Legislativo 2009, al estimar procedente esta casación, REVOCA la sentencia recurrida y, resolviendo sobre lo principal, declara: 1o.—Que se autoriza al peticionario para prolongar su línea "Tiquisate-Almolonga", hasta la finca San Felipe, pasando por los puntos intermedios; 2o.—Se le concede licencia para

servir la línea "Tiquisate-Semillero" y viceversa, pasando por Yarda Amarilla, Horqueta, Santa Rosa, Tecpán, Totonicapán, Verapaz, Cobán, Pacaya, Ipala, Ixtepeque, Moyuta, Tolimán, Zunil, Tacaná, Xelajú, Jumay y Ticanlú; y, 3o.—Que los servicios de las líneas indicadas se hagan así: de Tiquisate a Semillero con dos camionetas y las de las otras líneas anteriormente otorgadas y su prolongación a San Felipe se haga con otras dos camionetas, bajo las tarifas que apruebe el Ministerio de Economía y Trabajo. Repóngase el papel español empleado, por el sellado de ley, pagándose la multa respectiva. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CIVIL

Ordinario seguido por Antonio Paredes Mendoza como interventor de la mortual de Francisco Arrué, contra El Estado de Guatemala.

DOCTRINA: Únicamente a las empresas destinadas a prestar servicios públicos de transporte, es aplicable la doctrina del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva civil, proveniente de caso fortuito, contenida en la Ley de Accidentes.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintidós de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, con fecha doce de Junio del año próximo pasado, en el juicio ordinario seguido por Antonio Paredes Mendoza, en concepto de interventor de la mortual de Francisco Arrué, contra el Estado de Guatemala, representado por el Procurador General de la Nación.

RESULTA:

El diecisiete de Junio de mil novecientos cincuenta y tres, compareció al Juzgado Tercero de Primera Instancia de este departa-

mento, Antonio Paredes Mendoza, interventor de la mortual de Francisco Arrué, en demanda ordinaria contra el Estado de Guatemala, exponiendo: que el veintisiete de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno, como a las diez y ocho horas y cuarenta y cinco minutos, en el aeropuerto de "Santa Elena" de la ciudad de Flores, departamento de El Petén, se produjo la catástrofe aérea que privó de la vida a varios artistas guatemaltecos y miembros del Ejército Nacional, cuando el avión de esta institución número C-cuarenta y siete-cero novecientos sesenta y uno, piloteado por el Mayor Enrique Pérez Guisasola, traía de regreso a dicha embajada artística que había sido organizada y patrocinada por el Ministerio de la Defensa; que en tal siniestro perdió la vida el señor Francisco Arrué, cuya mortual representa como interventor; que como los hechos relacionados determinan responsabilidad para el Estado de Guatemala, según leyes que cita, lo demanda en la vía ordinaria a efecto de que en sentencia se le condene en concepto de indemnización por daños y perjuicios, al pago de la suma que fijen los expertos y dentro de tercero día, a Francisco Oswaldo Arrué López, hijo y heredero legal del causante. Ofreció acreditar los extremos de la demanda con varias pruebas que detalla, de las admitidas por la ley.

El Representante del Ministerio Público contestó negativamente la demanda, interponiendo a la vez las excepciones perentorias de falta de acción, falta de derecho para demandar, pacto de no pedir y prescripción.

RESULTA:

Abierto el juicio a prueba por el término de ley, se rindieron las siguientes: por parte del actor: a) dictamen de expertos, habiendo figurado como tal a propuesta del demandante, Alberto López Matheu, quien opinó en el sentido de que el Estado tenía responsabilidad y que estimaba la indemnización en veinticinco mil quetzales; y a propuesta del Ministerio Público el Coronel Gonzalo Yurrita Nova, quien opinó que no tenía ninguna responsabilidad el Estado y que por consiguiente tampoco había derecho a cobrar indemnización; b) certificaciones extendidas por el propio Juzgado de los autos, conteniendo, una el auto declaratorio de heredero a favor del menor Francisco Oswaldo Arrué López, y otra, pasajes del voluntario para establecer el número de muertos resultante del accidente aéreo. Por parte del Ministerio Público: únicamente una certificación del formulario suscrito por Fran-

cisco Arrué, en el cual releva de cualquier responsabilidad a la Institución Armada Guatemalteca, por accidente, incidente o eventualidad que pudieran resultarle daños o perjuicios.

RESULTA:

Al dictar su sentencia, el Juez condena al Estado de Guatemala a pagar a Oswaldo Arrué López, heredero de Francisco Arrué, la suma de cinco mil quetzales en concepto de indemnización, la cual debería hacerse efectiva, después de deducidos los honorarios correspondientes, en presencia del Juzgador; y declara sin lugar las excepciones perentorias interpuestas por el personero del Estado.

Al conocer en alzada, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones confirmó el fallo mencionado, con la modificación de que el monto de la indemnización se reduce a tres mil quetzales. Como principales razones para fundamentar su sentencia, la Sala expresa: que establecido que la aeronave que sufrió el accidente era propiedad del Estado, éste es responsable civilmente por los daños y perjuicios ocasionados con la muerte de Francisco Arrué, de acuerdo con la Ley de Accidentes contenida en el Decreto Legislativo 1827 y Decreto del Congreso 178 que la reformó, ya que dicha ley únicamente excluye de esa responsabilidad cuando el damnificado hubiera dado lugar, intencionalmente, al daño o perjuicio resultante, o cuando hubiere procedido con manifiesta violación de los reglamentos dictados por el Ejecutivo con respecto a los servicios públicos de transportes, casos en que no incurrió el señor Arrué; y que, por otra parte, la ley mencionada recoge la teoría del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva, aplicable precisamente a este caso. Que las excepciones interpuestas no proceden, pues con las consideraciones precedentes se prueba que sí existe derecho y acción para pedir; en cuanto a la de pacto de no pedir, el documento en que se basa no es suficiente prueba, porque si bien se trata de una certificación extendida con las formalidades legales, la misma se refiere a un documento privado, simplemente firmado por el señor Arrué, sin la presencia de algún funcionario o autoridad, por lo que carece de validez legal; y respecto a la de prescripción, siendo que la ley fija el término de dos años para que se consuma, no han transcurrido en el presente caso. Que tomando en cuenta que el beneficiado es una sola persona y que el hecho originador

del accidente fué puramente fortuito, el monto de la indemnización debe rebajarse a tres mil quetzales.

Contra este fallo, el Procurador General de la Nación interpuso recurso de casación, expresando: "El recurso de casación que ahora interpongo lo fundo en el artículo 2o. del Decreto del Congreso 388, incisos 1o. y 3o. y cito como artículos infringidos: el 1o. del Decreto Legislativo 1827, por haberlo aplicado la Sala indebidamente, violándolo; y los artículos 277, 278, en sus incisos 1o. y 2o., 282 y 315 del Decreto Legislativo 2009, porque los infringió el Tribunal de segunda instancia al incurrir en error de derecho en la apreciación de la prueba", ofrece alegar por escrito el día de la vista y cita al final de su escrito los artículos 505, 506, 511, 512, 513 y 514 del Decreto Legislativo 2009. El día de la vista, efectivamente, el Ministerio Público se presentó por escrito argumentando lo que creyó pertinente en respaldo de su derecho.

Posteriormente el Ministerio Público aclaró los términos de su escrito de interposición, diciendo que "se expresó que el mismo se funda en el artículo 2o. del Decreto 388 del Congreso, incisos 1o.) y 3o.), omitiendo por lapsus que el fundamento preciso es el artículo 506, incisos 1o.) y 3o.) del Decreto Legislativo 2009, el cual está reformado por el citado artículo 2o. del Decreto 388"... "Como podrán ver los señores Magistrados, esta solicitud no se refiere a la cita de las leyes infringidas en el fallo recurrido, sino al apoyo, al caso de procedencia del recurso de casación, que está en los incisos 1o.) y 3o.) del artículo 506, Decreto Legislativo 2009, artículo que sí se citó correctamente al final del escrito mencionado ya, de introducción del recurso".

CONSIDERANDO:

El primer caso de procedencia citado en apoyo del recurso es el contenido en el inciso 1o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que se refiere a cuando la sentencia recurrida contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, en relación al cual el recurrente argumenta: "Artículo 1o. del Decreto Legislativo 1827. Está aplicado indebidamente en la sentencia recurrida, primer considerando, al estimar la Sala que de esta disposición resulta la responsabilidad para el Estado demandado, sin reparar en que ella se refiere a las empresas de transporte, cualidad que no ha tenido el Estado

en el presente caso". En cambio, el Tribunal sentenciador consideró que siendo la aeronave que sufrió el accidente propiedad del Estado, éste era responsable civilmente por los daños y perjuicios ocasionados con la muerte de Francisco Arrué, de acuerdo con la Ley de Accidentes contenida en el Decreto Legislativo 1827 y Decreto 178 del Congreso que la reformó, ya que dicha ley únicamente excluye de esa responsabilidad cuando el damnificado hubiere dado lugar, intencionalmente, al daño o perjuicio resultante, o cuando hubiere procedido con manifiesta violación de los reglamentos dictados por el Ejecutivo con respecto a los servicios públicos de transportes, casos en que no incurrió el señor Arrué; y que, por otra parte, la ley mencionada recoge la teoría del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva, aplicable precisamente a este caso.

Comparadas las tesis contrarias de referencia con los alcances del artículo 1o. del Decreto citado, cabe analizar los términos del mismo que literalmente dice: "Las empresas de ferrocarriles, vapores, tranvías, automóviles, aeronaves, y los dueños de cualquier medio de transporte, por tierra, agua, o aire, serán solidariamente responsables en la acción civil, con los autores y cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aún cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas, siempre que el verdadero encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuera de manera transitoria". Ahora bien, de las definiciones que da el artículo 138 del Código de Comercio acerca de los términos "transporte" y "portear", de los conceptos contenidos en la disposición legal que se examina y de las demás que versan sobre la materia de accidentes, se viene en conocimiento que la responsabilidad civil de que se trata únicamente es deducible a las empresas y dueños de vehículos destinados a prestar servicios públicos de transporte, regulando la protección de las víctimas de accidentes precisamente por el beneficio económico que reporta a aquéllos la actividad a que se dedican. De tal suerte que, siendo ese el sentido que corresponde al precepto de mérito, que surge no sólo de su propio texto como queda dicho sino de la parte considerativa del Decreto Legislativo 1827 y así también del 178 del Congreso, que lo reformó, no cabe dar al mismo una interpretación extensiva y aplicarlo a entidades o personas particulares diferentes de las mencionadas para estimarlas responsables, aún dentro de la doctrina del riesgo,

cuando no llevan por finalidad la percepción de beneficios ni por su naturaleza incrementan el desarrollo económico del país.

Como en el caso de examen la Sala sentenciadora ha hecho aplicación del artículo citado, deduciendo con base en él la responsabilidad que atribuye al Estado en favor del demandante, es evidente que ha incurrido en aplicación indebida e interpretación errónea del mismo, ya que la Fuerza Aérea Nacional, propietaria del avión que sufrió el accidente, no es una entidad que tenga por función un servicio público de transporte que presupone la obtención de un beneficio, siendo su misión muy distinta dentro de la organización del Ejército Nacional; en consecuencia, existe motivo suficiente para casar la sentencia recurrida y dictar la que corresponde en derecho.

CONSIDERANDO:

Como de lo estimado en la consideración que antecede se llega a la conclusión de que para el caso en estudio no resulta aplicable la Ley de Accidentes en que basó su fallo el Tribunal de segundo grado, siendo suficiente la violación en que incurrió y a que se hizo referencia para decidir los efectos del presente sometimiento, por razones obvias carece de objeto el estudio y valoración de la prueba rendida en el juicio, en cuyo caso procede únicamente hacer el pronunciamiento de rigor, absolviendo de la demanda a la parte reo. Artículos 222, 224, 227 y 228 del Decreto Gubernativo 1862.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que prescriben los artículos 13, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 518 y 524 del Decreto Legislativo 2009, REVOCA la sentencia recurrida y resolviendo declara: con lugar la excepción de falta de derecho interpuesta por la parte demandada y, como consecuencia, absuelto al Estado de Guatemala, de la demanda entablada por Antonio Paredes Mendoza en concepto de interventor de la mortual de Francisco Arrué. Notifíquese y en la forma que corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Gerente de Empresa Fosforera, Sociedad Anónima, contra dos resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre exoneración acordada por el Ministerio de Economía y Trabajo.

No existe violación de ley cuando el Tribunal sentenciador declara indebida la franquicia de impuestos que se ha obtenido con posterioridad a la liquidación y pago de las pólizas respectivas, basado en que una circular ministerial no puede contrariar el sentido claro de preceptos legales, pues las excepciones a que se refiere el artículo 295 del Código de Aduanas al autorizar un procedimiento distinto, deben entenderse con carácter específico para cada caso y no en concepto de regla general, ya que de aceptarse así, cualquier circular vendría a constituir una modificación permanente al contenido legal.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintitrés de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veinticinco de Septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, en el recurso respectivo que ante el mismo fué interpuesto por José Guirola Leal, en concepto de Gerente de "Empresa Fosforera, S. A.", contra las resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público números dos mil ciento sesenta y cinco y tres mil doscientos treinta y seis, de fechas diez de Septiembre y dos de Diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.

RESULTA:

El diez y seis de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos, "Empresa Fosforera, S. A." se dirigió al Ministro de Economía y Trabajo, solicitando la devolución de las cantidades que en calidad de depósito había pagado a la Aduana Central sobre varios artículos importados, con vista de la exoneración acordada con fecha treinta de Enero del mismo año por el propio Ministerio de Economía y Trabajo, cantidades que la Aduana Central se negaba a reintegrarle pretextando que las pólizas fueron pagadas y retirada la mercadería

antes de la salida del Acuerdo Ministerial; las mercaderías importadas se detallan en la solicitud, consistiendo en maquinaria y repuestos.

* Oído el Departamento de Política Económica del Ministerio, dictaminó en el sentido de que, habiéndosele concedido a la Empresa mencionada la exoneración de impuestos, derechos, tasas y sobrecargos de importación sobre la maquinaria y accesorios a que se refería, era procedente la devolución de la suma pagada en depósito. Aprobado tal dictamen por el Ministerio, se pasaron las diligencias al Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidiéndole que se accediera a lo solicitado en virtud de haber sido otorgados los beneficios de la Ley de Fomento Industrial.

Aparece a continuación un informe de la Administración de la Aduana Central, en el cual dice que "por disposición del Ministerio de Hacienda, transcrita en este Despacho, en oficio número 5366 de la Dirección General del Ramo, fecha 23 de Abril de 1953, se dió exacta aplicación al artículo 287, del Código de Aduanas, que señala clara y terminantemente los cargos que deben aducirse en las pólizas, sujetando los derechos y obligaciones de los declarantes al tiempo exacto en que la póliza es autorizada. Quiere decir que la franquicia debe ser acompañada a la póliza al momento de ser autorizada y no como es el caso inveterado que primero se retiran las mercaderías de la custodia aduanera, y después se gestiona la franquicia"; y agrega que la entrega de mercaderías de importación está sujeta a las regulaciones del artículo 295 del Código de Aduanas, el que ordena que la entrega se hará a los interesados mediante el pago previo del importe total de la liquidación, o la orden de franquicia correspondiente, exceptuándose los casos especiales en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ordene expresamente un procedimiento distinto; y que, en consecuencia, reafirmaba su posición en sus resoluciones y actuaciones.

El Consejo Técnico de la Dirección General de Aduanas se produjo en el sentido de que debían atenderse las exoneraciones otorgadas por el Ministerio de Economía y Trabajo, aunque se hubieran emitido con posterioridad a la fecha de autorización de las pólizas correspondientes, porque las gestiones se iniciaron con anterioridad; y que estando debidamente autorizado el procedimiento de pagar provisionalmente mientras se lograba obtener la exoneración, según el artículo 295 del Código de Aduanas y resolución Ministerial número

cero novecientos noventa y seis, de Febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, debía accederse a la devolución solicitada.

RESULTA:

Con fecha diez de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, el Ministerio de Hacienda resolvió: "Dígase a la empresa presentada que este Despacho ya dictó lineamientos generales para resolver los casos como el que se plantea, con base en el artículo doscientos ochenta y siete del Código de Aduanas, por lo cual no es posible acceder a su solicitud". Interpuesto recurso de reposición contra la providencia anterior y previa audiencia al Ministerio Público, que opinó que debía confirmarse la resolución recurrida, el Ministerio de Hacienda, con fecha dos de Diciembre del mismo año, nuevamente denegó la solicitud de la Empresa.

RESULTA:

El señor Guirola Leal, en su concepto antes indicado, interpuso recurso de lo contencioso administrativo, en el cual analiza las resoluciones impugnadas de conformidad con sus puntos de vista, ofrece las pruebas pertinentes y termina pidiendo que el Tribunal revoque las resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público números dos mil ciento sesenta y cinco y tres mil doscientos treinta y seis, de fechas diez de Septiembre y dos de Diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, respectivamente.

Por oposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tuvo por contestada negativamente la demanda y por interpuesta la excepción perentoria de falta de derecho, habiéndose abierto a prueba el recurso por el término de quince días.

Durante la dilación probatoria, el recurrente rindió las pruebas siguientes: a) el expediente administrativo con su respectiva documentación; b) los cuadruplicados de las pólizas y los respectivos recibos de depósito de la cantidad reclamada; y c) certificación extendida por la Dirección General de Aduanas que contiene la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número novecientos noventa y seis, de cuatro de Febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro.

RESULTA:

El Tribunal de los autos dictó la sentencia origen del presente recurso, confirmando las resoluciones administrativas que lo motivaron

y declarando sin lugar la excepción de falta de derecho interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como razones principales, el Tribunal estima: que las pólizas de aduanas deben liquidarse de acuerdo con los derechos consulares y de importación, tasas, multas y recargos que estén en vigor a la fecha de ser autorizadas, y en caso de franquicia debe presentarse la constancia al momento de ser autorizada la póliza; que la entrega de los artículos se hará a los interesados mediante el pago previo del importe total de la liquidación o en vista de la orden de franquicia; que tales preceptos son claros y precisos y contra su observancia no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario, como pretende el recurrente al invocar una circular del Ministerio de Hacienda de cuatro de Febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, puesto que son nulos todos los actos contra el tenor expreso de la ley; que la "Empresa Fosforera, S. A." pagó el importe total de las liquidaciones de las pólizas por la maquinaria y accesorios que amparaban, sin esperar que se concediera la franquicia correspondiente, es decir, que al momento de verificar tal pago no gozaba de ninguna exención a su favor, y en consecuencia esa cancelación extinguió definitivamente y no en forma condicional la obligación tributaria a su cargo; que no podía reclamar devoluciones basadas en un Acuerdo Gubernativo de fecha posterior al mencionado pago, porque ese Acuerdo no tenía efecto retroactivo en ningún caso y mucho menos para hacer valer una exoneración o franquicia que no existía al liquidarse las pólizas.

Contra dicho fallo y con el auxilio del Abogado Carlos Alfredo Girón Zirión, el señor Guirola Leal interpuso el presente recurso, por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley; cita como infringidos los artículos 40. en todos sus incisos y 100. del Decreto 459 del Congreso; 287, 295, 365 y 366 del Código de Aduanas; y Acuerdos Gubernativos 270, de 21 de Enero de 1952, dictado por el Ministerio de Economía y Trabajo, 1614, de 28 de Mayo de 1952 y 1875, de 10. de Julio del mismo año, que amplían el anterior 270. Al final de su escrito cita los artículos 505, 506 inciso 1o. y 513 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. El día de la vista, el recurrente alegó lo que creyó necesario para respaldar su acción, expresando en resumen: que el caso a resolver se concreta así las franquicias concedidas por el Ministerio de Economía y Trabajo favorecen a "Industria Fosforera, S. A.", no obstante haber

sido presentadas a la Aduana después de la extracción de la mercadería importada por la Compañía; que de los autos se establece, sin lugar a dudas, que esas franquicias deben ser aplicadas a las pólizas liquidadas y pagadas en forma de depósito provisional, en tanto se presentaban las constancias correspondientes"; consta en la documentación por mí presentada y tenida como prueba —dice— que los derechos aduanales se pagaron en forma de depósitos provisionales, según se ve de los cuadruplicados de las pólizas respectivas, y que las Autoridades de Aduana aceptaron este procedimiento, en conformidad con resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, No. 996, de 4 de Febrero de 1944, que daba el procedimiento a seguir en ciertos casos; que la sentencia aplicó indebidamente el artículo 287 del Código de Aduanas, porque si bien es cierto que las pólizas deben liquidarse de acuerdo con los derechos consulares y de importación, tasas, multas y recargos aduanales, no lo es menos que, de conformidad con el artículo 295 del propio Código que ordena la entrega de los artículos mediante el pago previo del impuesto total o la orden de franquicia, en casos de excepción puede hacerse mediante orden del Ministerio de Hacienda que resuelva un procedimiento distinto, siendo ese procedimiento, en este caso, el contenido en la circular número 996 que se ha mencionado; que el dictamen del Consejo Técnico de la Dirección General de Aduanas, suprema autoridad en asuntos aduanales, desautoriza lo resuelto por la Aduana al ordenar que se ingrese en definitiva el valor de las sumas depositadas cuya devolución solicita "Industria Fosforera, S. A."; y "ese dictamen por sí sólo y sin necesidad de mayores comentarios, es suficiente para decidir esta cuestión sin lugar a dudas, toda vez que estudia a fondo el caso y lo concluye con una resolución favorable a lo solicitado"; que al no procederse como lo aconseja dicho dictamen, se está dejando sin efecto alguno lo dispuesto por la Ley de Fomento Industrial, por lo que se ha violado esa ley en los artículos citados al introducir el recurso, así como los otros preceptos también allí mencionados.

—I—

CONSIDERANDO:

De conformidad con el caso de procedencia invocado como fundamentación del recurso, o sea violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, es preciso efectuar el

examen de los vicios que se atribuyen al fallo recurrido a fin de deducir la existencia o inexistencia de las infracciones legales denunciadas, tomando como base de referencia los hechos que el Tribunal a quo ha declarado probados.

Dicho Tribunal considera que "Empresa Fosforera, S. A.", pagó el importe total de las liquidaciones de las pólizas que amparaban maquinaria y accesorios de su pertenencia, sin haber obtenido franquicia todavía en el momento de tales operaciones, y que, en consecuencia, esa cancelación extinguió definitivamente y no en forma provisional la obligación tributaria a su cargo; que la pretendida devolución de las cantidades pagadas, apoyándose la Compañía en un Acuerdo Gubernativo de fecha posterior al mencionado pago, es improcedente, porque tal Acuerdo no tenía efecto retroactivo en ningún caso y mucho menos para hacer valer una exoneración que no existía al liquidarse las pólizas.

En contraposición a tales fundamentos, el recurrente sostiene la tesis de que las pólizas liquidadas se pagaron en forma de depósito provisional en tanto se presentaban las constancias respectivas, como aparece de la documentación que se tuvo como prueba (cuadruplicados de las pólizas); que el procedimiento aceptado en este caso está conforme con la resolución del Ministerio de Hacienda número novecientos noventa y seis, de fecha cuatro de Febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro; que al no aceptarse la franquicia obtenida con posterioridad al pago y no acatarse así el dictamen del Consejo Técnico de la Dirección General de Aduanas, suprema autoridad en asuntos aduanales, se ha consumado la infracción de los preceptos citados en el recurso, en la forma que en su alegato lo expresa.

Ahora bien, dadas las consideraciones del Tribunal sentenciador y los hechos que analiza, cabe tener presente que su fallo descansa, concretamente, en dos declaraciones esenciales: que el pago de las pólizas extinguió definitivamente y no en forma condicional la obligación tributaria a su cargo, y que el Acuerdo de exoneración no les era aplicable.

Comparando con lo anterior los preceptos que se denuncian como violados, tenemos en primer lugar los artículos 4o. en todos sus incisos y 10 del Decreto 459 del Congreso, Ley de Fomento Industrial. El primero de los mismos enumera en varios incisos las mercade-

rias que gozan de exención de impuestos, derechos, tasas y sobrecargos de importación, y el segundo se refiere a que las industrias de transformación existentes podrán gozar de exenciones o reducciones de gravámenes de importación, siempre que a juicio del Ministerio de Economía se necesiten para llenar los fines contemplados en dicha ley; de donde se ve que, no aludiendo la sentencia a ninguno de tales aspectos, es decir, a sí por su calidad la mercadería importada por la Compañía gozaba de exención, en forma alguna tienen atinencia con la misma los artículos denunciados, y, de consiguiente, no pudieron ser violados por el Tribunal.

En segundo término, los artículos 287, 295, 365 y 366 del Código de Aduanas, cuya violación también se acusa, se refieren: a que las pólizas deberán liquidarse de acuerdo con los derechos consulares y de importación que estén en vigor a la fecha de ser autorizadas; que la entrega de los artículos registrados y aforados legalmente, se hará a los interesados mediante el pago previo del importe total de la liquidación o la orden de franquicia correspondiente, exceptuándose el caso en que el Ministerio de Hacienda ordene expresamente un procedimiento distinto; que toda solicitud de franquicia debe tramitarse en determinada forma y que ninguna franquicia se hará efectiva sino mediante orden escrita del Ministerio de Hacienda dirigida al Director Gral. de Aduanas, detallando la exención concedida y la ley, contrato o convenio que lo autorice. Del resumen que antecede, confrontado con la tesis del recurrente y el fallo que se examina, se colige que, mientras el interesado hace derivar la violación de tales preceptos de que el fallo no tomó en cuenta la circular del Ministerio de Hacienda número novecientos noventa y seis, de fecha cuatro de Febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, que disponía el procedimiento para aquellos casos de excepción, el Tribunal descarta expresamente los alcances de dicha circular en vista de ser contraria al tenor expreso de la ley. En consecuencia, el aspecto fundamental a resolver se traduce en los efectos de la circular de mérito ante los hechos controvertidos en este asunto.

La repetida circular, emitida muchos años antes de discutirse este caso, que "aceptó el procedimiento de constituir depósitos para el pago provisional del monto de las liquidaciones... autoriza el procedimiento de retirar las mercaderías mediante depósito, cuando por su propia naturaleza demanden un desalmacena-

je inmediato, o por otras causas debidamente justificadas". En tanto, del sentido del artículo 295 del Código de Aduanas, al decir que "se exceptúan los casos especiales en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordene expresamente un procedimiento distinto", en correlación con el artículo 366 del mismo Código que determina que "ninguna franquicia se hará efectiva sino mediante orden escrita de la Secretaría de Hacienda, dirigida al Director General de Aduanas, en la cual se detalle la exención concedida y la ley, contrato o convenio que lo autorice", se deduce claramente que el procedimiento acordado para los casos de excepción debe ser específico a cada caso particular y no inextenso con carácter general, pues en tal concepto no sólo estaría en pugna con el texto de los artículos mencionados sino que vendría a constituir una modificación permanente al contenido de los mismos, contra principios jurídicos reguladores del alcance y eficacia de las leyes. Y, en esa virtud, al negarse el mérito que el recurrente pretende a la circular referida, negándose por consecuencia valor al Acuerdo de exoneración y sus ampliaciones para hacer efectiva la franquicia de impuestos, el Tribunal sentenciador no ha aplicado indebidamente el artículo 278 del Código de Aduanas, no violó ni aplicó indebidamente el artículo 295, ni violó los artículos 365 y 366 del mismo cuerpo de leyes.

—II—

CONSIDERANDO:

En vista de que, como parte descollante del sometimiento, el recurrente recalca la importancia probatoria de las pólizas liquidadas (cuadruplicados) y del dictamen del Consejo Técnico de la Dirección General de Aduanas, para decidir el caso en examen, documentos que no fueron valorados por el Tribunal sentenciador en la medida que aquél pretendía, cabe indicar: que no habiéndose fundamentado el recurso en el respectivo caso de procedencia que comprende el examen de la prueba, este Tribunal está en imposibilidad de analizar lo relativo a si hubo o nó error en la apreciación de los documentos referidos.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Le-

gislativo 2009, declara: SIN LUGAR el presente recurso, condenando al recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales que, en caso de insolvencia, conmutará con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel en la forma que corresponde y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

*Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso F.
— Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía.
— Carlos Arias Ariza. — Ante mí: Juan Fernández C.*

Contencioso-Administrativo

Ministerio de Hacienda contra resolución del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en juicio de la "Empresa Fosforera, Sociedad Anónima".

DOCTRINA: *Las cantidades percibidas por los Gerentes, Administradores, Apoderados o Empleados de las Empresas obligadas al pago del impuesto sobre utilidades, en la parte que excedan a las determinadas por el artículo 72 del Decreto Gubernativo número 2191, no son gastos deducibles y por consiguiente, deben pagarse sobre ellas los impuestos resrectivos, aunque se les dé un nombre distinto al de sueldos, salarios o emolumentos.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veinticuatro de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veinte de Mayo del año que corre, en el recurso de igual naturaleza que don José Guirola Leal, en concepto de Presidente y Gerente de "Empresa Fosforera, S. A.", interpuso contra las resoluciones número diez mil quinientos diez (10510), de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, y seis mil ochocientos setenta y nueve (6879), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fechas siete de Julio y veinticuatro de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, respectivamente. Del estudio de los autos,

RESULTA:

Por declaración de utilidades que el Gerente de "Empresa Fosforera, Sociedad Anónima", hizo el quince de Febrero de mil novecientos cincuenta y tres, correspondiente al año anterior, la oficina respectiva mandó pagar el impuesto de cinco mil trescientos cincuenta y seis quetzales y ochenta y cuatro centavos, que correspondían sobre treinta y ocho mil doscientos noventa y dos quetzales y cuarenta y cuatro centavos, que dicha Empresa dijo haber obtenido, como utilidad líquida, durante aquel período imponible.

Nombrado el Auditor Tercero de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, señor Aníbal Calderón Paz, para verificar el estado de pérdidas y ganancias que "Empresa Fosforera, S. A.", hubiera tenido durante el año comprendido entre el primero de Enero y treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, informó que había hecho reparos por no haber diferido los valores correspondientes a un ejercicio anterior, vacaciones, gastos de matrícula de un carro del Gerente y Presidente de la Empresa, así como las cantidades por alquiler de dicho vehículo y lo cobrado por concepto de gastos de representación, no obstante que durante el año se le pagan seis mil quetzales, o sean quinientos mensuales.

Oída la Empresa en referencia dijo no tener que refutar en cuanto a los valores ajustados por pertenecer a un ejercicio anterior, pero sí en cuanto a las vacaciones, que el señor Auditor quería que también fueran diferidas, porque eso era contra la ley; que en cuanto al alquiler del carro de su propiedad y los gastos de representación tampoco era justo porque eso no tenía el carácter de sueldo ni emolumento para que se quisiera tomar como aumento de éstos.

Con tales antecedentes, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, emitió la resolución número diez mil quinientos diez, (10510), fecha siete de Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, mandando pagar el impuesto de mil seiscientos ochenta y seis quetzales y ochenta y siete centavos, que es la suma ajustada por el Auditor Calderón Paz. Contra esta resolución "Empresa Fosforera, S. A.", por medio de su Presidente y Gerente, señor Guirola Leal, interpuso recurso de revocatoria, el que, después de tramitado debidamente, fué declarado sin lugar, por resolución número seis mil ochocientos setenta y nueve, (6879),

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitida el veinticuatro de Septiembre de aquel mismo año.

RESULTA:

Contra las resoluciones detalladas antes, se introdujo recurso contencioso administrativo, fundándose en los mismos argumentos ya expuestos ante la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades; se ofreció probar tales extremos con el expediente formado y sus constancias, certificaciones que acompañó a su demanda y los informes que oportunamente solicitara, terminando por pedir que al fallar se revocaran las resoluciones que motivaban tal recurso.

Contestada negativamente la demanda, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se abrió a prueba el recurso por el término de quince días, durante el cual se tuvieron como tales las que se acompañaron a la demanda y una certificación extendida por la Inspección General de Trabajo, relativa a que la Empresa recurrente puede compensar con dinero las vacaciones de sus trabajadores, con cuyos antecedentes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia en examen, que en lo conducente dice: "REVOCA la resolución recurrida en cuanto a los ajustes formulados en las planillas de trabajadores, gastos de representación y alquileres de carro al servicio de la Empresa, y la confirma en cuanto a lo demás". Para hacer este pronunciamiento en cuanto a los puntos a que este recurso se refiere, considera "...que el fundamento o razón de ambos ajustes es el que tanto la suma pagada por alquileres de un carro por servicio de la Empresa, como los gastos de representación, se estiman "como aumento", a los "emolumentos" mensuales acordados con sujeción a la ley a favor del Gerente de la Empresa recurrente, y los reparos por alquiler del carro particular del Gerente para servicio de la Empresa, por no estar dicho carro incluido en el inventario de la misma; que a la primera de las razones aducidas que se relaciona con los gastos de representación, no puede ni debe concedérsele valor jurídico alguno, pues que nace de confundir en forma un tanto antojadiza los términos alquiler o arrendamiento, con emolumento; pero suponer que el pago de un servicio, en este caso el arrendamiento o alquiler de un vehículo particular, es para aumentar un emolumento (sueldo), resulta fuera de lugar; que por lo que toca a que por

virtud de la misma confusión de términos se pretenda que la asignación mensual de cien quetzales a favor del Gerente para gastos de representación, según acuerdo de la Directiva de la Empresa, deban considerarse tales gastos como aumento del sueldo mensual de éste, simplemente porque éste es el parecer del Auditor que revisara la Contabilidad, igualmente resulta inaceptable a juicio del Tribunal..." porque éste participa del criterio del Departamento de Estudios Hacendarios y Consejo Tributario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre que tales gastos tienen una razón de ser y un destino especial.

Contra esta sentencia y con auxilio del Abogado Arturo Aroch, el Ministro de Hacienda y Crédito Público introdujo recurso de casación, por violación e interpretación errónea de la ley, citando como tal el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el 1o. del Decreto Gubernativo 2341, precepto que asegura fué violado "...principalmente, en su última fracción..." porque el Tribunal sentenciador dice que: no son correctos los reparos hechos a la "Empresa Fosforera, S. A.", relativos a que el Gerente de la misma devenga otros emolumentos que hacen exceder del límite legal su remuneración mensual por los servicios prestados a la Empresa, cuando precisamente "...el propio Gerente alquila a la Empresa su automóvil particular, destinado al servicio del mismo Gerente señor Guirola Leal, y por tal servicio cobra la cantidad de SESENTA QUETZALES MENSUALES; además, la Empresa pagó la placa de circulación de dicho carro montando tal suma a VEINTIOCHO QUETZALES. La misma Empresa paga al Gerente CIEN QUETZALES MENSUALES como gastos de representación..." sin que a pesar de los trámites corridos haya probado "tales gastos extraordinarios como estaba obligado y por consiguiente la suma que percibe el Gerente por ese concepto aumenta su sueldo mensual excediendo con ello el límite legal establecido por el mencionado artículo... al no estar la remuneración del Gerente en relación con el capital en giro de la Empresa", por cuya razón pide que en definitiva se case la sentencia de mérito y se resuelva que son procedentes los reparos hechos acerca del pago de alquileres del carro, propiedad del señor Guirola Leal, y de los gastos de representación que le son cubiertos. Funda su recurso en el inciso 1o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil contenido en el Decreto

Legislativo 2009 y en los artículos 1o. y 2o. del Decreto número 60 de la Junta de Gobierno.

El día nueve de Agosto del año en curso, señalado para la vista, se presentó el señor José Guirola Leal, alegando que: él da en alquiler su vehículo a la Empresa y por eso tiene pleno derecho a la respectiva retribución como lo tendría cualquiera otro que hiciera lo mismo, siendo igual para la Empresa, pues siempre debía pagar tal servicio. En cuanto a los gastos de representación dice que tienen una finalidad y objetivo distinto del significado legal de sueldos, salarios o emolumentos y por eso son independientes unos de otros; que por lógica aplicación de los mismos preceptos legales el Tribunal sentenciador estimó ilegales los reparos hechos y en consecuencia él pide que se declare sin lugar el recurso interpuesto.

Corridos los trámites correspondientes es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

Con fundamento en el inciso primero del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo 2009, se impugna el fallo recurrido, asegurando que en él se violó e interpretó erróneamente el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, principalmente en su última fracción, porque se tienen como deducibles del capital a tributar los gastos de representación cobrados por el Gerente de "Empresa Fosforera, S. A." y los de alquiler de su carro.

El Tribunal sentenciador efectivamente dice que son improcedentes esos reparos, porque ambos provienen de confundir antojadizamente los términos "alquiler" y "gastos de representación" con aumento de sueldo o emolumentos, lo que "...resulta fuera de lugar....".

Al proceder el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a declarar la improcedencia de aquellos reparos, bajo el criterio formado por tales razonamientos, violó el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, (reformado por el Decreto, también Gubernativo 2341), especialmente en su fracción última, por errónea interpretación, pues no se trata de que, a las cantidades recibidas para sí, por un Gerente, Administrador, mandatario o empleado, de una empresa obligada a tributar, se les llamen sueldos, salarios, emolumentos, o como se

quiera, sino de que dichas cantidades, POR NINGUN MOTIVO EXCEDAN de las que legalmente son deducibles para los socios y dueños; que en este caso no podrán ser mayores de quinientos quetzales; porque el capital en giro excede de ochenta mil quetzales, según consta en lo declarado por "Empresa Fosforera, S. A.", el quince de Febrero de mil novecientos cincuenta y tres y lo establece el artículo 72 referido. Además, tampoco se trata de negar el derecho que una Empresa tenga para hacer inversiones o gastos de los que motivan este recurso, sino de que esos gastos o inversiones no sean deducidos del capital a tributar, por exceder de las cantidades que la ley permite deducir para la remuneración de aquellos empleados. Como consecuencia de lo dicho es procedente casar el fallo recurrido y resolver sobre lo principal.

CONSIDERANDO:

No pudiendo exceder de quinientos quetzales, por ningún motivo, la cantidad deducible del capital a tributar, por concepto de remuneraciones, los gastos de representación que "Empresa Fosforera, S. A." designe a su Presidente y Gerente, señor Guirola Leal, por encima de aquella suma, están sujetos al pago de los impuestos establecidos por el artículo primero del Decreto 204 del Congreso y por consiguiente el reparo hecho con tal motivo está ajustado a la ley y debe mantenerse. Artículos 1o. del Decreto Gubernativo 2341 y 72 del Decreto Gubernativo 2191.

CONSIDERANDO:

El automóvil propiedad del señor José Guirola Leal, Gerente de "Empresa Fosforera, S. A.", que se dice arrendado a ésta, fué cedido por su propietario y recibido por él mismo para su uso exclusivo, de cuyo hecho se concluye que él es el beneficiado y en consecuencia al pretender deducir el valor de dicho arrendamiento, de la cantidad a tributar, se infringiría el precepto legal que determina el límite deducible, pues pagándose al referido señor Guirola Leal, como Gerente de "Empresa Fosforera, S. A.", el sueldo de quinientos quetzales mensuales, que es la cantidad máxima deducible aceptada por la ley, lo que percibe por el uso de su propio automóvil es una suma más que debe tributar, Artículos 1663, 1666 del Código Civil; XII de los Preceptos Fundamentales del Decreto Gubernativo 1862; y, 72 del Decreto Gubernativo 2191.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en lo preceptuado por los artículos 222, 223, 224, 227, 228 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 20. del Decreto 60 de la Junta de Gobierno; 518 y 524 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, al declarar procedente el presente recurso, REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veinte de Mayo del año en curso, en los puntos a que este recurso se refiere y, pronunciándose sobre lo principal, CONFIRMA lo resuelto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto a que "Empresa Fosforera, Sociedad Anónima", de esta plaza, está obligada a pagar los impuestos a que se refieren los reparos por las cantidades que a José Guirola Leal le ha cubierto dicha Empresa, en concepto de alquileres de su carro y gastos de representación. Notifíquese y como corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrar. te. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Procurador General de la Nación, sobre expropiación de bienes alemanes de Claudio y Juan Bornholt.

DOCTRINA: *Cuando el Tribunal sentenciador da por probados los extremos señalados por el artículo 17 del Decreto 630 del Congreso y con esa base declara que no son expropiables los bienes de aquel a quien se trataba de aplicarse dicha expropiación, no viola las disposiciones relativas a ella, contenidas en el Decreto citado.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veinticuatro de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cinco de Octubre del año próximo pasado, en el recurso de esa naturaleza que, contra las resoluciones cero mil doscien-

tos ochenta y seis, (01286) y cero mil quinientos cincuenta y cinco, (01555), de fecha dieciséis de Octubre y veintitrés de Noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, respectivamente, interpusieron Claudio Bornholt Voss y Juan Bornholt Hermann, de cuyos antecedentes,

RESULTA:

Que el diez y siete de Octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro los referidos señores Bornholt se presentaron ante el Procurador General de la Nación manifestándole: cuándo había llegado al país Claudio Bornholt Voss y cómo, con sus actividades comerciales, pudo formar su capital y su familia; que por acuerdo gubernativo, de veintisiete de Junio de mil novecientos treinta y nueve, había obtenido la naturalización como guatemalteco y renunciado expresamente a la nacionalidad alemana, el diez de Julio de mil novecientos cuarenta, para cumplir con lo mandado por el Decreto Gubernativo número 2391; que Juan Bornholt Hermann, nacido en la ciudad de Quezaltenango el dieciocho de Abril de mil novecientos dos, había tenido que seguir diligencias administrativas para obtener el reconocimiento de su nacionalidad, guatemalteca de origen, porque a la fecha de su nacimiento estaba vigente el Tratado Montúfar-von Bergen, habiéndose dictado acuerdo gubernativo que concede lo pedido el treinta y uno de Enero de mil novecientos treinta y nueve y tenido por renunciada la nacionalidad alemana el cinco de Julio de mil novecientos cuarenta, inscribiéndose en el ejército de Guatemala el ocho de Mayo de mil novecientos treinta y nueve; que sus actividades comerciales las ejercían desde más de cincuenta años atrás sin ocuparse de ninguna actividad política, nacional ni extranjera, todo lo cual probaba con siete documentos que acompañaron, consistentes en certificación de la partida de nacimiento de Bornholt Hermann, certificación de los acuerdos y resoluciones dadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores antes referidas, boleta de inscripción militar del mismo y certificación de la Secretaría Municipal de Quezaltenango haciendo constar lo resuelto por aquella dependencia, sobre las declaraciones de José María Barrios Rivera y Lorenzo V. Santizo, acerca de su vida de negocios, y que no se inmiscuyeron en asuntos políticos mientras vivieron en Quezaltenango; que en vista de lo expuesto se declarara que no les afectaban los Decretos Gubernativos 2655, 3134, 3135 y 3138; y, en vista de los do-

cumentos detallados, se declarara también que su negocio, conocido con el nombre de "Almacén La Llave", no está comprendido en ninguno de los Decretos de Emergencia, se les permitiera seguir trabajando sin molestias y que no estaban sujetos a expropiación.

El Ministerio Público les otorgó el término de diez días para que probaran sus asertos y como presentaron el ejemplar número cuarenta y ocho del Diario Oficial "El Guatemalteco", fecha tres de Septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, donde consta que fueron excluidos de las "Listas Proclamadas", se les hizo saber que no habían sido excluidos de las leyes de emergencia, habiéndose presentado posteriormente las declaraciones de Joaquín Arceyuz Cartagena, Alfonso Bares Lorenzi y Manuel Barrios Cobar, sobre que los Bornholt no han pertenecido a ninguna agrupación política oficial de los países que estuvieron en guerra con Guatemala, ni cooperado con ellas; que no fueron a votar a los vapores "Cordillera" o "Patricia", y que nunca han negociado con personas individuales o jurídicas incluidas en las "Listas Proclamadas". Certificación de la Guardia Civil haciendo constar los mismos extremos antes referidos y carta de Oswaldo Pellecer haciendo constar que la contabilidad del almacén "La Llave" fué llevada personalmente por Bornholt Hermann durante el mes de Abril de mil novecientos treinta y ocho y especialmente en los días dieciocho al veinte inclusive.

RESULTA:

Elevadas las actuaciones al Ministerio de Hacienda y declarado procedente un recurso de reposición interpuesto, se continuó presentando prueba, la que se aceptó así: reconocimiento de Ricardo Alfredo Nicol de un documento y su firma, otorgado al veinte de Abril de mil novecientos treinta y ocho; certificaciones extendidas por la Corte Suprema de Justicia sobre que no existen antecedentes penales de Claudio y Juan Bornholt; certificaciones del Registro Civil, donde consta el nacimiento de Hans Juergen Klans Heinrich y Johannes Bornholt Wohlgemut, hijos de Juan Bornholt Hermann y Paula Wohlgemut; reconocimiento de Oswaldo Pellecer de la carta antes referida; pasaporte guatemalteco extendido el tres de Noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, a favor de Juan Bornholt Hermann; las pruebas rendidas en el Ministerio Público; pasaportes extendidos a favor de sus hijos Peter Jens y Hans Juergen; nota de la Legación Alemana en Guatemala, qui-

tándole la nacionalidad alemana, debidamente traducida al español; exhibición de la contabilidad del almacén "La Llave" y expertaje de la misma, para demostrar que Juan Bornholt asentó las partidas de dicha contabilidad, correspondientes a los días del mes de Abril antes mencionado y certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores donde consta que no aparecen inscritos como extranjeros residentes los hijos de Juan Bornholt Hermann.

Con los antecedentes detallados el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dictó la resolución número cero mil doscientos ochenta y seis, por la cual resuelve sin lugar el recurso de exclusión interpuesto por los señores Bornholt, manda que dentro de tercero día concurren a la Escribanía del Gobierno a otorgar la escritura traslativa de dominio del almacén "La Llave", así como de los demás bienes o derechos que les corresponden, a favor del Estado, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio y que se intervenga el establecimiento comercial "La Llave", nombrando al interventor. Interpuesto y tramitado el recurso de deposición, fué declarado sin lugar, en resolución número cero mil quinientos cincuenta y cinco, de fecha veintitrés de Noviembre de mil novecientos cincuenta y uno.

RESULTA:

El ocho de Abril de mil novecientos cincuenta y dos, se presentó Juan Bornholt Hermann al Tribunal de lo Contencioso Administrativo interponiendo recurso de igual naturaleza contra las resoluciones números mil doscientos ochenta y seis y mil quinientos cincuenta y cinco, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por no estar conforme con ellas, y apoyándose en las mismas razones expuestas al gestionar ante el Ministerio Público, terminó pidiendo que agotados los trámites respectivos, se dictara sentencia arreglada a la ley y se declarara que no le eran aplicables las disposiciones del Decreto 630 del Congreso y sus reformas, no sólo por haber acreditado todos los extremos que justificaban su exclusión, sino porque es de nacionalidad guatemalteca y el Ministerio de Hacienda no había aplicado correctamente el Decreto mencionado y sus reformas.

Habiendo fallecido Claudio Bornholt Voss, a solicitud del Ministerio Público, se hizo que Juan Bornholt Hermann representara aquella sucesión y así el trámite del recurso fué posible, abriéndose a prueba, durante cuyo lapso se rindieron, por parte del Ministerio Pú-

blico, las actuaciones que dieron origen al recurso y por parte del recurrente, las mismas actuaciones y el documento número cincuenta y nueve, del Registro llevado por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, conteniendo la constancia extendida por la Legación de la República Federal de Alemania en El Salvador, sobre que Juan Bornholt Hermann perdió la nacionalidad alemana por haber sido reconocido como ciudadano guatemalteco por el gobierno de este país.

Con los antecedentes referidos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia que se examina, revocando las resoluciones recurridas y declarando: "que el patrimonio de ambos, (Claudio y Juan Bornholt), consistente en el establecimiento comercial denominado "La Llave", instalado en esta capital, no está sujeto a expropiación, así como ninguna otra pertenencia de los aludidos Bornholt Voss y Bornholt Hermann, integrantes de la firma Claudio Bornholt e hijo". Para hacer tal pronunciamiento el Tribunal sentenciador considera que: "...el hecho de que Juan Bornholt Hermann, hijo de padres alemanes, haya nacido en territorio nacional dentro de la vigencia, (si alguna tuvo), del Tratado Montúfar-von Bergen, no autoriza para afirmar que por esa sola circunstancia debe considerársele como ciudadano alemán, pues que el Tratado aludido, condiciona que los hijos de alemanes pueden optar por la ciudadanía de sus progenitores, una vez que hubiesen llenado los requisitos que el propio Tribunal fija para el efecto..." "De esa suerte y en éste aspecto la base del pronunciamiento ministerial es inconsistente y carece de fundamento legal..." pues ninguno de tales requisitos fué satisfecho, no siendo suficiente para demostrar la pérdida de la ciudadanía el informe de Relaciones Exteriores, sino la certificación de la providencia por la cual se declare dicha pérdida y ni siquiera la emisión del Decreto 281 del Congreso, porque el Decreto 2335, Gubernativo, había proyectado su eficacia y sido origen de derechos adquiridos que ni aún la retroactividad podía afectar, fundamento éste que también apoya a Claudio Bernholt Voss para no considerarlo alemán; que habiéndose probado todos los extremos señalados por el artículo 17 del Decreto 630 del Congreso, incluso que no es cierto lo aseverado por el informe de Relaciones Exteriores, sobre que Juan Bornholt Hermann haya ido a votar a los vapores "Cordillera" o "Patricia" "...el Tribunal estima que han sido probados todos y cada uno de los extremos establecidos por el Decreto 630 del Congreso para que el pa-

trimonio perteneciente a Claudio Bornholt Voss y Juan Bornholt Hermann sea excluido de la expropiación".

RESULTA:

Contra esta sentencia el Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, introdujo recurso de casación diciendo: "Fundo este recurso por violación de ley, aplicación indebida e interpretación errónea de conformidad con el artículo 506 incisos 1o. y 3o. del Decreto 2009".

"El Tribunal violó los artículos tercero 3o., 7o. incisos a) y b) y 18 del Decreto 630 del Congreso, habiéndolos interpretado erróneamente y aplicándolos de manera indebida".

Alega el recurrente que Claudio Bornholt Voss y Juan Bornholt Hermann eran alemanes el siete de Octubre de mil novecientos treinta y ocho y por ello les es aplicable el Decreto 630 del Congreso, pues el primero de los nombrados adquirió la ciudadanía guatemalteca, por naturalización, el veintisiete de Junio de mil novecientos treinta y ocho, habiendo renunciado a su nacionalidad alemana hasta el año de mil novecientos cuarenta; y, el segundo, que nació en esta República, en Abril de mil novecientos dos, conservó su nacionalidad alemana hasta el treinta y uno de Enero de mil novecientos treinta y nueve, porque conforme al Tratado del veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, celebrado entre Guatemala y Alemania, le correspondía dicha nacionalidad.

RESULTA:

El recurrente no alegó el día de la vista sino únicamente el señor Bornholt Hermann, para hacer una glosa de los artículos que el señor Representante del Ministerio Público citó como violados, y, apoyándose en lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 630 del Congreso, sostener que no le es aplicable el mencionado Decreto, pues tampoco le afecta el Tratado Montúfar-von Bergen por sus propias disposiciones relativas a los que deben considerarse como nacionales de los países contratantes, de conformidad con las cuales él es única y exclusivamente guatemalteco; que su padre, Claudio Bornholt Voss, también se naturalizó y conservó su nacionalidad guatemalteca hasta su muerte; que no habiéndose violado las leyes citadas como tales, por el recurrente, es-

peraba con serenidad el fallo de esta Corte.

Agotados los trámites respectivos, es precedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El recurso se introdujo apoyándolo en el inciso tercero del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo número 2009, que prescribe la procedencia de este recurso "cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos, que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador" y como el recurrente no individualiza las pruebas en que se haya cometido tales errores imputados, no señala, con separación en qué consisten, a su juicio, dichos errores, ni cita leyes relativas a la prueba que pudieran haber sido violadas, esta Corte se encuentra en la imposibilidad de entrar al análisis comparativo que el recurso de casación implica, pues como repetidas veces se ha dicho, no puede este Tribunal aportar lo que las partes omiten, por la naturaleza extraordinaria y restringida del mismo. Artículo 512 del Decreto Legislativo número 2009.

CONSIDERANDO:

También se interpuso este recurso por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, con apoyo en el inciso primero del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, haciendo consistir todo lo dicho en la violación de los artículos 3o., 7o. incisos a) y b) y 18 del Decreto 630 del Congreso; preceptos que determinan por qué se expropian los bienes de los enemigos de Guatemala y sus colaboradores, qué se entiende por propiedad enemiga y cuándo no deben excluirse haberes que formen parte del capital o de la cartera de personas jurídicas de carácter agrícola, financiero o bancario.

En el caso de estudio habrá de estarse a los hechos que el Tribunal sentenciador tuvo por probados, en vista de no poder entrar a una nueva valoración de la prueba, y como dicho Tribunal tuvo como guatemaltecos a Claudio Bornholt Voss y Juan Bornholt Hermann y estimó que probaron encontrarse dentro de los extremos y circunstancias señalados por el artículo 17 del Decreto 630 del Congreso, así como que no es exacta la pretensión de que Bornholt Hermann haya participado

en las votaciones llevadas a cabo en los vapores "Cordillera" y "Patricia", la aplicación de los artículos 3o., 18 y 7o. en sus incisos a) y b) del referido Decreto 630, fué correctamente hecha.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224, 232 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el recurso interpuesto. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes al Tribunal de su origen. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Mig. Alvarez Lobos. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Ministro de Hacienda y Crédito Público y "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima".

DOCTRINA: *Formando las personas jurídicas una entidad distinta de sus componentes, individualmente considerados, las concesiones otorgadas a aquellos no pueden ser aplicadas a éstas.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, treinta de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintinueve de Noviembre del año próximo pasado, en el recurso de igual naturaleza que Stephen Alexander Hammond, en concepto de representante de la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", interpuso contra la resolución número cero cero cuatro mil seiscientos diecinueve, (004619) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitida el veinticuatro de Junio de mil novecientos cincuenta y tres, que confirma el Acuerdo número veinticuatro de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, dictado el veintitrés de Junio de mil novecientos cincuenta y dos; de cuyos antecedentes,

RESULTA:

Que con fecha veintiuno de Marzo de mil novecientos cincuenta y uno, la "Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A." hizo declaración de las utilidades obtenidas, en el ejercicio comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cincuenta, con base en la cual la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades dió la orden de pago número dos mil ochenta y ocho, para que dicha Empresa enterara la suma de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES Y OCHENTA Y UN CENTAVOS, (Q.36.796.81), como impuesto de utilidad sobre las sumas de trece mil seiscientos veintiocho quetzales y ochenta y cinco centavos, (Q.13,628.85) y setecientos catorce mil quinientos doce quetzales y ochenta centavos, (Q.714,512.80), mientras se practicaba la liquidación definitiva.

El cinco de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, nombró al Auditor Tercero, señor Aníbal Calderón Paz, para que en el término de quince días hiciera revisión de la Contabilidad de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, de conformidad con el artículo 46 del Decreto 2191, y verificara el estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cincuenta, con cuyo motivo dicho Auditor informó, el treinta y uno del mismo mes y año citados, que practicada la revisión no fueron considerados deducibles los gastos declarados por la Empresa, que reportaba en la hoja de gastos no reconocidos; que sobre lo exportado por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, a la American Foreign Power Company, en concepto de dividendos y de conformidad con el número 139 del Decreto 2191, se ajustaba así: por acciones preferentes y comunes, doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos quince quetzales, veinte centavos, (Q.284,415.20); y, por intereses declarados, ciento ocho mil quetzales, (Q.108.000.00). De donde resulta que, hecha la rebaja del impuesto ya pagado por la Empresa, debe sobre beneficios de ausentes la suma de ciento once mil cuatrocientos ocho quetzales, cincuenta y cuatro centavos,..... (Q.111,408.54) y, finalmente dice, que: "Los ajustes que corresponden a las operaciones eléctricas de la Empresa, montan a la suma de ciento once mil quinientos noventa y siete quetzales, quince centavos, (Q.111,597.15), de

acuerdo con la "Nota de Gastos no reconocidos" que se adjuntan; "que en consecuencia, las utilidades declaradas por la Empresa y los ajustes hechos, conforme la nota que se acaba de indicar, suman ochocientos veintiséis mil ciento nueve quetzales y noventa y cinco centavos, (Q.826,109.95), cuyo impuesto por pagar, hecha la rebaja de lo ya enterado, asciende a cinco mil quinientos setenta y nueve quetzales y ochenta y seis centavos,..... (Q.5,579.86)". A este informe se acompañó copia del acta levantada con motivo de la revisión practicada.

Otorgada la audiencia respectiva a la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", sobre los reparos hechos, dijo: que, no obstante haber pasado un mes desde que pidió copia del acta levantada por el Auditor que practicó la revisión de su Contabilidad, no se le había dado, por cuya razón se concretaban a decir que no estaba conforme con lo relativo al pago de la suma de ciento once mil cuatrocientos ocho quetzales y cincuenta y cuatro centavos, (Q.111,408.54), que se pretendía que pagara, por impuesto relativo a beneficio de ausentes, porque este no se justificaba legalmente, de conformidad con el artículo 26 del Decreto Gubernativo 2099 y, en cuanto a los pagos hechos a "Ebasco International Corporation", repetía que han sido hechos con autorización del Ministerio de Hacienda, que los ha reconocido como deducibles.

La Séptima Auditoría de aquella dependencia emitió dictamen, diciendo que los cargos extemporáneos, por un mil ciento veintiséis quetzales y setenta y nueve centavos,..... (Q.1,126.79); los ajenos al negocios, por cuatro mil trescientos diecisiete quetzales y diez centavos, (Q.4,317.10); y los intereses de capital propio, que ascienden a doce mil trescientos dos quetzales y ochenta y un centavos, (Q.12,302.81), son reparos que deben mantenerse, pero no así los hechos por comisiones sobre giros remitidos a "Ebasco International Company", por cuatrocientos siete quetzales y treinta y cinco centavos, (Q.407.35), y el pago de honorarios hecho a la misma firma, ni lo referente al pago de timbres, porque esos ajustes los consideraba improcedentes; y que, los reparos hechos en concepto de beneficios de ausentes son correctos y deben aprobarse; que en consecuencia, la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", debe aún por impuesto sobre utilidades, la suma de tres mil cuatrocientos setenta y tres quetzales y setenta y nueve centavos, (Q. 3,473, 79), sin los reparos que fueron desvanecidos.

El veintitrés de Junio de mil novecientos cincuenta y dos, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en Acuerdo número veinticuatro, (24) aprobó el informe y acta presentados por el Auditor Tercero, Aníbal Calderón Paz, con motivo de la revisión del estado de Pérdidas y Ganancias de la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", declarando que las cantidades que faltan por pagar, a cargo de dicha Empresa, son ciento once mil cuatrocientos ocho quetzales y cincuenta y cuatro centavos, (Q.111.408.54), por beneficios de ausentes, y cinco mil quinientos setenta y nueve quetzales y ochenta y seis centavos, (Q.5.579.86), por concepto de impuesto sobre utilidades de operaciones eléctricas y mandó extender órdenes de pago por dichas cantidades. Contra esta resolución, el representante de la Empresa mencionada, interpuso recurso de revocatoria, con cuyo motivo el Ministerio de Hacienda mandó oír al Ministerio Público y al Departamento de Asuntos Tributarios, quienes, dijeron: el primero, que debía confirmarse la resolución número veinticuatro (24) de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades; y, el segundo, que para mejor dictaminar, se pidiera aclaración sobre el ajuste de doce mil trescientos dos quetzales y ochenta y un centavos de intereses que habían sido cargados sobre inversión de capital, porque parecía que con el criterio del Auditor se contravenía el artículo 69 del Decreto Gubernativo 2191.

Vuelto el expediente, de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, con la aclaración que se estimó pertinente, debidamente aprobada por la Oficina respectiva, el Departamento de Asuntos Tributarios dijo: que la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", manifestaba su inconformidad con los reparos hechos sobre pago de beneficios de ausentes y los hechos a la, "Ebasco International Corporation", pero que ninguna prueba había aportado para desvanecerlos; que asegurando tener autorización del Ministerio para no pagar los impuestos relativos a la "Ebasco International Corporation", debía exigírsele que presentara tal autorización para saber si estaba conforme con la ley o en su caso derogarla y sostener el reparo.

Establecido que la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", tiene la resolución número dos mil ciento sesenta y tres, (2,163) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitida el veintisiete de Marzo de mil novecientos cuarenta, por la que se aprueban las reglas que determinan sus cuentas de

Pérdidas y Ganancias, entre las cuales se detalla la rebaja de todos los gastos incurridos durante el año de oficio, según especificación del inciso a) que dice: "Gastos de Administración, incluyendo: las cuotas pagadas y debidamente comprobadas, procedentes de los servicios que preste la Ebasco Services Incorporated de Nueva York, cuyo contrato asume de la Empresa Guatemalteca de Electricidad Inc., en la inteligencia de que los porcentajes convenidos en el artículo 24 de la parte I del referido contrato, se podrán modificar sólo con autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y todos los impuestos pagados por la Empresa, con excepción del establecido en el artículo 17 del Decreto Gubernativo 1543", el Departamento de Asuntos Tributarios dijo que de conformidad con el artículo 28, numeral 2o. inciso d) del Decreto Gubernativo 2099 y lo resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Corte Suprema de Justicia, el veinte de Febrero de mil novecientos cincuenta y veintidós de Febrero de mil novecientos cincuenta y dos, respectivamente, debía confirmarse la resolución recurrida, excepción hecha del reparo por cincuenta y siete mil setecientos veintinueve quetzales y diez centavos de honorarios pagados a la "Ebasco International Corporation" que debe ser rebajado a la cantidad que presente el dos por ciento sobre las utilidades netas de la Empresa, obtenidas en el ejercicio revisado, tanto más que ésta no había desvanecido aquellos reparos.

Con los antecedentes detallados el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en providencia número cero cero cuatro mil seiscientos diecinueve, (004,619) resolvió sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y confirmó la resolución número veinticuatro de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, de fecha veintitrés de Junio de mil novecientos cincuenta y dos, con la modificación de que el reparo por concepto de honorarios a la "Ebasco International Corporation" de Nueva York, debía ser rebajado en la suma de trece mil trescientos siete quetzales y cincuenta y dos centavos, dos por ciento de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio revisado, de conformidad con el numeral 2o. del inciso d) del artículo 28 del Decreto Gubernativo 2099. Se mandó que volviera a la oficina de origen donde debía hacerse la respectiva liquidación y hacerlo saber a la Empresa obligada para que dentro de dos días pagara su adeudo o se procediera por la vía económico-coactiva. Los pagos mandados se hicieron bajo protesta, por la Empresa obligada a ello.

RESULTA:

Con fecha veintitrés de Septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, el representante de la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", se presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo manifestando: que al revisar el período de imposición comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cincuenta, se había levantado el acta número sesenta y cuatro, en la que el revisor hace los siguientes ajustes: Impuesto de ausentismo sobre doscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco quetzales y treinta y dos centavos, que asciende a ciento once mil cuatrocientos ocho quetzales y cincuenta y cuatro centavos; que la cantidad de cincuenta y siete mil setecientos veintinueve quetzales y diez centavos, pagada a "Ebasco International Service Inc.", no es deducible; que los intereses del seis por ciento anual pagados a "American & Foreign Power Company", como tenedora de bonos, sólo es deducible en el cuatro por ciento, por lo que hay un reajuste de treinta y seis mil quetzales; que la Empresa debe pagar doscientos veinte quetzales, doce centavos y su multa de dos mil doscientos un quetzales veinte centavos, por una parte y doscientos veinticuatro quetzales sesenta y un centavos, sin incluir, la multa por la otra, en concepto de impuesto de timbre; que habiendo aprobado tal liquidación la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, en resolución número veinticuatro, de fecha veintitrés de Junio de mil novecientos cincuenta y dos, que fué aprobada, a su vez, por resolución número cero cero cuatro mil seiscientos diecinueve, dictada por el Ministerio de Hacienda, el veinticuatro de Junio de mil novecientos cincuenta y tres, acudía en recurso contencioso administrativo contra esta última resolución citada, para que previas las audiencias respectivas, en su oportunidad, se abriera a prueba el procedimiento.

RESULTA:

Contestada negativamente la demanda por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y acusada rebeldía al Ministerio Público, se abrió a prueba el asunto por quince días, durante cuyo lapso se rindieron las siguientes: certificación de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veintinueve de Julio de mil novecientos cuarenta y ocho, en el recurso que Empresa Eléctrica entabló en aquel Tribunal

contra la resolución número tres mil doscientos ochenta y cinco, (3,285), dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el catorce de Abril de aquel año, por la que consta que dicho Tribunal confirmando algunos reparos, revocó otros; certificación extendida por el oficial mayor del ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, donde consta el contrato de la Empresa Eléctrica con el Gobierno, su modificación, Acuerdos Aprobatorios y Decreto Legislativo 2260, todo por parte del recurrente, con cuyos antecedentes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia que en lo conducente dice: "DECLARA: 1o.) REVOCA la resolución recurrida en cuanto a los renglones que motivan los reparos y ajustes a que se refieren los "considerandos" segundo, tercero y cuarto; 2o.) CONFIRMA la misma resolución en cuanto fueron motivo de reparo los renglones a que aluden las dos últimas consideraciones que se dejan expuestas (5a. y 6a.); y 3o.) Manda que al quedar firme esta sentencia, se proceda a liquidar el impuesto pendiente de cobro por los reparos confirmados". Para revocar lo resuelto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los puntos indicados por la parte de la sentencia que se acaba de transcribir, el Tribunal sentenciador considera: "Que según el artículo 6o. del contrato y su modificación que quedan indicados, la Sociedad Anónima "Empresa Eléctrica de Guatemala", pagará al Gobierno de la República como compensación o cuota POR TODO IMPUESTO FISCAL O MUNICIPAL ESTABLECIDO O QUE SE ESTABLEZCA EN LO FUTURO, inclusive los derechos de aduana, el dos por ciento (2%) de las entradas brutas procedentes de la venta de energía eléctrica;..." "...En consecuencia, el llamado impuesto de ausentismo, o sea el que gravita sobre dinero exportado del país, se incluye en el dos por ciento convenido con el Gobierno, mientras el contrato correspondiente no sea revisado y puesto en consonancia con la conveniencia pública y el interés fiscal". "Que los reparos hechos... por las comisiones sobre giros remitidos a la firma "Ebasco International Company" a Nueva York y por los honorarios cubiertos a la misma entidad, que se indican en los puntos "III" y "IV" del informe de la Séptima Auditoría de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, son improcedentes, porque los primeros fueron enviados en concepto de remuneración de servicios técnicos de dicha compañía, y los segundos en concepto de honorarios y no para cubrir presupuestos convencionales de sueldos

y gastos en favor de las sedes u oficinas matrices de compañías extranjeras ni a una sucursal de la Empresa, ..."; que lo mismo cabe decir en cuanto al reparo por omisión de timbres "...porque la Empresa "por concesión contractual" como dice la ley, goza de exoneración de éste y otros impuestos". Que en cuanto al reparo del dos por ciento de intereses, sobre bonos pagados a la firma norteamericana "American Foreign Power Company" por Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, tampoco es ajustable, no sólo porque un bono es título distinto del de una obligación a mutuo, sino porque "Los intereses y demás gastos de índole financiera se estimarán como deducibles", cuando no correspondieren a los socios, pues en este caso, si los socios "además del capital invertido" en su propia sociedad o empresa, "hubieren prestado dinero a la sociedad", solamente los intereses que no excedan del cuatro por ciento (4%) son deducibles, pero el porcentaje excedente no se deducirá".

RESULTA:

El recurrente, señor Hammond, interpuso los recursos de aclaración y ampliación contra la sentencia referida, para que se considerara también que la desaprobación del reparo por falta de pago del impuesto sobre beneficios de ausentes, se debía a que estos beneficios habían sido obtenidos por los negocios de la Empresa recurrente, en operaciones locales, y como ya había pagado el impuesto por tales beneficios no le eran imposables otros. El Tribunal sentenciador declaró sin lugar tales recursos por estimarlos infundados conforme a la ley.

RESULTA:

Contra esta sentencia y bajo la dirección del Abogado José Vicente Rodríguez, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de casación por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, fundado en el inciso 1o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, citando como violados el artículo 6o. del Contrato celebrado por la antecesora legal de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, con el Gobierno de la República, el cuatro de Mayo de mil novecientos veintidós, con su modificación de fecha veintisiete de Enero de mil novecientos treinta y ocho, aprobado por Decreto Legislativo 2260; el artículo 17, párrafo penúltimo del Decreto Gubernativo 2099; 66,

67, 68, 69 (reformado este último por el Decreto Gubernativo 2341), 70, 71 y 72 del Decreto Gubernativo 2191, o sea el Reglamento para la Aplicación de la Ley del Impuesto Sobre Utilidades de Empresas Lucrativas; y el artículo 1o. del Decreto Legislativo 1831.

Afirma el recurrente que el artículo 6o. del contrato referido fué violado por aplicación indebida e interpretación errónea, pues se equivocó el Tribunal sentenciador al considerar que "el llamado impuesto de ausentismo o sea el que gravita sobre el dinero exportado del país, se incluye en el dos por ciento convenido con el Gobierno"; afirmación que asegura fundarla en lo resuelto por esta Corte, en varios casos, y especialmente en el recurso de casación interpuesto por "Agencias Unidas Sociedad Anónima" que motivó la sentencia de fecha veintiuno de Marzo de mil novecientos cincuenta y dos, en el cual se dice que el impuesto de ausentismo es aplicable aún a los intereses, dividendos, etcétera, provenientes de negocios locales de las empresas lucrativas. Que también se violó el artículo 6o. en referencia, en su inciso C), al afirmar que la Empresa, "por concesión contractual" goza de exoneración de éste y otros impuestos, pues precisamente el inciso c) mencionado, constituye una excepción a esas exoneraciones, cuando establece que la Compañía se obligó a pagar impuesto de timbres fiscales en las facturas de ventas de mercaderías que importa para ese objeto, recibos por trabajos hechos en las instalaciones de sus consumidores y en sus giros, letras de cambio y cheques, en la forma y cuantía en que graven todos los documentos de la misma índole, violando también, por esta misma razón, el artículo 1o. del Decreto Legislativo 1831. El artículo 69 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, asegura que fué violado porque no se tuvieron en cuenta sus estipulaciones en lo que se refiere al reajuste legal, por concepto de intereses pagados, por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, a la "American & Foreign Power Company", y los artículos 66 en todos sus incisos; 67, 68, 70, 71 y 72 (reformado este último por el Decreto Gubernativo 2341) del Decreto Gubernativo 2191, fueron violados porque los gastos que se conceptúan como deducibles, por el Tribunal sentenciador, no se encuentran comprendidos en ninguno de dichos artículos.

El representante de la "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", alegó el día de la vista, que el mismo señor Ministro

recurrente ha refrendado el Decreto número 202 del Presidente de la República, por el cual se deroga la parte del artículo 17 del Decreto Gubernativo 2099, que creó el impuesto de ausentismo, y que servía de fundamento a la casación interpuesta por dicho funcionario, lo que demuestra de modo evidente que el propio recurrente considera que no es aplicable al caso sub-judice el precepto legal que se citó como violado. Acompañó copia de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda en casos similares. Corridos los trámites correspondientes es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El recurrente, fundándose en el inciso primero del artículo 506 del Decreto Legislativo número 2009, introdujo casación contra la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, asegurando que en dicho fallo se "...aplicó indebidamente e interpretó con error el artículo 60. párrafo primero..." del contrato celebrado entre la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, y el Gobierno, violándose, por inaplicación, el artículo 17 en su penúltimo párrafo del Decreto Gubernativo número 2099, así como el inciso C) del artículo 60. antes referido y el artículo primero del Decreto Legislativo número 1831, que se refieren a las exoneraciones concedidas a la Empresa Eléctrica de Guatemala, impuestos que debe pagar y preceptos genéricos que establecen los impuestos. También estima violados los artículos 69, 66, 67, 68, 70, 71 y 72 del Decreto Gubernativo número 2191, porque no se tuvo en cuenta las estipulaciones del primero, para lo relativo al reajuste de intereses a la "American Foreign Power Company", y porque los gastos que el Tribunal sentenciador tuvo como deducibles no se encuentran comprendidos en ninguno de los artículos últimamente mencionados.

El Tribunal sentenciador efectivamente considera, como queda transcrito en los "resultas" de esta sentencia, que el reparo por impuesto sobre beneficios de ausentes, intereses y timbres, es improcedente porque la Empresa contribuyente está exonerada de esos y otros impuestos.

Siendo las personas jurídicas entidades distintas de sus miembros, individualmente considerados, (Artículo 22 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932), las exoneraciones concedidas a "Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima", no pueden aplicarse a su accionista "American Foreign Power Company", porque a contrario sensu todos los accionistas de la Empresa mencionada estarían

exonerados de los impuestos que aquélla no paga. De manera que al considerarlo así, el Tribunal sentenciador violó, por interpretación errónea, el artículo sexto del contrato celebrado entre la Empresa en mención y el Gobierno de la República, aprobado por Decretos Legislativos números 1192 y 2260. Como consecuencia de lo antes dicho también fué violado el artículo 17 del Decreto Gubernativo 2099, en el párrafo citado por el recurrente, no obstante, para hacer esta afirmación, el hecho de que el precepto contenido en el párrafo y artículo citados haya sido suprimido por Decreto 202 del Presidente de la República, porque tal supresión fué decretada con posterioridad al periodo en que se causó el impuesto, sin que la disposición referida haya sido emitida con efecto retroactivo.

Al estimar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que el reparo por la omisión de timbres es improcedente, porque la Empresa, por concesión contractual está exonerada de éste y otros impuestos, violó el inciso c) del artículo primero del contrato celebrado entre la Empresa de mérito y el Gobierno de la República, el veintisiete de Enero de mil novecientos treinta y ocho, aprobado por Decreto Legislativo 2260, por el que se modificó el artículo sexto del contrato celebrado con anterioridad y que había sido aprobado por Decreto Legislativo 1192, pues tal inciso dice: "**La Compañía, sin embargo, como única excepción, queda obligada a pagar los siguientes impuestos:** A) B) C) Impuesto de timbres fiscales en las facturas..., recibos... y en sus GIROS, letras de cambio y cheques, en la forma y cuantía en que graven todos los documentos de la misma índole"; con el inciso referido fué infringido el artículo primero del Decreto Legislativo 1831. Asimismo se violaron los artículos 66, en todos sus incisos; 67, 68, 70, 71 y 72 del Decreto Gubernativo número 2191, al considerar como deducibles los gastos por honorarios cubiertos a "Ebasco International Company" y comisiones sobre giros hechos a ésta, sin ser de las deducibles conforme los artículos citados, aduciendo, como razón legal, el que los giros fueron enviados en concepto de remuneración de servicios técnicos de dicha compañía "...y no para cubrir presupuestos convencionales de sueldos y gastos en favor de las sedes u oficinas matrices de compañías extranjeras ni a una sucursal de la Empresa..." no obstante que de lo sostenido y dicho por la misma Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, se desprende que la "Ebasco International Company" es una compañía extranjera; que el pro-

pio Tribunal sentenciador acepta que lo enviado entra en concepto de honorarios, que es tanto como decir: "Estipendio o sueldo que se da a uno por su trabajo en algún arte liberal" y que el artículo 28 inciso c) del Decreto Gubernativo 2099 prohíbe deducir gastos en favor de las sedes de tales compañías. Y, finalmente, el Tribunal sentenciador violó las disposiciones del artículo 69 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, al estimar que es deducible el seis por ciento de interés en favor de "American Foreign Power Company", a pesar de que en los antecedentes aparece que dicha compañía es accionista de "Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A." y tiene bonos de esta misma con intereses mayores de los que el artículo 69, citado, permite.

En virtud de lo expuesto procede casar la sentencia en cuanto a los puntos redargüidos y resolver conforme a la ley. Artículos XII de los Preceptos Fundamentales, Decreto Gubernativo 1862; 518 del Decreto Legislativo 2009; y los ya citados.

CONSIDERANDO:

El reparo hecho por falta de pago del impuesto sobre beneficios de ausentes, aplicado a la "American Foreign Power Company" por lo que se le ha enviado como utilidad adquirida en el país, no residiendo en él, está ajustado a lo que disponía el artículo 17 del Decreto Gubernativo 2699, pues tal impuesto se paga sobre dividendos y beneficios eventuales de cualquier origen comprobable, obtenidos en la República, por personas que residan de modo permanente en el exterior, caso en el que se encuentra la citada compañía "American Foreign Power".

El reparo relativo al pago del timbre también está de acuerdo con lo dispuesto por el inciso c) del artículo sexto del contrato celebrado por la "Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A." y el Gobierno de la República, aprobado por los Decretos Legislativos números 1192 y 2260.

El ajuste hecho sobre los intereses pagados a "American Foreign Power Company" por el exceso de dos por ciento sobre lo que permite la ley, se encuentra perfectamente arreglado a lo dispuesto por el artículo 69 del Decreto Gubernativo número 2191, por cuanto que, dicha compañía, a la vez que es accionista de "Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.", tiene bonos de dicha Empresa, o lo que es igual, títulos de deuda emitidos por ésta, que ganan intereses.

Finalmente, el reparo hecho por el pago de honorarios a "Ebasco International Company" está arreglado a lo dispuesto por el numeral 2o. del inciso d) del artículo 28 del Decreto Gubernativo número 2099, sin que importe para ello la existencia de la resolución número dos mil ciento sesenta y tres (2163) de fecha veintisiete de Marzo de mil novecientos cuarenta, sobre las reglas para determinar las ganancias de "Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.", pues ya esta Corte ha sostenido (sentencia de fecha veintidós de Febrero de mil novecientos cincuenta y dos), que "jurídicamente los Tribunales de Justicia no están ni podrían estar supeditados a interpretaciones que de la ley hiciesen funcionarios del Organismo Ejecutivo porque es principio constitucional (ahora en el artículo 5o. del Estatuto Político de la República) que las funciones judiciales las ejercen con exclusividad absoluta los Tribunales de la República; pero no podrían llenar su cometido si estuvieran supeditados a obedecer interpretaciones legales que hubiesen hecho oficinas administrativas, porque eso implicaría la subordinación del criterio del juzgador, contra lo previsto en la Constitución, que también dispone que los Tribunales deben aplicar las leyes en todo aquello que las mismas hagan de su conocimiento". Como consecuencia de la legalidad del reparo hecho sobre aquellos honorarios también es legal el ajuste sobre las comisiones que para el envío de los mismos se pagaron. Leyes citadas.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en lo preceptuado por los artículos 27, 524 del Decreto Legislativo 2009; 222, 223, 224., 227, 228, 233 y 234 del Decreto Gubernativo 1862, resuelve: con lugar el presente recurso, revoca la sentencia de mérito en los puntos impugnados y resolviendo acerca de ellos, declara: que confirma lo resuelto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su resolución número cero cero cuatro mil seiscientos diecinueve, dictada con fecha veinticuatro de Junio de mil novecientos cincuenta y tres. Notifíquese, repóngase el papel en la forma de ley y con certificación de lo resuelto revuélvanse los antecedentes a donde corresponde. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Mig. Alvarez Lobos. — Ante mí: Juan Fernández C.

CIVIL

Ordinario seguido por el Interventor de la mortual de don Marino Humberto Ventura Prera, contra el Estado de Guatemala.

DOCTRINA: *La doctrina del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva civil, proveniente de caso fortuito, contenido en la Ley de Accidentes, solamente es aplicable a las empresas individuales o colectivas destinadas a prestar servicios públicos de transporte.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala treinta de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación, se tiene a la vista, la sentencia proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, el veintinueve de Abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, en el juicio ordinario seguido por el señor Rafael Haeussler Yela, en concepto de Interventor de la mortual de don Marino Humberto Ventura Prera, contra el Estado de Guatemala, de cuyos antecedentes,

RESULTA:

El señor Haeussler Yela, compareció ante el Juez Tercero de Primera Instancia de este departamento, en su calidad ya indicada, entablado demanda contra el Estado, exponiendo: "Que el veintisiete de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno, cerca de las diez y ocho horas y cuarenta y cinco minutos, al despegar del aeropuerto de "Santa Elena" en Flores Petén, el avión del ejército C cuarenta y siete-cero novecientos sesenta y uno, que piloteado por el Mayor Enrique Pérez Guisasaola, traía de regreso a esta Capital a la delegación artística que había ido a dar un concierto a la base militar de Santa Elena y al Pueblo de Flores, en jira organizada y patrocinada por el Ministerio de la Defensa Nacional, comenzó a fallar y de repente se precipitó al abismo envuelto en llamas produciéndose la más grande catástrofe aérea que registra los anales de la aviación en Guatemala. El avión al chocar en el suelo se dividió en fragmentos, muriendo en el accidente el piloto y casi la totalidad del grupo artístico, entre los cuales se encontraba el señor Marino Humberto Ventura Prera". "Los hechos relacionados determinan responsabilidad civil para el Estado de Guatemala, a tenor de lo dispuesto en los

Artículos 1o., 6o. del Decreto Legislativo 1827; 3o., 4o., 5o., y 7o. del Decreto del Congreso No. 178, preceptos legales en los cuales fundamento la demanda". Después de ofrecer las pruebas de su acción, concluyó pidiendo: "una vez llenados los requisitos de ley, se sirva pronunciar sentencia, condenando a la parte demandada, para que dentro de tercero día cubra al menor Jorge Leonel Prera Rodas, hijo y heredero legal del señor Marino Humberto Ventura Prera, la suma que determinen los expertos en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la muerte de su señor padre y causante".

RESULTA:

El Procurador General de la Nación, contestó la anterior demanda, en sentido negativo, porque todos los pasajeros que abordaron el avión de que ya se hizo referencia y que sufrió un lamentable accidente con saldos trágicos, suscribieron previamente en esta ciudad, el atestado de irresponsabilidad respectivo, como es reglamentario en estos casos; que con la certificación que acompañaba, extendida por el Secretario de la Fuerza Aérea, probaba que el señor Marino Humberto Ventura Prera, firmó el "formulario EME-DAG. 21-AG-50" número cuarenta y cinco, previo a abordar el avión mencionado, pidiendo que se tuvieran como interpuestas las excepciones perentorias de falta de acción, falta de derecho para demandar, pacto de no pedir y de prescripción, y que en sentencia se absolviera al Estado de Guatemala, de la citada demanda.

RESULTA:

Durante el término de prueba, las partes rindieron las siguientes: la actora: juicio de expertos para fijar el monto de la indemnización, habiendo dictaminado como tales designados por las partes don Antonio Paredes Mendoza, quien fijó la indemnización de veinticinco mil quetzales, y el Coronel Gonzalo Yurrita Nova, en el sentido de que el Estado no estaba obligado a ninguna indemnización, en este caso; certificación de las diligencias voluntarias seguidas en el propio juzgado, en que consta una nómina suministrada por la Guardia Civil de Flores, Petén, de las víctimas del accidente aéreo, en la cual figura el señor Prera, y una certificación del mismo Juzgado, del auto en que se declaró heredero de Prera, a su hijo Jorge Leonel Prera Rodas.

La parte demandada únicamente solicitó que se tuviera como prueba la certificación acompañada a la contestación de la demanda, del formulario de irresponsabilidad firmado por Prera, antes de abordar el avión.

RESULTA:

Que con esos antecedentes y agotados todos los trámites del juicio, el Juez Tercero de Primera Instancia de este departamento, el veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y tres, dictó su sentencia, haciendo las siguientes declaraciones: "I) que el Estado de Guatemala, debe indemnizar al heredero del señor Marino Humberto Ventura Prera, Jorge Leonel Prera Rodas, por haber causado la muerte de su padre uno de los aeroplanos de su pertenencia, fijándose esa indemnización en la suma de CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5.000.00) que deberán ser pagados dentro de tercero día. II) Sin lugar las excepciones de falta de acción, falta de derecho para demandar y pacto de no pedir, interpuestas por la parte demandada, y III) que no hay especial condena en costas". Por recurso de apelación, conoció del anterior fallo la Sala 3a. de la Corte de Apelaciones, y dictó la sentencia que se estudia, que confirma los pronunciamientos de primera instancia con la única modificación de que el monto de la indemnización debe ser de TRES MIL QUETZALES. Para ese efecto consideró, que con las constancias documentales aportadas al juicio quedó establecido el hecho principal de la demanda o sea el accidente que sufrió el avión de la Fuerza Aérea del Estado de Guatemala, que traía de regreso a una delegación artística de la que formaba parte el señor Marino Humberto Ventura Prera; que "las proyecciones jurídicas de este hecho al concordarlo con la ley de accidentes, contenida en el Decreto Legislativo 1827 y el Decreto del Congreso número 178 que la reformó, señalan para el Estado de Guatemala responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la muerte de Prera, a favor de sus legítimos herederos, porque dicha ley de accidentes así lo determina con claridad, excluyendo de esa responsabilidad únicamente para los casos en que el damnificado hubiere dado lugar intencionalmente, al daño o perjuicio resultante o cuando hubiere procedido con manifiesta violación de los reglamentos, dictados por el Ejecutivo con respecto a los servicios públicos de transporte, casos en que está evidente no incurrió el señor Prera, ni

fueron planteados, mucho menos demostrados por la parte demandada. En tal situación es procedente la condena del Estado de Guatemala, en aplicación de las dos leyes citadas, que recogen la doctrina del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva, según la cual existe responsabilidad para el operante o dueño de cosas peligrosas, verbigracia vehículos de motor, por los daños que cause, aún por caso fortuito".

RESULTA:

Contra este último fallo, el jefe de la Sección de Procuraduría del Ministerio Público, en representación de esa Institución, interpuso recurso extraordinario de casación, por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, y por error de derecho en la apreciación de las pruebas, fundamentándolo en los casos contenidos en los incisos 1o. y 3o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, y citando como leyes violadas, los artículos 1o. del Dto. Leg. 1827; 2o., 3o. en todas sus partes, y 5o. del Dto. 178 del Congreso; 229, 259, 269, 277, 278, 282, 296, 287, 304, 315, 316, 319 y 455 del Dto. Leg. 2009; y 224 Dto. Gub. 1862, con los siguientes argumentos: "Con la fundamentación anterior de su fallo, la Sala sentenciadora interpretó erróneamente y aplicó indebidamente el artículo 1o. del Decreto Legislativo número 1827, ya que dicho artículo establece la responsabilidad solidaria en la acción civil de los dueños de cualquier medio de transporte, con los autores y cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos. Pero no fijó su atención en que dicho artículo se refiere a los daños y perjuicios que sufran las personas que hagan uso de servicios públicos de transporte o como establecen los dos primeros considerandos del Decreto Legislativo 1827, que se trata de regular los daños y perjuicios que sufran las personas causados por las Empresas que por su índole incrementan el desarrollo económico del país; así también de evitar el abuso de quienes conciertan contratos exagerados de cuota-litis, que reducen al mínimo la indemnización que los damnificados pudieran obtener en el cobro a las empresas por causas de accidentes... En cuanto a su aseveración de que el Decreto número 178 del Congreso no excluye a los particulares de responsabilidad, también hay que tener presente que se trata de particulares dueños de vehículos de transporte, en su carácter de Empresa particular o individual pues

al establecer en su parte considerativa, el derecho a indemnización de quienes sufran daños causados al hacer uso de los medios públicos de transporte, debe entenderse, cuando se habla de particulares propietarios, que éstos están prestando con su vehículo un servicio público de transporte, aunque no constituyan Empresas Colectivas, sino Empresa Individual... En los considerandos de la sentencia recurrida, la Sala sentenciadora no especificó cuáles eran las constancias documentales que según su criterio, establecían que la nave aérea que sufrió el accidente perteneciera a la Fuerza Aérea del Estado de Guatemala, siendo después, al resolver los recursos de aclaración y ampliación interpuestos por el Estado, cuando se refirió concretamente a las certificaciones que aparecen agregadas al expediente, presentadas precisamente por el Ministerio Público para acreditar que el infortunado Marino Humberto Prera suscribió un formulario eximiendo de responsabilidades al Estado, al abordar el avión militar guatemalteco número 0961; "este atestado en lo que se refiere a la exención de responsabilidad no tiene validez, como se dijo en la sentencia porque queda relegado a documento privado, por las razones que ahí se expusieron, pero sí tiene todo su valor probatorio como documento auténtico, en lo que respecta al demás contenido, consiguientemente en cuanto a la aseveración de que el avión es militar guatemalteco". Esta forma de estimar robada la propiedad de la nave, considerando que es de la Fuerza Aérea del Estado de Guatemala, implica error de derecho en la apreciación de la prueba, pues en su sentencia, (de la Sala) no se concretan cuáles fueron las constancias documentales que la llevaron al convencimiento de que estaba probada la propiedad de la nave". Agotados los trámites de este recurso y señalado día para la vista, procede resolver:

—I—

CONSIDERANDO:

Al examinar este recurso conforme al primer caso de procedencia citado por el recurrente, que se refiere a cuando la sentencia recurrida contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, y que se hace consistir en que la Sala sentenciadora, para condenar al Estado, hizo aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1o. del Decreto Legislativo 1827, y 3o. del Decreto 178 del Congreso, cuyas disposiciones interpretó y aplicó indebidamente y erróneamente,

porque no corresponden al caso resuelto. En efecto, como ya se dijo, el citado Tribunal consideró: que la Ley de Accidentes, contenida en el Decreto Legislativo 1827 y el Decreto del Congreso número 178 que la reformó, señalan para el Estado de Guatemala responsabilidad civil, por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la muerte del señor Prera, porque dicha ley de Accidentes así lo determina con claridad, y que es procedente la condena del Estado de Guatemala, en aplicación de las dos leyes citadas, que recogen la doctrina del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva, según la cual existe responsabilidad para el operante o dueño de cosas peligrosas, por los daños que cause, aún por caso fortuito. Tal apreciación es indudable que desatiende el espíritu que informó la emisión de la Ley de Accidentes, ya que el legislador claramente expresa: que es deber del Gobierno ejercitar una labor de protección sobre la base de una estricta justicia, tanto para los habitantes en general como para aquéllas empresas que por su índole incrementan el desarrollo económico del país; que asimismo es deber del Estado velar por la seguridad de las personas que hacen uso de los servicios públicos de transportes, por medio de disposiciones legales que obliguen a los propietarios de tales servicios y a las personas encargadas del manejo de los vehículos, a poner el mayor cuidado y atención en el desempeño de su cometido, y en forma clara prescribe: que las Empresas de Ferrocarriles, vapores, tranvías, automóviles, aeronaves y los dueños de cualquier medio de transporte, son solidariamente responsables en la acción civil, con los autores o cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aún cuando no sean empleadas de dichas empresas. Tales conceptos que sirven de fundamento a las disposiciones legales citadas, cuya unidad con la parte ordenativa es indivisible, ponen de manifiesto, que sus disposiciones se refieren con exclusividad a la responsabilidad de las empresas y dueños de vehículos destinados a prestar servicios públicos de transporte, regulando la protección de las víctimas de accidentes, precisamente por el beneficio económico que les reporta la actividad a que se dedican, sin que pueda darse a esas leyes una interpretación extensiva y aplicarlas a entidades o personas distintas de las mencionadas, para considerarlas responsables por caso fortuito dentro de la doctrina del riesgo, culpa o responsabilidad objetiva, porque sus prescripciones son claras en ese sentido, es decir, que rigen únicamente para

las empresas individuales o colectivas, de servicios públicos de transportes y por extensión a las de luz y fuerza eléctrica o sus similares, expresamente comprendidas en aquéllas. Además, como el transporte es un contrato en virtud del cual, por cierto precio, se contrae la obligación de conducir por cualquier medio, de un lugar a otro, pasajeros o mercaderías ajenas, para entregarlas a la persona a quien vayan consignadas (Arto. 138 del Código de Comercio), no puede estimarse que el hecho accidental de trasladar a personas de un lugar a otro en aviones no destinados al servicio de transportes públicos, se transforme en un contrato de ese tipo, porque sus elementos formativos no existen en esta simple conducción, máxime, si como se ha sostenido en este asunto, se trata de una nave perteneciente a la Fuerza Aérea del Estado de Guatemala, porque el servicio militar a que están destinadas tales naves dentro de la organización del Ejército, es muy diferente a una empresa de transportes. De manera que al fundamentarse el fallo recurrido en la Ley de Accidentes, para deducir la responsabilidad civil del Estado de Guatemala, en este caso, es manifiesta la errónea interpretación e indebida aplicación de los artículos 1o. del Decreto Legislativo 1827 y 3o. del 178 del Congreso, por cuya razón, sin entrar al análisis de las demás leyes citadas como infringidas, procede casar el fallo recurrido y dictar el que en derecho corresponde. Artículo 512 del Decreto Legislativo 2009.

—II—

CONSIDERANDO:

Como en el párrafo anterior se llega a la conclusión de que es improcedente situar este caso dentro de las prescripciones de la Ley de Accidentes, y ese fué el único fundamento del Tribunal sentenciador para condenar al Estado de Guatemala, no obstante de tratarse de un caso fortuito, por razones obvias, carece de objeto el estudio y valorización de la prueba aportada al juicio por las partes contendientes, toda vez que de acuerdo con aquélla conclusión, debe reconocerse la procedencia de la excepción de falta de derecho para demandar interpuesta por el representante de la parte demandada, resultando así inoperantes las otras excepciones planteadas, por ser obligado un pronunciamiento absolutorio en favor de la parte del reo, como consecuencia de las consideraciones que anteceden. Artículos 224, 227, y 228 del Decreto Gubernativo 1862.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo considerado, leyes citadas y con lo prescrito en los artículos 22, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 518 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: con lugar el presente recurso de casación, revoca la sentencia recurrida, y resolviendo sobre lo principal, absuelve al Estado de Guatemala, de la demanda que le interpuso el representante de la mortual del señor Marino Humberto Ventura Prera, señor Rafael Haeussler Yela, por ser procedente la excepción de falta de derecho en el actor para demandar, interpuesta por la parte demandada. Notifíquese y en la forma correspondiente devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguilar Fuentes).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí; Juan Fernández C.

CIVIL

Ordinario de divorcio seguido por Patrocinia Desideria Cáceres Hernández de Monzón contra German Monzón Juárez.

DOCTRINA: *Para que prospere el recurso de casación, es indispensable citar con la debida propiedad el caso o los casos de procedencia en que se funde, a fin de que el Tribunal pueda efectuar el análisis comparativo entre dichos casos y las leyes que se estimen violadas.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diez de Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Con sus respectivos antecedentes, se tiene a la vista para resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por German Monzón Juárez contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el veintiuno de julio del corriente año, en el juicio ordinario de divorcio seguido en el Juzgado Primero de Primera Instancia Departamental por Patrocinia Desideria Cáceres Hernández de Monzón contra el recurrente.

RESULTA:

El nueve de febrero del corriente año se presentó al Juzgado Primero de Primera Instancia de este Departamento, Patrocinia Desideria Cáceres Hernández de Monzón, exponiendo: que contrajo matrimonio civil en esta Capital con German Monzón Juárez, el dos de agosto de mil novecientos cuarenta y uno; que ninguno de los contrayentes aportó bienes al matrimonio, pues apenas la presentada tenía una pequeña expectativa a la sexta parte de una casa, por razón de herencia paterna; que posiblemente el hecho de no haber procreado hijos en el matrimonio, ocasionó dificultades que culminaron en que el esposo formara vida conyugal con otra mujer, abandonando de hecho el hogar común y continuando la presentada viviendo en la casa que le dejó su padre; que el nueve de junio del año próximo pasado, Monzón Juárez demandó el divorcio a la presentada, en el propio Tribunal, fundándose en que ésta había abandonado el hogar y en separación de hecho; que su esposo no pudo probar aquellas causales, pero que, estimando como injuria grave la imputación que le hizo, y, además, por haberse negado en su propia demanda a cumplir con el compromiso que le impone la ley de suministrarle alimentos, demanda a su referido esposo, por los motivos establecidos en los artículos 124 incisos 5o., 6o., 8o. y 13, 125 del Código Civil y 4o. del Decreto Leg. 2010, el divorcio en la vida ordinaria, ofreciendo como pruebas la confesión judicial, documentos públicos, auténticos y privados, testigos y demás medios de prueba autorizados; que dadas las magníficas condiciones económicas de su marido y la posición en que la ha tenido, pide que se le fije una pensión de cien quetzales para el sostenimiento de la demandante. El Juez ordenó dar audiencia en la vía ordinaria al demandado y fijó la pensión provisional de cincuenta quetzales a Monzón Juárez en favor de la actora.

RESULTA:

German Monzón Juárez contestó la demanda afirmativamente en cuanto a los hechos y exponiendo: que como su esposa tiene casa donde vivir, en tanto que el presentado tiene que alquilar casa, además de sus obligaciones personales, que se establezca que la pensión que debe pasar a su esposa sea de veinte quetzales cuando más, pues que ella no le ha prestado ni le presta servicio alguno. Esta contestación fué debidamente ratificada ante

el Juez. Obra en el expediente la certificación de la partida de matrimonio de los esposos Monzón Juárez-Cáceres Hernández.

RESULTA:

El treinta y uno de marzo del corriente año, con vista de la contestación afirmativa de la demanda, el Juez dictó su sentencia, considerando que con la confesión legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda terminaba la controversia y quedaban plenamente establecidas las causales invocadas, suficientes para la procedencia de la mencionada demanda. En tal virtud, declaró el divorcio absoluto de los esposos, Patrocinia Desideria Cáceres Hernández y German Monzón Juárez, no haciendo declaración respecto de bienes ni respecto de hijos, por no constar que se hubiesen adquirido aquéllos ni que se hubiesen procreado éstos, y fijando en forma definitiva la suma de veinte quetzales en concepto de pensión a favor de la señora Cáceres Hernández por parte del demandado. Interpuesta apelación de esta sentencia por la parte demandante, por no estar conforme con la pensión fijada, se dictó la que se examina. La Sala confirmó la sentencia de primer grado en cuanto declara el divorcio y la revocó en cuanto a la pensión fijada, señalando la suma de cincuenta quetzales como pensión que mensual y anticipadamente debería pagar a la actora el señor Monzón Juárez, quien, además deberá prestar hipoteca o fianza a satisfacción del Tribunal para el cumplimiento de esta obligación. La Sala estimó: que el Juez no tuvo razón al rebajar en la sentencia en veinte quetzales, la pensión que provisionalmente había fijado en favor de la esposa en cincuenta quetzales, pues, aunque ésta no acreditó la necesidad de la pensión que pedía, no tuvo oportunidad de hacerlo porque la demanda fué contestada afirmativamente por el demandado, quien por su parte no acreditó estar incapacitado económicamente para pagar siquiera la que se había fijado provisionalmente; que por esas razones, el Tribunal debe fijar la pensión, tomando en cuenta las vitales necesidades de la demandante; que, además, el Juez omitió resolver en cuanto al inciso 4o. del artículo 1103 del Decreto Legislativo 2009, lo cual debe hacerse por mandarlo la ley.

RESULTA:

Contra este último fallo interpuso el demandado el presente recurso de casación por violación y aplicación indebida de la ley, fundándolo en los artículos 505, 511, 512, 513, 514, 518

del Decreto Legislativo 2009, y 2o. incisos 1o. y 5o. del Decreto 388 del Congreso. Estimó como leyes violadas, los artículos 259, 269 del Decreto Leg. 2009; 134, 207, 208, 209 del Decreto Leg. 1932. Señalado día para la vista, es el caso de resolver.

CONSIDERANDO:

Que, como frecuentemente lo ha declarado este Tribunal, para que pueda prósperar el recurso de casación es indispensable, entre otros requisitos, además de la cita correcta de las leyes que se estimen violadas en el fallo contra el cual se recurre, la de aquéllas que contienen el caso o los casos de procedencia, a fin de que el Tribunal pueda efectuar el análisis comparativo de rigor, por estar limitado el recurso a los casos de procedencia que se citen; que en el presente asunto el recurrente no citó con la debida exactitud la ley respectiva en cuanto a los casos de procedencia, pues ninguno de los artículos del Decreto Legislativo 2009 en que fundamenta su recurso se refieren concretamente a este aspecto, y aunque cita los incisos 1o. y 5o. del artículo 2o. del Decreto 388 del Congreso, es de advertir que dicho artículo únicamente modifica el párrafo primero del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, sin substituirlo, y que por lo tanto no tiene incisos. En virtud de lo expuesto, y no pudiendo este Tribunal subsanar los defectos u omisiones en que incurran los interesados, no cabe estimar si en la sentencia recurrida fueron violadas las leyes que se citan como tales, por no existir caso de procedencia con el cual puedan relacionarse.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo considerado y en lo que disponen los artículos 222, 224, 232, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 506, 512, 521, 524 del Decreto Legislativo 2009, DESESTIMA el presente recurso de casación y condena al interponente a las costas del mismo y a una multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia podrá compensar con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel empleado al del sello de ley, y, como corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Herrarte González).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía — Ante mí, Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Ministro de Hacienda y Crédito Público contra una resolución de ese Tribunal en juicio de "Castillo Hermanos".

DOCTRINA: *Instituyendo la Ley el recurso de casación para dos situaciones médularmente distintas e inconfundibles, traducidas en error de juicio en la resolución de los aspectos controvertidos, o sea de fondo, y error en las reglas del procedimiento o sea por quebrantamiento de forma, al hacerse el planteamiento respectivo es imprescindible, en cualquiera de las dos situaciones, colocarse dentro de los casos de procedencia específicamente determinados por la ley, pues de lo contrario no es posible efectuar el examen comparativo que el recurso implica.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, diez y siete de Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veintisiete de Enero del presente año, en el recurso de tal naturaleza interpuesto por el señor Albino Gracias Paniagua, en concepto de apoderado de la Empresa "Castillo Hermanos", contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número dos mil quinientos noventa y dos (2.592), proferida el nueve de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres. De los antecedentes,

RESULTA:

El veintiocho de Marzo de mil novecientos cuarenta y siete, "Castillo Hermanos" compareció ante el Jefe de la Contraloría de Empresas Lucrativas, presentando la declaración de utilidades correspondiente al año de mil novecientos cuarenta y seis y pidiendo a la vez el retiro de la Empresa del Registro de Empresas Lucrativas, por haber liquidado sus actividades industriales que, según la escritura pública autorizada por el Notario Luis Beltrane Sinibaldi el diez y nueve de Diciembre del propio año, continuarían por cuenta y riesgo de las nuevas compañías constituidas de conformidad con tal instrumento: Cervecería Centroamericana, S. A., Fábrica de Bebidas Gaseosas, S. A. y Cervecería Nacional, S. A.

Previo informe de la propia oficina respecto a que las sociedades anónimas mencionadas no habían sido aún inscritas en los Registros correspondientes y que los interesados tampoco habían presentado el Acuerdo Gubernativo de aprobación de los estatutos y escritura de constitución, la Contraloría resolvió nombrar al Auditor Sexto José María López A., para verificar el capital y requerir el Acuerdo respectivo. Rendido el informe del Auditor, la Contraloría dispuso se pidiera a "Castillo Hermanos", previamente a inscribir las nuevas empresas, un detalle de las sobre-estimaciones a que sujetaron las diferentes cuentas de activo de cada una de las empresas y que acompañara copia del Diario Oficial conteniendo los Acuerdos en que fueron aprobados los estatutos. Con fecha siete de Abril de mil novecientos cuarenta y siete, aparece librada la orden de pago contra "Castillo Hermanos", por la suma de trescientos once mil ciento sesenta y nueve quetzales cuarenta y nueve centavos, correspondientes al impuesto sobre utilidades del periodo comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año anterior mil novecientos cuarenta y seis.

RESULTA:

Con fecha veinticinco de Febrero de mil novecientos cincuenta, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades nombró a los Auditores Jorge A. García Aguilar y Alirio Arnoldo Camargo, para verificar el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, de la Empresa "Cervecería Centroamericana" de "Castillo Hermanos", así como para revisar la liquidación total de las operaciones y su conversión en sociedad anónima y que informaran si procedía la cancelación del registro como lo solicitaba la empresa. Por resolución posterior, en lugar de los mencionados Auditores fué nombrado el Auditor Segundo José María López Arriaza. Al rendir su informe, dicho Auditor asienta: "Los socios, propietarios de las tres empresas: Cervecería "El Zapote", Embotelladora "Canada Dry" y Sucursal de Quezaltenango, comprendidas bajo una sola razón social, Castillo Hermanos, se convirtieron en accionistas de las tres anónimas y pagaron sus participaciones o acciones de capital con los derechos preexistentes en aquéllas. Sin embargo, algunos de tales derechos, los activos inmovilizados, estaban técnicamente con el costo original disminuido o completamente rebajado a cero. Las

diferencias de valor, operadas como aumentos en las tres sociedades anónimas que se formaron, se hicieron plusvalías realizadas desde el momento de otorgarse la escritura social, o sea desde el 19 de Diciembre de 1946 (Arto. 5o. del Decreto 2099, Artos. 61 y 62 del Decreto 2191). Por consiguiente, salvo otro criterio mejor, las plusvalías realizadas y enajenadas el 19 de Diciembre de 1946 por la firma Castillo Hermanos, a las sociedades anónimas, Cervecería Centro Americana S. A., Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas y Cervecería Nacional S. A., afectan las utilidades del ejercicio comprendido del 1o. de Enero al treinta y uno de Diciembre de 1946 y deben tributar como tales... En el informe por separado, de esta misma fecha, y en el pliego de Gastos No Reconocidos fechado el 31 del recién pasado Octubre, constan los reparos que se formularon a la empresa Castillo Hermanos en la verificación del ejercicio comprendido de Enero a Diciembre de 1946. Dichos reparos ascienden a Q.95,312.99. La liquidación provisional, por lo tanto, se formula como sigue: Utilidad declarada por la empresa... Q.799,330.20; Ajustes del Auditor... "95,312.99; Plusvalía realizada en la venta de activos... "1,351.632.96; Utilidad sujeta a impuesto... "2.246.276.15; Impuesto: 40.75% sobre... Q.300,000.00... Q.96,457.50; 43.00% sobre "1,946,276.15... "836,898.74; Total..... Q.933,356.24; Menos: Impuesto pagado, conforme talón No. 209922 del 29 de Abril de 1947... "311,169.49; IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO... Q.622,186.75". Con fecha veinte de Marzo de mil novecientos cincuenta y uno, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades aprobó el informe y liquidación anterior y mandó extender la orden de pago por valor de seiscientos veintidós mil ciento ochenta y seis quetzales y setenta y cinco centavos de quetzal, como impuesto correspondiente por los ajustes verificados por la revisión del ejercicio comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, en la empresa "Cervecería Centro-Americana", propiedad de Castillo Hermanos.

RESULTA:

Alegando varias razones y como principales entre ellas: el haber caducado el derecho del Fisco para llevar a cabo la revisión acordada y haberse negado a la empresa la garantía de audiencia en la forma legal, el señor Albino Gracias Paniagua, como apoderado de "Castillo Hermanos" —en liquidación—, com-

pareció a la Contraloría de Impuesto Sobre Utilidades interponiendo recurso de revocatoria contra la providencia mencionada. Elevados con informe los antecedentes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y oídos el Ministerio Público y el Consejo Técnico de Hacienda, que se manifestaron pidiendo la confirmación de la resolución de mérito, aquel Despacho declaró sin lugar el recurso, con fecha veintiséis de Abril de mil novecientos cincuenta y uno. Con base en lo anterior, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades mandó notificar a la empresa, que dentro del término de diez días debería pagar la cantidad de seiscientos veintidós mil ciento ochenta y seis quetzales con setenta y cinco centavos.

Aparece a continuación la transcripción que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de Presidente del Tribunal de Amparo, hace al Ministro de Hacienda y Crédito Público, de lo resuelto en el recurso de amparo interpuesto por Albino Gracias Paniagua, apoderado de la Sociedad "Castillo Hermanos", contra "actos y procedimientos del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Procurador General de la Nación"; por tal recurso se resuelve amparar a la sociedad "Castillo Hermanos" para que se le mantenga y restituya en el goce de las garantías constitucionales que dicho Tribunal estima violadas, disponiendo que las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de la resolución dictada por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, con fecha veinte de Marzo de mil novecientos cincuenta y uno. En vista de lo anterior, el Ministerio de Hacienda mandó pasar las diligencias a la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, para los efectos consiguientes; esta oficina, a su vez, las pasó al Auditor Segundo José María López Arriaza para que ratificara o rectificara su informe anterior, y ratificado que fué se concedió audiencia a la empresa por el término de cuatro días.

El señor Gracias Paniagua evacuó la audiencia contradiciendo con abundantes razones los reparos contenidos en el informe del Auditor López Arriaza; con vista de ello, la Contraloría nombró a los Auditores Carlos R. Lizama, Juan José Prera y Elizardo Dardón R., para efectuar un estudio sobre los reparos impugnados por la Empresa y emitir dictamen, quienes, al rendirlo, manifiestan su total acuerdo con los reparos hechos por López Arriaza y la plusvalía realizada por la Empresa con un valor de un millón trescientos cincuen-

ta y un mil seiscientos treinta y dos quetzales y noventa y seis centavos de quetzal. Con fecha diecisiete de Julio de mil novecientos cincuenta y uno, la Contraloría resolvió aprobando los reparos de referencia con un monto de noventa y cinco mil trescientos doce quetzales y noventa y nueve centavos, así como el informe relativo al estudio y análisis de la revaluación de activos en el cual se consignan plusvalías realizadas por la cantidad que antes se indicó; además, manda extender la orden de pago correspondiente por la cantidad de seiscientos veintidós mil ciento ochenta y seis quetzales con setenta y cinco centavos a que asciende la liquidación practicada.

El apoderado de la Empresa, señor Gracias Paniagua, interpuso contra tal resolución recurso de revocatoria. Elevadas las diligencias con informe de la Contraloría al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se le dió audiencia al Ministerio Público. Al evacuarla por medio de su Sección de Fiscalía, esta institución opinó en el sentido de que era procedente confirmar la resolución recurrida en cuanto a los reparos formulados ya que los mismos se habían hecho de acuerdo con las constancias de los libros de contabilidad de la empresa, debiéndose revocar en relación con la plusvalía resultante de los bienes cedidos por dicha firma a los socios individuales, por ser inimputable e inoponible a la sociedad "Castillo Hermanos". El Ministerio de Hacienda dictó providencia, con fecha catorce de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos mandando devolver las diligencias a la Contraloría para los efectos legales, en vista de haber transcurrido el término señalado por el artículo 80. del Decreto Gubernativo 1881. La Contraloría, a su vez, ordenó notificar la resolución ministerial y que se transcribiera a la Dirección General de Rentas para su conocimiento y efectos legales.

RESULTA:

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su concepto de Presidente del Tribunal de Amparo, transcribió al Ministro de Hacienda y Crédito Público, lo resuelto en el recurso de amparo interpuesto por Albino Gracias Paniagua, en representación de la sociedad "Castillo Hermanos en liquidación", contra actos y procedimientos del Ministro mencionado, concretándolo en que, al dictarse la resolución ministerial que antes se relacionó, mandando pasar las diligencias a la Contraloría para los efectos legales sin antes resolver la revocatoria interpuesta, se violaban ga-

rantías constitucionales. Dicho recurso de amparo, declarado con lugar, ordena que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de dictarse la resolución reclamada.

Tramitado nuevamente el expediente en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Hacienda pidió dictamen al Departamento de Asuntos Tributarios y al Departamento Jurídico del propio Ministerio. El primero, tras un estudio detallado, sostiene el criterio de que la resolución recurrida debe mantenerse, con la modificación de que se desvanezcan los reparos por los intereses pagados a los socios sobre las acreedurías de la empresa a su favor, en la suma de diez y ocho mil ochocientos treinta y tres quetzales diez y siete centavos de quetzal, y el reparo por cinco mil quetzales, relativo a las erogaciones hechas por la empresa para la compra y fabricación de cajillas de madera para el transporte de productos; el segundo, o sea el Departamento Jurídico, opina en igual sentido en cuanto a que se desvanezca el reparo por los intereses, y en la cantidad que se indicó, no así el de cinco mil quetzales referente a las cajillas de madera, en virtud de que la empresa no produjo documentos ni razones suficientes para ello.

Con fecha nueve de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres, por providencia número cero dos mil quinientos noventa y dos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó la resolución dictada por la Contraloría del Impuesto sobre Utilidades motivo del recurso de revocatoria, con la única modificación de que se desvanece el reparo por diez y ocho mil ochocientos treinta y tres quetzales diez y siete centavos, que comprende los intereses calculados sobre las aportaciones de los socios. Recibido el expediente en la Contraloría, esta dependencia mandó pasarlo al Auditor Segundo José María López Arriaza para practicar nueva liquidación. Cumplido lo anterior por el Auditor aludido la Contraloría dió su aprobación a la liquidación practicada, por resolución número cuatro mil ciento ochenta y siete de fecha veintinueve de Abril de mil novecientos cincuenta y tres, quedando en la forma siguiente: "Utilidad declarada por la Empresa... Q.799,330.20; Más: Ajustes formulados por el Auditor 2o... Q.95,312.99; Menos: Ajuste que se desvanece conforme resolución No. 2593, del Ministerio de Hacienda y C. P.... "18,833.17..." 76,479.82; Más: Plusvalía realizada en la enajenación de activos, Artos. 5o. Dto. 2009 y 62 Dto. 2191... .."

"1.351,632.96. Utilidad sujeta a impuesto:... Q.2.227,442.98; Impuesto (Escala del Decreto 204) Sobre Q.2.227,442.98..." 925,257.98; Menos: Impuesto pagado, según comprobante número 209922... "311,169.49; Impuesto pendiente de cobro... Q.614,088.49". En la misma resolución se dispone extender orden de pago por el impuesto pendiente de hacerse efectivo.

RESULTA:

El mismo señor Gracias Paniagua, en su calidad antes indicada, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución número dos mil quinientos noventa y dos, proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con fecha nueve de Marzo (y no nueve de Abril como aparece en la sentencia recurrida), de mil novecientos cincuenta y tres; relacionando los hechos de conformidad con las diligencias y exponiendo sus puntos de vista en cuanto a lo injustificado del pago adicional de impuestos por los reparos aprobados, así como de la plusvalía deducida, alega además la caducidad del derecho del Fisco para la verificación del estado de pérdidas y ganancias de la sociedad recurrente, la falta de personalidad de la sociedad "Industrial, Agrícola y Particular Castillo Hermanos", en lo relativo al aumento de valores en bienes que no eran de su pertenencia, y gozar de inoponibilidad en cuanto se refiere a plusvalías; pide que, con base en las razones que aduce, se revoque la resolución ministerial motivo del recurso. Acompañó juntamente con él mismo varios documentos tendientes a probar el fundamento de sus argumentaciones.

Abierto a prueba el recurso, el Ministro de Hacienda y Crédito Público pidió que se tuvieran como rendidas por su parte: a) todo el expediente administrativo antecedente al recurso; b) actas notariales levantadas por los Notarios Héctor Horacio Zachrisson Descamps y Jorge Luis Zelaya Coronado, de las cuales aparece acreditado el pago de trescientos once mil ciento sesenta y nueve quetzales cuarenta y nueve centavos, por cuenta de "Castillo Hermanos", en concepto de impuesto sobre utilidades por el período antes mencionado, y el depósito en la Tesorería de Fondos Judiciales por treinta y dos mil ochocientos ochenta y seis quetzales treinta y dos centavos, que la misma empresa consignó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de este departamento; c) testimonio de la escritura de protocolización autorizada por el

mismo Notario Zachrisson Descamps, que contiene el acta levantada por dicho profesional, sobre rechazo de pago parcial que "Castillo Hermanos", pretendía hacer ante las receptorías fiscales; d) resolución de la Contraloría del Impuesto sobre Utilidades de fecha veintinueve de Abril de mil novecientos cincuenta y tres, que obra en el expediente; e) comprobantes que aparecen en el expediente y que demuestran que mediante procedimiento económico coactivo que se sigue a la empresa, se ha decretado embargo e intervención, en su contra. Por parte de la empresa se presentaron las siguientes: a) cuadro demostrativo de la liquidación de "Castillo Hermanos"; b) certificación extendida por la Contraloría del Impuesto sobre Utilidades que acredita la verificación del capital social de "Cervecería Centro Americana S. A.", "Cervecería Nacional S. A.", y "Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas S. A.", y fechas en que fueron inscritas; c) actas notariales levantadas por los Notarios Jorge José Salazar y Jorge Luis Zelaya Coronado, respecto a la negativa del Ministro Ejecutor del Juzgado Económico Coactivo, de asentar en el acta de embargo que los bienes que se pretende embargar no pertenecen a "Castillo Hermanos", sino a persona distinta; d) certificación extendida por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades conteniendo varias resoluciones y dictámenes; e) testimonios de varias escrituras públicas que se refieren a la constitución de las nuevas empresas a que se ha aludido; f) informe rendido por los Doctores en Economía Héctor Goicolea Villacorta y Rafael Ramos Bosh; g) la resolución impugnada, del Ministerio de Hacienda; h) todos los documentos públicos, auténticos y privados que obran en el expediente formado con motivo de la revisión de la contabilidad de la empresa, y todas las actuaciones administrativas que aparecen en los antecedentes; i) certificaciones extendidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia; j) certificaciones del Registro de la Propiedad Inmueble; k) sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en los recursos de amparo interpuestos por la empresa.

RESULTA:

Habiéndose señalado día para la vista con ocasión de la cual las partes alegaron lo que creyeron del caso, el Tribunal dictó el fallo que motiva el presente recurso, declarando: "1o.) Sin lugar las excepciones de falta de acción de la empresa recurrente, interpuesta por

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. y la de caducidad promovida por la misma empresa; 2o.) Con lugar la excepción de falta de personalidad pasiva promovida por la parte actora en este recurso, y, en consecuencia, absuelta la misma empresa en cuanto al cobro de impuesto sobre una plusvalía que, caso de existir y de haber sido determinada y no simplemente calculada "en exceso" no le sería imputable por no haberle sido beneficiosa, ya que se pretende sobrevino sobre bienes expresamente excluidos de su pertenencia, al prorrogar por un año más el término de su duración, como empresa exclusivamente agrícola; 3o.) Se revoca la resolución recurrida por lo que hace al extremo indicado en el punto anterior (2o.) y 4o.). Confirma por lo demás la resolución indicada, debiéndose practicar nueva liquidación del impuesto correspondiente a los reparos confirmados, con presencia de los documentos que no se tuvieron a la vista por los motivos que indica el Auditor revisor". En apoyo de la sentencia, el Tribunal considera: que la falta de acción interpuesta por el Ministerio de Hacienda no es procedente, pues la ley de Enjuiciamiento Civil y Mercantil establece que la persona que pretenda hacer efectivo un derecho, puede pedirlo ante los jueces y tribunales de la República, sin otro requisito que el de llenar las formalidades de ley, y la Constitución de mil novecientos cuarenta y cinco, vigente cuando la contienda surgió, consideraba la acción judicial como uno de los derechos individuales de los habitantes del país; que tampoco procede la excepción de caducidad alegada por la parte recurrente, pues si el término para el Fisco pueda verificar la exactitud de las declaraciones y anexos de las empresas lucrativas ha sido motivo de constante discusión y de fallos contradictorios, mediante el Decreto número 174 emitido por el Presidente de la República, se ha aclarado cualquier duda que pudiera existir al establecer que el indicado derecho prescribe a los seis años, tiempo que no ha transcurrido en el caso examinado; que según la escritura pública de diecinueve de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, autorizada por el Notario Luis Beltranena Sinibaldi, la sociedad industrial, agrícola y particular "Castillo Hermanos", se constituyó exclusivamente como empresa agrícola, quedando su patrimonio formado por las fincas que se expresan en tal instrumento, a excepción de la porción de la finca "El Zapote" donde se encuentra la "Cervecería Centro Americana", del predio en que se encuentra la "Cervecería Nacional" en Quezaltenango, incluyen-

do edificios, maquinarias, vehículos, semovientes, útiles y enseres pertenecientes a dichas cervecerías, y de todo lo que correspondía a la empresa embotelladora "Canada Dry", bienes estos que fueron excluidos expresamente al enjuiciarse proindivisamente a los socios en lo particular y en la proporción que les correspondía según sus respectivos derechos, en la sociedad que dejó de ser industrial y particular para constituirse solamente en sociedad agrícola; que la escritura antes indicada fué debidamente inscrita en el Registro Civil y en el de la Propiedad Inmueble; que también se había establecido que los socios de "Castillo Hermanos", parcialmente liquidada, habían constituido las nuevas sociedades anónimas "Cervecería Centro Americana" y "Cervecería Nacional", habiendo quedado suscrito y pagado el capital de las nuevas empresas con los derechos que les correspondían a los socios en la empresa liquidada; que con tales hechos, quedaba demostrado que los bienes con los cuales fueron constituidas las nuevas sociedades anónimas, habían dejado de pertenecer a la empresa "Castillo Hermanos" desde el diecinueve de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, y, por consiguiente, su destrucción total o parcial, o su aumento de valor por cualquier motivo, no era cosa que afectara a "Castillo Hermanos", razón que impide que a esta empresa pudiera imponérsele tributo alguno por plusvalía real o ficticia; y que, por otra parte, la plusvalía considerada por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades en este caso concreto, no ha podido existir por el solo hecho de que los socios fundadores de las empresas "Cervecería Centro Americana" y "Cervecería Nacional" hubiesen dado mayor valor a las nuevas sociedades indicadas; por lo que es el caso de declarar con lugar la excepción promovida por "Castillo Hermanos" acerca de que no le es atribuible el pretendido impuesto sobre plusvalía tratándose de bienes de ajena pertenencia, en cuyo cobro carece de personalidad; que en cuanto a los reparos hechos con motivo de la revisión de cuentas de la empresa, analizados en la resolución del Ministerio de Hacienda objeto del recurso, deben confirmarse, pero quedando sujetos a nueva liquidación a fin de establecer en determinados aspectos (que se detallan en la consideración) los que son o no gastos deducibles.

Contra dicho pronunciamiento y auxiliado por el Abogado Arturo Aroch, el Ministro de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de casación por violación, aplicación indebida

e interpretación errónea de la ley; dice fundarse en los incisos 1o. y 6o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009 y 1o. y 2o. del Decreto número 60 de la Junta de Gobierno; y cita como violados los artículos 16, 28 y 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Gubernativo 1881, como aplicados indebidamente los artículos 238 del Decreto Legislativo 2009 y 50 del Decreto Gubernativo 1881, y erróneamente interpretados los artículos 248 del Decreto Legislativo 2009 y 29 y 50 del Decreto Gubernativo 1881; al final de su escrito agrega también como fundamento del recurso los artículos 511, 512, 513 y 518 del Decreto Legislativo 2009. Las motivaciones que el recurrente aduce pueden resumirse en lo siguiente: que el artículo 16 del Decreto Gubernativo 1881, en su forma vigente al interponerse el recurso, exigía que para intentar la vía contenciosa administrativa en casos como el presente, era preciso que el interesado verificara antes el pago de lo adeudado al Fisco, y que al no hacerlo así el señor Gracias Paniagua en representación de la empresa "Castillo Hermanos", pagando previamente el impuesto que se le cobraba, se violó aquel precepto por el Tribunal a quo al dar trámite al recurso interpuesto, así como el 28 del mismo cuerpo de leyes que indica que se dará trámite al recurso si el Tribunal lo encontrare arreglado a derecho; que también fué violado el artículo 41 del Decreto aludido, el cual determina que la sentencia se contrae a revocar, confirmar o modificar la resolución administrativa que motivó el recurso, pues el punto cuarto del fallo dice que se confirman los reparos hechos a la contabilidad de la empresa por el período en discusión, pero además manda practicar nueva liquidación, con lo que la confirmación decretada cae totalmente por su base ya que un reparo confirmado no puede ser objeto de nueva comprobación porque entonces no estaría firme. Que el Tribunal sentenciador aplicó indebidamente el artículo 238 del Decreto Legislativo 2009, porque tal disposición se refiere a las excepciones dilatorias que pueda interponer la parte demandada, pero en este caso no ha sido propuesta por la parte demandada (Ministerio) y sin embargo el Tribunal resuelve la excepción que dice haberla interpuesto la parte demandante, denominándola de "inimponibilidad" o "inimputabilidad"; y que así, el Tribunal, contra el tenor expreso del artículo citado, resuelve tal excepción dilatoria como perentoria llamándola "falta de personalidad pasiva", con lo que concedió más de lo pedido, aplicando indebidamente dicho precepto e

igualmente el artículo 50 del Decreto Gubernativo 1881, que remite al Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil como ley supletoria. Que por otra parte, el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 248 del Decreto Legislativo 2009, porque el Ministerio, al contestar la demanda, interpuso la excepción perentoria de demanda defectuosa y el Tribunal la desestimó sin entrar a considerar sus razones y fundamentos legales, examinando únicamente el derecho de acción como derecho político del ciudadano para demandar la intervención de los órganos componentes del Estado a fin de resolver una contienda o preestablecer un derecho, pero no la falta de acción dentro del orden civil y administrativo, esto es la carencia de facultad para acudir en demanda de un derecho cuando no se han cumplido los requisitos específicos que la ley señala; que la excepción de falta de acción está reconocida por nuestra legislación como se ve de algunos principios expresos; que en el presente caso no se niega a la parte actora su derecho de pedir la intervención del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero sí se le pide que su acción la ajuste a los postulados de la ley para que pueda ser legítimamente discutida en juicio, esto, que cumpla con las prescripciones del artículo 16 del Decreto Gubernativo 1881 pagando antes de intervenir la vía contenciosa administrativa lo que al Fisco legalmente le corresponde; y que como el Tribunal, desoyendo el mandato de tal precepto, dió curso a la demanda del señor Gracias Paniagua, la única defensa del Ministerio será excepcionar la acción del actor por no haber hecho el pago previo; que es en ello en lo que el Ministerio ha hecho consistir la falta de acción en el demandante; y que al interpretarse erróneamente el artículo citado, también lo fueron los artículos 29 y 50 del Decreto Gubernativo 1881. Que por último interponía el presente recurso también con apoyo en el inciso 6o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, o sea por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del juicio, porque el demandante nunca ha invocado ni ha hecho valer la excepción de "falta de personalidad pasiva" que el Tribunal sentenciador le concede; y asimismo la incongruencia de la declaración contenida en el punto cuarto del fallo a que se refiera en párrafos anteriores.

CONSIDERANDO:

—I—

En relación con las leyes que denuncia como infringidas y los argumentos que esgrime en respaldo de sus puntos de vista, el recurrente invoca como fundamentación del recurso los casos de procedencia comprendidos en los incisos 1o. y 6o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que se refieren, respectivamente, a "cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley" y cuando aparezca "incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del juicio". Siendo que por la naturaleza particular del recurso de casación el Tribunal debe encuadrar su estudio dentro de los casos de procedencia expresamente señalados por el interponente, en el sub-júdice corresponde analizar las diferentes situaciones que comprende, teniendo como base la extensión de los mencionados casos como fundamentación del mismo.

Como primer aspecto de su impugnación, el recurrente dice que el fallo incurre en violación de los artículos 16 y 28 del Decreto Gubernativo 1881, Ley de lo Contencioso Administrativo, porque siendo requisito indispensable para admitir el recurso contencioso administrativo el previo pago de lo adeudado al Fisco, el Tribunal a-quo, sin estar cumplida tal exigencia legal, dió trámite el recurso que concluyó con la sentencia que se examina; y que por idéntica razón, se interpretaron erróneamente los artículos 248 del Decreto Legislativo 2009 y 29 y 50 del ya aludido Decreto Gubernativo 1881, pues fué desestimada por aquel Tribunal la excepción perentoria de demanda defectuosa que el Ministerio interpuso al contestar la demanda, estimando que ello originaba falta de acción en la Empresa demandante para acudir ante el Tribunal como lo hizo.

El primero de los artículos enumerados establece, en realidad, que para intentar la vía contencioso-administrativa en los asuntos sobre cobranza de contribuciones y demás rentas públicas o créditos definitivamente liquidados en favor del Fisco, es preciso que el recurrente verifique antes el pago de lo adeudado, salvo que haya obtenido declaración de pobreza; y el segundo, que el Tribunal dará trámite al recurso siempre que estén cumplidas las prescripciones legales para su proposición y lo encuentre arreglado a derecho. Ahora bien, instituyendo la ley el recurso de

casación para dos situaciones medularmente distintas e inconfundibles, traducidas en error de juicio en la resolución de los aspectos controvertidos, o sea de fondo, y error en las reglas del procedimiento, o sea por quebrantamiento de forma, al efectuar el planteamiento respectivo es imprescindible, en cualquiera de las dos situaciones, colocarse dentro de los casos de procedencia específicamente determinados por la ley y que para el asunto sub-litis serían los fijados en el artículo 506 del Decreto Legislativo 2009. Como se ve de la propia exposición del recurrente y del sentido taxativo de los mencionados artículos, el defecto que se da como motivo, a la vez que se contrae a un requisito para que el Tribunal conceda el trámite al asunto que se le plantea, es decir, formal, quebrantaría únicamente una norma procesiva que no atañe al fondo del asunto, de donde se infiere que el caso de procedencia con el que se pretende relacionar tal vicio es inapropiado, lo cual hace imposible el examen de aspecto en cuestión.

Por las mismas razones anteriores, este Tribunal está vedado para determinar si hubo o no interpretación errónea de los artículos 248 del Decreto Legislativo 2009 y 29 y 50 del Decreto Gubernativo 1881, cuyo defecto también se atribuye al fallo recurrido, pues refiriéndose los dos primeros al medio de defensa de que dispone la parte demandada para interponer excepciones perentorias en los respectivos procedimientos a que tales preceptos pertenecen, claramente perfilados como regulaciones de orden procesivo, su vulneración sólo podría producir vicios formales y no de fondo; y en cuanto al tercero de los mencionados artículos, que indica que todas las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y las de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, regirán como leyes supletorias en lo contencioso administrativo, en lo que fueren aplicables, con mayor razón resulta ajeno al aspecto del sometimiento que se ha examinado.

—II—

Relacionado con el caso de procedencia que contempla el inciso 6o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, cuyo contenido se transcribió al principio, se acusa la violación del artículo 41 del Decreto Gubernativo 1881, el cual determina que la sentencia debe revocar, confirmar o modificar la resolución administrativa que originó el recurso, violación motivada, según el recurrente, porque el punto cuarto del fallo dice que se confirman los

reparos hechos a la contabilidad de la Empresa y sin embargo, manda allí mismo practicar nueva liquidación, lo cual revela un contradictorio. Enunciada así la tesis del recurrente, que manifiestamente acusa como motivación de este aspecto, que el fallo es contradictorio en uno de sus puntos resolutive, se concluye que el defecto de mérito no podría examinarse de conformidad con el caso de procedencia invocado, ya que, aparte de ser cosa distinta de lo anterior la "incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del juicio", como lo indica el inciso citado, existe caso de procedencia específico para el conocimiento de este aspecto de impugnación, tal es el contenido en el inciso 4o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que no fué citado. Si a esto se agrega que al tratarse de un error de fondo, falta asimismo la cita de las leyes violadas con ese motivo para efectuar el estudio de rigor, puesto que la sola mención del artículo relacionado al principio —de condición procesiva— no llenaría aquella finalidad, es evidente la ineficacia del planteamiento en este respecto.

—III—

También en concordancia con el mismo caso de procedencia, es decir, el que se refiere a la incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del juicio, se atribuye a la sentencia aplicación indebida del artículo 238 del Decreto Legislativo 2009, que contiene la facultad reconocida a la parte demandada para interponer excepciones dilatorias y los requisitos para su interposición; y se hace consistir el error en que, no obstante corresponder dicha facultad a la parte demandada, exclusivamente, y no haber propuesto el recurrente ninguna excepción de esta clase en su carácter de tal, el Tribunal resuelve en beneficio de la Empresa actora y en calidad de excepción perentoria, la que llama "falta de personalidad pasiva", concediendo así más de lo pedido.

Atendiendo la objeción concreta del recurrente, cabe advertir a semejanza de lo que se dijo con respecto a la impugnación tratada en el punto anterior, que para cuando se estima que un fallo otorgue más de lo pedido, la ley exige que se sitúe la denuncia del error dentro del respectivo caso de procedencia que también, en forma especial e individualizada, señala el inciso 5o. del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, el cual es imposible confundir con los otros casos comprendidos en el

artículo citado, uno de los cuales es el invocado por el interesado, ya que precisamente por la naturaleza esencialmente técnica de este recurso, dichos casos proporcionan los presupuestos necesarios para efectuar el análisis comparativo que es característica del mismo. En consecuencia, habiéndose citado un caso de procedencia que no se relaciona con el vicio mencionado, repitiéndose así el defecto que ya se hizo notar en cuanto al planteamiento del aspecto antes referido, tanto en la equivocación expresada como en la omisión de las leyes sustantivas que por tal causa se consideran infringidas, tampoco aquí es procedente el estudio de fondo de la cuestión de que se trata.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que prescriben los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, DESESTIMA el presente recurso. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CIVIL

Alejandro Popol Méndez como apoderado de Berta Asención Milián Salvatierra de Popol contra Matilde Escobar Lemus de Iriarte.

DOCTRINA: *Cuando en una sentencia congruente con la demanda, se declara que el hecho motivo de la litis no está dentro del estado que el actor invoca y por eso se absuelve al demandado, no se violan los preceptos de dicho estatuto si efectivamente el caso en cuestión es diferente del que se sometió a juicio.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, treinta y uno de Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones el veintidós de Marzo del año

próximo pasado en el juicio ordinario que Alejandro Popol Méndez, como apoderado de Berta Asención Milián Salvatierra, siguió contra Matilde Escobar Lemus de Iriarte, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de este departamento, Del estudio de los antecedentes,

RESULTA:

Que Alejandro Popol Méndez se presentó, el diecinueve de Agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia departamental, manifestando que, como apoderado de su esposa, Berta Asención Milián Salvatierra, según el testimonio de poder que acompañaba, exponía: que la madre de su mandante había constituido gravámenes hipotecarios sobre la finca urbana número doscientos nueve (209), inscrita en el folio doscientos cincuenta, (250), del Libro treinta y dos, (32) de Guatemala —consistente en la casa y sitio número uno de la Cuarta Calle Poniente de Jocotenango—, a favor de la Sociedad “Valdez R. Hermanos” y Natividad González, por las sumas de treinta y cinco mil pesos de los antiguos bancos y un mil quetzales, respectivamente, los cuales se inscribieron en el Registro, en primer lugar el de un mil quetzales y en segundo el de “Valdez R. Hermanos”, no obstante que éste era anterior a aquél; que el crédito originariamente propiedad de Natividad González fué cedido a varias personas hasta llegar a doña Matilde Escobar Lemus de Iriarte, quien demandó ejecutivamente el pago de lo debido ante el Tribunal mencionado, (Tercero de Primera Instancia); procedimiento que dió por resultado el remate del bien hipotecado en la suma de dos mil quetzales, a favor de “Valdez R. Hermanos”, quien concurrió a la subasta únicamente como comprador y no como acreedor; que el crédito constituido a favor de “Valdez R. Hermanos” había prescrito desde mil novecientos treinta y cuatro, cuando menos, y no obstante eso fué cedido a Matilde Escobar (Lemus) de Iriarte juntamente con el remate obtenido en el ejecutivo antes mencionado, por la suma de seiscientos quetzales, según consta en la escritura autorizada en esta ciudad por el Notario Rafael Antonio Cuestas.

Que, como Matilde Escobar (Lemus) de Iriarte es hermana de María Cristina Vielman Escobar y ésta es esposa del ex-general Rodérico Anzueto, según lo prueban las certificaciones de nacimiento y matrimonio que a-

compañó, aquélla es pariente de éste, quien fué Director General de la Policía Nacional y Ministro de Agricultura en el gobierno presidido por el ex-general Jorge Ubico; "...que esa cesión de derechos con todos los derivados que se detallaron en el instrumento de venta referido, la reputa la ley fraudulenta y en consecuencia nula, por haberse verificado a favor de una persona pariente en segundo grado de afinidad..." con el funcionario de aquel entonces y haberse efectuado "... por un precio inferior al que le correspondía al inmueble objeto de la subasta..." no obstante para ello el crédito hipotecario por un mil quetzales que aparecía en el Registro de Inmuebles y los ochenta quetzales de intereses debidos, según decía la ejecutante. Continúa diciendo: "Por lo expuesto vengo de demandar de doña Matilde Escobar (Lemus) de Iriarte la **fraudulencia y nulidad de la cesión o venta de derechos y de remate verificado por Valdez R. Hermanos a favor de aquella señora, en escritura número ciento sesenta y dos, de fecha siete de Octubre de mil novecientos cuarenta y dos, ante el Notario Lic. Rafael Antonio Cuestas...**"; demanda que funda en los artículos primero y cuarto del Decreto 270 del Congreso, que a continuación relata.

Bajo el encabezamiento de probanza dice en qué consisten sus pruebas, las cuales únicamente enumera.

Al hablar de la sentencia, escribe: "El fallo hará las siguientes declaraciones: a) Que la cesión o venta de derechos y de remate contenida en la escritura número ciento sesenta y dos, de fecha siete de Octubre de mil novecientos cuarenta y dos, ante el Notario Lic. don Rafael Antonio Cuestas, que aparece en la inscripción hipotecaria número doce del Registro General de la Propiedad Inmueble, hecha por Valdez R. Hermanos a favor de doña Matilde Escobar (Lemus) de Iriarte, es fraudulenta y nula; b) Que la demandante debe pagar o devolver a la demandada, en el término de ley, el precio de seiscientos quetzales en que compró al rematario Valdez R. Hermanos, el crédito y el remate anteriores; c) Que este fallo no prejuzga sobre los otros derechos que le asistan a la demandada sobre la finca urbana No. 209, folio 250 del libro 32 de Guatemala, en su carácter de acreedora hipotecaria, especialmente en el crédito número once proveniente de la acreedora Natividad González; d) Que no se hacen declaraciones sobre mejoras ni daños y perjuicio, por no existir las primeras y no reclamarse por ahora los últimos; e) Que las costas de este

juicio son a cargo de la demandada, en el caso de no contestar afirmativamente esta demanda".

Finalmente concluyó pidiendo el arraigo de su demandada, la anotación de la demanda sobre el bien objeto de la misma y los demás trámites que el caso requería.

Aparecen agregadas cuatro certificaciones que contienen el auto por el que se declaró que Berta Asención Milián Salvatierra es heredera de Paula Salvatierra, partidas de nacimiento de Matilde Escobar y María Cristina Vielman Escobar y el poder con que actúa Alejandro Popol Méndez.

RESULTA:

Tramitada la demanda se presentó doña Matilde Escobar Lemus de Iriarte interponiendo la excepción de falta de personalidad de la demandante, pero fué declarada sin lugar y su resolución confirmada por la Sala respectiva.

A folios doce, trece y catorce aparece el testimonio de la escritura de cesión de crédito y remate, otorgado por "VALDEZ R. HERMANOS" a favor de la señora Escobar Lemus de Iriarte, autorizada por el Notario, Licenciado Rafael Antonio Cuestas.

RESULTA:

Con fecha dieciséis de Diciembre de mil novecientos cincuenta y dos se amplió la demanda pidiendo que al dictar sentencia el Tribunal remitiera despacho al Registro para que cancelara "las inscripciones hipotecarias que dieron origen al remate, venta o cesión de crédito o derechos que se declara nula y fraudulenta".

La señora Escobar Lemus de Iriarte, no hizo uso de las audiencias concedidas para contestar la demanda y su ampliación por lo que, a solicitud de parte, se tuvieron por contestadas negativamente y se abrió a prueba el juicio, durante cuya lapso se rindieron las siguientes: dictamen de expertos sobre el valor real y verdadero de la casa y sitio motivo del juicio, en los meses de Junio de mil novecientos cuarenta y dos y Enero de mil novecientos cuarenta y tres, valor comercial de los mismos en aquella fecha y si las construcciones son más recientes que las existentes en el tiempo referido; certificación de la partida de matrimonio del General Roderico Anzueto con María Cristina Vielman Escobar; certificación del acta por la cual se hizo constar que

dicho General recibió el Ministerio de Agricultura el dieciséis de Febrero de mil novecientos treinta y siete; certificación del Acuerdo Gubernativo por el que, con fecha primero de Julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, fué substituído por don Mariano Pacheco Herrarte; certificación del Registro de la Propiedad Inmueble conteniendo la primera inscripción de dominio de la finca motivo del juicio, sus gravámenes y anotación, y certificación de la partida de matrimonio de Matilde Escobar Lemus con Pedro Iriarte. Los expertos dijeron que la causa y sitio en mención tenían un valor real, verdadero y comercial de diez mil seiscientos quetzales en total y que las construcciones son antiguas.

Señalado el día de la vista concurrieron ambas partes alegando los extremos que creyeran convenientes a sus intereses y con fecha veintisiete de Agosto de mil novecientos cincuenta y tres, el juzgador de primer grado dictó sentencia absolviendo a Matilde Escobar Lemus de Iriarte de la demanda entablada en su contra, por Berta Asunción Milán Salvatierra.

RESULTA:

Apelada la sentencia referida se elevó el juicio a la Sala jurisdiccional, en donde Alejandro Popol Méndez pidió que se ratificara el alegato presentado por la demandada en primera instancia y seguidos los trámites correspondientes se le tuvo por ratificado en auto de fecha seis de Noviembre de aquel mismo año, señalándose día para la vista de la segunda instancia a solicitud de la demandante. Presentados cinco alegatos por el señor Popol Méndez se dictó la sentencia que se examina, el veintidós de Marzo del año próximo pasado, por la que el Tribunal de segundo grado confirma la emitida en primera instancia, fundándose para ello en que el contrato cuya fraudulencia y nulidad se demandan no es de los que menciona el artículo primero del Decreto 270 del Congreso, "pues ese contrato es de bienes incorporales y en cambio el artículo aludido, se refiere únicamente a muebles e inmuebles". Que tampoco la actora aparece con derecho a deducir la acción entablada, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo cuarto del Decreto 270 mencionado, pues debiendo devolver el precio los interesados que hagan uso de esta acción y no habiendo sido parte en el contrato la actora, no podrá cumplirse con este mandato, agregándose a esto que aún previniéndolo la ley no intervino el Ministerio Público como parte.

RESULTA:

El dos de Abril del año próximo pasado, Alejandro Popol Méndez se presentó a esta Corte, auxiliado por el Abogado Carlos Rivera Barillas, diciendo: "Contra el referido fallo de Segunda Instancia, interpongo este recurso extraordinario de casación en el fondo, por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, así como por error de hecho en la apreciación de las pruebas, resultante de documentos y actos auténticos que demuestran de modo evidente la equivocación del Tribunal juzgador. Al respecto me fundo en los casos de procedencia que determinan los incisos 1o. y 3o. del artículo 506 del Decreto Legislativo No. 2009, reformado por el Decreto No. 388 del Congreso de la República".

"Cito como infringidos en la sentencia de Segunda Instancia, las siguientes leyes constitucionales y legislativas: artículos: 4, 170 primera parte, 52 primera parte, y 49 en su última parte, de la Constitución de la República; 1o. y 84 del Dto. Gub. No. 1862; IV, V, VIII, IX, XI, XII, XVIII y XXXIV de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial; 1o., en sus dos párrafos, 2o., 4o. párrafo 2o., y 8o. del Dto. No. 270 del Congreso de la República; 1476, 1632, 1635, 1596 y 1598 del Cod. Civil de 1877; 261, 262, 263 y 264 del Dto. Gub. No. 272; 259, 269, 277, 281, 384 1a. parte, 282, 369 en sus dos partes, y 364 del Dto. Leg. No. 2009; 368 inciso 1o., 369, 371 inciso 1o., 370, 375, 380, 387, 388, 389, 685, 698, 713, 1038, 1100, 1039, 1076 del Código Civil. (Dto. Leg. 1932); 1396, 1397, 1425, 1426, 1427, 1600, 1601, y 1606 del Código Civil de 1877; 12, 14, 15 y 16 del Decreto Legislativo No. 2010; 137, 138, 139, 140 y 143 y 144 del Código Civil (Dto. Leg. No. 1932)".

Al exponer los motivos de su recurso citó también como violados los artículos 1590 inciso 1o., 1084 y 2249 inciso 2o. del Código Civil; 330 párrafos 1o. y 2o. del Decreto Gubernativo 272; 364 del Decreto Legislativo 2009; y XXVIII de los Preceptos Fundamentales, Decreto Gubernativo 1862.

Con fecha siete de Abril del año próximo pasado, nuevamente compareció Popol Méndez pidiendo que se tuviera por suprimido de su recurso original el artículo XVIII de los Preceptos Fundamentales del Decreto Gubernativo 1862, por haberse citado con equivocación, pero de conformidad con el artículo 512 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, ampliaba aquel sometimiento citando como infringidos los artículos 434 del Decreto

Legislativo número 2009; 130 del Decreto Gubernativo 1862; y I de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial.

El diecinueve del mismo mes de Abril ya citado comparece el señor Popol Méndez para hacer una segunda ampliación, citando como violados los artículos 818, 819 en sus dos partes, 820 en su primera y tercera partes o párrafos, 1114 todos del Código Civil, (Decreto Legislativo número 1932); y 2315 del Código Civil de 1877.

Al exponer las razones que a su juicio demuestran la violación de los artículos últimamente citados, también dice haberse violado el 23 de la Constitución de la República, en su último párrafo.

Alega el recurrente que la Sala sentenciadora infringió el artículo 170 de la Constitución y los artículos 1o. 2o., 4o., y 8o., del Decreto 270 del Congreso, al no aplicar éstos, violando también, con esa conducta el artículo 1o. del Decreto Gubernativo 1862, lo mismo que el Precepto Fundamental IV, puesto que el Decreto 270 mencionado es ley especial que debe aplicarse en vez de la general; que la cosa objeto del remate es un inmueble y no un bien incorporal como dice la Sala para violar los artículos 368 inciso 1o., 369, 370 y 371 del Código Civil.

Que "Por otra parte, la acción de la demandante va dirigida CONTRA EL REMATE O VENTA EN SUBASTA PUBLICA DE SU FINCA URBANA, NO CONTRA LA CESION DEL CREDITO..."

Continúa diciendo que lo sostenido por la Sala es un sofismo en cuanto a que debió haber sido demandado el cedente o vendedor de la finca rematada pues él alegó en demasía sobre este particular y demostró la personalidad y personería del demandado a quien le quedaba el derecho de citar a su vendedor para que le eviccionara su venta; que ninguna de las dos partes vieron la necesidad de citar al Ministerio Público para que interviniera en el asunto, no siendo esto un motivo para que absolviera de la demanda y se le negara justicia; que al ignorar las certificaciones y memorial ratificado en segunda instancia, se cometió error de hecho en la apreciación de la prueba, pues con tal documentación se estableció la familiaridad de la demanda con el ex-funcionario Anzueto y que el bien rematado es la finca urbana antes identificada; que también se cometió error al no apre-

ciar la certificación del auto en que se declaró heredera a su poderdante y al expertise rendido, porque con esto se prueba que la demandante es sucesora de Paula Salvatierra y que el bien rematado fué vendido por un precio menor que el verdadero, violándose así los artículos relativos a la prueba, que cita en su sometimiento. Agrega que al absolver a la demandada, con base en los artículos que debían servir para condenar, se incurrió en aplicación indebida de los mismos; que la cesión hecha no es tal cesión, sino una venta y por ello pide que se revoque la sentencia recurrida y se dicte la que corresponde.

Corridos los trámites de rigor es procedente resolver: y,

CONSIDERANDO:

El recurrente alega que el Tribunal sentenciador incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas "...al ignorar y no tomar en cuenta la existencia de las... que justifican y demuestran la acción", consistentes en las certificaciones presentadas para establecer el parentesco de la demandada con el ex-funcionario del gobierno presidido por el General Jorge Ubico y esa calidad de funcionario, del entonces general Roderico Anzueto, en la época a que se refiere el Decreto 270 del Congreso; la certificación del Registro de la Propiedad, dictamen de expertos, confesión de la demandada sobre ser ella la ejecutante del juicio donde se llevó a cabo el rematé, cuya cesión se impugna, y certificación en que consta que la demandante fué declarada heredera de la ejecutada; que por esa razón y con fundamento en el inciso 3o. del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil asegura que se violaron los artículos 259, 269, 277, 281, 232, 364, 369, 384 primera parte y 434 del Decreto Legislativo 2009; 137, 138, 139, 140, 143, 144, 1084, del Código Civil contenido en el Decreto Legislativo 1932; y, 1o. del Decreto 270 del Congreso.

La Sala sentenciadora, después de llegar a la conclusión de que: es improcedente la acción, entablada, porque el contrato, cuya nulidad y fraudulencia se demandan, no es de los que menciona el artículo primero del Decreto 270 del Congreso, asienta: que "Habiéndose expuesto que el punto principal petitorio es improcedente su declaratoria, innecesario es entrar al estudio independiente de los demás puntos accesorios pedidos..." "Que asimismo, es innecesario analizar la restante prueba de la actora relativa al precio menor

recibido, al parentesco de la demandada con el ex-general Roderico Anzueto y la posición de funcionario de éste último”, con lo que se ve claramente que el Tribunal referido estimó inútil el análisis de aquellas pruebas, porque aunque su contenido evidenciara los extremos a que dichos documentos y demás pruebas se refieren, resultarían ineficaces pues lo demandado era asunto diferente de lo que tales pruebas demostraron. De manera que el error denunciado no existe porque no es cierto que se haya ignorado la prueba indicada, ni se dejó de tomar en cuenta, pues se relacionó con el punto objeto de la demanda; además, de los documentos detallados no aparece evidente la equivocación del juzgador, por lo que no se violaron los artículos citados para este efecto.

CONSIDERANDO:

Invocando el inciso primero del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, asegura el recurrente que la Sala sentenciadora violó, aplicó indebidamente e interpretó con error la ley, al no condenar a su demandada de conformidad con los artículos correspondientes al Código Civil y a los Decretos Gubernativos 272 y 1862; Legislativo 2010 y 270 del Congreso, que cita en su sometimiento, así como los de la Constitución que también cita, todos los cuales se refieren al idioma oficial de la República, la retroactividad de la ley, reglas para su aplicación y quiénes deben hacerlo; el parentesco y sus grados; que se entiende por contratos, compra-venta, su evicción y saneamiento, hipoteca, su registro, prescripción, efectos y su fraudulencia o nulidad; derechos y obligaciones de los contratantes.

El Tribunal sentenciador para absolver a la demandada, confirmando el fallo de primer grado, se fundó en que el contrato contenido en la escritura autorizada por el Notario Rafael Antonio Cuestas, el siete de Octubre de mil novecientos cuarenta y dos, —cuya fraudulencia y nulidad se demandan, por estar comprendido en el artículo primero del Decreto 270 del Congreso—, involucra el crédito a favor de “Valdéz R. Hermanos”, y los derechos que como rematario adquirió esta firma en el procedimiento ejecutivo que Matilde Escobar de Iriarte siguió contra lo mortal de Paula Salvatierra, concluyendo de ello que el contrato no es de compra-venta de muebles o inmuebles, sino de bienes incorpóreos; que como el artículo primero del Decreto 270

mencionado sólo se refiere a aquéllos (muebles e inmuebles), el caso planteado no está comprendido en el artículo y Decreto últimamente citados.

Además considera la Sala que debió haberse citado al Ministerio Público para que compareciera al juicio, lo mismo que a la firma “Valdéz R. Hermanos”, pues sin esa citación no podían ser condenados conforme disposiciones de la Constitución entonces en vigor; que no es el caso para citar de evicción como lo pretende la demandante, ni ésta podría cumplir con lo mandado por el Decreto 270 del Congreso, por no ser de las partes contratantes en la escritura redargüida de fraudulencia y nulidad.

Como se ve de lo anterior, para decidir el juicio, con la sentencia respectiva, el Tribunal sentenciador se fundó en el análisis que hizo de la escritura autorizada por el Notario Rafael Antonio Cuestas, el siete de Octubre de mil novecientos cuarenta y dos, teniendo por probado que la cesión contenida en la escritura de mérito no constituía venta de mueble ni de inmueble, por cuya razón no podía aplicársele lo preceptuado en el artículo primero del Decreto 270 del Congreso.

De ser cierto que la Sala sentenciadora se hubiese equivocado al estimar, como lo hizo, el contrato contenido en la escritura mencionada, habría incurrido en error de derecho, pues la equivocación consistiría en haber quebrantado las reglas legales que determinan la naturaleza de los contratos y confundir los caracteres de cada una de las diferentes clases de bienes que la ley reconoce, pero como no fué objeto de este recurso la apreciación, hecha por la Sala sentenciadora, de la escritura autorizada por el Notario Cuestas, la Corte no puede entrar a considerar tal extremo; y, aunque así fuera, no puede en este estado de juicio, tomarse en cuenta peticiones no contenidas en la demanda, como sucede en este caso, en que el actor no demandó la fraudulencia y consiguiente nulidad del remate que se dice abarcado por el Decreto 270 del Congreso, sino la nulidad y fraudulencia del contrato de cesión de ese remate. De suerte que la Sala dictó su sentencia congruente con la demanda y no con lo que posteriormente pretendió la demandante, por cuya razón no violó los artículos 4, 23, 49, 52 y 170 de la Constitución última; I, IV, V, VIII, IX, XI, XII, XXVIII y XXXIV de los Preceptos Fundamentales; 1o., 84 y 130 del Decreto Gubernativo 1862; 1o., 2o., 4o., párrafo 2o., y 8o. del

Decreto 270 del Congreso; 368 inciso 1o., 369, 370, 371 inciso 1o., 375, 380, 387, 388, 389, 685, 698, 713, 818, 819, 820 1a. y 3a. partes, 1038, 1039, 1076, 1100 y 1114 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932; 12, 14, 15 y 16 del Decreto Legislativo 2010; 261, 262, 263, 264 y 330 párrafos 1o. y 2o. del Decreto Gubernativo 272; 1084, 1396, 1397, 1425, 1426, 1427, 1476, 1590 inciso 1o., 1596, 1598, 1600, 1601, 1606, 1632, 1635, 2249 inciso 2o. y 2315 del Código Civil 1877, que el recurrente cita como infringidos.

POR TANTO:

Lo Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 224, 233 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara: SIN LUGAR el recurso interpuesto, condena al recurrente en las costas del mismo y a pagar la multa de veinticinco quetzales, conmutables con diez días de prisión simple en caso de insolvencia. Notifíquese, repóngase el papel español empleado por el sellado de ley y como corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes M. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

—o—

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, treinta de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Vistos para resolver los recursos interpuestos por Alejandro Popol Méndez contra la sentencia dictada por esta Corte el treinta y uno de Octubre próximo pasado, para que ampliando y aclarando se case y revoque dicha sentencia, alegando que: aunque él usó otros términos, —por no haber “palabras ni frases sacramentales en la interposición del recurso...” de casación, ni en otras leyes que al mismo se refieran—, denunció el error de hecho y también el de derecho, fundándose en el caso de procedencia respectivo, al hacer su sometimiento; que citó cuáles fueron los documentos que no se apreciaron como prueba, lo que sí es circunstancia esencial para esta clase de recursos y, agrega: “procede la modificación del fallo, entrando a conocer de la

apreciación de las pruebas citadas y especificadas como lo ordena la ley... con lo que el caso queda aclarado y ampliado, dejando intacto el remate que hizo Valdez como testafede la demandada, pues ESO NO NOS PERJUDICA...”; oída la otra parte es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El recurso de ampliación se da para cuando se omite resolver algún punto sometido en el juicio o prescrito en la ley Constitutiva del Org. Judicial y en el presente caso nada dejó de resolverse al declarar improcedente el recurso, después de analizar todos y cada uno de los motivos del mismo, pues el hecho de que no hayan palabras ni frases sacramentales en la introducción del recurso de casación, no implica el que éste deje de ser esencialmente técnico y restringido o que la Corte deba convertirse en Tribunal de Instancia para estudiar errores no sometidos taxativamente a su conocimiento, de manera que no es motivo de ampliación lo alegado por el recurrente. Artículo 456 del Decreto Legislativo 2009.

CONSIDERANDO:

La aclaración procede cuando los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios, lo que no ocurre en este caso, pues el propio recurrente nada adujo en este sentido cuando interpuso tal aclaración, concretándose a decir que si no se declaran con lugar sus recursos interpuestos se comete una gran injusticia en su contra, por cuya razón debe declararse también sin lugar. Artículo 455 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en lo preceptuado por los artículos 457 del Decreto Legislativo 2009; 222, 223 y 224 del Decreto Gubernativo 1862, declara: SIN LUGAR los recursos interpuestos. Notifíquese.

Carbonell R. — Aguilar Fuentes. — Moscoso E. — Reyes. — Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Recurso interpuesto por José Rodrigo Hernández Guzmán contra resolución proferida por el Ministerio de Gobernación.

DOCTRINA: *Cuando existe incongruencia manifiesta entre el contenido de la sentencia impugnada y las leyes citadas como violadas, no puede prosperar el recurso de casación, fundado en violación e interpretación errónea de la ley.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, cuatro de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación, se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el veinte de junio del año en curso, en el recurso de esa naturaleza, interpuesto por JOSE RODRIGO HERNANDEZ GUZMAN, en concepto de apoderado del Consorcio de Transportes "El Esfuerzo" contra la resolución de fecha veintinueve de julio del año recién pasado, proferida por el Ministerio de Gobernación, en el expediente sobre autorización de una línea de Transportes entre Tiquisate y la aldea Hüizizil del mismo municipio, solicitada por Hermelindo Soto Mérida, y en virtud de la cual se confirma la del ex-Departamento Administrativo de Economía, de fecha veintitrés de marzo del mismo año. De los antecedentes,

RESULTA:

Ante el Jefe del Departamento Administrativo de Economía, compareció Rodolfo Lainez, en representación de Hermelindo Soto Mérida, exponiendo: que no existiendo ningún servicio de transporte extra-urbano de la población de Tiquisate a la aldea Hüizizil, los numerosos habitantes que la componen han solicitado su establecimiento, por lo que suplicaba ordenar a la oficina respectiva que se le concedan las publicaciones que prescribe el Reglamento de Transportes, para insertarlas en el Diario Oficial y otro de mayor circulación en el país; que ese servicio se prestaría con la camioneta "Ford" chasis y motor número B.B.A. ocho R.T. sesenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco con capacidad de dos y media toneladas; que no hay ninguna empresa que tenga línea y que se pudiera considerar perjudicada con su petición, pues pretende llevar ese medio de comunicación a

los vecinos de la citada aldea y para justificar sus razones acompañaba documentación de los habitantes de la misma como de las autoridades de Tiquisate, en la que se hace constar la falta de ese servicio. Adjuntó a su solicitud los correspondientes formularios para obtener la "Tarjeta de Operación" y el registro de la empresa, a nombre de Hermelindo Soto Mérida. Esta solicitud fué remitida a la Oficina de Transportes para que siguiera el trámite correspondiente, y se hicieron las publicaciones respectivas.

RESULTA:

El once de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante el Jefe del Departamento Administrativo de Economía, se presentó Arturo López Maldonado, en concepto de apoderado de la empresa de transportes "El Esfuerzo" domiciliada en Tiquisate, exponiendo: que por las publicaciones de prensa, se habían enterado de la petición de Rodolfo Lainez, en representación del porteador Hermelindo Soto Mérida, para que le sea autorizado el servicio de la línea que de Tiquisate conduce a la aldea Hüizizil, y aunque el presentado indica que no hay empresa que se pudiera considerar perjudicada, del estudio del expediente respectivo que contiene el croquis de la ruta y el horario, se deduce que saldría perjudicada la empresa "El Esfuerzo", porque están señalados como puntos intermedios en aquélla la casi totalidad de los que tiene autorizados la empresa que representa, por lo que dentro del término legal presentaba formal oposición a lo pedido por Lainez, con base en las siguientes razones: el peticionario no incluyó la constancia de la compra o el traspaso del vehículo, indicando que no tenía tarjeta de operación del año anterior, es decir, que se trata de un vehículo no autorizado en ninguna línea de transportes, lo que no es cierto, porque el vehículo identificado en el anexo de su petición sí tiene servicio en las líneas de Tiquisate-Río Bravo y viceversa y la de Mazatenango-Tiquisate y viceversa y no es verdad que dicho vehículo no haya tenido tarjeta de operación en el año anterior, porque la Sección de Transportes le extendió la número mil ochocientos diecisiete; que sin autorización de las autoridades de Economía no es posible substraer un vehículo con servicio comprometido en una o varias líneas, ya no se diga autorizarlo para una nueva, sin antes haberlo substituído; que en la petición se señala específicamente entre la población de Tiquisate y la aldea Hüizizil, sin embargo, en el

cuadro que contiene la ruta está incluido el lugar "La Playa" con una distancia de treinta y seis kilómetros a Hüizizil; que de lo que real y positivamente se trata, es conseguir la línea que sirve "El Esfuerzo" ya que si realmente existiera la necesidad del servicio a esos lugares, esta Empresa ya habría pedido las prolongaciones de su línea autorizada; que además el interesado no indica que de la finca Zunil a Hüizizil o a la Playa, no hay carretera formal para poder servir ininterrumpidamente esa línea ya que durante los meses de lluvia no pueden llegar a esos lugares vehículos de motor, concluyendo por pedir, que antes de resolver se ordenara una inspección para constatar el estado del camino entre la finca Zunil y Hüizizil, y que tomando en cuenta los vicios y anomalías señaladas, no se acceda a lo pedido por Lainez. Acompañó una certificación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa "El Esfuerzo"; comprendido entre el primero de octubre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres. Esta solicitud fué enviada a la Oficina de Transportes para que tomara nota y la agregara a los antecedentes.

RESULTA:

El cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, compareció ante el mismo Departamento Administrativo, Rodolfo Lainez, en representación de Soto Mérida, manifestando: que por una equivocación en la solicitud de la línea Tiquisate a Hüizizil, se incluyó la camioneta que tiene línea autorizada de Tiquisate-Río Bravo-Mazatenango y viceversa, y para evitar cualquier mal entendido renunciaba expresamente la última línea citada, por no convenir a los intereses económicos de la empresa, por haber demasiadas camionetas y ser poco el trabajo de pasaje y carga y en esa virtud había cumplido con dar el aviso respectivo a lo largo de la ruta que recorre, por medio de los volantes necesarios, de los cuales adjuntaba cuatro; que a la vez hacía constar que habiendo renunciado dicha línea, la camioneta con que hacía ese servicio es la misma que figura en su solicitud de la línea Tiquisate-Hüizizil y puntos intermedios y que devolvía la licencia de porteador y la tarjeta de operación de la línea renunciada, adjuntando el formulario T-siete y certificación de la Guardia Civil donde consta el buen estado del vehículo y número nuevo de la placa de circulación. El citado Departamento Administrativo de Economía, resolvió: que el interesado ratificara el escrito anterior y seguidamen-

te que pasaran las actuaciones a la Oficina de Transportes para que procediera a la cancelación del expediente respectivo, y después de llenarse ese trámite, el Jefe de dicha Oficina, emitió dictamen favorable para que se concediera a Hermelindo Soto Mérida, el derecho a explotar la línea entre Tiquisate y la aldea Hüizizil y viceversa.

RESULTA:

Con esos antecedentes el Departamento Administrativo de Economía, con fecha veintitrés de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, resolvió: "1o.—Cancelar los servicios que el señor Hermelindo Soto Mérida venía prestando en la ruta: Tiquisate, Río Bravo a Mazatenango y viceversa con una unidad, verificando las anotaciones del caso en el expediente correspondiente; y 2o.—Autorizar, al señor Hermelindo Soto Mérida, para que establezca el servicio de Transportes mixto, diario, con una unidad, entre Tiquisate y la aldea Hüizizil y viceversa por el término de ley. Pasen las presentes actuaciones a la Oficina de Transportes de este Departamento para que fije las tarifas y horarios que correspondan". Arturo López Maldonado manifestó su inconformidad con esta resolución e interpuso el recurso de revocatoria, por lo que fueron pasadas las actuaciones al Ministerio de Economía, mandándose oír al Ministerio Público, habiendo dictaminado el Jefe de la Sección de Fiscalía de dicha Institución, en el sentido de que la solicitud para el establecimiento de la línea de transporte entre Tiquisate y la aldea Hüizizil, se acreditó como conveniente y que en cuanto a la oposición de la empresa "El Esfuerzo" no se hallaba bien fundada conforme a la ley, por lo que debía confirmarse la resolución del Departamento Administrativo de Economía, adicionándola en el sentido de que la suspensión del servicio anterior que tenía Soto Mérida, tiene efecto después de transcurrir treinta días desde que se pidió autorización para suspenderlo y no antes, y después de que los interesados alegaron lo conveniente a sus derechos, el mencionado Ministerio ordenó que para mejor resolver, Soto Mérida presentara certificación extendida por Contador autorizado, en que conste las pérdidas obtenidas en el servicio de la línea cancelada Tiquisate-Río Bravo-Mazatenango y que se pidieran informes a la Municipalidad y Guardia Civil de Tiquisate y a la Compañía Agrícola de Guatemala, acerca de si el tramo de carretera de la finca Zunil a Hüizizil es transitable por camionetas en la

época de invierno. En cumplimiento de esa disposición el Alcalde de Tiquisate, informó favorablemente y la Compañía Agrícola, que no era transitable en invierno ese tramo de carretera y el interesado presentó la certificación del Contador Benigno Prado, del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa "Palmeras", que acusa una pérdida de seiscientos cincuenta y dos quetzales, setenta y un centavos, del treinta de junio al treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres; y una certificación del Juzgado de Tránsito Auxiliar de Tiquisate, en el sentido de que la carretera entre esta población y la aldea Hüizizil se encuentra en buenas condiciones para el tránsito de vehículos de motor. Por haberse transferido como dependencia de la Guardia Civil el Departamento de Transportes Extra-Urbanos, las actuaciones fueron pasadas al Ministerio de Gobernación, para la resolución del recurso de revocatoria en trámite, el cual fué resuelto el veintinueve de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, en providencia número cuatro mil seiscientos trece, confirmando la dictada por el Ex-Departamento Administrativo de Economía, el veintitrés de marzo de ese mismo año, mandándose remitir el expediente a la Dirección General de la Guardia Civil, para su prosecución y lo que haya lugar.

RESULTA:

El once de noviembre del año recién pasado, compareció ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el señor Hernández Guzmán, en su carácter indicado, exponiendo: que con fecha veintidós de enero de aquel año, se presentó al Departamento Administrativo de Economía el señor Hermelindo Soto Mérida, por medio de su apoderado Rodolfo Lainez, solicitando autorización para establecer una línea de transporte de Tiquisate a la aldea Hüizizil y viceversa, indicando el itinerario a seguir, así como el horario y tarifa; que la línea solicitada iba a ser cubierta con la camioneta que estaba prestando servicio en la línea Tiquisate-Río Bravo-Mazatenango y viceversa; que al hacerse las publicaciones del consorcio que representa se dió cuenta de la maniobra del solicitante y como se perjudicaban sus derechos adquiridos, presentó la oposición correspondiente, que fué rechazada con base en el dictamen de la oficina de Transportes, y como al hacerse ver a la oficina correspondiente, que el vehículo, con que se pretendía cubrir la nueva línea se estaba utilizando en la ya indicada, motivó que el inte-

resado se presentara el cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, dentro del mismo expediente, renunciando a la línea Tiquisate-Río Bravo-Mazatenango, alegando que operaba bajo pérdidas; que los volantes que para el efecto se hicieron circular indican "Febrero de 1954", sin especificar el día y que el quince de marzo ya no habrá servicio, en manifiesta oposición con lo que al efecto dispone el Reglamento de Transportes Extra-urbanos, el cual establece que el permiso debe solicitarse con treinta días de anticipación y que se debe anunciar la suspensión por lo menos quince días antes de la fecha señalada para la misma, pero esa fecha debe señalarla la autoridad competente y no el transportista y fué hasta el veintitrés de marzo cuando el Departamento Administrativo de Economía canceló la línea Tiquisate-Río Bravo-Mazatenango; que previamente a resolver la Oficina de Transportes emitió dictamen, pronunciándose en favor de la concesión de la línea, pero es contradictorio, pues a pesar de reconocer los inconvenientes legales y económicos de la línea solicitada, considera impropcedente la oposición y con base en él, el Departamento Administrativo de Economía dictó resolución con fecha veintitrés de marzo del año pasado, cancelando la línea Tiquisate-Río Bravo-Mazatenango y autorizando la de Tiquisate a Hüizizil; que contra esa resolución interpuso recurso de revocatoria el personero del Consorcio, habiendo pasado las actuaciones al Ministerio de Economía, el cual, para mejor fallar, ordenó: a) que Soto Mérida presentara un estado de pérdidas en la línea cuya cancelación había solicitado, y b) que se pidiera informe a la Guardia Civil y Municipalidad de Tiquisate así como a la Compañía Agrícola sobre si es transitable o no la vía que conduce de Zunil a Hüizizil. Al respecto, el interesado presentó certificación que contiene el Estado de Pérdidas y Ganancias del primero de julio al treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, apareciendo del mismo una pérdida de seiscientos cincuenta y dos quetzales, cincuenta y un centavos, y en cuanto a los informes solicitados los tres fueron contestes en cuanto al hecho de que el camino de Zunil a Hüizizil es intransitable durante el invierno; que las actuaciones fueron cursadas al Ministerio de Gobernación, por haber pasado bajo su jurisdicción lo relativo a Transportes extra-urbanos, y dictó resolución el veintinueve de julio del año recién pasado, confirmando la del Departamento Administrativo de Economía;

que no obstante de que la resolución impugnada no estaba firme, por encontrarse expedito el recurso contencioso-administrativo, lo cual hizo ver a la Oficina de Transportes, se extendió a Soto Mérida la licencia de Porteador para cubrir la línea Tiquisate-Hüizizil, autorizándole la tarifa y horario correspondientes, con grave perjuicio de los otros transportistas; que es importante hacer ver, que Soto Mérida, en la línea que le autorizaron está cubriendo exactamente los mismos terminales y pasando exactamente por las mismas fincas que la Empresa "El Esfuerzo", por lo que aquél no está cumpliendo con la ley y que el hecho de solicitar una línea un poco más extensa que la que cubre "El Esfuerzo", fué con el propósito de sorprender a las autoridades a efecto de obtener la autorización correspondiente, ya que para ellos es materialmente imposible cubrir las terminales autorizadas y sólo llegan hasta donde opera el consorcio que representa. Después de expresar los fundamentos de derecho en que se apoya y ofrecer las pruebas conducentes, concretó su pedimento sobre que se dicte el fallo correspondiente, revocando la resolución del Ministerio de Gobernación de fecha veintinueve de julio del año recién pasado. Tramitado en forma este recurso, se dió audiencia al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, después de recabarse los antecedentes del mismo y compareció en representación del primero el Licenciado Roberto Sosa Silva, acompañando una credencial, en la cual consta que se le nombró Procurador de los Ramos Penal y Civil del Ministerio de Gobernación, por lo que no fué aceptada su representación, compareciendo entonces el Licenciado infieri Gabriel Martínez del Rosal, en concepto de Sub-Secretario del ramo, contestando la demanda en sentido negativo, solicitando se tuviera como prueba la resolución administrativa contra la cual se recurre.

RESULTA:

que abierto a prueba el recurso, el recurrente solicitó que se tuvieran como tales los siguientes documentos: a) El estado de pérdidas y ganancias de la empresa de transportes "El Esfuerzo"; b) La tarjeta de operación del señor Hermelindo Soto Mérida; c) Memorial en que renunció a la línea que tenía concedida y acta de ratificación del mismo; d) Informe del Jefe de la Oficina de Transportes; e) Certificación del Alcalde de Tiquisate, sobre el buen estado de la carretera de dicho lugar a Hüizizil; f) El oficio del Departamen-

to de Relaciones Públicas de la Compañía Agrícola de Guatemala; g) Certificación del Juez de Tránsito Accidental de Tiquisate, acerca de que la camioneta "Palmeras" no está cumpliendo sus obligaciones en cubrir la línea Tiquisate-Hüizizil, por encontrarse en malas condiciones; y h) Certificación del Alcalde Municipal de Tiquisate, en igual sentido que la anterior. Vencido el término de prueba se señaló día para la vista, dictándose el fallo, en la fecha indicada al principio, el cual contiene los siguientes pronunciamientos: "Confirma la resolución recurrida y manda que se exija al concesionario compruebe el buen estado de la camioneta que pondrá en servicio en la línea que se le concede". Para ese efecto el Tribunal consideró: Que la solicitud del señor Soto Mérida, sobre obtención de la línea Tiquisate-Hüizizil para servirla con un autobús para el transporte de carga y pasajeros, llena todos los requisitos del artículo 12 del Reglamento de Transportes extra-urbanos, incluso el informe del Juez de tránsito auxiliar de Tiquisate, acerca de que el vehículo con el cual ofrece cubrir esa línea, se encuentra en perfectas condiciones de prestar servicio y seguridad al público; que aunque se presentaron como prueba los informes del Juez de Tránsito y Alcalde Municipal de Tiquisate, acerca de que la camioneta "Palmeras" ha suspendido sus servicios en la línea Tiquisate-Hüizizil por encontrarse en malas condiciones, ninguna prueba existe de que esa camioneta sea de la propiedad de Soto Mérida y la misma con la cual intenta prestar ese servicio, ni de que este señor haya comenzado ya a hacer el transporte de carga y pasajeros solicitado, lo que en dado caso, no sería motivo para denegar la autorización solicitada, sino repararla en debida forma o sustituirla con otra que llene todas las condiciones de seguridad y buen servicio; que por otra parte la oposición del consorcio "El Esfuerzo" tuvo como fundamento, que sus camionetas recorren la mayoría de los lugares que se hallan entre Tiquisate y Hüizizil, pero su terminal no es Hüizizil sino la finca Ticanlú, y además, fuera de defectos de forma de la solicitud, la oposición no invocó ninguna causal que impida la concesión solicitada y Soto Mérida ya era porteador autorizado para servir otra línea; que la objeción de que el servicio a Hüizizil no puede prestarse sin interrupción, porque la carretera se pone intransitable en el invierno, en nada perjudica los intereses privados de la opositora ni los intereses económicos en general, de la región, los

cuales, por el contrario, favorece, y sobre ese particular solamente la Compañía Agrícola de Guatemala, asegura que en invierno es imposible ese servicio vía El Toro y La Playa, mientras que la autoridad municipal y el Juzgado de Tránsito de Tiquisate afirman lo contrario y aseguran que fuera de un fuerte temporal, esa carretera no se interrumpe durante el invierno.

RESULTA:

Contra el anterior fallo, el representante del Consorcio de Transportes "El Esfuerzo", señor José Rodrigo Hernández Guzmán, con el auxilio del Abogado Luis Emilio Anzueto L., interpuso recurso de casación por: a) Violación e interpretación errónea de la ley; y b) Error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, fundándose en los casos de procedencia contenidos en los incisos 1o. y 3o. del Artículo 560 del Decreto Legislativo 2009, y cita como leyes violadas los siguientes artículos: IV y IX de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial; 1o., 3o. incisos a), c) y d) del Decreto 253 del Congreso de la República; 1o. incisos a), b), c) y e), 14, 29, 38 del Acuerdo Gubernativo de 20 de noviembre de 1945 (Reglamento de Transportes Extra-urbanos); 2o., 4o., 9o. y 13 del Acuerdo Gubernativo de fecha 24 de mayo de 1946 (Reglamento de Transportes Extraurbanos); y habiendo tenido verificativo la vista procede resolver.

—I—

CONSIDERANDO:

El recurrente aduce como uno de los fundamentos de su recurso, que el Tribunal sentenciador incurrió en error de derecho y error de hecho en la apreciación de las pruebas y que el último resulta de documentos auténticos que demuestran de modo evidente la equivocación del juzgador; pero no se cuidó, como repetidas veces lo ha hecho saber esta Corte, de precisar en forma concreta en qué consiste cada uno de tales errores, qué pruebas los contienen, ni citó ley infringida en relación con este fundamento, sino simplemente se concretó a atribuir simultáneamente ambos errores a la prueba en general, incurriendo así en serios defectos de técnica que sólo podrían subsanarse haciendo un estudio generalizado del fallo, lo que es improcedente, por-

que se convertiría el recurso de casación en una tercera instancia, contraria a la ley, porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico. De consiguiente se está en la imposibilidad legal de hacer el estudio en este aspecto del recurso. Artículos 506 y 512 del Decreto Legislativo 2009.

—II—

CONSIDERANDO:

Fundándose en el inciso 1o. del Artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, indica que la sentencia recurrida contiene violación e interpretación errónea de la ley, concretándose a citar como infringidas varias leyes, sin señalar cuáles fueron violadas y cuáles interpretadas con error, por lo que el estudio de esta fase del recurso debe hacerse a base de los hechos que el Tribunal sentenciador da por probados. De acuerdo con las prescripciones de los artículos 1o. y 3o. incisos a), c) y d) del Decreto 253 del Congreso, citados por el recurrente, para el establecimiento de nuevas líneas de transporte se requiere de previa autorización, para lo cual debe seguirse un expediente, sobre la conveniencia del servicio y la aplicación correcta de los principios económicos en materia de transportes, a fin de evitar competencias ruinosas; sobre las condiciones de eficiencia y seguridad que pueda ofrecer el servicio; y sobre la calidad de los vehículos. Ahora bien, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo afirma en su fallo: "que la solicitud del señor Soto Mérida, sobre obtención de la línea Tiquisate-Hüizizil, para servirla con un autobús para el transporte de carga y pasajeros, llena todos los requisitos del artículo 12 del Reglamento de Transportes Extra-Urbanos y que está acreditado que el vehículo con el cual ofrece prestar sus servicios se encuentra en perfectas condiciones para prestar servicio y seguridad al público". El citado artículo reglamentario preceptúa que para servir periódicamente cualquier línea de transportes públicos extraurbanos, es necesario obtener y poseer una licencia y para obtenerla debe seguirse un expediente con el fin de acreditar: que los vehículos que serán utilizados en el servicio llenan satisfactoriamente los requisitos mínimos de seguridad; presentar un cuadro de las rutas que se tenga el propósito de servir, detallando los lugares que tocará la línea y la distancia entre los diferentes centros de población; la frecuencia y periodicidad de los viajes y los horarios de

servicio; el proyecto de las tarifas de fletes y de pasajes por cobrarse; copia de la escritura social y nómina de los socios cuando la empresa sea una sociedad; y constancia que acredite la nacionalidad del empresario o de los socios; por lo que tiene que admitirse que el interesado llenó todas estas formalidades. Además el Tribunal considera: "Que por otra parte la oposición del consorcio "El Esfuerzo" no tuvo otro fundamento, que el de que sus camionetas recorren la mayoría de los lugares que se hallan entre Tiquisate y Hüizizil, pero su terminal es la finca Ticanlú, y además, fuera de defectos de forma en la solicitud, la oposición no invocó ninguna causal que impida la concesión solicitada". En efecto, del estudio del memorial en que Arturo López Maldonado, en representación de la empresa de transportes "El Esfuerzo", hizo oposición a la solicitud de Soto Mérida, se ve que la funda en omisiones en el trámite del expediente respectivo, concretándola únicamente en que de lo que se trata es conseguir la línea que sirve "El Esfuerzo", y en que de la finca Zunil a Hüizizil y a La Playa, no hay carretera formal para poder servir ininterrumpidamente esa línea, ya que durante los meses de lluvias a esos lugares no pueden llegar vehículos de motor; y como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo asienta en su fallo en relación a esos respectos, que la terminal de la línea concedida a esa empresa es la finca Ticanlú y no la aldea de Hüizizil, y que la objeción de que el servicio a esta última no puede prestarse sin interrupción porque la carretera se pone intransitable en el invierno, en nada perjudica los intereses privados de la empresa opositora, ni los intereses económicos, en general, de la región, los cuales por el contrario favorece, y además la autoridad municipal y el Juzgado de Tránsito de Tiquisate afirman lo contrario y aseguran que fuera de un fuerte temporal el tránsito por la carretera de Tiquisate a Hüizizil no se interrumpe durante el invierno". Por consiguiente, con esos antecedentes, no pudo prosperar la oposición presentada en los indicados términos, porque en realidad sus fundamentos no constituyen una causal determinante de la inconveniencia de autorizar la indicada línea, no encontrándose así, en el fallo impugnado, ninguna infracción a las prescripciones de los artículos 1o. y 3o., incisos a), c) y d) del Decreto 253 del Congreso, que como ya se indicó, se refieren a las condiciones que deben llenar los servicios públicos de transporte y los extremos que deben acreditarse, los cuales dió por establecidos el Tribunal sen-

tenciador; tampoco existe contradicción entre lo resuelto y lo que determinan los siguientes artículos del Reglamento de Transportes Extraurbanos, contenido en el Acuerdo Gubernativo de veinte de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, como se ve a continuación: los incisos: a), b), c) y e) del artículo 1o., únicamente indican cuál es el objeto del citado reglamento; el 14 impone a la Dirección General de Comercio e Industrias la obligación de hacer publicar las solicitudes de esta naturaleza, reconociendo el derecho a presentar oposición, el 29 la forma de proceder cuando los servicios establecidos resulten insuficientes; y el 38, se refiere a la obligación de la mencionada Dirección de llevar tarjetas de registro de cada porteador autorizado para preparar los cuadros estadísticos comparativos, por lo que ninguno de ellos es aplicable al caso. En cuanto a los artículos del Acuerdo Gubernativo de veinticuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, siguientes: 2o., que modificó el 12 del Reglamento de Transportes Extraurbanos y establece la necesidad de obtener licencia para servir cualquier línea de transportes públicos, previa la comprobación de los extremos indicados antes, y habiendo el Tribunal sentenciador estimado que Soto Mérida llenó esos requisitos, no puede estimarse que haya incurrido en error en la aplicación del mencionado artículo; el 4o. que modificó el 22 del mismo Reglamento, define las obligaciones que contrae el porteador al iniciar su servicio, fijando las sanciones aplicables cuando suspender el servicio sin autorización o sin causa mayor; 9o. reformó el 27 del repetido Reglamento y determina los requisitos que deben llenarse para suspender definitivamente el servicio de una línea autorizada; y el 13 que modificó el 41 del Reglamento mencionado, se refiere a licencias especiales para servicios temporales, y por último los artículos IV y IX de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, prescriben respectivamente, que las disposiciones especiales de una ley, prevalecen sobre las generales; y que son nulos los actos ejecutados contra el tenor de la ley, salvo que en ella misma se acuerde su validez, disposiciones que ninguna aplicación tienen en el caso de examen. En consecuencia, no ha incurrido el Tribunal sentenciador en el fallo impugnado, en violación, o interpretación errónea de ninguna de las leyes que quedaron examinadas y que fueron citadas por el recurrente.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo considerado, y con apoyo además en los artículos 222, 224, 227, 233, 234 Decreto Gubernativo 1862; 27, 512, 521 y 525 del Decreto Legislativo 2009, declara: sin lugar el recurso de casación de que se hizo mérito, condenando al interponente al pago de las costas del mismo y a una multa de treinta quetzales, que en caso de insolvencia conmutará con quince días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel suplido y en la forma correspondiente devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguilar Fuentes).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CIVIL

Ordinario seguido por Delfina Castillo López contra Adilia Aguirre Catalán de Salazar.

DOCTRINA: *El término para el abandono de una instancia tiene que ser continuo; por consiguiente, no procede la declaración que lo da por consumado, cuando al mismo tiempo se reconoce que la parte obligada a gestionar no estuvo en la posibilidad de hacerlo, durante todo el periodo señalado en la ley.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, dieciocho de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación, se examina el auto de fecha cinco de agosto del corriente año, proferido por la Sala Séxta de la Corte de Apelaciones, en el juicio ordinario seguido por DELFINA CASTILLA LOPEZ contra ADILIA AGUIRRE CATALAN DE SALAZAR, confirmando el de primer grado que declara con lugar el abandono de la primera instancia en dicho juicio, de cuyos antecedentes.

RESULTA:

El primero de julio de mil novecientos cincuenta, se presentó ante el Juez Séptimo de Primera Instancia de este departamento, el Abogado don Fabián Salvador Ymeri Mayorga,

en ejercicio del mandato que le confiriera la señora Delfina Castilla López, demandando de la señora Adilia Aguirre Catalán de Salazar, la posesión de la casa número catorce A, de la quinta calle Poniente de Jocotenango, inscrita en el Registro con el número catorce mil setecientos noventa y nueve, al folio doscientos ocho, del libro ciento treinta, de Guatemala, que antiguamente tenía el número ocho del callejón del Zapote de esta ciudad, fundándose en los siguientes hechos: que su mandante era dueña de la Propiedad urbana número ocho A de la Calle del Zapote, inscrita en el Registro General con el número trece mil novecientos ochenta y seis, al folio doscientos veintiuno del libro ciento trece de Guatemala; que habiendo hipotecado este último inmueble se le siguió un juicio ejecutivo, en el cual la señora María Catalán Rivas remató la propiedad, según la escritura de adjudicación en pago que se le otorgó y sin solicitar la posesión judicial del inmueble de referencia, de hecho se posesionó de la casa número catorce A. de la quinta calle Poniente de Jocotenango, que es parte del inmueble que describió al principio; que la señora Catalán Rivas, otorgó escritura de venta a su hija Adilia Aguirre Catalán de Salazar de la propiedad urbana que en realidad adquirió en remate, quien ya sea por error o con conocimiento de la violencia con que su vendedora ocupó una casa distinta del inmueble que había adquirido, continúa en la posesión de la casa mencionada, por lo que pedía que se dictara sentencia condenatoria disponiéndose que se dé a su mandante la posesión del inmueble de referencia y que se condenara a la demandada en las costas del juicio, los perjuicios y daños ocasionados y especialmente el valor de los alquileres.

RESULTA:

Después de haberse resuelto sin lugar la excepción de falta de personalidad en la actora, interpuesta por la parte demandada, ésta contestó en sentido negativo la demanda anterior, y a la vez contrademandó a la señora Castilla López, para que se hiciera declaración sobre los aspectos planteados con ese motivo, que no es del caso detallar.

RESULTA:

Que el primero de diciembre de mil novecientos cincuenta se abrió a prueba este juicio, habiendo rendido las partes las que estimaron procedentes, y en ese estado el procedimiento, con fecha veintiséis de noviembre de mil nove-

cientos cincuenta y uno, presentó el Licenciado Ymeri Mayorga, en su concepto ya indicado, una exposición manifestando: que además de este juicio, la señora Adilia Aguirre Catalán de Salazar, demandó a su representada, ante el mismo Juzgado, para que se declare: que la casa número doce A, que antiguamente estaba marcada con los números catorce y ocho de la quinta calle Poniente de Jocotenango, debe identificarse en el Registro de la Propiedad Inmueble con el número catorce mil setecientos setenta y nueve, folio doscientos ocho, del libro ciento treinta de Guatemala, inscribiéndose a nombre de la demandante, por lo que pedía la acumulación de ambos juicios. Dicha solicitud fué proveída al siguiente día en la siguiente forma: "Audiencia a las partes por dos días comunes"; pero esta providencia no ha sido notificada a las partes, sin embargo de haberse hecho varias gestiones en ese sentido.

RESULTA:

Con fecha catorce de marzo del corriente año, Adilia Aguirre Catalán, se presentó al Juez de los autos, expresando: que la última actuación practicada en este juicio es la providencia de fecha diez de septiembre último, que dispone que se cumpla con enviar el juicio a esta Corte, de manera que al nueve del mes en que se hacía la gestión, habían corrido los seis meses necesarios para tener por consumado el abandono de la primera instancia, por lo que promovía el correspondiente incidente, para que en su oportunidad se declarara consumado el abandono y extinguida la acción intentada. Tramitado ese artículo, la señora Castilla de López, contestó que no procedía el incidente de abandono y solicitó que se abriera a prueba, lo cual se hizo por el término de diez días, dentro de los cuales no se rindió ninguna, porque la documental que la actora presentó lo hizo en forma extemporánea, por lo que no le fué admitida. Vencido ese término el Tribunal de Primer grado resolvió con fecha dieciséis de junio del año en curso, declarando el abandono de la primera instancia y en consecuencia extinguida la acción, y apelado ese auto, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, lo confirmó en la fecha indicada al principio, habiendo estimado: que la apelante indica que no está conforme con el auto que declaró el abandono, porque dicho juicio estuvo en esta Corte desde el siete de septiembre del año recién pasado, hasta el veintitrés de diciembre del mismo año, estando durante todo ese tiempo en imposibilidad de gestionar, es decir, que el abandono no ha corrido porque ha habido fuerza mayor y que el abandono debe ser solicitado

por parte legítima y en el presente caso fué hecha la petición por el Abogado auxiliando la firma de su Secretaria o empleada; acerca de lo cual consideró: que efectivamente constaba en autos que el juicio fué remitido a esta Corte Suprema de donde regresó, en la fecha indicada, de manera que aún admitiendo que la parte actora haya estado en imposibilidad de gestionar hasta el día veintitrés de diciembre citado, le quedaron dos meses quince días para impedir el abandono y como la ley es clara y terminante a este respecto pues no exige otro requisito que el del simple transcurso del tiempo, el auto que se examina está arreglado a derecho; que la circunstancia de fuerza mayor alegada por la demandante, cabría apreciarla si los seis meses hubiesen transcurrido estando el juicio en un Tribunal distinto del competente para actuar y aún así bien pudo hacerse alguna gestión encaminada a hacer que los autos regresaran al Tribunal correspondiente, por lo que estimaba que en el caso planteado no ha habido fuerza mayor que imposibilite a la demandante sus gestiones; que en cuanto al otro argumento invocado, tampoco produce el efecto que ella desea, pues el escrito en que se interpuso el abandono fué firmado a ruego de la presentada por una persona cuya nombre no puede leerse, pero cuya petición tiene perfecta validez legal porque está auxiliada por un abogado en ejercicio.

RESULTA:

Contra la resolución de segunda instancia, la señora Delfina Castilla López, con el auxilio del Abogado Eduardo Rodríguez Genis, interpuso recurso de casación, por violación de ley, apoyándolo en el inciso 1° del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, y citó como violadas las siguientes leyes: artículos 82, 88, 123, 127, 145, 147, 148, 150, 151, 153 y 171 del Decreto Legislativo 2009 (Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil); 206, 207 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial (Decreto Gubernativo 1862), y el inciso 6° del artículo XXIX de los Preceptos Fundamentales, de la misma Ley citada, argumentando en la siguiente forma: "El juicio a que me vengo refiriendo, siguió sus trámites legales con toda diligencia de mi parte, sin que haya incurrido en morosidad o descuido imputable a mí; pero con fecha catorce de marzo del año en curso, fué presentado un escrito al Juzgado mencionado, acusando abandono de la Instancia, sin que el término para tal fin hubiera corrido legalmente, y sin haberse llenado el requisito de que lo solicitara parte legítima o su representante legal como expresamente lo determina la ley; por otra parte,

estaba suspensa la jurisdicción por estar pendiente que se resolviera una acumulación pedida en otro juicio que la señora Aguirre Catalán me había instaurado". Habiéndose verificado la vista en este asunto procede resolver.

—I—

CONSIDERANDO:

La recurrente, fundándose en el caso de procedencia contenido en el inciso 1º del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, impugna el auto recurrido, asegurando que el término de seis meses que señala la ley para el abandono de la primera instancia, no ha corrido legalmente en este asunto, y que al declarar lo contrario el Tribunal de segundo grado incurrió en violación de los artículos 147, 148 y 150 del Decreto Legislativo 2009. De conformidad con ese fundamento del recurso, su estudio tiene que hacerse con base en los hechos que la Sala sentenciadora admite como probados, sin poderse examinar la prueba aceptada para ese efecto, por no haberse planteado ningún problema en tal sentido. Aquel Tribunal tuvo por establecido que el juicio de que se trata permaneció en esta Corte Suprema del siete de septiembre al veintitrés de diciembre del año recién pasado, lapso que se incluyó para computar el término del abandono declarado y como por prescripción legal ese término tiene que ser continuo, resulta indebido el cómputo que se hizo a partir de la providencia del diez de septiembre del año pasado que dispone el envío del juicio a esta Corte, pues la permanencia de los autos en este Tribunal fué la causa de la falta de gestión, y en realidad debe conceptuarse como un impedimento legítimo porque de hecho paralizó los trámites del procedimiento, de lo cual se infiere que no había vencido el término del abandono cuando se acusó, siendo así evidente la infracción de las leyes citadas, lo que es motivo suficiente para casar el auto recurrido, sin necesidad de continuar el estudio de las otras denunciadas como violadas por razones obvias.

—II—

CONSIDERANDO:

Que la primera instancia queda abandonada por el transcurso de seis meses sin continuarla, término que según la ley, tiene que ser continuo; por consiguiente, de acuerdo con lo expresado en el considerando que antecede, dicho término debió computarse en este caso, a partir de la fecha en que regresó el juicio de

esta Corte, toda vez que ya se dijo, que no debe incluirse el tiempo que estuvo en este Tribunal; en tal virtud no había vencido el término legal cuando Adilia Aguirre Catalán, acusó el abandono de la primera instancia, en el juicio de referencia, por lo que es el caso de declararlo sin lugar. Artículos 145, 147 y 150 del Decreto Legislativo 2009.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en los artículos 149, 155, 506, 518, 524 y 27 Decreto Legislativo 2009, declara: con lugar el recurso de casación de que se hizo mérito; revoca el auto recurrido y resolviendo acerca del abandono de la primera instancia planteado, lo declara sin lugar, obligando a la señora Aguirre Catalán al pago de las costas del incidente y a la multa de diez quetzales. Notifíquese, repóngase el papel suplido y en la forma correspondiente devuélvanse los antecedentes. (Ponente Magistrado Gregorio Aguilar Fuentes).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes — J. A. Ruano Mejía — Juan Fernández C.

CIVIL

Victoria Echeverría González apoderada de Abraham García Echeverría contra Rafael Aguirre García.

Existe imposibilidad de orden técnico para conocer del fondo del recurso de casación, cuando acusándose errores en la apreciación de las pruebas, se omite identificar la naturaleza propia del error cometido.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, dieciocho de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, con fecha once de Mayo del año en curso, en el juicio ordinario seguido por Victoria Echeverría González, como apoderada de Abraham García Echeverría, contra Rafael Aguirre García.

RESULTA:

El veintiséis de Febrero del año recién pasado, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de este departamento, compareció Victoria Echeverría González, manifestando: que en concepto de apoderada de su hijo Abraham García Echeverría, demandaba en vía ordinaria a Rafael Aguirre García, basada en lo siguiente: que por escritura pública autorizada por el Notario Justo Pérez López, de tres de Junio de mil novecientos cuarenta y nueve, su hijo y poderdante otorgó poder especial a su padre Rafael Aguirre García, facultándolo entre otras cosas para vender e hipotecar los bienes muebles e inmuebles de su representado; que con dicha facultad Aguirre García, vendió un lote de terreno compuesto de trescientos metros cuadrados, identificado como finca número treinta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve, folio cincuenta y tres, libro trescientos treinta de Guatemala, a Gumerindo Solares Rodas y Nicolasa Yelmo, la mitad a cada uno, habiendo antes hipotecado la propiedad a la última persona nombrada y al Crédito Hipotecario Nacional; que no obstante que tales ventas datan del mes de Septiembre de mil novecientos cincuenta, el demandado no sólo ha dejado de entregar al propietario del inmueble el producto de las mismas, sino que ni siquiera se da por entendido de haber efectuado esas operaciones; que la propiedad vendida tiene como mínimo un valor total de mil ochocientos quetzales, cantidad que es la que demanda, más los intereses y las costas legales en su caso, reservándose la acción de daños y perjuicios. Cita los fundamentos legales de su demanda, ofreció probar la acción con los medios que la ley autoriza y pide por último que se condene al demandado a la devolución de la suma de mérito dentro del término de tres días. Acompañó a la demanda: a) testimonio de la escritura de poder con que actúa; b) testimonio de la escritura de poder otorgada por Abraham García Echeverría a favor del demandado; c) testimonio de la escritura por medio de la cual Abraham García Echeverría adquirió la propiedad del inmueble vendido por el demandado, cuya venta es el origen de la presente acción; d) testimonio de la escritura en que consta que el demandado obtuvo un préstamo de El Crédito Hipotecario Nacional, en ejercicio del mandato que le otorgara García Echeverría, hipotecando el inmueble mencionado; e) certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Inmueble, relativas a las operaciones que se han referido, sobre la finca antes identificada.

Al contestar la demanda en sentido negativo Rafael Aguirre García expresó: que no era cierto el contenido de la demanda en cuanto a que el inmueble vendido haya sido de la exclusiva propiedad de su hijo Abraham García Echeverría; que fué él (el demandado) quien pagó los abonos de los lotes, y que para evitar hacer donaciones por causa de muerte o testamento, los había traspasado a nombre de su hijo; que por esa razón le fué extendido el poder con que actuaba a fin de que pudiera disponer libremente de dichos bienes.

RESULTA:

Abierto el juicio a prueba únicamente se rindieron, por parte de la actora, los testimonios de Justa Espinoza Monteros y Juliana de Jesús Arévalo, quienes manifestaron: que Rafael Aguirre García, cuando vendía un lote de terreno de la lotificación "Santa Ana", compuesto de trescientos metros cuadrados, pedía por la totalidad del mismo la cantidad de mil doscientos quetzales, al riguroso contado, haciendo la concesión de que podía venderlo en dos mitades, pero no bajando de seiscientos quetzales cada mitad; que lo dicho les consta por haber ellas tratado de comprar el lote.

Con tales antecedentes el Juez dictó sentencia, declarando: sin lugar la demanda y como consecuencia absuelto de la misma a Rafael Aguirre García.

Al subir enalzada a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, a petición de la actora, en esa instancia, fué ratificado por el demandado, el escrito de contestación de la demanda. A continuación del día de la vista, el Tribunal profirió el fallo que se examina, confirmando sin modificación el de primer grado. Dicho Tribunal considera que, aunque la señora Echeverría González acreditó plenamente, mediante los testimonios de las escrituras públicas acompañados a la demanda y las certificaciones del Registro, que el demandado fué apoderado de Abraham García Echeverría y éste dueño de la finca cuyo precio de venta es motivo de la presente acción, "no probó como era su deber, que el demandado haya recibido y que por consiguiente estuviera obligado a devolver la suma demandada, porque aún cuando durante la dilación probatoria declararon Justa Espinoza Monteros y Julia de Jesús Arévalo, sus dichos sólo se refieren a que cuando el demandado tuvo en venta el raíz propiedad de Abraham García Echeverría, pedía como precio del mismo la cantidad de mil doscientos quetzales, sin que les conste nada de las operaciones realizadas... Al contestar la demanda, el señor Agui-

re García se limitó a negarla indicando que no es cierto que a su exmandante le correspondan, los derechos exclusivos de propiedad sobre el raíz, que fué él quien por abonos pagó los lotes sin confesar haber recibido por cuenta de García Echeverría cantidad alguna, circunstancia por la cual aunque en esta Cámara fué tenido por ratificado el escrito de contestación, de él ninguna prueba de la acción se deriva; pero siendo una de las obligaciones que la ley impone al mandatario rendir cuentas de la administración, deben dejarse a salvo los derechos del mandante para exigir en la forma legal que su ex-apoderado le rinda cuentas”.

Contra este fallo y con auxilio del Abogado Carlos Klussmann, Victoria Echeverría González introdujo recurso de casación por violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley “y porque en la apreciación de las pruebas ha habido error de derecho y error de hecho”. Invoca como casos de procedencia los contenidos en los incisos 1° y 3° del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil; y como violados los artículos 277, 278 incisos 1° y 2°, 282, 259, 269 inciso 7°, 386, 388, 369 primera y segunda parte, 362 y 427 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil; 1076 primera y segunda partes, 1081, 1082 primera, segunda y tercera partes, 1085, 1089, 1092 incisos 1° y 2° y 1096 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932; 2198 1ª y 2ª partes, del Código Civil de 1877; y 5ª primera parte y 419 inciso 5° del Código Penal. Argumenta la recurrente que la Sala cometió “error de hecho y de derecho” al no hacer mérito de los seis documentos de prueba auténticos y públicos que adjuntó a su demanda, con los cuales se estableció: que el demandado ejerció poder de García Echeverría; que éste compró la finca vendida por el primero como se ha identificado en autos; que el mismo demandado recibió dinero a mutuo con hipoteca de la finca mencionada; y que en el Registro de Inmuebles aparecen debidamente asentadas las operaciones de que dicho inmueble fué objeto. Más adelante y al referirse a otras certificaciones del Registro dice: “...con ello se han infringido las mismas leyes que he citado anteriormente y que ruego se tengan transcritas literalmente en este lugar; y señalo como los documentos auténticos en los que se ha incurrido en los dos errores de hecho y de derecho dichas dos certificaciones extendidas por el Registrador General de Inmuebles... Otro error de hecho y de derecho que pongo de manifiesto es, que como parte actora y en representación de mi hijo el señor Echeverría González, propuse la información testimonial de las señoras Justa Espinoza Mon-

teros y Julia de Jesús Arévalo, para demostrar... El hecho o diligencia auténtica que dió motivo a incurrirse en tales errores de hecho y derecho, son tales deposiciones de las dos testigos antes mencionadas...”. Agrega que también se cometió “errores de hecho y derecho”, al no tomarse en cuenta la confesión que aparece del escrito de contestación a la demanda, ratificado por el demandado, que prueba en su contra.

El día de la vista la recurrente alegó lo que estimó del caso para fundamentar su recurso, repitiendo más o menos en igual forma las razones de su escrito inicial; únicamente difiere cuando dice: “EL ERROR DE HECHO cometido por la Sala sentenciadora, afirmó que consiste en que sin respaldo legal en ninguna disposición doctrinaria y con infracción manifiesta de leyes que más adelante detallaré, no le concedió ningún valor a las CERTIFICACIONES extendidas por el Registrador General de la República marcadas en los antecedentes de Primera Instancia como anexos numerados “CINCO” y “SEIS” respectivamente, y cuyos documentos auténticos extendidos con todos los requisitos del caso llevan fechas DOS y ONCE DE FEBRERO del año de mil novecientos cincuenta y cuatro...”

—I—

CONSIDERANDO:

El caso de procedencia contenido en el inciso 3° del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, el cual debe, por razones técnicas, examinarse en primer lugar, se refiere a cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos, que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador.

Dentro de tal caso, según puede advertirse de la parte expositiva, la recurrente se extendió en apreciaciones acerca del contenido y mérito de las pruebas rendidas, atribuyendo el Tribunal sentenciador “error de derecho y de hecho” en la apreciación de las mismas; y, al ampliar sus razonamientos en el alegato presentado con ocasión de la vista, dice que es “error de hecho” el cometido por la Sala al no conceder valor a las certificaciones del Registro de Inmuebles que señala.

En repetidos pronunciamientos esta Corte ha declarado que, para hacer posible el examen de las pruebas que se denuncian como estimadas

con alguno de aquellos vicios, es imprescindible identificar la naturaleza propia del error acusado, pues siendo distintos los elementos que originalmente orientan el estudio respectivo para establecer la concurrencia del error de derecho o del de hecho, al faltar tal requisito se carece de fundamento lógico que lleve a conclusiones precisas.

Analizando el planteamiento que a este respecto se hizo en el escrito de sometimiento, la interponente incurre en el defecto apuntado, es decir, no distingue el error que atribuye a la Sala, sino que conjuntamente le impugna "error de derecho y de hecho". Y en cuanto al alegato presentado el día de la vista, con manifiesta equivocación señala como "error de hecho" la apreciación de las pruebas consistentes en certificaciones del Registro de Inmuebles, lo que evidentemente, dada la propia argumentación de la recurrente, constituiría error de derecho, pues el vicio denunciado se circunscribe a que el Tribunal sentenciador no concedió a tales atestados el valor jurídico que la interesada pretende. En esa virtud, existiendo una imposibilidad de orden técnico para examinar el fondo de la cuestión planteada de acuerdo con este caso de procedencia, el Tribunal de Casación se abstiene del conocimiento de los preceptos legales que se dicen violados, por tal motivo, en relación de las pruebas de mérito.

—II—

CONSIDERANDO:

El otro caso de procedencia, contemplado en el inciso 1º del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, se contrae a "cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley".

Respecto a este caso la recurrente omite concretar lo relativo a violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley tomando como puntos de referencia los hechos que el Tribunal sentenciador ha declarado probados, como correspondía a tal aspecto del sometimiento, ya que las violaciones de ley que señala las hace derivar exclusiva y directamente de los errores en la apreciación de las pruebas que antes fueron estimados; pero además cabe observar que, para declarar la absolución del demandado, la Sala resume sus conclusiones en que la actora "no probó como era su deber" los extremos de su acción, lo que evidencia que dicho pronunciamiento sólo podría estudiarse en casación mediante un nuevo examen de las pruebas que la interesada pretendía y que no pros-

peró debido a las razones que se dieron, motivo que induce a afirmar que aún en el supuesto de haberse presentado en forma correcta, sería inoperante este caso de procedencia por sí solo.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que prescriben los artículos 222, 223 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, DESESTIMA el presente recurso y condena a la recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales, la cual conmutará con quince días de prisión simple en caso de insolvencia. Notifíquese, repóngase el papel empleado y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Ministro de Hacienda y Crédito Público contra resolución del Tribunal de lo Contencioso en recurso de "Industria Licorera Guatemalteca, Sociedad Anónima".

DOCTRINA: *La calidad de técnico en cualquier ciencia o arte, no excluye que a quien tenga tal condición se le estime como empleado de una empresa si sus conocimientos se han puesto al servicio de la misma mediante contrato para tiempo determinado. De consiguientes le son aplicables las limitaciones establecidas en el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2341, en cuanto a los sueldos deducibles para el pago del impuesto sobre utilidades.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintinueve de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus antecedentes se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha catorcé de Abril del año en curso, en el recurso de esa naturaleza interpuesto por Carlos Gutiérrez Custodio, Gerente y apoderado de "Industria Licorera Guatemalteca, Sociedad

Anónima", contra el Acuerdo número doce (12), de veinticinco de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

RESULTA:

El dieciocho de Diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, se presentó a la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades la declaración de utilidades de la empresa mencionada, por el período imponible comprendido del primero de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno al treinta de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, fijando como sujeta a impuesto la cantidad de quinientos un mil trescientos dieciocho quetzales y treinta y siete centavos (Q.501,318.37). El veintitrés del propio mes citado, dicha empresa compareció nuevamente exponiendo: que por una omisión involuntaria de máquina, no se había incluido en la declaración la cifra de diez mil ochocientos quetzales como "ganancias no afectas", por lo que nuevamente acompañaba, en duplicado, declaración de utilidades debidamente corregida, rogando que se le extendiera la orden de cobro correspondiente a la utilidad afecta que quedaba ratificada en la cantidad de cuatrocientos noventa mil quinientos dieciocho quetzales y treinta y siete centavos (Q.490,518.37).

Nombrado el Auditor de la Contraloría Arnoldo Flores Girón, para verificar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, al rendir su informe manifiesta: que estando correctamente llevadas las cuentas según se ve de los detalles de la revisión, se formulan los ajustes consignados en la "nota de gastos no reconocidos", así: exceso de sueldos pagados al doctor Murray, Eade Othmer, Técnico de la empresa, doce meses a razón de mil quetzales mensuales, seis mil quetzales; la cantidad de cinco mil quinientos veintidós quetzales, a cargo de Humberto B. Rodríguez, que figura en el grupo de "Cuentas Incobrables", porque no proviene de productos vendidos al crédito sino de una estafa sufrida en la contratación de compra de panela; y los gastos de viaje cobrados por el señor José Cofiño, según las partidas de caja que se detallan, que suman quinientos ochenta quetzales, en vista de no existir comprobantes anexos.

Al darse audiencia a la empresa para que manifestara su conformidad o inconvincencia con tales reparos, se opuso en cuanto a los dos primeros y dijo aceptar el tercero por ser legal. Con respecto al reparo que se refiere a los sueldos del doctor Othmer, alega que el men-

cionado señor "funge" como técnico de la empresa según contrato aprobado por los Ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores; que no ocupa ningún cargo administrativo y que, por consiguiente, estando dentro de la ley la empresa, el reparo no se justifica. En relación al otro reparo por la cantidad que figura a cargo de Humberto Rodríguez, manifiesta que, habiendo tenido a la vista el señor Auditor toda la documentación para poder afirmar que se trata de una estafa a la empresa, y cerrado legalmente el camino para la misma ya que los autores del hecho están cubiertos por la amnistía decretada por el Congreso, tampoco se justifica este reparo.

RESULTA:

Con fecha veinticinco de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades aprobó el informe del Auditor mencionado, formulada en la forma siguiente: "Utilidad declarada por la Empresa... Q.490,518.37. Más: Ajustes efectuados en la revisión... Q.12,102.00. UTILIDAD SUJETA A IMPUESTO:... Q.502,620.26. IMPUESTO: Sobre Q.502,620.37, escala del Dto. 204:... Q.183,584.26. Menos Impuesto pagado según comprobantes números 476258, 803121 y 800226:... "178,380.40. IMPUESTO PENDIENTE DE COBRO:... Q.5,203.86". A la vez, manda librar orden de pago por esta última cantidad.

Interpuesto recurso de revocatoria por "Industria Licorera Guatemalteca, S. A.", se elevó el expediente, con informe de la Contraloría, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este Despacho mandó oír al Ministerio Público y al Departamento de Estudios Hacendarios y Consejo Tributario. El Ministerio Público pidió que, por estar conforme a derecho, se confirmara la resolución recurrida; en la misma forma manifestó opinión el Departamento de Estudios Hacendarios.

Por medio de la resolución número cero tres mil trescientos sesenta y siete. (03367), de fecha veintidós de Abril del año próximo pasado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público declaró sin lugar el recurso de revocatoria aludido y confirmó el Acuerdo número doce, de veinticinco de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, emitido por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades.

RESULTA:

Por medio de su apoderado Gutiérrez Custodio, la empresa introdujo recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de la Contraloría a que antes se hizo referencia. Repi-

tiendo las razones ya relacionadas para demostrar lo injustificado de los reparos hechos a la empresa, por motivo de los sueldos devengados por el doctor Othmer y la cantidad de cinco mil quinientos veintidós quetzales que aparece a cargo de Humberto B. Rodríguez, pide: que se le tenga como apoderado legal de la empresa; que se le devuelva el poder dejándolo certificado en autos, así como el comprobante que acompaña; que se ordene al Ministerio de Hacienda que envíe al Tribunal las diligencias respectivas; y que se dicte providencia mandando oír por nueve días a la autoridad contra la cual se interpone el recurso y al Ministerio Público.

Habiendo contestado la audiencia que se le concedió únicamente el Ministerio de Hacienda y no así el Ministerio Público, pidió que se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo e interpuso la excepción perentoria de falta de derecho. Abierto el recurso a prueba por el término de quince días, fueron rendidas por la parte recurrente las siguientes: a) certificación del "Por Tanto", de la sentencia de tres de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictada por el propio Tribunal; b) carta del Licenciado Julio César Méndez Montenegro dirigida a la empresa actora; c) informe del Contador y Auditor Público Gustavo Mirón Porras.

Previo señalamiento de día para la vista, el Tribunal dictó la sentencia que se examina, declarando: "Este Tribunal REVOCA los dos primeros reparos a que se hace referencia, en los considerandos, y, en los demás confirma el acta número doce de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, de fecha veinticinco de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos, fundándose en los artículos 40, 41 y 50 del Decreto Gubernativo 1881; 227, 232 del Decreto Gubernativo número 1862; y 27, 92 y 93 inciso 7° del Decreto Legislativo número 2009". Considera el Tribunal que, siendo que el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, limita el mayor sueldo, salario o emolumento de cualquier clase, en quinientos quetzales, para los mandatarios o apoderados, Gerente, Administradores o empleados, los cuales se estimarán como gastos deducibles, para aplicar rectamente esta ley es preciso establecer si un técnico se encuentra comprendido en la categoría de empleado; que como la ley no consigna nada al respecto, hay que recurrir al artículo XII del Decreto Gubernativo 1862, que dice que las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, de acuerdo con el Diccionario de la Academia Es-

pañola, que dice: "Técnico: perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias o artes. Aplicase en particular a las palabras o expresiones empleadas exclusivamente, o con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio, etc. El que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte"; que por otra parte, la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto del Congreso 131, al referirse en su inciso 8° al personal docente universitario expresamente dice: "Se exceptúa de las disposiciones anteriores, los catedráticos especializados, técnicos, extranjeros, contratados por la Universidad o por el Gobierno de la República". Que estableciéndose de lo anterior que un técnico no es un empleado y, en consecuencia, no se le puede aplicar la disposición citada, procede dejar sin efecto el reparo de que se ha hecho mérito. "Que las cuentas consideradas como incobrables al final del ejercicio, podrán ser tomadas como gastos deducibles, siempre que no se encuentren prescritas y que además se compruebe la insolvencia del deudor ante los Inspectores de la Contraloría. Que el mismo Auditor 22, don Arnoldo Flores Girón, se encarga de establecer en su reparo de "Cuentas Incobrables" por los cinco mil quinientos veintidós quetzales del señor Humberto B. Rodríguez: "Esta cuenta no proviene de productos vendidos al crédito, sino de una estafa sufrida en la contratación de compra de panela" por lo que basta el origen de esta disminución de capital, para comprender que está completamente perdido, máxime que el procesado no fué capturado y por otra parte existe la ley de amnistía..." "Que la excepción de falta de derecho interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no la probó..., por una parte y, por la otra lo afirmado por el mencionado Despacho, "de que no habiéndose recurrido contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, número tres mil trescientos sesenta y siete (3367), de fecha veintidós de Abril del año próximo pasado, la resolución debe mantenerse firme puesto que no es objeto de la contienda y el término para impugnarla en la vía contencioso administrativa, o sea de tres meses, ya venció con exceso", no es exacta, porque al confirmar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Acuerdo número doce (12) de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, desde el momento en que quedó firme la resolución citada, ésta es la única que causa estado y contra ella podía interponerse el presente recurso como lo hizo la parte interesada".

Pedida aclaración del fallo, fué resuelta sin lugar.

Contra tal pronunciamiento y auxiliado por el Abogado Arturo Aroch, el Ministro de Hacienda y Crédito Público introdujo recurso de casación por violación e interpretación errónea de la ley y porque el fallo contiene resoluciones contradictorias; lo fundamenta en lo dispuesto por los incisos 1° y 4° del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, reformado por el 2° del Decreto 388 del Congreso y cita como violado e indebidamente interpretado el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, y como infringido el artículo 3° del Código de Trabajo. Como razones del sometimiento del recurrente expresa que estima violado el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, porque el Tribunal sentenciador al examinar en su fallo el ajuste relacionado con el sueldo mensual asignado por la empresa al técnico Murray E. Othmer, considera la limitación que dicho precepto establece en cuanto a los sueldos, salarios o emolumentos de cualquier otra clase en la cantidad de quinientos quetzales, cuando el capital en giro exceda de ochenta mil quetzales, para mandatarios o apoderados, Gerente, Administradores o empleados, no es aplicable a quienes como el doctor Othmer tienen la calidad de técnicos. Que “la conclusión absoluta a que llega el Tribunal de lo Contencioso Administrativo... lo hizo incurrir en la palmaria violación del artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, porque aún cuando es cierto que un técnico, en términos generales, no es un empleado, existen circunstancias especiales en que los técnicos, sin dejar de ser tales, actúan como empleados cuando prestan sus servicios intelectuales o científicos en forma continuada y mediante un sueldo periódico determinado, como es el caso clarísimo del doctor Murray E. Othmer, quien prestó sus servicios especializados a la “Industria Licorera Guatemalteca, S. A.”, en virtud de contrato y mediante un sueldo mensual de mil quetzales, sueldo que está más allá del límite máximo permitido por el artículo 72 citado, límite que es de quinientos quetzales, por lo que el reparo hecho por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades es perfectamente legal...” Agrega que el artículo 8° del Decreto 131 del Congreso (ya derogado y substituído por el Decreto 325 del mismo Organismo), en que el Tribunal pretende también apoyarse, ninguna relación lógica tiene con el asunto discutido, debiendo haber tenido en cuenta más bien el artículo 3° del Código de Trabajo que literalmente dice: “Trabajador es toda persona individual que presta a otra sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo”; que “intelectual” según el Dicciona-

rio de la Academia Española, significa “dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y letras”, de donde se deduce que un intelectual es un técnico en la ciencia a que se dedique y que, por consiguiente, puede ser también de acuerdo con nuestras leyes, un trabajador o “empleado” en la acepción aceptada por el artículo 72 mencionado. Dice por último: “Interpongo también el presente recurso, porque conteniendo el fallo... resoluciones contradictorias, fué denegado el recurso de aclaración. En efecto: en el último considerando del mismo, al desestimar la excepción perentoria de falta de derecho en el recurrente, interpuesta por este Ministerio se dice: “...al confirmar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Acuerdo número doce (12) de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, desde el momento en que quedó firme la resolución citada, ésta es la única que causa estado y contra ella podía interponerse el presente recurso, como lo hizo la parte interesada”. Hay contradicción y ambigüedad en el considerando de mérito porque no se sabe con claridad cuál es la resolución que quedó firme, si la ministerial o la contenida en el Acuerdo número 12 de la Contraloría, pues se indica al final que la que causó estado quedó firme pero se ignora a cuál de las dos resoluciones indicadas se refiere el Tribunal sentenciador...” Al final de su escrito, el recurrente repite que se funda en los artículos 505, 506 incisos 1° y 4°, 511, 512 y 513 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil.

—I—

CONSIDERANDO:

Uno de los casos de impugnación, que lógicamente debe tratarse en primer lugar, es el relativo a las resoluciones contradictorias que dice el recurrente que contiene el fallo, basando su afirmación en que el Tribunal sentenciador desestimó la excepción perentoria de falta de derecho en la empresa, interpuesta por el Ministerio de Hacienda, porque “al confirmar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Acuerdo número doce (12) de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, desde el momento que quedó firme la resolución citada, ésta es la única que causa estado y contra ella podía interponerse el presente recurso, como lo hizo la parte interesada”; lo que implica contradicción y ambigüedad ya que no se sabe con claridad cuál es la resolución que quedó firme, si la ministerial o la contenida en el Acuerdo número doce de la Contraloría.

Acerca del particular el recurrente señaló en forma correcta el caso de procedencia conteni-

do en el inciso 4° del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, habiendo cumplido también con pedir aclaración en su oportunidad, que le fué denegada. Sin embargo, si por la naturaleza propia del recurso de casación es requisito indispensable señalar los preceptos legales que han sido infringidos a juicio del recurrente, luego que el examen de los mismos es materia esencial para derivar las conclusiones jurídicas consiguientes, cabe la observación de que el recurrente omitió cumplirlo en este caso. En tal virtud, por la razón apuntada, esta Corte está en imposibilidad de estudiar este motivo del sometimiento. Artículo 512 del Decreto Legislativo 2009.

—II—

CONSIDERANDO:

El otro aspecto del sometimiento se refiere a denunciar la violación de los artículos 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, y el 3° del Código de Trabajo, que la hace consistir el recurrente en la consideración del Tribunal sentenciador —errónea a su juicio— de que los sueldos devengados por el doctor Murray E. Othmer en su carácter de técnico al servicio de "Industria Licorera Guatemalteca, S. A.", no quedan sujetos al límite de quinientos quetzales fijado por aquel precepto, ya que por su calidad de técnico no entra en la denominación de los cargos enumerados en el propio artículo tales como mandatarios o apoderados, Gerente, Administradores o empleados. Que por el contrario —alega el interponente— dada la forma y condiciones en que el doctor Othmer dependía de la empresa mediante contrato, prestando sus servicios especializados a la misma, es sencillamente un empleado que queda comprendido en las regulaciones del artículo 72 y asimismo bajo la estimación de "trabajador" de la manera que lo define el artículo 3° del Código de Trabajo.

Examinando ambas tesis opuestas debe admitirse que, en realidad, el solo hecho de poseer una especialización en cualquier ciencia o arte, es decir, haber obtenido la calificación de "técnico", no es razón suficiente para creer que tal condición sea incompatible con la denominación de "empleado", cuando el técnico pone sus conocimientos al servicio de una persona o empresa en determinadas circunstancias. El haber logrado una superación científica o artística por medio de la dedicación o el estudio, lo cual viene a constituir una condición personal de naturaleza permanente, no signifi-

ca en manera alguna que el que la posee no pueda convertirse en un empleado si, como es frecuente, aplica sus conocimientos en beneficio de un tercero (persona o empresa), bajo su dependencia y con las demás características que informan aquella categoría. Y, siendo así, ya que en el caso presente el doctor Othmer, con un contrato por tiempo determinado, laborando bajo la dependencia directa de la empresa en servicio de la cual prestaba sus conocimientos de especialización y percibiendo un sueldo mensual de mil quetzales, se cumplen precisamente las exigencias para considerarlo empleado de la empresa aludida, aún cuando no llenara exactamente las calidades de "trabajador" que define el artículo 3° del Código de Trabajo; por lo que al estimar el Tribunal sentenciador cosa contraria ha interpretado erróneamente y violado en consecuencia el artículo 72 denunciado por el recurrente, en cuyo caso procede casar el fallo en cuanto al punto de mérito, dictando la resolución que corresponde.

—III—

CONSIDERANDO:

El artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, asienta que "los sueldos, salarios o emolumentos de cualquier otra clase, devengados por los mandatarios o apoderados, Gerentes, Administradores o empleados, se estimarán como gastos deducibles, siempre que se hallen en proporción cuantitativa y cualitativa con las necesidades de la empresa: que, además, los sueldos o salarios sean similares a los que pagan otras empresas semejantes para la misma clase de trabajo y que, por ningún motivo excedan de las cantidades aceptadas legalmente como deducibles para los socios y dueños". Ahora bien, siendo que de acuerdo con la escala que el propio precepto establece, cuando la empresa tiene un capital en giro mayor de ochenta mil quetzales, como sucede en este caso, los sueldos o salarios para aquellos cargos son deducibles únicamente hasta quinientos quetzales, en cuanto al doctor Othmer, catalogado como empleado de "Industria Licorera Guatemalteca, S. A.", tal como se ha expresado, debe aplicarse la limitación mencionada, en la liquidación de los impuestos fiscales sobre utilidades del período impositivo de que se trata. En consecuencia, procede mantener el reparo que con ese motivo aprobó la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que prescriben los artículos 13, 222, 223 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 518 y 524 del Decreto Legislativo 2009, al declarar procedente el presente recurso, REVOCA la sentencia recurrida en cuanto al punto que se contrae a los sueldos del doctor Murray E. Othmer, y resolviendo en la forma que corresponde confirma en ese aspecto el Acuerdo número doce, de fecha veinticinco de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, dictado por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — M. Alvarez Lobos. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

Ministro de Hacienda y Crédito Público contra una resolución del Tribunal de lo Contencioso en juicio de "Industria Licorera Guatemalteca, Sociedad Anónima".

DOCTRINA: *Es aplicable a los técnicos que prestan servicios de su especialización en una empresa, el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, en cuanto se refiere a no estimar como deducibles para el pago del impuesto sobre utilidades, las cantidades que excedan del límite fijado en tal precepto como sueldo para los empleados.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintinueve de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha tres de Noviembre del año próximo pasado, en el recurso de esa naturaleza interpuesto por "Industria Licorera Guatemalteca, Sociedad Anónima", contra la resolución número siete mil novecientos sesenta y tres dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el diecisiete de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos. De los antecedentes,

RESULTA:

El primero de Diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, "Industria Licorera Guatemalteca, S. A." presentó su declaración jurada correspondiente al ejercicio comprendido entre el primero de Octubre de mil novecientos cuarenta y seis al treinta de Septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho, señalando como utilidad sujeta a impuesto la cantidad de quinientos veinte mil setecientos cuarenta y un quetzales y cincuenta y cinco centavos de quetzal (Q.520,741.55).

Nombrado el Auditor Jorge García Aguilar para verificar el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio mencionado, rindió informe de la manera siguiente: "Utilidades declaradas por la empresa... Q.520,741.55. Más: Ajustes conforme notas de Gastos no Reconocidos... Q.18,329.13. Ajuste conforme su providencia N° 732: Depreciación que se había aceptado s/Maquinaria en desuso (25%)... 1,568.30. 15% aceptable de conformidad con la ley... 940.98... 627.32. Suma:... Q.18,956.45. Menos: Por error se ajustó, como participación en las utilidades la suma de Q.13,413.48. Cuando la empresa únicamente afectó su utilidad imponible con la suma de 10,800.00. 2,613.48. 16,342.97. Utilidad afecta al impuesto... Q.537,084.52. Impuesto sobre la utilidad determinada... Q.198,403.84. Menos impuesto pagado conforme Rebo. N° 365, 112... 191,376.37. Impuesto pendiente de cobro... 7,027.47". Aprobado el informe anterior por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, con fecha cinco de Mayo de mil novecientos cincuenta, se ordenó librar orden de cobro adicional por la cantidad de siete mil veintisiete quetzales cuarenta y siete centavos.

Manifestando su inconformidad con los ajustes practicados en la revisión de mérito, la empresa interpuso recurso de revisión que no fué tramitado por extemporáneo. Entre las razones aducidas para oponerse, dice que el ajuste que se refiere el sueldo de mil quetzales mensuales del técnico Ingeniero Químico Industrial señor Murray Eade Othmer no es correcto; que dicho señor especializado en la industria a que se dedica la empresa, fué traído y contratado por tres años, con la asignación ya dicha, la cual no estiman excesiva si se toma en cuenta el reducido número de técnicos disponibles en tal especialidad, así como los emolumentos que el Estado y las Instituciones autónomas han pagado a los que han contratado. Asimismo hace otras consideraciones en relación a los otros reparos.

Interpuesto recurso de revocatoria contra la resolución de mérito, se elevaron con informe los antecedentes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Oído el Ministerio Público pidió que se enmendara el procedimiento desde la providencia que aprobó la liquidación, en vista de no haberse dado oportunidad de defensa a la empresa, y habiendo resuelto así el Ministerio de Hacienda, fué devuelto el expediente a la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades. Esta oficina concedió audiencia por el término de tres días a la empresa, quien interpuso nuevamente recurso de revocatoria, mandándose elevar las diligencias acompañadas del informe respectivo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Oídos por su orden el Ministerio Público y el Departamento de Asuntos Tributarios, manifestó el primero su acuerdo con la liquidación practicada y pidió su confirmación; y el segundo, dijo en conclusión: "Con base en las consideraciones anteriores, este Departamento opina que debe confirmarse la resolución contenida en el Acuerdo N° 75 de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades de las Empresas Lucrativas, con fecha 17 de Diciembre del año próximo pasado, pero rebajando la base impositiva de Q.627.32, por las razones que expone la misma Contraloría en su informe número 25, así como el reparo 4° por Q.10,800.00". A continuación el Ministerio de Hacienda, con fecha diecisiete de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando lo resuelto por la Contraloría.

RESULTA:

Federico Rölz Bennett, actuando como Presidente de "Industria Licorera Guatemalteca, S. A.", compareció ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en recurso contra la resolución del Ministerio de Hacienda de que se ha hecho mérito. Alega que "La empresa no está conforme con los reparos hechos por la Contraloría. Los honorarios de los Directores han sido autorizados por la Junta General de Accionistas, y además a la hora de hacer las deducciones respectivas para estimar la cantidad de ganancias sujetas a impuesto, la Empresa ha observado meticulosamente los mandatos legales con respecto al máximo de salarios que pueden devengarse como gasto deducible"... Pide en definitiva que, después de estudiar las actuaciones y con base en las pruebas, se dicte sentencia absolviendo a la empresa que representa.

Sin que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público hicieran uso de las audiencias que se les concedieron, se abrió a prueba el recurso por el término de quince días. Durante tal término únicamente el recurrente pidió que se tuvieran como pruebas de su parte: a) el informe rendido por el Departamento de Asuntos Tributarios del Ministerio de Hacienda, de fecha veintiséis de Agosto de mil novecientos cincuenta y dos; y b) la certificación de la sentencia dictada por el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veinticuatro de Abril de mil novecientos cincuenta, obrante en el expediente. Posteriormente se presentó el Licenciado Carlos Díaz Durán Olivero, como apoderado de la empresa recurrente, pidiendo se reconociera su personería y se señalara día para la vista, lo cual fué resuelto de conformidad con lo pedido.

Con los antecedentes relacionados, el Tribunal dictó la sentencia que motiva el presente recurso, declarando textualmente: "REVOCA la resolución número 7963 dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el diecisiete de Septiembre de 1952, en la cual declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución N° 75 de la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, en los reparos de que se hace referencia en los considerandos de esta sentencia y la confirma en lo demás". Para resolver en tal forma el Tribunal estima: "Que si bien, el artículo 72 del Decreto Gubernativo número 2191 reformado por el Decreto Gubernativo N° 2341, limita el mayor sueldo en quinientos quetzales, cuando el capital en giro exceda de ochenta mil quetzales, como en el presente caso; esta limitación se refiere expresamente a los sueldos, salarios o emolumentos de cualquier otra clase, devengados por los mandatarios o apoderados, Gerente, Administradores o empleados, los cuales se estimarán como gastos deducibles, siempre que se hallen en proporción cuantitativa y cualitativa con las necesidades de la empresa; que, además, los sueldos o salarios sean similares a los que pagan otras empresas semejantes para la misma clase de trabajo y que por ningún motivo excedan de las cantidades aceptadas como deducibles para los socios y condueños. Que para aplicar rectamente esta ley, hay que establecer si un técnico se encuentra comprendido en la categoría de empleado y por lo tanto comprendido en esta disposición legal, y como la ley no establece nada a este respecto, hay que recurrir a lo ordenado por el Artículo XII de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, Decreto Gubernativo N° 1862, que dice las palabras de la ley se entenderán

en su sentido natural y obvio, de acuerdo con el Diccionario de la Academia Española, el cual dice: "Técnico: perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias o artes. Aplicase en particular a las palabras o expresiones empleadas exclusivamente, o con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio, etc. El que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte". Que por otra parte, la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto del Congreso N° 131, en su artículo 8° al referirse al personal docente universitario, expresamente dice, en el párrafo segundo del citado artículo: Se exceptúan de la disposición anterior, los catedráticos especializados, o técnicos extranjeros, contratados por la Universidad o por el Gobierno de la República". Con lo que a juicio de este Tribunal se establece que un técnico no es un empleado y, en consecuencia, no se le puede aplicar la disposición citada, procediendo, en consecuencia, dejar sin efecto el reparo de que se ha hecho mérito"... "Que el reparo sobre amortización y depreciación en el cual se verificó el ajuste adicional de seiscientos veintisiete quetzales, treinta y dos centavos por órdenes del entonces Jefe de la Contraloría, del veinticinco por ciento sí se ajusta a la ley, pero solamente sobre la parte de la maquinaria no depreciada, con cuya rebaja se debe aprobar el reparo referido..." "Que, en cuanto al reparo por lo que hace a los honorarios asignados y cobrados por la Junta Directiva de "Industria Licorera Guatemalteca, S. A." se halla probado en autos que han sido fijados de acuerdo con los estatutos de dicha sociedad; y como el Consejo Técnico de Hacienda fué de parecer que sí se demostraba tal circunstancia, procedía declarar la deducibilidad de los mismos, así debe declararse; que a mayor abundamiento, también se halla probado, con la certificación de la sentencia, que se acompaña, dictada por este Tribunal el veinticuatro de Abril de mil novecientos cincuenta, que la Junta Directiva devengará honorarios cuando así lo acuerde la Junta General de Accionistas, debiendo ser deducible esa inversión de fondos por tratarse de un gasto ordinario y necesario para obtener un servicio indispensable para el sometimiento y explotación del negocio; por lo que es procedente dejar sin efecto este reparo".

Contra este pronunciamiento y con el auxilio del Abogado José Vicente Rodríguez, el Ministro de Hacienda interpuso recurso de casación por violación e interpretación errónea de la ley. Cita como violado e indebidamente interpretado el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, y

violado el 3° del Código de Trabajo; y dice fundarse en los artículos 505, 506 inciso primero, 511, 512 y 513 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y en el Decreto número 60 de la Junta de Gobierno.

Argumenta el recurrente, que la violación denunciada surge de que el Tribunal sentenciador, al examinar en su fallo el ajuste relacionado con el sueldo de mil quetzales mensuales que se asignó por la empresa al técnico Murray E. Othmer, después de la consideración respectiva llega a la conclusión de que dicho señor por su calidad de técnico no es un empleado, y a quien, por ende, no se le puede aplicar la disposición legal citada, procediendo así dejar sin efecto el reparo que a tal aspecto se refiere. Y agrega: "La conclusión —errónea por absoluta— a que llega el Tribunal de lo Contencioso Administrativo... lo hizo incurrir en la palmaria violación del artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, porque aún cuando es cierto que un técnico, en términos generales, no es un empleado, existen circunstancias especiales en que los técnicos, sin dejar de ser tales, actúan como empleados cuando prestan sus servicios intelectuales o científicos en forma continuada y mediante un sueldo periódico determinado, como es el caso clarísimo del doctor Murray E. Othmer, quien prestó sus servicios de especialización a la "Industria Licorera Guatemalteca, Sociedad Anónima", en virtud de contrato y mediante un sueldo mensual de mil quetzales, sueldo que está más allá del límite máximo permitido por el artículo 72 citado, límite que es de quinientos quetzales, por lo que el reparo hecho por la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades es perfectamente legal. Si, como está demostrado, el señor Murray E. Othmer era, además de técnico, un verdadero empleado de la empresa mencionada, se encuentra incluido su caso en las estipulaciones del último párrafo del artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191... Al no estimarlo así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo violó e interpretó erróneamente el párrafo transcrito, lo que supone, al mismo tiempo, violación de los párrafos primero y segundo del mismo artículo 72, con su reforma, ya mencionada. Para poner más de relieve la errónea interpretación de dicho artículo, quiero hacer notar que si el Tribunal sentenciador se inclinó por hacer una interpretación analógica del mismo, debió apoyarse, no en el artículo 8° del Decreto 131 del Congreso de la República, (ya derogado y substituído por el Decreto 325 del mismo Congreso) que no tiene ninguna relación lógica con el asunto discutido, sino en el artículo 3° del Código de Trabajo, que literalmente dice: "Trabajador

(nótese que el término "trabajador" que adopta este Código involucra, según sus disposiciones, a lo que se conoce comúnmente por "empleado") es toda persona individual que presta a otra sus servicios materiales, INTELECTUALES o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo"; e "intelectual", según el Diccionario de la Academia Española, significa: "dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y letras"; de donde se deduce que un intelectual es un técnico en la ciencia a que se dedique y que, por consiguiente, puede ser también, de acuerdo con nuestras leyes, un trabajador o "empleado", en la acepción aceptada por el artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, siempre que labore en las condiciones a que se refiere la definición contenida en el artículo 3° del Código de Trabajo; condiciones que encajan perfectamente en el caso del señor Murray E. Othmer, por lo que cito también este último artículo como infringido, en relación con el tantas veces mencionado artículo 72...".

—I—

CONSIDERANDO:

Circunscribiéndose el recurso al punto relativo a los sueldos devengados por el doctor Murray E. Othmer, que no obstante ser de mil quetzales por mes, el Tribunal sentenciador ha declarado que son deducibles en su totalidad para los efectos del impuesto sobre utilidades, procede analizar los alcances del artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, y el artículo 3° del Código de Trabajo, cuya violación constituye el motivo de este sometimiento.

Según el Tribunal sentenciador, el doctor Murray E. Othmer, por su calidad de técnico al servicio de la empresa —sobre lo que nada establece la ley a juicio de dicho Tribunal—, no queda comprendido en ninguna de las denominaciones usadas por el artículo 72 citado al enumerar los cargos de mandatarios o apoderados, Gerente, Administradores y empleados, como sujetos a la limitación que el mismo determina en cuanto al máximo de sueldo que se permite como deducible; y que, por consiguiente, no se justifica el reparo que bajo la estimación de que tal técnico es empleado de "Industria Licorera Guatemalteca, S. A.", se le ha formulado a ésta por el período impositivo a que estas diligencias se refieren.

De conformidad con la acepción del vocablo "técnico" que al caso se adapta, o sea "el que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte" (Diccionario de la Academia Española), debe admitirse que ello define una condición personal de índole permanente y propia

del que mediante la dedicación o el estudio ha logrado, sobre lo común, una superación científica o artística. Sin embargo, ni lógicamente ni jurídicamente, esa condición excluye que el que la posee pueda poner sus capacidades al servicio de una persona o empresa en forma continuada y directa y mediante una retribución periódica, lo cual equivale a colocarse en la categoría de empleado sin demérito alguno para su calidad de técnico.

Establecido como está que el doctor Othmer prestaba los servicios relativos a su especialización a "Industria Licorera Guatemalteca, S. A." bajo su dependencia y de acuerdo con un contrato por tres años, devengando el sueldo de mil quetzales al mes, evidentemente hace derivar una relación entre él y la empresa que lo identifica como empleado de la misma; y, en tal virtud, no es cierto —como lo afirma el Tribunal sentenciador— que la ley omita una regulación que comprenda este caso particular, pues en interpretación y aplicación correcta del artículo 72 del Decreto Gubernativo 2191, reformado por el Decreto Gubernativo 2341, estimando, como no puede ser de otro modo, que dicho técnico es un empleado dentro de la organización de la empresa, queda comprendido así en los términos del precepto citado aún cuando no cayera exactamente en la definición que de "trabajador" consigna el artículo 3° del Código de Trabajo. En consecuencia, al dar el Tribunal sentenciador una interpretación distinta al artículo 72 mencionado, dejando de aplicar al caso del doctor Othmer sus efectos fiscales, incuestionablemente ha violado este precepto, siendo así obligado casar el fallo recurrido en cuanto al punto que motiva el sometimiento y resolver lo que en derecho corresponde.

—II—

CONSIDERANDO:

Según el artículo 72 tantas veces repetido, "los sueldos, salarios o emolumentos de cualquier otra clase, devengados por los mandatarios o apoderados, Gerentes, Administradores o empleados, se estimarán como gastos deducibles, siempre que se hallen en proporción cuantitativa y cualitativa con las necesidades de la empresa; que, además, los sueldos o salarios sean similares a los que pagan otras empresas semejantes para la misma clase de trabajo y que, por ningún motivo excedan de las cantidades aceptadas legalmente como deducibles para los socios y dueños". Ahora bien, dentro de la escala establecida en el mismo precepto, se fija el límite de quinientos quetzales como sueldo deducible para aquellos que figuran con algún cargo de los enumerados, en las empre-

sas cuyo capital en giro exceda de ochenta mil quetzales; y como ese es el caso, precisamente, de "Industria Licorera Guatemalteca, S. A.", a cuyo servicio y mediante un estipendio mensual de mil quetzales dedicaba sus conocimientos especializados el doctor Murray E. Othmer, es decir, en condición de empleado, es obvio que al estimarse como deducible únicamente la cantidad límite de quinientos quetzales por mes del sueldo que percibía, el reparo que se hizo a la empresa por el exceso, se justifica plenamente. En tal virtud, al resolverse sobre el aspecto impugnado es procedente confirmar el reparo de mérito.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que prescriben los artículos 13, 222, 223 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 518 y 524 del Decreto Legislativo 2009, al declarar con lugar el presente recurso, REVOCA la sentencia recurrida en lo que respecta al punto que motivó el sometimiento, y resolviendo legalmente acerca del mismo, confirma la resolución número siete mil novecientos sesenta y tres, de fecha diecisiete de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo que se refiere al reparo hecho en los sueldos del doctor Othmer. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Alberto Argueta S. — Ante mí: Juan Fernández C.

CIVIL

Ordinario doble seguido por Josefina Burgos Buezo contra Vitalina, Francisco y Lisandra Pazos, José Rubén Pazos Cueva y Francisca Duarte viuda de Pazos.

DOCTRINA: *Los autos firmes en que se ha declarado el abandono de la primera instancia, como ponen fin al juicio y extinguen la acción deducida, producen el efecto de la cosa juzgada, cuando concurran los otros requisitos requeridos por la ley.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, treinta de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recursos extraordinarios de casación interpuestos por ambas partes, respectivamente, se examina la sentencia dictada por la Sala

Quinta de la Corte de Apelaciones, de fecha veinticinco de marzo del año en curso, en el juicio ordinario doble, seguido por JOSEFINA BURGOS BUEZO, por una parte, y JOSE RUBEN PAZOS CUEVA, VITALINA, FRANCISCO y LISANDRA PAZOS PAZOS y FRANCISCA DUARTE viuda de PAZOS, por la otra, ante el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Chiquimula, de cuyos antecedentes,

RESULTA:

Con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, compareció ante el Juez de Primera Instancia del departamento de Chiquimula, la señora Josefina Burgos Buezo en concepto de tutriz judicial de su hijo incapaz Juan Pablo Pazos Burgos, demandando en la vía ordinaria a José Rubén Pazos Cueva, por sí y como heredero testamentario de su padre don Felipe Pazos Sagastume, y en este último concepto a Francisca Duarte viuda de Pazos, Vitalina, Francisco, Lisandra y Natalia Pazos, por los siguientes hechos: que don ALFONSO PAZOS CUEVA, padre de su hijo Juan Pablo Pazos Burgos, falleció trágicamente en la Villa de Esquipulas el 26 de Agosto de mil novecientos veintiocho; que en esa fecha su citado hijo tenía únicamente tres años, seis meses y un día de edad; que el padre del fallecido señor Felipe Pazos Sagastume y abuelo de su indicado hijo, le prometió arreglar la mortual del causante para que los bienes se inscribieran a nombre del citado niño, que consistían en las fincas llamadas "San José" y "Hacienda Jupilingo" situadas en jurisdicción de Esquipulas; que el causante había adquirido por herencia de su madre, así como una cantidad de reses estimada en cien cabezas y cincuenta de ganado caballar; que el señor Pazos Sagastume ciertamente radicó el intestado de Alfonso Pazos Cueva, pero se hizo declarar su heredero, con perjuicio del mejor derecho de Juan Pablo Pazos Burgos; que por resolución del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta capital, de fecha primero de mayo de mil novecientos cuarenta, se declaró que su hijo Juan Pablo Pazos Burgos hereda en todos sus bienes, derechos y acciones a su padre Alfonso Pazos Cueva; que don Felipe Pazos Sagastume instituyó herederos testamentarios a los demandados, cuyo testamento fué declarado legal, pero entre los bienes heredados incluyó los que correspondían a Alfonso Pazos Cueva, cuyo legítimo y único heredero es su representado; que su hijo Juan Pablo Pazos Burgos desde su nacimiento padece de imbecilidad, por lo que fué declarado judicialmente en estado de interdicción y se nombró su tutriz a la presentada;

que al entablar la presente demanda "sobre preferencia en la mortual del señor Alfonso Pazos Cueva, padre de su representado, con exclusión de todos los demás parientes colaterales y ascendientes y reivindicación y posesión de los bienes pertenecientes a dicha mortual", concluyó pidiendo que en sentencia se declare: a) que Juan Pablo Pazos Burgos es heredero de mejor derecho de su padre don Alfonso Pazos Cueva y en consecuencia excluye como tal a sus acendientes y colaterales, señores José Rubén Pazos Cueva y las demás personas demandadas; b) que se mande a inscribir a favor de Juan Pablo Pazos Burgos los derechos que sobre las fincas ya mencionadas tenía don Alfonso Pazos Cueva, al momento de su muerte; c) que en consecuencia quedan anuladas (canceladas) las inscripciones números cuatro, cinco y seis que figuran sobre la finca número 442 —folio 271— libro 3° de Chiquimula y las inscripciones números seis, siete, ocho y nueve de la finca número 131 —folio 46— del libro 2° de Chiquimula; d) que Rubén Pazos Cueva y los otros demandados deben entregar dentro de tercero día al heredero legítimo de Alfonso Pazos Cueva, el ganado caballar y vacuno mencionado, o el monto de su valor actual, con sus respectivos frutos y todos los demás haberes que hayan obtenido con el producto de los mismos; y e) condenarlos en las costas judiciales en caso de oposición". Se acompañaron a la demanda los siguientes documentos: certificación del auto en que se declaró legítimo el testamento de Felipe Pazos Sagastume; certificación del auto en que se declaró heredero de Alfonso Pazos a su hijo Juan Pablo Pazos Burgos; certificación del Registro General de las inscripciones de dominio de las fincas citadas en la demanda; certificación de la partida de nacimiento de Juan Pablo Pazos Burgos, de las auténticas de las firmas y del pase de ley, por haber sido extendida por el Secretario Municipal y encargado del Registro Civil de Santa Rita de Copán, República de Honduras; certificación del auto en que se declaró el estado de interdicción de Juan Pablo Pazos Burgos y se le nombró tutriz a doña Josefina Burgos Buezo y del acta en que se discernió el cargo a ésta. La anterior demanda fue aclarada en su parte petitoria así: "a) que Juan Pablo Pazos Burgos, por su calidad de hijo, es heredero de mejor derecho y tiene preferencia en los bienes dejados por su padre señor Alfonso Pazos Cueva; b) que como consecuencia excluye de la herencia de don Alfonso Pazos Cueva al señor Felipe Pazos Sagastume y demás personas demandadas; c) que se deja sin efecto el auto dictado por este Tribunal el vein-

tisiete de junio de mil novecientos veintinueve, en el intestado de don Alfonso Pazos Cueva, por el cual se declaró que Felipe Pazos Sagastume heredaba, sin perjuicios de tercero de igual o mejor derecho, todos los bienes, derechos y acciones dejados a su muerte por don Alfonso Pazos Cueva; d) que igualmente es nula y sin efecto la asignación de la finca Jupilingo, registrada a los números ciento treinta y uno, folio cuarenta y seis, libro segundo del departamento de Chiquimula, hecha en el testamento otorgado por don Felipe Pazos Sagastume, el primero de febrero de mil novecientos veintinueve, ante los oficios del Notario don Miguel Antonio Alvarado Zúñiga, a favor de los demandados; e) que también son nulas y sin efecto las adjudicaciones de las fincas números ciento treinta y uno, folio cuarenta y seis, libro segundo y cuatrocientos cuarenta y dos, folio doscientos setenta y uno, libro tercero, ambos del departamento de Chiquimula, otorgadas por los señores Felipe Pazos Sagastume y Rubén Pazos Cueva, en instrumentos públicos con fechas veinticuatro de enero de mil novecientos treinta y cuatro y veintinueve de agosto de mil novecientos treinta y cinco, ante los oficios del Notario J. Ernesto Vásquez A.; f) que también es nulo y se deja sin efecto el auto de diecinueve de octubre de mil novecientos treinta y siete, dictado por este Juzgado, declarando legítimo el testamento mencionado de don Felipe Pazos Sagastume, en lo que se refiere a las propiedades que heredó de don Alfonso Pazos Cueva, ya que por Ministerio de la Ley, tales bienes correspondían a don Juan Pablo Pazos Burgos, como único y universal heredero intestado de don Alfonso Pazos Cueva; g) que deben cancelarse en el Registro de Inmuebles las inscripciones de dominio sobre las fincas números ciento treinta y uno y cuatrocientos cuarenta y dos, folios cuarenta y seis y doscientos sesenta y uno, libros segundo y tercero de Chiquimula, verificadas a favor de Felipe Pazos Sagastume y Rubén Pazos Cueva, que figuran a los números siete y ocho de la primera finca, y cinco y seis de la segunda finca mencionadas, en virtud de las nulidades anteriormente denunciadas; h) ordenar que se hagan las correspondientes inscripciones de dominio sobre las fincas números ciento treinta y uno y cuatrocientos cuarenta y dos, folio cuarenta y seis y doscientos setenta y uno, libros segundo y tercero, ambos de Chiquimula, a favor de Juan Pablo Pazos Burgos, por ser el sucesor legal del causante don Alfonso Pazos Cueva; i) que los demandados deben entregar dentro de tercero día, la posesión de las fincas reclamadas, así como los

semovientes indicados y sus crías que por acesión corresponden al demandante; y j) que las costas son a cargo de los demandados". Posteriormente la demandante desistió de la demanda en lo que respecta a la demandada Natalia Pazos Burgos, desistimiento que se aceptó.

RESULTA:

Los demandados al conferírseles audiencia de la demanda y ampliación descrita, expresaron: que Juan Pablo Burgos, no Pazos, no es hijo de Alfonso Pazos Cueva, pues no fué procreado por él ni mucho menos reconocido por éste ni tampoco por sus herederos, como consta en el acta levantada en el Registro Civil de Santa Rita de Copán, República de Honduras, con fecha treinta del mes de marzo de mil novecientos veinticinco, en la cual el empleado respectivo maliciosamente hizo constar que Alfonso Pazos compareció a dar parte de dicho nacimiento ante los testigos Rosalío Castillo y Natividad Pazos aseveración que carece de verdad porque ni el presunto progenitor del inscrito, ni las personas que aparecen como testigos, firmaron el acta de mérito, sino solamente lo hizo Guadalupe López D., en concepto de Secretario Municipal de aquella población; de manera que la firma de Alfonso Pazos, Rosalío Castillo y Natividad Paz, que están insertas en la certificación presentada por la demandante, son supuestas, porque esas personas, por no haber intervenido en el acto, no firmaron la partida de mérito, lo cual deja insubsistente la inscripción a que se ha hecho referencia; que la actora demanda la insubsistencia del auto en que se declaró heredero de Alfonso Pazos Cueva a Felipe Pazos Sagastume, sin ninguna base legal, en virtud que el primero no dejó hijos ni cónyuge, tampoco progenitora, sino solamente al segundo en concepto de padre y por esta razón era el único heredero; que lo expresado se prueba con la certificación extendida por el Secretario Municipal y Encargado del Registro Civil de Santa Rita de Copán, República de Honduras, con fecha veintitrés del mes de julio del año de mil novecientos cuarenta y uno, que es posterior a la que presentó la demandante; que la certificación del acta de nacimiento de Juan Pablo Burgos que la actora acompañó a su demanda fué extendida por José Castillo y visada por el Alcalde Eliseo Mejía, con fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos treinta y siete, a quienes la señora Burgos Buezo acusó por el delito de falsificación de documentos públicos ante los Tribunales de Honduras, habiendo sido condenado el primero a la pena de dos años, un día de reclusión menor y absuelto el segundo, conforme

sentencia firme de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara de aquella República; que lo anterior pone de relieve la farsa de que se ha valido la demandante para atribuirle a su hijo la paternidad que no le corresponde; que es la segunda vez que los demanda por los mismos hechos la señora Josefina Burgos Buezo, como tutriz legal de su hijo Juan Pablo Burgos, ya que a fines del año de mil novecientos cuarenta y dos, les entabló demanda ordinaria de nulidad del auto por el cual se declaró heredero a Felipe Pazos Sagastume de su hijo Alfonso Pazos Cueva, nulidad y cancelación de las inscripciones de dominio de las fincas rústicas mencionadas en la demanda que contestan, cuyo juicio terminó por auto firme de abandono de la instancia promovida, declarándose extinguida la acción, el cual lo inició cuando estaba en la minoría de edad su pupilo Juan Pablo Burgos y que al arribar éste a la mayoría de edad, por medio de su apoderado Max R. Argueta, promovió con fecha veintisiete de agosto de mil novecientos cuarenta y siete, otra acción ordinaria, demandándolos por los mismos hechos o sean la nulidad de los autos de declaración de herederos, de la validez del testamento otorgado por Felipe Pazos Sagastume, y de las inscripciones de las fincas que éste heredara de su hijo Alfonso Pazos Cueva, cuyo juicio también terminó por abandono de la instancia y extinción de la acción; que en consecuencia con lo manifestado, contestaban la demanda de mérito en sentido negativo, y a la vez interponían reconvencción demandando a la parte actora la nulidad del auto mediante el cual se declaró heredero de Alfonso Pazos Cueva a Juan Pablo Burgos y excepción de cosa juzgada, para que se resuelvan en la sentencia y como consecuencia lógica se les absuelva de la demanda. La reconvencción fué contestada en sentido negativo y en cuanto a la excepción expresó la demandante que era improcedente, porque la declaración del abandono de una instancia solamente tiene el efecto de dar por extinguida la acción interpuesta, pero nunca equivale al efecto de una sentencia ejecutoria, que es el elemento primordial para fundamentar la cosa juzgada. La personería de los demandados fué unificada en José Rubén Pazos Cueva. La parte contrademandante, presentó una certificación expedida por el Secretario Municipal Encargado del Registro Civil de Santa Rita Copán, República de Honduras, debidamente autenticada y la constancia de habersele dado el pase de ley, en la cual solamente aparece la firma de Guadalupe López D.; la contrademandada presentó un testimonio de testamento de Felipe Pazos, certificación de la partida de de-

función de Alfonso Pazos; certificación del auto en que se declaró legítimo el testamento de Felipe Pazos Sagastume; certificación parcial de la sentencia dictada en el proceso contra José Castillo Coello y Eliseo Mejía por el delito de falsificación de documento público, dictada por los Tribunales de Justicia de Honduras, debidamente legalizada y con el pase de ley; certificación de los testimonios de las escrituras autorizadas por el Notario Ernesto Vásquez, de que se hizo relación en la demanda.

RESULTA:

Abierto a prueba este juicio se rindieron: por la parte actora, toda la documentación mencionada en el párrafo anterior y la presentada con la demanda; certificación del Archivero de la Administración de Rentas de Chiquimula, del expediente de liquidación de la mortal de Felipe Pazos Sagastume; certificación de las diligencias seguidas para declarar a Juan Pablo Pazos Burgos, en estado de interdicción; certificación de la primera inscripción hipotecaria de la finca rústica número cuatrocientos cuarenta y dos, folio doscientos setenta y uno, del libro tercero de Chiquimula, constituida por Rubén Pazos Cueva a favor de "El Crédito Hipotecario Nacional"; certificación de la partida de nacimiento de Alfonso Pazos Cueva; Cédula de vecindad de Juan Pablo Pazos Burgos. La parte demandada presentó las siguientes: certificación completa de la sentencia de primera y segunda instancias dictadas por los correspondientes Tribunales de Justicia de la República de Honduras, en la causa seguida a José Castillo Coello y Eliseo Mejía, por el delito de falsificación de documentos públicos, con sus auténticas y pase de ley, necesarios; certificación de la demanda presentada ante el mismo Juzgado de Primera Instancia de Chiquimula, por Josefina Burgos en concepto de tutriz natural de su hijo Juan Pablo Pazos Burgos, el treinta y uno de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, contra José Rubén, Natalia, Vitalina, Lisandra, María, Francisco Pazos y Francisca Duarte viuda de Pazos, sobre nulidad del auto en que se declaró a Felipe Pazos heredero de su hijo Alfonso Pazos, la nulidad y cancelación de las inscripciones de dominio de la finca rústica número ciento treinta y uno, folio cuarenta y seis, libro dos de Chiquimula, números siete y ocho, en las cuales consta la transacción hecha por Rubén Pazos Cueva y Felipe Pazos Sagastume, por la cual éste cede los derechos que tenía en la finca número cuatrocientos cuarenta y dos, folio doscientos setenta y uno, libro tres de

Chiquimula, que heredó de su hijo Alfonso Pazos; la inscripción número nueve, en que consta que Manuel Hernández Arita compró a Felipe Pazos Sagastume una caballería y media de la finca primeramente citada, y quinta inscripción donde consta que Felipe Pazos heredó de Alfonso Pazos las fincas rústicas mencionadas; costas, daños y perjuicios. En esa misma certificación está transcrito el auto de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, en que revocó el de primer grado y declaró abandonada la primera instancia, en el juicio iniciado con la demanda de que ya se hizo mérito. Posteriormente al vencimiento del término de prueba, la demandante presentó los testimonios de las escrituras autorizadas por el Notario J. Ernesto Vásquez A. donde consta la permuta celebrada entre Felipe y Rubén Pazos de unas fincas rústicas y ampliación de la anterior, por haberse omitido los números de los folios y libro donde constaba su inscripción, así como articuló posiciones a Rubén Pazos Cueva, con resultado negativo, quien a su vez le articuló a aquélla, con el único resultado que confesó haberse acompañado del Abogado Marco Tulio Mejía Luna, cuando solicitó y le fué extendida la certificación de la partida de nacimiento de su hijo Juan Pablo, quien dictó a José Castillo dicha certificación. La parte demandada también presentó certificación de una inspección ocular practicada en la partida de nacimiento de Juan Pablo Pazos, por el Juez de Paz de Santa Rita Copán, por comisión del Juez de Letras de dicho departamento en la cual se transcribe íntegra dicha partida, apareciendo firmada únicamente por Guadalupe López D. y debidamente requisitada; certificación de la demanda presentada ante el Juez Tercero de Primera Instancia de este departamento, por Alfonso de León Cordero, en concepto de apoderado de Josefina Burgos Buezo, madre del menor Juan Pablo Pazos Burgos, contra Felipe Pazos Sagastume, sobre propiedad de la Finca rústica número ciento treinta y uno, folio cuarenta y seis, del libro segundo de Chiquimula, la devolución del dinero de la parte de dicha finca que le vendió a Manuel Hernández Arita, más los frutos que ella haya producido, y como el demandado falleció antes de contestar esta demanda, se amplió en el sentido de que también se demandaba: la cancelación en el Registro General de la Propiedad Inmueble de las inscripciones de dominio que se hicieron a favor de Felipe Pazos Sagastume; que en vista de que Juan Pablo Pazos Burgos tiene mejor derecho a los bienes de su padre Alfonso Pazos Cueva, que se inscriban a su nombre y que debía notificarse la misma a los herederos de Pa-

zos Sagastume: Rubén, Natalia, Vitalina, Lisandra, Francisco y María Pazos y Francisca Duarte viuda de Pazos. Por haberse declarado precedente la excepción de incompetencia planteada por los demandados, se remitió este expediente al Juez de Primera Instancia de Chiquimula y por auto firme de este último Tribunal, se declaró abandonada la primera instancia en este juicio; certificación extendida por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Chiquimula de la demanda presentada por Juan Pablo Pazos Burgos contra José Rubén Pazos, Vitalina Pazos de Pazos, Francisco, Natalia y Lisandra Pazos y Francisco Duarte viuda de Pazos, sobre dominio y reivindicación de las fincas rústicas número ciento treinta y uno, folio cuarenta y seis, libro once de Chiquimula llamada hacienda "Jupilingo", dos vegas llamadas "Santa Bárbara" y "La Lima", incluidas en la misma finca; la finca número cuatrocientos cuarenta y dos, folio veintisiete, libro ciento once de Chiquimula; cien cabezas de ganado vacuno y cincuenta de ganado caballar, con sus respectivas accesiones y frutos, que le pertenecían como hijo reconocido de su padre Alfonso Pazos, y que fueron involucrados en la mortual de Felipe Pazos Sagastume, quien a su vez se hizo declarar heredero universal de su hijo Alfonso Pazos e instituyó herederos a los demandados, demanda que concluyó por abandono de la primera instancia, declarado en auto firme del Juez de Primera Instancia de Chiquimula. La parte actora también presentó un testimonio debidamente requisitado de una acta notarial extendida por el Juez de Paz de Santa Rita de Copán, en función de Notario Público, en la cual se hace constar que tuvo a la vista la partida de nacimiento de Juan Pablo Pazos y que se notan algunos borrones y adulteraciones en las palabras "no" "firma". El Juez de los autos para mejor fallar ordenó que se trajeran a la vista todos los documentos mencionados en este párrafo y nombró expertos para que dictaminaran sobre los puntos propuestos por la actora, habiéndolo dictaminado como tal únicamente Tomás Chinchilla Fuentes.

RESULTA:

El veinticuatro de septiembre del año próximo pasado, se dictó la sentencia de primer grado, en la cual se declaró con lugar todos los puntos petitorios contenidos en la demanda y su ampliación, pero en virtud de haberse interpuesto recurso de apelación, conoció del caso la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, la que dictó su sentencia en la fecha indicada al

principio de este fallo, haciendo las siguientes declaraciones: I) con lugar la excepción de cosa juzgada opuesta a la demanda interpuesta por la señora Josefina Burgos Buezo y en consecuencia absueltos de la misma a los demandados; II) absuelve de la-reconvención a la citada señora Josefina Burgos Buezo, tutriz natural de su hijo Juan Pablo Pazos Burgos, de la contrademanda que le entablaron los demandados; y III) no se hace especial condenación en costas". Habiendo considerado en cuanto al primer aspecto: "Con los antecedentes relacionados, se viene en conocimiento de que la excepción de cosa juzgada opuesta a la demanda, se encuentra plenamente probada, porque los efectos jurídicos del abandono de la primera instancia son los mismos que los del desistimiento de la misma, es decir, que producen los efectos de la cosa juzgada, por cuanto que en los dos juicios relacionados al principio y que fueron abandonados y por consiguiente totalmente extinguidas las acciones intentadas, hay identidad de personas, cosas y acciones y sabido es que sobre una acción ordinaria totalmente extinguida no cabe otro juicio ordinario"; en cuanto a la reconvención estimó: "No es procedente porque esa nulidad se funda en que la partida de nacimiento de Juan Pablo no reúne los requisitos legales porque ni Alfonso Pazos Cueva ni los testigos que concurrieron al acto del reconocimiento firmaron el acta, pero si se toma en cuenta que con la certificación de esa partida de nacimiento que presentó la actora, debidamente requisitada, fué extendida con anterioridad a las presentadas por los demandados y que por ese motivo se instruyó ante los Tribunales de la República de Honduras proceso contra los responsables de la falsedad cometida en esa acta de nacimiento y que fué condenado uno solo de ellos, es indudable que basado el Juez Segundo de Primera Instancia de Guatemala en la certificación legítima del nacimiento de Juan Pablo Pazos Burgos, el auto cuya nulidad se contrademandó, está con el debido respaldo legal"; y, en cuanto al último aspecto, apreció: "que cada parte es responsable de los gastos personales y procesales que originen las diligencias que promueva y solamente se hará condenación en costas cuando concurra alguno de los casos que específicamente señala la ley; que en el caso presente no concurre ninguno de esos casos y en consecuencia no debe hacerse especial condenación en costas, siendo cada una de las partes responsable de las que causó en el juicio".

Inconformes los demandados con las declaraciones de los puntos II) y III) de la sentencia anterior, con fecha veinte de julio de este año,

interpusieron recurso de casación en los siguientes términos: "Estimamos que en el presente caso procede el recurso de casación con base en lo dispuesto en los incisos 1° y 3° del artículo 506 del Decreto Legislativo número 2009 (reformado por el Decreto número 388 del ex-Congreso de la República), es decir, que la sentencia recurrida contiene: A) Violación de la ley; y B) Error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas y éste resulta de documentos auténticos que demuestran de modo evidente la equivocación del juzgador, los que son: certificación del acta de nacimiento de Juan Pablo Burgos (la demandante lo llama Pazos Burgos) que presentamos y obra en los autos debidamente requisitada; certificación de la sentencia, del juicio penal seguido en contra de José Castillo Coello y Eliseo Mejía por el delito de alteración de documentos públicos; y certificación del acta de inspección ocular practicada de orden del Juzgado Primero de Letras del departamento de Copán, Honduras; dichos documentos, es decir, los dos últimos citados, igual como el primero, tienen el pase legal y también obran en las actuaciones". Citan como leyes infringidas los siguientes artículos: IX y XXIII de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial o sea el Decreto Gubernativo número 1862; 156, 157 inciso 2°, 158, inciso 2°, 269 inciso 1°, 277, 278 inciso 1°, 282, 288, 290, 295 incisos 1° y 2° del Decreto Legislativo 2009; 3° inciso II, 66 y 103 parte primera del Código de Derecho Internacional Privado, aprobado por Decreto Legislativo número 1575; y 308 del Código Civil de la República de Honduras". Con fecha veintiuno del mismo mes la parte actora interpuso también recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida en este asunto, denunciando que la Sala sentenciadora incurrió en violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley y en error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba que demuestra de modo evidente la equivocación del juzgador, fundándose en los incisos 1° y 3° del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, cita como leyes infringidas los siguientes artículos: IX, XIV, XV, XVII, XXVIII, XXXI, de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial; 206, 231, 235 inciso 3°, 237 del Decreto Gubernativo 1862; 135, 142, 150, 246, 248, 249, 269 inciso 1°, 277, 278, 282 del Decreto Legislativo 2009; 6°, 9° inciso 1°, 818, 819, 980, 982, 985 y 986 del Código Civil; 1926 y 1027 del Decreto 2009. Habiéndose verificado la vista, procede resolver:

—I—

CONSIDERANDO:

Para guardar el mismo orden del fallo impugnado, conviene examinar en primer término el recurso de casación interpuesto por Josefina Burgos Buezo que lo fundamenta en los incisos 1° y 3° del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que se refieren a violación de ley y a error en la apreciación de la prueba, y al examinar preferentemente este último aspecto, se vé que la recurrente no se cuidó de identificar las pruebas, que a su juicio se apreciaron con error, ni precisa cuál es y en qué consiste cada uno de los errores de derecho y de hecho atribuidos, como es necesario, tanto para producir distintos efectos, como para colocar al Tribunal en la posibilidad de hacer el estudio comparativo entre las pruebas en que se señala ese vicio en el fallo impugnado y las leyes citadas como infringidas, porque la naturaleza restringida de este recurso no permite hacer un estudio generalizado de la prueba, como reiteradamente se ha expresado en fallos anteriores, cuyas omisiones impiden determinar si la Sala sentenciadora incurrió en infracción de alguno de los artículos 135, 142, 150, 246, 248, 249, 269, inciso 1°, 277, 278 y 282 del Decreto Legislativo 2009, que tratan de materia procesal y fueron citados por la recurrente; además los artículos 1026 y 1027, del Decreto 2009, citados sin especificar la naturaleza de ese Decreto, no se pueden examinar por ignorarse a qué cuerpo de leyes corresponden.

En cuanto a la violación, aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, que tiene como motivo medular lo resuelto respecto a la cosa juzgada que se aceptó como concurrente en el presente asunto, su estudio tiene que hacerse a base de los hechos que tuvo por probados el Tribunal de Segunda Instancia, toda vez que quedó eliminado un nuevo examen de la prueba; dicho Tribunal consideró que los juicios anteriores cuya primera instancia se declaró abandonada y por consiguiente quedaron extinguidas las acciones deducidas, guardan identidad de personas, cosas y acciones con el actual, con cuyos antecedentes la excepción de cosa juzgada se encuentra plenamente probada. La señora Burgos Buezo manifiesta inconformidad con tales apreciaciones, sosteniendo que conforme la ley que define la cosa juzgada ésta requiere una sentencia ejecutoriada, identidad de personas, cosas y acciones y como en ninguno de los dos juicios anteriores se dictó sentencia, ni los hechos son los mismos, los autos que declararon el abandono de la instan-

cia no pueden configurar la indicada excepción. A este respecto procede estimar: es cierto que el artículo 237 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial (Decreto Gubernativo 1862), preceptúa que "Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas y acciões, pero cuando hubiere lugar a un juicio ordinario, no causa dicha excepción". Ahora bien, el artículo 235 de la misma ley, determina que son sentencias ejecutorias, entre otras, las resoluciones siguientes: "Las sentencias consentidas expresamente por las partes. Las sentencias de que hecha la notificación en forma legal no se interpone recurso en el término señalado por la ley", expresando en párrafo final que "Las disposiciones de este artículo rigen para los autos". De acuerdo con la apreciación de las pruebas verificada por la Sala sentenciadora, tiene que admitirse que en las dos acciones ordinarias ejercitadas anteriormente por la señora Burgos Buezo, representada por apoderado y por sí, se demandó a las mismas personas, con fundamento en los mismos hechos, en idéntica acción y persiguiendo las mismas cosas que en el presente juicio; por consiguiente y toda vez que los autos en que se declaró el abandono de la primera instancia en aquellos juicios, quedaron firmes, adquirieron la calidad de resoluciones ejecutoriadas suficientes para integrar la cosa juzgada, porque no sólo le pusieron fin a esos juicios, sino también a la cuestión principal debatida, toda vez que como consecuencia de ellos quedaron extinguidas las acciones deducidas, enmarcando así estas apreciaciones dentro de la doctrina y alcances jurídicos de los artículos 235 y 237 del Decreto Gubernativo 1862, de lo que se infiere que no fueron infringidas estas leyes, y de acuerdo con estas conclusiones, no pudieron ser violados los artículos IX, XIV, XV, XVII, XVIII, XXVIII, XXXI, de los Preceptos Fundamentales; 206, 231, 235 inciso 3° del Decreto Gubernativo 1862; 6°, 9° inciso 1°, 818, 980, 982, 985, 986 y 1068 del Código Civil.

—II—

CONSIDERANDO:

La parte contrademandante que a su vez interpuso recurso de casación, lo funda también en los incisos 1° y 3° del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, que respectivamente se refieren a violación de ley y al error en la apreciación de la prueba, por lo que por razones

de lógica debe examinarse en forma preferente este último aspecto del recurso, y al hacerlo se vé que se impugna el fallo recurrido en la parte que resolvió la acción reconvenzional, aduciendo que se incurrió en error de derecho al valorar la prueba documental aportada por las partes, porque en las actuaciones consta, que en el proceso por falsificación de documentos seguido por la señora Josefina Burgos Buezo, ante el Juez de Letras de Copán, pretendiendo que había sido alterada el acta original de la partida de nacimiento de Juan Pablo Pazos Burgos, los expertos dictaminaron que habían tenido a la vista dicha acta, en la cual solamente aparece la firma del entonces encargado del Registro Guadalupe López y que la partida está limpia, sin señales que se hayan borrado las firmas de Alfonso Pazos, Rosalío Castillo y Natividad Paz, lo cual demuestra de manera clara y categórica, que la certificación que sirvió de base al Juez Segundo de Primera Instancia departamental, para dictar el auto de declaratoria de herederos es falsa, que el acta original no llena los requisitos formales y circunstancias exigidos por el artículo 308 del Código Civil de Honduras para que pueda surtir sus efectos en Guatemala, y, en consecuencia, ese auto es nulo. Para analizar los anteriores razonamientos es del caso indicar: de conformidad con el artículo 295 del Decreto Legislativo 2009, "Los documentos otorgados en el extranjero producirán sus efectos en Guatemala, si reúnen los requisitos siguientes: Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país de donde proceden o hayan sido otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares, de conformidad con las leyes de esta República. Que el acto o contrato no sea contrario a las leyes de Guatemala". Los recurrentes afirman que según la certificación presentada por ellos, la partida de nacimiento de Juan Pablo Pazos Burgos, no llena los requisitos previstos en el artículo 308 del Código Civil de Honduras, pero como dicho acto debe regirse por la ley territorial del lugar donde se realizó, para que surtiera efecto en esta República, habría sido necesario acreditar que dicha partida fué asentada sin llenar la forma y solemnidades establecidas en aquel país, para lo cual debió probarse también la existencia, el texto y vigencia de esa ley, como lo prescribe el artículo XXVI de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, pues aunque dentro del recurso de casación que se resuelve, se solicitó que esta Corte por la vía diplomática pidiera al Tribunal Supremo de Honduras, informe sobre la existencia y vigencia del men-

cionado artículo del Código Civil de aquella Nación y tal potestad la otorga el capítulo segundo del título séptimo del Código de Derecho Internacional Privado a los Jueces y tribunales en general, conforme el artículo 412 del mismo cuerpo de leyes, tratándose del recurso de casación se subordina a las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional, y como por la naturaleza del nuestro, existe prohibición expresa para que durante su sustanciación se proponga y reciba prueba alguna (artículo 515 del Dto. Leg. 2009), es indiscutible que ese informe no podía solicitarse por esta Corte, quedando así improbadamente la existencia del derecho conforme al cual con la certificación presentada, se pretendía desvirtuar el efecto probatorio de la certificación que sirvió de base al Juez para la declaratoria de heredero de Alfonso Pazos Cueva en favor de Juan Pablo Pazos Burgos.

También se denuncia que la Sala sentenciadora incurrió en error de hecho, al no tomar en consideración las pruebas indicadas en el párrafo anterior, pero tal afirmación no es exacta, porque aún cuando es cierto que no analizó específicamente cada una de las certificaciones indicadas, si se apreciaron en conjunto, al darle prevalencia a la presentada por la actora, y además por sí solas, no son suficientes para demostrar de manera evidente la equivocación del juzgador, dado que por las razones expresadas en lo referente al error de derecho, no es dable apreciarlas como prueba. En consecuencia, la Sala sentenciadora no incurrió en ninguno de los errores atribuidos en la apreciación probatoria de los documentos indicados, ni en infracción de los artículos IX y XXIII Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial; 269 inciso 1°, 277, 278 inciso 1°, 282, 288, 290, 295 incisos 1° y 2°, del Decreto Legislativo 2009; 3° inciso 2°, 66 y 103 parte primera, del Código de Derecho Internacional Privado (Decreto Leg. 1575) y 308 del Código Civil de Honduras; este último por no haberse probado su existencia, texto y vigencia.

—III—

CONSIDERANDO:

Los contrademandantes también denuncian que se incurrió por el Tribunal de segunda instancia en violación de los artículos 156, 157 inciso 2° y 158 inciso 2° del Decreto Legislativo

2009, por no haberse condenado en costas a la demandante, porque hay temeridad o mala fe de su parte, pues es la tercera vez que demanda a las mismas personas y por los mismos hechos, y que a sabiendas presentó un documento falso, consistente en la certificación de la partida de nacimiento, la cual adolece de ese vicio, extremo que conocía desde el momento que acusó a José Castillo y Eliseo Mejía, por el delito de falsificación de documentos públicos ante el Juzgado de Letras del departamento de Copán. A esos respectos cabe estimar: la temeridad no la constituye el simple hecho de presentar reiteradamente una demanda, sino cuando carece de base o fundamento, y como las demandas anteriores terminaron por abandono de la primera instancia y la presente por la admisión de la excepción perentoria de cosa juzgada, en ninguna se conoció de su fondo, para poder determinar si eran o no temerarias; y en cuanto a la presentación de un documento falso, que es otro de los requisitos necesarios para la condena en costas, no se llegó a hacer tal calificación en ninguno de los documentos presentados por la actora, circunstancias por las que se estima correcta la declaración de la Sala sentenciadora sobre que no procediera hacer especial condena en costas en este caso, por lo que dicho Tribunal no incurrió en infracción de las leyes mencionadas.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con las consideraciones anteriores y lo prescrito en los artículos 222, 224, 227, 228, 233 y 234 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 505, 512 521 del Decreto Legislativo 2009, declara: sin lugar los dos recursos de casación examinados, condenando a los interponentes en las respectivas costas de los mismos y a una multa de veinticinco quetzales, que en caso de insolvencia conmutarán con diez días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel suplido y en la forma que corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado G. Aguilar Fuentes).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CIVIL

Ordinario doble de divorcio seguido entre Julián Salvador Argueta Ordóñez y Mélida Lima Lorenzana de Argueta.

DOCTRINA: *Si el Tribunal de Apelación no funda su fallo en la confesión de la parte demandada, no quede prosperar el recurso de casación que se interpone invocando como motivo de él, error de derecho en la apreciación de aquella prueba.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, seis de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación, se examina la sentencia que con fecha veintitrés de febrero de mil novecientos cincuenta y tres profirió la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, en el juicio ordinario doble de divorcio seguido entre don Julián Salvador Argueta Ordóñez por una parte, y doña Mélida Lima Lorenzana de Argueta por la otra, ante el Juzgado de Primera Instancia del departamento de Jalapa.

ANTECEDENTES:

Demanda:

El veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta, don Julián Salvador Argueta Ordóñez se presentó al Juzgado de Primera Instancia de Jalapa, demandando el divorcio absoluto de su esposa doña Mélida Lima Lorenzana de Argueta, exponiendo: que contrajo matrimonio con su citada esposa, el once de mayo de mil novecientos veintisiete y procrearon un hijo ya fallecido, quien llevó por nombre Hugo Alberto; que no aportaron bienes al matrimonio, ni los adquirieron durante él y que su esposa, desde que ocurrió el fallecimiento de su hijo, se trasladó a vivir a la ciudad de Jalapa al lado de su madre y se ha negado reiteradamente a regresar a vivir a su hogar establecido en esta capital por lo que, con fundamento en la causal contenida en inciso 8° del artículo 124 del Código Civil, demandaba su divorcio y concluyó pidiendo que en sentencia se declarara: "1°) El divorcio absoluto entre los esposos Argueta-Lima, dejándolos en libertad de poder contraer nuevas nupcias; 2°) Que no existen bienes provenientes de la sociedad conyugal que liquidar; 3°) Que tampoco debe fijarse pensión alimenticia a favor del otro cónyuge, por ser culpable del divorcio; y 4°) Que no hay especial condenación en costas". Ofre-

ció como pruebas de su parte: "a) los documentos acompañados; b) otros documentos públicos, auténticos y privados; c) confesión de la otra parte; d) inspecciones oculares; e) testigos; e) presunciones". Y acompañó a su demanda los siguientes documentos: Certificación extendida por el Registrador Civil de Jalapa conteniendo el acta de matrimonio de J. Salvador Argueta y Mélida Lorenzana, verificado el once de mayo de mil novecientos veintisiete; certificaciones extendidas por la misma oficina conteniendo las actas de nacimiento y defunción de Hugo Alberto, hijo del indicado matrimonio, ocurridos el primero, el dieciséis de agosto de mil novecientos veintisiete, y la segunda, el veintisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis; y certificación extendida por el Secretario del Juzgado Séptimo de Primera Instancia, de las diligencias voluntarias iniciadas por el señor J. Salvador Argueta, el veintuno de marzo de mil novecientos cincuenta, pidiendo se requiriera a su esposa para que se reintegrara a su hogar en esta capital, requerimiento que se hizo el ocho de mayo del mismo año, negándose la señora de Argueta a lo pedido por su esposo, en virtud de que éste, según expuso: la abandonó desde hacía tres años cinco meses en la ciudad de Jalapa donde tenían formado su hogar; que además sabe que su esposo tiene en su poder una señora con quien hace vida marital a quien ha llegado a presentar como su esposa, no siéndolo; y que el requerimiento según entiende, tiene por objeto evadir el cumplimiento del pago de alimentos a que fué condenado el requiriente, en juicio que le siguió.

CONTESTACION Y CONTRADEMANDA:

Doña Mélida Lima Lorenzana de Argueta, contestó la demanda en sentido negativo, indicando que no son ciertos los conceptos vertidos en ella. En cuanto a bienes, dice: que con el trabajo de ambos llegaron a levantar una casa en la ciudad de Jalapa, "pero por no tener el terreno título inscrito, hoy se encuentra en trámite la respectiva titulación supletoria, pero en favor de la señora madre del demandante; además con el producto del trabajo y economías del hogar fué pagado un crédito en bienes cuya propiedad no me corresponde, pero si son de mi legítima propiedad la parte respectiva de los fondos con que se hizo la cancelación"; que en cuanto al punto básico de la demanda también es falso, pues "el motivo por el cual nos encontramos separados, —dice— no es el invocado por el demandante, sino tal situación se debe al abandono inmotivado que del hogar

hizo el propio demandante, dejando sin razón ni motivo alguno de cumplir con los más elementales deberes para el hogar. Al fallecimiento de nuestro hijo, el demandante se alejó de esta ciudad, marchándose para la capital, donde no sólo se radicó sin acordarse más de la esposa, sino fundó un nuevo hogar, no respetando la santidad del matrimonio; esta conducta del demandante me obligó a seguirle el respectivo juicio de alimentos, toda vez que nuestra separación le era imputable y por consiguiente subsistían todas las obligaciones contraídas con el matrimonio; al ser demandado y fijársele la pensión respectiva por los Tribunales de la capital, recurrió al medio de requerirme en la vía voluntaria, de la vuelta al hogar, pretendiendo así evadir el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilizarme de tal separación". Por esas razones, contrademandó de su esposo el señor Argueta Ordóñez el divorcio absoluto con fundamento en las causales contenidas en los incisos 5° y 6° del artículo 124 del Código Civil, y la liquidación de los haberes obtenidos durante el matrimonio. Ofreció como pruebas de su parte, "documental, comprendiéndose documentos auténticos, públicos y privados; confesión judicial del demandado; inspección ocular; dictamen de expertos; declaraciones de testigos; presunciones y todas aquellas que sean conducentes a establecer mis derechos". Y concluyó pidiendo: "a) tener por contestada la demanda en sentido negativo; b) dar trámite a la contrademanda interpuesta por mi parte; dándole traslado de la misma al demandante por el término de nueve días; c) abrir oportunamente el juicio doble a prueba; d) finalmente declarar el divorcio de nuestro matrimonio con base en las causales invocadas por mí, condenando al demandado al pago de las costas del juicio y demás responsabilidades que conforme a la ley le corresponden como responsables del divorcio".

CONTESTACION DE LA CONTRA- DEMANDA Y EXCEPCIONES:

El señor Argueta Ordóñez, contestó la contrademanda en sentido negativo, alegando ser falsos sus conceptos e interpuso las excepciones perentorias siguientes: "I— La de falsedad en los hechos, fundamento de la contrademanda; II— La de falta de derecho por parte de la contrademandante; III— La de contradicción, en las causales por las cuales demanda el divorcio".

DILACION PROBATORIA:

Pruebas del actor:

A) Testimonios del Doctor Pedro Chinchilla Mayorga, Salvador Ruano y Ruano, Plutarco Ibarra Solito, Adalberto Alfaro Ramírez y Víctor Manuel Galeano, quienes declararon constarles que desde mil novecientos cuarenta y cinco, el matrimonio Argueta Ordóñez-Lima Lorenzana se trasladó a vivir a esta capital por razón del empleo del esposo; que en mil novecientos cuarenta y seis con motivo de la enfermedad y fallecimiento de su hijo Hugo Alberto, se trasladaron a Jalapa y desde esa fecha están separados por haberse quedado vivienda la señora Lima Lorenzana de Argueta en aquella ciudad. También propuso el actor el testimonio de Augusto de León Paiz, quien declaró: que desde agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, a noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, el matrimonio Argueta Ordóñez-Lima Lorenzana, estuvo viviendo en una casa de su propiedad en esta ciudad capital; que la misma señora Lima Lorenzana de Argueta o su cuñada María Lilia Lima Lorenzana, llegaba a pagarle la renta, pero los recibos los extendió siempre a nombre de don Salvador Argueta.

B) Confesión de la demandada. En diligencia de posiciones que le articuló el actor, la señora Lima Lorenzana de Argueta confesó: que desde mil novecientos cuarenta y cinco a mil novecientos cuarenta y seis, tuvieron fundado su hogar en esta ciudad capital; que ese año se fueron a Jalapa con motivo de la enfermedad y fallecimiento de su hijo y ella se quedó viviendo en aquella ciudad; que recibió una prevención judicial por solicitud de su esposo para que regresara a su hogar, "pero eso obedeció a la demanda de alimentos que ella le entabló y antes de ese juicio pudo haberla requerido y no lo hizo"; y que es cierto que están separados "porque él la abandonó".

C) Documentos: certificaciones extendidas por el Secretario de la Jefatura de Proyectos de la carretera "Franklin Delano Roosevelt", en las que se hace constar que don Julián Salvador Argueta Ordóñez, trabajó en esa dependencia de manera ininterrumpida desde el diecinueve de Julio de mil novecientos cuarenta y cinco, hasta el dieciocho de Julio de mil novecientos cincuenta; y que del veintiséis de Noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, al quince de Diciembre del mismo año, gozó de vacaciones.

Pruebas de la demandada y contrademandante:

A) Testimonios de Olimpia Pinto Palma viuda de Balcárcel, Graciela Recinos Duarte de Carías, Fernando Duarte Guerra, Vicente de la Rosa Cruz y Saturnino Antonio Bonilla y Bonilla, quienes declararon que desde el fallecimiento del menor Hugo Alberto, hijo de ambos litigantes, el señor Argueta Ordóñez abandonó a su esposa y que desde esa fecha están separados; que el señor Argueta Ordóñez, jamás volvió a llamar a su esposa a su lado. Los testigos Olimpia Pinto Palma viuda de Balcárcel y Fernando Duarte Guerra dijeron además que el señor Argueta Ordóñez tiene el propósito de contraer nuevo matrimonio con la señorita Yolanda Moreno, lo cual saben porque él mismo se los refirió. Duarte Guerra, de la Rosa Cruz y Bonilla y Bonilla, al contestar las preguntas que se les dirigieron, afirman: que los esposos Argueta Ordóñez-Lima Lorenzana, tenían su domicilio en la ciudad capital en el año de mil novecientos cuarenta y seis y que fueron a Jalapa ese mismo año con motivo de la enfermedad y fallecimiento de su hijo Hugo Alberto; que por razón de su empleo, el señor Argueta Ordóñez volvió a la ciudad de Guatemala y ya no lo acompañó su esposa, ignorando cuál haya sido el motivo. Las señoras Pinto Palma viuda de Balcárcel y Recinos Duarte de Carías, dijeron que no saben que la señora Lima Lorenzana de Argueta esté separada de su esposo desde mil novecientos cuarenta y seis y tampoco saben el motivo por qué la misma señora ya no quiso acompañar a su esposo ni irse con él a la capital desde mil novecientos cuarenta y seis.

B) Documentos: cuatro recibos con firmas legalizadas, otorgados a favor de doña Mélida Lima Lorenzana de Argueta, referentes a pagos hechos por ella por diversas reparaciones llevadas a cabo en una casa de la ciudad de Jalapa; Certificación del Registro General de la República, en que consta que la finca número cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco, al folio cuarenta y ocho, del libro veintiocho de Jalapa, está inscrita bajo la segunda inscripción de dominio a favor de Salvador Argueta desde el veinte de septiembre de mil novecientos veintiséis; certificación del Juzgado Tercero de Primera Instancia Departamental conteniendo la demanda de alimentos presentada por la señora Lima Lorenzana de Argueta contra don Julián Salvador Argueta Ordóñez el veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve y resolución de la misma, fijando al demandado la pensión alimenticia provisional de sesenta quetzales mensuales que en forma an-

tipicada deberá pagar a la actora; testimonio de la escritura de cancelación de la hipoteca que por la suma de doscientos quetzales pesaba sobre la finca inscrita en el Registro General de la República con el número cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco, al folio diecisiete del libro once de Jalapa, otorgada por don Francisco Guerra y Guerra a favor de don Julián Salvador Argueta el diez de junio de mil novecientos treinta y cinco ante los oficios del Notario Alfredo E. Figueroa; certificación extendida por el Juzgado de Paz de Jalapa, conteniendo declaración de Armando Aguilar, quien dice que la casa que habita la alquiló a María de Argueta y la esposa de Agustín Juárez y paga la renta mensual de diez quetzales; y dos certificaciones del mismo Juzgado de Paz, de las declaraciones prestadas por Everardo Morales y Ramón González, aseverando que tienen en arrendamiento una parte cada uno del terreno denominado "El Aguacate", propiedad de Salvador Argueta, pagando el primero la renta anual de siete quetzales y el segundo sesenta y seis quetzales cincuenta centavos. Con su alegato final la señora de Argueta acompañó certificación del Registro Civil de esta Capital, conteniendo el acta de nacimiento de María del Carmen, hija de María Antonia Avila y Julián Salvador Argueta Ordóñez, nacida el trece de enero de mil novecientos cuarenta y cinco.

SENTENCIA DE PRIMER GRADO.

El veintiséis de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, el Juez dictó sentencia declarando: "1º, el divorcio de los esposos Julián Salvador Argueta Ordóñez y Mélida Lima Lorenzana de Argueta, fundado en la causal indicada; 2º que no se dicta ninguna resolución respecto a hijos por no haberse acreditado que los tienen; 3º, que el actor queda obligado a pasar a la demandada por pensión en concepto de alimentos, la suma mensual y anticipada de veinte quetzales; 4º, que absuelve a la demandada de la acción de divorcio que fundamentó el actor en la causal 8ª del Artículo 124 del Código Civil, por no haberla probado; 5º que por la misma falta de prueba y por no haberse evidenciado la existencial de bienes de la sociedad conyugal, absuelve al demandante de este punto de la contrademanda sobre partición y liquidación de haberes de la sociedad; 6º sin lugar las excepciones perentorias que se han relacionado por carecer de fundamento; 7º que no se hace especial condenación en costas; y 8º que se remita copia autorizada de este fallo al Registro Civil respectivo para los efectos legales". Fundó su fallo el Juez sentenciador, en que el actor con la prueba testimonial que

rindió y la confesión de la demandada, no estableció la causal que invocó en su demanda, "sin que constituya a mejorar esta situación de la prueba la circunstancia de haber sido requerida la esposa para que se reintegrara al hogar hasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta o sea pocos días antes de entablar la demanda y después de haber transcurrido varios años que marginan otros casos de la ley que se comenta", y que está probada una de las causales invocada por la demandada en su contrademanda o sea la separación de cuerpos durante tres años, argumentando que "Debe tenerse presente que los litigantes se atribuyen recíprocamente el origen culposo de su separación de hecho, cuestión que no sólo es innecesaria para la existencia de la causal sino que ninguna prueba hay al respecto. De manera que con la prueba que se ha apuntado, han quedado plenamente probados los extremos de la contrademanda en punto tratado, por lo que procede declarar el divorcio de los nombrados esposos y hacer las demás declaraciones pertinentes", y "que de acuerdo con el pedimento de la contrademandante y lo dispuesto por el Arto. 1103 en relación con el 1119 del Decreto Legislativo 2009, debe resolverse que el actor debe pasar mensualmente y anticipadamente a su esposa la suma de veinte quetzales para sus alimentos en sentido legal, pensión mensual a que tiene derecho ya que esta obligación la determina el Código Civil en su artículo 211, y si bien es cierto que el Arto. 124 del mismo Código previene que se otorgue por el cónyuge culpable a favor del inculpable, aquí no se puede hacer tal discriminación por la misma naturaleza de la causal que da lugar al divorcio en que sólo basta la separación por el término indicado sin que exija la concurrencia de culpabilidad o inculpabilidad, de manera que favorece a la contrademandante lo determinado en el Arto. 211 ya citado".

SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO.

Por recurso que interpusiera don Julián Salvador Argueta Ordóñez contra el fallo ya relacionado, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, después de corridos los trámites de la segunda instancia, dictó sentencia el veintitrés de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, confirmando la de primer grado "en los puntos y con las modificaciones que se expresan a continuación: a) en cuanto declara el divorcio absoluto de los esposos Julián Salvador Argueta Ordóñez y Mélida Lima Lorenzana de Argueta, pero con base en la causal contemplada en la demanda instaurada por el primero de los nombrados, la que se declara con lugar; b) en

lo referente a hijos, por no constar que existan; c) en cuanto declara sin lugar las excepciones perentorias antes relacionadas, pero por las razones invocadas en la consideración respectiva; d) en lo referente a que no hay especial condena en costas y e) en que se envíe la copia certificada al Registro respectivo, para los efectos consiguientes; asimismo la confirma en el punto 5°, o sea que por falta de prueba y por no haberse evidenciado la existencia de bienes de la sociedad conyugal, absuelve al demandante del punto de la contrademanda relativo a partición y liquidación de tales haberes. Revoca la sentencia en lo demás, y resolviendo en derecho, declara absuelto al actor Julián Salvador Argueta Ordóñez, de los restantes puntos de la contrademanda instaurada en su contra". Estimó la Sala que con los hechos confesados por la demandada y la información testimonial rendida por el actor, quedó establecida la causal invocada por éste en su demanda, "es evidente —argumenta— que la abundante prueba antes relacionada, tiene una fuerza incontrovertible para dar por establecida fehacientemente la causal de divorcio invocada por el actor, pues está de manifiesto la negativa infundada de la esposa a cumplir con su cónyuge los deberes a que el matrimonio la obligó, entre los que están primordialmente los de convivir, procrear, alimentar, educar a los hijos comunes y auxiliarse entre sí, así como también dirigir y velar por el hogar conyugal y cuidar los asuntos del marido. En consecuencia, no está en lo cierto el señor Juez al considerar que la citada causal no fué establecida en los autos, ya que no cuidó de analizar detenidamente todas las pruebas aportadas al juicio ni relacionarlas con la naturaleza misma de la causal invocada, por lo que es procedente revocar el fallo examinado en este aspecto". Y al analizar la prueba testimonial rendida por la contrademandante dice: "de tales testigos, solamente las dos primeras favorecen en sus dichos a la contrademandante, si bien incurriendo en incongruencias y contradicciones que los demeritan; los tres últimos testigos, al responder a las preguntas que se les dirigieron, confirman la situación sostenida por la parte actora y corroborada por los testigos que presentó, cuyas declaraciones fueron glosadas anteriormente, viniendo a favorecer en último término al esposo demandante; siendo además, que en todo caso, la prueba documental y testimonial analizada en el primer considerando, es contundente y de un número tal que desvirtúa por completo el relativo mérito probatorio de la presentada por la contrademandante, con los resultados favorables a su tesis antes ex-

puestos. En consecuencia, procede absolver al actor de este aspecto de la contrademanda entablada en su contra"; "que declarándose el divorcio absoluto del matrimonio Argueta-Lima Lorenzana, con fundamento en la causal invocada por el esposo de la demanda instaurada, la esposa pierde el derecho a ser alimentada, y debe revocarse también en este aspecto el fallo que ahora se estudia".

RECURSO DE CASACION.

La señora Mélida Lima Lorenzana de Argueta, con auxilio del Abogado Carlos Luján Alvarez, el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y tres interpuso el presente recurso de casación contra el fallo de la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, que se acaba de relacionar, con fundamento en los artículos 1° y 3° del artículo 506 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil (Dto. Legislativo número 2009) y citó como violados los artículos 124 en sus incisos 5°, 6° y 8° y artículo 134, ambos del Código Civil; 365, 427, 428 incisos 1° y 2° y 430 en sus cuatro incisos, todos del Decreto Legislativo número 2009; y 52 Párrafo 1° de la Constitución de la República. Encontrándose arreglada a derecho la interposición del recurso, se pidieron los antecedentes y verificada la vista, procede resolver.

—I—

CONSIDERANDO:

Citados como casos de procedencia del recurso los contenidos en los incisos 1° y 3° del artículo 506 del Decreto Legislativo 2009, conviene examinar en primer término el relativo al error de derecho en que se dice haber incurrido el Tribunal sentenciador, en la apreciación de las pruebas. Alega el recurrente en su escrito de sometimiento, que "Hay error de derecho en la apreciación de las pruebas rendidas, porque en el fallo recurrido se dice que yo confesé la verdad de la demanda entablada por mi esposo, al decir en las posiciones que él me articulara, que hacía varios años que vivíamos separados, cuando si yo dije tal cosa fué con complemento inseparable, en una frase completa, al decir, "que por motivo de que él me había abandonado"; tal confesión es dividua, y al estimarla el Tribunal de Apelación como dividua, puña y simple, violó por aplicación in-

debida, el artículo 365 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil contenido en el Decreto número 2009, Decreto Legislativo". Sin embargo, al examinar detenidamente el fallo impugnado, se ve claramente que el Tribunal de Segunda Instancia, no consideró como lo indica la recurrente, que ella haya confesado la verdad de la demanda entablada por su esposo, sino que después de enumerar los hechos confesados y analizar las demás probanzas aportadas al juicio, concluye: "es evidente que la abundante prueba antes relacionada, tiene una fuerza incontrovertible para dar por establecida fehacientemente la causal de divorcio invocada por el actor, pues está de manifiesto la negativa infundada de la esposa a cumplir con su cónyuge los deberes a que el matrimonio la obligó...". Es cierto que la Sala, entre los hechos que enumera como confesados por la recurrente, cita el relativo a que "confesó que es verdad que está separada de su esposo desde hace más de cuatro años, si bien aduciendo que porque éste la abandonó, extremo no establecido"; pero también lo es, que al hacer el análisis conjunto de toda la prueba rendida, concluye, como ya se dijo, que está "establecida fehacientemente la causal de divorcio invocada por el actor..." sin indicar que haya llegado a esta conclusión, teniendo como base la parte impugnada de la confesión de la recurrente. De donde se infiere que no incurrió en el error de derecho que se denuncia en la apreciación de esta prueba, porque no tomó aisladamente la parte señalada de la confesión, ni tuvo ésta como fundamento de su fallo; por el contrario, consideró que de los hechos confesados, entre los que se encuentran el de haber tenido su domicilio el matrimonio en esta capital hasta el mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis; y el de haber reiterado la confesante su determinación de no volver al lado de su esposo, así como lo que resulta de la prueba documental y testimonial, se deduce la negativa infundada de la demandada a cumplir con el demandante los deberes a que está legalmente obligada. En otros términos, la Sala, para llegar a la conclusión de que está probada la existencia de la causal de divorcio invocada por el actor, no tiene como fundamento lo confesado por la demandada referente a que está separada de su esposo desde hace más de cuatro años, pues este hecho lo estima probado fehacientemente con lo declarado por los testigos propuestos por el actor y los que propuso la misma demandada, al considerar que con el testimonio de los primeros se estableció: "que: el matrimonio en cuestión se trasladó a vivir a esta capital el año de mil novecientos cuaren-

ta y cinco; que en Noviembre del año de mil novecientos cuarenta y seis llegaron a Jalapa con motivo de la enfermedad y fallecimiento de su hijo; que desde entonces, la esposa se quedó viviendo en la ciudad de Jalapa, y que hace más de cuatro años que los esposos se encuentran separados"; y al analizar los testimonios de los segundos, es decir, los presentados por la demandada, estima: "los tres últimos testigos, al responder a las repreguntas que se les dirigieron, confirman la situación sostenida por la parte actora y corroborada por los testigos que presentó, cuyas declaraciones fueron glosadas anteriormente, viniendo a favorecer en último término al esposo demandante"; Como se ve, la parte de la confesión de la recurrente, en cuya apreciación se señala el error de derecho que es motivo de este aspecto del recurso, no fué estimada por la Sala como prueba del hecho que declara establecido, por lo que no infringió el Artículo 365 del Decreto Legislativo 2009.

—II—

CONSIDERANDO:

En cuanto se refiere al error de derecho con respecto a la prueba testimonial, dice la recurrente: "Hay error de derecho en la apreciación de las pruebas rendidas, porque en el fallo contra el que recurro ante el más Alto Tribunal de la República, se dice que la acción entablada por mi esposo fué probada con el dicho de los testigos: Doctor Pedro Chinchilla Mayorga, señores Salvador Ruano y Ruano, Plutarco Ibarra Solito, Adalberto Alfaro Ramírez, Víctor Manuel Galeano y Augusto de León Paiz, cuando si bien dichos testigos en el interrogatorio propuesto por el actor se produjeron de conformidad con las pretensiones de éste, en su mayor parte, al ser repreguntados, en la misma diligencia, entraron en contradicción los unos con los otros y con sus propias declaraciones, y manifestaron expresamente que no les constaba, a la mayoría de ellos, que yo me hubiera negado sin justa causa a hacer vida común con mi esposo; por el contrario, con el dicho de tales personas se prueba suficientemente que mi esposo ha permanecido sin interrupción en esta capital, por muchos años, o sea desde que abandonó el hogar conyugal en 1946, haciendo con ello más evidente la verdad de mi acción motivada en el contenido de los incisos 5° y 6° del artículo 124 del Código Civil". Como ya se dijo en el párrafo que antecede, los hechos que la Sala consideró probados con los testimonios que se impugnan, son los siguientes: "que el

matrimonio en cuestión se trasladó a vivir a esta capital el año de mil novecientos cuarenta y cinco; que en Noviembre del año de mil novecientos cuarenta y seis llegaron a Jalapa con motivo de la enfermedad y fallecimiento de su hijo; que desde entonces, la esposa se quedó viviendo en la ciudad de Jalapa, y que hace más de cuatro años que los esposos se encuentran separados; además el testigo Augusto de León Paiz, manifestó que sí alquiló una casa de su propiedad en ésta ciudad al matrimonio Argueta-Lima durante más de un año"; y al examinar el contenido de las declaraciones de los citados testigos, se ve que efectivamente de manera uniforme y categórica dijeron constarles los hechos antes relacionados, sin incurrir en contradicción "los unos con los otros y con sus propias declaraciones", como dice la recurrente; y tampoco es verdad que los mismos testigos hayan manifestado expresamente, "la mayoría de ellos", que no les constaba que la demandada se hubiese negado sin justa causa a hacer vida común con su esposo, pues lo que dijeron no constarles es la causa de la separación de los esposos Argueta Ordóñez-Lima Lorenzana y que antes del requerimiento judicial de que se ha hecho mención, el primero haya tratado de hacer volver a su lado a la segunda. Pero la Sala, para concluir que la causal de divorcio invocada por el actor está probada, no se funda exclusivamente en esta información testimonial, sino en los diversos hechos que resultan demostrados con el conjunto de pruebas aportadas al juicio, tales como el de que el matrimonio, tenía establecido en esta capital su domicilio; que desde que ocurrió el fallecimiento del hijo del mismo matrimonio, la esposa se quedó viviendo en la ciudad de Jalapa; que a pesar de haber sido requerida judicialmente para que volviera a su hogar se negó a ello; y que el marido demandante, ha tenido su domicilio en esta capital por razón de su empleo, desde antes y después de que ocurriera la separación. Por otra parte, tampoco es verdad que el Tribunal sentenciador haya incurrido en error de derecho al desestimar la prueba testimonial rendida a su vez por la recurrente, porque efectivamente estos testigos no sólo incurren en manifiestas contradicciones, sino como lo consideró la Sala, tres de ellos con su testimonio, corroboran la veracidad de los hechos afirmados y probados por el actor. En consecuencia, la Sala no incurrió en el error de derecho que se le atribuye en la apreciación de la prueba testimonial relacionada, por lo que no infringió los artículos 427, 428 incisos 1° y 2° y 430 en sus cuatro incisos del Decreto Legislativo 2009.

—III—

CONSIDERANDO:

Si como se ha estimado, en la sentencia que se impugna no se incurrió en el error de derecho que se denuncia en la apreciación de la prueba, el examen del recurso en lo que respecta a la inaplicación de los incisos 5° y 6° del artículo 124 del Código Civil y aplicación indebida del inciso 8° del mismo artículo, tiene que hacerse con base en los hechos que la Sala declaró probados; y como esos hechos en su conjunto, efectivamente concurren a integrar la causal de divorcio contenida en el citado inciso 8° del Artículo 124 del Código Civil, su aplicación es correcta y no incurrió en la infracción que se denuncia de los incisos 5° y 6° del mismo artículo, supuesto que es la causal antes indicada y no las que contienen estos dos últimos incisos, la que se declaró probada. Y, consecuentemente, la absolución del actor respecto a la pensión alimenticia pretendida por la contrademandante, no implica violación del artículo 134 del mismo Código Civil, pues siendo ella la culpable a quien dió motivo para que se generara la causal del divorcio, no tiene derecho a esta pensión como claramente lo indica el mismo artículo. Por último, el artículo 52 párrafo primero de la Constitución del cuarenta y cinco, vigente en la época en que se tramitó y falló el juicio, tampoco fué violado, porque la recurrente sí fué citada, oída y vencida en el mismo, ya que tuvo en él amplia intervención y usó de todos los recursos procesales autorizados por la ley.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo que preceptúan los artículos 222, 224 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara sin lugar el presente recurso, condena en las costas del mismo a la recurrente y al pago de la multa de veinticinco quetzales, que podrá conmutar con quince días de prisión simple en caso de insolvencia. Repóngase el papel empleado con la multa de ley. Notifíquese y devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Arnoldo Reyes Morales).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — Arnoldo Reyes. — M. Alvarez Lobos. — Carlos Arias Ariza. — Ante mí: Juan Fernández C.

Contencioso-Administrativo

“Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, Sociedad Anónima” contra una resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DOCTRINA: Sólo es deducible la amortización por depreciaciones desde el día en que se inicien las actividades de la empresa.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, doce de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el trece de Mayo del corriente año, en el recurso de igual naturaleza que, contra la resolución número cero tres mil ciento cuarenta y dos, dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, interpuso “Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, Sociedad Anónima”. Del estudio de los antecedentes.

RESULTA:

El veintiocho de Febrero de mil novecientos cincuenta, Carlos Castillo presentó declaración de utilidades de “Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, S. A.”, por el período comprendido entre el primero de Enero y treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, expresando que en vez de utilidad hubo una pérdida de once mil quinientos once quetzales y ochenta y dos centavos, (Q.11,511.82). Acompañó el balance de resultados, estado financiero de la empresa al treinta y uno de Diciembre del año citado, debidamente certificados por el Contador Enrique Morales, y una lista de los saldos incobrables.

El seis de Septiembre de mil novecientos cincuenta y uno, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades nombró al Auditor Tercero, Edmundo Aníbal Calderón Paz, para que dentro del término de diez días practicara revisión en la Empresa referida, informando de su resultado, y el diez del propio mes y año citados nombró al Auditor Trigésimo Séptimo, Roberto Wer, para que, en compañía del antes nombrado, verificara el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa mencionada, durante el ejercicio comprendido entre el primero de Enero y treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.

Con fecha diez de Septiembre de mil novecientos cincuenta y uno, el Notario Héctor Horacio Zachrisson Descamps, a requerimiento de Edgar Castillo Sinibaldi, hizo constar que

los Auditores nombrados estaban constituidos en la fábrica referida con el objeto de verificar el Estado de Pérdidas y Ganancias; que no se hacía oposición de hecho al fin indicado, pero como, de conformidad con la ley, era extemporánea esa revisión, se les hacía saber así para los efectos consiguientes.

Los auditores comisionados, en acta número sesenta y uno, levantada el doce de Septiembre indicado, hicieron constar entre otras cosas, que por no ser deducible, ajustaban el valor de la amortización de instalación de la nueva planta por la suma de cinco mil doscientos cuarenta y cinco quetzales y veinte centavos, (Q.5,245.20); dieciséis mil seiscientos treinta y ocho quetzales, (Q.16,638.00), por igual número de cajillas de madera que, habiendo sido vendidas, se omitieron en el inventario de liquidación periódica; ochocientos quetzales, (Q.800.00), valor de cuatro mil sacos, envase de azúcar, que fueron vendidos a veinte centavos de quetzal cada uno y tampoco figuran en el inventario de liquidación periódica; cinco mil ciento treinta y un quetzales y sesenta y siete centavos, (Q.5,131.67), que corresponden a leña suministrada durante los meses de Enero a Octubre de mil novecientos cuarenta y ocho; y, lo referente a envases en poder de la clientela, así como la rebaja de las pérdidas de dichos envases, calculada en el dos por ciento de la existencia. También hicieron constar las faltas cometidas por la Empresa, detallando las disposiciones legales que no han sido cumplidas.

Corren agregados al expediente: el informe de los revisores, la nota de gastos no reconocidos y la liquidación de los ajustes hechos, por la cual se ve que la suma total, a cargo de la Empresa revisada, asciende a quince mil seiscientos diecinueve quetzales y dos centavos, incluyendo el impuesto que debe pagar y la multa.

Al evacuar la audiencia que se le concediera, sobre los reparos hechos, Edgar Castillo Sini-baldi, en memorial fechado el quince de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno, expuso: que está de acuerdo con el reparo relativo al valor de la leña, por tratarse de una cuenta correspondiente a un ejercicio anterior, pero no así en cuanto a lo demás, pues el ajuste por amortización de la cuenta "GASTOS INSTALACION NUEVA PLANTA" es absurdo, por estar demostrado que fué en mil novecientos cuarenta y nueve cuando comenzaron a trabajar en el mencionado local; que ya a fines de mil novecientos cuarenta y ocho tenían varios departamentos y que si se hizo la amortización que autoriza la ley, sobre ese inmueble, fué porque en realidad ya estaba prestando servicio. Lo relativo al envase, cajillas de

madera, sacos de azúcar y depreciación de maquinaria litográfica, tampoco está ajustado a la ley, por las razones que allí mismo aduce.

Oídos los Auditores que hicieron los ajustes impugnados, manifestaron nuevamente, y con mayor amplitud, los motivos que a su juicio justifican los reparos hechos. Al referirse el Auditor Roberto Wer al ajuste por depreciación de la nueva planta —después de copiar lo que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América y Sociedad Americana de Ingenieros, dicen, respecto de lo que debe entenderse por depreciación—, se pregunta: "¿Tuvo gasto, uso y desgaste desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1949, la nueva planta de embotellamiento? Y se contesta: La Prueba Plena de que NO, la tenemos: en recibo por la primera mensualidad del alquiler del nuevo local, que lleva fecha de Septiembre de 1949 y corresponde al pago de ese mes"; que como el artículo 79 del Decreto Gubernativo 2191 autoriza a las empresas a contabilizar las depreciaciones en la forma que le conviniere mejor, "SIEMPRE QUE PRESTE FACILIDAD PARA LA REVISION DE LAS OFICINAS ENCARGADAS DEL CONTROL" y esa facilidad no fué encontrada en los libros de la Empresa sino que, a partir del mes de Septiembre citado, figuran partidas correspondientes a "Gastos de Instalación Nueva Planta", hasta finalizar el ejercicio, es de suponerse "que el gasto, uso y desgaste de la nueva planta, no se produjo durante todo el ejercicio revisado".

RESULTA:

Con los antecedentes referidos, la Contraloría del Impuesto Sobre Utilidades, en acuerdo número sesenta y seis, (66), fechado el dieciséis de Noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, emitió la resolución que dice:

"ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar los informes mencionados, así como el Acta N° 61 levantada con motivo de la revisión; SEGUNDO: Formular la liquidación del impuesto a cobrar en la forma siguiente: Pérdida declarada por la empresa: Q.11,511.82. Monto de los Ajustes de la Auditoría: Q.49,111.09. UTILIDAD SUJETA A IMPUESTO: Q.37,599.27. IMPUESTO: Conforme escala del Dto. Legislativo N° 204 a cobrar: Q.5,206.34. TERCERO: Librar la orden de pago por la suma de CINCO MIL, DOSCIENTOS SEIS QUETZALES, CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE QUETZAL de conformidad con el punto anterior; CUARTO: Imponer a la Empresa "Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, S. A.", la multa de Q.500.00,

por no llevar Contabilidad de Costos, conforme Artículo 5° del Decreto 204 del Congreso de la República; QUINTO: Extender a solicitud y a costa de la propia empresa y para los efectos del Artículo 32 del Decreto 1543, copia certificada del Acta de Revisión; SEXTO: Transcribir el presente Acuerdo: a la Empresa FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, S. A.", y a la Dirección General de Rentas, para su conocimiento y efectos consiguientes".

Contra la resolución copiada se introdujo recurso de revocatoria, el que, tramitado con audiencia del Ministerio Público y Departamento de Asuntos Tributarios, fué declarado sin lugar, en resolución número cero tres mil ciento cuarenta y dos, (03142) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dictada el dieciséis de Abril de mil novecientos cincuenta y dos.

RESULTA:

Con fecha veintinueve de Abril del año que se acaba de citar, Edgar Castillo Sinibaldi acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, manifestando: que por las razones ya expuestas en su memorial de fecha quince de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno, que era innecesario repetir, recurría contra la resolución número tres mil ciento cuarenta y dos, referida. Ofreció probar los extremos requeridos detallando los medios de que haría uso y pidió finalmente que: corridos los trámites legales, se revocara la resolución de mérito. Agregó que no era indispensable pagar previamente los impuestos y multa, derivados de la liquidación impugnada, para que se le aceptara su recurso, porque tratándose de una liquidación provisional el pago podía hacerse cuando se hiciera la definitiva, como era el criterio del Tribunal al cual se dirigía.

No habiéndose hecho uso de las audiencias otorgadas, se tuvo por contestada negativamente la demanda y se abrió a prueba por quince días, dentro de cuyo término se rindieron las siguientes: resoluciones, actuaciones y documentos que obran en el expediente administrativo objeto del recurso y las sentencias dictadas por aquel mismo Tribunal el cinco de Marzo y veintinueve de Enero de mil novecientos cincuenta y dos, en los recursos interpuestos contra las resoluciones números ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro y cuatro mil ciento sesenta y seis, de "Cervecería Nacional, S. A." y "Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvauidas, S. A.", respectivamente.

Pasada la vista señalada se dictó sentencia, con fecha siete de Septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, declarando improcedente el recurso interpuesto y firme la resolución mi-

nisterial que lo motivó, fallo contra el que se interpusieron los recursos de aclaración y ampliación, que fueron declarados sin lugar. después de lo cual se introdujo recurso de casación por quebrantamiento substancial del procedimiento. Anulada la sentencia referida, por virtud de la casación interpuesta, se mandó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictara la que correspondía, por cuya razón, con fecha trece de Mayo del corriente año, dicho Tribunal volvió a dictar sentencia confirmando la resolución número tres mil ciento cuarenta y dos, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la modificación de que deja sin efecto el ajuste hecho por los arrendamientos del local que ocupa la fábrica en mención.

Pedida aclaración y ampliación de esta sentencia, fué declarada sin lugar la ampliación, pero aclarada "en el sentido de que "la técnica contable establece que para admitir la depreciación de valores activos deben estar prestando el servicio para el cual se destinen, cosa esta que no se cumple en el presente caso, ya que la instalación de la nueva planta aún se encuentra en proceso" según expusieron los Auditores, argumentos que hace suyos el Tribunal;...".

RESULTA:

El tres de Junio último, Edgar Castillo Sinibaldi, con auxilio del Abogado Héctor Horacio Zachrisson Descamps, se presentó a esta Corte diciendo: "En contra de la sentencia referida, dictada el día 13 de Mayo de 1955, vengo dentro del término legal a INTRODUCIR RECURSO DE CASACION". Se fundó para ello en el inciso primero del artículo 506 del Decreto Legislativo número 2009 y citó como violados los artículos 74, 75 y 76 del Decreto Gubernativo 2191.

Al exponer los motivos de su recurso copia los artículos que dice fueron violados y agrega que el Tribunal sentenciador contradijo e interpretó erróneamente el sentido de aquellos preceptos, al aceptar, de acuerdo con la técnica contable, que para admitir la depreciación de valores activos, éstos deben estar prestando el servicio para el cual se destinan, pues con tal proceder se funda en la técnica usada por los Auditores revisores y no en lo que mandan los artículos transcritos.

Tramitado debidamente este último recurso y pasado el día señalado para la vista, es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

Fundado en el inciso primero del artículo 506 del Decreto Legislativo número 2009, el Ge-

rente de "Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvadas, Sociedad Anónima", impugna la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, alegando que, al apoyarse éste en lo que diga la técnica contable, para admitir la depreciación de valores activos, y no en lo que dispone la ley, infringió, —por contradicción e interpretación errónea—, los artículos 74, 75 y 76 del Decreto Gubernativo 2191, pues "La Técnica que usen los Señores Auditores X o Z no puede contradecir y menos oponerse al contenido legal, claro y expreso de los artículos citados".

La simple lectura de la sentencia recurrida y especialmente su segundo considerando, que es el que en concreto se refiere este recurso, deja ver sin esfuerzo alguno que el Tribunal sentenciador, para confirmar lo resuelto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre este particular, se funda en que, el ajuste por "Depreciaciones", —en el llamado "Gastos de Instalación Nueva Planta" en la contabilidad de la empresa revisada—, se dice que corresponde a todo el año mil novecientos cuarenta y nueve, lo que él no acepta, porque los alquileres del predio que ocupa la nueva planta comienzan en Septiembre del año citado y aún en mil novecientos cincuenta dicha planta se encontraba en montaje, lo mismo que en el año que corre. Es decir: que no estando en servicio la nueva planta no pueden hacerse las depreciaciones que sobre ella pretende la empresa recurrente.

Al aclarar el fallo de mérito, en cuanto al punto relacionado, dice el Tribunal que hace suyos los argumentos expuestos por los Auditores, sobre lo que la técnica contable establece para admitir la depreciación de valores activos, pero con esto en nada falta a la ley, tratándose de una nueva planta, porque el artículo 76 del Decreto Gubernativo 2191 coincide con el criterio de la técnica contable, cuando establece que: "La depreciación principiará precisamente el día en que se inicien las actividades de la empresa..."

El recurrente, copiando en letras mayúsculas las partes de los artículos 75 y 76 del Decreto Gubernativo 2191, en las que hablan de aumento de valores y desembolsos con el fin de mejorar los bienes, ampliarlos o ponerlos en condiciones de prestar mejor servicio, así como de las nuevas adquisiciones, parece que a última hora tratara de fundar en esto la razón de su recurso, pero él mismo acepta que se trata de una NUEVA PLANTA, al tener en las partidas asentadas en su contabilidad, por las inversiones hechas con tal objeto, el rubro: "GASTOS INSTALACION NUEVA PLANTA" y alegar que de sus dependencias ya tenían

algunas en servicio desde mil novecientos cuarenta y ocho. Además, tratando de probar que la nueva planta se encontraba ya en servicio, toma como base el recibo por alquileres del mes de Septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, mientras que si fuera como insinúa, pues no afirma, que se trate de aumento de valores o desembolsos, su prueba se habría dirigido a establecer la fecha de esos desembolsos y no aquella en que dice haber comenzado a prestar servicio la nueva instalación.

De manera que habiéndose aceptado que se trata de una nueva planta, lo resuelto por el Tribunal sentenciador está arreglado a la ley y no violó los artículos que se citaron como tales.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 224 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 27, 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, declara sin lugar el presente recurso, condena en las costas del mismo al recurrente y a pagar una multa de veinticinco quetzales que en su caso podrá conmutar con diez días de prisión simple. Notifíquese, repóngase el papel en la forma de ley y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes a donde corresponde. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — C. Arias Ariza. — Ante mí: Juan Fernández C.

CIVIL

Esclarisa Valdés Leal viuda de Rosito contra Ewira Escamilla Grimaldi de León.

DOCTRINA: Dada la naturaleza particular y limitada del recurso de casación, al acusarse error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, es preciso, además de señalar apropiadamente el error o errores cometidos a juicio del recurrente, individualizar en forma inequívoca las pruebas que los contengan.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintidós de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, con fecha veintisiete de Junio del año en curso, en el juicio ordinario de

propiedad y posesión seguido por Esclarisa Valdés Leal viuda de Rosito contra Elvira Escamilla Grimaldi de de León, de cuyos antecedentes,

RESULTA:

Esclarisa Valdés Leal viuda de Rosito se presentó al Juzgado Primero de Primera Instancia, el primero de Agosto de mil novecientos cincuenta, exponiendo: que por escritura que autorizó el Notario Rigoberto Valdés Calderón el catorce de Febrero de mil novecientos cuarenta y siete, compró a María Elena Mazariegos Reinos de Oliva, la finca urbana número treinta y siete mil setecientos setenta (37,770), folio ciento cuarenta (140), libro trescientos diecisiete (317) de Guatemala, que forma la casa número setenta y cuatro "A" de la Avenida de los Arboles, en esta capital y la cual se desmembró de la finca urbana cuya propietaria actual es la demandada; que contra lo que aparece en su respectivo título de dominio e inscripción en el Registro, la pared que del lado Sur divide su propiedad de la de la señora Escamilla Grimaldi de de León, no está colocada en línea recta como legalmente corresponde, pues se introduce sobre su predio haciendo una escuadra que tiene una extensión, de Oriente a Poniente de seis metros setenta y siete centímetros, y de un metro ochenta centímetros de Norte a Sur; que como le ha sido imposible obtener algún arreglo sobre el particular con la mencionada señora, promovía contra ella demanda ordinaria a fin de que el Tribunal declare: que la presentada era legítima propietaria de la fracción o recodo relacionado y que, en consecuencia, debía ponérsele en posesión del mismo dentro del término de tres días, así como que la demandada quedaba obligada al pago de daños, perjuicios, costas, frutos y rentas. Ofreció rendir varias de las pruebas que la ley permite y acompañó a su demanda: testimonio de la escritura de compraventa de la finca de su propiedad antes identificada y dos certificaciones del Registro de Inmuebles conteniendo las inscripciones de dominio de la misma y la de propiedad perteneciente a la demandada.

Contestada la demanda en sentido negativo por Elvira Escamilla Grimaldi de de León, quien a la vez interpuso la excepción perentoria de falta de acción, se abrió a prueba el juicio por el término de treinta días, habiéndose ampliado por gestión de parte a diez días más. Durante la dilación probatoria y su ampliación, ninguna de las partes rindió prueba alguna.

RESULTA:

Con tales antecedentes el Juzgado dictó sentencia, declarando: "a) sin lugar la presente demanda; b) como consecuencia ABSUELVE a la señora ELVIRA ESCAMILLA GRIMALDI DE LEON, de la misma; c) sin lugar la excepción perentoria de falta de acción interpuesta por la demandada; y d) que las costas son a cargo de la actora.

Al conocer en alzada la Sala respectiva, previa inspección ocular que practicó en el predio objeto de la controversia, pronunció el fallo que se examina expresando en el punto declarativo: "REVOCA la sentencia examinada en sus puntos a), b) y d) y resolviendo conforme a derecho DECLARA: A) Que doña Esclarisa Valdés Leal viuda de Rosito es propietaria de la fracción de terreno que constituye el recodo que dió origen a la demanda, que por consiguiente debe restituírsele por doña Elvira Escamilla Grimaldi de de León la posesión de dicha fracción, dentro de tercero día tomando como base el plano levantado al hacer la desmembración. B) Que doña Elvira Escamilla Grimaldi de de León no queda obligada a la reparación de daños y perjuicios ni a la devolución de frutos. C) Que las costas del presente juicio son a cargo de la misma señora de de León; y, CONFIRMA la sentencia en el punto c) que declara sin lugar la excepción de falta de acción interpuesta". La Sala considera como principales razones que fundamentan su fallo, que con la documentación que la actora acompañó a su demanda se demostró que es propietaria de la finca identificada en autos, teniendo las medidas que en tal documentación se acreditan, y que al practicarse inspección ocular en diligencia para mejor fallar por el propio Tribunal sentenciador, se estableció que efectivamente existe un recodo en la parte oriente de la finca de la demandante, no obstante que según el plano respectivo la propiedad de la actora forma un rectángulo perfecto; que la señora Valdés Leal viuda de Rosito ha probado así ser propietaria de la fracción de terreno que forma el recodo mencionado, del cual se encuentra en posesión material, indebidamente, de la demandada señora Escamilla Grimaldi de de León, por lo que está obligada a entregarla; que por no haberse demostrado que existiera mala fe de parte de la demandada, debe absolvérsele de la acción de daños, perjuicios y frutos; y que por innecesario, no se analiza la excepción perentoria de falta de acción interpuesta por la demandada.

Contra tal sentencia y con el auxilio del Abogado Feliciano Fuentes Alvarado, Juana Everilda de León Escamilla de Herrera, como apo-

derada especial de Elvira Escamilla Grimaldi de León, introdujo recurso de casación por violación y aplicación indebida de la ley y por "error de derecho al apreciar la prueba que sirvió de base al Tribunal de segunda instancia para dictar el fallo condenatorio". Señala como infringidos los artículos 289 del Código Civil y 259, 260, 261 y 374 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil; y como fundamento del recurso cita los artículos 505, 506 incisos 1° y 3° 511, 512, 514 y 518 del Código últimamente mencionado, y 2° del Decreto 388 del Congreso de la República. Aparte de lo anterior, el único argumento de la recurrente consiste en decir que "la estimación que hizo la Sala de los documentos y demás pruebas que sirven de base a la sentencia no se ajustan a las normas jurídicas y al ser apreciadas en forma desacertada y equívoca las conclusiones que de ella se sacan fueron erróneas y de consiguiente el fallo contra el cual recurso contiene conceptos equivocados, cometiéndose error de derecho al apreciar la prueba". Habiendo tenido lugar la vista en el día señalado, procede resolver.

—I—

CONSIDERANDO:

Invocado como caso de procedencia el contenido en el inciso 3° del Decreto Legislativo 2009, que por razón lógica debe tratarse en primer término y que se refiere a cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o de hecho, cabe observar que, dada la naturaleza particular y limitada del recurso de casación, es imprescindible para hacer posible su estudio, que además de señalarse apropiadamente el error o errores acusados, se individualicen de manera inequívoca las pruebas que los contengan a juicio del recurrente, como en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal.

En el presente caso, faltando ostensiblemente a este fundamental requisito, la recurrente hace una estimación general de la prueba rendida en el juicio para deducir que fué apreciada erróneamente, lo que impide a esta Corte efectuar el examen del vicio aludido, y, como consecuencia, de las violaciones legales que se puntualizan.

—II—

CONSIDERANDO:

El otro caso de procedencia enmarcado en el inciso 1° del artículo 506 del Código que antes se citó, se menciona para fundamentar la "violación" y "aplicación indebida" de los preceptos enumerados en el escrito de interposición.

Aunque la recurrente omite explicar en qué consisten las infracciones denunciadas para tener así elementos de juicio en el examen respectivo, comparando los artículos que se citan con los hechos que el Tribunal sentenciador ha tenido por probados, claramente se infiere la improcedencia de la impugnación. En efecto, el artículo 289 del Código Civil, que textualmente dice "El discernimiento de la tutela, se rige por la ley del lugar del domicilio del menor o incapacitado", ni remotamente tiene relación y menos aplicación al caso sub-litis, motivo por el cual no pudo ser violado por la Sala; y por lo que hace a los artículos 259, 260, 261 y 374 del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, correspondientes todos al procedimiento en aspectos de la prueba, sólo podrían ser objeto de examen dentro del caso de procedencia estimado en el Considerando anterior que, como allá quedó expresado, no se planteó en debida forma.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en lo que prescriben los artículos 222, 223 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 521 y 524 del Decreto Legislativo 2009, DESESTIMA el presente recurso, condenando a la recurrente en las costas del mismo y al pago de una multa de veinticinco quetzales que, en caso de insolvencia, computará con quince días de prisión simple. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Águilar Fuentes. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Alberto Argueta. — Ante mí: Juan Fernández C.—

CRIMINAL

Contra Alcira Bolaños Avila de Avila por el delito de lesiones.

DOCTRINA: *Es ineficaz el recurso de casación que se interpone por error de derecho en la apreciación de la prueba cuando en la sentencia impugnada, se omite el análisis de una o varias de las pruebas aportadas al juicio porque esto constituye error de hecho.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, treinta de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus respectivos antecedentes se examina la sentencia dictada

por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, el cinco de Octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en la causa que por el delito de lesiones se siguió en el Juzgado de Primera Instancia de Escuintla, contra Alcira Bolaños Avila de Avila.

RESULTANDO:

Con fecha tres de Enero de mil novecientos cincuenta y tres, el Sargento del décimo pelotón de la Guardia Civil Ambulante, Víctor Manuel Lemus Paredes, formuló parte para el Juez de Paz de Tiquisate, informándole que el dos del mismo mes, a las veinte horas y treinta minutos, se le había presentado Anita López manifestándole que ese día, a eso de las diecisiete horas, había sido herida su hermana María Teresa López cuando se dirigía a su casa, procedente del hospital de aquella localidad; que la hechora había sido Alcira Bolaños, quien reside en los ranchos que están cerca de la orilla del río y es concubina de un señor de nombre Víctor que trabaja en el hospital a donde fué llevada su hermana para ser curada. Este parte fué debidamente ratificado, después de lo cual declararon: la ofendida María Teresa López Flores expresando, que: a eso de las diecisiete horas y diez minutos del día viernes dos del mes antes referido, cuando se dirigía a su habitación, después de salir del trabajo que tiene en el hospital, al pasar frente al parque de la Compañía, situado a inmediaciones de la Iglesia católica de la finca, fué herida por Alcira Bolaños a quien acusa formalmente; que momentos antes dicha señora Bolaños la mandó llamar con una niña que la declarante no conoce, llamado al cual no atendió por no tener relaciones con ella, por lo que salió la Bolaños a la calle y la hirió; que presenciaron el hecho Paula Ramírez, Alberto Sandoval y Gerardo Martínez; que presume haya procedido en esa forma su ofensora por celos infundados con su marido Víctor Avila, de quien la lesionada recibió un abrazo de "año nuevo" el treinta y uno de Diciembre anterior; que las lesiones inferidas fueron dos en la cara, una en el hombro izquierdo y otra en el antebrazo derecho, que el Juez instructor dió fe de tener a la vista. Anita López dijo que el día de autos, a eso de las diecisiete horas y quince minutos, se había presentado a su casa el señor Alberto Sandoval a darle aviso que su hermana Teresa López había sido herida, pero que ya dos guardias la habían llevado al hospital y que por eso ella había ocurrido a quejarse a la Guardia Civil; que la heridora era Alcira Bolaños, según le indicó su hermana.

El cinco del mes y año en referencia, el Doctor J. Sultán, Jefe del Servicio Médico de aquel hospital, informó que las lesiones que presentaba María Teresa López eran cinco y después de describirlas dice: "La enferma tardará en curar 30 días con asistencia facultativa quedándole cicatrices visibles, respecto a la función de la mano derecha el pronóstico es reservado debiendo esperar un tiempo de 30 días para poder ampliar este informe".

Examinado Gerardo Martínez Dávila, dijo: que trabaja en el hospital de la Compañía Agrícola de Guatemala, al igual que María Teresa López, de donde salen a las diecisiete horas; que el día viernes dos del mes de autos, caminaba hacia su habitación unos diez metros atrás de María Teresa López cuando vió que una **patoja** llamó a ésta hacia el interior del parque, lo que hizo que se quedara parada en la puerta del mismo y le diera tiempo de adelantarse algunos pasos en cuya ocasión oyó que Alcira Bolaños le dijo a María Teresa: "si yo soy la que te estoy llamando hija de la gran p...", contestándole la insultada que no quería pelear, con lo cual él se quedó parado viendo entonces que la ofendida salió corriendo y tras ella la Bolaños hasta alcanzarla y tomarla del cabello; que María Teresa López estuvo un rato golpeando a la Bolaños con una sombrilla que andaba llevando, pero cuando ésta se le cayó se agarraron a la lucha cogiéndose del cabello y de repente vió que la López estaba herida de un brazo y de la cara, saliendo de huida por el parque la Bolaños; que en vista de lo ocurrido él se acercó a la López y le aconsejó que se fuera al hospital para que la curaran.

Roberto (y no Alberto) Latín Escobar asegura sólo haber visto a María Teresa López ir herida por el comisariato de la Compañía por lo que fué a darle aviso a su hermana, ignorando quién la hirió.

Paula Ramírez Molina dijo: que trabaja en la lavandería del hospital de la Compañía Agrícola de Guatemala con María Teresa López; que el viernes dos de Enero de aquel año, al salir del trabajo a las diecisiete horas y llegar frente a la puerta del parque de la finca, una niña le preguntó a la López si a ella le llamaban la china y, como ésta le contestara que sí, la misma niña le dijo: "Ahí la llama Víctor Avila" y preguntando quién era éste, se quedó parada frente a la puerta, saliendo una canche que es Alcira Bolaños y la cogió

del cabello por lo que María Teresa botó unas cosas que le recogió la declarante, quién al incorporarse vió que estaba herida en la cara, en un brazo y en el hombro izquierdo, por Alcira Bolaños que llevaba un instrumento de metal blanco no pudiendo distinguir si era navaja o cuchillo; que la Bolaños salió huyendo por entre el parque mientras la herida se iba al hospital.

Capturada Alcira Bolaños fué indagada y dijo: que conoce a María Teresa López porque es "querida de su marido" y que María Teresa era quien le había atacado a ella el viernes dos del mes de Enero en referencia; que ella la hirió con el fierro que le quitó de las manos; que quien mandó a llamar fué la López y no la Bolaños a ella; que el fierro se quedó tirado y la López debe haberlo recogido; que ella hirió a María Teresa López porque no supone sino que es cierto que tiene relaciones amorosas con su esposo, porque varias veces los ha encontrado juntos, paseando.

Victor Avila Enríquez dijo que conoce a las partes de este asunto porque Alcira Bolaños es su esposa y María Teresa López Flores es su amante; que su esposa hirió a ésta porque ella misma se lo dijo en su casa, pero que no le consta de vista.

Enviada la causa al Juzgado de Primera Instancia de Escuintla, este Tribunal le motivó prisión por lesiones a Alcira Bolaños de Avila y mandó ampliar el informe médico y practicar las demás diligencias necesarias, no habiéndose obtenido más trámites que el de elevar a plenario la causa, después de agregarle el informe del Médico Julio Pineda sobre que Alcira Bolaños presentaba lesiones que curarían en siete días sin tratamiento médico.

La enjuiciada no se conformó con los cargos que se le formularon, pues dijo que si hirió a la López lo hizo en su defensa ya que ella se le había ido encima con un fierro que le quitó y con el mismo le había dado y además sostenía relaciones amorosas con su esposo y ello la había indignado. Logrado el informe en que se dice que la ofendida curó en dieciocho días, quedándole impedimento temporal y parcial de la mano derecha, le fué concedida a la enjuiciada su excarcelación bajo fianza; se le nombró defensor y se tuvo por formalizada la acusación oportunamente y habiéndose abierto a prueba la causa, se rindieron las siguientes: repreguntas a Gerardo Martínez Dávila, quien no ratificó su primera declara-

ción y, contestando un interrogatorio formulado por la defensa, dijo no haber presenciado el hecho motivo de esta causa; repreguntas de Paula Molina Ramírez en la que ratifica su primera declaración, pero dice tener interés en que se castigue a la ofensora, siendo amiga de la ofendida y declaraciones de Rogelio Velásquez Reina y Victoria Juárez Camey, quienes contestando afirmativamente el interrogatorio formulado por el defensor dicen que la lesionada atacó a la ofensora.

RESULTANDO:

Con los antecedentes detallados, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia condenando a la enjuiciada a sufrir la pena de dos años de prisión correccional más las accesorias de ley y dejó abierto el procedimiento contra Gerardo Martínez Dávila.

Al conocer la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de aquel fallo, lo confirmó en todas sus partes, por medio de la sentencia que se examina, considerando para ello que "En el presente caso están integrados los elementos que tipifican el delito de lesiones y estando también probada la culpabilidad de la procesada Alcira Bolaños Avila de Avila con su propia y espontánea confesión, procede confirmar la sentencia condenatoria proferida por el Juez de Primera Instancia de Escuintla, toda vez que la pena impuesta es la que corresponde en derecho de conformidad con los informes médico-legales y tomando en cuenta la confesión de la encartada, ya que sin ella hubiera sido procedente absolverla, porque del estudio de las actuaciones no se desprende ninguna otra prueba en su contra, ya que las declaraciones existentes en el proceso no constituyen plena prueba para ameritar por si solas, la aplicación de un fallo condenatorio".

RESULTANDO:

Con auxilio del Abogado Rafael Ugarte Rivas, la enjuiciada introdujo recurso de casación por error de derecho en la apreciación de la prueba, diciendo: "yo acepté haber lesionado a la ofendida, pero probé mediante los testimonios de los señores Rogelio Velásquez Reyna y Victoria Juárez QUE FUI PROVOCADA por la ofendida, LO QUE EXCLUYE EN MI LA INTENCION DE LESIONAR a que se refiere el fallo de segunda instancia, y por consiguiente

resulta claro que el Tribunal de segundo grado ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, **ACEPTANDO UNICAMENTE MI CONFESION**, no obstante que da por **ACEPTADO TAMBIEN** que FUI **PROVOCADA**, al declarar que confirma el fallo de primera instancia "en todas sus partes", apreciando que es violatoria de los artículos 11, 22 inciso 4°, 67, 68, 81 del Código Penal, en relación con los artículos 566, 567, 573 incisos 1°, 2°, 3° y 4° del Código de Procedimientos Penales".

"Fundo el presente recurso de casación por violación de ley proveniente de error en la apreciación de las pruebas, en las disposiciones citadas y en los artículos 673, 674 inciso 1°, 675, 676 incisos 5° y 6° Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 4° Dto. del Congreso 487 y 687 P. Penales".

Pasado el día señalado para la vista de este recurso es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

Recurre la reo por violación de ley, proveniente de error de derecho en la apreciación de las pruebas, fundándose en el artículo primero del Decreto 487 del Congreso y haciendo consistir el error alegado, en que ella probó con los testigos Rogelio Velásquez Reyna y Victoria Juárez, que fué provocada y el Tribunal sentenciador sólo aceptó la atenuante de su confesión. Aduce que, aunque en el fallo impugnado no se hace otra consideración distinta de la que ella copia, al confirmarse el fallo de primer grado en todas sus partes debe entenderse que hay entera conformidad con él y por consiguiente deben relacionarse ambas sentencias en este recurso.

Efectivamente, al leer la sentencia dictada por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, no se encuentra referencia ni análisis de las declaraciones de Rogelio Velásquez Reyna y Victoria Juárez, pero esa omisión no constituye un error de derecho sino un error de hecho, pues ninguna regla de estimativa se mal interpretó o aplicó indebidamente, sino que se omitió en su totalidad la estimación de tales declaraciones, en cuya virtud no cometió error de derecho la Sala sentenciadora, al proceder como lo hizo, ni violó los artículos 566, 567 y 573 en sus incisos 1°, 2°, 3° y 4° del Código de Procedimientos Penales.

CONSIDERANDO:

Aunque taxativamente dice la recurrente que introduce su recurso por violación de ley, proveniente de error en la apreciación de las pruebas, también cita como casos de procedencia los señalados por los incisos 5° y 6° del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, relativos al error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia, en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal, o se haya omitido considerarlas; y, cuando la pena impuesta no corresponda según la ley a la calificación aceptada respecto del hecho justiciable o de las circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal. Relaciona con estos casos de procedencia los artículos 11, 22 inciso 4°, 67, 68 y 81 del Código Penal.

El estudio comparativo de los artículos que se acaban de mencionar, con los casos de procedencia citados y la sentencia impugnada, da como resultado que se llegue a la conclusión de que no se han infringido los artículos que se dicen violados, porque los hechos que se tienen por probados en la sentencia, así como la circunstancia modificativa de la pena que en la misma se aprecia, corresponden exactamente con los fundamentos en que aquella se basa, y no es posible hacer un nuevo análisis de las pruebas rendidas, por las razones ya expuestas en el anterior considerando.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224, 227, 233 del Decreto Gubernativo 1862; 686 y 690 del Código de Procedimientos Penales, declara: **IMPROCEDENTE** este recurso e impone a la recurrente quince días de arresto, que podrá conmutar a razón de quince centavos de quetzal por día. Notifíquese y como corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Ernesto Rodas Santa Cruz, por el delito de hurto.

DOCTRINA: *Los informes del Oficial Archivero de la Penitenciaría Central referentes a entradas y salidas de los reos de ese centro penal, son insuficientes para demostrar que las personas a que se refieren han cometido uno o más delitos. En consecuencia, comete error de derecho en la apreciación de la prueba el Tribunal que, basándose en una de esos informes, da por establecida la comisión de varios delitos por parte del procesado para calificarlo de multi-reincidente.*

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, nueve de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación y con sus respectivos antecedentes, se examina la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones el primero de abril del corriente año, en el proceso que por el delito de hurto se siguió en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Departamental contra Ernesto Rodas Santa Cruz.

RESULTA:

El seis de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, el Jefe del Primer Cuerpo de la Guardia Civil, Eduardo Pineda Morales, dió parte al Juez Sexto de Paz de esta Capital, que Ernesto Rodas Santa Cruz y la concubina de éste, Hortensia Ramírez Hernández, habían sido conducidos a la detención, porque el cuatro de dicho mes, a las diecinueve horas, y en el Parque Central le habían hurtado a Martha Thielmann su billetera que contenía una licencia de manejar vehículo, varias fotografías, una macaco de plata y un cheque por la cantidad de cincuenta y cinco quetzales contra el Banco de Londres, cheque que el día cinco se disponían a cambiar a Raymundo Arriaza Ayala, quien avisó a la propietaria y dió parte a la autoridad. La ofendida confirmó ser cierto lo de la pérdida de su billetera que contenía los objetos en referencia y unos pocos centavos, la cual llevaba dentro de su bolsa de mano, que resultó abierta; que el cheque le fué extendido por Kurt Wulff, en cuya oficina trabaja, y que se constituye acusadora de los responsables del hurto. Raymundo Arriaza Ayala expuso: que vive en el "Hospedaje Cobanero" y que hacía como seis meses llegó a hospedarse a dicho lu-

gar un individuo que dijo llamarse Juan Salvatierra, acompañado de su concubina cuyo nombre ignora; que este individuo una vez le prestó cuatro quetzales, yéndose después a vivir a Escuintla; que habiendo regresado, ya no se hospedó en el mismo lugar, sino mandó a traer sus cosas, con su concubina, quien además se llevó dos sábanas del mesón; que el día cinco de agosto, como a las quince horas, el exponente transitaba por la Sexta Avenida y Dieciocho calle cuando se hizo encuentro con Salvatierra y su mujer, por lo que le cobró la cuenta que le tenía, más el valor de las dos sábanas, amenazándolo con que lo pondría preso si no le pagaba, y como Salvatierra vió que ya buscaba un guardia, le dijo que le diera vuelta por valor de cuarenta y nueve quetzales, mostrándole un cheque por cincuenta y cinco quetzales extendido a favor de Martha Thielmann; que el exponente dijo que fueran a averiguar con la patrona de la pensión sobre la legitimidad del cheque, y dicha señora Blanca Aída Valdés vió que el cheque no estaba endosado, por lo que hizo las averiguaciones por teléfono, comprobándose que la dueña del cheque lo había perdido, lo que motivó que el dicente llamara una radiopatrulla que capturó a Salvatierra y su mujer, a pesar de que se pusieron en precipitada fuga. Indagada Hortensia Ramírez Hernández negó rotundamente los hechos y manifestó que el día de autos se encontraba en su cuarto de habitación en la pensión "La Paz", en compañía de su madrastra Enriqueta Cruz. Ernesto Rodas Santa Cruz, por el contrario, confesó ser cierto que él sustrajo de un bolso de una señorita la billetera en cuestión, sin acompañarse de nadie, diciendo posteriormente que la había encontrado tirada en el Parque Central; que no es cierto que quisiese cambiar el cheque a Arriaza Valdés, sino que lo enseñó para preguntarle qué decía y Arriaza se entró a llamar a la radiopatrulla; que en esta ocasión no se acompañaba de su mujer. Pedro Rosales Siam dijo: constarle que el cuatro de agosto del año próximo pasado, Hortensia Ramírez Hernández no salió de su cuarto de habitación, debido a que estaba enojada con su marido Ernesto Rodas, que fué el único que salió.

RESULTA:

Que habiendo pasado las primeras diligencias al Juzgado Sexto de Primera Instancia Departamental, este Tribunal, con fecha nueve de agosto del mismo año motivó la prisión provisional de los dos encartados, por el delito de hurto, habiendo reformado con posterioridad el

auto de prisión a Hortensia Ramírez Hernández, a quien dejó libre sujeta a resultas. El Sub-Inspector de la Guardia, Manuel Pineda Rodríguez, dijo haber capturado a la Ramírez Hernández porque se le acusó de que trataba de cambiar el cheque en la pensión "Cobanera", y a Rodas Santa Cruz, por ser marido de la primera y porque ésta dijo que él le había dado el cheque para que lo cambiara, encontrándole a Rodas al ser registrado, el macaco de plata de propiedad de la perdidosa. A solicitud del Juez, el Oficial Archivero de la Penitenciaría Central informó al Director del establecimiento sobre las veces que Rodas Santa Cruz ha ingresado a dicho centro penitenciario, apareciendo, entre otras: 1) que ingresó el veinte de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro por el delito de hurto y a disposición del Juzgado Quinto de Paz, saliendo el veintiuno de enero del año siguiente por orden del Juzgado Quinto de Primera Instancia, por haber cumplido; 2) que ingresó el siete de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco consignado al Juzgado Sexto de Primera Instancia por el delito de hurto, saliendo el veintidós de diciembre del mismo año por orden de esta Corte, por haber cumplido; 3) que ingresó el once de junio de mil novecientos cuarenta y seis por el delito de hurto, consignado al Juzgado Quinto de Primera Instancia, saliendo el treinta de noviembre del siguiente año por orden de esta Corte, por haber cumplido; y 4) que ingresó el veinticuatro de abril de mil novecientos cuarenta y ocho por el delito de robo, puesto a disposición del Juzgado Octavo de Primera Instancia y salió el dieciséis de abril del año siguiente, de orden de esta Corte, por haber cumplido. Tiene otros ingresos por vagancia y por actos inmorales. María Luisa Delprée, Rosa María Crespo y Kurt Wulff Koll declararon sobre la propiedad y preexistencia de los objetos hurtados. Guillermo Quiroa fué nombrado experto valuador de tales objetos, a los cuales les asignó un valor de dos quetzales, fuera del valor del cheque, que considera puramente nominal.

RESULTA:

Que elevada la causa a plenario, se le tomó al reo confesión con cargos por el hecho de haber sustraído a la ofendida la billetera con los objetos ya referidos, manifestando que no se conformaba con dicho cargo, y que si con anterioridad había aceptado su culpabilidad, lo hizo para que su mujer obtuviera su libertad por encontrarse enferma su pequeña hija. A propuesta del reo se nombró su defensor al Abogado Héctor Polanco Rodríguez, y ordenados

los traslados de ley, se tuvo por desistida de la acusación a Martha Thielmann por no haber evacuado su traslado oportunamente, ordenándose que el procedimiento continuara de oficio por ser delito público el pesquisado. El defensor argumentó en su defensa: que el procesado no confesó haber sustraído la billetera sino que la encontró en el suelo; que como el reo no logró su propósito de cambiar el cheque, simplemente se trata de una tentativa de estafa, habida cuenta de que un cheque no endosado no tiene valor alguno y únicamente podría atribuírsele el hurto del macaco.

RESULTA:

Que el doce de noviembre del año próximo pasado, el Juez dictó su sentencia en la siguiente forma: que con la confesión del reo se probó que sustrajo de la bolsa de Martha Thielmann la billetera conteniendo los objetos ya mencionados, no probando los extremos de su retractación, y antes bien, existiendo en su contra las declaraciones de Raymundo Arriaza Ayala y guardia Manuel Pineda Rodríguez; que el cheque adquiere su valor (nominal) desde que es firmado por el librador, siendo el endoso un medio de transmitirlo y no un acto de creación de valor; que debe abonársele la atenuante de la confesión, pero que ésta queda compensada con la agravante de que es multireincidente, por haber cometido más de tres delitos; que lo hurtado debe estimarse en la cantidad de cincuenta y siete quetzales, condenándolo como autor del delito de hurto a la pena de dieciocho meses de prisión correccional y a las demás accesorias de ley, pero sin indicar si la pena tiene el carácter de inmutable o no,

RESULTA:

Que por recurso de apelación contra dicho fallo, los autos fueron elevados a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Al evacuar los traslados de ley, el Procurador manifestó su desacuerdo con que se aplicase al reo la agravante de multi-reincidencia, porque el informe rendido por el Oficial Archivero de la Penitenciaría Central no llena los requisitos de ley; y el Fiscal expuso: que para declarar la multi-reincidencia, deberían pedirse en auto para mejor fallar al Departamento de Estadística Judicial los antecedentes penales del reo, por considerar que el documento ya referido no ameritaba una declaración de esa naturaleza. No obstante esas advertencias, la Sala omitió el auto para mejor fallar y dictó la sentencia que se examina. La Sala hace iguales consideracio-

nes, que el Juez en cuanto a la culpabilidad del reo, pero en la aplicación de la pena expresa: que la pena de dieciocho meses de prisión correccional debe rebajarse en una tercera parte por la atenuante de la confesión del reo, y a la vez esta pena duplicarse por la agravante de multi-reincidencia, por aparecer que el procesado cumplió con anterioridad cuatro condenas por delitos contra la propiedad, por lo que se le debe declarar delincuente habitual, y que la pena impuesta tiene el carácter de inmutable por la clase de delito. Por lo expuesto, confirma la sentencia con las modificaciones indicadas, imponiéndole al reo la pena de dos años de prisión correccional.

Contra esta sentencia interpuso el Procurador de la Sala, Abogado Pedro Aycinena Salazar, el presente recurso de casación, citando como casos de procedencia, los contenidos en los incisos 5°, 6° y 8° del Artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, siendo el último inciso el Artículo 1° del Decreto 487 del Congreso, y estimando como violados los Artículos 602 en sus incisos 2° y 3°; 605 y 568 del Código de Procedimientos Penales. Considera que la Sala cometió error de derecho en la apreciación de la prueba, al declarar delincuente habitual al procesado, basándose única y exclusivamente en el informe rendido por el Oficial Archivero de la Penitenciaría Central; que a su juicio, no existe plena prueba de esa circunstancia modificativa de la responsabilidad, puesto que para ello se hace indispensable que conste que el procesado ha cometido más de tres delitos y el documento mencionado no reúne los requisitos de autenticidad, en primer lugar, porque no fué expedido por funcionario público, y en segundo, porque no está dentro de las funciones del Archivero el control de reincidencia de los reos; que en el registro aludido se anotan los ingresos y egresos del centro penal, con independencia del procedimiento judicial incoado; que al cometerse el error en la apreciación de la prueba, la Sala cometió error en la calificación de los hechos que se declaran probados y que originaron la circunstancia agravante ya mencionada, no correspondiendo al reo la pena de dos años; que debió aplicarse el Artículo 79 del Código Penal, reduciendo la pena de dieciocho meses en una tercera parte, por la atenuante de la confesión. Se funda el recurrente además en los Artículos 673, 674 inciso 1° y 687 del Código de Procedimientos Penales, y 2° y 4° del Decreto 487 del Congreso.

Señalado día para la vista, es el caso de resolver.

—I—

CONSIDERANDO:

Que es evidente la equivocación del juzgador al estimar como probado con el sólo informe del Archivero de la Penitenciaría Central "que el procesado cumplió con anterioridad cuatro condenas por delitos contra la propiedad", ya que el susodicho informe, estimándolo como documento auténtico, solamente probaría los ingresos y egresos del procesado a ese centro penitenciario, pero nunca las condenas definitivas que hubiese sufrido el enjuiciado por delitos contra la propiedad, toda vez que esta circunstancia estaría fuera del rol de sus atribuciones, pues en tal Archivo no se lleva otro control que el ya mencionado de los ingresos y egresos de los reos. De lo expuesto se deduce que el Tribunal sentenciador cometió error de derecho en la calificación de la prueba, violando los Artículos 602 en sus incisos 2° y 3° y 605 del Código de Procedimientos Penales, que definen y limitan la validez de los documentos públicos o auténticos, exigiendo que el documento sea expedido por funcionarios públicos y que el contenido del mismo se refiera a las funciones que éste desempeña. Por lo expuesto, procede casar la sentencia recurrida en lo que a este aspecto se relaciona.

—II—

CONSIDERANDO:

Que los otros casos de procedencia citados por el recurrente se refieren: a) cuando se haya cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia, en concepto de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y b) cuando la pena impuesta no corresponde según la ley a la calificación aceptada respecto del hecho justiciable, de la participación en él de los procesados o de las circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal. Sin embargo, el recurrente no citó leyes violadas con relación a estos casos ya que los Artículos que cita: 602, 605 y 568 del Código de Procedimientos Penales, se refieren a la estimativa de la prueba, quedando comprendidos en el caso considerado en el párrafo anterior. No obstante, como los motivos en que funda su recurso para estos casos, se limitan a la aplicación indebida de la agravante de multi-reincidencia que hizo la Sala sentenciadora, al casarse la sentencia por error de derecho en cuanto

a los hechos que generan esta circunstancia, el Tribunal debe pronunciarse en los otros aspectos a que se refiere este recurso.

—III—

CONSIDERANDO:

Que probando el informe del Oficial Archivero de la Penitenciaría Central únicamente, como ya se dijo, los ingresos y egresos del enjuiciado en aquel centro penal, sin que demuestre las condenas definitivas sufridas por el enjuiciado, no puede apreciarse en su contra la agravante de multi-reincidencia, contenida en el inciso 17 del Artículo 23 del Código Penal, por cuanto que para ello es preciso que en los autos esté acreditado que el reo ha cometido más de tres delitos, es decir, que exista prueba de que ha recaído sentencia condenatoria en esos delitos. Por consiguiente, no concurriendo esta agravante, no puede aumentarse al reo el doble de la pena que le corresponde, ni declararse delincuente habitual, como lo expresa el mismo inciso 17 del artículo 23 del Código Penal, quedándole en definitiva la pena de dieciocho meses de prisión correccional, rebajada en una tercera parte en virtud de la atenuante de su confesión, tal como lo estimó la Sala antes de hacer la agravación por multi-reincidencia, conforme lo dispone en Artículo 79 del mismo Código Penal.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los Artículos 222, 223, 232, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 686, 687 del Código de Procedimientos Penales, CASA la sentencia récurrida en la parte que motivó este recurso, y resolviendo sobre estos extremos declara: que al reo Ernesto Rodas Santa Cruz, como autor responsable de delito de hurto, se le impone la pena de un año de prisión correccional con carácter de inmutable, por no ser procedente estimar en su contra la circunstancia agravante de multi-reincidencia y duplicarle aquella pena, y tampoco declararlo delincuente habitual. Notifíquese, y como corresponde, devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Alberto Herrarte G.).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra FAUSTO MARIN Y ELIAS MORALES PINZON, por el delito de hurto de semovientes.

DOCTRINA: No procede el recurso de casación, que atribuye al Tribunal sentenciador, error de derecho en la apreciación de la prueba de presunciones humanas, cuando del fallo recurrido aparece que dicha prueba fué estimada con el valor jurídico que le reconoce la ley.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diez de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación, se examina la sentencia proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, el quince de diciembre del año próximo pasado, en la causa seguida a FAUSTO PEREZ MARIN y ELIAS MORALES PINZON, por el delito de hurto de semovientes, en el Juzgado de Primera Instancia de Suchitepéquez, de cuyos antecedentes,

RESULTA:

El diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, el Comandante del Décimo Tercer Pelotón de la Guardia Civil Ambulante, puso a disposición del Juez de Paz de Río Bravo a los individuos Fausto Pérez Marín, Dionisio Paz Milla y Elías Morales Pinzón, por sindicárseles de ser autores de hurto de semovientes en la hacienda "La Cabaña" de esa jurisdicción. Al ratificar el parte expresó: que por el rumor público se supo que los detenidos se dedicaban a hurtar semovientes, habiéndose dado cuenta el día anterior, que en el mes de noviembre se hurtaron unos novillos de la hacienda "La Cabaña", por lo que los capturó. Al indagarse a los capturados, DIONISIO PAZ MILLA declaró: que un día del mes de noviembre, sin poder precisar la fecha, como a eso de las siete u ocho de la noche, fué con su patrón Elías Morales Pinzón a la finca "El Transvaal" anexo de la Hacienda "La Cabaña" a traer cuatro novillos que le entregó Fausto Pérez Marín a su citado patrón como a las once de esa noche; que dicho ganado estaba en uno de los corrales de ese anexo, pero no sabía si lo compró Morales Pinzón a Pérez Marín o al Administrador, por ser simple mozo vaquero, trabajador de Morales Pinzón; que el ganado lo llevaron a Río Bravo y al siguiente día lo

mandó su patrón a Cuyotenango, en el tren; que Morales Pinzón se dedica a comprar y vender ganado. FAUSTO PEREZ MARIN, manifestó: que es cierto que ha entregado bastante ganado a Morales Pinzón, quien es cliente de la hacienda "La Cabaña", teniendo la seguridad que el ganado lo ha comprado Morales en la administración de la finca, habiéndole tocado al declarante entregarlo casi siempre en presencia del Administrador; que hacía como un mes fué a ofrecerle al citado Morales Pinzón tres novillos, por orden del Administrador señor Carlos Estrada de León, los cuales sacó Morales de los corrales de "El Transvaal" anexo de "La Cabaña", por entrega que le hizo el declarante, pero fué de día cuya fecha no recordaba; que Morales llevaba otro novillo, no sabe de dónde, y con los tres que le entregó formó las dos mancuernas; que no fué él quien vendió esos novillos y por consiguiente no ha recibido de Morales ningún precio por ellos, ni lo ha hecho con ninguna otra persona. ELIAS MORALES PINZON, expresó: que era cierto que en el mes de noviembre citado, compró a Fausto Pérez Marín vaquero de la hacienda "La Cabaña", cuatro novillos gordos, que sacó de los corrales de la finca "El Transvaal" anexo de "La Cabaña", entre siete y ocho de la noche, por haber llegado en la tarde por ellos y porque le urgía mandarlos a Cuyotenango al siguiente día; que el negocio lo hizo directamente con Pérez Marín, y su valor se lo entregó en la casa del declarante el treinta de octubre anterior, ante Dionisio Paz Milla y Medardo Rosales, y fué de doscientos quetzales; que hizo ese negocio con el vaquero Pérez Marín y no con el Administrador de la hacienda, porque sabía que aquél es dueño de algunos novillos y en varias ocasiones le ha comprado ganado para revenderlo por ser su negocio; que los cuatro novillos indicados no estaban marcados con ningún fierro y los llevó a Cuyotenango en el tren y los destazó.

RESULTA:

Germán Guillermo Maldonado y Francisco González Pinzón, testigos propuestos por Fausto Pérez Marín, declararon acerca de la honradez del proponente; pasadas las diligencias al Juez de Primera Instancia de Suchitepéquez, decretó la prisión provisional de Pérez Marín y Morales Pinzón, por el delito de hurto de semovientes y por falta de mérito, la libertad de Dionisio Paz Milla. Examinado Carlos Estrada de León, declaró: que era Administrador de la Hacienda "La Cabaña" propiedad de don Carlos Hegel; que el diez de noviembre de ese año los vaqueros de la misma, le dieron par-

te que hacía falta ganado, por lo que dedicaron varios días a su recuento, constatando que efectivamente de un lote de ciento diez novillos gordos, hacían falta ocho cabezas; que buscando en las fincas vecinas encontraron primero a un novillo y en otra fecha a otros dos, pero los cinco restantes desaparecieron de los potreros, por lo que dió parte a las autoridades y el Jefe de la Guardia Civil ambulante interrogó a todos los vaqueros, logrando establecerse que el Jefe de ellos Fausto Pérez Marín, le vendió a Elías Morales hijo, esos cinco semovientes, por confesión del empleado de este último de nombre Dionisio Paz Milla y al ser interrogado Morales confesó que era cierto que por el precio de doscientos quetzales compró a Pérez Marín dos mancuernas de novillos; que los semovientes desaparecidos estaban marcados con los fierros que dibujó en un papel que entregó en el acto de declarar. Pedro Carlos Pinzón Monroy, Samuel y Mauricio Monroy Vielman, declararon sobre conocimiento y honradez de Elías Morales Pinzón. Medardo Rosales López expuso: que entre los días veintinueve y treinta de octubre de aquel año, como a las cuatro o cinco de la tarde llegó a la casa de Elías Morales Pinzón, sita en Río Bravo, a cobrarle unos centavos que le debía por la limpieza de un sitio de propiedad de aquél, habiendo tenido que esperar porque allí estaba el vaquero de la hacienda "La Cabaña" Fausto Pérez Marín, y para no molestarlo se hizo para la puerta y oyó que hablaron sobre negocios de ganado y al rato don Elías sacó un buen manajo de billetes de diferentes valores y se lo entregó a Pérez Marín, sin saber qué suma recibió éste. Rosendo Maldonado Rangel, ex-administrador de la hacienda "La Cabaña", dijo: que él colocó de caporal en dicha finca a Pérez Marín, y durante los siete años que la administró, siempre observó buena conducta y estricta honradez. Carlos Estrada de León, amplió su declaración, en el sentido de que a raíz del hurto de los cinco novillos que denunció, cuando pidió la intervención de la Guardia Civil ambulante, llegó a su oficina el jefe de vaqueros Fausto Pérez Marín a reclamarle que para qué estaba pidiendo policías para buscar el ganado, pues para eso estaban los vaqueros, y cuando llegó el Jefe de la Montada para presenciar el recuento del ganado, aquél se negaba a juntarlo, insistiendo en que no tenía que hacer en ello la policía y que cuando mandó a los vaqueros que fueran a declarar todos obedecieron, menos Pérez Marín, quien en forma insubordinada dijo que él nada tenía que ir a declarar; que en cierta ocasión Pérez Marín, le entregó un pedazo de sogá encontrada en uno de los cuernos de una vaca, diciéndole que

sólo Elías Morales hacía ese nudo; que los novillos a que aludió Pérez Marín que el declarante vendió a Morales Pinzón, fueron tres, que le entregó personalmente, venteados y extendiendo la carta de venta respectiva. Se amplió la indagatoria de Fausto Pérez Marín sobre los anteriores hechos, pero los negó. Narciso Alvarado Álvarez, Domingo de la Cruz de León y Federico Marroquín Pérez, los tres empleados como vaqueros en la hacienda "La Cabaña", declararon acerca de la pérdida de cinco novillos de la citada finca, describiéndolos, así como de haber encontrado una vaca con el pedazo de sogá y haber dicho Pérez Marín que el nudo que tenía sólo Elías Morales lo sabía hacer. Buenaventura Domínguez Vásquez, nombrado experto valuador, asignó a cada novillo el valor de setenta y cinco quetzales, y como total de los cinco extraviados la suma de trescientos sesenta y cinco quetzales. Fernando Samayoa Chávez dijo: que sirve el cargo de Guarda-Rastro de Cuyotenango, y en tal concepto lleva un riguroso control de todos los animales que se sacrifican en él, asentando en el libro respectivo todos los datos identificativos de cada uno, y que los novillos que indicó Elías Morales Pinzón, que había destazado allí no aparecen registrados, por lo que sin duda los sacrificó en Rastros distintos al de Cuyotenango. Fidencio Bolaños Najarro declaró sobre la buena conducta y honradez de Morales Pinzón. Ampliada la indagatoria de Elías Morales Pinzón, declaró: que en repetidas ocasiones compró a Fausto Pérez Marín, Jefe de vaqueros de la hacienda "La Cabaña" algunos chivos como de año y medio, de la legítima pertenencia de su vendedor; y que el último negocio cuando le vendió los cuatro novillos, llegó a su casa a aseverarle que eran de su legal pertenencia y como lo ha considerado persona honrada, no tuvo inconvenientes en hacer negocio entregándole el dinero a presencia de Paz Milla y Rosales; que esos novillos estaban marcados con fierros desconocidos para el exponente, pero ninguno tenía el fierro de la hacienda "La Cabaña" que consiste en una C y una H entrelazadas que conoce perfectamente, y aunque le exigió carta de venta cuando le entregó el dinero, Pérez Marín pretextó que tenía urgencia de regresarse a su casa y que seguidamente se la daría y como ya no lo logró ver se quedó así el negocio; que aclara que los cuatro novillos indicados no los destazó, pues a los pocos días de haberlos adquirido, se los vendió a un ganadero de tierra fría, cuyo nombre no recuerda, extendiéndole la correspondiente factura, porque tiene licencia para negociar ganado.

RESULTA:

En auto de cinco de enero de mil novecientos cincuenta y tres, se elevó a plenario esta causa y a continuación se examinó a Rogelio Jovel Barrios y Manuel Rojas Ordóñez, quienes dijeron: que el día último de octubre llegaron a la casa de Elías Morales Pinzón, sita en Río Bravo, por diferentes motivos, dándose cuenta que llegó Fausto Pérez Marín, y recibió doscientos quetzales según el segundo testigo y un fajo de billetes según el primero, por cuenta de unos novillos, según oyeron; también declararon Manuel Vallejos Paredes y Otto Sauerbrey, sobre la honradez de Morales Pinzón. Al tomarles confesión con cargos a los dos reos, no se conformaron con ninguno de los que les fueron formulados, y después de nombrarles defensores de oficio a los Abogados José Ignacio Aguirre y Juan Tomás Delgadillo, el primero solicitó y obtuvo la reforma del auto de prisión del procesado Elías Morales Pinzón, en el sentido de mandarlo poner en libertad. Corridos los primeros traslados a acusador y defensores, se abrió a prueba este proceso por el término de treinta días, habiéndose rendido de parte del defensor del procesado Elías Morales Pinzón, únicamente una inspección ocular en la finca "La Cabaña", en la que se constató: que su anexo "El Transvaal" dista kilómetro y medio de Río Bravo; que Fausto Pérez Marín vivía en unos ranchos frente al primer corral que se encuentra en dicho anexo, al llegar. Por la parte acusadora: a) Ampliación de la indagatoria de Elías Morales Pinzón, de la cual aparece: que antes de la compra de los novillos a Pérez Marín, había adquirido en varias ocasiones ganado de la finca "La Cabaña" por compra directa al Administrador, quien le extendió las correspondientes cartas de venta; que no destazó el ganado comprado a Pérez Marín, sino que siendo mostrenco lo vendió a unas personas de tierra fría; que lo recibió en el corral del anexo "El Transvaal" y que era ganado manso y que anteriormente había comprado dos novillitos a Pérez Marín. b) Ampliación de la indagatoria de Fausto Pérez Marín, quien insistió en no haber vendido los cuatro novillos de que se trata a Elías Morales; que no se dió cuenta si tales animales tenían los fierros de sus antiguos dueños, pero sí que cuando los compró en la finca fueron marcados con su fierro que semeja una c y una h enlazadas, y que en esa finca no hay ganado mostrenco; c) Informe de la Penitenciaría Central en el sentido de que Fausto Pérez Marín ingresó a ese centro el día diez de julio de mil novecientos treinta y siete, por el delito de lesiones y pues-

to en libertad el veintitrés de octubre del año siguiente, de orden de la Corte Suprema de Justicia, por rebaja de pena. El defensor de Fausto Pérez Marín, rindió las siguientes: a) Ampliación de la declaración del acusador Carlos Estrada de León, en el sentido de que era cierto que en una de las ventas de ganado que verificó a Elías Morales, de tres novillos, aquél llevaba otro novillo comprado en otra parte, con el que formó dos mancuernas, ésto fué el veintiséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, ganado sacado del anexo "El Transvaal"; que personalmente atiende las ventas de ganado en "La Cabaña" sin facultar a nadie para tal fin; b) Declaraciones de los testigos Luis Rodas Reyes y Andrés Jiménez Tomás, el primero negó todas las preguntas del interrogatorio y el segundo declaró que en los días veintinueve y treinta de un mes que no recuerda, llegó a la casa de Elías Morales Pinzón, en busca de trabajo, pero no lo encontró, sin haber podido indicar dónde quedaba dicha casa; c) Informe del Juez de Paz de Cuyotenango, en el sentido de que Morales Pinzón tiene establecida una carnicería en el mercado de dicha población, la cual fué regentada durante algún tiempo por Manuel Rojas Ordóñez, hasta el catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, en que se retiró, y quien también trabajó antes como vaquero de Morales Pinzón; que el veinte de marzo del año citado se iniciaron diligencias criminales contra Rogelio Jovel Barrios, por hurto de semovientes y que con fecha veintidós del mismo mes, también se instruyeron primeras diligencias contra Elías Morales, por hurto de semovientes, las que fueron enviadas al Tribunal superior; d) Informe del Juez de Paz de Jocopilas sobre que Jovel Barrios se ocupa del destace de ganado mayor; que durante los días veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, aquél trabajó como ayudante del destazador Max. Sandoval, en dicho lugar, y que en ese Juzgado no existían antecedentes penales del mismo individuo; e) declaración del testigo Federico Marroquín Pérez, con el fin de acreditar que durante las tardes de los días veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, trabajó con Fausto Pérez Marín, en la finca "La Cabaña" juntando el ganado, habiéndose separado hasta las seis de la tarde, y al ser repreguntado indicó que el día treinta de los citados, no se juntó con Pérez Marín, porque estaba atendiendo trabajos particulares en su milpa; y d) Informe del Juez de Río Bravo, sobre que en dicho Juzgado no tiene antecedentes penales. Medardo Rosales López.

RESULTA:

Con esos antecedentes y después que las partes evacuaron los últimos traslados, el Juez de Primera Instancia de Suchitepéquez, dictó su sentencia el veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, pero al conocer de ella la Sala jurisdiccional la anuló, por vicios en el procedimiento, y después de repuestas las actuaciones, el dieciséis de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictó el Tribunal de primer grado, su nueva sentencia, en la cual declaró: que Elías Morales Pinzón y Fausto Pérez Marín, son reos del delito de hurto de semovientes que se les imputa en la presente causa, por cuya infracción los condena a sufrir la pena de cuatro años al primero y cinco años y cuatro meses, al segundo, de prisión correccional incommutables, con las accesorias del caso. Por recurso de apelación conoció de este fallo la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, pronunciando su sentencia el quince de diciembre del mismo año, en la cual confirmó la de primera instancia, con la modificación de que la pena que impone a Elías Morales Pinzón es la de dos años ocho meses de prisión correccional. Para este efecto consideró: "La responsabilidad de Elías Morales Pinzón como coautor en el delito de hurto que se investiga queda plenamente probada con las presunciones siguientes: 1) la semi-plena prueba formada por el dicho de Dionisio Paz Milla en cuanto se refiere a que el ganado lo recogió a altas horas de la noche, y que queda reforzada con el hecho aceptado por Morales Pinzón de que Paz Milla era su vaquero, lo que quiere decir que acepta la presencia de éste en el acto de recibir los novillos y hasta le sirvió de testigo para demostrar que había pagado su precio; 2) La presunción que nace de las declaraciones contradictorias de Morales Pinzón en cuanto trató de confundir las dos compras que hizo en "El Transvaal" una de cuatro novillos y la otra de tres, siendo ésta legítima y la otra fraudulenta; 3) La presunción que nace de sus propias declaraciones al confundir el destino que le dió a los novillos, diciendo primero que los había llevado a Cuyotenango donde los destazó y en seguida afirmando que los vendió a unos ganaderos de tierra fría, con lo cual visiblemente trataba de estorbar la pesquisa al no dar el nombre del comprador; 4) La circunstancia de haber afirmado que los novillos no tenían fierro y que Pérez Marín los herró al entregárselos, extremo que quedó desmentido con el dicho de Pérez Marín quien por su parte afirmó que no había vendido ganado y por consiguiente que tampoco lo había herrado; 5) La circunstancia de haber acep-

tado el ganado sin que le dieran carta de venta, pues dedicándose al negocio de ganado sabía muy bien que este documento es indispensable para asegurarse de que los semovientes son bien habidos; 6) La circunstancia de haber negado Pérez Marín que le había vendido ganado; 7) La circunstancia de haber comprado los novillos a un precio menos del que efectivamente tenían, demostrado éste con su propia declaración y comparado con el avalúo hecho por el experto. Las presunciones especificadas en los párrafos anteriores son graves y concordantes entre sí y con el hecho investigado y llevan al ánimo del juzgador a concluir en forma inevitable, que el procesado es responsable del delito investigado pues compró el ganado a sabiendas de que era mal habido. Con la semiplena prueba formada por la declaración del testigo Paz Milla y con la propia confesión del reo Morales Pinzón está demostrado que éste sacó personalmente el ganado de los corrales de "El Transvaal" y como sin la ejecución de ese hecho no habría podido perpetrarse el hurto, cabe catalogar la responsabilidad del encauzado como co-autor porque así lo estatuye el inciso 3° del Arto. 30 C.P.". Inconforme con este fallo el procesado ELIAS MORALES PINZON, con el auxilio del Abogado Oscar González Rodas, interpuso recurso de casación, en los siguientes términos: "Estimo que la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, al dictar sentencia condenatoria, ya identificada en el punto anterior y contra la cual recurro en el extraordinario de casación interpuesto, violó lo establecido en forma clara por los artículos 1, 11, 401 inciso 1° del Código Penal (Decreto Legislativo 2164); 379 incisos 1°, 2° y 3°, 566, 567, 571, 581 inciso 2°, 587, 589, 594, 595, 596, 597, 601 y 614 (total), del Código de Procedimientos Penales. Con fundamento en el artículo 676 inciso 1°, párrafo primero y del inciso 8° del Código de Procedimientos Penales, es procedente el recurso extraordinario de casación que interpongo, debiendo declararlo así, en la respectiva sentencia que dicte la Honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud de la siguiente fundamentación: a) No existe delito alguno, desde el momento en que quedó probado en autos, que pagué dinero en efectivo a Fausto Pérez Marín, por la compra que le hice de los novillos y quien es lógico suponer, me autorizó llevarme los animales cuando quisiera, quedando de otorgarme posteriormente la carta de venta; b) La Sala sentenciadora cometió error de derecho en la apreciación de las pruebas, porque dió validez a declaraciones de testigos "La del reo Dionisio Paz Milla quien fué indagado como reo, que no la tienen y

porque contra toda ley, se ha querido sacar indicios o presunciones de hechos que no aparecen debidamente probados en juicio". Habiéndose agotado el trámite de este recurso y verificado el día de la vista, procede resolverlo.

—I—

CONSIDERANDO:

El recurrente menciona entre los casos de procedencia en que apoya su recurso, el contenido en el inciso 8° del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que comprende el error de derecho y el de hecho en la apreciación de la prueba, por lo que para guardar un orden lógico, deben examinarse en primer término estos aspectos del recurso. Al referirse al error de derecho concretamente señala que la equivocación del Tribunal sentenciador consiste en haberle dado validez a declaraciones de testigos que no la tienen, señalando como tal la de Dionisio Paz Milla, quien fué indagado como reo; que contra toda ley se ha querido sacar indicios o presunciones de hechos que no aparecen probados en juicio; y por último, que el expertaje no llenó los requisitos legales. De acuerdo con tales presupuestos cabe estimar: que no es verdad que el testigo Paz Milla haya figurado en el proceso como co-reo, ya que esta circunstancia no la puede determinar el simple hecho de que haya sido indagado dentro de las actuaciones, puesto que ni siquiera se le motivó prisión provisional, ni se continuó procedimiento en su contra, por lo que es un testigo que no adolece de falta de imparcialidad; en cuanto a la impugnación del recurrente a la prueba presuntiva apreciada por el Tribunal sentenciador, se ve que las conclusiones de éste tienen por base los hechos confesados por el procesado Elías Morales Pinzón, por lo que aquel Tribunal obró correctamente al aceptarlos como probados con esa confesión, que es medio de prueba reconocido en la ley, exceptuando los señalados con los números dos y seis del considerando de la Sala, que no pueden aceptarse en contra de Morales Pinzón, por referirse a hechos del otro procesado, pero que nada alteran su situación legal y como los demás hechos forman una presunción humana grave contra este sindicado, pues reúnen los requisitos de precisión y concordancia y están debidamente enlazados entre sí tiene que deducirse la conclusión indefectible, que el indicado procesado cooperó con ellos a la verificación del delito investigado, no existiendo, por consiguiente, ningún error en la apreciación de estas pruebas; y por último, como el

recurrente no se cuidó de señalar cuál es el expertaje que no llenó los requisitos legales, para examinar si efectivamente fueron omitidos los requisitos señalados, no se puede hacer ningún estudio en esta parte del recurso, porque implicaría interpretar la intención del interesado sobre el particular. También atribuye el recurrente a la Sala sentenciadora haber incurrido en error de hecho al "valorizar un testimonio de un procesado en el mismo juicio, y en la estimativa probatoria debida a las circunstancias que la generaron, que tergiversan actos que sin lugar a dudas dieron margen a la equivocación del juzgador, tomando en todo su valor declaraciones testimoniales de los reos (Dionisio Paz Milla), Medardo Rosales López, Manuel Rojas Ordóñez, Rogelio Jovel Barrios, la primera que no tiene validez y actuaciones no probadas en forma legal que subsiguientemente también generaron errores de derecho ya apuntados, y las otras tres no tomadas en consideración en lo que procede". Como se ve la tesis emitida por el recurrente, a este respecto, es vaga y confusa, y además sus impugnaciones nunca podrían dar lugar a un error de hecho, puesto que las refiere a estimativa de prueba según puede colegirse, y además en el recurso de casación por este motivo el interesado debe indicar en qué consiste el error o identificar sin lugar a dudas el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador, prescripciones con las que no se cumplió en este caso, y el Tribunal tampoco puede hacer el estudio analítico en esta otra parte del recurso llegándose a la conclusión que por ninguno de los motivos indicados fueron infringidos los artículos 379 incisos 1º, 2º y 3º, 566, 567, 571, 581 inciso 2º, 587, 594, 595, 596, 597, 601 y 614 del Código de Procedimientos Penales.

—II—

CONSIDERANDO:

En lo relativo al primer caso de procedencia que se invoca, que es el contenido en el inciso 1º del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que se refiere a "Cuando los hechos, que en la sentencia se declaran probados sean calificados y penados como delito no siéndolo o cuando se penen a pesar de existir una circunstancia eximente de responsabilidad criminal o a pesar de que circunstancias legales posteriores a la comisión del delito impidan penarlo", el interesado expresa: "No existe delito alguno, desde el momento en que quedó probado en autos que pagué dinero en efectivo a Fausto Pérez Marín, por la compra que le

hice de los novillos y quien es lógico suponer me autorizó llevarme los animales cuando quisiera, quedando de otorgarme posteriormente la carta de venta". Del estudio del fallo impugnado se ve, precisamente, que la responsabilidad de Morales Pinzón la derivó la Sala sentenciadora del hecho de haber comprado los novillos a sabiendas de que eran mal habidos, cooperando en esa forma en la substracción de los mismos, y como este hecho constituye el delito de hurto y no se desprende de las actuaciones ninguna circunstancia que impida penarlo, no existe, en este caso violación de los artículos 1º, 11 y 401 inciso 1º del Código Penal, citados por el recurrente.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo considerado y con lo prescrito en los Artículos: 222, 224, 227, 233, 234 Decreto Gubernativo 1862; 673, 687, 690 y 694 del Código de Procedimientos Penales, declara: improcedente el recurso de casación de que se hizo referencia, imponiendo a quien lo interpuso quince días de prisión simple, conmutables a razón de diez centavos de quetzal por día. Notifíquese y en la forma correspondiente devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguilar Fuentes).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Leticia Franco de Martínez, por el delito de injurias.

DOCTRINA: Constituyen injurias graves, las expresiones que a más de afrentarse atribuyen a la persona agraviada un vacío o falta de moralidad, cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente su fama y crédito.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diez de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación se examina la sentencia dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, el diez de junio del corriente año, en la causa instruida contra LETICIA FRANCO DE MARTINEZ, por el delito de injurias, de cuyos antecedentes,

RESULTA:

Con fecha dos de noviembre del año próximo pasado, compareció ante el Juez de Primera Instancia de Zacapa, la señora Graciela del Rosario Gaytán de Flores, querellándose contra la señora Franco de Martínez, porque el día anterior, en ocasión que salió hasta la acera de la casa que habitan, a despedir a su esposo Victor Flores, quien se dirigía a su trabajo, a eso de las siete horas, la Franco de Martínez principió a dirigirle sátiras, por lo que su esposo le llamó la atención, lo que dió lugar a que a gritos le dijera a su citado esposo, que la querellante era una prostituta depravada que lo estaba engañando porque había tenido amores con Romilio Torres, habiendo ejecutado actos carnales con él, en su misma cama y otras expresiones por el estilo, lo cual ha ocasionado la correspondiente intranquilidad en su hogar, y como esas expresiones son constitutivas de delito de injurias graves, se constituía en formal acusadora de la ofensora, para que mediante las probanzas que aportaría, se pronunciara la respectiva sentencia condenatoria. Ratificada la anterior querrela se citó a ambas partes a una junta conciliatoria, en la cual no se logró conciliarlas, porque la acusadora sostuvo los conceptos de su querrela y propuso varios testigos, y la acusada negó los hechos, asegurando que no le había gritado tales expresiones y que como estaba en su casa a esa hora, no podía proponer testigos de descargo.

RESULTA:

En audiencia señalada para el efecto, fueron examinados los testigos propuestos por la acusadora, Aurelio Valenzuela, Isauro González, Rosenda Leonardo Cordón, María Victoria Pérez y María Zavaleta, todos los cuales dijeron haber escuchado las expresiones insultativas que motivan este proceso. A continuación se señaló día para la vista y se nombró defensor de la acusada a Emigdio Alberto Hernández Salguero, quien solicitó que el Juez de Primera Instancia se inhibiera del conocimiento del asunto, porque a su entender se trataba de un hecho que era constitutivo de falta y en ese caso el Juez competente era el de Paz de aquella cabecera departamental. La inhibitoria fué declarada con lugar por el Juez de Instancia porque estimó que la pena con que correspondería sancionar a la acusada sería la de seis meses de arresto menor, por lo que era competente para su juzgamiento el Juez de Paz aludido, pero interpuesto por la acusadora recurso de apelación contra esa determinación, fué revocada, porque según la Sala jurisdiccional, la

pena a imponerse en caso de condena sería de seis meses de arresto mayor y el conocimiento del caso corresponde al Juez de Primera Instancia. Con ese motivo se señaló nuevo día para la vista, y verificada ésta, el trece de abril del año en curso, se dictó la sentencia de primer grado, declarándose que Leticia Franco de Martínez, es autora del delito de injurias graves que hizo de palabra a Graciela del Rosario Gaytán de Flores, imponiéndole la pena de seis meses de arresto mayor, que le permite conmutar en su totalidad a razón de veinte centavos de quetzal por día, dejándola afecta a las responsabilidades civiles y obligada a la reposición del papel empleado en la causa.

RESULTA:

La reo interpuso recurso de apelación de ese fallo, y previa su excarcelación bajo fianza, se envió el proceso a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, tribunal que dictó sentencia, en la fecha indicada al principio, confirmando la de primera instancia, sin ninguna modificación. Para ese efecto consideró: "que con las declaraciones de Rosenda Leonardo Cordón, María Victoria Pérez y María Zavaleta, se prueba plenamente que el día primero de noviembre del año próximo pasado, la señora Leticia Franco de Martínez, profirió a la señora Graciela del Rosario Gaytán de Flores expresiones que desde luego constituyen una deshonra, descrédito o menosprecio de ésta; que como esas expresiones injuriosas no fueron vertidas por escrito y con publicidad, la pena que debe imponerse a la procesada es la de seis meses de arresto mayor sin ninguna alteración porque no concurren circunstancias modificativas; que como la sentencia que se examina así lo resuelve, se impone su confirmación".

Contra este último fallo, la procesada Leticia Noemí Franco de Martínez, interpuso recurso de casación, con el auxilio del Abogado Baudilio Jordán, por infracción de ley, señalando como violados los artículos 349 en todas sus circunstancias y 351 del Código Penal, y citando como caso de procedencia el contenido en el inciso 3º del artículo 676, del Código de Procedimientos Penales, argumentando: "se ha aceptado por parte de la Sala sentenciadora para admitir como injuria grave la calidad del estado civil de la acusadora, que es sobre lo que se finca, en términos generales la base de la acusación. Y tal circunstancia o calidad civil, no se encuentra acreditada en las actuaciones; de manera que en tal caso debió estimarse el hecho como injurias leves y sancionarse de acuerdo con lo que establece la parte última del artículo 351 del Código Penal, ya citado, que fija

la pena de dos meses de arresto menor. Y al no hacerlo así la Sala sentenciadora, violó naturalmente la ley". Habiendo tenido verificativo la vista, procede resolver este recurso.

CONSIDERANDO:

La recurrente fundándose en el caso de procedencia que se refiere al error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados, impugna el fallo recurrido, argumentando como injuria grave las expresiones de la acusada, atendiendo al estado civil de la acusadora y que tal calidad no se encuentra acreditada en las actuaciones, de manera que en tal caso debió estimarse el hecho como injurias leves y sancionarse de acuerdo con esa estimación; pero al analizar esos argumentos en concordancia con los hechos que la Sala estima probados, se observa que no es exacta esa afirmación, porque en el fallo examinado claramente se dice que, la información testimonial prueba que la acusada profirió a la acusadora expresiones que constituyen una deshonra, descrédito y menosprecio de ésta, es decir que la estimación de injurias graves deviene de esas expresiones y no del estado civil de la injuriada, y como la calificación jurídica que hizo la Sala del hecho que constituyen las frases vertidas, es correcta, porque a más de afrentosas atribuyen a la agraviada un vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente su fama y crédito, circunstancias que las elevan a la calidad de injurias graves, según las prescripciones del artículo 349 del Código Penal; por consiguiente, analizada así la situación sub-júdice, no existe error de derecho en la calificación de los hechos que se declararon probados y no fueron infringidos el citado artículo y el 351 del mismo Código.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo considerado, y lo prescrito en los artículos 224, 227, 233, 234 Decreto Gubernativo 1862; 674, 675, 686, 690 y 694 del Código de Procedimientos Penales, declara: improcedente el recurso de casación de que se hizo mérito, imponiendo a quien lo interpuso quince días de prisión simple, conmutables a diez centavos de quetzal diarios. Notifíquese y en la forma correspondiente devuélvase los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguilar Fuentes).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Mescoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Abilio Fernández Quiroa y Carlos Quiroa Diesseldorff, por el delito de falsificación de billetes de banco.

Si la confesión del reo no es la que sirve de base para su condena, el Tribunal sentenciador no comete error de derecho al no considerarla como atenuante.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diecinueve de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus antecedentes, se examina la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el dos de diciembre del año próximo pasado, en el proceso que por el delito de falsificación de billetes de banco se siguió en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Departamental contra Abilio Fernández Quiroa y Carlos Quiroa Disseldorff.

RESULTA:

El veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro, el Segundo Jefe del Segundo Cuerpo de la Guardia Civil, César Augusto González, dió parte al Juez Sexto de Paz de esta Capital, de haber capturado a Abilio Fernández Quiroa y a Carlos Quiroa Diesseldorff. a quienes puso a su disposición, por lo siguiente: Emilio Ortiz Espinoza, le avisó al Sub-Inspector Pedro Castañeda Vargas, el día veinte de febrero como a las diez y ocho horas y veinte minutos, que en la estación de la Ermita se encontraban los individuos comprando gallinas con dinero falsificado, por lo que el Sub-Inspector procedió al registro de los dos sospechosos, habiéndole encontrado al que resultó ser Fernández Quiroa, dos billetes del valor de veinte quetzales, cuatro del valor de cinco quetzales y cuatro del valor de un quetzal, más un pedazo del valor de diez quetzales, dinero falsificado que se remitía al Tribunal; que seguidas las averiguaciones, los guardias Víctor Manuel Vásquez y Cayetano Virula Esquivel, incautaron varios implementos que servían para la falsificación y que encontraron debajo de un colchón de la cama de Fernández Quiroa, los cuales detalla, más cinco ganzúas, veinticinco cheques con distintos nombres, fechas, números y valores y doce sin nombres y valores; que los detenidos expusieron que Jaime de León, domiciliado en la pensión "Estefen" de México, les había enseñado a fabricar los billetes; que los líquidos se los dió Oscar García y que los billetes

y los cheques, Alfonso Lira, y, por último, que Quiroa Diesseldorff agregó que el dos de dicho mes abrió con una ganzúa el candado de la bodega de León Guttmann, substrayendo dos quintales de plomo, que vendió a Jesús Carranza, vecino de Malacatán.

RESULTA:

Que iniciada la averiguación, fueron indagados los reos, habiendo manifestado Abilio Fernández Quiroa: que estuvo preso una vez por allanamiento; que Quiroa Diesseldorff es su hermano; que es cierto que tenía en su poder el dinero falso que le incautaron, pero que de esto no sabía nada su hermano; que en el mes de enero del año citado se emborrachó con Alfonso Lira, quien después le dió a guardar una caja de cartón que tuvo por mucho tiempo; que como Lira no llegó a recoger la caja, dispuso registrarla, encontrándose que contenía varios tintes, un poco de algodón y los billetes falsificados, y que como tenía necesidad de dinero, salió a gastarlos cuando lo capturó la policía; que es cierto que en la casa de Quiroa Diesseldorff le encontraron los demás objetos que enumera el parte, y que no es cierto que él haya falsificado los billetes. Carlos Quiroa Diesseldorff, expuso: que no sabe de dónde sacó su hermano Abilio el dinero falsificado y que tampoco sabía que dicho dinero no fuera legítimo; que no sabe cuándo llevó su referido hermano los demás objetos que incautaron en su casa y que no los había visto; que es falso que con la ganzúa incautada haya abierto las bodegas de León Guttmann y que haya vendido el plomo que sustrajo a Jesús Carranza, y que pueden declarar sobre su honradez, Juventino Flores y Fernando Vanegas.

RESULTA:

Que recibidas las primeras diligencias en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de este Departamento, se motivó prisión a los detenidos, por el delito de falsificación de billetes de banco y se mandó continuar la averiguación. El guardia Cayetano Virula Esquivel dijo haber sido de los que practicaron el cateo en casa de los sindicatos; que los objetos incautados los encontraron debajo del colchón de la cama de Abilio, incluso las ganzúas y algunos billetes falsificados y que Carlos Quiroa les dijo que no tenía ninguna culpa del hecho, habiéndose limitado a darle posada a su hermano, que había venido de Quezaltenango. El inspector Pedro Vargas Castañeda manifestó: que capturó a los reos por indicación de Emilio Ortiz Espinoza de que acababan de hacer atraco con un

billete falso, habiéndole encontrado a Abilio los billetes falsos en cantidad de ochenta y cuatro quetzales que llevaba escondidos debajo de la camisa y que al otro individuo no le encontró nada. Guillermo Rosenbaum Goldstaub, apoderado de "León Guttmann y Co.", dijo: que hasta el momento no han notado la falta de mercadería en sus bodegas y que no tienen bodega en la dirección que se le pregunta: tercera avenida y "Calle del Reloj", que es la que consigna el parte. Emilio Ortiz Espinoza, que presenció cuando un muchacho y un viejito estaban comprando gallinas; que el que efectuaba ésto era el más joven; que la vendedora se acercó al declarante pidiéndole que le cambiara el billete y pudo constatar que era falso, por lo que fué a buscar un guardia y en compañía de él alcanzaron a los dos sujetos, encontrándole al más joven (Abilio) varios billetes más. El gerente del Banco de Londres informó: que el talonario de cheques del número doscientos veinticuatro mil cuatrocientos uno al quinientos, entre los cuales se encuentran los que fueron incautados, corresponde a la señora Lilia E. Thompson P. de Gálvez, para uso de su cuenta corriente, la que fué cerrada en previsión de posibles fraudes, por haberle sido robado el talonario a la expresada señora; que en varias ocasiones se presentaron para su cobro cheques del talonario aludido con las firmas falsificadas, habiéndose puesto en conocimiento de la Guardia Judicial estos hechos. Obran en el juicio los billetes falsificados, así como los cheques del talonario ya mencionado, unos en blanco y otros debidamente llenados, con una firma y un sello con el nombre de Lilia E. Thomson P. de Gálvez. José Mariano Peraza Meléndez, grabador y Jefe del Taller de grabados en acero del Ministerio de Hacienda, fué nombrado experto para dictaminar sobre el proceso de falsificación de los billetes, y dijo: que los billetes son ostensiblemente falsificados y que el procedimiento utilizado es el de calco, que consiste en tomar un billete de curso legal untar un papel blanco de ácido fénico y pasarlo con un rodillo o plancha caliente, saliendo el negativo, y repetir el procedimiento para pasarlo en positivo; que los algodones encontrados estaban saturados de ácido nítrico y que las tiras de papel estaban destinadas a convertirse en billetes falsos. El Oficial encargado del Archivo de la Penitenciaría Central informó que a Abilio Fernández Quiroa le aparece el siguiente ingreso: el dos de mayo de mil novecientos treinta y ocho por allanamiento de morada y lesiones, habiendo salido el veintiséis de agosto de mil novecientos treinta y nueve, por orden de la Corte Suprema de

Justicia, por reforma de pena. Lilia Thomson de Gálvez confirmó lo de la pérdida de su talonario de cheques, que ocurrió el veinticinco de octubre de mil novecientos cincuenta y uno, dando aviso inmediatamente al Banco; que tuvo noticias de que algunas personas fueron víctimas al cobrar cheques con su firma falsificada; que el sello que aparece en los cheques incautados sí le pertenece, pero que la firma es falsificada. Desiderio Menchú fué nombrado experto para que dictaminara acerca de la autenticidad de las firmas de los cheques, y dijo: que veinticinco de los mencionados cheques, identificados por su respectivo número, aparecen con la firma "L. de Gálvez", y aunque todos ponen de manifiesto una misma escritura, se diferencia substancialmente de la escritura propia de la señora de Gálvez; que comparadas las características gráficas de las firmas y manuscritos de los enjuiciados, con las de las firmas de los cheques, son completamente diferentes, por lo que puede asegurarse que no fueron puestas por dichas personas: que solamente la firma del cheque doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis, se aparta de la modalidad gráfica anterior y presenta particularidades identificativas de la letra de Abilio Fernández Quiroa.

RESULTA:

Que elevada la causa a plenario, se mandó a tomar confesión con cargos a los procesados, habiéndole formulado a Quiroa Deisseldorff el que le resultaba por el hecho de que en compañía de su hermano Abilio y empleando el procedimiento de calcar un billete legítimo sobre un papel especial, hizo varios billetes de banco de diferentes denominaciones y los puso en circulación en el comercio, haciendo pagos con ellos, cargo con el cual no se conformó, y a Fernández Quiroa, el mismo cargo, y, además, de haber tratado de imitar la firma de la señora Lilia Thomson de Gálvez en el cheque "veintidos-cuarenta y cuatro-cuarenta y seis" del Banco de Londres, con el objeto de cobrarlo a esa Institución, no conformándose el reo con dichos cargos. Como defensor del enjuiciado Quiroa Diesseldorff se tuvo al Abogado Oscar Berganza Rosales, nombrándose defensor de oficio de Abilio Fernández Quiroa al Abogado Rufino Adolfo Pardo. El Ministerio Público formalizó acusación, y a solicitud de uno de los defensores, la causa se abrió a prueba.

RESULTA:

Que en el término de prueba se rindieron las siguientes: por parte de Carlos Quiroa Diesseldorff, declaraciones testimoniales de Fernando

Vanegas Herrera y Cristóbal Peláez García, quienes manifestaron conocer al procesado desde más de treinta años y que es persona honrada, de buenas costumbres y sin antecedentes penales. Por parte de Abilio Fernández Quiroa, declaración de Magdalena la Fuente Gálvez, quien expuso conocer al referido desde más de catorce años y constarle que es persona honrada y dedicada a su trabajo, y ampliación del dictamen pericial de José Mariano Peraza, quien expuso que los medios empleados para la falsificación de billetes son de los más efectivos, aunque se necesita de cierta experiencia para hacer una buena falsificación, y que, dada las características de los billetes que obran en autos, no pueden inducir a error porque de inmediato se nota que son falsos. Para mejor fallar se ordenó la práctica de varias diligencias, habiéndose conseguido solamente la ampliación de la declaración de Lilia Thomson de Gálvez, quien dijo que no se le ocasionó ningún daño en su patrimonio por la substracción del talonario de cheques y falsificación de su firma en el cheque doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis.

RESULTA:

El veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro dictó el Juez su sentencia, estimando: que para que se ejecute el delito de falsificación de billetes de banco es suficiente con que los billetes falsos puedan ser confundidos con los legítimos, no siendo indispensable una semejanza absoluta; que Abilio Fernández Quiroa se esforzó por darle a los billetes falsos la apariencia de auténticos, no siendo necesario apreciar el número de billetes falsificados; que la falsificación se hizo por uno de los medios más comunes y perfectos; que varios de los billetes falsificados pueden inducir a engaño, es decir que son expendibles; que de los hechos de haberle incautado a Abilio Fernández varios billetes falsificados y los instrumentos para hacer la falsificación, sin que diera explicación satisfactoria sobre la procedencia de ambos objetos, se deduce la presunción humana de su culpabilidad, por lo que le impone la pena de seis años de prisión correccional, sin modificación alguna; absuelve al mismo Abilio Fernández por la falsificación de la firma de la señora Lilia de Gálvez en uno de los cheques incautados, porque no se demostró que ese documento haya sido presentado para su cobro o que haya habido intención de lucro en su tenedor, y absuelve también a Carlos Quiroa Diesseldorff del cargo que se le formuló por falta de prueba en su contra. Interpuesto re-

curso de apelación, la Sala dictó la sentencia que se examina. La Sala estimó: que la culpabilidad de Abilio Fernández Quiroa en el delito de falsificación de billetes de banco quedó probada con las declaraciones de Cayetano Virula Esquivel, Pedro Vargas Castañeda y Emilio Ortiz Espinoza y con la propia confesión del encartado, quien admite haber tenido en su poder los billetes y demás objetos que le fueron recogidos; que si bien es cierto que Fernández Quiroa realizó todos los actos para producir el delito, no lo consiguió por causas independientes de su voluntad, ya que, según el expertaje practicado, los billetes no pueden inducir a error porque a simple vista se advierte que son falsos; que, de acuerdo con el grado de ejecución, la pena que debe imponérsele es de cuatro años de prisión correccional, o sean dos tercios de la que correspondería imponer al autor del delito consumado, aumentada en una tercera parte por ser reincidente el reo, según el informe que obra en el proceso. En cuanto a la absolución de Abilio Fernández del cargo que se le formuló por la tenencia y falsificación de los cheques de propiedad de la señora de Gálvez, y de Quiroa Diesseldorff en la falsificación de billetes, hace las mismas consideraciones que el juez. En consecuencia, confirma la sentencia apelada, con la modificación de que la pena que impone a Abilio Fernández Quiroa es de cinco años y cuatro meses de prisión correccional "en los términos que lo establece el fallo examinado".

Contra esta sentencia interpuso Abilio Fernández Quiroa recurso extraordinario de casación por "violación de procedimiento y violación de ley expresa", que fundamentó así: que si bien la Sala sentenciadora le modificó la pena apreciando el hecho como delito frustrado, le aumentó una tercera parte porque le aplicó la circunstancia agravante de reincidencia, sin tomar en cuenta el Artículo 80 del Código Penal, que prescribe que cuando hay circunstancias atenuantes y agravantes se compensarán racionalmente, lo que no se hizo, porque no se tomó en cuenta su confesión, violándose con ello en primera instancia el artículo 22 en su inciso 9° del Código Penal, ya que su confesión la hizo antes que declarasen los testigos, y que la Sala violó también estos artículos porque debió corregir el error de primera Instancia. Que también fueron violados los artículos 304, 375 y 376 del Código de Procedimientos Penales, porque el Juzgado nombró como experto a un empleado del Banco de Guatemala, no justificándose que tuviese conocimientos al respecto y porque las partes tienen derecho a

nombrar sus expertos, y que si esto no fuera suficiente, la última parte del artículo 277 del mismo Código dice que "el procesado o procesados tendrán derecho a nombrar un Perito que concorra con los designados por el Juez", por lo cual estima que se quebrantó el procedimiento, puesto que no se le notificó que debería nombrar experto. Se funda en los artículos 673, 674, 675, 676 incisos 3°, 4°, 5°, y 6°, 677 incisos 2° y 3°, 679, 681, 682, 686, 687, 688, y 693 del Código de Procedimientos Penales. Fué auxiliado por el Abogado Carlos González Lanforth.

—I—

CONSIDERANDO:

De acuerdo con las citas legales que efectúa el recurrente y con lo expuesto en el memorial de interposición del recurso, impugna el fallo dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, a) por violación de ley, y b) por quebrantamiento de forma. Corresponde examinar los casos por quebrantamiento de forma en primer término. Cita el recurrente los incisos 2° y 3° del Artículo 677 del Código de Procedimientos Penales, que se refieren: a) cuando se haya omitido la citación del procesado, ya estuviere preso o en libertad, y la de la parte acusadora para que comparezca al juicio, y éste se hubiere fenecido sin la intervención de alguna de las personas expresadas; y b) cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados o resulte manifiesta contradicción entre ellos. Aparte de la falta de relación de estos casos de procedencia con los motivos alegados, debe tomarse en consideración lo prescrito por el artículo 679 del Código de Procedimientos Penales, al indicar que los recursos de casación que se interpongan por quebrantamiento de forma, sólo serán admitidos cuando siendo posible se hubiere pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió, y reproducido la petición en la segunda instancia cuando la infracción procediere de la primera. De esa cuenta, no habiendo solicitado el recurrente en primero o en segunda instancia la subsanación de falta alguna relacionada con los motivos en que se funda o fuera de ellos, procede desestimar el recurso de casación por estas causales, no pudiéndose apreciar si fueron violados los Artículos 304, 375 y 376 del Código de Procedimientos Penales.

—II—

CONSIDERANDO:

Como casos de infracción de ley, el recurrente cita los contenidos en los incisos 3º, 4º, 5º y 6º del Artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que por su orden se refieren: 1) cuando constituyendo delito los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya cometido error de derecho en su calificación; 2) cuando se haya cometido error de derecho al determinar la participación de cada uno de los procesados en los hechos que se declaren probados en la sentencia; 3) cuando se haya cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia, en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes, o eximentes de responsabilidad criminal, o se haya omitido considerarlas, y 4) cuando la pena impuesta no corresponda según la ley a la calificación aceptada respecto del hecho justiciable, de la participación en él, de los procesados o de las circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal. Cita el recurrente como únicas leyes violadas con relación a estos casos, el Artículo 22 en su inciso 9º del Código Penal, que se refiere a que la confesión espontánea del reo cuando sin ella procediera su absolución, es circunstancia atenuante de la responsabilidad, y el artículo 80 del mencionado Código, que indica que si concurren circunstancias agravantes y atenuantes, los tribunales las compensarán racionalmente por su número e importancia, para aplicar la pena. De la transcripción de estas disposiciones se deduce que no tienen relación alguna con los casos de procedencia contenidos en los numerales 1) y 2), por lo que no puede efectuarse ningún análisis comparativo; y en cuanto a los numerales 3) y 4), cabe expresar; que no pudo haberse cometido error de derecho en concepto de circunstancias atenuantes, o que se haya omitido considerarlas, específicamente en cuanto a la confesión del reo que es en lo que se fundamenta el recurso, por cuanto que la sentencia recurrida no se basa únicamente en dicha confesión para condenarlo, encontrando que hay prueba suficiente de cargo con las declaraciones de Cayetano Virula Esquivel, Pedro Vargas Castañeda y Emilio Ortiz Espinoza. En el otro aspecto, no pudiéndose tomar la confesión alegada como atenuante de responsabilidad por los motivos mencionados, tampoco puede estimarse que el Tribunal sentenciador haya violado el Artículo 80 del Código Penal, en cuanto a que debió haber compensado esta atenuante con la agravante de re-

incidencia y que al no hacerlo así hizo aplicación indebida de la pena en concepto de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues la no existencia de aquella atenuante implicaba la omisión de toda consideración con respecto a rebaja de la penalidad por ese concepto.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo considerado y en lo dispuesto por los Artículos 222, 224, 232, 233, 234 del Decreto Gubernativo 1862; 686, 690 del Código de Procedimientos Penales, declara: IMPROCEDENTE el presente recurso de casación, e impone al recurrente la pena adicional de quince días de prisión simple, conmutable en su totalidad a razón de veinticinco centavos de quetzal por día. Notifíquese, y como corresponde, devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Herrarte González).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Porfirio Cruz Dionisio y compañeros por hurto de semovientes.

DOCTRINA: Es ineficaz el recurso que se interpone sin señalar el artículo e inciso del Código de Procedimientos Penales que contenga el caso de procedencia respectiva.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veinte de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Se tiene a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto por Porfirio Cruz Dionisio contra la sentencia dictada el veinte de Abril del año en curso, por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, en el proceso que por el delito de hurto de semovientes se instruyó en el Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa contra Porfirio Cruz Dionisio y compañeros; y,

RESULTANDO:

El trece de Mayo del año próximo pasado, el Inspector de la Guardia Civil Montada, Manuel Berrios Guerra, puso a disposición del Juez de Paz de Jutiapa a Porfirio y Herminio Cruz Dio-

nisio, así como a la mujer Carmen López Muñoz, indicando hacerlo así porque al primero lo había encontrado cuidando un cuero que tenía estacado en el monte, al segundo por ser cómplice del anterior según éste decía y a la última por haberla encontrado vendiendo carne. Indicó también haber capturado a Buenaventura Cruz Dionisio; que Javier López Santos se presentó ante él ese día para manifestarle que el buey encontrado a Porfirio Cruz Dionisio era de su propiedad y que la captura la había llevado a cabo en el lugar denominado "El Barreal", juntamente con los agentes Mateo Hernández Carías, Agustín Lemus Bojórquez, Orlando Nova Martínez, Luis Esquivel, José Luis Ortega Reynosa y el particular José Ángel Corado Salguero, cuando andaban buscando un semoviente de la propiedad de éste último, que decía se le había desaparecido; que Porfirio Cruz Dionisio estaba "raleando" carne cuando fué sorprendido y que al preguntarle la procedencia del animal destazado no pudo dar razón de ella.

Los agentes captadores declararon en los mismos términos de Berríos Guerra, agregando que en el lugar donde capturaron a Cruz Dionisio, (Porfirio), se encontraban pocos de carne que estaban "raleando", huesos y restos que demuestran que aquel lugar está destinado a destace de ganado, por el estiércol y demás restos que en él se aprecian. Javier López Santos declaró que el cuero y cola que le fueron recogidos al detenido y se le ponen a la vista, fueron del buey de su propiedad, proponiendo para probar su preexistencia a los testigos Manuel Santos López y Balbino Cruz Ramos, quienes declararon de conformidad. Eusebio Cámara Esquivel valuó el semoviente de autos en la suma de SETENTA Y CINCO QUETZALES y depurado el trámite correspondiente, el Tribunal de primer grado dictó sentencia el veintitrés de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, declarando probada la culpabilidad de Porfirio Cruz Dionisio, pero no la de Buenaventura de los mismos apellidos, por cuya razón condena al primero a sufrir la pena de dos años de prisión correccional incommutables y absuelve del cargo al segundo, por falta de prueba. Apelada esta sentencia por Porfirio Cruz Dionisio y su defensor José Cecilio Martínez Sorto, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, dictó su fallo, con fecha veinte de Abril del corriente año, confirmando lo resuelto por el Tribunal de primer grado, en cuanto condena a Porfirio Cruz Dionisio y revocándolo respecto a Buenaventura de iguales apellidos, a quien impone la pena de dos años de prisión

correccional incommutables, con las demás accesorias respectivas. Para emitir tal pronunciamiento se funda en que "... con las declaraciones de los agentes de la Autoridad; Mateo Hernández Carías, Agustín Lemus Bojórquez, Orlando Nova Martínez, José Luis Esquivel y José Luis Ortega Reynosa, se encuentra plenamente probado que el día doce de Mayo del año próximo pasado en el Cantón "Berreal" y en terreno de su propiedad, fué sorprendido Porfirio Cruz Dionisio "raleando" carne de res, encontrándose asimismo las huellas propias de que ese lugar servía para destazar ganado, circunstancia que fué debidamente corroborada por el Juez de Jutiapa al practicar inspección, encontrándose en poder del procesado un cuero que correspondía a un buey de la propiedad de Santiago López Santos; y con las declaraciones de los señores Desiderio González Contreras y Trinidad Méndez López, se probó también que la noche del siete del mes antes citado por el camino que conduce a la cabecera departamental de Jutiapa por el terreno de Rafael Salguero, vieron a PORFIRIO y BUENAVENTURA CRUZ DIONISIO llevando el buey hosco de la propiedad del señor López Santos; que con tales elementos se prueba plenamente que tanto Porfirio como Buenaventura Cruz Dionisio son autores del hurto del semoviente ya citado; que la prueba propuesta por los procesados, no puede en forma alguna enervar la de cargo ya analizada", tanto más que la propuesta por Buenaventura se refiere a que el día doce de Mayo del año próximo pasado se encontraba en la cabecera departamental ingiriendo licor, mientras que los testigos que lo vieron con el semoviente hurtado se refieren a la noche del día siete de dicho mes y fué el ocho por la mañana que el señor Javier López Santos notó la falta de su buey.

Contra la sentencia referida y con auxilio del Abogado Carlos Polanco Quiroz, Porfirio Cruz Dionisio introdujo recurso extraordinario de casación por infracción de ley, diciendo: "Contra la sentencia condenatoria de fecha veinte de Abril próximo pasado, de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, interpongo Recurso Extraordinario de Casación por Infracción de ley, señalando como infringidas en ella las leyes siguientes: Artos. 1º, 11, 401 en su inciso 1º, 404 en su inciso 2º del Código Penal; y 3º, 146, 259, 566, 568, 570, 571, 573, 574, 584, 585, 586, en todos sus incisos, del Código de Procedimientos Penales; Arto. 15 Inciso m) del Estatuto Político. Como casos de procedencia del recurso, invoco los contenidos en los incisos 4º, 5º y 8º del Arto. 656 (adicionado por el Arto. 1º, Dto.

487 del Congreso de la República) éste último por haberse cometido error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas...". Hace consistir este último error en no haber tomado en todo su valor probatorio las declaraciones de los testigos que allí mismo cita, con quienes dice haber probado no tener participación en los hechos que se le imputan y asegura que el error de hecho y de derecho está en haber atribuido valor jurídico a las declaraciones de los guardias captores, para fundar en ellas su condena, no obstante haber sido contradichas con los testigos antes referidos.

Corridos los trámites de este recurso, es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

De acuerdo con las disposiciones terminantes del artículo 682 del Código de Procedimientos Penales, reformado por el 3° del Decreto 487 del Congreso, el recurso de casación deberá interponerse por escrito, cumpliendo entre otros requisitos, con expresar el ARTICULO E INCISO que contenga el caso de procedencia en que se funda dicho recurso, extremo que no fué debidamente satisfecho en éste, pues como se copia anteriormente, al citar los casos de procedencia, el recurrente dijo: invoco los contenidos en los incisos 4°, 5° y 8° del artículo 656, adicionado por el artículo primero del Decreto 487 del Congreso, sin decir a qué cuerpo de leyes se refiere el primer artículo citado, ni ser cierto que el artículo primero del Decreto últimamente mencionado adicione el 656 referido; y, aunque al final de este sometimiento se lee: "Me baso en los Artos. 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681 P.P.", esto tampoco es cumplir con el mandato contenido en el inciso 7° del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, puesto que no se señala el inciso o incisos que determine el caso de procedencia requerido, y como a este Tribunal sólo le es permitido tomar en consideración las leyes citadas, al interponerse el recurso o antes de que se señale día para su vista, no es posible entrar al estudio de la sentencia impugnada y relacionarla con los artículos que se dicen violados, por falta de elemento de enlace que constituye el caso de procedencia respectivo. Artículo 4° del Decreto 487 del Congreso.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en lo preceptuado por los artículos 222, 224 y 233 del Decreto

Gubernativo 1862; 686 y 690 del Código de Procedimientos Penales, DESESTIMA el presente recurso e impone a su interponente quince días de arresto, conmutables a razón de veinticinco centavos de quetzal por día. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponde. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Feredito Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

PROCESO seguido a Rodolfo García Palacios por el delito contra la seguridad de la familia.

DOCTRINA: No puede prosperar el recurso de casación por error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, si el recurrente no identifica cada uno de estos errores, no señala en el caso del error de hecho, el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, veintitrés de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus antecedentes se examina la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones el diecisiete de enero del corriente año, en el proceso que por el delito contra la seguridad de la familia se siguió en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Departamento de Quezaltenango contra Rodolfo García Palacios.

RESULTA:

El ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro se presentó al Juzgado Tercero de Paz de la ciudad de Quezaltenango, Berta Consuelo Martínez de García, manifestando: que en dicho Tribunal siguió juicio de alimentos contra Rodolfo García Palacios, por estar obligado a estas prestaciones a favor de la hija de ambos, menor de edad, Florinda Consuelo García Martínez; que por sentencia ejecutoriada García Palacios debe pagar diez quetzales mensuales por alimentos y que a la fecha de la querrela García Palacios solamente había pagado las mensualidades de febrero

y marzo del año anterior, por lo que debía catorce mensualidades; que dicho señor cuenta con posibilidades económicas para pagar, pero que no lo hace por capricho. El Juez ordenó que se instruyera la averiguación, y se certificaron en autos: a) la sentencia dictada el quince de julio de mil novecientos cincuenta y tres en el juicio de alimentos ya referido, sentencia en la cual se condena a García Palacios a pagar la cantidad de diez quetzales en concepto de alimentos de su menor hija Florinda Consuelo, la cual deberá cubrir mensual y anticipadamente, obligándosele a pagar desde la mensualidad de febrero de aquel año, inclusive; y b) resoluciones dictadas por el Tribunal el cinco de octubre, el veintiocho de octubre y el catorce de noviembre, en la que fijan términos a García Palacios para que haga efectivas las pensiones, la segunda vez bajo apercibimiento de multa y la tercera imponiéndosele multa de cinco quetzales. Las diligencias pasaron al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Departamento de Quezaltenango, que ordenó la captura del enjuiciado.

RESULTA:

Que habiéndose logrado la captura del reo, confesó ser cierto que no ha pagado las mensualidades a que fué condenado, excepto las de febrero y marzo de mil novecientos cincuenta y tres y manifestó que no lo ha hecho porque su situación económica es difícil; negó haber sido requerido de pago y ser propietario de una casa y de un vehículo de motor. Se le motivó prisión por delito contra la seguridad de la familia y el mismo día obtuvo su libertad bajo la fianza de haz. Durante el sumario presentó certificación de la demanda ejecutiva entablada en su contra por Imelda de León de Avila ante el propio Juzgado, fechada el diez de agosto del cincuenta y tres, y del documento constitutivo de la obligación, fechado el dos de abril de mil novecientos cincuenta y dos. Obra un informe del Alcalde Municipal de Huehuetenango, lugar del domicilio de García Palacios, en el que se hace constar que éste es persona pobre, honrada y de buenas costumbres. Flavio Ruiz Reyna dijo: que desde hace tiempo le viene facilitando a García Palacios cantidades de dinero para negocios, pero que respecto a su situación económica no puede dar fé. Samuel Ordóñez Vásquez y Guillermo Gómez Chávez expusieron que García Palacios es pobre y que su trabajo no le alcanza para sostenerse, sin dar razón satisfactoria de este dicho. Fidelina Avila Rodríguez expresó: que desde hace como tres años el reo le debe doscientos quetzales que no le ha pagado; Marcela Félix viuda de Mendoza,

que el mismo le debe quinientos quetzales que le prestó hace como ocho meses, y Guillermo Gómez Chávez, que aquél le adeuda doscientos treinta y seis quetzales desde hace como dos años y medio.

RESULTA:

Que elevada la causa a plenario, se le tomó al reo confesión con cargos, formulándose el que le resulta por haberse negado a pasar para su menor hija Consuelo, la mensualidad de diez quetzales a que fué condenado, cargo con el cual no se conformó, nombrando como su defensor al Licenciado Justo Pérez López. La querellante formalizó acusación y la causa fué abierta a prueba por treinta días. Dentro de ese término, la acusadora presentó como pruebas: a) certificación del Segundo Registro de la Propiedad Inmueble, en donde consta que Rodolfo del Tránsito y Zoila García Palacios son dueños por herencia de la finca urbana seis mil ciento nueve, folio quince, del libro cuarenta y uno de Huehuetenango, consistente en casa y sitio en la ciudad de Huehuetenango, estando anotados los derechos de Rodolfo; y b) nueva certificación de los apremios hechos a García Palacios para que pague las pensiones. Para mejor fallar, y habiéndose ordenado que el reo presentase los documentos que acreditan sus deudas, éste presentó testimonio de la escritura pública otorgada ante el Notario Marco Augusto Recinos y a veinte de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, en la cual se reconoce deudor de Marcela Félix viuda de Mendoza, por la cantidad de quinientos quetzales, para devolverla a los tres meses siguientes. También aparece un informe del Registro de la Propiedad Inmueble sobre los derechos de García Palacios en la finca ya mencionada.

RESULTA:

El quince de noviembre del año próximo pasado dictó el juez su sentencia, en la cual estimó: que quedaron comprobados los elementos requeridos para tipificar el delito contra la seguridad de la familia, a saber: 1) sentencia firme condenatoria de alimentos, 2) negativa del cumplimiento de la obligación, 3) requerimiento por autoridad competente; que no se justifica que el reo consiguiese dinero para su excarcelación y no lo pudiese obtener para pagar las pensiones alimenticias de su hija. Por lo expuesto, lo declara autor responsable de tal delito y le impone la pena de un año de prisión correccional. Por apelación de esta sentencia, la Sala dictó la que se examina, en la cual confirma la de primera instancia. La

Sala hizo parecidas apreciaciones en cuanto a que estaban probados los elementos del delito, expresando que, en cuanto a la posibilidad económica del obligado a pasar alimentos, la ley la presume, puesto que debe considerarse como antecedentes necesarios para proferir sentencia condenatoria en el sumario de alimentos, y que fué puesta de nuevo en evidencia en el juicio penal, al comprobarse que el reo es dueño de la mitad de un inmueble; que la defensa, al pretender aparentar una supuesta imposibilidad económica, únicamente demostró el buen crédito comercial y económico de que goza García Palacios, al conseguir en diferentes ocasiones dinero a mutuo hasta por cantidades que llegan a quinientos quetzales.

Contra esta sentencia interpuso el reo el presente recurso de casación por infracción de ley, que fundamentó así: considera que se ha cometido error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, resultando el último de documentos y declaraciones que demuestran la equivocación de la Sala sentenciadora; que la Sala sólo aprecia y hace mérito de lo probado por la acusadora, pero deja de apreciar que se probó superabundantemente en el proceso que no tiene posibilidades económicas para cumplir con su obligación, pues no otra cosa se comprueba con los siguientes medios de convicción: a) certificación del Registro en donde constan las anotaciones a su propiedad por deudas; b) documento de deuda a Marcela Félix viuda de Mendoza; c) declaraciones de Samuel Ordóñez y Guillermo Gómez Chávez sobre que es pobre; d), e) y g) declaraciones de Fidelina Avila Rodríguez, Marcela Félix viuda de Mendoza e Imelda de León Avila, sobre deudas que les tiene, y f), informe del Alcalde de Huehuetenango. Por lo expuesto cree que la Sala violó los artículos 568, 571, 572, 573, 574, 585, 602 del Código de Procedimientos Penales y 32 del Decreto del Congreso 147. Se funda en los artículos 673, 674, 675, 676 inciso 8o., adicionado por el artículo 1o. del Decreto 487 del Congreso, 2o. de dicho Decreto, 683, 685 y 687 "P.P."

CONSIDERANDO:

Frecuentemente ha expresado este Tribunal que, en virtud de las limitaciones legales del recurso de casación y de su carácter eminentemente técnico, para que prospere este recurso por error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas, es preciso que el recurrente cumpla con indicar en qué consiste a su juicio el error alegado y que en el caso del error de hecho identifique sin lugar a dudas el documento o acto auténtico que demuestre

la equivocación del juzgador; que en el caso de examen, el recurrente sólo indica que la Sala sentenciadora cometió error de hecho y expresando simplemente que dicho Tribunal dejó de apreciar las pruebas que menciona, como si se tratase de una nueva instancia, pues no es cumplir con aquella obligación enumerar las pruebas de cargo o de descargo y lo que de ellas resulte, sino señalar en el error de hecho la falsa apreciación histórica de algún hecho que ha sido materia de prueba, y en el error de derecho, la equivocación en cuanto al valor legal de la prueba rendida.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los artículos 222, 223, 232, 233, 234, del Decreto Gubernativo 1862; 682 inciso 8o. y 690 del Código de Procedimientos Penales, declara: IMPROCEDENTE el recurso e impone al recurrente la pena adicional de treinta días de prisión simple, conmutable en su totalidad a razón de un quetzal diario. Notifíquese, y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Herrarte González).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Carlos Arias Ariza. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Por el delito de homicidio culposo seguido contra Humberto Palacios Pereira.

DOCTRINA: El Tribunal que condena apoyándose en presunciones que se dicen fundadas en hechos deducidos por lógica, pero que están contra lo que aparece probado en los autos, comete error de derecho en la apreciación de la prueba.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, treinta de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus antecedentes se examina la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el primero de Junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, en la causa que por el delito de homicidio, cometido por imprudencia temeraria, se siguió contra Humberto Palacios Pereira; y,

RESULTANDO:

Que el trece de Febrero de mil novecientos cincuenta y tres, a las doce horas y veinte minutos se presentó ante el Juez de Paz de Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, Félix Socoreque, dándole parte que en esos momentos había muerto un menor de edad, por un accidente de un camión. Al ratificar su parte, Socoreque agregó que: estando de turno, como Ministril de aquella Municipalidad, el Regidor Isabel Socoreque dispuso ir a almorzar juntamente con él, por lo que se dirigieron a sus habitaciones, situadas en el caserío "La Libertad", jurisdicción del mismo municipio; que al salir a la carretera asfaltada y llegar por la finca "La Chozza" alcanzaron a un grupo de niños que habían salido de la escuela y caminaban en gran alboroto en la carretera; que habiéndose pasado del grupo indicado fueron alcanzados por algunos niños y una niña decía que había matado a su hermanito un camión que corría para abajo, llevando tubos; que al regresar para el lugar que se les indicaba encontraron a un niño sobre el asfalto a media calle, presentando el cráneo abierto completamente por lo que el Regidor le ordenó ir a dar parte; que no sabe el nombre de los niños por hacer poco tiempo que él se hizo vecino del lugar; que antes del aviso dado por los niños ellos vieron pasar el camión cargado de tubos que corría de Guatemala para la Antigua.

Constituido el Juez instructor en el lugar del suceso hizo constar la posición del occiso, de quien, por estar presentes los señores Benedicto Flores y Andrea Pérez, padres del mismo, se supo que respondía al nombre de José Mamerto Flores Pérez y tenía siete años de edad; que no había señales de arón de llantas, se encontraron vidrios rotos y que el vehículo caminaba sobre su derecha. Corre agregado el plano levantado en el acto de la inspección practicada.

Examinados Benedicto Flores y Andrea Pérez dijeron haber sabido lo que ocurrió a su hijo José Mamerto por el dicho de su hija Lucía Flores Pérez, que juntamente con él se iban a la escuela del lugar, y que se constituían acusadores del culpable.

RESULTANDO:

El mismo día trece de Febrero, el Jefe de la Guardia Civil de la ciudad de Antigua Guatemala, dió parte al Juez de Paz de Santa Lucía Milpas Altas, que el señor Humberto Palacios Pereira, se había presentado a su Despacho, manifestándole lo ocurrido con el niño que re-

sultó muerto, por lo que pedía la presencia de él en aquel lugar; que en vista de ello se había constituido allá con el secretario Elías López Sosa y experto oficial Mario Muñoz Arévalo, pudiendo constatar que el chofer caminaba a su derecha a velocidad moderada; que no obstante lo dicho dejaba a su disposición al piloto Palacios Pereira.

Examinado Isabel Socoreque, expuso lo mismo que Félix del mismo apellido, agregando que en el momento de pasar ellos por aquel paraje estaban dos camiones, uno con dirección a Guatemala y el otro para la Antigua.

Lucía Flores Pérez dijo: que el día trece de Febrero, yendo para su casa después de salir de la escuela, al pasar la finca "La Chozza" un camión no les dejó vía para pasar, logrando ella escaparse por un lado, pero no así su hermanito José Mamerto a quien atropelló, tirándolo al suelo y siguiéndolo sin parar para la Antigua Guatemala; que las niñas Herlinda y Sofía Coloma Pérez gritaron al ver lo ocurrido y ella le avisó a Isabel Socoreque y a su papá— Herlinda Jiménez dijo que ella había oído gritos de los niños diciendo que habían matado a José Mamerto Flores, pero que ella no lo vió.

Indagado Humberto Palacios Pereira dijo: que yendo el día trece de Febrero de aquel año, de la ciudad de Guatemala para Santo Domingo Suchitepéquez, vía Antigua Guatemala, piloteando su camión placas dieciséis, novecientos noventa y dos, (16-992), que llevaba tubos de hierro de la Dirección General de Aguas y Drenajes, se encontró con un carro que caminaba en sentido contrario al suyo, notando que unos niños que corrían a su lado se desparajaron quedando finalmente en fila para dar paso al tránsito; que al pasar frente a ellos se dió cuenta "que un niño camisa cuadriculada dió un embión a otro que dió lugar a estrellarse en el frente de su camión y presto paró pero al ver que el niño se encontraba gravemente dispuso seguir su marcha hacia la ciudad de la Antigua Guatemala para solicitar el auxilio necesario a las autoridades respectivas..." lo que hizo presentándose a la Guardia Civil de aquella localidad donde dejaron en depósito su vehículo.

Llegadas las diligencias al Tribunal de Primera Instancia, después de motivarle prisión y obtener el informe médico de la autopsia, practicada en el cadáver de José Mamerto Flores Pérez, se dejó en libertad bajo fianza al enjuiciado.

El experto Mario Muñoz Arévalo dijo que: el camión del accidente lo había encontrado en buenas condiciones de funcionamiento y

que, fuera de la rotura que presentaba el vidrio del farol izquierdo, el estado general del vehículo era bueno.

RESULTANDO:

Al tomársele confesión con cargos al procesado no se conformó con los que se le formularon, se unificó la personería de los acusadores y evacuadas las audiencias respectivas se abrió a prueba el juicio, dentro de cuyo término y su prórroga se rindieron, por la acusación las siguientes declaraciones: de Francisco González, de diez años de edad, Salomón Ubedo Diéguez, de once años, Fabián Tunche Bran de catorce y Manuel de Jesús Ubedo de siete; quienes, a excepción del último, que asegura no haber visto nada, dicen que el día y hora de autos iban unos detrás de otros y que al oír un trueno del camión volvieron a ver y se dieron cuenta que el referido vehículo, que no paró, había atropellado a Mamerto; inspección ocular donde consta que "... no existe arón alguno" es decir huellas de rodaje que demuestre un paro repentino..." en el lugar del suceso; declaraciones de Félix e Isabel Socoreque, quienes ratificaron las primeramente otorgadas, agregando que no encontraron al vehículo ni al que cometió el hecho en ese lugar cuando llegaron a él, por lo que es natural que no haya prestado auxilio a la víctima. Isabel Socoreque dice además que, momentos antes vió que tanto el camión del accidente como otro vehículo que caminaba en sentido contrario se pararon arriba del lugar del hecho, pero después cada uno siguió su camino; y declaraciones de Edelmiro Estrada, José Antonio de León Barrios y Teresa Muñoz, quienes dicen constarles la muerte de José Mamerto Flores por referencias y no recordar que alguno de los niños de su escuela haya llevado camisa cuadriculada el día de autos. (Estos fueron repreguntados por la otra parte). Por la defensa se presentaron: declaración de Raúl Mollinedo Calderón, quien aseguró haber encontrado al enjuiciado entre los kilómetros veintidós y veintitrés de la carretera Guatemala-Antigua, el día del hecho; que caminaba a veinte kilómetros y completamente a su derecha y, a virtud de repreguntas, agregó: que el piloto no había tomado licor y aunque no vió el accidente llegó poco después al lugar y pudo constatar que el chofer había dejado el "frenazo" de las llantas en el pavimento, es decir las marcas que estaban hacia la derecha del camino, hasta casi salirse del asfalto, en el kilómetro treinta y dos; declaraciones de Lisandro del Pinal García y Alberto Martínez Ortiz sobre que Humberto Palacios Pereira es experto mecánico y hábil chofer a quien cono-

cen desde hace más de veinticinco años y saben que no toma licor; Francisco González Pérez y José Godínez Piril, ayudantes del enjuiciado cuando se produjo el accidente, contestando afirmativamente a las preguntas de un interrogatorio formulado, dijeron ser cierto que venían en el camión del accidente el día y hora de autos; que el piloto no había tomado licor, caminó siempre despacio y a su derecha, habiendo atropellado al menor Flores Pérez porque éste fué empujado por un niño de camisa cuadriculada; que Palacios Pereira paró el camión después del golpe del niño, pero viendo a éste mal golpeado dispuso seguir para la Antigua a pedir auxilio, entregándose allá a la autoridad. Al ser repreguntados estos últimos testigos explicaron que los niños caminaban sobre la carretera en desorden y al dejar un espacio el piloto pasó, pero en ese momento se produjo el accidente, por la razón antes explicada; que ellos no se tienen por responsables del suceso, ni tienen interés en que se absuelva a Palacios y que éste si paró el camión al darse cuenta del accidente.

Vencido el término de prueba y su prórroga, y agregada a los autos una certificación extendida por el Jefe de la Guardia Civil de Antigua Guatemala, se dictó auto para mejor fallar, mandando practicar varias diligencias que dieron el siguiente resultado: ampliación del dictamen del experto Mario Muñoz Arévalo indicando que el paro de un vehículo que marcha bastante despacio no deja huellas o frenazo; "...que a juzgar por las huellas de sangre, rodaje del vehículo, y fragmentos de vidrio del mismo vehículo, se deduce que el camión venía completamente a la derecha, y que el piloto del vehículo seguramente no pudo evitar el accidente". José Ezequiel y Venancio Porras Miranda dicen: que el día trece de Febrero en referencia hicieron viaje a esta capital y en el camino encontraron al enjuiciado, a las doce y diez minutos, que viajaba en sentido contrario a ellos, y al pasar por el tronque del camino que sale de Santa Lucía Milpas Altas encontraron a un grupo de niños que caminaban en alboroto y en ese momento tuvieron el encuentro con Palacios Pereira, quien caminaba con una velocidad de veinte a veinticinco kilómetros por hora y muy a su derecha. Joaquín Oviedo Gómez declara igual que los anteriores. Tiburcio Aragón sólo dice que el día y hora de autos se quedó cuidando en el Despacho mientras el Regidor Isabel Socoreque y Félix del mismo apellido iban al almuerzo. El niño de doce años de edad, Félix Montesuma Tunche, dice que el día del suceso él caminaba juntamente con Juan Chó, alumno de la misma escuela de Santa Lucía y atrás

iba otro grupo de alumnos entre los que, por rumores, sabe que caminaba José Mamerto Flores. Lorenzo Chó de nueve años de edad dice que nada sabe del hecho investigado.

RESULTANDO:

Con los antecedentes referidos el Tribunal de Primer Grado dictó sentencia absolviendo al enjuiciado, pero al conocer la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, por recurso interpuesto contra aquél fallo, lo revocó y condenó a Humberto Palacios Pereira a sufrir la pena de VEINTISEIS MESES y VEINTE DIAS DE PRISION CORRECCIONAL, más las accesorias de ley, estimando que obra en su favor la atenuante de haber confesado hechos que le perjudicaban y que por analogía con la confesión directa debe abonársele como atenuante. La Sala sentenciadora en su consideración dice: "Que si bien la prueba de cargo no establece directamente la culpabilidad del encartado Humberto Palacios Pereira como autor responsable del fallecimiento del menor José Mamerto Flores, es de advertir que de los hechos que en seguida se analizan, y los cuales esta Cámara estima plenamente probados, se induce lógicamente la culpabilidad del procesado, descartando por consiguiente dicha prueba indirecta la que sobre su inocencia presentó éste durante la dilación probatoria..." "...que consiste en los dichos de los testigos que lo vieron transitar por la carretera que de esta Capital conduce a la ciudad de Antigua... y las declaraciones de Francisco González Pérez y José Godínez Piril, ..." testimonios aquellos que no dan fe sobre la velocidad a que caminaba el vehículo en los precisos momentos del accidente y carecen de valor legal por falta de imparcialidad, el de los dos últimos, pues eran ayudantes del enjuiciado cuando ocurrió el hecho. Considera también el Tribunal sentenciador que, el enjuiciado no auxilió a la víctima aunque asegure haberse parado después del accidente, extremo éste que no acepta y, por el contrario, induce que caminando a una velocidad incapaz de poder contener súbitamente su vehículo ocasionó el accidente, lo que fortalece la falta de huellas de patinaje en el pavimento, según dice el fallo de mérito.

RESULTANDO:

Contra la sentencia de segundo grado y con auxilio del Abogado Marco Tulio Martínez Bonilla, Humberto Palacios Pereira introdujo recurso de casación por violación de ley, citando como violados los artículos 568, 572, 573, 574 581 inciso 4o., 582, 586 incisos primero, segun-

do y cuarto, 595, 596, 597, 601, 602 incisos segundo y séptimo y artículo 570, todos del Código de Procedimientos Penales, a excepción del 601 que no se dice a qué cuerpo de leyes corresponde.

Se funda en el inciso octavo del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales para interponer dicho recurso.

Alega el recurrente que los errores de derecho en la apreciación de las pruebas consisten en no haberles dado validez a los testigos José Ezequiel y Venancio Porras Miranda, Raúl Mollinedo Calderón y Joaquín Oviedo Gómez, porque el hecho de haber dicho unos que el camión del accidente caminaba a veinticinco kilómetros y otros que iba muy despacio no es contradictorio, sino que confirma la verdad de que caminaba despacio y por consiguiente coinciden en la substancia, por cuya razón se violaron los cuatro primeros artículos citados.

Asegura que al no dar mérito a los testigos Francisco González Pérez y José Godínez Piril se violó, el artículo 581 en su inciso 4o. y el 582 ambos del Código de Procedimientos Penales, porque estos preceptos dan validez a tales testigos, por haberse producido sobre hechos ocurridos en lugar despoblado y no estar probado que vivieran en casa del reputado por amo y le prestaran servicios mediante un salario fijo; que igualmente se cometió error de derecho al dar validez a las declaraciones del menor Francisco González, de diez años de edad, Isabel y Félix Socoreque, quienes conocieron del hecho por referencias, violándose nuevamente el inciso 4o. del artículo 586 del Código de Procedimientos Penales.

Aduce el procesado que las presunciones que fundan el fallo impugnado se apoyan en hechos no probados, pues no haber encontrado huellas en el pavimento donde ocurrió la muerte de José Mamerto Flores y que por esa razón deba deducirse obligadamente que el camión del accidente no paró, es una conclusión a la que se llegó sin que exista aquella gravedad y precisión contemplados por el artículo 595 del Código de Procedimientos Penales y por eso se incurrió en error de derecho, al analizar esa prueba, y se infringió tanto el artículo citado como el 596 y 597 del mismo cuerpo de leyes referido; que la otra presunción, derivada de que el camino donde ocurrió el hecho es de veinticinco metros de ancho, inclinado y con curva, para deducir la gran velocidad con que se supone caminaba el camión, en el momento del accidente, no tiene el enlace necesario de causa a efecto, pues en las curvas siempre se hace disminuir la velocidad de los vehículos en marcha, por cuya razón la Sala

sentenciadora violó también los artículos 595, 596, 597 y especialmente el 601 en concordancia con los casos ya expuestos.

Al referirse al error de hecho, en la apreciación de la prueba, el recurrente dice que éste se cometió al no tomar en cuenta el informe de la Guardia Civil de Antigua Guatemala y la ampliación del informe pericial, dado por el experto Mario Muñoz Arévalo, con los que se prueba que se acudió a la autoridad para pedir auxilio en favor de la víctima y que un vehículo que caminaba despacio no deja huellas al parar; que habiéndose cometido estas omisiones se infringieron los incisos segundo y séptimo del artículo 602 del Código de Procedimientos Penales, en concordancia con el inciso tercero del artículo 570 del mismo cuerpo legal.

Pasado el día de la vista es procedente resolver;

CONSIDERANDO:

El recurso que se resuelve fué introducido por imputarse error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba testimonial, documental, de expertaje y presuncional; apoyándose para ello en el inciso octavo del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que fué adicionado por el artículo primero del Decreto 487 del Congreso; errores que se hacen consistir: el de hecho, en la omisión del análisis del informe dado por el Jefe de la Guardia Civil de Antigua Guatemala y la ampliación que de su informe diera el experto Mario Muñoz Arévalo; y, el de derecho, en la equivocada apreciación que se hizo de las declaraciones de José Ezequiel y Venancio Porras Miranda, Raúl Mollinedo Calderón, Joaquín Oviedo Gómez, Francisco González Pérez, José Godínez Píril, menor Francisco González y González y Félix e Isabel Socoreque, así como en la apreciación de los hechos que se tuvieron por probados para deducir las presunciones que fundamentan el fallo recurrido; y se asegura que con ese proceder se violaron los artículos 568, 570, 572, 573, 574, 581 inciso 4o., 582 y 586 incisos 1o., 2o. y 4o. del Código de Procedimientos Penales, relativos a la prueba testimonial; 595, 596, 597 y 601 del mismo cuerpo de leyes mencionado, referentes a la prueba de presunciones; y el artículo 602 incisos 2o. y 7o. del Código de Procedimientos Penales, que se refieren a los documentos públicos o auténticos.

La Sala sentenciadora asienta que: aunque el enjuiciado "...afirma haber detenido la marcha del vehículo, tal especie no es acepta-

ble, ya que los auxiliares Félix Socoreque e Isabel del mismo apellido..., dicen haber sido avisados por la hermana del occiso Lucía Flores Pérez de que "en esos momentos atrás habían matado a su hermano José Mamerto de sus apellidos" regresando inmediatamente al lugar del hecho, dándose cuenta de que por ese lugar corrían varios vehículos entre los cuales encontraron al camión cargado de tubos de hierro con dirección de Guatemala a la Antigua"; que esas declaraciones están corroboradas por el dicho del menor Francisco González, quien dijo pensar que un camión que corría para abajo había dado muerte a José Mamerto, lo que pone de manifiesto que el conductor no paró ni un momento y, aunque aparece caminando sobre su derecha, ello no excusa la presunción humana de que el vehículo corría a una velocidad incapaz de poder contenerlo súbitamente, dadas las condiciones de la vía en aquel lugar, porque de otro modo habría podido controlar su velocidad y hacer un paro rápido o desviarse sin las consecuencias de la inercia; además, de la falta de huellas de patinaje en el pavimento, infiere que el vehículo en referencia no paró y caminaba a excesiva velocidad, y con ello estima probada la responsabilidad del enjuiciado, como autor de la muerte de José Mamerto Flores Pérez, por no haber previsto el hecho con elemental y ordinaria diligencia, y obrar con ostensible descuido de sus obligaciones e infracción del reglamento de tránsito, al no caminar a velocidad moderada en carretera transitada por peatones.

Ahora bien, el análisis que se acaba de indicar, hecho para considerar probado que Humberto Palacios Pereira caminaba a excesiva velocidad y sacar de ahí su responsabilidad en la muerte del menor Flores Pérez, sin tener en cuenta que Isabel Socoreque dijo: (folios ocho vuelto y setenta y cuatro frente), que el camión cargado de tubos de hierro y otro que caminaba en sentido contrario, se pararon momentáneamente arriba del lugar del hecho; y, que Raúl Mollinedo Calderón, Joaquín Oviedo Gómez, José Ezequiel y Venancio Porras Miranda, declararon haber encontrado al enjuiciado en diferentes lugares, incluso a inmediaciones de donde ocurrió el accidente, caminando a velocidad de veinte a veinticinco kilómetros por hora y completamente a su derecha, es cometer error de derecho en la apreciación de tales pruebas, porque con aquel análisis se tuvo por presuntivamente probado lo contrario de lo que en realidad establecen las declaraciones de los testigos referidos, violándose así los artículos 572, 573, 574 y 586 inciso 2o. del Código de Procedimientos Penales, por lo que es procedente casar y anular el fallo re-

currido, sin entrar al análisis de los demás artículos que el recurrente cita como infringidos, por ser innecesario.

CONSIDERANDO:

Con las declaraciones de Félix e Isabel Socoreque, acta de inspección ocular practicada por el Juez de Paz de Santa Lucía Milpas Altas, informe médico legal de la autopsia practicada y declaración indagatoria del enjuiciado, ha quedado plenamente demostrada la muerte del menor José Mamerto Flores Pérez, ocurrida el trece de Febrero de mil novecientos cincuenta y tres, a las doce horas y diez minutos, más o menos, a consecuencia de un accidente de tránsito, por lo que debe hacerse el estudio requerido por el caso para establecer las consecuencias jurídicas del mismo. Artículos 4o., 5o., 259, 260 y 270 del Código de Procedimientos Penales.

CONSIDERANDO:

La evidencia de que Humberto Palacios Pereira manejaba su camión, cargado de tubos de hierro galvanizado, cuando ocurrió la muerte de José Mamerto Flores Pérez, proviene de su confesión y el parte rendido por el Jefe de la Guardia Civil de la ciudad de Antigua Guatemala, que obra a folio siete de la causa, el que, aunque no aparece ratificado, es un documento extendido por quien estaba en la obligación de hacer constar las cuestiones relativas a su objeto y lleva el sello de la dependencia gubernativa encargada de esas diligencias. Sin embargo, es necesario recordar que, lo asegurado por el Jefe de la Guardia Civil indicada, se debe a lo dicho por el enjuiciado ante la Sargentía de la referida Guardia y por consiguiente es el mismo procesado quien dió ocasión a que la justicia tuviera la verdad del suceso, desde pocos momentos después de lo ocurrido, pues las declaraciones de Félix e Isabel Socoreque, Francisco González, Lucía Flores Pérez, Benedicto Flores, Andrea Pérez, Herlinda Jiménez y todos los que aparecen en el juicio, nada dicen de la forma como ocurrió el hecho, a excepción de Francisco González Pérez y José Godínez Piril que, ya en el pleuario, confirman lo expuesto por Palacios Pereira; que aunque se dice que aquéllos iban como ayudantes de éste, en el momento de acaecer el hecho en cuestión, esa sola circunstancia no invalida sus declaraciones, porque no está debidamente probado que hayan dependido de él, viviendo en su casa y prestándole servicios mecánicos por un salario fijo. De manera que, no habiendo otra prueba sobre la forma y circunstancias en que sucedió el hecho

que culminó con la muerte de José Mamerto Flores Pérez, distinta de la explicada por los testigos últimamente referidos y la confesión del enjuiciado, debe aceptarse como verdadera esta explicación y llegar a la conclusión de que el hecho ocurrió por mero accidente, en cuya virtud procede hacer la declaración que en derecho corresponde. Artículos 15 del Código Penal; 3o., 567, 571, 572, 573, 574, 576, 582, 603, 609 y 614 del Código de Procedimientos Penales.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en los artículos 686, 687, 723, 730, 732, 735 y 736 del Código de Procedimientos Penales; 224, 232 y 233 del Decreto Gubernativo 1862, casa y anula la sentencia recurrida y, resolviendo sobre lo principal, absuelve a Humberto Palacios Pereira del cargo que se le formuló por la muerte de José Mamerto Flores Pérez, por estar exento de responsabilidad. Notifíquese y como corresponde devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Alberto Herrarte. — J. A. Ruano Mejía. — Alberto Argueta S. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Por el delito de Hurto contra Abel Yalibat Chinchilla.

DOCTRINA: *No se comete error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia, en concepto de atenuantes de responsabilidad criminal, si aún concurriendo la confesión del reo no se le tuvo como atenuante, por existir otras pruebas sobre el hecho confesado.*

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintiocho de Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación y con sus antecedentes se examina la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el dos de Mayo del año en curso, en el proceso que por el delito de hurto se siguió en el Juzgado de Primera Instancia de Alta Verapaz, contra Abel Yalibat Chinchilla; y,

RESULTANDO:

El veinte de Septiembre del año próximo pasado, Alejandro Sánchez Reyes se presentó al Juzgado de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz, exponiendo: que es representante y a la vez administrador de la Empresa de Transportes "Guatemala", de la firma "Dill Coronado y Compañía Limitada" (Tragua) de aquella ciudad; que Carlos Chinchilla González, le acaba de informar que Abel Yalibat sustrajo de la bodega "El Arco", propiedad de su representada, un resorte de camión, cuando regresando de Caquiepec conducían mineral para El Rancho; que la sustracción la hizo mientras Chinchilla González chequeaba el aceite del camión en que llevaban el mineral referido y fué como a las cuatro de la mañana; que ese mismo día, al ir por la cuesta de Santa Elena, que queda en jurisdicción de San Jerónimo Verapaz, encontraron a Jacinto Ramos con su camión, trayendo de ayudante a Mario San José y con él mandó el resorte para San Jerónimo a fin de que le fuera entregado a su mujer, Leticia Gularte; que dicho resorte es marca "Ford" estimado en quince quetzales y revisados sus inventarios ha comprobado que le falta aquel repuesto. Carlos Chinchilla González, José Jacinto Ramos Meza y Mario San José, declararon corroborando lo dicho por Sánchez Reyes.

RESULTANDO:

Practicada inspección ocular en la bodega donde se guardan los repuestos y demás herramientas de la "Dill, Coronado y Compañía Limitada", el Juez hizo constar que dicha bodega está construida de Oriente a Poniente con una puerta en cada uno de estos lados, teniendo tres ventanas al Sur y tres al Norte; que el edificio está dividido en tres partes por medio de tablas que forman tres piezas, de las cuales, la que tiene puerta al Oriente está separada de las demás, pero la del medio y la del Poniente se comunican entre sí porque las tablas que forman ambas piezas no topan a la pared del Sur; que como no hay "cielo raso" fácil es pasar de una pieza a la otra por encima; que él supone que el responsable entró por la ventana que está cerca de la esquina sudeste por tener unos vidrios rotos y ser fácil meter la mano y levantar el pasador, llegando después hasta la pieza del Poniente, que es donde Sánchez Reyes asegura que se encontraba el resorte objeto de la sustracción. Practicada inspección ocular en el camión manejado por Yalibat, se encontró el resorte en mención debajo del cojín de la cabi-

na. Dicho resorte fué valuado en la suma de cinco quetzales, por el experto Arnoldo Archila Prado.

Capturado Abel Yalibat Chinchilla, fué indagado y confesó su delito, calificando su dicho con asegurar que la sustracción la había llevado a cabo para tener un repuesto que le serviría al camión por él manejado, a fin de que no se le quitara de su sueldo, como antes lo habían hecho, cuando se le rompían los resortes del vehículo.

Eduardo Chun Caal y José Aurelio Mijangos Rojas declararon sobre la propiedad que corresponde a "Dill, Coronado y Compañía Limitada" en el resorte en cuestión. René Najarro Ponce dijo que, como bodeguero no autorizó la extracción de tal resorte y Leticia Leonor Gularte de Yalibat se acogió al privilegio de no declarar por tener parentesco con el procesado, después de lo cual se elevó a plenario la causa, no conformándose el enjuiciado con los cargos que se le formularon.

Abierto a prueba el juicio se rindió, la de honradez y buenas costumbres, por medio de las declaraciones de Otto Roberto Pérez Sobe-ranis y Juan Emigdio Juárez, después de lo cual se señaló día para la vista, se reformó el auto de prisión al enjuiciado y se le dejó en libertad.

Por haberse mandado, en auto para mejor fallar, se amplió la indagatoria de Yalibat Chinchilla, quien dijo que sí podía usarse el resorte marca "Ford" en el camión "Chevrolet" que él manejaba, pero al inspeccionar el Juez dicho resorte y camión, con presencia del experto Mauro Fernández de la Cruz, éste dijo que no se puede usar tal resorte en camión de marca distinta al "Ford".

Con tales antecedentes el Tribunal de primer grado dictó sentencia, el veintiuno de Febrero del año en curso, declarando que Abel Yalibat Chinchilla es autor responsable del delito de hurto, por cuya infracción lo condena a sufrir la pena de seis meses de arresto mayor inmutables, más las accesorias de ley. Apelada la sentencia de mérito, la Sala jurisdiccional, después de tramitar el recurso, emitió su fallo confirmando el de primer grado, con base en la consideración de "Que en contra del enjuiciado existen las siguientes evidencias: a) declaración del testigo presencial Carlos Chinchilla González, en el sentido de que el procesado sustrajo de la bodega de materiales del campamento "El Arco", un resorte de camión; b) declaración de José Jacinto Ramos Meza y Mario San José, quienes afirman que el procesado hizo entrega al segundo de los nombrados de un resorte de camión

para que lo pasara a dejar a su casa en San Jerónimo; c) inspección ocular practicada por el Juez de primer grado en el camión que manejaba el procesado, en la que el mencionado resorte fué encontrado bajo el cojín de la cabina del piloto; d) declaración de Eduardo Chun Caal y José Aurelio Mijangos Rojas acerca de que dicho resorte es propiedad de la Compañía de Transportes, "Dill, Coronado y Compañía"; e) declaración de René Najarro Ponce, bodeguero de dicha compañía, quien manifiesta que no ha dado autorización a nadie para sacar el citado resorte; f) confesión del propio enjuiciado. De tales constancias, debidamente enlazadas, se deduce la presunción humana, grave y precisa de que Abel Yalibat Chinchilla sustrajo el indicado resorte, sin la voluntad de su dueño". "...debiendo tenerse en consecuencia al encartado como autor del delito de hurto" e imponerle la pena"... de seis meses de arresto mayor, sin ninguna modificación, por no concurrir circunstancias modificativas de responsabilidad...", pues aunque el procesado calificó su confesión no probó los extremos de tal calificación, y por el contrario se estableció con dictamen del experto Mauro Fernández que no se puede adaptar el resorte "Ford" a camiones de otra marca.

RESULTANDO:

Contra la sentencia referida y con auxilio del Abogado Oliverio García Asturias, Abel Yalibat Chinchilla introdujo recurso extraordinario de casación, por violación de los artículos 22 inciso 9o., 67 y 79 del Código Penal, al no estimar su confesión como una atenuante de su responsabilidad y los artículos 575, 583 inciso 1o., 586 inciso 4o., 589, 595, 597, 600 y 609 en sus cuatro incisos, del Código de Procedimientos Penales, porque no se encuentran probados plenamente los hechos en que funda la Sala sentenciadora su presunción humana.

Funda su recurso el enjuiciado en el inciso 5o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, es decir: estima que se ha cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declararon probados en la sentencia, en cuanto a la circunstancia atenuante de su confesión o que se ha omitido considerarla, al no reducirle la pena correspondiente en la parte que él cree debía minorarse.

Corrida la vista señalada para el efecto es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El recurrente cita como violados los artículos 575, 583 inciso 1o., 586 inciso 4o., 589, 595, 597, 600 y 609 del Código de Procedimientos Pe-

nales, que se refieren a la prueba de testigos, presunciones, confesión y su estimativa, pero como este recurso no se funda en el caso de que se haya cometido error en la apreciación de la prueba, no es posible hacer el estudio que el interponente pretende, para determinar si fueron o no violados los preceptos citados.

CONSIDERANDO:

Con base en el inciso 5o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, se alega que la sentencia en examen violó los artículos 22 inciso 9o., 67 y 79 del Código Penal, al no estimar como atenuante la confesión del recurrente y rebajarle la parte correspondiente, pues el primer artículo en su inciso citado, tiene a la confesión espontánea como atenuante y los dos últimos establecen que los jueces no pueden aumentar ni disminuir las penas si no es en la forma legal.

La Sala sentenciadora, después de enumerar las pruebas de donde deduce la responsabilidad del enjuiciado —incluyendo la confesión de éste, como se vé del punto f) de su considerando—, analiza la calificación de tal confesión, para desecharla, por las razones que allí mismo expresa, terminando por asentar que la pena impuesta, en Primera Instancia, es la que corresponde, sin ninguna modificación, por no concurrir circunstancias para ello.

Ahora bien, al apreciar las pruebas referidas y decir el Tribunal sentenciador, que el reo "...no probó dicha calificación ni es dable creerle", sobre ese extremo, es claro que no omitió considerar la confesión de mérito y que, si no la estimó como atenuante fué porque sin esa confesión existe prueba de la culpabilidad del enjuiciado, con cuyo proceder la Sala sentenciadora ajustó su fallo a la ley y no violó los artículos referidos al principio de este considerando.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en lo preceptuado por los artículos 222, 223, 224 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 686 y 690 del Código de Procedimientos Penales; declara: SIN LUGAR el presente recurso y condena al interponente a sufrir veinte días de arresto, conmutables a razón de cincuenta centavos de quetzal por día. Notifíquese y como corresponde devuélvase los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Diego Fión Garma, por los delitos de Malversación de Caudales Públicos e Infidelidad en la custodia de documentos.

DOCTRINA: Si de conformidad con los hechos que el Tribunal de segundo grado ha declarado probados, es inadmisibile la versión referida por el reo, su responsabilidad es plena y no procede aplicar en su favor ninguna circunstancia eximente.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintiocho de Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia proferida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, con fecha veinticuatro de Febrero del presente año, en la causa que por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos se ha seguido contra Diego Fión Garma, en el Juzgado de Primera Instancia del departamento de Jutiapa.

RESULTA:

El día tres de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, el guardia civil Oscar Efraín Martínez se presentó al Juzgado de Paz de la ciudad de Jalapa, dando parte de que ese mismo día, como a las veintidós horas treinta minutos, lo enteraron los guardias de hacienda Oscar Méndez y Lisandro Santizo, que el Administrador de Rentas Diego Fión Garma había sido asaltado en su despacho por dos individuos desconocidos, lesionándolo y llevándose el dinero de la caja de dicha oficina.

Constituido el Juez de Paz mencionado en el local de la Administración de Rentas departamental y levantada el acta de inspección respectiva, hizo constar: que estaba presente el Administrador Fión Garma así como el Jefe de la Guardia Civil y otros miembros de la autoridad; que encontrándose lesionado Fión Garma, explicó que a las veintidós horas de ese día había llegado a aquella ciudad procedente de la capital a donde fuera a traer dinero para efectuar los pagos atrasados; que habiendo dejado en su casa de habitación la suma de diez mil quetzales que trajera de la capital, se dirigió a la Administración de Rentas a despachar el dinero de los presupuestos que tiene pendientes de cancelación por el mes de Noviembre, y estando en la mesa de pagos fué sorprendido por dos individuos desconocidos, campesinos, quienes al entrar le llamaron "compañero"; que él tenía la caja de seguridad

abierta y revisaba papeles, cuando uno de dichos individuos lo prensó en la pared y luego lo atacó con un fierro causándole los rayones y lesiones que presenta en el estómago, pecho, brazo izquierdo y cabeza, sin dejarlo pedir auxilio; que en tanto el otro individuo se abalanzó a la caja, tomó el dinero y documentos que estaban a la vista y salió huyendo hacia la calle, siguiéndolo el que lo lesionó; que el declarante entonces sacó de la gaveta de su escritorio su pistola e hizo cuatro disparos, saliendo después a la calle y yendo a tocar al portón de la Guardia de Hacienda, que habita en el mismo edificio de la Administración, pared de por medio, habiendo salido los agentes ya cuando los ladrones habían caminado regular distancia; el Juez constató que Fión Garma estaba lesionado en la forma antes descrita y con la camisa y camiseta rotas, así como que en el piso, a media vara de distancia de la mesa de pagos, había una mancha regular de sangre y gotas hacia el escritorio y sala de los empleados; que no hay señales de riña o desorden, estando los muebles en su lugar; que la caja de seguridad se encontraba abierta y en ella algunas pequeñas cantidades de dinero en billetes y moneda fraccionaria que se detallan; que los impactos de los proyectiles disparados por Fión Garma se hallan en dirección a la sala de empleados, en diferentes sitios y alturas; que dicho señor "expide gases alcohólicos", habiéndose conducido junto con él a su casa de habitación para hacer entrega de nueve mil novecientos ochenta quetzales, faltando por conseguir veinte quetzales para completar diez mil que dijo haber recibido en la capital, suma que fué depositada en la caja de la Administración y ésta debidamente sellada por la autoridad; que Fión Garma describió a sus asaltantes diciendo que uno de ellos es delgado y usa bigotillo y el otro de regular complexión, y ambos morenos y calzados. A la vez que el acta fué levantado un plano del lugar de los hechos.

Ordenada la captura de "individuos sospechosos que llevan la suma de catorce mil quetzales y documentos" y la detención de Diego Fión Garma, al indagarse en debida forma a éste dió una versión semejante a la que aparece en el acta de inspección, agregando que cuando llegó a su despacho entró por la puerta principal cerrándola, pero sin duda quedó insegura, y que cuando fué sorprendido por sus asaltantes éstos llegaron hasta donde el exponente se encontraba y le dijeron "qué tal compañero", cruzándose saludos y preguntándoles a continuación el declarante que en qué podía servirles, estando ya en pie; que inesperadamente fué atacado por uno de los visi-

tantes desconocidos, quien le tapó la boca, lo agarró con la otra mano de la camisa y luego sacó un fierro como especie de cuchillo y lo atacaba queriéndolo matar, a consecuencia de lo cual resultó con las lesiones que presentaba; que al no abrirle inmediatamente el portón de la Guardia de Hacienda se dirigió a la Guardia Civil a dar parte, y cuando regresó ya estaban las guardias de hacienda en la puerta de la Administración; que calcula que en efectivo se llevaron sus asaltantes más de diez y seis mil quetzales; que los hechos sucedieron como lo relata y que él no tomó ninguna cantidad de dinero.

RESULTA:

Practicada una revisión de las cuentas de caja por el Juez de Paz, asociado del Inspector de Hacienda José Norberto Toledo y el Contralor del Tribunal de Cuentas Roberto Polanco García, se estableció un faltante en efectivo de diez y ocho mil seiscientos veintiséis quetzales setenta y nueve centavos.

Examinados el Sargento de la Guardia Ambulante Eliseo Alegría Sosa y los Guardias Gregorio Cárcamo Aguilar, Wilfrido Marroquín García y Porfirio Espino Orellana, declararon, en lo substancial, lo siguiente: que el día de autos más o menos a las veintidós horas treinta minutos, cuando se encontraban en los cuartos interiores de la Administración de Rentas, en donde también estaban varios Guardias de Hacienda, oyeron tres detonaciones adentro de la Administración y tres en la puerta de la calle; que como todavía no se habían acostado procedieron a equiparse y salieron acto continuo a la calle, momento en el cual vieron que el Administrador de Rentas Fión Garma iba frente a la Sub-Base Militar, pero al ver que penetró al edificio de la Guardia Civil, ellos permanecieron cuidando la Administración que había quedado con las puertas abiertas; que poco después regresó el señor Fión Garma y les dijo que dos individuos campesinos, desconocidos, lo habían asaltado en el interior de su despacho robándole el dinero; que no oyeron ningún ruido de rifa en el interior de la Administración ni vieron salir huyendo a ninguna persona. El segundo y tercero de dichos testigos agregan que, en el instante de escucharse los disparos, ellos se encontraban oyendo radio.

Examinado Pablo Armando Paz Enríquez, Segundo Jefe de la Guardia Civil, expuso: que el día y hora de autos, estando ya acostado en el Segundo Cuerpo de la Guardia Civil, oyó seis disparos en la calle, por cuyo motivo se levantó y salió al portal; que en ese momen-

to vió que Fión Garma iba corriendo en dirección al Primer Cuerpo de la Guardia Civil, notando que en la esquina de la Administración de Rentas había un grupo de guardias civiles, de hacienda y ambulante; que habiendo el declarante llegado a este último lugar, regresó poco después Fión Garma, y parado en la puerta de la Administración les refirió que había sido asaltado y robado en la forma que antes se expresa.

Al declarar Manuel Francisco de Paz Padilla, Inspector de Hacienda, dijo: que el día del hecho a eso de las veintidós horas treinta minutos, encontrándose el exponente en el local que ocupa la Guardia de Hacienda, acompañado de sus guardias Oscar Alberto Méndez, Lisandro Santizo Rodas, Jesús Escobar, Juan de Dios Moya y Arnulfo Paredes, así como de los Guardias ambulantes que antes se mencionaron, en momentos que estaban oyendo radio, escucharon tres detonaciones en el interior de la Administración de Rentas y luego otras tres ya en la calle; que segundos después el Administrador Diego Fión Garma pidió auxilio y gritó, conociéndolo por la voz porque el portón ya estaba cerrado; que inmediatamente el dicente y compañeros salieron a la calle y vieron que el referido Administrador iba con rumbo a la Guardia Civil, y como se dieron cuenta que penetró al edificio de la misma, ellos se quedaron vigilando la Administración de Rentas cuya puerta había quedado abierta; que a los pocos minutos regresó Fión Garma, habiéndoles relatado en forma igual a la ya descrita el asalto y robo de que se decía víctima; que en seguida llegaron el Jefe de la Guardia Civil y algunos agentes, así como el Juez de Paz que procedió a instruir las primeras averiguaciones.

Las testigos Bertila Sandoval Lorenzana y Adelina Lorenzana Cerna, declararon: que encontrándose en su tienda de pulpería que tienen a poca distancia de la Administración de Rentas, la noche del suceso investigado cerraron como a las veintidós horas; que durante el tiempo que tuvieron abierta la puerta, no vieron cruzarse a personas desconocidas o sospechosas; que más o menos a las veintidós horas y veinte minutos oyeron varias detonaciones de pistola y gritos pidiendo auxilio, sin conocer la voz del que gritaba; que no escucharon ruidos de mesas, sillas o puertas en la Administración de Rentas; que al salir a la ventana y pocos minutos después de los disparos, vieron a los guardias de hacienda que vigilaban la Administración de Rentas, que salían armados a la esquina. La segunda de las testigos agrega a lo anterior, que al salir a la ventana vieron a un hombre en camisa

y ella oyó que les dijo a los guardias "ustedes no se dan cuenta de que lo pueden matar a uno, pues me acaban de robar el dinero".

Al examinarse al Guardia Civil Herminio Arévalo, dijo: que el día y hora de autos, estaba de servicio en el salón general de la Gobernación departamental, habiendo escuchado dos detonaciones como en el interior de la Administración de Rentas, por cuyo motivo abrió la ventana y oyó que pedían auxilio; que el que gritaba era don Diego Fión Garma, pues salió por la puerta principal y corrió hacia el Primer Cuerpo de la Guardia Civil; que luego también salió la Guardia de Hacienda y la Guardia Ambulante; que a los pocos minutos regresó Fión Garma y refirió a los presentes en los mismos términos ya relacionados lo relativo al asalto y robo; que el declarante, durante el tiempo que estuvo en el salón de la Gobernación, no escuchó voces ni ruidos de rifa ni vió individuos sospechosos que corrieran por las calles.

Aparece a continuación el informe rendido por los enviados por el Tribunal de Cuentas J. Norberto Toledo y Roberto Polanco García, indicando que de la revisión practicada en las cuentas del Administrador Fión Garma, resulta un faltante de diez y ocho mil quinientos treinta y tres quetzales, cincuenta centavos.

RESULTA:

Recibida la causa en el Juzgado de Primera Instancia departamental de Jalapa, a la vez que se ordenó la práctica de varias diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos se dictó auto de prisión contra el encauzado, por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos.

En este Tribunal fueron examinados varios testigos, habiéndose producido en la forma siguiente: Alfredo Lima Castillo, agente confidencial de la Guardia Civil, que el día y hora de autos, encontrándose parado en la esquina suroeste del parque, casi frente a la última puerta de la Administración de Rentas, oyó varios disparos, tal vez serían seis, en el interior de dicha oficina; que al acudir a la Administración también llegaron los guardias de Hacienda y Montada, rodeando el lugar para que ninguno saliera; que al momento salió el Administrador y sin pronunciar palabra se dirigió a la Jefatura de la Guardia Civil; que el declarante no vió que saliera alguna otra persona del lugar del hecho aparte del Administrador de Rentas, aunque como dijo llegó en los precisos momentos de los disparos; que como recibieron órdenes de investigar si había complicidad de algunas otras

personas, nada fué posible establecer al respecto; que según el rumor público, cosa que también el exponente cree, el autor de este hecho fué el Administrador de Rentas por ser el único que salió a esa hora de la Administración. Lisandro Santizo Rodas, agente de la Guardia de Hacienda, que el día del suceso como a las veintidós horas, hallándose el dicente juntamente con sus compañeros en el cuerpo de Hacienda, en donde también estaba el pelotón de la Guardia Civil Ambulante, en momentos que se dedicaban a oír radio, escucharon dos disparos y luego de tomar sus tercerolas salieron a la calle en donde oyeron otros cuatro disparos, los cuales hizo el Administrador de Rentas don Diego Fión Garma, al aire, como a tres metros de la puerta de dicha Administración; que el mencionado Administrador se dirigió a la Guardia Civil, quedándose el exponente y demás compañeros vigilando la puerta del edificio que estaba abierta, pues las demás constataron que quedaron cerradas; que al regresar el Administrador, decía que unos campesinos le habían robado la suma de catorce mil quetzales, notándose que dicho funcionario estaba tomado de copas, así como que presentaba unos rayones en la cabeza y en el estómago; que el declarante no oyó gritos de auxilio antes ni después de los disparos, y que tampoco vió a ninguna persona extraña salir de la Administración. Arturo Ramírez Orellana, Sargento de la Guardia Civil, únicamente declara sobre que el día y hora de autos llegó a la Sargentía el señor Fión Garma, gritando que lo habían herido y robado el dinero dos individuos a quienes no pudo conocer; que con vista de esto, le dió a dos guardias para ver si localizaban a los individuos de referencia. Emilio Guerra Alvarez, Sargento de la Guardia Civil, que supo del hecho investigado por referencias del Sargento Efraín Marroquín. Los agentes de la Guardia de Hacienda Jesús Escobar Ramos, Juan de Dios Díaz Moya y Oscar Alberto Méndez, exponen los hechos más o menos de igual manera que los anteriores agentes de ese cuerpo cuyas declaraciones se han relacionado. Ricardo de Jesús Choto Bran, soldado de la Sub-Base Militar, que el día y hora del suceso, estando apostado en la garita de la puerta de guardia, oyó unos golpes como especie de disparos sin darse cuenta de su número; que al momento vió que asomó al corredor de la Guardia un hombre a quien no conoció, y al pasar corriendo frente a la garita del declarante le preguntó qué le pasaba, contestándole el primero que le estaban asaltando la caja de la Administración y continuó la carrera; que durante el tiempo que permaneció como centinela esa noche, el ex-

ponente no vió que entrara persona alguna a la Administración, sin duda porque el pilar del portal no deja mirar la puerta de dicha oficina, y tan es así que al hombre que gritaba lo vió hasta que entró al corredor.

RESULTA:

Habiendo solicitado el reo que el Juez de Primera Instancia se excusara, diciendo que este funcionario había emitido opinión desfavorable a él, previa la tramitación respectiva fué remitida la causa al Juzgado de igual categoría del departamento de Jutiapa.

Aparece a continuación un informe de la Guardia Judicial. En el mismo se dice que, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, se presume que Fión Garma no fué asaltado y que su versión es producto de pura fantasía.

Elevada la causa a plenario y no conforme el reo con los cargos que se le dedujeron en la respectiva diligencia, se le nombró como defensor al Licenciado Francisco Carrillo Magaña. Por pedimento del enjuiciado, posteriormente se le cambió al defensor nombrado, por el Licenciado Reginaldo Menéndez. En concepto de Representante del Ministerio Público, se le dió intervención al Administrador de Rentas del departamento de Jutiapa.

Abierta la causa a prueba por el término de ley, se rindieron por el enjuiciado las siguientes: a) nombramiento extendido por el Gerente del Instituto de Fomento de la Producción, del cargo de Contador de la hacienda "La Blanca", que fuera desempeñado por el reo; b) certificación extendida por el Tesorero Municipal de la Ciudad de Flores, Petén, haciendo constar que Fión Garma desempeñó ese mismo cargo del cual renunció, habiendo demostrado puntualidad, honradez y competencia; c) declaraciones de los testigos Juan Bautista Morán Lobos, Ciriaco Carrillo Estrada, Oscar René Morán Calderón y Melitón Salazar Estrada, quienes contestando "es cierto" al interrogatorio propuesto por el reo, manifestaron: que el tres de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, entre las veintidós y veintitrés horas, se encontraban en el parque de la ciudad de Jalapa, paseando y formando parejas Morán Lobos con Carrillo Estrada y Morán Calderón con Salazar Estrada; que los dos primeros estaban para despedirse en la esquina del parque que dá a la Administración de Rentas, cuando vieron salir a dos hombres precipitadamente por la puerta principal de dicha oficina que tomaron rumbo hacia el oriente; que en esos precisos momentos oyeron disparos en el interior de la Administración y acto seguido salió el Admi-

nistrador Fión Garma, dirigiéndose a la Guardia Civil; que los segundos paseaban por el ala sur del parque cuando oyeron disparos por el lado de la Administración de Rentas, se detuvieron atentos y vieron pasar corriendo con rumbo al oriente a dos hombres que tenían el aspecto de campesinos; d) informe médico legal acerca de las lesiones sufridas por el reo, indicando que éste presentaba múltiples contusiones y erosiones del tórax anterior y posterior, así como en los brazos y además tres heridas punzo-cortantes en el cuero cabelludo, habiendo curado en quince días por infección adjunta, con asistencia médica y sin dejar ninguna consecuencia.

RESULTA:

Previo señalamiento de día para la vista, el Juez dictó sentencia absolviendo al reo de los cargos que se le formularon por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos, y manda que se le ponga en inmediata libertad bajo caución promisoria.

Al conocer en apelación, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, profirió el fallo que se examina, y, al revocar la sentencia de primer grado en cuanto absuelve a Diego Fión Garma del cargo que se le formuló por el delito de malversación de caudales públicos, declara: que dicho reo es responsable del delito mencionado, por lo que lo condena a sufrir la pena de cinco años de prisión correccional, comutable en dos terceras partes a razón de veinticinco centavos de quetzal por día, con las demás declaraciones accesorias; confirma el fallo en cuanto absuelve al procesado del cargo por infidelidad en la custodia de documentos. Considera el Tribunal después de relacionar la versión que sobre el asalto de que se dice víctima dió el capitulado, que "pese a que el inculcado presentaba algunas lesiones de poca importancia, según se ve del informe médico-legal correspondiente y de que adelante se hará relación, tal versión por las razones que se dirán, no merece crédito, por el contrario de ellas se desprenden presunciones de hombre, que por su gravedad y precisión, son suficientes, a juicio de este Tribunal, para fundamentar un fallo de condena contra el relacionado Fión Garma. En efecto: Primero, de la inspección ocular practicada esa misma noche por el Juez instructor de las primeras diligencias se constata que en el interior del despacho del capitulado no se encontraron señales de rifa pues todos los muebles estaban en orden, ésto contra lo que acusa el informe médico del reconocimiento de Fión Garma, que dice que presentaba múlti-

ples contusiones y erosiones del tórax anterior y posterior, así como de ambos brazos (folio 99), circunstancia que lógicamente hace suponer que hubo lucha entre el supuesto atacante y la víctima. Segundo: que el procesado asegura que al salir huyendo los individuos que lo sorprendieron, les disparó y salió tras ellos en demanda de auxilio, pero al examinar las declaraciones de los Guardias de Hacienda y los de la Civil que se encontraban en el propio edificio de la Administración a la hora indicada, señores Sargento Eliseo Alegría, Guardias Gregorio Cárcamo Aguilar, Wilfrido Marroquín García, Porfirio Espino Orellana, Lisandro Santiago Rodas, Oscar Alberto Méndez, Jesús Escobar Ramos, Juan de Dios Díaz Moya e Inspector Hacendario Manuel Francisco Paz Padilla, se concluye que a pesar de haber salido inmediatamente de oír los disparos, no oyeron con anterioridad "buya" de riña ni traza alguna de los individuos desconocidos asaltantes; Tercero: de lo declarado por el Segundo Jefe de la Guardia Civil, Pablo Armando Paz Enríquez, se ve que el día y hora de autos no percibió nada sospechoso al contorno de la Administración de Rentas; Cuarto: el guardia Herminio Arévalo, que se encontraba en la Gobernación que queda casi esquina opuesta de la Administración, dice que él salió luego y no vio que algún individuo desconocido haya salido huyendo de este último edificio; Quinto: las señoras Bertila Sandoval y Adelina Lorenzana Cerna, que tienen tienda o pulpería, muy cerca de la Administración y cerraron aquella noche a eso de las veintidós horas, no oyeron ruido de riña o pelea ni vieron pasar a personas desconocidas y sí oyeron los disparos hechos por el capitulado y vieron salir a los guardias; Sexto: el soldado Ricardo de Jesús Choto Bran, que estaba de centinela apostado en la garita de la Gobernación frente a la Administración, no vio, la noche de autos a persona alguna fuera de Fión Garma que salió de sus oficinas pidiendo auxilio; Séptimo: el agente confidencial de la Guardia Civil Alfredo Lima Castillo que esa noche estaba en la esquina Sur-Oriente del parque, casi frente a la última puerta de la Administración, vio salir al Administrador y no vio que saliera otra persona de ese edificio; Octavo: que la noche de autos el inculcado se encontraba tomado de licor, circunstancia que se establece con el acta de inspección ya relacionada y con las declaraciones de Wilfrido Marroquín García, Lisandro Santizo Rodas y Emilio Guerra Alvarado. Todas estas circunstancias unidas al hecho que hacen constar los Contralores del Tribunal de Cuentas, relativo a que desde el diez y ocho de Junio de mil nove-

cientos cincuenta y tres, ya el señor Fión Garma tenía un faltante de UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE QUETZALES CON TREINTA CENTAVOS, hacen presumir su culpabilidad y por consiguiente su condena es procedente ya que en su descargo sólo rindió la testifical de Oscar René Morán y Melitón Salazar, Juan B. Morán y Ciriaco Carrillo, pero el Tribunal desestima tales deposiciones, no sólo porque éstos declaran bajo un interrogatorio ad-hoc sino porque no dan razón de sus dichos los que están en desacuerdo con las demás constancias procesales... Que la pena a imponérsele por este hecho delictivo, con base en el monto de lo malversado, es la de cinco años de prisión correccional, sin modificación alguna, por no haber circunstancias atenuantes o agravantes que calificar... Que al capitulado también se le formuló cargos por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, pero tal infracción en manera alguna se probó, ya que ni siquiera se mencionan los documentos que se dicen desaparecidos, razón por la cual debe absolvérsele del cargo formulado..."

Contra tal pronunciamiento y auxiliado por el Abogado Horacio Rodríguez González, el reo introdujo recurso de casación por violación de ley. Señala como casos de procedencia los contenidos en los incisos 1o., 5o. y 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales; y como infringidos, en relación con el primer caso de procedencia, los artículos 1o. y 11 del Código Penal; en relación con el segundo caso de procedencia, los artículos 21 incisos 4º y 5º, 22 incisos 7º y 8º, 79, 80, 81, 82 y 83 del Código Penal; y en relación con el tercer caso de procedencia, los artículos 573 incisos 1o., 2o., 3o. y 4o., 574, 575, 583 incisos 1o. y 2o., 586 incisos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o., 587, 589 y 593 del Código de Procedimientos Penales. Dice al final que se funda en los artículos 673, 674, 675, 676, 681, 682, 684, 685, 686 y 687 del Código últimamente citado.

Como razones del sometimiento, el recurrente se contrae en primer término a efectuar una revisión de los hechos que el Tribunal sentenciador declara probados, intentando demostrar que se ha calificado y penado como delito un hecho que no lo es. Al respecto y al tratar de refutar aquellos hechos, dice que en ningún momento él ha expresado que haya habido riña con sus atacantes para que la Sala haga una deducción en su contra por no haberse encontrado señales de pelea en el teatro de los sucesos; que los agentes de Hacienda que declaran no haber escuchado rumores en la vecindad mal pudieron darse cuenta de ello, pues varios de los mismos in-

dican que en el momento de los disparos estaban oyendo radio; que en cuanto a que tales agentes no vieron salir de la Administración a ninguna persona distinta del enjuiciado, debe observarse que dichos testigos salieron algún tiempo después de los disparos ya que primero tuvieron que equiparse, dando lugar a que los asaltantes se perdieran de vista; que respecto a que el procesado se encontraba tomado de licor ninguna importancia tiene, pues no introduce elemento comprometedor para él, salvo que se hubiera probado que ello lo hacía encontrarse en un estado especial mental o volitivo; que en lo que hace al faltante que según los Contralores ya tenía en sus cuentas de tiempo atrás, por sí solo no puede ser elemento de prueba en su contra; y que si opuesto a todo lo anterior existe la prueba de descargo, con la cual se ha probado que fué agredido y que fueron vistos los asaltantes al salir huyendo de la Administración, su inocencia es clara y debe eximirse de responsabilidad criminal. En segundo término, refiriéndose a que no se aprecian en su favor las eximentes de responsabilidad criminal o las atenuantes que también concurren, expresa: "El hecho de que en mi presencia los asaltantes se hayan llevado la cantidad de dinero relacionada, en manera alguna puede imputárseme puesto que si no pude evitarlo fué porque al no impedirlo, obré impulsado por un miedo invencible de un daño mayor, cierto para mí... y además violentado por fuerza material exterior, irresistible, directamente empleada sobre mí... Estas son dos circunstancias eximentes de responsabilidad criminal; que ni siquiera fueron consideradas por el Tribunal de Segunda Instancia. Existen además, dos circunstancias atenuantes que tampoco fueron tomadas en cuenta y son las siguientes: el hecho de que procuré con celo reparar el daño causado e impedir sus ulteriores consecuencias, disparando inmediatamente que pude hacerlo, dando la alarma y pidiendo de inmediato el auxilio de las autoridades de policía... así como que pudiendo lograr impunidad por medio de la fuga o de la ocultación, me presenté espontáneamente a la autoridad y confesé haber permitido que dos asaltantes se robaran la cantidad citada explicando que no pude evitarlo por haber sido lesionado y agredido en la forma que consta en autos". En tercer lugar, argumentando en cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba, dice: "Afirma categóricamente el Tribunal de Segundo Grado que al examinar las declaraciones de los guardias de Hacienda y los de la Civil que se encontraban en el propio edificio, señores Sargento Eliseo Alegría, Gregorio Cárcamo Aguilar, Wilfrido

Marroquín García, Porfirio Espino Orellana, Lisandro Santiago Rodas, Hacendario Manuel Francisco de Paz Padilla, SE CONCLUYE EN QUE A PESAR DE HABER SALIDO INMEDIATAMENTE DE OIR LOS DISPAROS, NO OYERON CON ANTERIORIDAD BUENA DE RIÑA NI TRAZA ALGUNA DE LOS INDIVIDUOS DESCONOCIDOS ASALTANTES. La afirmación relacionada es completamente falsa, pues todos los guardias mencionados han afirmado que después de oír los disparos procedieron a equiparse y luego a salir a la calle, es decir, que no salieron INMEDIATAMENTE como lo afirma la Sala; y es más aún, el Sargento Eliseo Alegría Sosa afirma claramente "después de las detonaciones Y DE HABER GASTADO EL TIEMPO NECESARIO PARA SALIR EQUIPADOS", así lo hicieron... Es decir, que con las declaraciones relacionadas y con las demás mencionadas por la Sala, se establece precisamente lo contrario de lo que dicho Tribunal da por sentado, es decir, que entre el momento en que yo disparé y di la alarma y el momento en que los guardias salieron a la calle, medió tiempo suficiente y de sobra para que los asaltantes se perdieran de vista y no pudieran ser vistos por dichos guardias... con la simple lectura de las declaraciones citadas por la Sala, se desprende que es falso lo afirmado por ésta y que el hecho que ha estimado probado, lejos de estarlo, aparece completamente favorable a la tesis de la defensa". En cuanto a las declaraciones del Segundo Jefe de la Guardia Civil Pablo Armando Paz Enriquez, Guardia Herminio Arévalo y señoritas Bertila Sandoval y Adelina Lorenzana Cerna, el recurrente alega que carecen de mérito desde el momento que de sus propios testimonios se desprende que no pudieron darse cuenta de la huída de los asaltantes; que el soldado Choto Bran, "no afirmó que hubiera visto salir a Fión Garma de sus oficinas y que fuera de él, no vió a persona alguna más", y que de tal manera "dicho Tribunal falsea la verdad puesto que dice que el mencionado soldado vió salir al presentado, cuando expresó claramente que no había visto entrar ni salir a nadie"; que tampoco tiene valor la declaración del agente confidencial de la Guardia Civil Alfredo Lima Castillo, pues su dicho es contradictorio con lo establecido con los otros testigos, al manifestar que cuando acudió al lugar de los disparos llegó también la Guardia de Hacienda y rodearon el lugar para que nadie saliera, y que al momento salió el Administrador. Que en cambio el Tribunal desestima las declaraciones de Oscar René Morán, Melitón Salazar, Juan B. Morán y Ciríaco Carrillo, porque según expresa, respondieron bajo un interroga-

torio ad-hoc y porque no dan razón de sus dichos, lo que no es cierto desde luego que de las propias contestaciones dadas al interrogatorio presentado, se deduce que tales testigos dieron los motivos de encontrarse el día y hora de autos en el lugar que les permitió darse cuenta de los hechos sobre que prestaron testimonio, cosa que significa precisamente razón del dicho.

I —

• CONSIDERANDO:

Invocados como fundamentación del recurso tres diferentes casos de procedencia, conviene por razones técnicas examinar en primer lugar el que se refiere al error de derecho que se denuncia en la apreciación de las pruebas, al cual está contenido en el inciso So. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, expresando: "Cuando en la apreciación de las pruebas se haya cometido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del Juzgador".

Dada la distinta naturaleza que doctrinaria y legalmente corresponde al error de derecho y de hecho, se hace indispensable que al contraerse el recurso a uno de tales vicios, se identifique de manera apropiada el error que trata de deducirse, pues de otra suerte el Tribunal carece de los elementos que originalmente orientan el examen respectivo para establecer los alcances de la impugnación.

El recurrente dice, en forma general, que el Tribunal sentenciador ha "cometido error de derecho" en la apreciación de las pruebas que ordenadamente puntualiza como se relacionó en la parte expositiva. Sin embargo, al referirse al defecto apuntado en cuanto a las declaraciones del Sargento Eliseo Alegría, Gregorio Cárcamo Aguilar, Wilfrido Marroquín García, Porfirio Espino Orellana, Lisandro Santiago Rodas, Oscar Alberto Méndez, Jesús Escobar Ramos, Juan de Dios Díaz Moya, e Inspector Manuel Francisco de Paz Padilla, por una parte, y la del soldado Ricardo de Jesús Choto Bran, por la otra, atribuye a la Sala afirmaciones falsas y versiones distintas de las que aparecen consignadas en las diligencias correspondientes, lo que evidentemente vendría a significar, antes que un defecto de valoración legal de los testimonios aludidos (error de derecho), una manifiesta equivocación del juzgador derivada del propio contenido de las actuaciones (error de hecho). En tal virtud, habiendo faltado el recurrente a la obligada premisa de identificar

apropiadamente el error que denuncia en relación a estas pruebas, y ya que el Tribunal de casación no puede substituir la intención del interesado, se ve en la imposibilidad de examinarlas.

En lo que se refiere al error de derecho en la apreciación de los testimonios de Pablo Armando Paz Enríquez —Segundo Jefe de la Guardia Civil—, guardia Herminio Arévalo, Bertila Sandoval, Adelina Lorenzana Cerna y agente confidencial Alfredo Lima Castillo, se contrae, en resumen, a rebatir el mérito probatorio que el Tribunal sentenciador las concede por cuanto que, según los argumentos del recurrente, dados los sitios en que los testigos se encontraban en el momento de desarrollarse el suceso investigado y la forma en que declaran, ninguna aportación constituyen para establecer los hechos que aquel Tribunal señala en sus consideraciones, tales son el no haber visto todos ellos a ninguno salir huyendo después de escucharse los disparos, fuera del Administrador Fión Garma, y además las señoritas Sandoval y Lorenzana Cerna, no haber oído ruido de riña o pelea en el edificio que ocupa la Administración. Ahora bien, el error impugnado en relación a estas declaraciones no es justificable, pues el mérito que la Sala les adjudica como elementos de prueba corroborantes de otros, deriva de las propias conclusiones lógicas a que se llega en un análisis de conjunto, pues si en realidad, encontrándose próximos al lugar en que se dice que fué asaltado el reo no percibieron movimiento alguno ni observaron la huída de los presuntos agresores del encauzado, cuya circunstancia no está contradicha, sino al contrario confirmada por otras constancias, tiene qué aceptarse que la Sala ha valorado correctamente y no de manera errónea el mérito de tales declaraciones.

Respecto a las declaraciones de Oscar René Morán, Melitón Salazar, Juan B. Morán y Ciriaco Carrillo, el recurrente alega que no existe motivo para desestimarlas sólo porque la Sala dice que respondieron bajo un interrogatorio ad-hoc y porque no dan razón de sus dichos, ya que la razón del dicho va implícita en el propio texto de las declaraciones prestadas. En cuanto a esto, debe advertirse que si es verdad que la razón del dicho no es indispensable que se exija como punto expreso de un interrogatorio, pudiendo, según los casos, surgir del propio tenor de la declaración prestada, también es cierto que los testimonios sujetos a interrogatorio en que el interrogado se limita a contestar afirmativamente y de manera mecánica, expresando más que su propio conocimiento de los hechos un reflejo de la voluntad de su proponente, no

llenar cumplidamente su finalidad jurídica para concederles un valor irrestricto; y, si por otra parte, en el caso de examen se fija la atención en que las declaraciones de los referidos testigos, propendían a establecer hechos diferentes de los que en forma lógica se han aceptado como evidencias del proceso, al desestimarlos aquel Tribunal obró correctamente. En tal virtud, no existe violación de los artículos 573 incisos 1o., 2o., 3o. y 4o.; 574, 575, 583 incisos 1o. y 2o., 586 incisos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o., 587, 589 y 593 del Código de Procedimientos Penales.

—II—

CONSIDERANDO:

Otro caso de procedencia es el contenido en el inciso 1o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales que dice: "Cuando los hechos que en la sentencia se declaran probados sean calificados y penados como delitos no siéndolo, o cuando se penen a pesar de existir una circunstancia eximente de responsabilidad criminal, o a pesar de que circunstancias legales posteriores a la comisión del delito impidan penarlo".

Acerca de este caso, debiendo estarse a la consecuencia jurídica que surge de los hechos que el Tribunal sentenciador ha declarado probados, ya que los mismos no pueden ser objeto de nuevo examen, descartado como ha quedado el análisis de la prueba, debe observarse que los varios elementos probatorios en que aquel Tribunal se funda para calificar como delito la acción atribuida al encauzado Fión, Garma y penarla en la forma que lo hace, conducen lógicamente y legalmente a acreditar la existencia de actos que la ley perfila como delictivos y que por consiguiente tienen asignada una sanción determinada en la ley; de donde se infiere que la Sala, lejos de estimarlos indebidamente o con error, los ha calificado correctamente. En consecuencia, los artículos 1o. y 11 del Código Penal, citados concretamente para este caso, no pudieron ser violados por el Tribunal sentenciador.

—III—

CONSIDERANDO:

Para el tercero y último caso de procedencia citado, que se refiere a "Cuando se haya cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia, en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabi-

lidad criminal, o se haya omitido considerarlas". el recurrente arguye que, puesto que la pérdida del dinero no puede imputársele desde luego que no pudo evitar que se lo llevaran los asaltantes, mediando de su parte miedo invencible de un daño mayor y violento por fuerza material exterior irresistible, no fueron consideradas las eximentes de responsabilidad que de tales circunstancias derivan; así como tampoco las atenuantes que resultan de haber procurado con celo reparar el daño causado e impedir sus ulteriores consecuencias, disparando inmediatamente que pudo hacerlo y pidiendo auxilio, y haberse presentado espontáneamente a la autoridad y confesar "haber permitido que los asaltantes se robaran la cantidad citada", sin apelar a la fuga o a la ocultación.

Efectivamente, la sentencia recurrida omite la estimación de circunstancias modificativas de responsabilidad que pudieran favorecer al reo, lo cual presupone su inexistencia a juicio del Tribunal sentenciador. Pero ello está en razón, pues si de conformidad con los hechos probados es inadmisibles la versión referida por el encartado al decir que fué víctima de un asalto por dos desconocidos, su responsabilidad plena en cuanto al dinero que en su carácter de funcionario público estaba bajo su custodia es inexcusable y ajena a las eximentes que invoca; y en cuanto a las atenuantes que también puntualiza, debe observarse que los hechos de haber disparado y provocado una alarma y luego presentarse a la autoridad solicitando auxilio, no sólo son aspectos del suceso investigado que precisamente forman parte de la versión del reo no aceptada, sino que tampoco caen dentro de los casos de atenuación que se pretende, porque cosa distinta de la alegada por el recurrente es procurar con celo reparar el daño causado e impedir sus ulteriores consecuencias, así como presentarse a la autoridad y *confesar su delito*. Por consiguiente, ningún error de derecho se ha cometido en la calificación de los hechos probados, en este sentido, por lo que no fueron violados los artículos 21 incisos 4o. y 5o., 22 incisos 7o. y 8o., 79, 80, 81, 82 y 83 del Código Penal, citados por el interponente.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 690 y 694 del Código de Procedimientos Penales, declara: IMPROCEDENTE el presente recurso, imponiendo al recurrente la pena adicional de quince días de prisión

simple, la cual podrá conmutar a razón de diez centavos de quetzal por día. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

contra Victoria Velasco Amaya y compañeros por el delito de Contrabando a la Hacienda Pública en el Ramo de Aduanas.

DOCTRINA: Es correcta la calificación del Tribunal sentenciador, cuando estima como contrabando en el Ramo de Aduanas, el ingreso al país de mercaderías sujetas a impuestos de importación, haciéndolas pasar ocultas en un vehículo que, aparentemente, sólo conduce un cargamento que es declarado y examinado en la oficina aduanera respectiva.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, treinta y uno de Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, con fecha veintiuno de Abril del presente año, en el proceso que por el delito de contrabando en el Ramo de Aduanas se ha seguido contra Victoria Velasco Amaya, José Julio Arias Gómez, Pantaleón Cadenas Arias y Pedro Alvarez Kong, en el Juzgado de Primera Instancia del departamento de Jutiapa.

RESULTA:

El trece de Octubre del año recién pasado, el Jefe de la Guardia Civil de Jutiapa Bonilla Anleu puso a disposición del Juez de Paz de dicha cabecera a Julio Arjas y Victoria Velasco, con transcripción del oficio que juntamente con los mencionados envió el Sub-Jefe de la Guardia Civil Montada de San Cristóbal Frontera, dando cuenta con un camión en donde ilegalmente se transportaban doscientos sacos de yute, los cuales iban dentro de tal vehículo bajo una carga de cincuenta quintales de arroz; que consignaba asimismo a Pedro Antonio Alvarez y Pantaleón Cadenas Arias por complicidad, acompañando el ca-

mión placas cuarenta y un mil novecientos ochenta y ocho, así como pasaportes de Julio Arias y Pedro Antonio Alvarez, la póliza que amparaba el arroz y una contraseña de la propietaria de la carga. Al ratificar el parte, Bonilla Anleu agregó que en el propio cuerpo de la guardia, la señora Velasco trató de sobornarlo ofreciéndole cien quetzales para que el asunto no pasara adelante, cosa que le constaba al Teniente Francisco Hineztroza. Examinado a continuación éste, dijo que en realidad le constaba que la señora mencionada ofreció gratificar al Jefe de la Guardia Civil con cien quetzales si arreglaba el asunto en su Despacho.

Recibida la declaración de Rómulo Efraín Pimentel, Sub-Jefe de la Guardia Civil en San Cristóbal Frontera, manifestó: que en el trece del mes de referencia, como a las once horas, cuando en compañía de los guardias Bonifacio García y Albertino Ortega Garrido procedió al registro del camión antes identificado, piloteado por Julio Arias, se encontró con que debajo del cargamento de arroz que traían de la vecina República de El Salvador debidamente legalizado, venían doscientos sacos de yute sin respaldo de ningún documento, razón por la cual, tratándose de artículos que no son de libre comercio, detuvo a la dueña de la carga señora Velasco, al piloto Arias y a los ayudantes Pedro Antonio Alvarez y Pantaleón Cadenas; que el registro lo practicó en este territorio, pues no obstante que se hace en la Aduana, lo acostumbran así para mayor seguridad.

Los guardias Albertino Ortega Garrido y Bonifacio Antonio García Sandoval, al prestar declaración se produjeron en iguales términos que el anterior.

Indagados los reos, dijeron: Victoria Velasco Amaya: que viniendo de la República de El Salvador, el día de autos como entre diez y media y once horas, fué capturado por dos guardias y un jefe, ya para llegar a una laguna y cerca de San Cristóbal Frontera, porque encontraron entre la carga y la plataforma del camión unos costales que venían haciéndole colchón a la carga; que los cien quintales de arroz que constituían la carga son de su propiedad, así como los doscientos costales vacíos, los que servían para resguardar de la humedad el arroz, pues son usados y de su pertenencia; que en la Aduana se dieron cuenta de tales costales porque al bajar el cargamento es claro que los vieron; que inoportunamente puso los costales para defender el arroz, y que venían dirigidos al señor Alcides Carrillo, habiéndole suplicado la declarante que se los prestara para el objeto ya indicado. José Julio Arias Gómez: que a la seño-

ra Velasco no la conocía sino hasta el día que fueron capturados, pues él tomó el camión, que es de propiedad de Ana Lilia Miranda con residencia en San Salvador, en la frontera, ya que allí se quedó desde el once del mes por no haber podido pasar a El Salvador por defectos de su pasaporte; que cuando recibió nuevamente el camión con procedencia de la vecina República, de un chofer que lo traía de allá, venía ya cargado de arroz de propiedad de la señora Velasco; que hasta que los capturaron se dió cuenta de que dicha señora traía, tendidos entre la carga y la plataforma del camión, doscientos costales nuevos; que en la Aduana no bajaron la carga y por ello no se dió cuenta de la existencia de los costales; que con Pedro Antonio Alvarez, el otro chofer, se habían quedado juntos en la frontera; que la señora Velasco engañó al declarante porque nada le dijo del contrabando de costales. Pedro Antonio Alvarez: hace una relación exacta al anterior, indicando además que Pantaleón Cadenas es el ayudante del camión. Pantaleón Cadenas Arias: relata en igual forma los hechos, manifestando que él es el ayudante del camión y se había quedado también en la frontera desde el día once, juntamente con Arias y el otro ayudante Alvarez, en espera del regreso del vehículo de la vecina República.

El experto Santiago Villanueva Quiroa, expresó: que a los doscientos sacos de brin (no de yute), con capacidad para ocho arrobas cada uno, les dá el valor de doscientos quetzales, o sea a quetzal por saco; que no puede asegurar que los mismos sean de factura salvadoreña porque en esta República hay sacos de la misma clase.

RESULTA:

Recibidas las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia departamental, se dictó a los reos auto de prisión provisional por el delito de contrabando a la Hacienda Pública en el Ramo de Aduanas.

Aparece el informe del Administrador de Rentas departamental en el cual se indica que los impuestos defraudados al Fisco en doscientos sacos de brin, ascienden a la cantidad de doscientos cincuenta y nueve quetzales cincuenta y nueve centavos. Ampliado el dictamen del experto Villanueva Quiroa, expresó: que veinticuatro de los sacos son usados y nuevos el resto.

Asimismo figura una constancia de "Compañía Importadora de Maquinaria, S. A.", de San Salvador, indicando que se dió en arrendamiento a Ana Lillian Miranda de Arias, con promesa de venta, el camión marca "G.M.C.",

color gris, motor A-248 207688, chasis 353-24-PZ 1269, año 1954..."

Habiendo solicitado la reforma del auto de prisión los reos José Julio Arias, Pedro Antonio Alvarez y Pantaleón Cadenas, les fué denegada por el Juzgado. Al apelar ante la Sala jurisdiccional, ésta revocó la denegatoria ordenando su libertad.

RESULTA:

Abierto el juicio a prueba por el término de veinte días, se practicaron las siguientes: por parte de Julio Arias, declaraciones de Juan Manuel y Ramón Chacón de León, quienes respondiendo al interrogatorio respectivo, dijeron: que el día de autos, en momentos en que ingresó de El Salvador la señora Victoria Velasco, en el camión que trabajaba Arias, ellos se encontraban en San Cristóbal Frontera; que dicho camión lo piloteaba un chofer salvadoreño, habiendo sido registrado por un empleado de la Aduana, pero no fué bajado el cargamento de arroz que conducía sino que el empleado se concretó a picar los bultos con una baqueta; que la señora Velasco pagó el impuesto correspondiente al arroz; que el camión lo recibió Arias ya en territorio guatemalteco, cargado con el arroz y después de haber sufrido el registro en la Aduana; que a los pocos minutos de haberse marchado en el camión con la señora Velasco y sus ayudantes, Arias fué regresado por la Guardia de Hacienda en calidad de preso. Por parte de Victoria Velasco, prueba de expertos constituía por el dictamen de los nombrados Efraín Cámara Gudiel y Andrés Espiñeiro Cajiao, expresando: que dos personas pueden cargar y descargar de un camión cien quintales de arroz y doscientos sacos vacíos, en tres horas como tiempo mínimo.

Con tales antecedentes dictó el Juez sentencia, declarando que Victoria Velasco Amaya es autora responsable del delito de Contrabando a la Hacienda Pública en el Ramo de Aduanas y la condena a tres años de prisión correccional inmutable; le impone además una multa de cinco mil quetzales, "que en caso de insolvencia se hará efectiva en la vía legal que corresponde"; declara el comiso de los sacos de yute y arroz aprehendidos y manda entregar el camión de autos una vez que se ha probado en forma legal su propiedad por el presunto dueño; y absuelve a la misma Velasco Amaya del cargo que se le formuló por el delito de cohecho y a José Julio Arias Gómez, Pedro Antonio Alvarez Kong y Pantaleón Cadenas Arias, del cargo por el delito de Contrabando a la Hacienda Pública en el Ramo de Aduanas. Se hacen las demás declaraciones pertinentes.

Al conocer en grado, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones resolvió: "CONFIRMA el fallo recurrido en cuanto condena a Victoria Velasco Amaya, por el delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas; ABSUELVE a la misma del de cohecho por falta de prueba, así como en cuanto absuelve a José Julio Arias Gómez, Pedro Antonio Alvarez Kong y Pantaleón Cadenas Arias por el mismo motivo de falta de prueba; lo REVOCA en lo que se refiere a la devolución del vehículo donde se condujo el contrabando, vehículo que cae en comiso y el cual se identifica así: Marca "G.M.C.", Tipo y Modelo: Camión trescientos cincuenta y tres —veinticuatro— color gris, motor número A-doscientos cuarenta y ocho millones doscientos siete mil seiscientos ochenta y ocho, Chassis número trescientos cincuenta y tres-veinticuatro-PZ-mil doscientos sesenta y nueve; y lo ADICIONA en el sentido de que a la procesada debe extrañarse del país tan pronto como haya cumplido la pena corporal impuesta". Considera el Tribunal que "la culpabilidad de Victoria Velasco Amaya, como autora del delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas, por el que se le ha seguido este procedimiento, ha quedado plenamente probada, con las deposiciones de los guardias aprehensores, de los efectos del delito, Rómulo Efraín Pimentel, Bonifacio García Sandoval y Albertino Ortega Garrido, la incautación de doscientos sacos vacíos de brin, que conducía furtivamente la encartada en el camión de propiedad de Ana Lilia Miranda Ramírez de Arias, con procedencia de la República de El Salvador, marca "G.M.C." junto con cien quintales de arroz, y con el informe del experto Santiago Villanueva Quiroa, por lo que su condena es imperativa. . ." "Que según el informe emitido para el efecto por el señor Administrador de Rentas de Jutiapa, los impuestos defraudados al Fisco... ascienden a doscientos cincuenta y nueve quetzales y cincuenta y nueve centavos, por lo que la pena que debe sufrir la procesada, es la de tres años de prisión correccional incommutable, con las accesorias que contiene el fallo recurrido, sin ninguna alteración por no haber circunstancias modificativas que apreciar..." "Que además de las penas indicadas en el considerando anterior, deben declararse el comiso del vehículo donde se conducía el contrabando, ya que éste no es de propiedad de Compañía que tenga contratos con el Gobierno o Empresas registradas en la Dirección General de Aduanas y el extrañamiento del país de la encausada por ser extranjera, después de haber cumplido la pena corporal impuesta..." Estima, por último, que la absolución decretada por el Juez es correcta.

Contra este pronunciamiento y con el auxilio del Abogado Isauro Berganza, Victoria Velasco Amaya introdujo recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma. Cita como infringidos los artículos 432 párrafo final, 466, 468 inciso 1o., 425 incisos II, III y V y 238 del Código de Aduanas; XV incisos 2o. y 4o., XXXIV, 232 en todos sus incisos y 227 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial; 11, 22, incisos 9o. y 10 y 79 del Código Penal; 259, 566, 568, 570 incisos 1o., 3o., 4o., 5o. y 6o., 571, 573 en todos sus incisos, 574, 602 inciso 2o., 603, 607, 608, 609 en todos sus incisos, 614, 581 incisos 2o. y 8o., 732, y 735 incisos 3o. y 4o. del Código de Procedimientos Penales; dice que cita "también el artículo 677 inciso 3o. Prs. Penales, que contiene el caso de quebrantamiento de forma". Para la procedencia del recurso señala los incisos 1o., 5o., 6o. y 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, éste último inciso adicionado por el artículo 1o. del Decreto del Congreso 487, repitiendo la cita del inciso por quebrantamiento de forma. Al final de su escrito enumera los artículos 687, 681 y sus reformas, 680, 692 y sus reformas de Procedimientos Penales; 2o. y 3o. Decreto del Congreso 487 y 464 del Código de Aduanas.

Argumenta el recurrente: "El caso del inciso 1o. del artículo 676 P. P., existe porque los hechos imputados no constituyen el delito de contrabando, puesto que yo no traté de eludir la Oficina de Hacienda en la Aduana de San Cristóbal, que es la primera que se encuentra a pocos metros de la frontera cuando se ingresa al país procedente de El Salvador... el Administrador de la Aduana de San Cristóbal, señor Guillermo Arriola, dice que registró minuciosamente el camión y no vió los sacos que iban debajo de la carga de arroz... suponiendo que fueron llevados por algún extravío y colocados después de pasar por la Aduana el camión; suposición absurda y manifiestamente falsa, como se comprueba... El hecho (repito) no constituye ningún delito de contrabando, porque está excluido el dolo base sine qua non que lo genera..." "El caso del inciso 5o. del artículo 676 P. P., se genera por haber omitido considerar la atenuante de mi confesión", agregando que ni los agentes captadores pueden decir ni el chofer y sus ayudantes han declarado, que los sacos fueran de su pertenencia, lo cual consta únicamente porque ella así lo admitió, sin haberse tomado en cuenta a su favor esta circuns-

tancia; y que la otra atenuante que se dejó de considerar, es la que define al artículo 22 inciso 10 del Código Penal, "consistente en la manifiesta buena fe con que procedía la recurrente, al entrar por la vía legal y someter al registro su mercadería". "Como consecuencia de la omisión antes dicha, tuvo vida jurídica el caso del inciso 6o. del referido artículo 676 P. P. porque la pena impuesta no corresponde en razón de la atenuante de confesión y la otra ya referida..." "Por último, el caso del inciso 8o. del tantas veces mencionado artículo 676 P. P., consiste en error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, estimándose injusta, ilegal e ilógicamente, como prueba de mi culpabilidad y de la figura jurídica del contrabando, el dicho de los agentes captores cuya insuficiencia es evidente..." "El quebrantamiento de forma que invoco, consiste en el caso definido por el inciso 3o. del artículo 677 P. P. debido a que en la sentencia no se indica clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados, lo cual se constata con una breve lectura del fallo..."

—I—

CONSIDERANDO:

Denunciados como motivación del recurso varios casos de infracción de ley a la vez que quebrantamiento de forma, procede legalmente examinar en primer término lo relativo a éste último.

La razón invocada por la recurrente para estimar que se ha quebrantado el procedimiento es que "en la sentencia no se indica clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados"; cita como violados concretamente los artículos 732 y 735 del Código de Procedimientos Penales, y como caso de procedencia el inciso 3o. del artículo 677 del mismo cuerpo de leyes, el cual dice que podrá interponerse el recurso de casación por quebrantamiento de forma "Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados o resulte manifiesta contradicción entre ellos".

Ahora bien, de la simple lectura de las consideraciones de la Sala, cuyos pasajes principales se han transcrito en la parte expositiva, se ve que aquel Tribunal en forma expresa e inequívoca estima como hechos probados: "La incautación de doscientos sacos vacíos de brin, que conducía furtivamente la encartada en el camión propiedad de Ana Lilia Miranda Ramírez de Arias", así como que, según lo informado por el Administrador de Rentas de

Jutiapa, se defraudó al Fisco en la suma de doscientos cincuenta y nueve quetzales cincuenta y nueve centavos; de donde deduce que existe plena prueba contra la enjuiciada como autora responsable del delito de contrabando a la Hacienda Pública en el Ramo de Aduanas. No es cierta, entonces, la aseveración de la recurrente, pues dada la naturaleza de la acción delictiva investigada, el Tribunal específico debidamente los hechos establecidos que producen las conclusiones a que llega en su fallo, por lo que lejos de violar los artículos señalados como infringidos cumplió con sus prescripciones.

—II—

CONSIDERANDO:

Debiendo estudiarse a continuación el caso de procedencia contenido en el inciso 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que se refiere a "Cuando en la apreciación de las pruebas se haya cometido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador", cabe observar que la recurrente lo traduce en "error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, estimándose injusta, ilegal e ilógicamente, como prueba de mi culpabilidad y de la figura jurídica del contrabando, el dicho de los agentes captores cuya insuficiencia es evidente...", señalando en seguida las pruebas que a su juicio han sido apreciadas de manera indebida.

En vista de que legal y doctrinariamente existe una diferencia entre el error de derecho y el de hecho, siendo así distintos los presupuestos que el juzgador necesita examinar comparativamente para determinar la presencia de uno u otro vicio, al plantearse la denuncia queriendo atribuir al caso ambos errores a la vez y, como en pronunciamientos anteriores lo ha declarado esta Corte, es imposible el análisis requerido. En tal virtud, ya que el planteamiento de la recurrente adolece del defecto apuntado, es decir, que omite individualizar la naturaleza propia del error o errores que dice haber cometido el Tribunal sentenciador al apreciar las pruebas, es improcedente el nuevo estudio de las mismas.

—III—

CONSIDERANDO:

Alega la recurrente, fundándose en el inciso 1o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que se incurrió en violación de ley al calificar como delito hechos

que no lo son, puesto que ella no trató de eludir la oficina de Hacienda en la Aduana de San Cristóbal, que es la primera que se encuentra en la frontera cuando se llega al país con procedencia de El Salvador; queriendo significarse con lo anterior que no hubo, de su parte, intención de defraudar al Fisco dada la forma de su ingreso a territorio guatemalteco.

De conformidad con los hechos que ha declarado probados el Tribunal sentenciador, los costales de brin materia del delito, le fueron incautados a la enjuiciada cuando los traía ocultos bajo el cargamento de arroz que conducía legalmente en el camión de autos, sin haber satisfecho por aquéllos los impuestos aduanales respectivos. El artículo 408 del Código de Aduanas, en su inciso VII, dice que se incurre en el delito de contrabando "por importar o exportar artículos, ocultándolos en forma propicia para eludir el control aduanero, aunque aparentemente se hubiere tratado de llenar los requisitos legales". En tal virtud, respondiendo exactamente los hechos probados a la infracción penal que establece el precepto transcrito, ningún error ha cometido el Tribunal sentenciador al calificarlos como delito, por lo que no aparece violación de los artículos 408 inciso 1o. del Código mencionado, 11, del Código Penal y 259, 602 inciso 2o. y 603 del Código de Procedimientos Penales, citados al efecto.

—IV—

CONSIDERANDO:

El inciso 5o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, se refiere a cuando se haya cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaran probados en la sentencia, en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal, o se haya omitido considerarlas; y el inciso 6o. del mismo precepto, a cuando la pena impuesta no corresponda según la ley a la calificación aceptada respecto del hecho justiciable, de la participación en él de los procesados, o de las circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal.

Relacionadas con dichos casos de procedencia, la interponente arguye que se omitió en la sentencia considerar las circunstancias atenuantes de su confesión y de "la manifiesta buena fe con que procedía", contempladas en los incisos 9o. y 10 del artículo 22 del Código Penal, pues en cuanto a la primera alega que únicamente por su propio dicho se sabe que ella era la que conducía los sacos de brin en el

camión y que sin ese fundamento no existiría prueba sobre el particular, y respecto a la segunda se descarta malicia de su parte al haber entrado por la vía legal y someter al registro su mercadería.

La sentencia recurrida expresamente declara que en el caso sub-júdice no concurren circunstancias modificativas que apreciar, por lo que procede examinar si, de los hechos probados, aparece la omisión que denuncia la interesada. Por lo que hace a su "confesión", efectivamente debe convenirse en que no se descubre de aquellos hechos luego que, por una parte, en el fallo únicamente sirve de base para deducir la culpabilidad de la enjuiciada el testimonio de los agentes que sorprendieron la conducción fraudulenta de los sacos de brin, conducción que se operaba al amparo de un cargamento de arroz y por cuenta y riesgo de la enjuiciada, quien dirigía el transporte caminando en el propio vehículo empleado para el efecto; y por la otra, ninguna referencia a la declaración de ésta se consigna, como elemento de prueba, para que de la misma pudiera surgir alguna consecuencia jurídica en cuanto a la modificación de su responsabilidad criminal. Respecto a la atenuante contenida en el inciso 10 del artículo 22 del Código Penal, que estima como tal "cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores", aparte de que en la forma concebida y planteada por la recurrente no es materia de los hechos que se han declarado probados por la Sala, su sola enunciación viene a desvirtuar su existencia en este caso, pues resulta inexcusable la falta de declaración y el ocultamiento de mercaderías ante las autoridades aduaneras, cuando, como pretende la recurrente, se ha ingresado al país por las vías legales. Por consiguiente, no existiendo error de derecho alguno en la calificación de los hechos que se declaran probados en cuanto a las circunstancias atenuantes de mérito, y siendo así que la pena impuesta es la que legalmente corresponde al delito investigado, tampoco en este aspecto aparece violación de los preceptos antes mencionados ni de los artículos 79 del Código Penal y 614 y 609 del Código de Procedimientos Penales.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 690 y 694 del Código de Procedimientos Penales, declara: IMPROCEDENTE el presente recurso e impone a la recurrente la pena adicional de quince días de prisión simple, permitiéndole conmutarla a ra-

zón de diez centavos de quetzal por día. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí, Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Fidel Rodríguez Ovando por el delito de homicidio.

DOCTRINA: Cuando el agredido, en lucha con su agresor, le quita el arma y con ella le infiere varias heridas, deja de existir la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, configurándose entonces la legítima defensa incompleta, contenida en las prescripciones del artículo 82 del Código Penal.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, ocho de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso extraordinario de casación, se examina la sentencia dictada por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, el veinte de mayo del corriente año, en la causa seguida a FIDEL RODRIGUEZ OVANDO, por el delito de homicidio, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de este departamento, de cuyos antecedentes.

RESULTA:

El veintiséis de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, a las doce horas y treinta minutos, el Jefe del Primer Cuerpo de la Guardia Civil, telefónicamente dió parte al Juez Octavo de Paz, que a inmediaciones de la estación "Eureka", se encontraba el cadáver de un individuo que había sido apuñalado, y habiéndose ratificado dicho parte, el citado funcionario se constituyó en el indicado lugar, hallando en un llano próximo, el cadáver de un hombre, que presentaba una lesión sobre el maxilar inferior derecho, otra sobre la columna vertebral cerca de la nuca y una más, bajo el sobaco del lado izquierdo, con un cuchillo hundido sobre el hombro izquierdo. Aunque en el lugar de los hechos se encontraban presentes, Maximiliano López y Santos Gómez, quienes dijeron ser hijos del occiso, no se consignó el nombre del mismo en el acta

descriptiva, y según aparece. de ésta, en la cruzadilla del camino de los Guajitos con la línea férrea fueron recogidas dos bolsas de pita, conteniendo una papeles sin importancia y una cédula de vecindad pertenecientes a Fidel Rodríguez; un sombrero de petate, un sombrero de vicuña color gris, y una yema de dedo correspondiendo al anular de la mano derecha del muerto. Los hijos del fallecido sindicaron como hechor a Fidel Rodríguez,

RESULTA:

Examinados Maximiliano López, de trece años de edad, y Santos Gómez, de veintiséis años, dijeron: el primero, que era hijo de Ernestina Chutay y Cruz López Chacón; que el día anterior (veintiséis de marzo), como a las diez horas y treinta minutos, salió de su casa en la aldea los Guajitos, acompañando a su padre, con dirección a la capital, encaminándose a la estación Eureka para tomar el tren y ya llegando al cruce del camino con la línea férrea, como a cien metros de la citada estación, se dió cuenta que el individuo Fidel Rodríguez estaba parado allí, sólo, y al pasar frente a él, sacó un cuchillo y le dió una cuchillada en la mandíbula inferior derecha al padre del declarante, por lo que éste se baltanzó sobre Rodríguez, entablándose entre ambos una lucha cayendo al suelo, quedando abajo su padre, por lo que Rodríguez valiéndose del cuchillo le dió varias puñaladas y salió huyendo, y aunque su citado padre lo corrió como una cuadra no lo pudo agarrar y cayó en el llano donde fué encontrado muerto.

El segundo se concretó a indicar que por referencias de su hermano supo lo ocurrido a su padre y la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, agregando que la enemistad de los Rodríguez con su padre se derivó de que el año anterior su padre, que respondía al nombre de Cruz López Chacón desempeñó el cargo de Regidor Cuarto de la aldea Los Guajitos y en virtud de órdenes recibidas del Alcalde de la misma aldea, mandó a citar a Dionisio Rodríguez para que fuera hacer una faena al camino, a lo cual se negó; que el veintiuno de julio de ese año, su padre se hizo encuentro con el citado Rodríguez, quien lo agredió con un puñal, por lo que aquél se defendió con un azadón que llevaba, entablándose entre ellos una lucha de la cual ambos resultaron heridos, por lo que fueron internados en el Hospital; que a partir de ese suceso la enemistad aumentó, y con ese motivo Fidel Rodríguez, hijo de Dionisio Rodríguez dijo que tenía que matar al padre del declarante o a éste y efectivamente fué

quien le dió muerte el día anterior a su citado padre según le dijo su hermano Maximiliano López. Recibidas las anteriores diligencias en el Juzgado Octavo de Primera Instancia, se mandaron continuar, ordenándose la captura de Fidel Rodríguez.

RESULTA:

El dos de abril de mil novecientos cincuenta y tres, el Jefe del Segundo Cuerpo de la Guardia Civil puso a disposición del Juez Quinto de Paz a Dionisio Rodríguez Yóquez, quien fué capturado en los Guajitos, a solicitud de Santos López Chitay, quien lo sindicaba de que en compañía de su hijo Fidel Rodríguez, habían dado muerte a su padre Cruz López Chacón, el veintiséis de marzo anterior. El Juez ordenó la investigación del caso y después de ratificado ese parte examinó a López Chitay, quien repitió constarle los hechos por referencias de su hermano Maximiliano López y los motivos de la enemistad entre su padre y Dionisio Rodríguez, ya explicados, y que éste último le dijo a su hijo Fidel Rodríguez Ovando, que acechara al padre del declarante y le diera muerte. Indagado Dionisio Rodríguez Yóquez dijo: que sí conoció a Cruz López Chacón, sin tener relaciones con él; que es cierto que tuvo dificultades, como que tuvieron una reyerta, con motivo de que siendo Alcalde Auxiliar de los Guajitos López Chacón citó al dicente para hacer un trabajo en el camino, por lo que le hizo algunos reclamos, y riñeron a machetazos, resultando el declarante con varias heridas; que no es cierto que después de esa riña ofreció quitarle la vida a López Chacón; que no es cierto que en compañía de su hijo Fidel Rodríguez Ovando, en la Estación Eureka haya acometido a puñaladas a López Chacón el citado veintiséis de marzo; que tampoco indujo a su mencionado hijo para que privara de la existencia a aquél, e ignoraba quién era el autor de ese hecho, así como el lugar donde se encontraba su hijo Fidel. El Juez Quinto de Primera Instancia, a quien le pasaron las actuaciones lo redujo a prisión provisional por el delito de homicidio y a continuación se inhibió por existir antecedentes sobre el mismo hecho en el Juzgado Octavo de igual categoría, a donde remitió las relacionadas diligencias, y ya en este Tribunal, fueron acumuladas ambas.

RESULTA:

Los Guardias Civiles, Gustavo Robles Reules, Juan Antonio López Rivera y José Mejía Avila, declararon que fueron quienes verifi-

caron la captura de Dionisio Rodríguez, en la aldea los Guajitos y lo condujeron a la Segunda Estación de la Guardia Civil. Con esos antecedentes se elevó la causa a plenario y al tomar confesión con cargos al citado Rodríguez, no se conformó con los que se le formularon en el sentido de haber inducido a su hijo Fidel Rodríguez a dar muerte a López Chacón. Se agregaron a la causa, el informe del encargado del Archivo de la Penitenciaría Central, que indica como único antecedente del procesado su detención con motivo de este proceso y la certificación de la partida de defunción de Cruz López Chacón, así como el informe de la autopsia practicada a su cadáver, que contiene como conclusiones que presentaba varias heridas producidas con arma punzo-cortante, dos de ellas penetrantes del tórax; herida del pulmón izquierdo, y que su muerte fué debida a anemia aguda consecutiva a abundante hemorragia por las heridas.

RESULTA:

Examinada Mercedes Rodríguez, expresó, que el día del hecho, como a las diez de la mañana, se dirigía a la Estación Eureka a tomar el tren, y en el cruce de la calle real encontró a Refugio de Camey, con quien se detuvo a conversar y como a cinco metros de distancia, aproximadamente, se encontraba sentado el individuo Fidel Rodríguez, sobre una bolsa de pita; que como al cuarto de hora se asomó Cruz López Chacón acompañado de un menor, y al ver a Rodríguez lo insultó y se le abalanzó con un cuchillo, habiéndose abrazado en lucha y Rodríguez logró quitarle el cuchillo y le causó varias heridas, saliendo en precipitada fuga, seguido por el herido, pero éste cayó como a los ocho metros. En los mismos términos declaró Refugio de Camey.

RESULTA:

Previos los traslados a acusador, Ministerio Público y defensor, se abrió a prueba la causa y dentro de ese período se rindieron las siguientes: declaraciones de Abigail Méndez Dardón y José Monterroso, sobre que Rodríguez es persona calmada, buena con sus vecinos, no agresivo y siempre ha sido caritativo y de buenos sentimientos; de Mateo Barahona y Bruno García Rodríguez, sobre buenos antecedentes de Dionisio Rodríguez; de Higinio Rodríguez Esturbán y Manuel Siam Porras, sobre conocimiento y buenos antecedentes de Cruz López Chacón y acerca de su enemistad con los Rodríguez y sobre los malos antecedentes de éstos últimos. Vencido ese

término de prueba, se corrieron los traslados finales y se señaló día para la vista, al mismo tiempo que se negó la reforma del auto de prisión provisional de Dionisio Rodríguez, quien apeló de esa denegatoria y al resolver la Sala jurisdiccional, le reformó el auto de prisión por el de libertad sujeto a resultas.

RESULTA:

En ese estado la causa, el siete de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, se presentó voluntariamente ante el Juez Noveno de Primera Instancia, a quien le pasó este proceso, por razones de turno en el feriado oficial, FIDEL RODRIGUEZ OVANDO, y al ser indagado declaró: que era de veinticuatro años de edad, que antes no había sido detenido ni procesado; que no sabía el motivo porque se le indagaba; que conoció a Cruz López Chacón con quien eran amigos, no habiendo tenido nunca enemistad con él; que no es cierto que el día de autos haya estado esperando a López Chacón con el propósito de privarlo de la existencia; que sí era cierto que ese día mató a López Chacón pero fué por defensa; que éste le causó una lesión en la rodilla izquierda; que es cierto que al ver que López Chacón estaba en el suelo herido salió en precipitada fuga; que cuando quitó el cuchillo a López Chacón, se encontraban en el suelo por lo que no pudo huir. Por el delito de homicidio se le redujo a prisión provisional. Examinado Alberto Letrán Godínez declaró: que el día y a la hora en que tuvo verificativo el hecho investigado, estaba Fidel Rodríguez Ovando sentado en el crucero de la carretera que conduce a los Guajitos con la vía férrea, cuando apareció Cruz López Chacón, en dirección a donde estaba aquél y se le abalanzó empezando seguidamente la lucha entre ambos, cayendo al suelo; que después Rodríguez Ovando se logró soltar de su agresor y salió corriendo y tras él López Chacón, quien como a las quince brazadas cayó y ya no se levantó; que el declarante no se dió cuenta quién de los dos tenía cuchillo. Se mandó tomar confesión con cargos al procesado Fidel Rodríguez, así como a ampliarle su indagatoria, a su solicitud, lo que hizo en la siguiente forma: que las testigos Mercedes Godínez de Rodríguez y Refugio de Camey, no son sus parientes, y que proponía los testimonios de Alberto Letrán y Federico García, éste último se encontraba pastoreando unos bueyes cerca del lugar en que riñeron (textual) el deponente con el occiso Cruz López Chacón. Al tomarle confesión con cargos, no se conformó con el que se le formuló, relativo a que se encontraba esperando el día de los hechos a López Chacón y al pa-

sar éste sin mediar motivo sacó un cuchillo, se le abalanzó y en la riña que tuvieron le dió varias heridas que le causaron la muerte, habiéndose puesto después en precipitada fuga, expresando que no lo estaba esperando, ni tenía el cuchillo y que no se dió cuenta si le causó heridas a López Chacón, proponiendo como su defensor al bachiller Oscar Guzmán Linares, a quien se discernió el cargo y corridos nuevos traslados al acusador, Ministerio Público y defensor, ambas partes pidieron que se abriera nuevamente la causa a prueba, lo que se hizo por el término de treinta días, dentro del cual se rindieron las siguientes: por parte de la defensa, declaraciones de los testigos Víctor Godínez Palala y José Modesto Godínez Campos, sobre conocimiento del ofendido y los procesados, constándoles que Rodríguez es pacífico, dedicado a su trabajo de agricultor y López Chacón era impulsivo y agresivo, según el primero, quien dice haber sido amenazado por aquél en una oportunidad, y el segundo que era de mal carácter; que en cierta ocasión les dijo López Chacón que había entrado a la cárcel injustamente por haber reñido con Dionisio Rodríguez, pero que más tarde entraría por algo, porque se vengaría ya fuera con el citado Rodríguez o con su hijo Fidel y que a cualquiera de los dos "mandaría al otro lado". Dichos testigos fueron repreguntados por el acusador, sin ningún resultado positivo; ampliación de la declaración de Alberto Letrán Godínez, bajo interrogatorio, en el sentido de que en el lugar de los hechos, al nada más ver López Chacón a Fidel Rodríguez lo insultó y acto seguido se le abalanzó con un cuchillo, habiendo tenido éste necesidad de defenderse puesto que no fué quien provocó el hecho; ampliación de las declaraciones de Mercedes Rodríguez y Refugio Ortiz de Camey, conforme a interrogatorio y en el mismo sentido que el testigo anterior, sólo que estas dos testigos fueron repreguntadas por el acusador, sin resultado favorable; declaración de Adrián Vega Ruano, sobre buenos antecedentes y honradez de los Rodríguez, el cual también fué repreguntado, sin mayor resultado; los informes del encargado del Archivo de la Penitenciaría, sobre que Fidel Rodríguez sólo ha ingresado a ese establecimiento, con motivo de este proceso, y que Cruz López Chacón, tuvo tres ingresos, uno por amenazas y los otros dos por lesiones; y declaración de Federico García Barrientos, quien expresó que vió a Fidel Rodríguez, sentado cerca de la Estación Eureka, junto a un paredón esperando el tren, a quien le habló y pudo notar que no portaba ninguna arma, sino una bolsa de pita únicamente y de quien es amigo. Al ser repreguntado dijo

no recordar la fecha en que lo vió. Vencido el término de prueba y corridos los últimos traslados, se señaló día para la vista, pero posteriormente para mejor fallar se ordenó, recabar informes de los antecedentes penales de los procesados Rodríguez, del Departamento de Estadística Judicial; copia certificada de la partida de nacimiento del occiso; e informe del proceso instruido a Dionisio Rodríguez y López Chacón. El Departamento de Estadística citado informó que no tenían antecedentes los procesados; y el Registrador Civil de Palín, que no pudo localizar la partida de nacimiento de Cruz López Chacón.

RESULTA:

Con esos antecedentes, el Juzgado Octavo de Primera Instancia de este departamento, el diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictó sentencia en este proceso, haciendo las siguientes declaraciones: que por falta de prueba absolvía del cargo formulado a Dionisio Rodríguez Yóquez, y que Fidel Rodríguez Ovando era autor del delito de homicidio perpetrado en la persona de Cruz López Chacón, imponiéndole la pena de seis años ocho meses de prisión correccional incommutables, por haberle aplicado una circunstancia atenuante, con las accesorias del caso. Ambas partes interpusieron apelación contra este fallo, por lo que conoció de él la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, pronunciando el que se examina, que confirma en todo el de primer grado, con las siguientes consideraciones: "La responsabilidad del reo Fidel Rodríguez Ovando, está plenamente probada con las declaraciones de los testigos Mercedes Rodríguez, Refugio de Camey y Alberto Letrán, quienes como testigos presenciales, dicen: que el día de autos estaba Fidel Rodríguez sentado sobre una bolsa de pita esperando el tren en la Estación Eureka, cuando asomó el occiso Cruz López Chacón, acompañado de un menor, al nomás ver a Fidel lo insultó con palabras obscenas y se le abalanzó, se abrazaron, lucharon y Fidel logró quitarle el cuchillo a López Chacón y le causó varias heridas, en seguida salió huyendo Fidel Rodríguez y López Chacón lo siguió cayendo muerto a los pocos pasos. Al occiso se le encontró un cuchillo medio hundido en el hombro izquierdo... Con los elementos de prueba enumerados, el Tribunal estima que los extremos exigidos por la ley para que exista la legítima defensa, no llegaron a tipificarse, en efecto: la forma en que el reo relata los hechos es inverosímil. Si desde el principio de la lucha, éste quedó debajo ello indicaría que la destreza y fuerza de su adversario

eran superiores a la suya y entonces resulta un contrasentido que lo hubiese desarmado dos veces, estando siempre debajo. Hay otra circunstancia, el reo tiene veinticuatro años de edad y el occiso tenía cincuenta, esta diferencia de edad salvo excepciones de naturaleza especial como por ejemplo por motivos de enfermedad, le dan al reo mucha ventaja sobre su adversario. El mismo razonamiento cabe hacer con respecto a las declaraciones de los testigos presenciales. Sin embargo aún aceptando que dichas declaraciones expresan la verdad, cabe estimar como lo hizo el Juez de los autos, que no llegó a establecerse la necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión y de ahí que la sentencia que se examina se encuentra arreglada a derecho".

RESULTA:

Contra este último fallo, el reo Fidel Rodríguez Ovando, con el auxilio del Abogado Rafael Zea Ruano, interpuso recurso de casación por infracción de ley, fundamentándolo en los incisos 1o., 5o. y 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, y cita como infringidos los artículos 21 inciso 6o., 22 incisos 4o., 5o., 6o., y 10°, 81 y 82 del Código Penal; 573 y 574 del Código de Procedimientos Penales. El recurrente argumenta: "El Tribunal sentenciador ha admitido que la agresión es ilegítima y ha admitido también que yo no provoqué a Cruz López Chacón, y lo que no estima a mi favor es el extremo relativo a la necesidad racional del medio empleado para impedir la o repelerla, y es en esta apreciación en la que se refiere a la diferencia de edades entre López Chacón y yo, a que no era necesaria su muerte, etc. De estas apreciaciones se derivan fundamentalmente las infracciones de las leyes cometidas por el Tribunal sentenciador... Basta la lectura de las actuaciones para darse cuenta, honorable Corte Suprema de Justicia, que fui agredido ilegítimamente, que yo no he provocado y que la situación en que me colocó el ataque de Cruz López Chacón no era para estar pensando de momento, instantáneamente bajo el ataque de mi agresor, qué era lo que racionalmente debía de hacer. Por lo que llevo expuesto, la Sala sentenciadora infringió el artículo 21 inciso 6o. del Código Penal al no hacer aplicación del mismo y no estimar mi acción como de legítima defensa y no eximirme de responsabilidad. Pero, si no debía aplicarse la exención de responsabilidad contenida en la ley invocada, el Tribunal sentenciador infringió también el artículo 82 del Código Penal en relación con el artículo 22 inciso 1o. del Código

Penal, al hacer incorrecta aplicación de éste y no aplicar el artículo 82 del Código Penal". Mas adelante expresa que si la Sala no hizo aplicación de las leyes invocadas, debió al menos aplicar el artículo 22 del Código Penal en sus incisos 4o., 5o., 6o. y 10º, que consignan varias circunstancias atenuantes, que estima concurren en este caso, y termina así: "Por último, Honorable Corte Suprema de Justicia, he señalado también como caso de procedencia el contenido en el inciso 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, porque hubo error de derecho en la apreciación de la prueba documental. En efecto, consta en documento oficial, en informe que se encuentra en el juicio, que Cruz López Chacón, era persona de malos antecedentes, que ya había sido procesado por lesiones y por amenazas. Y ese documento, no obstante ser público, ser un documento oficial, no fué tomado en cuenta para valorarlo como determinante de la peligrosidad del señor López Chacón, peligrosidad que debió haberse estimado para comprender y tener por establecido el requisito número 2 del inciso 6o. del artículo 21 del Código Penal o sea para tener por evidenciado la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión ilegítima de la que fué objeto por parte de Cruz López Chacón". Habiéndose señalado día para la vista la cual tuvo verificativo, es el caso de resolver, y.

—I—

CONSIDERANDO:

Entre los casos de procedencia citados por el recurrente, está el relativo al error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba y según sus argumentaciones, indica que la Sala sentenciadora incurrió en infracción de los artículos 573 y 574 del Código de Procedimientos Penales, al no estimar correctamente las declaraciones de los testigos Mercedes Rodríguez, Refugio Ortiz y Camey y Alberto Letrán, pero no indica cuál es a su juicio el error atribuido a esta prueba, dejando de cumplir con ese indispensable requisito; que el mismo Tribunal no tomó en consideración el documento oficial que constituye el informe del Encargado del Archivo de la Penitenciaría Central, omitiendo en este caso citar la ley que consideró infringida con ese motivo. Tales omisiones, no pueden subsanarse oficiosamente por este Tribunal, por ser restringido y eminentemente técnico el recurso de casación, por lo que no es posible hacer el estudio comparativo en este aspecto del recurso. Artículos 682 inciso 8o. y 684 2a. parte, del Código de Procedimientos Penales.

—II—

CONSIDERANDO:

Otro de los casos de procedencia en que se apoya el recurrente, es el contenido en el inciso 1o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que se refiere a "cuando los hechos que se declaren probados sean calificados y penados como delitos no siéndolo o cuando se penen a pesar de existir una circunstancia eximente de responsabilidad criminal, o a pesar de que circunstancias legales posteriores a la comisión del delito impidan penarlo" y citó como violado por este motivo, el inciso 6o. del artículo 21 del Código Penal, que dispone que está exento de responsabilidad criminal "El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurren las circunstancias siguientes: 1o. Agresión ilegítima. 2o. Necesidad racional del medio empleado para impedir la o repelerla; y 3o. Falta de provocación suficiente de parte del que se defiende. De acuerdo con el caso de procedencia citado, son los hechos que en la sentencia se declaran probados, los que deben examinarse, a fin de poder determinar si con ellos se integran las tres circunstancias requeridas para la legítima defensa. En el fallo impugnado se admite que Fidel Rodríguez Ovando fué objeto de una agresión de parte de Cruz López Chacón, que no fué provocada por él y que el agredido desarmó a su agresor y con el cuchillo de éste, ya en su poder, le infirió las varias lesiones que causaron la muerte a su adversario. Al examinar las apreciaciones del Tribunal sentenciador, se ve que éste estimó que no llegó a establecerse la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, y tal afirmación se encuentra correcta, aunque no por las razones que aquel Tribunal indica, sino porque se estima que una vez desarmado el agresor por el agredido, ya no era necesario lesionarlo para repeler la agresión, por lo que la actitud de Rodríguez Ovando no fué sino un exceso de su reacción defensiva, y siendo constitutivo del delito de homicidio el hecho genérico de dar muerte a una persona, y toda vez que se llega a la conclusión de que no concurren todas las circunstancias necesarias a la integración de la legítima defensa, sí procede penar dicha infracción, y así no existe la violación de la ley denunciada con ese motivo.

—III—

CONSIDERANDO:

Al citarse como infringidos los incisos 4o., 5o., 6o. y 10º del artículo 22 y los artículos 81 y 82, todos del Código Penal, en relación al

caso de procedencia contenida en el inciso 5o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que dispone que se incurre en infracción de ley, "Cuando se haya cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia, en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal o se haya omitido considerarlas" se argumenta: "El fallo contra el cual recurso da por sentado que hubo agresión ilegítima que no hubo de mi parte provocación suficiente, y lo único que no admite es la existencia de la necesidad racional del medio empleado para impedir-la o repelerla, o sea, pues, que no estima como evidenciado tal elemento. De manera que lo que debió aplicar el tribunal sentenciador fué el artículo 82 del Código Penal y no el artículo 22 inciso 1o. del mismo cuerpo de leyes". Efectivamente, con los hechos que la Sala dió por probados no acepta que en el caso de examen se haya establecido la legítima defensa, porque estima que falta el extremo de la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión, aunque sí que ésta fué ilegítima de parte del agresor y no provocada por el agredido, por lo que de acuerdo con esas apreciaciones se está ante una circunstancia eximente de responsabilidad penal incompleta, y en consecuencia, aplicable al caso, la doctrina contenida en el artículo 82 del Código Penal, y al no haberlo juzgado así el Tribunal sen el fallo recurrido, en este aspecto del recurso tenciador, incurrió en infracción por inaplicación de esta ley, lo que es motivo para casar y dictar el que corresponde de acuerdo con las consideraciones que anteceden, sin necesidad de continuar el examen de las otras leyes citadas como violadas, tanto más, que las circunstancias atenuantes cuya inaplicación se reclama, sólo podrían examinarse en caso de no haber prosperado este recurso, por el motivo ántes considerado.

—IV—

CONSIDERANDO:

Habiéndose acreditado con los testimonios de Mercedes Rodríguez, Refugio Ortiz de Camey y Alberto Letrán, testigos idónos todos, que el día y a la hora de los hechos, Fidel Rodríguez Ovando, se encontraba sentado sobre una bolsa de pita, en las inmediaciones de la estación "Eureka" esperando el tren, cuando asomó Cruz López Chacón y al verlo lo insultó con palabras obscenas y se le abalanzó con un cuchillo, trabándose una lucha entre los dos y estando ambos en el suelo logró Rodríguez Ovando desarmar a su agresor, infirién-

dole varias lesiones, que según el informe mé dico-legal correspondiente, le causaron la muerte, se integró así un delito de homicidio; però para determinar la responsabilidad penal del autor del mismo debe tomarse en cuenta lo consignado en los dos considerandos inmediatos anteriores, es decir, que concurren en este caso sólo dos de las tres circunstancias requeridas para formar la legítima defensa, por lo que ésta quedó incompleta, pues aquellos testigos afirman que Rodríguez Ovando fué agredido sorprendidamente por López Chacón con un cuchillo, sin que haya precedido ningún acto de su parte que lo provocara, debiendo hacerse en tal virtud aplicación de lo prescrito en el artículo 82 del Código Penal, reduciendo la pena de diez años de prisión correccional señalada a tal infracción hasta una cuarta parte. Artículos 573, 586 Código de Procedimientos Penales; 82, 300 del Código Penal.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en los artículos 224, 227, 233, 234 Decreto Gubernativo 1862; 674, 687 Código de Procedimientos Penales; 2o. del Decreto 231 del Congreso; y 1o., del Decreto Gubernativo 2167, DECLARA: con lugar el presente recurso, casa y anula la sentencia recurrida, en el aspecto relacionado, y al resolver acerca de él, impone a Fidel Rodríguez Ovando, como autor del homicidio de Cruz López Chacón, la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES de prisión correccional, conmutable en sus dos terceras partes, a razón de veinticinco centavos de quetzal diarios, previo pago o afianzamiento de las responsabilidades civiles. Notifíquese y en la forma correspondiente devuélvase los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguilar Fuentes).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Herman Gamboa Domínguez y compañeros, por el delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas.

DOCTRINA: *No incurre en error de derecho el Tribunal que declara autores del delito de contrabando en el Ramo de Aduanas a los enjuiciados que, según su confesión, intro-*

dujeron mercadería al país, sujeta al pago de derechos, eludiendo la intervención de las oficinas de Hacienda.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diez de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se examina la sentencia que el veintitrés de mayo del año en curso, dictó la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones en la causa que por el delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas se instruyó en el Juzgado de Primera Instancia de San Marcos, contra Herman Gamboa Domínguez, Bruno García Martínez, Romeo Hernández y Hernández, Gilberto Hernández Rivera, Andrés Rodríguez Damián, Juan Solís López, Marciano García Ramírez, Juan López Barrios, Rafael Guillén López, Javier Mendoza Reyes, Héctor Ortiz de León, Luis Rasgado Molina, Gabriel Gómez García, Nicolás Guillén López, José Luis Hernández, Eduardo Sánchez Cardona, Gumersindo Monzón Maldonado, Celso de Jesús Pineda Soto y Eugenio Jiménez Pérez.

ANTECEDENTES:

La causa se inició el nueve de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, por denuncia que presentó ante el Juez Menor de Ayutla, departamento de San Marcos, el Sub-Jefe de la Guardia Civil de aquel lugar, Gonzalo Nicolas Herrera Robledo, indicando que ese día como a las tres horas, los guardias de Hacienda Anacleto Zepeda Contreras, Adán Aldana Marroquín y Arturo Siliézar Ortiz, detuvieron a Herman Gamboa Domínguez, Bruno García Martínez, Romeo Hernández y Hernández, Gilberto Hernández Rivera, Andrés Rodríguez Damián, Juan Solís López, Marciano García Ramírez, Juan López Barrios, Rafael Guillén López, Javier Mendoza Reyes, Héctor Ortiz de León, Luis Rasgado Molina, Gabriel Gómez García, Nicolás Guillén López, José Luis Hernández y Eduardo Sánchez Cardona, como a cincuenta metros del carro de equipajes del tren que hace el recorrido de aquella población a esta capital, porque introdujeron en el mencionado carro de equipajes, dieciséis bultos de mercadería de procedencia mexicana como contrabando. Los guardias aprehensores declararon de conformidad con los términos de la denuncia. Los detenidos al ser indagados confesaron de manera uniforme que el día anterior al de su captura, en Tapachula, de la República Mexicana, Jaime Urbina los contrató para que pasaran a territorio guatemalteco un bulto de mercadería cada uno, indicándoles

que el paso lo harían por el puente internacional sin ningún peligro porque ya estaba convenido con las autoridades respectivas; que esa noche en la población de Suchiate se les entregó la mercadería y tomaron cada uno un bulto, pasando por el puente internacional, pero antes de llegar a la garita del lado guatemalteco, botaron el cargamento al monte y ellos "se descolgaron" del puente recogiendo nuevamente su carga, la cual transportaron hasta el carro de equipajes del tren, en donde se las recibieron dos individuos a quienes no conocen; que ya se preparaban para regresar al lugar de su origen, cuando fueron detenidos. Los procesados Juan Solís López, Juan López Barrios, Rafael Guillén López, Javier Mendoza Reyes, Héctor Ortiz de León, Gabriel Gómez García, José Luis Hernández López y Eduardo Sánchez Cardona, dijeron además, que los guió en el transporte de la mercadería Gumercindo Monzón, quien se fugó al ser ellos detenidos. Eugenio Jiménez Pérez fué detenido el mismo día nueve de junio a las cinco horas y al ser indagado declaró ser él el responsable del carro de equipajes del tren ya relacionado, pero únicamente cuando está en tránsito, pues al terminar el recorrido se retira a su habitación y se presenta al día siguiente media hora antes de la salida del tren; que esa noche durmió en su cuarto y no tuvo conocimiento de lo ocurrido en el carro de equipajes, del cual tienen llave los demás empleados del ferrocarril, por ser ésta "standard", y negó tener alguna participación en el hecho investigado. Celso de Jesús Pineda Soto, que también fué detenido el mismo día como a las seis horas, declaró que se le detuvo cuando se preparaba para salir a desempeñar su empleo de agente de publicaciones del ferrocarril y que esa noche durmió en el apartado del ambulante postal de la Compañía José Carlos Bolaños, quien lo llevó allí por encontrarse en completo estado de ebriedad, pues el declarante duerme corrientemente en su cuarto que tiene en la "Pensión Frontera"; que tiene llave del coche de equipajes, como la tienen todos los empleados y negó tener conocimiento o participación alguna en la comisión del delito que motivó el procedimiento. El Administrador de Rentas y Aduana de Ayutla, Tulio Zea Ligorria, declaró que desde hacía varios días tenía denuncias de que se venía pasando mercadería de origen mexicano fraudulentamente; que el medio de transporte era el carro de equipajes del ferrocarril y en vista de ello comisionó a un agente confidencial para que investigara esos hechos; que el miércoles nueve de junio, dicho agente le avisó en la madrugada, que momentos antes habían sido introducidos dieciséis bultos en el carro

de equipajes y que los responsables ya habían sido detenidos; se puso al habla con el Agente de los ferrocarriles y éste le informó que quien tenía a su cargo el carro de equipajes era Eugenio Jiménez, pero que su responsabilidad cesaba treinta minutos después de la llegada del tren y comenzaba treinta minutos antes de la salida; que a su requerimiento el citado Jiménez abrió el carro en mención y allí se encontraron los dieciséis bultos de mercadería, por lo que se le detuvo provisionalmente y asimismo se mandó detener al agente de publicidad Celso de Jesús Pineda, porque éste durmió esa noche en el apartado del ambulante postal José Carlos Bolaños, el cual queda contiguo al carro de equipajes; que no se detuvo a éste último, por no haber quién lo reemplazara en su cargo, y pudo establecer que todos los empleados del ferrocarril tienen llave del carro de equipajes. Guillermo Efraín González Córdón, Roberto Hilarío Mendoza Vásquez y Benjamín Mathamba Alvarado, empleados del ferrocarril, declararon que Eugenio Jiménez es el responsable del carro de equipajes, pero que todos los empleados tienen llave del mismo. Carlos Humberto Mansilla Morales, declaró que Celso de Jesús Pineda, durmió la noche en que ocurrieron los hechos que se investigan, en el apartado del ambulante postal José Carlos Bolaños, porque éste lo llevó allí en completo estado de ebriedad.

El Administrador de Rentas y Aduana de Ayutla, Tulio Zea Ligorria presentó el detalle del contenido total de los dieciséis bultos de mercadería incautada, con la liquidación correspondiente practicada por el Vista de la Aduana Arturo Mazariégo F., arrojando un total de once mil trescientos quetzales cincuenta y cuatro centavos por concepto de derechos arancelarios, impuestos y multas dejados de cubrir.

Recibida la causa en Primera Instancia, se decretó la prisión provisional de los procesados por el delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas y por complicidad en el mismo, contra Eugenio Jiménez y Celso de Jesús Pineda.

Posteriormente se verificó la captura de Guercindo Monzón Maldonado, quien al indágarsele negó haber intervenido en la comisión del delito, y se le redujo a prisión provisional por contrabando en el Ramo de Aduanas.

Elevada la causa a plenario, ninguno de los procesados se conformó con el cargo que se le formuló. Durante la dilación probatoria, sólo se recibieron los testimonios de Benjamín Orellana Muñoz y Lucas Mérida López, quienes declararon que durante la noche del ocho de junio del año próximo pasado Celso de Je-

sús Pineda, quien propuso esta prueba, como a las veinte horas, fué llevado en completo estado de ebriedad por Carlos Bolaños a dormir al carro ocupado por este último en el ferrocarril y que por el estado de ebriedad en que se encontraba, estiman que no estaba capacitado para ejecutar ningún esfuerzo. También se recabó el informe del Agente de los Ferrocarriles Internacionales de Centro América en Ayutla, Benjamín Alvarado, quien indicó que la llave de los coches de pasajeros y de equipajes del tren la usan los brequeros, fogoneeros, conductores y barrenderos de coches.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Concluida la tramitación del proceso, el Juez dictó sentencia absolutoria de la instancia a favor de todos los enjuiciados por estimar que en lo que se refiere a Celso de Jesús Pineda y Eugenio Jiménez Pérez, la circunstancias de ser empleados del ferrocarril y tener llave del coche de equipajes en donde se encontró la mercadería materia del delito, no es prueba suficiente para su condena, supuesto que según se estableció, todos los empleados del ferrocarril tienen la misma llave. Y en cuanto a los demás procesados, considera que aunque confesaron haber participado en el hecho, no confiesan ser ellos los dueños de la mercadería, la cual aseguran ser de una tercera persona; y que como existe duda respecto a su completa inocencia, siendo posible que en el futuro se obtengan otras pruebas en su contra, debe limitarse la absolucíón a la instancia. Por último deja abierto el procedimiento contra Tulio Zea Ligorria, Gonzalo Herrera, Jaime Urbina y N. Figueroa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, por recurso que interpusiera el Representante del Fisco, conoció del juicio, y el veintitrés de mayo próximo pasado, dictó sentencia revocando la de Primer Grado con respecto a Herman Gamboa Domínguez, Bruno García Martínez, Romeo Hernández y Hernández, Gilberto Hernández Rivera, Andrés Rodríguez, Damián, Juan Solís López, Mariano García Ramírez, Gabriel Gómez García, Héctor Ortiz de León, José Luis Hernández López, Luis Rasgado Molina, Eduardo Sánchez Cardona, Juan López Barrios, Rafael Guillén López, Nicolás Guillén López y Javier Mendoza Reyes, a quienes condena como autores del delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas a sufrir la pena de cuatro años de prisión correccional incommutable más la multa de tres mil trescientos treinta y tres quetzales treinta y tres

centavos, a excepción de los menores Gilberto Hernández Rivas y José Luis Hernández, a quienes les impone las penas de dos años de prisión correccional incommutables, más la multa de un mil seiscientos sesenta y seis quetzales y sesenta y seis centavos, hechas ya las rebajas correspondientes en cuanto a los primeros, de una tercera parte por concurrir en su favor la atenuante de ser su confesión la prueba en que se basa su condena, y en cuanto a los dos últimos, por concurrir además de esa misma atenuante, la de ser menores de edad y mayores de quince años. A Eugenio Jiménez Pérez y Celso de Jesús Pineda Soto los condena a sufrir la pena de dos años de prisión correccional incommutable a cada uno, más la multa de un mil seiscientos sesenta y seis quetzales y sesenta y seis centavos, como responsables del mismo delito en el grado de encubrimiento. Confirma la sentencia absolutoria en lo que se refiere al procesado Gumercindo Monzón Maldonado y en el punto tercero, en el que deja abierto el procedimiento contra las personas ya mencionadas. Estimó la Sala que los hechos confesados por los enjuiciados a quienes condena como autores, tipifican el delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas; que siendo su confesión la única prueba de su culpabilidad, constituye una atenuante de su responsabilidad criminal y que en favor de Gilberto Hernández Rivas y José Luis Hernández López concurre además la de ser menores de edad y mayores de quince años. "Que la responsabilidad de Eugenio Jiménez Pérez (ex-Jefe de Equipajes) se establece con los elementos siguientes: haber estado en esa oportunidad como Jefe de Equipajes del Ferrocarril que corre de Ayutla a la ciudad de Guatemala, y como consecuencia, responsable del coche respectivo del cual tenía llave para abrir o cerrar; y pernoctar o dormir en su cuarto contiguo al coche de equipajes, indicando no haber oído cuando fueron introducidos los bultos de mercadería fraudulentamente". Y que la responsabilidad de Celso de Jesús Pineda, se probó con los hechos siguientes: "haber aparecido durmiendo en el mismo cuarto del ambulante postal José Carlos Bolaños, que a su vez en el mismo cuarto o apartado, el cual tiene puerta de comunicación con el apartado o cuarto de equipajes, y por lo que sí pudo haberse dado cuenta perfecta de la entrada de los bultos de mercadería; haber sostenido este encartado (Pineda) que en la hora y fecha de autos se encontraba en completo estado de ebriedad, hecho éste que no comprobó durante toda la tramitación del juicio; la coincidencia de haber ido a dormir en dicho apartamiento con Bolaños no obstan-

te tener su cuarto en la Pensión "Frontera", como lo ha manifestado; y tener llave del mismo cuarto de equipajes, como lo ha confesado".

RECURSO DE CASACION

El dieciocho de junio próximo pasado, con auxilio del Abogado Pedro Antonio Ibáñez, todos los enjuiciados, con excepción de Herman Gamboa Domínguez, Bruno García Martínez, Javier Mendoza Reyes, Gumercindo Monzón Maldonado y Eugenio Jiménez Pérez, introdujeron el presente recurso extraordinario de casación contra la sentencia de Segundo Grado ya relacionada: a) "por vicio de procedimiento y con fundamento en el Inco. 1o. del Arto. 677 del Código de Pros. Pls.; y b) "Por infracción de ley con fundamento en el Inco. 4o. del Arto. 676 del Código de Pros. Pls.", citando como infringidas con respecto al primer motivo, las leyes siguientes: artículo 456 del Código de Aduanas, 564 del Código de Procedimientos Penales, y 119 del Decreto Gubernativo 1862; y con relación al segundo motivo, los artículos 568, 609, 728, 729, 587, 589 y 601 del Código de Procedimientos Penales; "Por falta de aplicación", los artículos 730, 566, 568, 571, 573 y 609 del mismo Código "porque la confesión que la Sala achaca a los reos no llena los requisitos que establecen los cuatro incisos del citado artículo". También se citan como infringidos los artículos 11, 22, 28, 32, 68 y 74 del Código Penal, 408 inciso 1o. y 6o. del Código de Aduanas y el Decreto 1015 del Congreso.

Encontrándose arreglada a derecho la interposición del recurso, se tramitó en la forma correspondiente y efectuada la vista, procede resolver.

— I —

CONSIDERANDO:

Para que prospere el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en cualquiera de los casos que contempla el artículo 677 del Código de Procedimientos Penales, es indispensable, al tenor de lo que preceptúa el artículo 679 del mismo Código, que se pida la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió y reproducido la petición en la segunda instancia cuando la infracción procediese de la primera. En el caso de examen, los recurrentes al fundamentar su recurso en el inciso 1o. del citado artículo 677 del Código de Procedimientos Penales, argumentan que "se propuso como prueba la liquidación del impuesto fiscal que debió pagar cada bulto de

mercadería y no globalmente los dieciséis bultos como liquidaron las oficinas de aduana fué denegada por consiguiente una diligencia de prueba propuesta oportunamente y se infringió además el Arto. 456 del Código de Aduanas". Sin embargo, al revisar las actuaciones, se comprueba que tal diligencia no fué pedida durante la dilación probatoria en primera instancia, que se hubiese denegado, ni que se haya reiterado la petición en segunda instancia y no fué sino hasta que evacuó su traslado final el defensor Salomón Orozco de León Barrios, cuando pidió que "para mejor fallar", se practicara aquella diligencia, solicitud que no reprodujo ante el Tribunal de Segundo Grado. En consecuencia, no estando cumplidos los requisitos que exige el artículo 679 del Código de Procedimientos Penales; ya citado, el recurso por quebrantamiento de forma es improcedente y así debe declararse, sin examinar, por innecesario, los artículos 456 del Código de Aduanas, 564 del Código de Procedimientos Penales y 119 del Decreto Gubernativo 1862, que los recurrentes citaron con relación al motivo que se estudia.

—II—

CONSIDERANDO:

El otro motivo que se aduce como fundamento del recurso, es el contenido en el inciso 4o. del Artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, o sea que la Sala sentenciadora cometió error de derecho al determinar la participación de cada uno de los recurrentes en los hechos que se declaran probados en la sentencia que se impugna. Concretado así el recurso por infracción de ley, su examen tiene que hacerse bajo el presupuesto de que los hechos que se dan por probados en la sentencia, lo están efectivamente, ya que al Tribunal de Casación no es dable hacer un nuevo análisis de las probanzas, cuando, como en el presente caso, no se invoca como motivo del recurso, error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas. Sentada esta premisa, conviene examinar si los hechos que se declaran probados en la sentencia de Segundo Grado, caracterizan la participación que la Sala atribuyó a cada uno de los procesados en la comisión del delito. Alegan los recurrentes, que la Sala declaró que su responsabilidad quedó "establecida plenamente con su respectiva confesión..." "pero en el proceso —continuaban manifestando— no existe confesión de nuestra parte de haber cometido el referido delito, pues en la indagatoria que nos sacaron violentamente expusimos la forma en que hacíamos sido capturados, pero nunca confesa-

mos ser autores del delito que nos imputa por consiguiente, la Sala cometió error de derecho al determinar nuestra participación como autores del delito". Efectivamente, la Sala, en cuanto se refiere a los recurrentes condenados como autores, considera: que su culpabilidad "está establecida plenamente con su respectiva confesión, al exponer que en la fecha y hora de autos, el señor Jaime Urbina les entregó en el Suchiate, dieciséis bultos de mercadería, tomando cada uno su respectivo bulto que pasaron por el puente de dicho río ante las autoridades mejicanas; que ya en territorio guatemalteco botaron los bultos al monte, descolgándose ellos también, tomando nuevamente sus bultos, pasaron abajo de la garita, saliendo a la línea mejicana hasta llegar al carro de equipajes donde metieron los bultos, no habiendo conocido a las dos personas que se los recibieron. Que previamente les habló el señor Urbina para la ejecución de tales actos, ofreciéndoles la suma de ochenta pesos a cada uno, e indicándoles que no tuvieran pena que ya estaba todo arreglado con las autoridades guatemaltecas". Como la Sala estima que la confesión de los enjuiciados es legítima y contiene la relación de los hechos indicados, resulta evidente que no violó el artículo 408 del Código de Aduanas en sus incisos I y VI, porque en esos preceptos se tipifica el delito de Contrabando en el Ramo de Aduanas, por la introducción en el país de artículos sujetos o no al pago de derechos, eludiendo la intervención de las oficinas de Hacienda, ya porque la operación se efectúe por lugares que no estén legalmente habilitados para el efecto, o porque se haga clandestinamente por puntos habilitados; o bien, por introducir, o extraer mercancías por lugares, en horas y en circunstancias, o mediante medios no permitidos. Consecuentemente, tampoco violó los artículos 568 del Código de Procedimientos Penales, y 11 del Código Penal, ya que si condenó a los recurrentes, es porque estimó que existe plena prueba de la comisión del delito y de que los procesados lo cometieron; y como ya se indicó, los hechos ejecutados por ellos, caracterizan plenamente la infracción delictiva de que se les declara responsables. Los artículos 728 y 729 del Código de Procedimientos Penales, tampoco fueron violados, supuesto que, como ya se relacionó, a juicio del Tribunal Sentenciador, existe el fundamento necesario para infligir la pena que impuso a los procesados. En cuanto a los artículos 68 del Código Penal, 566 y 571 del Código de Procedimientos Penales citados, el primero como infringido y los dos últimos como no aplicados, no procede su examen, porque no guardan ninguna relación con el motivo del recurso, ya que el primero

se refiere a que a los autores de un delito o falta se impondrá la pena que determina la ley, los dos últimos a la carga de la prueba y cuando debe estimarse ésta como plena; y el recurso no se introdujo con referencia al caso de que la pena impuesta no sea la que corresponde a la calificación aceptada del hecho justificable, ni al de error en la apreciación de las pruebas; y el examen de los artículos 609, 730 y 573 del Código de Procedimientos Penales, 22 del Código Penal, tampoco es procedente porque todos ellos contienen varios incisos, sin que los recurrentes hayan indicado cuál o cuáles de tales incisos consideran infringidos para que esta Corte estuviera en la posibilidad de concretar su estudio, como lo requiere el numeral 6o. del artículo 682 del Código de Procedimientos Penales, reformado por el artículo 3o. del Decreto 487 del Congreso; por esa misma razón, tampoco es dable el examen del Decreto 1015 del Congreso, que contiene varios artículos.

—III—

CONSIDERANDO:

En cuanto respecta al reo Celso de Jesús Pineda Soto, se señalan como violados los artículos 587, 589 y 601 del Código de Procedimientos Penales, que se refieren a las presunciones y modo de apreciarlas como medios probatorios; pero es necesario repetir que, no invocándose como motivo del recurso error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas al Tribunal de Casación no le es dable hacer el análisis comparativo de esas leyes para determinar si fueron o no infringidas, ya que ese análisis sólo puede hacerse en relación con el motivo del recurso, como ya se ha declarado repetidamente por esta misma Corte. Igual cosa ocurre con el artículo 74 del Código Penal, que en esta misma parte del recurso se cita, porque en él se señala la pena que corresponde a los encubridores y el motivo invocado no es el de que la pena impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto al hecho justificable. Por último, los artículos 28 y 32 del Código Penal, contienen varios incisos, sin que el recurrente haya precisado él o los que considera infringidos, por lo que tampoco es posible su examen.

POR TANTO:

La Corte, con fundamento en lo considerado leyes citadas y lo que preceptúan los artículos 13, 222, 223 y 232 del Decreto Gubernativo 1862; 690 y 694 del Código de Procedimientos Penales, declara: IMPROCEDENTE el re-

curso e impone a los recurrentes la pena adicional de quince días de prisión simple, conmutable a razón de diez centavos de quetzal por día. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes. (Penencia del Magistrado Arnoldo Reyes Morales).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Carlos Arias Ariza. — Ante mí: Juan Fernández C.—

CRIMINAL

Contra Jorge Luis González Barrios y compañeros por el delito de Asesinato con ocasión de robo.

DOCTRINA: La compensación prescrita por el artículo 80 del Código Penal, cuando en la comisión de un delito concurren circunstancias atenuantes y agravantes, no excluye el caso de que la pena a imponer sea la de muerte.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 15 de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recursos de casación y con sus antecedentes se examina la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, el diecinueve de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, en el proceso que por el delito de HOMICIDIO CON OCASION DE ROBO se siguió en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Quezaltenango, contra JORGE LUIS GONZALEZ BARRIOS, Pedro Orozco Bravo, Oswaldo Teófilo de León Soto y Arturo López Valdés;

RESULTANDO:

Que el veintidós de Junio de mil novecientos cincuenta y dos, a las veintidós horas y por parte que le diera el Guardia Civil, Francisco Samayoa Archila, el Juzgado Primero de Paz de la ciudad de Quezaltenango dictó "auto cabeza de proceso", mandando abrir el que correspondía a la denuncia hecha. Examinado Samayoa Archila dijo que ratificaba el parte dado y agregó que, cumpliendo órdenes de su jefe, Capitán Porfirio del Cid Cruz, había acudido al Juez que lo examinaba para informarlo de que, al final de la Avenida Barrillas de aquella ciudad, se había cometido un delito, por lo que era indispensable la presen-

cia de la autoridad en el lugar indicado, para establecer lo que hubiera de cierto, pero que a él no le constaba nada respecto del hecho denunciado.

Constituido el Juez de Paz referido en la casa número treinta y dos del final de la Avenida "Barillas", debidamente asociado y estando presentes el Jefe departamental de la Guardia Civil, con su secretario, describió la pieza que queda al norte del zaguán y a continuación examinó a Pablo Rojas de León, quien dijo: que ese día, como a las veintiuna horas y treinta minutos, llegando de la tienda que tiene en el centro de la ciudad, donde estuvo desde las seis de la mañana, y querer entrar a acostarse al cuarto que ocupaba en compañía de su hermano José de León Díaz, se encontró con que la puerta estaba cerrada con tranca, pero al tocar y llamar sólo oyó una voz débil que le decía: "No se puede, estoy enfermo, no hay llave", a consecuencia de lo cual entró por el zaguán, haciéndose ayudar de José Domingo Tello, que vive en la misma casa; que al entrar a la pieza donde da su declaración, por la puerta de vidrios que da al sur, oyó que en ese momento salió por la puerta de la calle una persona a quien no pudieron identificar, dándose cuenta también que, al pie de su cama, yacía muerto su hermano José de León Díaz; que al salir a la calle, la persona que les antecedió había desaparecido, dejando tirada una gorra que entregaba para que se agregara a las diligencias; que dieron parte a la Guardia Civil y permanecieron en el lugar hasta que llegó su interrogante, no pudiendo decir quién dió muerte a su hermano, a quien vió por última vez cuando salió ese mismo día por la mañana. Examinado José Domingo Tello dijo que ocupaba la pieza situada al sur del zaguán, de la casa donde se practicó la diligencia que se detalla; se expresó en los mismos términos que Pablo Rojas de León y agrega que él fué a pedirle al Doctor Chacón que diera parte a la Guardia Civil, por súplica que le hizo Rojas de León; que nada oyó desde su pieza sobre lo que le ocurriera a José de León Díaz. Al describir el cadáver de éste, el Juez dice que lo encontró atado con una corbata vieja a la pata de la cama que se dijo ser de Pablo Rojas de León, tenía la cabeza y tórax inmersos en su propia sangre, boca abajo y con quince machetazos y una lesión más, punzo-cortante; que los muebles están sin alteración respecto a sus lugares, pero un colchón está roto y uno de los armarios abierto, con los objetos que contiene en desorden, como si se hubiera estado buscando algo. A continuación aparece examinado el menor Carlos Alvarez, quien manifestó haber visto,

hacia como media hora, que un hombre salía corriendo de la casa donde ocurrió el hecho, hacia el norte, sin hacer ruido al correr, dejando botada la gorra a que ya se hizo referencia y doblando en la primera esquina con dirección al Este, sin haberlo reconocido. El Juez inspeccionante recogió un machete que encontró en el lugar, dejó sellada la casa y dió por terminada su diligencia, para abrirla nuevamente el día veintitrés del propio mes y año, en que fué a ver si lograba alguna huella o sospecha que diera luz sobre el caso investigado, constatando únicamente que en la casa vivían además de José Domingo Tello López la señora Zoila Maldonado de Tello, Enrique López, David Herrera y Rubén Darío; aprovechando la presencia del Juez, Pablo Rojas de León sacó ropa de un armario para poder vestir al occiso, haciendo constar antes que no se encontraba una cajita con alhajas y dinero que aseguró tenía su hermano en aquel armario.

Nuevamente examinado Pablo Rojas de León, repitió lo antes dicho, con ligeras variantes, agregando que no sabía que su hermano tuviera enemigos, no tomaba ni fumaba, era soltero y no supo que tuviera relaciones con alguna mujer; que le contó que quería comprar una casa que le vendían por trescientos quetzales y sabía que tenía sus ahorros, pero no supo a cuanto ascendían; que no tenía sospechas contra ninguna persona, y que al dar muerte a su hermano le habían robado al declarante tres anillos de oro que estimaba en veinticinco quetzales y se constituía acusador del que resultara culpable. Al volverse a examinar a José Domingo Tello también repitió lo antes dicho y agregó que el día de autos se había ido temprano a San Marcos, al "Agua Tibia", regresando como a las dieciocho horas y media, acostándose por haber regresado cansado; que después llamó a su puerta Rojas de León y sucedió lo ya dicho anteriormente; que no conoció mujer al muerto, quien no tomaba y cuando hacía sencillo sacaba una cartera con dinero; que lo visitaba un señor que le dicen "Tuno", de apellido Izás y otro llamado "Pilo", cuyo apellido ignora; que alguna vez le contó que las personas a quienes les daba dinero le entregaban alhajas en prenda, sin constarle nada más sobre el asunto.

Examinado David Herrera López, dijo que el día de autos vió por la mañana al occiso, porque llegó a su sastrería a recoger un vestido que le había aplanchado; que después de almuerzo se acostó un rato y como a las dieciséis horas y media salió para juntarse con su novia con quien anduvo paseando por las calles y finalmente la fué a dejar al Hospital

donde ella vive y él trabaja, regresando a su cuarto como a las veintidós horas y treinta minutos, donde encontró la noticia de que "habían matado a don Chepe"; que no sabía si el occiso tenía más dinero del que se le veía cuando sacaba su cartera café, si no se equivocaba, y nada más sabía sobre el particular. Enrique Abelardo López Mérida declaró: que vivía en la casa donde ocurrió el hecho investigado y que el día de autos se había ido con Rubén Darío Rojas para San Juan Ostuncalco, de donde regresaron a eso de las quince horas y treinta minutos, viendo en ese momento al ahora fallecido, en la puerta de su sastrería; que habiendo llegado Roberto Narciso López jugaron naipes y después salieron para el teatro de donde regresó como a las once y media de la noche, encontrándose con que los ladrones habían matado a José de León Díaz; que anteriormente éste le había prestado pequeñas cantidades de dinero, pero en la fecha de su declaración ya no le debía.

En ese estado se pasaron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia respectivo, con los objetos recogidos el fallecido, el machete y una pieza de hierro que el Juez de Paz encontró en la casa donde ocurrió el hecho.

RESULTANDO:

El Juez de Primera Instancia, se constituyó también en la casa del suceso, y allí examinó nuevamente a Enrique Abelardo López Mérida, quien dijo lo mismo que ya había declarado ante el Juez de Paz, agregando que las manchas de sangre que aparecían en su cuarto eran viejas, procedentes de una lesión que se había producido con un formón hacía como un mes; que lo más que llegó a prestarle el muerto eran quince quetzales; que actualmente le debe diez quetzales Roberto Narciso López, dinero que le dió José de León Díaz, por su medio; que antes hubo dos sirvientes en la casa que llevaban los nombres de Coca y Cándida sin saber sus apellidos; que en una de las camas que tiene llegaron a dormir las señoritas Elisabeth Mérida y Adolfin N., la noche del veinticuatro de aquel mes, viviendo él con su mujer Zoila Maldonado de López, sus hijos y su cuñada Alba Cristina Maldonado.

Examinada Zoila Maldonado de López dijo ser casada con Enrique Abelardo López Mérida, quien le contó lo de la muerte de José de León Díaz, al día siguiente de ocurrida; que el domingo por la mañana vió al occiso con una camisa celeste, zapatos cafés, sin corbata, porque nunca la usaba, no recordando el pantalón; que la noche del suceso ella se acostó a las ocho habiéndose dado cuenta que José Domingo Tello estaba oyendo por radio, el

programa "Carlos Lacroa"; que la mancha de sangre que está debajo de la cama procede de una herida que su marido se dió con un formón, de la cual lo curaron las enfermeras Evilia Mérida Villatoro y Elena Salomé Herrera. Relata lo del viaje de su esposo, pero en vez de decir que fué a Ostuncalco dice que fué a Olinztepeque, de donde regresó entre dos y tres de la tarde; que por la noche llegaron Rosario Herrera y Evilia Mérida Villatoro y por la tarde de ese día vió la última vez a de León Díaz conversando con un muchacho moreno, calzado de suela de cuero, sin sombrero y con chumpa café de cuero, que podría reconocer si se le pusiera a la vista; que desocuparon el cuarto donde duerme porque supusieron que iban a trasladar a la casa el cadáver del fallecido.

Nuevamente examinados José Domingo Tello y Pablo Rojas, ratificaron sus anteriores declaraciones. Habiéndose reconstruido el hecho a presencia del Juez de Primera Instancia, sólo se pudo obtener, como detalle distinto de los antes recogidos, el que Rojas dijera que la voz que oyó, cuando llegó de la calle, es igual a la de José Domingo Tello.

RESULTANDO:

Puestos a disposición del Tribunal de primer grado, Roberto Regino Peláez Ralac y Carlos Felipe Ramírez Maldonado, capturados por la Guardia Civil, atendiendo a lo dicho en un anónimo, cuya copia corre agregada a folio veintiséis de la primera pieza del proceso, fueron indagados y puestos en libertad por no haber mérito para prolongar su detención.

Examinado Rubén Darío Rojas se expresó en igual forma que Enrique Abelardo López, sobre el viaje a San Juan Ostuncalco, su regreso y permanencia en el cine "Roma", a la hora de autos. José María Alfaro Mijangos dijo: que estando en su taller de carpintería había visto pasar algunos individuos desconocidos, el día del suceso, como a las diecinueve horas, y uno de ellos quiso que le comprara un machete que no vió, pero que no puede reconocer a dicho individuo porque ya era casi de noche cuando llegó a su taller. Evilia Mérida Villatoro y Rosario Herrera Cárdenas, enfermeras del Hospital General de Occidente, dijeron ser cierto que habían llegado a la casa donde murió José de León Díaz, el día del suceso por la tarde y después de estar como media hora conversando en el cuarto de José Domingo Tello López, oyendo radio, al mismo tiempo se retiraron sin haber notado nada anormal y viendo a Enrique Abelardo López, con su niño entre los brazos, conversando con

otro señor músico, en el zaguán de la casa. Evilla Mérida Villatoro agregó que hacía como quince días que había curado a Enrique Abelardo López, en esa misma casa, por haberse herido cerca del dedo pulgar de la mano derecha, de donde le salía mucha sangre.

Ricarda Mendoza Oroxón dijo ser cierto que ella le llevaba el almuerzo al occiso, pues un sólo tiempo hacía en el día; que desde el jueves diecinueve del mes y año en referencia no veía a León Díaz, porque habiéndole "llevado unos tamales del Corazón de Jesús", que era donde estaba su hermano Pablo, le dijo que se los iría comiendo uno cada día y que por esa razón esperaba que le llevara el almuerzo hasta el veintitrés de ese mes; que el jueves referido ella pasó a las diez horas a recoger del occiso los veinte centavos que le daba para su almuerzo, pues nunca le quedó debiendo; que antes le había dicho que estaba mal del estómago por una cólera que le habían dado, pero no le dijo quién era ese que le había dado tal cólera; "que en la semana de la ascensión fué cuando vió..." a Porfirio Macario, (Pilo) en la sastrería del muerto, pero que no le extrañó porque cuando había trabajado "Pilo" iba allí. Aristides Villagrán Sigüenza, después de relatar la permanencia de Pablo Rojas de León en su tienda, en la misa de cinco y en Cantel, a donde fueron a una fiesta para la que estaban invitados, dice que del hecho en pesquisa no le consta nada. Vuelto a examinar Pablo Rojas de León, ratificó sus anteriores declaraciones, dice que vestido llevaba puesto el día del hecho y que la gorra del supuesto asesino de su hermano la recogió José Domingo Tello López. Alberto Flavio Axt García, dijo ser cierto que Pablo Rojas de León llegó a su casa, sita en Cantel, el veintidós de Junio de aquel año, atendiendo invitación que le hizo por ser su cumpleaños y se vino como a las quince horas; que de la muerte de José de León Díaz nada sabe.

RESULTANDO:

Pedida la cooperación del Jefe de la Guardia Judicial y enviadas al laboratorio respectivo las muestras de sangre y pelo recogidos, el Jefe de la Guardia Civil departamental de Quezaltenango, con fecha dos de Julio de aquél mismo año, puso a disposición del Juez de Primera Instancia respectivo a Jorge Luis González Barrios, alias "El Moreno" y a Manuel Ismael Quijivix Nimatuj; al primero porque Francisca Argentina Marroquín y José Alberto Díaz lo habían visto minutos antes del hecho en la casa del occiso y al segundo porque el veintinueve de Junio, en estado de ebriedad, había dicho que él había matado a

ese hijo de la gran p... y que sólo en la cabeza le había dado"; que al localizar al primero y encontrarle un pantalón de lona azul no había podido dar explicación de las manchas de sangre que presentaba, aunque ya estaban lavadas.

Nuevamente constituido el Juez de la causa en la casa del hecho hizo constar lo que se encontraba en la cómoda o armario del occiso y lo recogió para custodiarlo en el Tribunal, no habiendo podido establecer huellas que sirvieran a la investigación.

Indagados Jorge Luis González Barrios y Manuel Ismael Quijivix Nimatuj, negaron ser culpables del hecho por el cual se les examinó, no obstante lo cual, con fecha cinco de Julio de aquel mismo año, se les redujo a prisión por el delito de asesinato, mandándose las prendas recogidas al primero al Gabinete de Identificación.

Examinada Francisca Argentina Marroquín dijo ser cierto que ella había pasado el día veintidós de Junio de aquel año frente a la casa de José de León Díaz, como a eso de las dieciocho horas y quince minutos y allí se le cayó su niña, por lo que se dió cuenta de que, en la puerta del cuarto donde ocurrió la muerte de León Díaz, estaba un hombre, para ella desconocido, con la mano puesta en la puerta, vistiendo zapatos cafés suela de goma, pantalón de lona azul volteada, camisa celeste con cuello sport y una gorra de kaki con visera negra en la mano, sin saco; que al verla a ella tocó la puerta y salió un señor limpiándose las manos con una toalla o un trapo color rosado pálido; que al sujeto descrito lo vió muy sospechoso, por lo que pensó que él debía tener algo que ver con el crimen, cuando supo de éste; que adelante de ella iban su primo José Alberto Barrios Díaz y la señora de éste, Julia Cifuentes, como a unos diez metros más o menos; que indignada por lo horrendo del hecho cometido prometió a la Guardia Civil ayudarle a descubrir al culpable y así se fué a la casa de aquel hombre desconocido para asegurarse si él era el mismo a quien había visto el día de autos, frente a la casa del occiso, pues por la señora de su primo José Alberto Barrios Díaz, supo donde vivía; efectivamente pudo comprobar que se trataba del mismo y que al verla se puso muy nervioso así como la mamá que salió a atenderla, hasta comprobar que le temblaban las mandíbulas al hablarle; que la gorra recogida es de Oswaldo de León, alias "El Chompipón" a quien se la vió puesta el sábado veintiuno, en la fiesta de Olinstepeque, en donde andaba juntamente con el desconocido que vió frente a la casa del muerto, el día del hecho. Al ponerse a la vista el pantalón y gorra de au-

tos los reconoció como los mismos que tenía el individuo a que se ha referido en su declaración. Julia Cifuentes dijo lo mismo que la anterior, expresando que no vió ese día a Oswaldo de León, pero que sí lo conoce. Vidaura Casimira de León dijo: que es novia de Jorge Luis González Barrios, quien llegó por ella el domingo veintidós de Junio, como a las nueve de la mañana y se la llevó a su casa donde estuvieron todo el día; que al salir como a las tres de la tarde, se encontraron con Oswaldo de León y se fueron a tomar dos octavos a la cantina que queda cerca del molino de nixtamal, volviendo a la casa de González Barrios, de donde salieron nuevamente como a las diecisiete horas y treinta minutos, yéndose a la cantina "Monterrey", regresando otra vez a la casa, para salir a las veinte horas y juntarse en la esquina con un individuo llamado Pedro, que vive cerca de donde don Hugo Fleismann, yéndose a tomar con Oswaldo de León y volviendo como a los diez minutos desde cuya hora no salió sino para ir a dejar a su casa, en donde se quedó a dormir, levantándose hasta las seis del día siguiente; que el día de autos su novio usó un sweater gris que dejó botado en uno de los viajes que hizo con ella al cerro "Tecún Umán", pues el saco azul que tenía, sólo lo sacó para empeñarlo, juntamente con su capa, por los tragos que se tomó en la cantina "Monterrey"; que llevaba camisa blanca, pantalón aplomado y zapatos negros, cambiándose éstos, en la noche, por unos cafés de suela de goma, y sin sombrero; que Oswaldo de León, cuando se juntaron para ir a tomarse los dos octavos antes indicados, vestía pantalón de lona azul volteada, saco azul con rayas pequeñas blancas, y también sin sombrero, pero no se fijó en la camisa ni en los zapatos.

Francisca Argentina Marroquín, Julia Cifuentes y el menor Carlos Alvarez, reconocieron en rueda de presos a Jorge Luis González Barrios como la persona que vieron el día de autos por la casa del occiso, y Estéfana Mata Cifuentes, dueña de la tienda "El Palmar", dijo que el día del suceso había despachado en su cantina situada cerca del Río Seco, dos veces el trago que le pidieron Jorge Luis González Barrios y Oswaldo de León; que más tarde llegaron González Barrios y un desconocido a tomarse otro trago y su hija les había despachado un octavo de aguardiente, que el referido González Barrios garantizó con un saco azul y una capa amarilla, habiéndole dicho su hija que estaban muy nerviosos cuando llegaron a tomarse este octavo; que las primeras veces llegaba González sin sombrero y sin saco, con un pantalón azul desteñido y una camisa blanca, sin

poder decir qué zapatos llevaba, porque éstos le quedaban cubiertos por el mostrador.

Rendido el informe médico de la autopsia practicada en el cadáver de José de León Díaz, se estableció que el cuerpo de éste había sufrido dieciséis machetazos, en su mayor parte en la cabeza y que a consecuencia de estas lesiones y su hemorragia consecutiva había fallecido.

RESULTANDO:

Con fecha ocho de Julio de aquel año, el Jefe de la Estación Central de la Guardia Civil de Quezaltenango, puso a disposición del Juez de la causa, al individuo Pedro Orozco, de diecisiete años de edad, informándole que lo hacía así porque el detenido tenía conocimiento de la muerte de José de León Díaz, pues al declarar en su Despacho había confesado haber acompañado a Jorge Luis González Barrios a la comisión del hecho, pero por miedo dice que lo dejó y se fué a parar arriba de la casa del suceso, en la misma Avenida Barillas, desde donde vió cuando llegó un señor con unos vestidos en la mano y que en seguida salió González Barrios corriendo de la casa del muerto. Examinado Pedro Orozco Bravo dijo: que el jueves diecinueve de Junio de aquel año, Jorge Luis González Barrios le había dicho "que si quería ser su amigo para ir a buscar donde había pisto y que sólo lo que tenía que hacer el declarante era cuidar si no llegaba alguna persona y que según lo que hubiera que se repartían entre los dos...", contestándole el declarante que no porque no estaba acostumbrado a esas cosas; que habiéndose juntado nuevamente el sábado veintiuno del mismo mes, por la mañana, González Barrios lo citó para su casa, a donde llegó él a las siete y media de la noche y en esa ocasión le explicó que se trataba de ir a la sastrería de "...don Chepe..." quién tenía dinero, le darían un golpe con un fierro y tomarían la mitad de lo que encontraran cada uno; que para ese efecto llegara al día siguiente, domingo veintidós, a las seis y media de la tarde, a ese mismo lugar, es decir a su casa, para salir de allí a la sastrería, que no habiendo cumplido él con llegar, González Barrios fué a la casa donde él trabaja y estuvo silbándolo, pero como no salió tocó la puerta y salió a recibirlo doña Hortensia Bethancourt a quien le dijo que llevaba una razón de su hermano Nazario Orozco para él, por lo que dicha señora lo llamó y así fué como logró que saliera; que al negarse a ir a donde le había dicho el sábado, González Barrios le dijo: "yo te doy un saco para que no tengas frío y yo me encargo de lo demás", con lo cual se dirigieron a la casa

de éste y después de esperarlo en la esquina salió con un saco obscuro listado de blanco y le dijo que se lo pusiera, dándole también un hierro pesado que estaba bien envuelto, que le indicó serviría para darle el golpe a de León Díaz en la cabeza, diciéndole "hay necesidad de que nos tomemos un guarito antes de ir a la sastrería, pero no tengo pisto, pero si tengo una capa en la casa y la fué a traer...": que después de ésto se dirigieron a la cantina que está cerca de un molino de nixtamal en la misma calle de la sastrería y allí se tomaron medio octavo, cada uno, del que pidió González Barrios, dejando empeñados el saco y la capa que llevaba; que después se fueron a la sastrería y al tocar salió "don Chepe" y le dijo González Barrios que Orozco Bravo iba para que le tomara medida de un pantalón y por eso entraron a invitación del sastre, quien le tomó la medida, pero como mientras duró ese trabajo no tuvo tiempo González Barrios de darle el golpe al sastre, le dijo que él también deseaba que le hiciera una chumpa, procediendo entonces el sastre a tomarle medida y cuando apuntaba éstas de León Díaz, González Barrios se le puso atrás, sacó un machete que ni filo tenía y le dió el primer machetazo a aquél, quien cayó al suelo diciéndole que no lo matara; que entonces González Barrios le dió dos machetazos más en la cara, momento que aprovechó Orozco Bravo para salir huyendo hasta pararse arriba de la casa, en media calle, cerca de una pila que está como a dos cuadras del lugar del hecho, por cuya razón vió cuando llegó un señor que llevaba, según cree, unos vestidos en las manos y tocó la puerta, pero como no le abrieron a pesar de haber llamado fuerte, se dirigió al zaguán por donde sí entró y en seguida salió huyendo González Barrios para la dirección en que se encontraba él, pero cruzando en la primera cuadra hacia el este y después hacia el norte para salir como a una cuadra del exponente, al rumbo este, con lo cual él se fué a comer y después se puso a trabajar capas, que es su ocupación; que cuando iban llegando a la sastrería vieron unos tres hombres platicando en el zaguán de la casa del hecho, por lo que él no quería seguir, pero González Barrios le dijo que caminara que esos no iban a oír nada; que como aquellos señores se fueron del zaguán, ellos llegaron a la puerta de la sastrería y ocurrió lo que queda explicado; que el hierro pesado que llevó no lo ocuparon, pues sólo con el machete le dió González Barrios a de León Díaz; que el martes veinticuatro del mes en referencia se encontró con González Barrios que iba con su novia y al verlo le dijo: "idiay, qué pura m... fuiste vos, por qué te corriste", agregando

"que sólo le había hecho la mala obra al señor, porque todo lo había registrado, y no había encontrado nada de dinero" y que no contara nada a ninguno; que ese mismo día como a las diecinueve horas lo volvió a ver y entonces le contó que el sweater que tenía puesto cuando fueron a la casa del sastre lo había dejado olvidado en el "Baúl", al ir a pasear con su novia; que el día del hecho había imitado la voz del muerto para no abrir la puerta y que antes ya le había tomado medidas a él de León Díaz. Constituido el Juez en el lugar del suceso con el detenido Orozco Bravo, reprodujeron el hecho con todos sus detalles y se pudo constatar la veracidad y exactitud de lo expuesto por éste. La gorra encontrada fué dejada de propósito por González Barrios en la puerta de la sastrería, antes de entrar en ella.

Ampliada la indagatoria de Jorge Luis González Barrios confesó su delito, de acuerdo con lo declarado por Orozco Bravo y agregó: que el crimen había sido planeado por Arturo el "Pachuco", Oswaldo de León y él; que eso lo habían hablado en una procesión donde también iba Pedro, de quien ignoraba el apellido; que a la hora del hecho no llegó Oswaldo de León, por haberse emborrachado, ni tampoco el "Pachuco"; que quien le había dado los primeros machetazos al muerto había sido Pedro, pero después salió huyendo y otros machetazos se los dió él; que amarró del cuello, bien apretado a José de León Díaz, para que muriera pronto y lo dejó atado con una corbata para que no se fuera a levantar; que él registró el colchón de pedazos de trapo porque el "Pachuco", que ha estado varias veces preso, les aconsejó así y no encontró dinero, pero en el armario que estaba abierto recogió tres anillos, los que se llevó; que Pedro llevaba un lazo porque en el plan estaba convenido en que colgarían a "don Chepe", estando en lo demás de acuerdo con lo declarado por Pedro Orozco Bravo. Indagado éste ratificó su declaración prestada con anterioridad y repitió durante su interrogatorio los extremos antes referidos, agregando que González Barrios le dijo que ya tenía bien planeado el hecho, que una vez se reunieron con Oswaldo de León en la Semana Santa, pero no estaba el "Pachuco"; que conoce a Oswaldo de León y al "Pachuco", pero desde que supo que eran rateros ya no se junta con ellos; y era cierto que llevaba un lazo para colgar al sastre, pero al verlo que hizo González Barrios con él le dió miedo y salió huyendo, porque no era así como él creía que se iba a proceder. Reconstruido el hecho con la presencia de los detenidos Jorge Luis González Barrios y Pedro Orozco Bravo se constataron los detalles del hecho, des-

de que aquél fué a llamar a éste, cuando estuvieron en la casa de González Barrios haciendo el nudo corredizo del lazo con que se ahorcaría a de León Díaz, y finalmente la comisión del delito, levantándose un plano de los lugares relacionados con el mismo. Durante la reconstrucción del hecho, González Barrios y Orozco Bravo tuvieron algunas contradicciones, poniéndose de acuerdo, finalmente, sobre lo principal. Examinado el Cirujano Dentista Joaquín Estrada Chacón, dijo ser cierto que él había telefonado a la Guardia Civil informando lo que le dijera José Domingo Tello López, acerca del occiso, pero respecto al crimen nada le consta.

Se dictó auto de prisión por asesinato contra Pedro Orozco Bravo, se libraron órdenes de captura contra Oswaldo de León y Arturo N., alias "El Pachuco" y se reformó el auto de prisión dictada a Manuel Ismael Quijivix Nimatuj, dejándolo en libertad. A folio ciento cuarenta de la primera pieza del proceso aparece certificación de la partida de defunción de José de León Díaz.

Examinado José Alberto Barrios Díaz dijo: ser cierto que el veintidós de Junio en mención, había visto, en la puerta de la sotrería de José de León Díaz, a Jorge Luis González Barrios después de las seis de la tarde; que lo vió muy sospechoso y que él iba con Francisca Argentina Marroquín y su esposa Julia Cifuentes, viniendo de donde su suegra; que González Barrios no tenía saco, llevaba puesta una gorra de kaki, que parecía no era de su medida porque se le veía muy apretada, pantalón de lona azul volteada y camisa celeste de seda, sin haberse fijado en los zapatos, siendo aquéllas las mismas prendas de vestir que se le pusieron a la vista.

María Reyna Rojas Mata, dijo que el día veintidós de Junio había llegado a la cantina de su mamá Jorge Luis González Barrios, juntamente con otro desconocido, que identificó cuando se reconstruyó el hecho, a tomarse un octavo pedido por aquél, quien dejó en garantía una capa y su saco; que por referencia de su señora madre sabe que por la tarde de ese día éste había llegado con Oswaldo de León a ingerir aguardiente, acompañados de una muchacha a quien ella no conoce.

Puesto a disposición del Tribunal respectivo, Oswaldo de León Soto, fué indagado y dijo haber estado jugando foot ball, en el antiguo campo "Belga", el veintidós de Junio por la tarde, de donde se retiró para irse a la cantina "El Consuelo" y allí se embriagó; que después de levantarlo de la acera, donde se quedó tirado, lo fueron a dejar a su casa y negó todo lo demás que se le preguntó.

Se dictó auto de prisión por asesinato contra de León Soto, se mandaron practicar los careos necesarios, evacuar las citas pendientes y se nombró a Magín Capdevila para que valuara los anillos robados.

Olimpia Arango de Sigüenza dijo: que era cierto que el día domingo veintidós de Junio, por la tarde, había estado llegando a tomar a su cantina Oswaldo de León Soto y finalmente se había retirado con otro que no le sabe el nombre. Héctor Sac Alonzo dice que es cierto que él encontró a Oswaldo de León Soto en la cantina de Olimpia Arango y, después de hablar cosas de bolos, lo fué a dejar a su casa como a las veinte horas y media o ruego menos cuarto del día tantas veces referido.

Capturado Arturo López Valdés, alias "El Pachuco", de dieciséis años de edad, fué indagado y dijo: que el día de autos se encontraba en Olinstepeque, con Ricardo Escobar, desde como las catorce horas y regresó hasta el lunes veintitrés, como a la una de ese día; que de extrañío lo que le ocurrió es que un hombre, de quien supo después que se nombraba José, le propinó una bofetada sobre la nariz que le produjo hemorragia; que no conoce a Oswaldo de León Soto, Pedro Orozco Bravo, ni a Jorge Luis González Barrios, negando todo lo demás.

El Jefe de la Estación Central de la Guardia Civil dió cuenta con dos papeles en que se le dice a López Valdés cómo debe declarar.

Carlos Godínez Villagrán, nada declara sobre el hecho en pesquisa. Juana López Mérida dice que recibió de José de León Díaz, en calidad de préstamo, la suma de sesenta y cinco quetzales pero se los canceló al día siguiente. Ismelda Ruano manifestó haber estado en la fiesta de Olinstepeque el veintidós de Junio y que cuando llegó por la noche a su cuarto encontró a Jorge Luis González Barrios durmiendo con su novia Vidaura de León, que es su compañera: Jorge Luis González Barrios reconoció en rueda de presos a Arturo López Valdés, pero al carearse dijo que todo lo dicho por él sobre López Valdés se debía a referencias que le hiciera Oswaldo de León Soto y López Valdés se sostuvo sobre no conocer a González Barrios. Rubén López Eusebio dice ser él quien, como pasador de la detención: donde está López Valdés, le pasó el papel que se le pone a la vista, donde se le aconseja cómo debe declarar. Careados Jorge Luis González Barrios y Oswaldo de León Soto no se pusieron de acuerdo. Se dictó auto de prisión también por robo contra los procesados.

Hortensia Mazariegos de Bethancourt dice: que es cierto que González Barrios llegó el día de autos, como a las seis y media de la tar-

de, por Pedro Orozco Bravo. Luis Javier Bethancourt Mazariegos se expresa igual que la anterior, agregando lo de los silbidos y demás detalles dados por Orozco Bravo, sobre la visita de González Barrios a su casa. Careados Oswaldo de León Soto y Pedro Orozco dijeron no ponerse de acuerdo, sosteniendo cada cual lo que antes había dicho, pero ya para terminarse la diligencia de León Soto dijo que, si antes había negado conocer a su careado y a Jorge Luis González Barrios, era porque creía que se le podía tener como cómplice del crimen; que sí era amigo de ellos, pero no les había dicho en la forma que debían matar a León Díaz; que a López Valdés, (Arturo), sólo de vista lo conocía y que el día del hecho no había estado con ellos.

Angel Roberto Narciso López no dió ningún dato que ayudara a la investigación.

Ampliada la indagatoria de Arturo López Valdés, reconoció como suyos los papeles recogidos por la Guardia Civil y careado con Pedro Orozco Bravo cada uno sostuvo su dicho.

La Guardia Civil departamental informó sobre antecedentes penales de Jorge Luis González Barrios, Oswaldo Teófilo de León Soto y Pedro Orozco Bravo, indicando además que de León Soto y González Barrios no trabajaban y andaban siempre juntos.

Magin Capdevila Alemany, en cumplimiento de su encargo valuó en treinta y cinco quetzales los tres anillos robados.

Elevada a plenario la causa, se proveyó de tutor específico a Pedro Orozco Bravo y Arturo López Valdés por ser menores y no apareciendo la partida de nacimiento del primero se le mandó calificar la edad, dejando sin efecto el nombramiento de tutor de Arturo López Valdés, por no ser necesario. El Jefe de la Guardia Civil dió parte que días después del asesinato de José de León Díaz, Vidaura de León, novia de Jorge Luis González Barrios, habían vendido un anillo fraccionado en varias partes, que la referida de León confesó haber recibido de González Barrios. Ampliada la indagatoria de éste dijo que no había entregado ese anillo a su novia sino que días después del hecho lo había dejado hecho pedazos, sobre una mesa del cuarto de su novia, pero que no se lo había entregado personalmente.

Formulada su confesión con cargos, después de ratificar sus últimas declaraciones, Jorge Luis González Barrios se conformó con haber planeado la muerte de José de León Díaz, desde la Semana Santa anterior al hecho, porque sabía que tenía dinero y quería apoderarse de él; que realizó lo planeado el veintidós de Ju-

nio de aquel año, en compañía de Pedro Orozco Bravo, pretextando que su víctima le confeccionara un pantalón a éste, dándole un machetazo en la región occipital y otros más después, atándolo fuertemente del cuello para terminarlo pronto y procediendo inmediatamente a registrar el colchón y un ropero, sacando de éste tres anillos, propiedad de Pablo Rojas de León. Agrega que también Pedro Orozco Bravo le dió machetazos al muerto y que no puede nombrar defensor.

Oswaldo Teófilo de León Soto y Arturo López Valdés no se conformaron con los cargos que les fueron formulados.

Pedro Orozco Bravo, en presencia de su tutor específico, ratificó sus primeras declaraciones prestadas y dijo que se conformaba en parte con los cargos hechos, que son los mismos formulados a González Barrios, pero con las salvedades siguientes: que no se premeditó ningún hecho; que González Barrios le dijo que únicamente iban a golpear al sastre para poderle robar, pero que no le habló de matarlo ni él lo había pensado o dispuesto así y por eso al primer machetazo se asustó y salió huyendo para no hacerse responsable; que él no alcanzó el machete a González Barrios ni era suya tal arma, no recibió o tomó cosa alguna del fallecido e ignora si González Barrios tomó o no dinero del muerto.

El Comandante de la Quinta Zona Militar informó que Jorge Luis González Barrios estuvo de alta en aquel Cuerpo dos años y dos meses, durante cuyo lapso subió y bajó dos veces, desde soldado de segunda clase hasta cabo, por su mal comportamiento, habiéndosele impuesto castigos disciplinarios por repetidas embriagueces.

De oficio les fueron nombrados sus respectivos defensores.

El Departamento de Estadística Judicial informó no haber antecedentes penales de Oswaldo Teófilo de León Soto y Orozco Bravo.

Roberto Escobar Díaz y Manuel Escobar Martínez, dijeron que era cierto lo dicho por Arturo López Valdés sobre que había estado en esta capital, en su casa, pero sólo dos días de los últimos de Febrero anterior, volviendo a fines de Mayo, a prestarle al primero dos quetzales para regresar a Quezaltenango por no encontrar trabajo en la capital.

El Departamento de Identificación de la Guardia Civil informó que las manchas del pantalón que tuvo para el efecto, localizadas en el ruedo de la pierna izquierda, sí son de sangre.

RESULTANDO:

Que advertido el Tribunal de la minoría de edad de Oswaldo Teófilo de León Soto enmendó el procedimiento nombrándole tutor específico y reponiendo lo actuado desde que se tomó confesión con cargos a éste sin tutor, no obstante lo cual las actuaciones quedaron con el mismo resultado antes obtenido. En informe sobre antecedentes de López Valdés, la policía dijo que éste había estado preso por robo en mil novecientos cincuenta. Luis Guillermo Mijangos sustituyó a Martínez Madrid como defensor de de León Soto.

RESULTANDO:

El defensor de Arturo López Valdés, con apoyo en dos certificaciones, extendidas por la Secretaría del Juzgado de Paz de Olintepeque y por la de la Penitenciaría Central, que demuestran su permanencia en este Centro y detención en aquellas cárceles, mientras se planeó y ejecutó la muerte de José de León Díaz, pidió la reforma del auto de prisión, pero el Tribunal se la negó.

Abierto a prueba el juicio se rindieron las declaraciones de José Gilberto Rodas de Paz y José Samuel Toscano, sobre honradez, dedicación al trabajo y buenos antecedentes de Oswaldo Teófilo de León. Aparece agregada una certificación de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Paz de la ciudad de Quezaltenango, contra Jorge Luis González Barrios, por tres faltas cometidas contra las personas en el interior de aquel Centro penal.

El día de la vista alegó el defensor de Jorge Luis González Barrios, haciendo una breve historia del proceso y de las declaraciones de su defendido hasta llegar a la confesión de éste, diciendo entre otras cosas: "Jorge Luis González Barrios es culpable, confesó su crimen y dió a la justicia la oportunidad de conocer los detalles de aquel hecho, que conmovió profundamente a la sociedad. Las sindicaciones que concurrieron antes de la confesión del procesado pudieron derivar una presunción, para condenar a Jorge Luis González Barrios,..." "...confesó su delito y por lo tanto debe estimarse ésta como una atenuante que modifique la pena que se le imponga, ya que si bien es cierto como lo dije antes, que hay una serie de circunstancias, de sindicaciones que establecen una presunción, también lo es, que sin esas circunstancias no hubiera podido establecerse la forma como se perpetró el crimen". Y, después de algunas consideraciones de orden social y moral, terminó pidiendo que en auto para mejor fallar se mandara examinar a su defendido, por médi-

cos psiquiatras, para establecer su estado mental, como antes lo había pedido, y que oportunamente se dictara la sentencia del caso, tomando en cuenta el resultado de dicho examen. El Tribunal resolviendo el memorial que contiene dicho alegato, dictó auto para mejor fallar, ordenando el reconocimiento pedido.

El defensor de Pedro Orozco Bravo alegó posteriormente aduciendo en su favor las atenuantes de confesión y menor edad.

Examinado psiquiátricamente Jorge Luis González Barrios se obtuvo el informe que en lo conducente dice: "...informo a Ud. que al momento actual Jorge Luis González Barrios no presenta manifestaciones de enfermedad mental. Exhibe un estado afectivo depresivo que en mi concepto está acorde a la situación vital que está concurriendo".

RESULTANDO:

Con los antecedentes expuestos y en fecha doce de Junio de mil novecientos cincuenta y tres, el Tribunal de primer grado dictó sentencia declarando a Jorge Luis González Barrios y Pedro Orozco Bravo, autores responsables del delito de homicidio con ocasión de robo, imponiendo, al primero la pena de veinte años de prisión correccional, incommutables, y al segundo, diez años de igual calidad, que debían extinguir en la Penitenciaría Central, más las accesorias de ley; y, absolvió a Oswaldo Teófilo de León Soto y Arturo López Valdés, de los cargos que se les formularon.

Por apelación que contra tal sentencia interpusieron Pablo Rojas de León, Pedro Orozco Bravo y el representante del Ministerio Público, pasó el juicio a la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, en donde, después de oír a las partes y correr la vista pública pedida por uno de ellos, se dictó la sentencia que se examina, en la que se confirma la de primer grado, con las modificaciones siguientes: "a) que la pena que corresponde a Jorge Luis González Barrios, es la de muerte, la que deberá verificarse dentro de las veinticuatro horas de haberse notificado la sentencia firme y para el caso de que la pena de muerte por recurso de gracia fuere computada a la inmediata inferior, ésta será incommutable;..." lo condena también a las accesorias; "b) que la pena que corresponde a Pedro Orozco Bravo es la de quince años de prisión correccional incommutables que con las demás regulaciones del fallo apelado deberá cumplir en la Penitenciaría Central"; y se manda a poner en inmediata libertad a los otros dos absueltos. Para hacer este pronunciamiento, la Sala sentenciadora dice: que las consideraciones hechas por

el Juez de primer grado, no sólo son fundadas y concluyentes sino también fundamentalmente legales, pero que "...del examen del proceso aparecen las circunstancias agravantes siguientes: a) alevosía,... b) premeditación...; c) haber ejecutado el hecho de noche..." y después de hacer una relación acerca de lo que estima que constituye cada una de dichas circunstancias, dice: "Establecida la existencia de tales elementos del delito que modifican no sólo la esencia del hecho delictuoso en sí, sino también en cuanto a sus consecuencias en lo que se refiere a la pena, cabe analizar el fallo de primera instancia en lo que se refiere a esta apreciación, el Juez sentenciador indica que no es posible la compensación de la atenuante de la premeditación y alevosía con la confesión del reo, por ser éstas integrantes del delito pesquisado y construir éstos, elementos del mismo y luego... aplica al reo la pena de veinte años de prisión correccional en virtud de la atenuante considerada;" "...que las agravantes de mérito no son inherentes al delito de homicidio con ocasión de robo y por consiguiente estimables independientemente de aquél, y por lo mismo apreciables para los efectos de la compensación, en su consecuencia este Tribunal sostiene el criterio de que la circunstancia atenuante de la confesión debe compensarse con las agravantes de la alevosía, premeditación y nocturnidad..., por lo que procede modificar el fallo apelado en el sentido de que la pena que corresponde a Jorge Luis González Barrios es la de muerte".

RESULTANDO:

Contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, el diecinueve de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, el Procurador de la misma y el defensor de Jorge Luis González Barrios, interpusieron recurso extraordinario de casación por violación de ley, en favor de dicho reo. El primero cita como violados el párrafo o inciso 8o. del artículo 45 del Código Penal, reformado por el artículo 3o. del Decreto 147 del Congreso y Decreto Gubernativo 2448; los artículos 23 incisos 1o. y 5o., 24, 67, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 299 incisos 1o. y 3o., 300 y 388 inciso 1o. del Código Penal; cita también el artículo 4o. del Decreto Legislativo 2550, que reforma el artículo 299 del Código Penal y, como fundamento de su recurso, los incisos 3o., 5o., y 6o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales. Alega que no hay compensación de circunstancias agravantes con atenuantes en el caso de que al reo le corresponda la pena de muerte, por cuya razón, a su juicio, el Tribunal sentenciador violó las leyes

citadas al hacer tal compensación. El segundo de los recurrentes cita como violados los artículos 22 inciso 9o., 45, 67 y 68 del Código Penal; y 570 del Código de Procedimientos Penales, fundando su petición en los artículos 674, 675 y 676 incisos 5o. y 6o. del Código de Procedimientos Penales, agregando que se reserva las razones fundamentales que tenía para estimar violados los artículos que cita en el mismo. Pero como no presentó ningún alegato posterior, el Tribunal no sabe cuáles sean tales razones.

El Procurador recurrente dice en su alegato: "La Sala sentenciadora, en su sentencia que recurre, admite la existencia de una atenuante: LA CONFESION: sin embargo, infringiendo la ley que cito, al aplicar la atenuante declina su relevancia reductiva e incurre en el gravísimo error de compensarla con las agravantes de alevosía, premeditación y nocturnidad, aplicando la pena de muerte, lo que es en lo absoluto ilógico y fué precisamente, lo que la ley trató de evitar..." "La ley, en el caso de esta reducción, cuando es necesario aplicar una atenuante, no dice que haya o no haya agravantes y silencia la cuestión porque inútil sería decirlo; lo que se trata es de colocar en mejor condición a quien confiesa, ante quien no confiesa, pues la ley tiene presente y los Tribunales deben tenerlo también, que la pena de muerte, es indivisible que correspondiendo pena de muerte, de no poder regularse las condenas como lo dice la ley, la atenuante sería inocua pues de existir se compensaría y de no existir, quedaría igual pena, total el mismo resultado: la muerte... pena que no admite compensación, fraccionamiento ni graduación alguna como no fuese recurriendo a la crueldad". Por sus otros argumentos, el recurrente deja ver que, a su entender, en el caso del asesinato siempre se compensarían las atenuantes con las agravantes existentes y por consiguiente sería inútil la concurrencia de aquéllas, porque la pena siempre quedaría igual, lo que estima injusto, desde su punto de vista.

Corridos los trámites de este recurso es procedente resolver; y,

CONSIDERANDO:

El defensor de Jorge Luis González Barrios funda su recurso en los incisos 5o. y 6o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales; es decir que a su entender, se han infringido, en la sentencia impugnada, los artículos 22 inciso 9o., 45, 67, 68 del Código Penal y el 570 del Código de Procedimientos Penales, porque en ella se cometió error de derecho en la calificación de los hechos que se

declararon probados en concepto de circunstancias agravadas, atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal, o se omitió considerarlas; o bien porque la pena impuesta no corresponde, según la ley, a la calificación aceptada respecto del hecho justiciable, de la participación en él de su defendido o de las circunstancias agravantes o atenuantes de su responsabilidad criminal.

La Sala sentenciadora, después de hacer el análisis de las circunstancias que tiene por probadas, conforme lo que aparece del proceso, declaró que dicho "...Tribunal sostiene el criterio de que la circunstancia atenuante de la confesión debe compensarse con las agravantes de la alevosía, premeditación, y nocturnidad,..." de acuerdo con lo cual finalmente dice que; a Jorge Luis González Barrios le corresponde la pena de muerte. Es decir que efectivamente se consideraron y tuvieron por probadas las circunstancias, atenuante de confesión y agravantes de premeditación, alevosía y nocturnidad, aplicando después la pena que corresponde según la ley, a la calificación aceptada respecto del hecho justiciable, por lo que el Tribunal sentenciador no violó los artículos 22 inciso 9o., 45, 67 y 68 del Código Penal y mucho menos el artículo 570 del Código de Procedimientos Penales, que no tiene relación con los casos de procedencia referidos, pues mientras éstos tienen aplicación *in-judicando* el artículo últimamente citado la tiene *in-procedendo*.

Es más, este Tribunal se ve en la imposibilidad de hacer otras consideraciones porque el recurrente no puntualizó los errores que a su juicio existen en el fallo impugnado y muchas veces se ha dicho por esta Corte que ella no puede suplir lo que las partes omiten, por la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación.

CONSIDERANDO:

El Procurador de la Sala sentenciadora impugna el fallo de aquel Tribunal con base en los casos de procedencia referidos en la consideración que antecede y en el del inciso tercero del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales; es decir: el recurrente estima que, además de haberse cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declararon probados, en concepto de circunstancias atenuantes y agravantes, y por eso la pena impuesta no corresponde con la que la ley señala, también se cometió error de derecho en la calificación del hecho cometido, pues aun cuando éste es constitutivo de delito, su naturaleza y circunstancias son diferentes de las que se le dan en la sentencia impugnada.

Argumentando en la forma indicada en los resultados de esta sentencia y tomando como base medular de su recurso que la pena de muerte, por indivisible, no admite compensación, fraccionamiento ni graduación alguna, asegura que el Tribunal sentenciador, al compensar la atenuante de confesión con las de alevosía y premeditación, violó los artículos 23 incisos 1o. y 5o., 24, 45 párrafo 8o., 67, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 299, circunstancias primera y tercera, (reformado este artículo por el 4o. del Decreto Legislativo número 2550), 300 y 388 inciso 1o., todos del Código Penal, así como el artículo 654 del Código de Procedimientos Penales, por no haberse atendido a su mandato; preceptos que se refieren a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, modo de aplicarlas, delito de homicidio, asesinato, homicidio con motivo u ocasión de robo y lo que puede hacer el Tribunal de apelación cuando conoce de un asunto como tal.

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, en su fallo contra Jorge Luis González Barrios, efectivamente compensó la atenuante de confesión con las agravantes de alevosía, premeditación y nocturnidad, pero para ello aceptó la calificación del hecho como la había asentado en su sentencia el Juez de primer grado; esto es, el delito cometido por el enjuiciado se calificó como HOMICIDIO CON OCASION DE ROBO, y agrega: "es indispensable comentar que este delito por su complejidad es indivisible y si bien se forma con dos acciones diversas que aisladamente constituyen tipos punibles distintos, ambos se resumen y confunden perdiendo su individualidad propia para originar. una tercera figura; lo mismo se comete cuando el agente concibió la idea de robar y matar, como si solamente habiendo pensado robar resuelve, en el instante de hacerlo, dar muerte a la víctima..." Por otra parte considera "...que los agentes utilizaron medios, modos y formas en la ejecución del hecho que tendieron directa y especialmente asegurarla sin riesgo para sus personas que procediera de la defensa que pudiera haber empleado el ofendido..." "...preparado con anterioridad al día de la realización del delito, la forma y modo en que debían de verificarlo y haber inquirido datos acerca de las posibilidades económicas del occiso;..." y "...Ejecutado el hecho de noche, ya que de conformidad con la naturaleza y accidentes del delito se infiere que los reos deliberadamente aprovecharon esta circunstancia..." Estimó que tales actos constituyen las agravantes de alevosía, premeditación y nocturnidad, llegando así a la conclusión de que..." las agravantes de mérito no

son inherentes al delito de *homicidio con ocasión de robo* y por consiguiente *estimables independientemente* de aquél, y por lo mismo apreciables *para los efectos de la compensación...* por lo que era procedente modificar el fallo"... en el sentido de que la pena que corresponde a Jorge Luis González es la de muerte..."

En el artículo 388 inciso primero del Código Penal, —para establecer la pena que debe imponerse a los culpables de robo con violencia o intimidación en las personas—, se estructuran delitos-tipo conjugando la lesión del bien jurídico propiedad con la que, con motivo u ocasión de ésta, se produzca en los otros bienes jurídicos constituidos por la vida y la integridad corporal, sin atender a la cuantía del menoscabo sufrido por la propiedad, sino al atentado contra la vida o integridad referidas, cometido con ocasión o motivo del robo. De manera que, al considerarlo así la Sala sentenciadora, y tener por probado tal delito, —homicidio con ocasión de robo—, en vez de violar esta ley la aplicó correctamente.

El inciso primero del artículo 23 del Código Penal define la alevosía casi con las mismas palabras que el juzgador detalló los hechos que calificó como tal; en el inciso duodécimo, del propio artículo 23 citado, se establece la agravante de nocturnidad dejando al arbitrio de los Tribunales apreciar tal circunstancia y en el inciso quinto del mismo artículo en mención se enumera la agravante de premeditación conocida, que detallada por el fallo impugnado, con los extremos antes indicados, constituye la circunstancia de mérito, porque para la comisión del delito objeto de esta causa los agentes activos del mismo lo llevaron a cabo existiendo entre su planeamiento y la ejecución: decisión, tiempo y reflexión, que integran la agravante en cuestión. En esta calificación la Sala se ajustó a los preceptos citados y en consecuencia no violó los incisos primero y quinto del artículo 23 del Código Penal que se dicen infringidos.

Los cinco artículos contenidos en el párrafo I del Título VII, Libro II del Código Penal, encabezados por la palabra "Homicidio", tratan el hecho de la muerte de una persona por otra, determinando el parricidio, el asesinato o el simple homicidio, ya atendiendo al parentesco de la víctima con el victimario o a la forma y condiciones en que ésta haya ejecutado el hecho que ocasione la muerte. De aquí que bajo la expresión genérica de "homicidio", se comprenda la extinción de una vida humana por medios violentos o ilegales, aunque habida cuenta de la forma en que se lleve a cabo o del parentesco entre los agentes del delito se constituyan especie de aquél.

De suerte que el homicidio de que habla el artículo 388 del Código Penal, en su inciso primero, debe entenderse en el sentido genérico que se acaba de indicar; hecho que unido al robo origina el delito tipo a que se refiere uno de los párrafos anteriores; no importando contra quien se haya cometido ese homicidio ni en qué forma, como en el presente que concurre en la integración del delito un homicidio calificado, por cuya razón la Sala sentenciadora no violó los artículos 300 y 299 incisos primero y tercero, del Código Penal, (reformado este último artículo por el 4o. del Decreto Legislativo 2550).

Ahora bien: si como se acaba de indicar, en la sentencia que se examina, se tuvo por probado que el delito cometido por Jorge Luis González Barrios, es el que específicamente determina el inciso primero del artículo 388 del Código Penal, conocido por "homicidio con motivo u ocasión de robo" y que las agravantes de alevosía, premeditación y nocturnidad están bien calificadas, sin que ninguna de ellas sea inherente al delito referido, ni la ley las haya expresado al describirlo o penarlo, la compensación que de éstas se hizo con la atenuante de confesión está ajustada a lo preceptuado por el artículo 80 del Código Penal, en consecuencia no se violaron los artículos 24, 67, 68, 78, 79, 81, 82 y 88 del Código citado.

El Procurador recurrente arguye que se violó el artículo 45 párrafo octavo del Código Penal, (reformado por el 3o. del Decreto 147 del Congreso y Gubernativo 2448), al aceptar en la sentencia recurrida que existe la atenuante de confesión y no haber dejado la pena de muerte reducida a veinte años, sin importar que hubiera o no circunstancias agravantes, pues... La ley, en el caso de esta reducción, cuando es necesario aplicar una atenuante, no dice que haya o no haya agravantes y silencia la cuestión porque inútil sería decirlo... pues de existir, se compensaría y de no existir, quedaría igual pena..."

El párrafo del artículo citado no expresa lo que el recurrente alega, pues si bien en su primera parte habla de la aplicación de una atenuante para tener por reducida la pena de muerte a veinte años y silencia la cuestión de otras circunstancias, ya sean atenuantes o agravantes, es porque efectivamente inútil sería decirlo, como muy bien lo entiende el señor Procurador, pues de existir éstas se aplicaría la regla contenida en el artículo 80 del Código Penal, en estricta observancia del precepto que dice: "El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes" y es obvio que en el conjunto formado por el cuerpo legal denominado Código Penal se dan reglas generales y especiales para la ad-

ministración de justicia en este ramo, y en esta especial situación, el artículo 80 mencionado ilustra el concepto del párrafo octavo del artículo 45 del referido Código, mandando que cuando concurren circunstancias agravantes y atenuantes se compensen racionalmente por su número e importancia, para determinar con acierto y justicia la sanción que debe imponerse, en cuya virtud, tales disposiciones legales no han sido violadas sino correctamente aplicadas. Artículo XV de los Preceptos Fundamentales, Decreto Gubernativo 1862.

En cuanto a la violación del artículo 654 del Código de Procedimientos Penales, que denuncia el recurrente, no es posible conocer porque su contenido no puede ser analizado dentro de los casos de procedencia en que se funda esté recurso, pues el artículo en mención está encaminado a establecer la forma de proceder mientras los casos de procedencia invocados se dan para el análisis de fondo de la decisión.

POR TANTO: 1

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado, leyes citadas y en lo preceptuado por los artículos 690 y 694 del Código de Procedimientos Penales; 222, 224, 227, 228, 233 y 234 del Decreto Gubernativo 1862, declara: IMPROCEDENTES los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de fecha diecinueve de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, e impone a la parte no oficial recurrente, un arresto de quince días conmutables en su caso a razón de diez centavos de quetzal por día. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes al Tribunal de su origen. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Carlos Arias Ariza. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Jacinto Villegas Pérez y compañeros, por los delitos de Homicidio y Lesiones.

DOCTRINA: Si de los hechos que el Tribunal de segundo grado ha declarado probados, se establece que el enjuiciado, encontrándose en un salón de baile, acepta el reto de

una persona con quien tenía enemistad grave, y al salir a la calle y ser agredido por el retador con dos disparos de pistola hace uso de su revólver ocasionándole la muerte, jurídicamente no se integra la eximente de legítima defensa, pues al aceptar el desafío y colocarse así el reo en "estado de riña" frente a su enemigo, previendo las consecuencias del encuentro, desvirtúa el elemento básico de aquella eximente como es la agresión ilegítima o injusta.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintidós de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

En virtud de recurso de casación se tiene a la vista la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, con fecha dieciocho de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, en el proceso que se siguió contra Jacinto y Octavio Villegas Pérez y Gregorio Rodrigo González, en el Juzgado de Primera Instancia del departamento de Santa Rosa, por los delitos de homicidio y lesiones a los dos primeros y complicidad en los mismos al tercero.

RESULTA:

El veintitrés de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, se presentó al Juzgado de Paz de Guazacapán, departamento de Santa Rosa, Hugo Zamora Monzón, dando parte que en el patio de la iglesia de dicha población, Jacinto y Octavio Villegas Pérez, usando armas de fuego, dieron muerte a su hermano Otto Zamora Monzón e hirieron a José Víctor Mejía hijo. Al ratificar el parte, el denunciante agregó: que ese mismo día, a eso de las veintitrés horas treinta minutos, cuando su referido hermano se encontraba bailando en una "entrada" que se celebraba en el salón municipal, Jacinto y Octavio Villegas Pérez lo retaron a pleito; que como los Villegas Pérez tenían cierta enemistad con su hermano desde hacía tiempo, al declarante le llamó la atención su salida del salón, yéndose detrás para evitar alguna desgracia, pero ello le fué imposible porque cuando él llegó al lugar en donde estaban alegando, los Villegas Pérez le hicieron varios disparos a su hermano con arma de fuego que cada uno portaba, dándole muerte; que el hecho acaeció en el patio de la iglesia y frente a las casas de Gustavo Estrada y María Palma viuda de Mejía, habiéndolo presenciado Víctor Mejía hijo y José Víctor Mejía, a quien le perforaron ambas manos como consecuencia de los balazos disparados por los Villegas Pérez; que en el

momento de la riña, Rodrigo González Linares agredió a bofetadas al dicente por motivo que defendía a su hermano Otto Zamora Monzón, asegurando que su referido hermano no portaba ninguna clase de armas, y sin duda por salvarse, los criminales le dejaron una pistola sobre el hombro izquierdo; que también se dieron cuenta del hecho Margarita Ramírez y Mariano Centeno. El declarante se constituyó formal acusador de los sindicados.

Al practicar inspección ocular, el Juez de Paz constató: que en el lugar del hecho se encontraba el cadáver de Otto Zamora Monzón, presentando seis perforaciones producidas por arma de fuego, tres en el pecho y tres en la espalda, las cuales describe el empírico en medicina de que se acompañó como experto, José Antonio González; que encontró el cadáver en posición supina, tenía próximo a la axila del brazo izquierdo un revólver treinta y ocho largo, con el cañón hacia arriba y el mango hacia abajo, de seis cartuchos, estando tres disparados y el resto sin disparar, habiendo indicios de que, dada la postura del revólver, alguien lo colocó en donde fué encontrado, ya que de haberlo usado el occiso habría estado en diferente posición; que en el sitio inspeccionado no se notaban señales de riña ni manchas de sangre. El empírico mencionado examinó al occiso, informando que al reconocer el cadáver, presentaba "seis heridas producidas por arma de fuego en la caja del cuerpo (torácica), la primera (agujero de entrada) en la base del cuello cara izquierda, sobre la clavícula del mismo lado, de un centímetro de diámetro, el proyectil, interesó algunos vasos importantes del cuello y partes blandas. La segunda en la región pectoral derecha a cuatro centímetros de la tetilla del mismo lado (agujero de entrada) de un centímetro de diámetro, el proyectil interesó el músculo pectoral. La tercera (agujero de salida) a ocho centímetros de la derecha de la herida anterior de centímetro y medio de diámetro, le interesó el mismo músculo pectoral. La cuarta en el borde anterior de la pared interna de la axila izquierda de un centímetro de diámetro (agujero de entrada) le interesó vasos importantes del corazón y partes blandas, esta herida presentaba equínosis y mancha de pólvora quemaduras. La quinta en la espalda, región dorsal de un centímetro de diámetro (agujero de entrada) le interesó partes blandas y pulmón. La sexta en la misma región del lado opuesto (agujero de salida) de centímetro y medio de diámetro"; asimismo examinó al herido José Víctor Mejía, informando que presentaba cuatro heridas producidas por arma de fuego, dos en la mano derecha y dos en la mano izquierda.

RESULTA:

Examinada Margarita Ramírez, declaró: que con el occiso eran amigos íntimos; que el día y hora de autos, se dió cuenta que Otto Zamora Monzón, Jacinto y Octavio Villegas y Rodrigo González Linares, salieron del salón municipal en donde se celebraba una "entrada"; que al ver ésto preguntó a Otto que a dónde iban, respondiéndole que Jacinto Villegas lo llamaba y que iba a ver qué quería; que la declarante los siguió, habiendo presenciado que frente a las casas de Octavio Estrada y María Palma de Mejía, Jacinto Villegas sacó una arma de fuego y la descargó sobre Zamora Monzón causándole la muerte en el instante; que también Octavio Villegas Pérez tuvo participación en la muerte de Zamora Monzón ya que entre los dos hermanos lo atacaron; que al intervenir Víctor Manuel Mejía agarrando a Zamora Monzón para evitar una desgracia, Jacinto Villegas también lo baleó en ambas manos. Examinado Mariano Centeno Villegas, dijo: ser pariente de los hermanos Villegas; que el día y hora de los hechos, cuando se encontraba en el salón municipal en donde se desarrollaba un baile, platicando con algunas personas, oyó unos disparos en la calle; que al salir a ver qué pasaba y oír a la gente que había un muerto, se dirigió al patio de la iglesia en donde efectivamente se hallaba Otto Zamora Monzón; que nada más le consta. Al prestar declaración José Víctor Mejía, expresó: que con Jacinto y Octavio Villegas Pérez son medio hermanos, sin tener ningún parentesco con el occiso; que el día y hora del suceso, acompañado de Juan Ceballos Aguilera, Daniel Solís y Abundio Cruz, salieron de la cantina de Gustavo Estrada dirigiéndose al salón municipal en donde había un baile; que al subir las gradas del edificio se hizo encuentro con "su primo" Jacinto Villegas y Otto Zamora Monzón, y como sabía que dichos individuos tenían enemistad les preguntó que a dónde iban, contestándole que a arreglar un asunto que tenían pendiente; que él se interpuso entre ambos y siguieron así el camino hasta llegar al patio de la iglesia; que al llegar Villegas y Zamora Monzón se dijeron algunas razones, entre las que recuerda que el primero dijo al segundo que quería que le pegara cara a cara, como los hombres, y no como anteriormente lo había hecho, contestándole Zamora Monzón que si quería balazos también, desenfundando ambos sus pistolas; que el declarante, a fin de evitar una desgracia, le cogió a cada uno el cañón de su revólver, es decir, el de Villegas con la mano derecha y el de Zamora con la mano izquierda, pero fué inútil porque

ambos dispararon perforándole las manos; que ya lesionado no pudo evitar el pleito, siendo entonces cuando Villegas le hizo a Zamora como seis disparos que le causaron la muerte, habiendo salido en precipitada fuga; que en el hecho tuvo también participación Gustavo Villegas Pérez, hermano de Jacinto, pues en el preciso momento de las detonaciones le hizo dos disparos por detrás a Otto Zamora Monzón; que allí estaba asimismo Rodrigo González, quien riñó con el hermano del extinto, Hugo Zamora Monzón.

RESULTA:

Capturado y puesto a disposición del Tribunal Rodrigo González Linares, al indagársele manifestó: que el día y hora de autos, cuando se encontraba en un baile que se celebraba en el salón municipal de Guazacapán, acompañado de Ana María Monterroso, oyó en la calle unos disparos y por curiosidad salieron con su compañera hasta el corredor del edificio; que dejando a ésta en dicho lugar, se encaminó al sitio de los hechos en compañía de Arturo y Gregorio Velásquez y otros más que no recuerda, y al llegar vió tendido en el suelo a Otto Zamora Monzón a consecuencia de heridas que le ocasionó con revólver Jacinto Villegas Pérez; negó haber presenciado los hechos así como que hubiera peleado con Hugo Zamora Monzón.

Los testigos José Arturo Velásquez, Juan Ceballos Aguilera y Aroldo Quevedo Pérez, dijeron: que el día y hora del hecho se hallaban en el baile de que se ha hecho referencia, habiendo oído los disparos en la calle; que al llegar al lugar de autos se encontraron con el cadáver de Otto Zamora Monzón, habiendo sabido por el rumor público que Jacinto Villegas Pérez le había dado muerte; que en el momento de los disparos, Rodrigo González estaba en el salón de baile. Gregorio Lanuza Luna y Ana María Monterroso se producen en parecidos términos que los anteriores, asegurando la segunda que en el momento de los disparos ella bailaba en el salón con Rodrigo González. En cuanto a los propietarios de las casas vecinas al lugar del hecho, María Palma viuda de Mejía y Gustavo Estrada Contreras, manifestaron que nada les constaba más que haber escuchado los disparos y el rumor público que acusaba a Villegas Pérez.

RESULTA:

Al recibirse las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia de Santa Rosa, este Tribunal ordenó la captura de Jacinto y Octavio Villegas Pérez por los delitos de homicidio y lesiones, dictando auto de prisión al detenido

Gregorio Rodrigo González Linares, por complicidad en dichos delitos; dispuso por otra parte la práctica de varias diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Obtenida la captura de Jacinto Villegas Pérez, al ser indagado dijo: que Otto Zamora Monzón era su enemigo porque fué quien le pegó un balazo por detrás con un rifle; que el día en que ocurrieron los hechos, que cayó domingo, llegó a la población de Guazacapán a las siete horas, dirigiéndose a la casa de Nicolás Vásquez que es su arriero, para darle un mandado;; que luego de haberse lustrado llegó al salón municipal en donde había un baile y se juntó con Federico Yaegy, tomándose con él una agua gaseosa; que después y cuando bailaba una pieza con Griselda Ceballos, se le acercó Otto Zamora Monzón diciéndole que quería hablar con él afuera, por lo que dejó a su compañera y salieron juntos con aquél, pero les siguió su hermano Hugo Zamora Monzón; que cuando estaban en la calle apareció José Víctor Mejía, quien les preguntó qué pasaba e intervino para que no pelearan al ver que Otto trataba de atacarlo; que habiendo seguido camino hacia la plazuela de la iglesia, al llegar a este sitio Otto se dió vuelta y le hizo el primer disparo, a lo cual el indagado todavía le habló para decirle que se fijara que no quería pelear, pero como aquél siguió tirándole al exponente sacó su revólver en defensa de su vida y también le disparó, sin saber cuántos balazos le asestó, ni si le disparó toda la carga de su arma; que en el momento de los tiros apareció Hugo, dándole por detrás una bofetada en el ojo, y sin darle a éste más que un empujón el indagado se puso en fuga; niega que él, su hermano Octavio y Rodrigo González hayan sacado del salón al ociso, afirmando que solamente él le disparó a Zamora Monzón sin que su hermano Octavio haya tenido nada que ver en el pleito; que no sabe si los disparos de Otto o los de él hayan sido los que lesionaron a José Víctor Mejía cuando intervino; que la pistola que se encontró junto al muerto no fué él ni su hermano Octavio quienes la dejaron; por último mencionó como testigos a Gabriel N., su mujer Bertha Castro Linares, Daniel López, Griselda Ceballos y José Víctor Mejía.

A continuación el Tribunal motivó auto de prisión provisional al mencionado reo, por los delitos de homicidio y lesiones.

RESULTA:

Examinada Griselda Ceballos Ibarra, expuso: que el día y hora de autos, encontrándose en el salón municipal en donde se celebraba un baile, en el momento que ella bailaba una

pieza con Jacinto Villegas Pérez, llegó Otto Zamora Monzón diciéndole a su compañero que salieran a la calle por que quería hablar con él, a lo que éste le contestó que estaba bien, fué a sentar a la declarante y salió junto a Zamora Monzón; que como a la exponente le pareció sospechoso el requerimiento de Zamora Monzón dispuso seguirlos, viendo que ya afuera se unió a ellos Hugo Zamora Monzón, hermano de Otto, alcanzándolos también José Víctor Mejía que procuraba interceder para que no pelearan, mientras ella por su parte le gritaba a Jacinto que regresara; que así llegaron a la plazuela frente a la iglesia, y ya en ese lugar Otto Zamora y su hermano Hugo sacaron sus pistolas, habiendo el primero hecho dos disparos a Jacinto Villegas, quien a su vez también sacó su pistola tirándole a Otto que en ese instante se desplomó al suelo; que José Víctor Mejía intentó intervenir en el momento de los disparos resultando herido, asegurando que Otto fué el que lo lesionó por haber sido el primero en disparar; que Hugo Zamora Monzón agredió a bofetadas después a Jacinto, quien se puso en fuga; que vio que Margarita Ramírez recogió un revólver y lo estaba ocultando dentro del vestido, a lo que José Arturo Velásquez le dijo que lo dejara allí porque de lo contrario ella también iría presa, no dándose cuenta de si en lo último lo dejó o se lo llevó. La testigo Dora Alicia Ruiz Pérez, dijo: que el día y hora del suceso, cuando se encontraba bailando con Pedro Octavio Villegas Pérez, precisamente la pieza llamada "El Pénjamo", se dió cuenta que Otto Zamora Monzón se dirigió a Jacinto Villegas Pérez que bailaba con Griselda Ceballos, sin oír las palabras que le decía, pero se veía que estaban enojados; que dichos individuos salieron a la calle, y como su compañero Pedro Octavio Villegas le dijera que tenía pena que aquéllos fueran a pelear, dejaron de bailar y se fueron tras ellos; que en la calle iban con Otto y Jacinto, Hugo y Max Zamora Monzón y José Víctor Mejía, tratando este último de que no pelearan; que al llegar frente a la iglesia siguieron alegando, y momentos después Otto Zamora Monzón sacó su revólver y le hizo dos disparos a Jacinto Villegas, quien a su vez sacó el suyo y lo descargó contra Otto que inmediatamente cayó al suelo; que los hermanos Max y Hugo Zamora agredieron a bofetadas a Jacinto Villegas que se puso en precipitada fuga; que se dió cuenta que José Víctor Mejía resultó lesionado por haber intervenido entre los protagonistas, pero no puede decir quién le haya causado las heridas. Examinada Berta Linares Castro, concubina de Jacinto Villegas Pérez, declaró: que el día del hecho su

concubino Jacinto Villegas se fué a un baile a la población de Guazacapán, y ella por celos lo siguió; que a la hora de autos vió que aquél salía del salón municipal alegándose con Otto Zamora Monzón, acompañándolos Hugo Zamora Monzón y José Víctor Mejía; que ella le gritó a su marido que se regresara pero no oyó si le contestó; que al llegar a la plazuela de la iglesia vió que Otto sacó su revólver y le hizo dos disparos a su marido, momento en el cual José Víctor Mejía metió las manos y fué cuando lo lesionó Zamora Monzón; que Jacinto sacó también su revólver y disparó contra Zamora Monzón, y que habiéndose desmayado la declarante ya no se dió cuenta de más, y solo al volver en sí vió que Max y Hugo Zamora Monzón agredían a bofetadas a Jacinto, quien salió huyendo. Examinado Gabriel Molina González, manifestó que como seis meses antes de esa fecha, yendo de Guazacapán para la casa de Jacinto Villegas, se dió cuenta que en el camino salieron Otto Zamora Monzón y otro muchacho que era su hermano y pistolas en mano insultaron y amenazaron a Jacinto Villegas; que después se retiraron los hermanos Zamora Monzón diciendo que de juntarse tenían.

Se presentó al Juzgado Ezequiel Zamora Santos pidiendo que se le tuviera como acusador formal y así se resolvió. Con fecha diez de Diciembre del mismo año el Tribunal reformó el auto de prisión dictado contra Rodrigo González Linares, dejándolo en libertad sujeta a resultas.

Corren agregados los informes del Juez de Paz de Guazacapán acerca de los buenos antecedentes y honradez de los encartados Jacinto Villegas Pérez y Rodrigo González Linares. Asimismo el informe del médico del Hospital de Escuintla respecto a las lesiones sufridas por José Víctor Mejía, indicando que estuvo hospitalizado doce días y que tardaría para su completa curación de ocho días más con asistencia médica, sin quedarle cicatriz ni impedimento; este informe fué mandado ampliar por el Tribunal para que, de ser posible, el facultativo estableciera el calibre de los proyectiles que ocasionaron las heridas.

RESULTA:

Elevado a su estado público el proceso y tomada confesión con cargos al reo Jacinto Villegas Pérez, éste no se conformó con los que se le dedujeron, sosteniendo que sólo él disparó contra el occiso en defensa de su vida, tal como lo expuso en su indagatoria.

Aparece un informe de la Secretaría del Tribunal, acerca de un proceso que se siguió a Otto Zamora Monzón, por lesiones inferidas con arma de fuego a Jacinto Villegas Pérez, hecho calificado de homicidio frustrado y del cual el acusado fué absuelto del cargo. Figura también la ampliación del informe pedida al médico forense del Hospital de Escuintla, en la cual indica que no le es posible dictaminar sobre el calibre de los proyectiles que ocasionaron las lesiones a José Víctor Mejía.

Examinado Hugo Zamora Monzón, expuso que él no riñó con Rodrigo González sino que éste, que a la hora de los hechos andaba con Jacinto Villegas, juntamente con Octavio Villegas lo abofetearon para que soltara a Jacinto y así pudiera salir huyendo como en efecto lo hizo. Max Zamora Monzón, manifestó: que en el momento de los hechos se encontraba con Rómulo Centeno y otras personas a quien no le sabe el nombre, tomándose unos tragos, cuando oyeron unas detonaciones; que al salir con Centeno vieron que iba huyendo Jacinto Villegas Pérez, por lo que supuso que había matado a su hermano Otto dada una vieja enemistad que había entre ellos; que como la gente corría hacia el patio de la iglesia, allí se dirigieron ellos también, comprobando que en efecto su hermano estaba muerto, y según decía la gente lo había matado Jacinto Villegas. Se recibieron declaraciones de varias personas más, pero como lo único que les consta es la sindicación pública que se hacía a Jacinto Villegas Pérez, se omite detallarlas.

RESULTA:

Abierto el juicio a prueba, previos los traslados a acusador y defensor del reo, fueron rendidas las siguientes: por parte del reo Villegas Pérez: a) certificación de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en la causa seguida contra Otto Zamora Monzón por el delito de homicidio frustrado en la persona del encartado, en la cual se le absuelve únicamente de la instancia y no del cargo; b) informe del Alcaide de las cárceles de Cuilapa, en el cual aparece que Otto Zamora Monzón observó mala conducta cuando estuvo preso, llegando en cierta ocasión a agredir a bofetadas a Albertino Quevedo Batres; c) declaraciones de Rufino Vásquez Luna, Félix Edmundo González López, Samuel Alvarado López y José Luis Vásquez Luna, quienes contestando afirmativamente al interrogatorio propuesto por el reo, manifestaron: que el día y hora de autos se encontraban en el salón municipal de Guazacapán celebrando una "entrada" para recau-

dar fondos, juntos los mencionados testigos y Jacinto Villegas Pérez, platicando; que en ese momento llegó Otto Zamora Monzón y dirigiéndose a Villegas Pérez le dijo que quería hablarle, y como éste le contestara que podían hablar allí, Zamora Monzón le respondió que era cuestión de hombres y que salieran a la calle; que sin hacer caso de lo anterior, Villegas Pérez se fué a bailar con Griselda Ceballos, pero Zamora Monzón se quedó parado frente a la cantina provocándolo cada vez que pasaba; que a las reiteradas provocaciones de Zamora Monzón, Villegas Pérez se vió obligado a dejar a su compañera y seguir a aquél a la calle, habiendo salido detrás Hugo Zamora Monzón y asimismo los declarantes, y que ya en la calle los protagonistas se encontraron con José Víctor Mejía que se puso en medio de ellos y trató de intervenir para evitar el pleito; que instantáneamente se paró Otto Zamora Monzón y sacando su pistola hizo el primer disparo contra Jacinto Villegas Pérez; d) declaraciones de los testigos Joaquín R. Funcal, Domingo Folgar Garrido, Crisanto Aguirre Castillo y Felipe Díaz Castillo, quienes dando contestación al respectivo interrogatorio, dijeron: que el día cuatro de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, cuando regresaban de una medida y estando sobre la carretera que conduce al pueblo de Taxisco, se dieron encuentro con Otto Zamora Monzón, afirmando los dos primeros testigos que frenó el caballo que montaba y se encaró con Jacinto Villegas, quien trató de retirarse, y los otros dos que le echó el caballo encima a Villegas y con la pistola en la mano lo quiso agredir, a lo que éste salió huyendo; y que al retirarse Zamora Monzón, se oyeron poco después dos disparos; e) declaración de Albertino Quevedo Batres, quien expresó: que él estuvo preso juntamente con Otto Zamora Monzón; que una tarde que Jacinto Villegas acompañado de su padre y del Licenciado Raúl Roca Aguirre llegó a la cárcel, Zamora Monzón le dijo al declarante que sentía estar preso y no haber dado muerte a Villegas como era su intención; f) declaración de José Víctor Mejía, que manifestó: que el día del hecho como a las once de la noche, cuando él iba de la cantina de Gustavo Estrada en dirección del salón municipal, ya para llegar al mismo se encontró con el encauzado, Otto Zamora Monzón y Hugo de los mismos apellidos, que caminaban hacia el patio de la iglesia; que en vista de la enemistad que el declarante sabía que existía entre el encartado y Otto Zamora Monzón, trató de evitar la riña colocándose en medio de los dos; que al llegar al lugar mencionado, Otto dijo a Jacinto Villegas que

si no quería manadas iba a querer balazos, y tras las anteriores palabras sacó su pistola e hizo el primer disparo a su enemigo, hiriendo de ese disparo al declarante, en la mano izquierda; que en vista del ataque imprevisto, Jacinto Villegas se barrió por el suelo y al mismo tiempo sacó su pistola para defender su vida; que ambos se dispararon de frente: que Pedro Octavio Villegas no tomó parte en el pleito y no sabe el declarante por qué en Guazacapán asentaron en su declaración que le había disparado por detrás al occiso, y que lo cierto es que dicho señor peleó a bofetadas con Hugo Zamora. Se hace constar que la declaración anterior se dió contestando afirmativamente al interrogatorio presentado por el reo.

Por la parte acusadora se rindieron las siguientes: a) documento extendido por el Ministerio de Gobernación, conteniendo el informe de la Guardia Judicial sobre los hechos investigados; b) declaraciones de José Quedo Aguilar y Tránsito Contreras, quienes contestando afirmativamente a interrogatorio presentado, dijeron: que el día veinticuatro de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, estuvieron acompañando al acusador en esta causa y padre del occiso, Ezequiel Zamora Santos, de Guazacapán; que estando ellos presentes, compareció el Juez de Paz y Secretario al reconocimiento del cadáver, dándose cuenta por esa circunstancia de que el mismo tenía algunos de los impactos en la espalda y con orificio de salida adelante del cuerpo; c) testimonios de Antonio Contreras Hernández, Francisco Rodríguez y Rodrigo López, afirmando como los anteriores, al responder "es cierto" al interrogatorio propuesto, que presenciaron el reconocimiento que la autoridad hizo en el cadáver de Otto Zamora Monzón en la fecha mencionada, dándose cuenta de que los proyectiles le penetraron por la espalda; d) declaración de Edmundo Herrarte Orozco, en igual forma que los anteriores, quien dice que el cadáver presentaba tres tiros por la espalda y uno por enfrente; e) informe del Juez de Paz de Taxisco, indicando que Jacinto y Octavio Villegas Pérez no tienen antecedentes penales, pero que el primero, en muchas ocasiones, ha sido sancionado por faltas contra el orden público, pues es persona bulliciosa y amigo de hacer disparos a altas horas de la noche.

RESULTA:

Para mejor fallar, el Tribunal ordenó la ampliación de las declaraciones de Margarita Ramírez Ruano y José Arturo Velásquez, a fin de aclarar lo relativo al revólver que apa-

reció junto al cuerpo del occiso; al respecto, la primera dijo que ratificaba su primera declaración y que, en efecto, vió la pistola encima del cadáver de Zamora Monzón, siendo falso que ella la haya tomado; y el segundo, después de manifestar que ratificaba su primera declaración, que ciertamente cuando él llegó al lugar de los hechos vió un revólver que tenía sobre el cuerpo Zamora Monzón, y que cuando se dió cuenta de que lo tomaba Margarita Ramírez, le dijo que lo dejara porque era prohibido tocarlo antes de que llegara la autoridad, a lo que ella le contestó "es que éste no es revólver de Otto"; que por la misma circunstancia llamó la atención a la Ramírez el agente municipal Carlos Leonardo.

Con tales antecedentes el Juez dictó sentencia, declarando: "1o. Exento de responsabilidad criminal a Jacinto Villegas Pérez en lo que se refiere a la muerte del señor Otto Zamora Monzón, por haber obrado en legítima defensa. 2º Que el mismo Jacinto Villegas Pérez, es reo autor del delito de lesiones inferidas en la persona de José Víctor Mejía Villegas, por cuya infracción lo condena a sufrir la pena de un año de prisión correccional sin ninguna modificación; dicha pena purgará en la Penitenciaría Central con abono de la prisión sufrida desde la fecha de su detención; le permite conmutarla en sus dos terceras partes a razón de diez centavos de quetzal diarios... y 3o. Deja abierto el procedimiento criminal contra el sindicato Octavio Villegas Pérez...".

Al conocer enalzada la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, profirió el fallo motivo del presente recurso, diciendo en la parte resolutive: "CONFIRMA dicha sentencia en cuanto declara a Jacinto Villegas Pérez exento de responsabilidad criminal por la muerte de Otto Zamora Monzón, por haber obrado en legítima defensa; y la REVOCA: a) en cuanto condena al mismo reo a un año de prisión correccional por lesiones causadas a José Víctor Mejía Villegas, y resolviendo derechamente lo declara exento de responsabilidad criminal por este hecho, y b) en cuanto deja abierto el procedimiento contra Octavio Villegas Pérez, cuya parte se revoca por no haber razón o fundamento legal para dejar abierto dicho procedimiento". La Sala considera como fundamentación de su fallo, "que el procesado Jacinto Villegas Pérez, al ser indagado manifestó y alegó haber dado muerte a Otto Zamora Monzón en legítima defensa de su vida, lo que ratificó en su confesión con cargos; por lo que debe analizarse si efectivamente concurrió en el hecho dicha legítima defensa para derivar su consecuencia legal. Examinando las diligencias cabe apreciar: que

varios testigos que declararon no les consta exactamente cómo ocurrió el hecho... Los testigos que sí fueron presenciales son los siguientes: en quienes cabe apreciar sus declaraciones en la forma que a continuación se explica: Hugo Zamora dijo que entre Jacinto y Octavio Villegas Pérez dieron muerte a Otto Zamora Monzón, después de haberlo ido a sacar al baile que esa noche se celebraba; pero por ser hermano del muerto y por lo tanto ofendido, su declaración no tiene valor probatorio por tener interés directo en el pleito. Margarita Ramírez (folio 4) cuenta la forma en que Villegas mató a Zamora, pero por ser amiga íntima del muerto, como lo afirmó en su declaración, éste no puede tomarse en cuenta, pues no es idónea por falta de imparcialidad, ya que por esa circunstancia también tiene interés en el pleito. José Víctor Mejía, quien dijo que intervino para evitar que pelearan Zamora y Villegas en su declaración rendida ante el Juez de Paz que instruyó las primeras diligencias, expuso, que ambos dispararon al mismo tiempo, y que Octavio Villegas, hermano de Jacinto, le hizo dos disparos por la espalda al muerto; pero por ser pariente (primo) del encauzado como él mismo dijo, y por ser ofendido ya que salió herido en la reyerta, su dicho carece de validez legal por falta de imparcialidad, agregando a que en el plenario —término de prueba declaró en forma diferente, pues dijo que él no había afirmado en su declaración en el Juzgado de Paz en Guazacapán que Octavio Villegas disparó en la espalda a Zamora, sino que Zamora disparó primero sobre Villegas y que éste en su defensa se vió obligado a disparar contra aquél. Esta contradicción viene a sumarse para quitarle validez legal a su dicho. Otra testigo presencial cuya declaración no es aceptable por falta de imparcialidad es Berta Linares Castro por ser concubina de Jacinto Villegas. Por las razones expuestas todos los testigos anteriormente mencionados no virtieron declaraciones con valor legal probatorio, por lo que no pueden estimarse sus dichos. Por exclusión, en el análisis de los testigos presenciales, quedan en pié las declaraciones de los que en el Considerando siguiente se estiman... Que con las declaraciones de Griselda Ceballos Ibarra y Dora Alcira Ruiz, que fueron examinadas en el sumario, y por lo tanto sus declaraciones son dignas de fé, y con pleno valor probatorio, por reunir los requisitos de ley, y no haber sido tachadas ni repreguntadas, se probó plenamente: que la noche de autos en el baile, Zamora llamó a Villegas y ambos salieron a la calle, y ya allí los dos se alegaron, habiendo disparado Zamora dos tiros sobre Villegas, quien enseguida disparó sobre aquél

dándole muerte. En el término de prueba declararon: Rufino Vásquez Luna, Félix Edmundo González López, Samuel Alvarado López y José Luis Vásquez Luna, quienes con sus dichos establecen dos hechos de importancia: a) que a la hora del baile Otto Zamora estuvo provocando a Jacinto Villegas para que saliera, es decir retándolo; y b) que en el encuentro armado entre ambos Zamora disparó primero, haciéndolo después Villegas. Con sus dichos corroboran las declaraciones de Griselda Ceballos Ibarra y Dora Alcira Castro. Con estos testigos mencionados, se establecen las tres condiciones legales y doctrinarias que informan la legítima defensa, a saber: 1o. agresión ilegítima; 2o., necesidad racional del medio empleado para impedir la o repelerla; y 3o., falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. En efecto: con los testigos anteriores se establece la agresión ilegítima por parte de Otto Zamora, quien sin mediar causa justificada disparó primero contra Villegas; esta agresión ilegítima se aprecia más, tomando en cuenta los antecedentes existentes entre ambos, consistentes en que Otto Zamora fué procesado por homicidio frustrado en la persona de Jacinto Villegas, saliendo absuelto de la instancia por sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones... Además otro antecedente, el probado con las declaraciones de: Joaquín Phe Funchall, Domingo Folgar Garrido, Crisanto Aguirre Castillo y Felipe Díaz Castillo, quienes presenciaron un incidente entre Zamora y Villegas, en Septiembre de 1952, cuando en un camino ambos se hicieron encuentro, demostrando Zamora su animosidad contra Villegas, en la forma de habersele encarado y luego en forma intimidatoria hacer dos disparos al aire cuando se retiró en su caballo... Todos estos antecedentes, vienen a evidenciar que la agresión de Zamora fué ilegítima, pues ningún derecho o razón justificada tenía para retar y provocar como lo hizo a Villegas, y luego a tratar de agredirlo disparando primeramente su arma. La necesidad racional del medio empleado para defenderse de la agresión, queda establecida o deducida de la circunstancia de que Zamora le hizo a Villegas dos disparos primero, por lo que éste se vió irremisiblemente obligado a hacer uso de su arma, pues de lo contrario hubiera sido muerto por aquél. Y la tercera condición integrante de la legítima defensa o sea la falta de provocación por parte del que se defiende, quedó probada con las declaraciones de los testigos mencionados en este Considerando, a quienes les consta que Villegas no provocó a Zamora, sino éste a aquél... De todo lo anteriormente considerado, y que es congruente y respaldado por las

actuaciones procesivas, el criterio de esta Sala llega a la conclusión de que Jacinto Villegas Pérez dió muerte a Otto Zamora Monzón, obrando en legítima defensa, la cual está plenamente probado". En cuanto a las pruebas rendidas por la parte acusadora, el Tribunal sentenciador las analiza así: "la transcripción hecha por el Jefe de la Oficina de Información del Ministerio de Gobernación, al señor Ezequiel Zamora, padre del muerto, que contiene el informe de la Guardia Judicial, sobre la averiguación del hecho, no es prueba por que no es averiguación procesiva propiamente dicha, y por otra parte ni establece ni prejuzga sobre la forma en que Villegas dió muerte a Zamora. Las declaraciones de varios testigos presentados en el término de prueba por la acusación, quienes dijeron habían visto que el cadáver de Zamora tenía varios balazos por la espalda, no acreditan este extremo, porque tal punto sería objeto de apreciación por medio de prueba de expertos o juicio pericial y no por declaraciones de testigos; por otra parte, ellos no dijeron o no les consta que dichos disparos por la espalda que afirman, los haya causado el procesado Villegas. Cabe hacer igual consideración con respecto a lo que dice en su informe el experto empírico José Antonio González de que uno de los proyectiles entró por la espalda del muerto, amén de que tal reconocimiento del cadáver debió practicarse por experto titulado... Que dada la calificación legal de legítima defensa que se hace, las lesiones que sufrió José Víctor Mejía de parte de Jacinto Villegas, no pueden ser punibles, porque actuando éste, lícitamente y con exención de responsabilidad legal en defensa de su vida, cualquier otro hecho, como las lesiones causadas a Mejía, incluyen la irresponsabilidad, porque debe estimarse que fueron ocasionadas con motivo de la legítima defensa, y por mero accidente o caso fortuito...". Dice por último que no existe razón alguna para dejar abierto el procedimiento contra Octavio Villegas Pérez, establecido como está que el autor de la muerte investigada fué su hermano Jacinto de iguales apellidos.

Contra tal pronunciamiento y con el auxilio del Abogado Luis Felipe Rosales, el acusador Ezequiel Zamora Santos introdujo recurso de casación por violación de ley, por error en la calificación de los hechos que se declararon aprobados en el fallo y respecto a la participación de los procesados en los hechos cometidos y en su grado de responsabilidad y por "error de derecho y error de hecho" en la apreciación de las pruebas. Cita como violados los artículos 11, 2, 21 inciso 6o., 28, 30, 34, 40, 44, 68, 78, 89, 97 y 300 del Código Penal;

570 inciso 2o., 571, 572, 573, 574, 582, 586, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 y 601 del Código de Procedimientos Penales. Para la procedencia del recurso invoca los incisos 2o., 3o., 4o., 5o. y 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, adicionado con el artículo 1o. del Decreto 487 del Congreso de la República. Dice al final de su escrito que pide conforme los artículos 673, 674 inciso 1o., 675, 676, 2, 4 y 5, 681, 682, 684 y 686 del Código de Procedimientos Penales; 2o., 3o. y 4o. del Dto. 487 del Congreso.

Como argumentos del sometimiento, el recurrente expresa: "La Sala Tercera de Apelaciones al fallar como lo hizo, infringiendo las leyes enumeradas, declaró probados los hechos que en realidad no lo están y apreció el hecho delictuoso cometido, como un acto de legítima defensa, en vez de calificarlo como corresponde, es decir como delito y haberlo penado como es de ley; así pues, se cometió error de derecho en su calificación, colocándose el Tribunal de segunda instancia en los casos que taxativamente señalan los incisos 2o. y 3o., del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales. Esto por una parte, por la otra, la propia Sala sentenciadora al apreciar la participación de cada uno de los procesados en los hechos cometidos, cometió error de derecho, ya que admite que mi hijo, el ociso, fué quien provocó y disparó primero, cuando en los autos consta y lógicamente se deduce, que mi hijo no fué el provocador, ni obró con la violencia que la ley requiere para establecer tal provocación y por lo tanto, la Sala cometió error de derecho también, al calificar los hechos probados en concepto de eximentes de responsabilidad criminal, colocándose asimismo en los casos que taxativamente señalan los incisos 4o. y 5o. del mismo artículo 676 del Código de Procedimientos Penales. Y en fin^a la Sala sentenciadora cometió error de derecho y error de hecho, como resulta de las actuaciones del proceso donde corren las declaraciones auténticas de personas que fueron testigos presenciales del hecho y cuyos dichos no se apreciaron con valor legal probatorio por falta de imparcialidad, cuando era el caso de tomar esas declaraciones como presunciones graves contra los reos... Es este el caso que determina el inciso 8o. del mismo artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, adicionado con el artículo 1o. del Decreto No. 487 del Congreso de la República". A continuación del recurrente hace un análisis de la prueba testimonial que sirve de fundamento al fallo que se examina, intentando demostrar que en este caso no existe la legítima defensa, para terminar pidiendo la condena del encartado.

—I—

CONSIDERANDO:

Citado entre los casos de procedencia el que se refiere al error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, por razón lógica debe examinarse en primer lugar, pues de prosperar el recurso por este motivo resultaría baldío el estudio de los otros casos de fundamentación invocados.

El inciso 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales que contiene el caso aludido, asienta: "Cuando en la apreciación en las pruebas se haya cometido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador". Se ve así, del propio texto del inciso citado, que la ley establece una separación entre lo que constituye el error de derecho y el de hecho, lo que responde a la distinta naturaleza que realmente identifica a uno y otro. De consiguiente, cuando se trata de una impugnación originada por cualquiera de tales vicios, preciso se hace que el recurrente relacione de manera concreta y denominado por su propia naturaleza el error que a su juicio se ha cometido en relación con la prueba o pruebas perjudicadas, pues de otra suerte, siendo diferentes los presupuestos que el Tribunal debe tener en cuenta como punto de partida para el estudio de uno y otro error, habría imposibilidad jurídica de deducir conclusiones acordes con él con caso sometido al faltar el cumplimiento de aquel requisito.

Ahora bien, como puede observarse de lo antes transcrito, al referirse a este aspecto del sometimiento, por más que el recurrente enumera algunas declaraciones de testigos que a su entender fueron estimadas erróneamente y dá otras razones respecto a lo que él cree determinante de la culpabilidad del reo, únicamente indica que la Sala sentenciadora "cometió error de derecho y error de hecho", omitiendo identificar apropiadamente, como se ha dicho, los errores que denuncia. Y, ya que en esa forma dubitativa es imposible proceder al examen de las pruebas a que el recurrente se refiere, este Tribunal no puede entrar al conocimiento de fondo de éste motivo de procedencia.

—II—

CONSIDERANDO:

Los otros casos de procedencia invocados por el recurrente, contenidos en los incisos 2o., 3o., 4o. y 5o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, cuya copia literal

conviene para los efectos de este estudio, se refieren por su orden: a "Cuando los hechos que en la sentencia se declaren probados no se califiquen o no se penen como delitos siéndolo, y sin que circunstancias legales posteriores impidan penarlos"; "Cuando constituyendo delito los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya cometido error de derecho en su calificación"; "Cuando se haya cometido error de derecho al determinar la participación de cada uno de los procesados en los hechos que se declaren probados en la sentencia"; y "Cuando se haya cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia, en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal, o se haya omitido considerarlas".

Para examinar los casos anteriores en comparación con la sentencia recurrida, sin ser posible el nuevo examen de la prueba dadas las razones que en el primer Considerando se expresaron, deben tomarse como base los hechos que el Tribunal sentenciador ha declarado probados.

Con respecto a los tres primeros casos invocados, cabe observar que los hechos que el Tribunal declaró probados si fueron calificados como delito de homicidio, aunque no penados al aceptar que concurría una circunstancia eximente de responsabilidad en favor del enjuiciado; asimismo, claramente se expresa en el fallo que los hechos investigados constituyen las figuras delictivas de homicidio y lesiones en las personas de Otto Zamora Monzón y José Víctor Mejía, respectivamente, siendo esa la calificación jurídica que en realidad corresponde de acuerdo con las acciones atribuidas al reo; y por último, en lo que hace a determinar la participación del reo en los hechos que se declaran probados, en todo el curso del procedimiento se le ha asignado la calidad de autor material de la muerte violenta de Otto Zamora Monzón, o sea causante en acción directa de las lesiones que ocasionaron su deceso, lo que se confirma con las apreciaciones que la Sala deriva de las actuaciones. En tal virtud, en los tres aspectos referidos, ningún error de derecho se advierte por parte del Tribunal sentenciador y, en consecuencia, tampoco violación de los preceptos legales señalados.

Ahora bien, la denuncia que se contrae a que se ha cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaran probados, para integrar la circunstancia eximente de legítima defensa dando lugar a la irres

ponsabilidad criminal del enjuiciado, amerita el análisis de los tres elementos en que la Sala funda sus deducciones: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Con las declaraciones de varios testigos idóneos que enumera en su fallo, la Sala dá por sentado dos hechos principales: a) que a la hora del baile, Otto Zamora estuvo provocando a Jacinto Villegas para que saliera, es decir, retándolo; y b) que en el encuentro armado entre ambos, Zamora disparó primero, haciéndolo después Villegas; y deduce de aquí que la agresión ilegítima por parte de Otto Zamora es evidente, pues sin mediar causa justificada disparó primero contra Villegas, abandonando tal deducción la circunstancia de que existían antecedentes entre ambos en virtud de que Zamora fué procesado por homicidio frustrado en la persona de Villegas, además de que en Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, cuando los mencionados protagonistas de este hecho se encontraron en un camino ante varias personas, Zamora demostró animosidad contra el enjuiciado "al habersele encarado y luego en forma intimidatoria hacer dos disparos al aire cuando se retiró en su caballo".

La agresión ilegítima como elemento integrante de la eximente de responsabilidad criminal contemplada por nuestra ley, debe entenderse en la acción ofensiva, en el amago o empleo de fuerza material para causar un daño que comprometa o ponga en peligro la vida o los derechos de alguna persona, sin estar autorizado legítimamente para ello; además de que la acción debe asimismo ser actual, inminente y sin solución de continuidad entre el ataque y la defensa.

En el presente caso y según las pruebas aceptadas por la Sala, Otto Zamora, tras de provocar al enjuiciado Jacinto Villegas en el baile en que se encontraban, lo retó y ambos salieron a la calle; ya allí se alegaron, y habiendo disparado primero Zamora contra Villegas, éste hizo uso de su arma dando muerte a aquél. De lo anterior se ve claramente que en el hecho se delimitan dos momentos culminantes y decisivos para los efectos de este estudio: uno, cuando Villegas fué provocado por Zamora y aceptó el reto que éste le hacía para salir; y otro, cuando ya ambos en "estado de riña", con posterioridad se atacaron en el lugar en que cayó el occiso. Quiere decir que, el enjuiciado Villegas, por más que cayó el occiso. Quiere decir que, el enjuiciado Villegas, por más que no inició o dió lugar

a las provocaciones de Zamora, aceptó el reto y convino en salir a donde se le llamaba para pelear, pues lógicamente, dados los antecedentes que la Sala cita y que en este aspecto se vuelven contra su propia tesis, era de presumir que el retador, predispuesto a la lucha, trataría de agredir a Villegas; y lógico es también inferir que Villegas, colocado en esa situación, no sólo previó el hecho sino que contribuyó por su parte y de manera deliberada a su desarrollo, lo que desvirtúa las características que según la jurisprudencia y doctrinariamente informan la agresión ilegítima, que "debe ser un acto de fuerza inesperado e injusto", (Doctor Juan P. Ramos, "Curso de Derecho Penal").

En consecuencia, ya que sin el elemento de agresión ilegítima los otros dos extremos de la eximente comentada no pueden surgir independientemente y producir por sí consecuencias jurídicas, siendo innecesario su análisis, basta con lo expresado para tener la evidencia de que la Sala, al resolver en el sentido que lo hizo, violó los artículos 21 inciso 6o., 28, 30, 34, 40 y 44 del Código Penal, entre los citados por el recurrente, procediendo así casar la sentencia examinada y fallar sobre lo principal. Artículo 687 del Código de Procedimientos Penales.

—III—

CONSIDERANDO:

De conformidad con las pruebas consistentes en los testimonios de Griselda Ceballos Ibarra, Dora Alcira Ruiz, Rufino Vásquez Luna, Félix Edmundo González López, Samuel Alvarado López y José Luis Vásquez Luna, el enjuiciado Jacinto Villegas fué reiteradamente provocado por Otto Zamora Monzón, cuando ambos se hallaban, la noche de autos, en el baile que se celebraba en el salón municipal de Guazacapán; como resultado de las incitaciones del occiso, Villegas aceptó el desafío de que se le hacía objeto y, ya en la calle, al contestar los disparos que le hizo Zamora, dió muerte a éste mediante varios disparos que le hizo a Zamora, dió muerte a éste mediante varios disparos que a su vez le hizo con el revólver que portaba. Establecidos así los hechos, es claro que la acción cometida por el reo configura el delito de homicidio definido por el artículo 300 del Código Penal, correspondiéndole la pena de diez años de prisión correccional. Ahora bien, siendo que, como se ha aceptado, sin que el reo promoviera la disputa fué compelido por Zamora a salir y ya en el lugar de la cita atacado inicialmente

por éste con peligro de perder la vida. concurren en su favor dos circunstancias atenuantes bien calificadas tales son haber precedido inmediatamente de parte del ofendido provocación proporcionada al delito y obrar el enjuiciado por estímulos tan poderosos que naturalmente produjeron arrebató u obsecación en él, contenidos en los incisos 4o. y 6o. del artículo 22 del Código mencionado. De consiguiente, en atención a la regla señalada por el artículo 81 del repetido cuerpo de leyes, es procedente rebajar hasta en dos terceras partes la pena correspondiente al capitulado. Artículos citados y 570, 571, 573 y 586 del Código de Procedimientos Penales.

—IV—

CONSIDERANDO:

Respecto a las lesiones sufridas por José Víctor Mejía, como resultado de los mismos disparos que ocasionaron la muerte de Otto Zamora, dada la sanción de un año de prisión correccional que para el caso procedería imponer, está comprendido en el artículo 1o. del Decreto 493 del Presidente de la República (Ley de Amnistía e Indulto), sin que por otra parte quede el reo abarcado por alguna de las excepciones que dicha ley consigna. En tal virtud, en aplicación del precepto mencionado procede declarar extinguida totalmente la acción derivada de tal hecho. Artículos 4o. y 6o. del Decreto citado.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 13, 223 y 233 del Decreto Gub. 1862; 686, 687 y 694 del Código de Procedimientos Penales; 11, 12, 28, 34, 44, 47 y 60 del Código Penal, CASA la sentencia recurrida y resolviendo sobre lo principal, declara: I) que Jacinto Villegas Pérez es autor responsable del delito de homicidio en la persona de Otto Zamora Monzón, imponiéndole por tal infracción la pena líquida de tres años cuatro meses de prisión correccional, hecha la rebaja que le corresponde por virtud de las atenuantes estimadas en su abono, la cual le permite conmutar hasta en dos terceras partes a razón de veinticinco centavos de quetzal por día; lo suspende en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo de la condena; lo deja afecto al pago de las responsabilidades civiles provenientes del delito y a la reposición del papel empleado en la causa; y II) extinguida totalmente la acción en cuanto al delito

de lesiones en la persona de José Víctor Mejía. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José Arturo Ruano Mejía).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Ricardo Alfredo Kress Vásquez, por el delito de Atentado a los Agentes de la Autoridad.

DOCTRINA:

Para que el recurso de casación tenga eficacia es necesario que se exprese, con toda propiedad, el artículo e inciso que contenga el caso de procedencia en que se funda.

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintinueve de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Por recurso de casación se tiene a la vista, con sus respectivos antecedentes, la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Apelaciones, el veintitrés de Mayo del año en curso, en el proceso que por el delito de Atentado a los Agentes de la Autoridad se siguió en el Juzgado de Primera Instancia de Alta Verapaz a Ricardo Alfredo Kress Vásquez; y,

RESULTANDO:

El dieciséis de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, Pedro Ponce Rodríguez, en su carácter de Jefe de la Guardia Municipal de San Pedro Carchá, puso a disposición del Juzgado de Paz de aquella localidad al individuo Alfredo Kress Vásquez porque el día anterior, a las veintiuna horas y treinta minutos, mientras se llevaba a cabo un baile en el salón municipal, sin permiso del agente Imaginario, Manuel Miranda, se introdujo a la Guardia Municipal y apagó el motor que servía a los hermanos Sierra, que tocaban en el baile; que por haberle llamado la atención injurió y amenazó a Miranda y a los agentes Rodolfo de León, Florencio Rodríguez, José Tomás Granados y Nery Ramírez, que entraron al local en ese momento, golpeando tam-

bién al agente Secretario Mariano Marroquín que acudió al oír el escándalo que se produjo.

Ratificado el parte anterior se examinó a Mariano Marroquín Higueros quien manifestó: que el miércoles quince de Septiembre de aquel año, a las veintiuna horas y treinta minutos, oyó que un individuo insultaba a uno de los guardias, por lo que acudió al lugar de los hechos, dándose cuenta que Alfredo Kress Vásquez, en estado de ebriedad y en el interior de la Guardia, insultaba al agente Manuel Miranda, por el único motivo de haberle dicho que tuviera la bondad de salir del local; que al intervenir el exponente con buenas palabras el referido Kress Vásquez lo injurió y amenazó hasta inferirle golpes con bofetadas y punta-pies que le lanzó dejando su actitud agresiva hasta que los agentes Rodolfo de León, Florencio Rodríguez, José Tomás Granados y Nery Ramírez, intervinieron deteniendo a Kress Vásquez y poniéndolo en el calabozo respectivo, que éste apagó el motor que daba luz al baile que se celebraba con motivo de las fiestas patrias. Manuel Miranda declara lo mismo que el anterior, agregando que Alfredo Kress Vásquez entró por una puerta que daba acceso entre la Municipalidad y el local de la Guardia; Nery Ramírez Gómez dice que vio entrar al enjuiciado por la puerta que da al salón municipal; Florencio Rodríguez y José Tomás Granados Hernández, declaran que estaban de servicio en el propio salón de baile, pero al ver que se apagaba la luz del micrófono que servía a los marimberos fueron a ver qué pasaba en el interior de la Guardia Municipal, en donde se instaló el motor de la luz para mayor seguridad, encontrándose con que Kress Vásquez golpeaba al agente Secretario, Mariano Marroquín Higueros, por lo que procedieron a su detención, poniéndolo en el calabozo; Rodolfo de León Rodríguez también dice que estaba de servicio en el salón donde se celebraba el baile social, pero en el momento de lo ocurrido salía del interior de la Guardia a donde había ido para satisfacer necesidades corporales, por cuya razón sólo se dió cuenta de que sus compañeros se ocupaban de detener a Kress Vásquez, procediendo él a ayudarles hasta ponerlo en el calabozo.

El empírico Luis Feline Soria Hernández, al evacuar su dictamen sobre las lesiones sufridas por Marroquín Higueros, dijo que éste curaría en tres días sin asistencia médica, pero le impedirían la locomoción natural, por cuatro días, las lesiones de la rodilla derecha.

Indagado Ricardo Alfredo Vásquez dijo haber sido detenido dos veces con anterioridad a ésta, por pegarle a Hugo Guay Chavarría y

a unos guardias municipales; que en esta ocasión fué detenido en el interior de la Guardia Municipal, el quince de Septiembre de aquel año, como a las veintidós horas; que el día y hora de autos se encontraba en el baile que se celebraba con motivo de las fiestas patrias y dispuso visitar a Carlos y Adolfo Stubbs que se encontraban presos, para lo cual entró por una puerta que del salón da a los corredores de la Guardia y se dirigió a la cárcel en donde estaba cuando llegó el agente Marroquín y como con imponencia le dijo que saliera, dándole de empujones, se disgustó por su embriaguez y luchó con él, cayendo ambos al suelo, hasta que lo detuvieron, sin que él pusiera oposición; que por pura casualidad apagó la luz, pero no de intención y que no insultó ni golpeó a nadie.

Joaquín Caal Sierra dice que estando en el interior del salón de baile, tocando su instrumento, vio que se apagó la luz y al entrar a ver qué ocurría encontró los alambres zafados del motor por lo que los conectó nuevamente y así siguió funcionando, momento ese en que vio a Kress Vásquez en estado de ebriedad dentro de la Guardia.

RESULTANDO:

Elevadas las diligencias practicadas al Juzgado de Primera Instancia respectivo, éste Despacho le motivó prisión al detenido, por atentado a los agentes de la Autoridad, mandando que se practicaran las demás diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho pesquisado.

A solicitud se dejó libre bajo fianza al procesado y cumpliendo con lo mandado en el auto de recepción se ampliaron las declaraciones de los Guardias Florencio Rodríguez Hernández, Nery Ramírez Gómez, Rodolfo de León Rodríguez, Mariano Marroquín Higueros, José Tomás Granados, Hernández y Manuel Miranda Portillo, quienes, después de ratificar su anterior declaración, manifestaron no constituirse acusadores del enjuiciado; el Director del Hospital Nacional de aquella localidad emitió informe manifestando que: Mariano Marroquín Higueros presentaba "Contusiones y erosiones en la rodilla derecha, erosiones en la pierna correspondiente, contusión en el anular derecho", de cuyas lesiones curaría en siete días sin quedarle impedimento, deformidad ni cicatriz visible. Examinados Adolfo Everardo y Carlos Haroldo Stubbs Caal manifestaron que el día y hora de autos se encontraban detenidos en la cárcel de Carchá, desde donde oyeron una bulla, pero no les consta nada del hecho por que se les pregunta-

ba. El primero dice que Alfredo Kress los fué a ver a la cárcel entrando por la puerta interior del salón municipal hasta llegar donde ellos estaban y el segundo, aunque nada dice de esto, asegura haber reconocido, en la bulla, la voz de Alfredo Kress. El Departamento de Estadística respectivo informó no haber antecedentes penales del enjuiciado.

RESULTANDO:

Elevada a plenario la causa se tomó confesión con cargos a Ricardo Alfredo Kress Vásquez quien no se conformó con lo que se le formularon y propuso como su defensor al Abogado Oliverio García Asturias. Evacuando el traslado corrido a éste, fué abierto a prueba el juicio, durante cuyo lapso se recibió la declaración de Arturo Chamán que dice haber visto que Kress Vásquez no atacó ni insultó o amenazó a nadie:

RESULTANDO:

Vencido el término de prueba y su prórroga, según lo hizo constar la Secretaría del Tribunal, se corrió el traslado final al defensor, quien al evacuarlo expuso sus razones para que fueran descalificados los Agentes de la Guardia Municipal que declararon en la causa, alegó que a su entender tuvo motivo el enjuiciado para proceder como lo hizo y terminó pidiendo que para mejor fallar se mandaran recibir otras pruebas que, con la de Arturo Chamán, servirían para establecer que el ofendido había abusado del cargo que desempeñaba y con ello dada lugar a que se le faltara al respeto; que en sentencia se absolviera a su defendido.

Pasado el día señalado para la vista se dictó auto para mejor fallar ordenando a la Secretaría del Tribunal que informara sobre los antecedentes penales del enjuiciado y que se practicara inspección ocular por el propio Juez de los autos en el lugar de los hechos. Emitido el informe ordenado y practicada la inspección ocular indicada, con fecha tres de Marzo del presente año, se dictó sentencia, declarando que Ricardo Alfredo Kress Vásquez es autor responsable del delito de Atentado a los Agentes de la Autoridad, por lo que le impone la pena de dos años de prisión correccional que deberá extinguir en la Penitenciaría Central, abonándosele la prisión efectivamente sufrida, pudiendo conmutar hasta las dos terceras partes de la misma razón de veinte centavos de quetzal por día. También se le condena a las accesorias de ley,

RESULTANDO:

Apelada la sentencia referida fué elevada a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones donde, después de oír al Procurador y al Fiscal respectivos, con fecha veintitrés de Mayo último, se dictó el fallo que se examina, confirmando el del Tribunal de primer grado, con la modificación de que, la pena que se impone al enjuiciado es la de un año y cuatro meses de prisión correccional, que deberá extinguir en el lugar, forma y con las accesorias determinadas en la sentencia apelada.

RESULTANDO:

Contra el fallo referido y con auxilio del Abogado Oliverio García Asturias, Ricardo Alfredo Kress Vásquez interpuso recurso extraordinario de casación, por estimar que se indieciséis meses de prisión correccional por fringió la ley al condenarlo a sufrir la pena del delito de atentado a los Agentes de la Autoridad.

Cita como violados los artículos 21 inciso 6o., 22 inciso 1o., 82, 142 inciso 3o., 143 inciso 2o. y 144 del Código Penal; y 614 del Código de Procedimientos Penales.

En el penúltimo párrafo de su memorial de sometimiento dice: "Por todo lo expuesto considero que la Honorable Sala al dictar su fallo de fecha veintitrés de Mayo pasado, violó los artículos ya mencionados, por lo que con apoyo en los Artículos 676 incisos 1o. y 5o. interpongo el recurso extraordinario de casación..."

Alega el recurrente que el Agente Secretario de la Guardia, Mariano Marroquín Higuero, lo enojó por la forma brusca en que quiso sacarlo del recinto donde fué capturado por lo que inició una lucha a consecuencia de la cual ambos rodaron al suelo; que cualquier ciudadano hubiera reaccionado en la forma que él lo hizo al ser tratado a empellones como sucedió y de ahí que la Sala sentenciadora, al estimar su confesión como única prueba pero no darle el valor que tiene por su calificación, declarando que el hecho cometido constituye atentado a los agentes de la autoridad, violó los artículos que se dejan citados.

Corrida la vista señalada por esta Corte es prudente resolver; y,

CONSIDERANDO:

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 632 del Código de Procedimientos Penales, reformado por el artículo 3o. del Decreto 487 del Congreso, el recurso de casación

se interpondrá por escrito autorizado con la firma de Abogado, expresando, entre otros extremos, "El artículo e inciso que contenga el caso de procedencia en que se funda el recurso"; y el artículo 684 del Código de Procedimientos Penales, reformado por el 40. del Decreto 487 del Congreso, establece que el Tribunal no tomará en consideración otras leyes que las que hubieran sido citadas al interponerse el recurso o que se citen antes del señalamiento de día para su vista.

En el caso bajo estudio, como se ve en el párrafo que se copió al referir la introducción del recurso, sólo se dijo que se interponía éste con apoyo en los artículos 676 incisos 1o. y 5o. sin decir a que cuerpo de leyes de la "República corresponde el artículo 676 que se cita, por lo que esta Corte no puede entrar al análisis comparativo que la casación implica, ya que la naturaleza esencialmente técnica y restringida de la misma impide que se supla lo que las partes omiten, por cuya razón debe desestimarse este recurso. Leyes citadas.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo en lo considerado y en lo dispuesto por los Artos. 222, 223, 224 y 233 del Decreto Gubernativo 1862; 686 y 690 del Código de Procedimientos Penales, DESESTIMA el presente recurso e impone al recurrente un arresto de quince días, conmutables a razón de veinticinco centavos de quetzal por día. Notifíquese y con certificación de lo resultado devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado José María Moscoso Espino).

Federico Carbonell R. — G. Aguilar Fuentes. — J. M. Moscoso E. — Arnoldo Reyes. — J. A. Ruano Mejía. — Ante mí: Juan Fernández C.

CRIMINAL

Contra Rómulo Arenales Coyan y compañeros por el delito de asesinato.

DOCTRINA:

Cuando los hechos en que se funda la presunción humana, están debidamente evidenciados en el proceso, no puede prosperar el recurso de casación que se funda en error de derecho en la apreciación de esa prueba.

Corte Suprema de Justicia, Guatemala, diecisiete de Diciembre de mil Novecientos Cincuenta y Cinco.

En virtud de recurso extraordinario de casación, se examina la sentencia proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el veintiocho de abril del corriente año, en la causa seguida contra Rómulo y Catarino Arenales Coyan, Lucas Gutiérrez Cancinos, Humberto Guzmán Zamora, Noé Marroquín Ramírez, Antonio Salazar Flores y Anastasio Tobar Zamora, por el delito de asesinato en la persona de Cirilo Miculax Loch, ante el Juzgado de Primera Instancia de Chimaltenango.

RESULTA:

El veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y tres, el Alcalde Auxiliar de la Aldea Chicazanga del Municipio de San Andrés Itzapa, dió parte al Juez de Paz de la localidad, que en el astillero denominado San Isidro de esa jurisdicción, habían dado muerte a Cirilo Miculax Loch. Al ratificar dicho parte, el citado Alcalde Auxiliar agregó: que ese día como a las quince horas llegaron a su casa Pedro González y Fermín Buch y le indicaron que a Cirilo Miculax Loch lo mataron por haber ido a tomar un poco de chicha y que el autor de ese hecho era Rómulo Arenales, por lo que ponía a su disposición a los denunciantes. Examinados Pedro González Hernández y Fermín Buch Chiriz, éste menor de edad de quince años, expusieron: que ese día como a las ocho horas se encontraban en el campo de deportes de la aldea Chicazanga, a inmediaciones de la casa de Cirilo Miculax Loch, cuando salió éste y al verlos, los invitó para que fueran a tomar chicha a una fábrica que él conocía y que estaba en el astillero San Isidro y después de caminar entre ese astillero los dejó esperando en una ladera y se fué sólo y luego regresó a donde ellos se habían quedado y en esos precisos momentos llegó Rómulo Arenales al lugar que se encontraban sentados y se dirigió a Cirilo Miculax diciéndole "aquí venís mi chulo" y le tendió su escopeta haciéndole el primer disparo, pero no dió fuego, por lo que le hizo el segundo con el otro cañón de la escopeta y también lo agredió con un machete, diciéndoles a los declarantes que se retiraran porque también los iba a matar, por lo que salieron huyendo y le fueron a dar parte al Alcalde Auxiliar.

RESULTA:

Constituido el citado Juez de Paz en el astillero municipal "San Isidro" encontró el cadáver de Cirilo Miculax Loch, el cual presentaba nueve lesiones en la región pectoral izquierda, tres en la región intercostal del mismo lado, todas sin orificio de salida y causadas al parecer con escopeta y además. cercenando el dedo anular derecho, en cuyo acto volvió a declarar Pedro González Hernández en la forma ya consignada, lo que se hizo constar en el acta respectiva, así como que a inmediaciones se encontraron un machete usado, un saco de jerga azul usado y un saco de brín, que según el mencionado testigo pertenecían al occiso; que asimismo como a trescientos metros de distancia hacia abajo, se encontraron al lado de un árbol de encino grande dos toneles conteniendo chicha, tapados con hojarasca, sin señales de que se haya elaborado aguardiente en ese lugar; que el cadáver fué encontrado con un tronco encima y como a diez metros del lugar donde se estableció que se cometió el hecho, de donde fué arrastrado según las señales constatadas,

Por haber sido detenido por agentes de la autoridad el sindicado Rómulo Arenales Coyán, fué indagado en forma, habiendo negado toda participación en el hecho investigado, indicando que a esa hora se encontraba en la esquina de su casa de habitación conversando con Humberto Guzmán, proponiendo como testigos de ello al propio Guzmán, Noé Ramírez, Antonio Salazar, Ernesto Mendoza y Lucas Gutiérrez. Todas estas personas, a excepción de Mendoza, correspondieron a su cita. Pedro González Hernández y Fermín Buch Chiriz, también fueron indagados, habiéndose producido en la misma forma que en sus declaraciones anteriores. El Juez de Primera Instancia de Chimaltenango, al recibir las primeras diligencias, decretó la prisión provisional de los tres indagados, por el delito de asesinato. Corren en autos la certificación de la partida de defunción del occiso y el informe de la autopsia practicada a su cadáver, en el cual se consigna como causa de la muerte de aquél las numerosas heridas por arma de fuego que recibió y hemorragia interna consecutiva a las mismas.

RESULTA:

El Jefe de la Guardia Civil de Chimaltenango, informó al Juez de Primera Instancia de ese departamento, que en cumplimiento de su orden en ese sentido procedió a una minucio-

sa investigación, dando el resultado de que los agentes comisionados constataron que, Rómulo Arenales Coyán, Antonio Salazar Flores, Lucas Gutiérrez Cansinos, Enoé Marroquín Ramírez, Anastasio Tobar y Catarino Arenales, a las cinco horas del día veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y tres, salieron del municipio de San Andrés Itzapa, de donde son vecinos, con rumbo al astillero municipal "San Isidro", quienes iban con el objeto de elaborar aguardiente clandestino, de donde regresaron dentro de las dieciséis y diecinueve horas, por lo que se dispuso citarlos y examinarlos en forma indagatoria. En el citado tribunal se ampliaron las declaraciones de Arenales Coyán, González Hernández y Buch Chiriz, quienes sostuvieron lo ya declarado. También se practicaron careos entre ellos, sin ningún resultado. Elevada la causa a plenario y corridos todos los trámites consiguientes, se llegó hasta dictar sentencia en primera instancia, pero al consultarse al Tribunal superior, fué anulado todo lo actuado, por haberse estimado como ilegal que se haya incluido en esas actuaciones como reos a González Hernández y Buch Chiriz, ordenando la reposición de ellas a partir del auto en que se elevó la causa a su estado público y la libertad de los indicados reos.

RESULTA:

Que el veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, se elevó a plenario la causa, en lo que respecta a Rómulo Arenales Coyán, a quien se mandó tomar confesión con cargos. El cuatro de junio del mismo año se presentaron al Tribunal los individuos Noé Marroquín Ramírez, Catarino Arenales Coyán, Lucas Gutiérrez Cansinos, Antonio Salazar Flores, Anastasio Tobar Zamora y Humberto Guzmán Zamora, en virtud de citación que se les hizo y el Juez ordenó su ingreso a la prisión, y que se les indagara dentro del término legal. Todos negaron su participación en el hecho investigado, asegurando que el día en que tuvo verificativo no salieron del pueblo de donde son vecinos, proponiendo cada uno testigos en ese sentido. Ese mismo día se les dictó auto de prisión provisional por el delito de asesinato, disponiéndose que se les tomara confesión con cargos, por estar la causa en estado público. Examinados algunos de los testigos propuestos por estos reos, declaró entre ellos Irineo Castellanos Lima, en el sentido de que aquel día entre catorce y quince horas, vio que en la esquina opuesta a la en

que hay instalada una rockola, estaba Humberto Guzmán Zamora platicando con Rómulo Arenales Coyán, lo cual ocurrió en el pueblo de Itzapa. En la confesión con cargos, ninguno de todos los procesados se conformaron con el que se le formuló, habiéndoseles nombrado defensor de oficio al Licenciado Luis Alberto Pimentel García. Posteriormente se reformó el auto de prisión por el de libertad a Catarino Arenales Coyán, Antonio Salazar Flores, Anastasio Tobar Zamora, Noé Marroquín Ramírez, Humberto Guzmán Zamora y Lucas Gutiérrez Cancinos, como resultado de la información testimonial que propusieron habiendo declarado en ese estado de los autos. Teresa Garavito Monroy y Natalia Arenales Marroquín, que vieron platicando a Humberto Guzmán Zamora con Rómulo Arenales Coyán, en la esquina de la casa donde está la rockola como a las catorce horas del día de autos. Por no haber formalizado su acusación dentro del término correspondiente, se tuvo por desistida de ella a Francisca Miculax Per, concubina del occiso, quien se había manifestado como acusadora en esta causa.

RESULTA:

El veintiséis de julio del año recién pasado, se abrió a prueba la causa, después de los traslados al Representante del Ministerio Público y defensor de los reos, habiéndose rendido por la defensa únicamente los testimonios de Abilio Meza Tobar, Genaro Barrera Azurdía, Efraín Meza Tobar y Noé Azurdía Girón, sobre conocimiento y buenos antecedentes del reo Rómulo Arenales Coyán. El anterior defensor fué sustituido por el Licenciado León Alberto Aparicio, quien actuó hasta el final, y corridos los últimos traslados, se señaló para la vista la audiencia del veintisiete de octubre del año citado y el tres de noviembre, en providencia para mejor fallar, se ordenó el exámen de los testigos Juan Moya, Luis Núñez y Alejandro Garavito, quienes declararon haber visto a Rómulo Arenales, el día de los hechos, que estaba curando unos sus animales, de las diez a las dieciséis horas, en su casa de habitación en Itzapa. Con esos antecedentes el Juez de Primera Instancia del departamento de Chimaltenango, dictó sentencia el diecisiete de noviembre del año pasado, en la cual absolvió a todos los procesados del cargo que se les formuló por falta de prueba para condenarlos.

RESULTA:

Al conocer en consulta del fallo anterior, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones después de ordenar y practicarse algunas diligencias para mejor fallar, lo improbo en lo referente a la absolución de Rómulo Arenales Coyán, a qu'en declaró autor del delito de homicidio de Cirilo Miculax, imponiéndole la pena de diez años de prisión correccional incommutable, con las accesorias de rigor. Para ello consideró: "el análisis de las constancias procesales demuestra: que, contra Rómulo Arenales Coyán, existen las siguientes probanzas 1o. la declaración de Pedro González Hernández, quien asegura haber presenciado cuando el día y hora de autos, aquél, con una escopeta le hizo un disparo a Cirilo Miculax, causándole las lesiones que, según el informe médico correspondiente, le produjeron la muerte; 2o. la declaración de Fermín Buch Chiriz, que se reproduce en iguales términos que el anterior; 3o. Informe del Alcalde de San Andrés Itzapa, en el que aparece que el rumor público desde un principio sindicó a Rómulo Arenales Coyán como el autor de la muerte de Cirilo Miculax. 4o. Acta de inspección ocular practicada por el Juez de Primera Instancia de Chimaltenango de la que se desprende la asequibilidad del lugar del hecho, desde San Andrés Itzapa. 5o. Contradicción entre lo aseverado por el reo y tres de los procesados, con lo que manifiesta otro de ellos, y además con lo que manifiestan los testigos de descargo Juan Moya Marroquín, Luis Núñez Marroquín y Alejandro Garavito. 6o. La imposibilidad de que Antonio Salazar Flores haya podido ver a Arenales Coyán y a Humberto Guzmán platicando en la esquina de la casa de éste último, como se deduce de la declaración de dicho sujeto comparada con el acta de inspección ocular practicada por el Juez de la causa. 7o. No sindicarse el rumor público y los testigos que declararon en el proceso a otra persona como la responsable del hecho. La constancia relacionada en primer término constituye una semi-plena prueba de cargo, complementada con los elementos citados, de lo que se desprende una presunción humana, grave, precisa y concordante con las demás constancias de autos, que llevan al ánimo judicial el convencimiento pleno de la culpabilidad del procesado como autor responsable del hecho que se le atribuye, ya que tales elementos se enlazan y complementan desprendiéndose de ellos como consecuencia lógicamente necesaria la conclusión apuntada".

Contra el anterior fallo el reo Rómulo Arenales Coyán, con el auxilio del Abogado Leocadio de la Roca, interpuso recurso de casación en los siguientes términos: "por infracción de ley, ya que la Sala sentenciadora cometió error de derecho en la apreciación de las pruebas. El caso de procedencia está contemplado en el inciso 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, adicionado por el artículo 1o. del Decreto 487 del Congreso de la República y estima que fueron violados los artículos 568, 571, 573 en sus cuatro incisos, 589, 595, 597, 601, 607, 681 inciso 8o., en sus seis incisos del Código de Procedimientos Penales. Cometió la Sala error de derecho al estimar que los elementos que cita en el considerando de la sentencia que se refiere a mí, constituyen una presunción humana, grave, precisa y concordante con las demás constancias de autos, que llevan al ánimo judicial el convencimiento pleno de la culpabilidad del procesado como autor responsable del hecho que se le atribuye... pues solamente las declaraciones de Pedro González Hernández y Fermín Buch Chiriz se relacionan con el hecho investigado, pero estos testigos aparecen como ofendidos porque dicen que fueron amenazados por mí y de ahí que tienen interés indirecto en el asunto y en consecuencia carecen de imparcialidad... Como se ve, al apreciar la Sala esos elementos como prueba indirecta suficiente para condenarme, incurrió en error de derecho en su apreciación, porque de ellos no se deduce indefectiblemente como consecuencia necesaria que yo haya sido el autor de la muerte de Cirilo Miculax, por no reunir la presunción estimada por la Sala, los requisitos enumerados". Habiendo tenido verificativo la vista en este recurso, procede resolver; y

— I —

CONSIDERANDO:

Apoyándose en el inciso 8o. del artículo 676 del Código de Procedimientos Penales, que se refiere al error de derecho o error de hecho en la apreciación de la prueba, el recurrente aduce al interponer su recurso, que la Sala sentenciadora cometió error de derecho al estimar que los elementos que cita en el considerando de la sentencia que se refiere a él, constituyen una presunción humana, pues solamente las declaraciones de Pedro González Hernández y Fermín Buch Chiriz se relacio-

nan con el hecho investigado, pero estos testigos aparecen como ofendidos porque dicen que fueron amenazados por él, por lo que tienen interés indirecto en el asunto y en consecuencia carecen de imparcialidad. A esos respectos es del caso hacer notar que la Sala además de aceptar como semi-plena prueba el testimonio de González Hernández, estimó que la prueba de la culpabilidad del procesado Arenales Coyán, se completaba con la presunción que integró con la declaración del otro testigo presencial, menor de edad, Fermín Buch Chiriz y los demás hechos que le sirvieron de indicios los cuales aparecen en las constancias de autos, relacionadas con cada uno de ellos, y que por su calidad de actuaciones judiciales, son auténticas y producen plena evidencia; y como tales indicios tienen la gravedad y precisión requeridos por la ley, y guardan enlace y concordancia entre sí, para probar el hecho que se trata de establecer, es decir la culpabilidad del inculcado, y la objeción que se hace al valor probatorio de las declaraciones de González Hernández y Buch Chiriz, carece de fundamento, porque la circunstancia de que hayan expresado que fueron amenazados por Arenales Coyán para que se retiraran del lugar de los hechos, no es suficiente para estimar que tienen interés indirecto en el asunto, la apreciación jurídica de esas pruebas que verificó la Sala sentenciadora, se encuentra ajustada a la ley, y como consecuencia no existe el error de derecho que se le atribuye, por lo que no incurrió en infracción de los artículos 589, 595, 597, 601, 581 inciso 8o. y 586 del Código de Procedimientos Penales.

— II —

CONSIDERANDO:

El recurrente también manifiesta que la Sala de Apelaciones incurrió en error de derecho, al no tomar en consideración los testimonios de Antonio Salazar Flores, Lucas Gutiérrez Recinos, Noé Marroquín Ramírez y Humberto Guzmán Zamora, así como las declaraciones de Teresa Garavito Monroy y Natalia Arenales Marroquín, dejándose de apreciar el valor probatorio de estas diligencias, y que asimismo no es acertada la deducción que hizo de que con la inspección ocular practicada por el Juez de Primera Instancia de Chimaltenango, se estableció la imposibilidad de que Anto-

nio Salazar Flores haya podido ver a Arenales Coyán platicando con Humberto Guzmán, porque el Juez hace referencia a la casa de Alberto Guzmán, y no a la de Humberto, que fué lo ordenado. Como de ser ciertas estas infracciones integrarían un error de hecho, no denunciado en el recurso, que es distinto en su concepción y efectos legales al error de derecho, único invocado y por lo restringido del recurso de casación no se puede interpretar la voluntad del recurrente, aquella omisión impide hacer el estudio comparativo correspondiente, para poder determinar si con alguno de los motivos expresados se violaron los artículos 573 y 586 del Código de Procedimientos Penales, mencionados como infringidos.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, con apoyo, en lo considerado y lo prescrito en los artículos 222, 224, 233 y 234 del Decreto Gubernativo 1862; 673, 687, y 690 del Código de Procedimientos Penales, declara: sin lugar el presente recurso de casación, imponiendo al interponente quince días de prisión simple, conmutables a razón de diez centavos de quetzal por día. Notifíquese y en la forma correspondiente devuélvanse los antecedentes. (Ponencia del Magistrado Aguilar Fuentes)

Federico Carbonell R.— G. Aguilar Fuentes.— J. M. Moscoso B.— Arnoldo Reyes M.— J. A. Ruano Mejía.— Juan Fernández C.—

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

FUNDADO EN 1932

Resoluciones dictadas por los Tribunales de Justicia de la República, durante el semestre de Julio a Diciembre de 1955.

RAMO CIVIL.

Tribunales	Decretos	Autos	Sentencias	Totales
Corte Suprema de Justicia	1,526	93	36	1,655
Sala Primera de la Corte de Apelaciones	704	219	59	982
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones	1,066	255	52	1,373
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones	809	167	21	997
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones	429	162	20	611
Sala Quinta de la Corte de Apelaciones	114	79	35	228
Sala Sexta de la Corte de Apelaciones	630	117	43	790
Juzgado 1o. de 1a. Inst., de Guatemala	7,656	602	221	8,479
Juzgado 2o. de 1a. Inst., de Guatemala	5,408	596	177	6,181
Juzgado 3o. de 1a. Inst., de Guatemala	4,284	562	105	4,951
Juzgado 7o. de 1a. Inst., de Guatemala	1,813	439	68	2,320
Juzgado de 1a. Inst., de Alta Verapaz	552	693	11	1,256
Juzgado de 1a. Inst., de Baja Verapaz	1,267	49	34	1,350
Juzgado de 1a. Inst., de Chimaltenango	864	353	40	1,257
Juzgado de 1a. Inst., de Chiquimula	1,315	359	30	1,704
Juzgado de 1a. Inst., de Escuintla	1,041	215	22	1,278
Juzgado de 1a. Inst., del Progreso	283	170	10	463
Juzgado de 1a. Inst., de Huehuetenango	610	199	28	837
Juzgado de 1a. Inst., de Izabal	1,717	1,202	20	2,939
Juzgado de 1a. Inst., de Jalapa	769	97	18	884
Juzgado de 1a. Inst., de Jutiapa	310	500	14	824
Juzgado de 1a. Inst., del Petén	255	36	4	295
Juzgado 1o. de 1a. Inst., de Quezaltenango	799	490	19	1,308
Juzgado 2o. de 1a. Inst., de Quezaltenango	1,224	870	30	2,124
Juzgado de 1a. Inst., del Quiché	565	48	5	618
Juzgado de 1a. Inst., de Retalhuleu	625	52	14	691
Juzgado de 1a. Inst., de Sacatepéquez	980	255	24	1,259
Juzgado de 1a. Inst., de San Marcos	1,263	700	37	2,000
Juzgado de 1a. Inst., de Santa Rosa	1,262	42	13	1,317
Juzgado de 1a. Inst., de Sololá	153	170	5	328
Juzgado de 1a. Inst., de Suchitepéquez	1,018	329	17	1,364
Juzgado de 1a. Inst., de Totonicapán	417	125	23	565
Juzgado de 1a. Inst., de Zacapa	354	83	227	664
	42,082	10,328	1,482	53,892

Resoluciones dictadas por los Tribunales de Justicia de la República, durante el semestre de Julio a Diciembre de 1955.

RAMO PENAL.

Tribunales	Decretos	Autos	Sentencias	Totales
Corte Suprema de Justicia	1,608	696	16	2,320
Sala Primera de la Corte de Apelaciones	609	254	262	1,125
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones	981	281	386	1,648
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones	843	320	189	1,352
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones	721	347	339	1,407
Sala Quinta de la Corte de Apelaciones	986	446	479	1,911
Sala Sexta de la Corte de Apelaciones	549	265	334	1,148
Juzgado 4o. de 1a. Inst., de Guatemala	3,717	801	126	4,644
Juzgado 5o. de 1a. Inst., de Guatemala	3,737	2,613	210	6,560
Juzgado 6o. de 1a. Inst., de Guatemala	2,527	235	66	2,828
Juzgado 8o. de 1a. Inst., de Guatemala	2,426	1,986	117	4,529
Juzgado 9o. de 1a. Inst., de Guatemala	4,598	1,098	114	5,810
Auditoria de Guerra de Guatemala	422	646	19	1,087
Juzgado de 1a. Inst., de Alta Verapaz	644	2,247	110	3,001
Juzgado de 1a. Inst., de Baja Verapaz	1,963	266	21	2,250
Juzgado de 1a. Inst., de Chimaltenango	3,560	1,561	90	5,211
Juzgado de 1a. Inst., de Chiquimula	3,920	953	125	4,998
Juzgado de 1a. Inst., de Escuintla	4,147	2,079	131	6,357
Juzgado de 1a. Inst., del Progreso	1,139	689	40	1,868
Juzgado de 1a. Inst., de Huehuetenango	4,818	722	79	5,619
Juzgado de 1a. Inst. de Izabal	4,339	3,642	97	8,078
Juzgado de 1a. Inst., de Jalapa	6,221	779	49	7,049
Juzgado de 1a. Inst., de Jutiapa	3,788	1,461	119	5,368
Juzgado de 1a. Inst., del Petén	2,278	255	12	2,545
Juzgado 1o. de 1a. Inst., de Quezaltenango	2,022	2,268	135	4,425
Juzgado 2o. de 1a. Inst., de Quezaltenango	2,488	1,655	126	4,269
Juzgado de 1a. Inst., del Quiché	3,893	919	141	4,953
Juzgado de 1a. Inst., de Retalhuleú	1,130	673	73	1,876
Juzgado de 1a. Inst., de Sacatepéquez	2,692	820	69	3,581
Juzgado de 1a. Inst., de San Marcos	1,189	1,015	138	2,342
Juzgado de 1a. Inst., de Santa Rosa	3,836	1,222	72	5,130
Juzgado de 1a. Inst., de Sololá	2,523	985	31	3,539
Juzgado de 1a. Inst., de Suchitepéquez	3,107	1,399	151	4,657
Juzgado de 1a. Inst., de Totonicapán	2,162	381	59	2,602
Juzgado de 1a. Inst., de Zacapa	818	673	455	1,946
	86,401	36,652	4,980	128,033

R E S U M E N

TOTAL CIVIL	42,082	10,328	1,482	53,892
TOTAL PENAL	86,401	36,652	4,980	128,033
	128,483	46,980	6,462	181,925

NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO JUDICIAL EN SERVICIO A LA FECHA

(Noviembre de 1956)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia:	Lic. Miguel Ortiz Passarelli	Av. La Reforma 8-60, Zona 9. Tels.: Of. 3940. Part. 9180.
Magistrado:	Lic. Gregorio Aguilar Fuentes	3a. Avenida 3-27, Zona 1. Tels.: Of. 2308. Part. 4962.
Magistrado:	Lic. José Arturo Ruano Mejía	12 Avenida 10-05, Zona 2. Tel.: Of. 3945.
Magistrado:	Lic. Arnoldo Reyes Morales	15 Calle "A" 11-49, Zona 1. Tel.: Of. 2965.
Magistrado:	Lic. Alberto Ruiz Aguilar	5a. Avenida 9-14, Zona 4 Tels.: Of. 2368. Part. 9832.
Secretario:	Lic. Juan Fernández Córdova	9a. Avenida 16-20, Zona 1. Tel.: Of. 3941.

CORTE DE APELACIONES

SALA PRIMERA DE APELACIONES:

Presidente:	Lic. Carlos Arias Ariza	3a. Avenida 20-36, Zona 1
Magistrado:	Lic. Francisco Rendón C.	10a. Av. "A" 1-36, Zona 1
Magistrado:	Lic. José Juan Alvarez	3a. Avenida 4-72, Zona 1
Secretario:	Lic. Víctor V. Guerrero	15 Avenida 40-18, Zona 8

SALA SEGUNDA DE APELACIONES:

Presidente:	Lic. Hernán Morales Dardón	15 Calle 3-51, Zona 1
Magistrado:	Lic. Julio Morales Arriola	13 Avenida 15-36, Zona 10
Magistrado:	Lic. Héctor Villagrán	18 Calle 3-16, Zona 1
Secretario:	Lic. J. Luis Rosales P.	15 Calle 11-63, Zona 1

SALA TERCERA DE APELACIONES:

Presidente:	Lic. Miguel Alvarez Lobos	17 Calle 7-49, Zona 1
Magistrado:	Lic. Virgilio Alvarez Castro	4a. Calle 17-81, Zona 6
Magistrado:	Lic. José Santa Cruz Ríos	9a. Calle 12-37, Zona 1
Secretario:	Lic. H. Edmundo Zea Ruano	2a. Calle 9-75, Zona 2

SALA CUARTA DE APELACIONES: (Quezaltenango)

Presidente: Lic. Rogelio Vargas Solórzano.
 Magistrado: Lic. Augusto Linares Letona.
 Magistrado: Lic. Everardo Barrios Méndez.
 Secretario: Lic. Manuel Velarde S.

SALA QUINTA DE APELACIONES: (Jalapa)

Presidente: Lic. Abraham Bustamante.
 Magistrado: Lic. Artura Centeno Menéndez.
 Magistrado: Lic. Alfredo E. Figueroa.
 Secretario: Sr. Carlos Aragón Morales.

SALA SEXTA DE APELACIONES:

Presidente: Lic. Alberto Argueta Sagastume Calle Martí 11-15, Zona 6
 Magistrado: Lic. Julio Contreras Rodríguez 12 Avenida 2-53, Zona 2
 Magistrado: Lic. Reginaldo Menéndez Flores 4a. Av. "A" 7-83, Zona 10
 Secretario: Lic. Miguel Díaz Valdez Antigua Guatemala

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Presidente: Lic. Carlos Rodríguez Cerna 11 Av. "A" 6-51, Zona 1
 Magistrado: Lic. Arturo Aroch Navarro 9a. Avenida 12-30, Zona 1
 Magistrado: Lic. Roberto Martínez Sobral 6a. Avenida 3-38, Zona 1
 Secretario: Lic. Fernando Orellana Monasterio 2a. Avenida 16-34, Zona 1

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA**(Departamento de Guatemala)****RAMO CIVIL:**

1o.—Lic. José María Moscoso Duarte
 2o.—Lic. Benjamín Garoz Villatoro
 3o.—Lic. Manuel Franco Girón
 7o.—Lic. Edmundo Vásquez Martínez

RAMO PENAL:

4o.—Lic. José Felipe de la Peña F.
 5o.—Lic. Evaristo García Merlos
 6o.—Lic. Simón Ricardo Oliva
 8o.—Lic. Carlos A. Corzantes Molina
 9o.—Lic. Hugo Américo Lobos

DEPARTAMENTALES

Alta Verapaz
 Baja Verapaz
 Chimaltenango
 Chiquimula
 El Progreso
 Escuintla
 Huehuetenango
 Izabal
 Jalapa
 Jutiapa

Lic. Manuel Vicente Leiva y Leiva
 Lic. J. Antonio Villacorta hijo
 Lic. Valentín C. Gramajo
 Lic. Roberto Franco Pérez
 Lic. José Barillas Calzia
 Lic. Luis Alberto Pimentel
 Lic. Germán Schell Montes
 Lic. Edmundo Sagastume Franco
 Lic. Tomás Franco Ch.
 Lic. Luis Amadeo Izaguirre

Petén	Lic. Francisco Cetina Pacheco
1o. de Quezaltenango	Lic. Luis Alfonso López
2o. de Quezaltenango	Lic. Domingo Ayerdi
Quiché	Lic. Efraín Peñalva
Retalhuleu	Lic. Gustavo Alfonso de León
Sacatepéquez	Lic. Roberto de la Hoz Zepeda
San Marcos	Lic. Vicente Sagastume Pérez
Santa Rosa	Lic. Francisco Fonseca Penedo
Sololá	Lic. Manuel de J. Caravantes
Suchitupéquez	Lic. Mariano Alejandro Arriaza
Totonicapán	Lic. Marciano Castillo Rodas
Zacapa	Lic. Gonzalo Raúl Castro

JUECES DE PAZ DE LA CAPITAL

RAMO CIVIL:

- 1o.—Br. Ricardo Lara Gálvez
- 2o.—Br. Leonel Gálvez Urrutia
- 3o.—Br. Ernesto Berger Barrios
- 4o.—Br. Leonel Aguilar Godoy

RAMO PENAL:

- 5o.—Br. Ramón Ovidio López
- 6o.—Br. Roberto Martínez Recinos
- 7o.—Br. Edmundo Cabrera Cruz
- 8o.—Br. Oscar E. Taracena G.
- 9o.—Br. Enrique Claverie
- 10o.—Br. Nefthalí Navaz Paiz

TRIBUNALES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SALA PRIMERA DE APELACIONES DE TRABAJO:

Presidente:	Lic. José René Cárcamo	Calle Martí 11-04, Zona 2
Magistrado:	Lic. Carlos Rodríguez Aragón	18 Avenida 3-03, Zona 1
Magistrado:	Lic. Luis Juárez y Aragón	2o. Pas. Navarrete 13-68 Z. 6
Secretario:	Br. Luis Armando Guerra	27 Calle "A" 30-38, Zona 5

SALA SEGUNDA DE TRABAJO:

Presidente:	Lic. Francisco E. Rodríguez G.	5a. Avenida 3-65, Zona 13
Magistrado:	Lic. Gonzalo Mejía Cigarroa	8a. Avenida 13-69, Zona 1
Magistrado:	Lic. Héctor Paredes Luna	4a. Calle 3-47, Zona 10
Secretario:	Lic. Manuel Cordón Duarte	4a. Calle 12-52, Zona 1

JUZGADOS DE TRABAJO

ZONA NUMERO UNO:

JURISDICCION: Guatemala, Chimaltenango, Santa Rosa, El Progreso y Sacatepéquez.

JUECES: 1o.—Lic. Horacio Reyna Andrade
2o.—Lic. Carlos Gracias Arriola
3o.—Lic. Alfredo Rouanet Hillerman
4o.—Lic. Juan Anchissi Cáceres.

RESIDENCIA: Ciudad Capital.

ZONA NUMERO DOS:

JURISDICCION: Escuintla
RESIDENCIA: Escuintla
JUEZ: Lic. Carlos de León Cabrera

ZONA NUMERO TRES:

JURISDICCION: Suchitepéquez y Retalhuleu
 RESIDENCIA: Mazatenango, Suchitepéquez
 JUEZ: Lic. Ricardo Vides Menéndez

ZONA NUMERO CUATRO:

JURISDICCION: Quezaltenango, San Marcos y Totonicapán
 RESIDENCIA: Quezaltenango
 JUEZ: Lic. Jorge Nowell de León

ZONA NUMERO CINCO:

JURISDICCION: Alta y Baja Verapaz
 RESIDENCIA: Cobán, A. V.
 JUEZ: El de 1a. Instancia de Alta Verapaz

ZONA NUMERO SEIS:

JURISDICCION: Izabal, Zacapa y Chiquimula
 RESIDENCIA: Puerto Barrios, Izabal
 JUEZ: Lic. Ramón Cadena Gutiérrez

ZONA NUMERO SIETE:

JURISDICCION: Jalapa y Jutiapa
 RESIDENCIA: Jalapa
 JUEZ: El de 1a. Instancia de Jalapa

ZONA NUMERO OCHO:

JURISDICCION: Quiché, Huehuetenango y Sololá
 RESIDENCIA: Santa Cruz del Quiché
 JUEZ: El de 1a. Instancia del Quiché

ZONA NUMERO NUEVE:

JURISDICCION: Petén
 RESIDENCIA: Ciudad Flores, Petén
 JUEZ: El de 1a. Instancia del Petén.

OTROS TRIBUNALES

Juzgado de Inquilinato: Juez: Lic. Pablo Porres López
 Juzgado de Tránsito: Juez: Cnel. Carlos Humberto Ceballos
 Juzgado de Sanidad: Juez: Lic. Alvaro Idígoras Fuentes
 Auditor de Guerra: Auditor: Lic. Manuel Menéndez Ríos

SERVICIO MEDICO FORENSE

Jefe Médico Forense Encargado del Servicio: Dr. Arturo Carrillo
 Jefe Encargado de Casos Hospitalizados: Dr. Alfredo Gil Gálvez
 Médico Auxiliar: Dr. Mariano Cahueque

DEPARTAMENTALES:

Médico Forense de Quezaltenango:	Dr. Raúl Cerdón Flores.
Médico Forense de Escuintla:	Dr. Francisco Fuentes Peruccini
Médico Forense de Chimaltenango:	Dr. Héctor Lone.
Médico Forense de Jutiapa:	Dr. Rodolfo Menéndez Larrazabal.
Médico Forense de San Marcos:	Dr. Enrique Sarti.
Médico Forense de Suchitepéquez:	Dr. Carlos García Villatoro.
Médico Forense de Zacapa:	Dr. Oscar Welheim.

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES

SALAS DE APELACIONES

Sala Primera (Guatemala)

Juzgado 1o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado 6o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado 9o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado de 1a. Instancia	Alta Verapaz

SALA Segunda: (Guatemala)

Juzgado 2o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado 4o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado de 1a. Instancia	Chimaltenango
Juzgado de 1a. Instancia	Sacatepéquez
Juzgado de 1a. Instancia	Quiché

SALA TERCERA: (Guatemala)

Juzgado 3o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado 5o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado de 1a. Instancia	Suchitepéquez
Juzgado de 1a. Instancia	Santa Rosa
Juzgado de 1a. Instancia	El Progreso

SALA CUARTA: (Quezaltenango)

Juzgado 1o. de 1a. Instancia	Quezaltenango
Juzgado 2o. de 1a. Instancia	Quezaltenango
Juzgado de 1a. Instancia	Huehuetenango
Juzgado de 1a. Instancia	Totonicapán
Juzgado de 1a. Instancia	San Marcos
Juzgado de 1a. Instancia	Retalhuleu

SALA QUINTA: (Jalapa)

Juzgado de 1a. Instancia	Jalapa
Juzgado de 1a. Instancia	Chiquimula
Juzgado de 1a. Instancia	Izabal
Juzgado de 1a. Instancia	Jutiapa
Juzgado de 1a. Instancia	Zacapa

SALA SEXTA: (Guatemala)

Juzgado 7o. de 1a. Instancia	Guatemala
Juzgado 8o. de 1a. Instancia	Guatemala
Auditoría de Guerra	Guatemala
Juzgado de 1a. Instancia	Baja Verapaz
Juzgado de 1a. Instancia	Escuintla
Juzgado de 1a. Instancia	Sololá

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

RAMO CIVIL: (Guatemala)

Juzgado 1o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 1o. de Paz
Juzgado 2o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 2o. de Paz
Juzgado 3o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 3o. de Paz y los municipios de este Depto. con excepción de los que le corresponden al SEPTIMO de 1a. Instancia.
Juzgado 7o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 4o. de Paz, Juzgado de Inquilinato y los municipios de Palencia, Mixco, Villa Canales, Amatitlán y Santa Catarina Pinula.

RAMO PENAL: (Guatemala)

Juzgado 4o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 9o. de Paz, San Juan Sac., San Raymundo, San Pedro Sac., San Miguel Petapa y San José del Golfo.
Juzgado 5o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 5o. de Paz, San Pedro Ayampuc, Chinautla, Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Mixco.
Juzgado 6o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 6o. de Paz, Juzgado de Tránsito, Villa Canales y Villa Nueva.
Juzgado 8o. de 1a. Instancia.....	Juzgado 8o. de Paz, Amatitlán, Palencia, Churranchó y Fraijanes.
Juzgado 9o. de 1a. Instancia.....	Juzgados 7o. y 10o. de Paz

TRIBUNALES DE TRABAJO

SALA PRIMERA DE TRABAJO Y P. S.

Zona Número Uno	Juzgados 3o. y 4o. de Trabajo
Zona Número Dos	Escuintla
Zona Número Cuatro	Quezaltenango
Zona Número Cinco	Alta Verapaz
Zona Número Nueve	Petén

SALA SEGUNDA DE TRABAJO Y P. S.

Zona Número Uno	Juzgados 1o. y 2o. de Trabajo
Zona Número Tres	Suchitepéquez
Zona Número Seis	Izabal
Zona Número Siete	Jalapa
Zona Número Ocho	Quiché

DIRECTORIO JUDICIAL

PALACIO DE JUSTICIA:	9a. Avenida y 14 Calle	
PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL:		Tel. 3940
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	Vocal 1o.	" 2308
	Vocal 2o.	" 3945
	Vocal 3o.	" 2965
	Vocal 4o.	" 2368
	Secretaría	" 3941
	Tesorería Judicial	" 3206
CORTE DE APELACIONES:	Sala 1a. de Apelaciones	" 3942
	Sala 2a. de Apelaciones	" 3943
	Sala 3a. de Apelaciones	" 3944
	Sala 6a. de Apelaciones	" 5496
Dependencia de la Presidencia del Organismo Judicial	Depto. de Estadística Judicial. Archivo General de Protocolos. Archivo General de Tribunales. Biblioteca del Organismo Judicial. Gaceta de los Tribunales.	

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Primero	14 Calle	9-23, Zona 1	Tel. 3761
Segundo	14 Calle	9-23, Zona 1	" 3762
Tercero	12 Calle	10-45, Zona 1	" 3763
Cuarto	5a. Calle	10-23, Zona 1	" 3764
Quinto	7a. Avenida	16-28, Zona 1	" 3765
Sexto	7a. Avenida	16-28, Zona 1	" 3766
Séptimo	12 Calle	10-45, Zona 1	" 4460
Octavo	5a. Calle	10-23, Zona 1	" 4943
Noveno	7a. Avenida	16-28, Zona 1	" 2487

JUZGADOS DE PAZ

Primero	Avenida Bolívar	28-54, Zona 3	Tel. 4640
Segundo	9a. Avenida	11-35, Zona 1	" 4641
Tercero	9a. Avenida	11-35, Zona 1	" 4642
Cuarto	9a. Avenida	11-35, Zona 1	" 4643
Quinto	Avenida Bolívar	28-54, Zona 3	" 5907
Sexto	11 Avenida "B"	27-36, Zona 5	" 9634
Séptimo	9a. Calle	3-19, Zona 1	" 4961
Octavo	5a. Calle	10-23, Zona 1	" 5596
Noveno	2a. Avenida	11-59, Zona 3	" 5416
Décimo	9a. Calle	3-19, Zona 1	" 5453

TRIBUNALES DE TRABAJO

Sala 1a. de Trabajo	6a. Avenida	1-73, Zona 1	Tel. 4716
Sala 2a. de Trabajo	5a. Calle	5-18, Zona 1	" 2219
Juzgado 1o. de Trabajo	17 Calle	9-45, Zona 1	" 4715
Juzgado 2o. de Trabajo	5a. Calle	5-18, Zona 1	" 5443
Juzgado 3o. de Trabajo	9a. Calle	3-19, Zona 1	" 5497
Juzgado 4o. de Trabajo	6a. Avenida	1-73, Zona 1	" 2488

OTROS TRIBUNALES

Juzgado de Inquilinato	9a. Calle	0-39, Zona 1		Tel. 4809
Juzgado de Tránsito	7a. Avenida	16-28, Zona 1		" 4717
Juzgado de Sanidad	9a. Av. y 15 C.	Zona 1		" 2110
Auditoría de Guerra	7a. Avenida	3-58, Zona 1		" 4473
Tribunal de lo Contencioso				
Administrativo	9a. C. 10a. Av.	Zona 1		" 4538
Servicio Médico Forense	Hospital Gral.			" 3511

Abogados y Notarios inscritos durante el semestre:

AGOSTO 2: Francisco Cetina Pacheco.
 OCTUBRE 18: Manuel Antonio Cordón Cuarte.
 NOVIEMBRE 1a.: Ramiro Auyón Barneond.
 NOVIEMBRE 11: José Benigno de León Díaz.
 NOVIEMBRE 29: Rafael Cuevas del Cid.
 DICIEMBRE 15: Carlos Roberto de León Cabrera.
 DICIEMBRE 21: Mario Alfonso Cravarría Paredes.

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA JUDICIAL

Guatemala, 29 de Octubre de 1956.